



LA POLÍTICA EN MOVIMIENTO

IDENTIDADES Y EXPERIENCIAS DE ORGANIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Bettina Levy
Natalia Gianatelli
[compiladoras]

Dolores Nair Calvo
Gabriel de Santis Feltran
Juliana Flórez Flórez
María Silvana Gurrera
Hernán Ouviaña
Marcelo Rosa
Cecilia Rossel
Pablo Stefanoni

COLECCIÓN BECAS DE INVESTIGACIÓN



CLACSO
LIBROS

**LA POLÍTICA EN MOVIMIENTO
IDENTIDADES Y EXPERIENCIAS DE
ORGANIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA**

Bettina Levy
Natalia Gianatelli
[compiladoras]

La Colección Becas de Investigación es el resultado de una iniciativa dirigida a la difusión de los trabajos que los/as investigadores/as de América Latina y el Caribe realizan con el apoyo del Programa Regional de Becas de CLACSO.

Este libro presenta las investigaciones que los autores realizaron en el marco del concurso de proyectos para investigadores jóvenes *Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe* del Programa de Becas CLACSO-Asdi de promoción de la investigación social desarrollado con el patrocinio de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (Asdi).

Bernardo Kliksberg
El capital social movilizado contra la pobreza: la experiencia del Proyecto de Comunidades Especiales en Puerto Rico / Bernardo Kliksberg y Marcia Rivera - 1a ed. - Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO; San José: Oficina de Comunidades Especiales de Puerto Rico, UNESCO, 2007.
272 p. ; 23x16 cm. (Colección Secretaría Ejecutiva)

ISBN 978-987-1183-80-7

1. Pobreza. 2. Desigualdad Social. I. Marcia Rivera II. Título
CDD 362.5

Otros descriptores asignados por la Biblioteca Virtual de CLACSO:
Pobreza / Desigualdad Social / Capital Social / Liderazgo / Política Social / Desarrollo Económico y Social / Comunidades Especiales / América Latina / Caribe / Puerto Rico

Colección Becas de Investigación

LA POLÍTICA EN MOVIMIENTO IDENTIDADES Y EXPERIENCIAS DE ORGANIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Bettina Levy
Natalia Gianatelli
[compiladoras]

Dolores Nair Calvo
Gabriel de Santis Feltran
Juliana Flórez Flórez
María Silvana Gurrera
Hernán Ouviña
Marcelo Rosa
Cecilia Rossel
Pablo Stefanoni



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

Editor Responsable Emir Sader, Secretario Ejecutivo de CLACSO

Coordinador Académico Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo Adjunto de CLACSO

Colección Becas de Investigación

Directora de la colección Bettina Levy, Coordinadora del Programa Regional de Becas

Asistentes del programa Natalia Gianatelli - Luciana Lartigue - Magdalena Rauch

Revisión técnica de textos Ernesto Funes

Área de Difusión y Producción Editorial de CLACSO

Coordinador Jorge Fraga

Edición

Responsables: Ivana Brighenti - Mariana Enghel

Diseño editorial

Responsable: Miguel A. Santángelo | *Equipo:* Marcelo Giardino - Mariano Valerio

Divulgación editorial

Responsable: Marcelo F. Rodríguez | *Equipo:* Sebastián Amenta - Daniel Aranda - Carlos Ludueña

Arte de tapa Mariano Valerio

Impresión Gráficas y Servicios SRL

Primera edición

La política en movimiento. Identidades y experiencias de organización en América Latina

(Buenos Aires: CLACSO, **Marzo de 2008**)

ISBN 978-987-1183-80-7

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Av. Callao 875 | piso 5º | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4811 6588 | Fax [54 11] 4812 8459 | <clacso@clacso.edu.ar> | <www.clacso.org>

Patrocinado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional



No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

ÍNDICE

Prólogo	9
Bettina Levy y Natalia Gianatelli INTRODUCCIÓN	11
¿INNOVACIÓN O CONFORMISMO? EL CAMBIO DE ROL DE LAS ASOCIACIONES CIVILES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES EN URUGUAY Cecilia Rossel	23
LAS ASAMBLEAS BARRIALES Y LA CONSTRUCCIÓN DE LO “PÚBLICO NO ESTATAL”: LA EXPERIENCIA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Hernán Ouviaña	65
LIMITES DA VIRTUDE ISOLADA. MOVIMENTOS SOCIAIS E POLÍTICA NO BRASIL Gabriel de Santis Feltran	103
ORGANIZACIÓN POLÍTICA AUTO-REFERENCIADA EN SECTORES POPULARES. EL CASO DE LA FEDERACIÓN DE TIERRA, VIVIENDA Y HÁBITAT Dolores Nair Calvo	151

PROTESTA, CONFLICTO SINDICAL E IDENTIDADES POLÍTICAS: LA CENTRAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS EN LOS AÑOS NOVENTA María Silvana Gurrera	199
SEM-TERRAS E SINDICALISTAS: A INFLUÊNCIA DAS AÇÕES RECENTES POR REFORMA AGRÁRIA NAS LUTAS SINDICAIS NA ZONA DA MATA DE PERNAMBUCO Marcelo Rosa	249
UNA APROXIMACIÓN A LA DIMENSIÓN DEL DISEÑO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: LA IMPLOSIÓN DE LA IDENTIDAD ÉTNICA EN LA RED PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS DE COLOMBIA Juliana Flórez Flórez	275
EL NACIONALISMO INDÍGENA COMO IDENTIDAD POLÍTICA: LA EMERGENCIA DEL MAS-IPSP (1995-2003) Pablo Stefanoni	311
EPÍLOGO LOS MOVIMIENTOS SOCIALES A LA VUELTA DEL SIGLO: SISTEMA POLÍTICO, ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ORGANIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA Patricia Davolos, Gabriel Fajn y Ricardo Spaltenberg	379

PRÓLOGO

ESTE LIBRO de la Colección Becas de Investigación compila ensayos de jóvenes investigadores latinoamericanos que abordan, desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas, experiencias concretas de organización social y política observadas en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y Uruguay.

Los artículos que incluimos en esta publicación fueron revisados por sus autores y autoras en el año 2006 y presentan los resultados de las investigaciones que ellos realizaron durante 2003 como becarios ganadores del concurso *Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe*, organizado por el Programa Regional de Becas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Un seminario realizado en el Campus Virtual de CLACSO entre el 21 de noviembre y el 22 de diciembre de 2003 permitió discutir los trabajos elaborados por los becarios y constituyó un interesante espacio de encuentro y debate. En la misma dirección, algunos de los becarios ganadores del concurso tuvieron también oportunidad de compartir sus experiencias en el marco de las actividades desarrolladas por otros programas del Consejo. Tal es el caso de Pablo Stefanoni y Marcelo Rosa, autores de esta publicación.

Quisiéramos agradecer a los investigadores ganadores del concurso por el aporte que hicieron al programa y, especialmente, a los autores y las autoras de este libro por el compromiso y la seriedad con que encararon la preparación y redacción de sus ensayos. En orden alfabético, los becarios

cuyos artículos presentamos son: Dolores Nair Calvo (Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina), Gabriel de Santis Feltran (Instituto de Filosofía e Ciencia Humanas, Pos-Graduação de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Brasil), Juliana Flórez Flórez (CIPOST e Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela), María Silvana Gurrera (Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de General San Martín, Argentina), Hernán Ouviaña (Instituto de Investigaciones Administrativas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina), Marcelo Rosa (Instituto Universitario de Pesquisa do Rio de Janeiro, Brasil), Cecilia Rossel (Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay) y Pablo Stefanoni (Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, Argentina).

Agradecemos también a Patricia Davolos, Gabriel Fajn y Ricardo Spaltenberg, quienes orientaron el trabajo metodológico de los becarios durante el transcurso de sus investigaciones, colaboraron en la selección de los ensayos compilados en este libro y aceptaron con entusiasmo la invitación a escribir el artículo que cierra esta publicación, en el que aportan algunas claves para el análisis de los conflictos sociales y las formas de organización en el marco del contexto político iniciado con la llegada al gobierno de fuerzas progresistas en varios países de la región. Reconocemos la valiosa colaboración de Ernesto Funes, quien revisó cuidadosamente cada uno de los textos y nos acompañó con seriedad y gran compromiso en la preparación y organización de este libro.

Extendemos este agradecimiento a los directores y las directoras de los Centros Miembros de CLACSO que respaldaron las presentaciones y facilitaron la tarea de los investigadores en sus respectivas instituciones. También destacamos la labor de Amélia Cohn (Centro de Estudios de Cultura Contemporánea), Eduardo Grüner (Facultad de Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de La Pampa, Argentina) y Aníbal Quijano (Centro de Investigaciones Sociales, Lima, Perú, y Departamento de Sociología, Binghamton University, Nueva York, EE.UU.), quienes integraron el jurado que evaluó los trabajos presentados al concurso y seleccionó a los ganadores. Finalmente, agradecemos a la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (Asdi) por la confianza y el apoyo que desde 1998 nos brinda para la realización de esta iniciativa y a los compañeros de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO por su colaboración en la realización de las actividades dirigidas a los becarios.

Bettina Levy y Natalia Gianatelli
Buenos Aires, noviembre de 2007

INTRODUCCIÓN

EL PRESENTE reúne un conjunto de ensayos escritos por jóvenes investigadores latinoamericanos que tratan, desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas, las nuevas configuraciones de la política, el conflicto social y la protesta en los países de América Latina; los entramados de relaciones sociales en los que emergen y se organizan los movimientos y actores colectivos en la región; y las experiencias, identidades y significados culturales que se conjugan en las relaciones grupales, las resistencias y las luchas colectivas.

Más concretamente, los artículos estudian experiencias de organización social y política en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y Uruguay. Algunos de los principales temas que abordan son: los cambios producidos durante las últimas décadas en las sociedades latinoamericanas, en particular los efectos económicos y sociales derivados de la aplicación de las políticas neoliberales en los países de la región; las nuevas modalidades del conflicto y la protesta, sus principales dimensiones y contenidos; la crisis de las formas tradicionales de organización de los actores colectivos y las estrategias de construcción y resignificación de los antagonismos e identidades; las reacciones y trayectorias de las organizaciones sindicales y político-partidarias de izquierda y la emergencia de nuevas formas de organización y movilización social; las posibilidades y condiciones de la acción política y las experiencias de autoorganización y participación deliberativa y democrática en el

espacio público; la inscripción territorial de los formatos organizativos y políticos aparecidos en las luchas; las posiciones y relaciones generacionales y de género al interior de los movimientos; el carácter renovador de las diferencias y disensos internos; las tradiciones culturales y las identidades étnicas y políticas movilizadas en las intervenciones y enfrentamientos sociales.

Los temas específicos de cada uno de los trabajos y las reflexiones y conclusiones aportados por sus autores dan cuenta de la diversidad de puntos de vista y líneas de investigación que nutren los estudios sociales impulsados por las instituciones de formación e investigación de la región. Sin pretender abarcar exhaustivamente sus argumentos y aportes empíricos y analíticos, a continuación presentamos los textos y las experiencias relatadas.

El artículo de Cecilia Rossel trata el papel de las asociaciones civiles prestadoras de servicios sociales en Uruguay y sus experiencias de trabajo en convenio con el estado en el contexto de la retracción de la cooperación internacional. Más específicamente, la autora identifica las principales funciones que cumplen estas organizaciones e intenta dar cuenta de la medida en que la colaboración en el desarrollo y la ejecución de políticas públicas ha incidido en su capacidad de innovación, cuestionamiento de las acciones del estado y expresión de la ciudadanía. Revisando la literatura académica sobre el tema, Rossel señala, en primer lugar, que la dependencia económica de los fondos estatales puede traer consigo dificultades tales como un aumento de la incertidumbre acerca de su renovación, una mayor competencia por los subsidios, el fomento del clientelismo y la pérdida de autonomía e identidad. Por otra parte, la autora indica que una vez que las organizaciones no gubernamentales comienzan a recibir financiamiento estatal enfrentan la necesidad de profesionalizarse y, con ello, encuentran problemas derivados, por un lado, de la obligación de adquirir conocimientos y destrezas de las que el personal carecía y, por el otro, de la incompatibilidad entre los criterios de eficiencia con los que deben medir su trabajo y los motivos y principios que orientan la actividad voluntaria. En base a entrevistas sostenidas con representantes de tres organizaciones que trabajaron en convenio con el Instituto Nacional del Menor (INAME) en las políticas de atención a la infancia carenciada, la investigadora explora las percepciones sobre las mencionadas dificultades y obtiene indicios para concluir que el trabajo con el estado dificulta la capacidad expresiva e innovadora de estas organizaciones y que esta situación adquiere distintos matices según el tamaño y las posibilidades técnicas y reflexivas que las mismas dispongan. Finalmente, la autora señala la importancia que estas organizaciones adjudican tanto a su participación en redes más amplias como a la diversificación del financiamiento –más allá de

la medida en que efectivamente puedan concretar estas acciones y del peso o impacto que las mismas tengan en su vínculo con el estado.

Interesado también en las formas de intervención y participación en el espacio público pero poniendo la atención en la emergencia y construcción de instituciones desligadas de la lógica estatal e impugnatorias de las formas tradicionales de pensar y hacer política, Hernán Ouviaña realiza un recorrido histórico de la autoorganización vecinal en Argentina y señala que la emergencia de asambleas en los distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires a fines de 2001 constituyó un quiebre con respecto a experiencias anteriores en la medida en que dichas asambleas desbordaron la dinámica institucional tradicional, hicieron de lo vecinal una cuestión colectiva y reinscribieron la política en el territorio barrial. El autor enfatiza algunos aspectos de su organización interna –tales como la activa participación de sus miembros, la discusión colectiva, la designación rotativa de delegados y la decisión en base al consenso– y considera que esta modalidad de participación colectiva y voluntaria de los vecinos inauguró un escenario novedoso de vivencia democrática. Revisando los antecedentes inmediatos de las asambleas barriales, el autor destaca la experiencia de democracia directa que desde 1996 venían desarrollando los movimientos de trabajadores desocupados en los sucesivos cortes de ruta y las acciones de protesta de los usuarios del servicio eléctrico ocurridas en 1999 y 2001 frente a la deficiente prestación de servicios públicos y la imposición de aumentos tarifarios por parte de las empresas privatizadas. Por otra parte, subraya que la mayoría de las asambleas barriales surgieron después de la insurrección de masas del 19 y 20 de diciembre de 2001 y señala que dichas jornadas condensaron dramáticamente una situación de malestar social y una escalada de violencia que culminaron en la declaración del estado de sitio y la caída del gobierno nacional. El autor sostiene que, en ese contexto, los ámbitos asamblearios permitieron tanto la discusión de objetivos comunes como la socialización de prácticas de resistencia. Señala también que constituyeron espacios de desprivatización de lo social y transitaron desde el debate colectivo hacia la gestión de emprendimientos sociales y solidarios, en la medida en que la experiencia deliberativa y callejera dio paso a la ocupación de predios abandonados y su recuperación para uso público. Realizando un balance del proceso, el autor encuentra que el principal aporte de las acciones y los espacios de coordinación llevados a cabo por las asambleas barriales fue la construcción de una institucionalidad arraigada territorialmente en el barrio y materializada en múltiples y diversas iniciativas de cooperación. Este proceso involucró la construcción de instancias de coordinación entre asambleas y la articulación con partidos políticos y otras organizaciones y actores sociales urbanos como los movimientos de piqueteros y deso-

cupados, los obreros de las empresas recuperadas y las cooperativas de cartoneros. No fue un desarrollo unívoco sino signado por la contradicción y la tensión con las formas tradicionales de intervención política. Implicó marchas y represiones, ilusiones y frustraciones, acercamientos y rupturas. Durante su transcurso, algunas asambleas se disolvieron o fracturaron, otras se fusionaron y también surgieron nuevas iniciativas. El proceso seguía abierto –era una “apuesta sin garantías”– cuando el autor finalizó su investigación. Por ello su conclusión es un gran interrogante: ¿cómo lograr que estas nuevas formas de participación democrática pervivan conservando su creatividad y manteniéndose ajenas a las formas tradicionales de hacer política?

Explicitando un trasfondo más amplio de debates y consideraciones teóricas, Gabriel de Santis Feltran también reflexiona acerca de las condiciones y dilemas que enfrentan los movimientos sociales que pretenden intervenir políticamente en espacios públicos deliberativos y democráticos e ilustra esta compleja problemática a partir del estudio de la conformación y el rumbo del Asentamiento Hacienda Pirituba, ubicado al sur del estado de San Pablo, en Brasil. A través del estudio de este caso, el autor analiza la trayectoria de los movimientos sociales brasileños en el marco del proceso de democratización y las políticas estatales implementadas en las dos últimas décadas. En particular, considera las tensiones y dificultades que estas organizaciones enfrentan cuando buscan constituirse en sujetos políticos y colocar las demandas y discursos populares en el debate público. El autor aborda el contexto en el que un grupo de agricultores ocupó el área, luchó por sostener su posición, se movilizó en defensa de sus intereses en articulación con sectores progresistas de la iglesia y el movimiento sindical, entró en contacto con el gobierno del estado de San Pablo y, a partir de entonces, institucionalizó sus reclamos. La crónica del autor señala que los avatares de este asentamiento están inextricablemente ligados, por un lado, a las políticas estatales de promoción de emprendimientos productivos agrícolas y, por otro, a la historia y la influencia que sobre dicho establecimiento ejerció el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), principal movimiento social popular brasileño de los últimos años. A mediados de los años ochenta, en el marco de la movilización política social y la apertura de canales de participación popular que acompañó –no sin ambigüedades y contradicciones– al resurgimiento del régimen democrático en el país, el Asentamiento Hacienda Pirituba se constituyó en un auténtico laboratorio de las políticas oficiales de promoción de la reforma agraria por la vía del apoyo crediticio estatal para la producción agropecuaria cooperativa. La aplicación de estas políticas propició el crecimiento y desarrollo de este asentamiento hasta 1988. Sin embargo, a partir de entonces, la experiencia comenzó un

período de declinación y el emprendimiento productivo entró en crisis cuando las diferencias en las trayectorias históricas y las tradiciones de clase existentes entre las familias fundadoras erosionaron las bases de la organización colectiva que hasta el momento había garantizado –y financiado– la prosperidad del asentamiento, y los agricultores comenzaron a producir y comercializar por su propia cuenta. La influencia del MST durante la década del noventa introdujo nuevas esperanzas basadas en la renovación de los canales crediticios y la reorganización de la producción según principios cooperativos. Sin embargo, esta experiencia indujo una subordinación de los intereses económicos locales a las estrategias de lucha política desplegadas a nivel nacional y basadas en la radicalización de la acción directa (enfrentamiento y ocupación de tierras) y la producción de acciones de alta visibilidad mediática, y, con ello, reactualizó los conflictos internos, incitó la fragmentación de los asentados entre colectivistas e individualistas y trabó la construcción de la representación orgánica al interior del movimiento. Más generalmente, el autor considera que este proceso tiene su correlato en la desmovilización y despolitización de muchos grupos de protesta social en el Brasil y la restricción progresiva de los espacios de deliberación pública y plural donde los sectores populares puedan hacer visibles sus demandas y proponer políticas alternativas. Finalmente, considera que la “virtud política” de estos movimientos queda “aislada” en ausencia de un campo político democrático en el cual manifestarse.

Articulando también problemáticas y desarrollos de la teoría social relativos a la conformación de nuevos movimientos e identidades sociales, su constitución como sujetos políticos y su despliegue en el espacio público, Dolores Nair Calvo se pregunta acerca de las condiciones de posibilidad de la organización política autorreferenciada de los sectores populares en Argentina y, en particular, estudia el caso de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), organización miembro de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). La autora recorre la historia de esta organización constituida a fines de la década del noventa y analiza las prácticas y orientaciones políticas, las acciones contenciosas y las estrategias organizacionales desarrolladas primero en la localidad de San Francisco Solano, Partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, y luego en el partido de La Matanza, también en la provincia de Buenos Aires, núcleo organizativo de la FTV a nivel nacional. Enfatiza que el aprendizaje que resultó de la conformación de asentamientos en San Francisco Solano y la toma de tierras en La Matanza en los años ochenta constituye el principal factor explicativo de la génesis de la FTV. Efectivamente, estas acciones condujeron al desarrollo de redes asociativas barriales, centros comunitarios, cooperativas y juntas vecinales que antecedieron e hicieron posibles los intentos de organización política de los sectores

populares. Fue en dichos ámbitos donde los actores estudiados desarrollaron actitudes y orientaciones basadas en la confianza, la pertenencia, la participación y el compromiso. Fue también a partir de aquellas experiencias que se formaron los vínculos organizacionales y las redes de relaciones que sedimentaron en organizaciones políticas y confluyeron en el espacio de la CTA, dentro de la cual la FTV se insertó y desplegó más formalmente a partir de 1998. El análisis de este caso permite a la autora reflexionar acerca de las condiciones y formas de la (re)constitución del lazo social, y su conclusión es que, en contextos de desestructuración de los ámbitos relacionales y desligamiento de las identidades políticas, la mayor reflexividad de los individuos y grupos respecto de su relación con la política en general es condición de posibilidad para la generación organizativa y la reorientación política. En este sentido, la autora señala que la FTV surgió y se estructuró territorialmente, de manera autoorganizada y en abierta y clara oposición a las formas tradicionales de la política impulsadas desde el estado, los partidos y los sindicatos, incluso desde aquellas organizaciones sindicales pertenecientes a la CTA. Calvo culmina su artículo señalando que es una cuestión abierta saber si los procesos de orientación política autorreferenciada se traducirán en una acción política organizada con presencia e injerencia de largo plazo en la esfera pública. Pero, ciertamente, esto dependerá de las complejas relaciones que se establezcan entre las condiciones del tejido social, las posiciones y experiencias de los actores y sus creencias, actitudes y orientaciones hacia la política y el hacer política.

Interesada también en las nuevas modalidades organizativas y reivindicativas desarrolladas en el ámbito sindical, el artículo de María Silvana Gurrera aborda el proceso de surgimiento y construcción de la identidad política de la Central de Trabajadores Argentinos durante la década del noventa. Para contextualizar este proceso, la autora describe las divisiones surgidas al interior del Partido Justicialista durante la década del ochenta, su impacto en el campo sindical peronista y los distintos posicionamientos que el movimiento obrero tomó frente a las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno peronista del presidente Carlos Menem. En dicho contexto, un grupo minoritario de sindicatos abrió un espacio de resistencia y reivindicación de la “verdadera tradición peronista” pero, a la luz del triunfo electoral menemista en las elecciones de 1991, resolvió reorientar su estrategia y constituir una nueva identidad y experiencia política destinadas a enfrentar las políticas neoliberales y superar la institucionalidad y las prácticas sindicales de tradición peronista. Esta iniciativa se concretó en noviembre de 1992 con la creación de la CTA. La nueva central se organizó en base a un conjunto de prácticas y principios fundamentales: la democracia y la autonomía sindical respecto del estado y los partidos políticos, la apertura y articulación con

otros sectores marginados y excluidos de la sociedad, y la revalorización de la ética gremial. Durante el período estudiado, esta central enfrentó las políticas de flexibilización laboral, reforma del sistema de seguridad social y privatización de la educación pública. Aunque no siempre logró influir en el tratamiento de los proyectos en el sentido buscado, particular importancia tuvieron el reclamo salarial de los sectores docentes –gremio mayoritario de la CTA– y el apoyo que el gremio recibió de la Alianza, coalición política que se presentaba como la oposición al menemismo de cara a las elecciones legislativas de 1997 y que resultó ganadora en las elecciones presidenciales de 1999. Esta articulación con el juego político partidario no implicó un compromiso incondicional de la central con la gestión del nuevo gobierno sino, más bien, una posición crítica fundada en propuestas elaboradas internamente y acciones coordinadas con otros sectores. Efectivamente, la CTA redefinió tanto el concepto “clase trabajadora” como la idea de territorio y, en virtud de ello, incluyó en su estructura múltiples organizaciones comunitarias, movimientos barriales y asociaciones de trabajadores desocupados que desarrollaban novedosas formas de organización y protesta de índole territorial expresadas, por un lado, en la ocupación de tierras y la formación de asentamientos barriales y, por otro, en los cortes de rutas y vías de circulación y acceso a las grandes ciudades. La inclusión de problemáticas distintas a las tradicionalmente contempladas dentro del ámbito de interés de la acción sindical llevó a la ampliación de la definición del conflicto sindical así como también a la formulación de nuevos canales de participación organizacional: elección directa de autoridades y afiliación individual. Asimismo, planteó una serie de tensiones entre las prácticas y experiencias comunitarias y sindicales. En este camino de ruptura y continuidad con la tradición peronista e inclusión y tensión en la articulación con otros sectores, la autora identifica las bases que orientan la construcción de una identidad y un movimiento político, social y cultural.

Marcelo Rosa aborda también las nuevas formas del conflicto y la protesta y la importancia de la dimensión territorial de las mismas, aunque su atención está puesta en el ámbito rural. Más concretamente, su estudio plantea los cambios que se produjeron en las modalidades de protesta y las luchas de los sindicatos campesinos de la zona de Pernambuco, en el norte del Brasil, y la incidencia que en estas transformaciones tuvo el surgimiento, hacia mediados de los años ochenta, del Movimiento de los Campesinos Sin Tierra. En particular, el autor examina el dramatismo de un conflicto intergeneracional surgido entre los líderes sindicales campesinos de la región de Zona da Mata en el contexto de la crisis del complejo agroindustrial y el cierre de muchos ingenios azucareros de la región, situación que dificultaba la continuidad y efectividad de las modalidades históricas de protesta de

los fundadores de la federación sindical regional –la FETAPE–, tales como las huelgas campesinas por mejoras salariales y el recurso a los tribunales de justicia en defensa de sus derechos laborales. Esta crisis de las prácticas tradicionales fue acompañada por el surgimiento de una nueva generación de dirigentes sindicales que –a la luz del ejemplo y la experiencia a nivel nacional del MST– introdujeron en esta región del norte brasileño la práctica de la ocupación de tierras improductivas como modalidad de protesta y movilización, y encontraron en la reforma agraria un objetivo nuevo de las luchas sindicales. Rosa reconstruye los debates que se produjeron al interior de la FETAPE entre los años 2001 y 2003 entre los grupos “históricos” –aquellos fundadores de la regional sindical y partidarios de la huelga en defensa de intereses salariales– y los líderes más jóvenes –quienes reivindicaron un cambio de orientación tanto en las modalidades de la protesta como en los objetivos mismos de las reivindicaciones: las ocupaciones de tierras en favor de la reforma agraria. A través de su trabajo en el terreno, el autor registra la crónica de la derrota político-electoral de esta nueva camada de dirigentes jóvenes al tiempo que señala que, aun cuando la vieja dirigencia sindical retuvo la conducción de la federación, poco tiempo después comenzó a introducir las modalidades de lucha propuestas por los más jóvenes a fin de adecuar su supervivencia y liderazgo político a las nuevas demandas y condiciones de la lucha social. Se trata por tanto de un estudio en el que es posible apreciar la articulación y la tensión entre nuevas y viejas modalidades de expresión y organización político-sindical; la relación –que no por causalidad es directa– entre los cambios de las condiciones económicas y sociales y las mutaciones en la conducta y la identidad de lo sindical; la dimensión humana que nutrió la historia de las modalidades de movilización y protesta política de los trabajadores; y, finalmente, el carácter renovador de los conflictos generacionales producidos al interior del sindicalismo rural de esta zona del norte brasileño.

Interesada también en las diferencias y disensos que nutren la dinámica interna de los movimientos sociales, Juliana Flórez Flórez estudia la red Proceso de Comunidades Negras (PCN) de Colombia y la manera en que este movimiento –formado por actores que comparten una misma identidad cultural y étnica y reivindican la diferencia en su relación con otros actores sociales– gestionó los conflictos internos derivados de otros procesos de subjetivación que acompañan y condicionan la construcción de la identidad negra, como el género, la clase, el nivel de formación, el lugar de procedencia y el culto religioso. La autora reconstruye la historia del movimiento y señala que, así como durante los años setenta y ochenta las organizaciones negras se movilizaban en torno a las reivindicaciones de igualdad e integración a la nación, a

principios de los noventa se orientaron a la delimitación de su identidad negra y a la defensa de su lugar por la vía de la reivindicación del derecho de permanencia y posesión de los territorios colectivos según prácticas ancestrales. En el contexto del cambio constitucional iniciado en 1990 con el propósito de declarar a Colombia una nación pluriétnica y multicultural, la población negra –largamente expoliada y discriminada– buscó presentarse como un pueblo que merecía el reconocimiento de los derechos garantizados a las minorías étnicas. Fue un desafío al marco jurídico pero también, y principalmente, al imaginario social colombiano, caracterizado por el blanqueamiento de la cultura. Fue también el intento de construcción de un espacio étnico y cultural semejante al reconocido a los indígenas. El movimiento propuso, más generalmente, un modelo de desarrollo alternativo a las lógicas del capital y la guerra que afectaban las condiciones de vida de la población toda vez que, por un lado, disputó al estado el sentido dado a la biodiversidad y a la conservación de los recursos del Pacífico, y, por el otro, reclamó a los grupos armados su derecho a asegurar condiciones de paz en la región y facilitar el retorno de los grupos étnicos desplazados. La autora nos advierte que este proceso no fue lineal; involucró técnicas de invención comunitaria, formas de visibilización, procedimientos de narración e información, prácticas de resistencia, acercamientos con el movimiento indígena y desencuentros internos. Y es precisamente el disenso al interior del movimiento lo que a juicio de la autora posibilita la construcción de los consensos que cohesionan al grupo y potencian su acción colectiva. Más concretamente, el consenso acerca de la articulación del PCN y el anclaje de su lucha en torno a la identidad negra implicaron también una serie de disensos derivados de la heterogeneidad de experiencias y aspiraciones vinculadas a otras adscripciones, que dieron lugar a una discusión acerca de los efectos de la etnización de la identidad negra. Es precisamente en el debate acerca del sentido atribuido a la identidad negra y las reivindicaciones y experiencias que de allí se derivaron donde la autora observa la construcción del PCN como un espacio simultáneo de encuentro y desencuentro que permite negociar el sentido político de la lucha de las comunidades negras. El artículo acompaña el derrotero de un movimiento que, habiendo luchado durante más de una década por la igualdad desde la diferencia, comienza a reivindicar la igualdad en la diferencia. En este sentido, ofrece una sólida y comprometida ilustración de las complejas relaciones que se establecen entre las diversas marcas identitarias de los activistas, sus experiencias y aspiraciones cotidianas, sus conexiones con otras redes y movimientos, y los significados que conjugan en sus relaciones grupales y en sus luchas y resistencias.

Así como el artículo de Flórez nos invita a observar las formas de conocimiento y acción colectiva alternativas al pensamiento de la

modernidad, Pablo Stefanoni sigue la trayectoria de un movimiento que encaró un proceso de lucha política en franca oposición al proyecto modernizador neoliberal impulsado en Bolivia durante la segunda mitad del siglo XX. En este sentido, analiza los imaginarios sociales y los recursos culturales que han nutrido los complejos procesos de construcción de antagonismos e inscripciones políticas e identitarias en dicho país. Su artículo describe y explica el ciclo de alta movilización social iniciado en Bolivia hacia el año 2000, el desborde electoral de los movimientos sociales en 2002 y la emergencia de una conciencia nacional indígena-popular expresada particularmente por el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). Para contextualizar dicho estudio, el autor reconstruye el ciclo estatal abierto con la Revolución Boliviana de abril de 1952 y la crisis del mismo en el contexto del programa de reformas económicas estructurales que se inicia a mediados de los años ochenta. El estudio aborda simultáneamente –y con singular detalle– varias dimensiones del proceso de elaboración de las identidades políticas en Bolivia. En términos generales, el trabajo procura establecer de qué modo estas fueron definidas según construcciones culturales de clase y etnicidad que giraron en torno a la interpretación de dos categorías centrales: campesino e indígena. En virtud de esta consideración, el autor enfatiza la importancia de la compleja relación entre estado, campesinos e indígenas en la historia boliviana y, en particular, estudia especialmente tres momentos. El primero, demarcado por la reforma agraria de 1953 en los valles cochabambinos, está signado tanto por la organización sindical del campesinado, su enfrentamiento con la oligarquía y los conflictos intracampesinos derivados de una “densa combinatoria de sumisiones y resistencias frente al estado nacionalista”, como por la fuerte injerencia del ejército en sus estructuras sindicales. El segundo, abierto en los años setenta tras la articulación de un estrato intelectual urbano –principalmente de origen aymara– con nuevas generaciones rurales, está marcado por la emergencia del katarismo: una narrativa anticolonial elaborada a partir de la recuperación del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y una identidad común ligada a la resistencia a la opresión en sus sucesivas y diversas manifestaciones históricas. El tercer momento está caracterizado por la instauración de un discurso y un conjunto de medidas pluri-multiculturalistas a partir de la reforma constitucional de 1994 y la emergencia –en dicho contexto– de experiencias de convergencia multisectorial y organización territorial a partir de reivindicaciones vinculadas a la gestión del agua, el acceso a la tierra y el precio de los servicios públicos. En este proceso tuvo singular importancia el desempeño del movimiento sindical de campesinos cocaleros de la región del Chapare, que resignificó el término “coca” apelando a una dimensión identitaria y cultural y, con ello,

enfrentó la estigmatización y criminalización de su cultivo, cuestionó el sometimiento del estado boliviano a la propaganda y las directivas norteamericanas, y redefinió el campo de la confrontación política. El MAS-IPSP surgió como extensión política de estas luchas campesino-indígenas y fue interpelando y agregando otros sectores marginados a partir de la lucha por la tierra y el territorio y de un discurso crítico del neoliberalismo y el imperialismo, portador de la tradición cultural andina y enriquecido por la experiencia política de los sindicatos rurales y urbanos. El autor finaliza el texto analizando la eficacia del movimiento en la actividad político-legislativa y sus dificultades y desafíos en el período inmediatamente previo a su ascenso al gobierno del estado. Esta experiencia de organización social y política es hoy, sin dudas, una de las más novedosas del escenario de nuestra región.

En las síntesis expuestas no pretendemos abarcar exhaustivamente los problemas y dimensiones analizados por los autores sino plantear los principales ejes analíticos y categorías conceptuales que atraviesan sus investigaciones y reflexiones. En la realización de esta tarea, con grato placer encontramos –más allá de las diferencias y divergencias teóricas y conceptuales– importantes puntos de encuentro en los hallazgos empíricos relatados por los investigadores y diálogos permanentes entre los argumentos y los abordajes analíticos vertidos en los textos. Es por ello también que la secuencia del índice bien podría ser alterada en diversos sentidos u orientaciones. En términos muy generales, los trabajos dan cuenta de experiencias concretas de organización colectiva y constitución identitaria en contextos de movilización y conflicto social. Asimismo, la mayoría de los autores abordan la especificidad de estas acciones con énfasis en su capacidad de proyección política, participación pública y articulación institucional. Mucho cambió el escenario internacional y regional desde que estos trabajos fueron escritos y notables transformaciones experimentaron también los contextos nacionales de los casos tratados en la medida en que un conjunto de alianzas y fuerzas referenciadas como progresistas lograron acceder a los gobiernos de varios de estos países y tomaron distancia de la doctrina neoliberal a partir de orientaciones ligadas a tradiciones de izquierda, socialistas o nacional-populares. El artículo que cierra esta compilación relata este nuevo panorama político y señala algunos de los dilemas y desafíos que actualmente enfrentan los movimientos sociales y políticos de la región. Sus autores, Patricia Davolos, Gabriel Fajn y Ricardo Spaltenberg, llaman la atención acerca de la necesidad de distinguir –y abordar en su especificidad– las trayectorias de cada uno de los espacios nacionales y, en particular, las condiciones estructurales, las redes sociales y los marcos institucionales en los que los movimientos inscriben sus luchas, construyen identidades, desarrollan modalidades organizativas y arti-

culan acciones políticas. En base a un contrapunto con los debates más clásicos de la teoría social, el artículo pone en relación estas dimensiones e ilustra, a partir de ellas, la situación de varios países de la región y, más específicamente, las relaciones entre los movimientos sociales y los sistemas políticos en cada uno de ellos.

Esperamos que los lectores de este libro disfruten la riqueza de las experiencias de organización social y política que interesaron a los autores y encuentren en estos artículos un estímulo para la realización de nuevos estudios sobre las configuraciones emergentes en la región y la reflexión y el debate sobre las posibilidades y condiciones de su articulación política y proyección emancipatoria.

Bettina Levy y Natalia Gianatelli
Buenos Aires, noviembre de 2007

Cecilia Rossel*

¿INNOVACIÓN O CONFORMISMO?

EL CAMBIO DE ROL DE LAS ASOCIACIONES CIVILES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES EN URUGUAY

INTRODUCCIÓN

A diferencia de la mayoría de los países de América Latina, Uruguay no ha visto en los últimos años el surgimiento de movimientos sociales de relevancia, específicamente de alcance nacional, que expresen la protesta frente a nuevos conflictos sociales. Es importante mencionar que la estructura sociodemográfica y productiva del Uruguay no facilita la acción colectiva, en el sentido de que no existen fuertes clivajes étnicos ni un campesinado que den lugar a movimientos contestatarios de cierto porte que cuestionen la lógica de inclusión de esta sociedad (Seoane et al., 2001: 43; Seoane y Taddei, 2001: 45).

Por otra parte, aquellos movimientos sociales que se presentaron como actores alternativos en la salida democrática de 1985, tales como el movimiento cooperativo de vivienda, el de género, el de derechos humanos, entre los más destacados, parecen haberse tradicionalizado en el presente, en el sentido de que no innovan en sus demandas y en sus modalidades de acción frente a la situación de crisis social y económica que está atravesando el país.

* Socióloga, Universidad Católica del Uruguay. Doctoranda en “Gobierno y Administración Pública” en el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid.

Estas observaciones no permiten concluir, sin embargo, que en Uruguay no han surgido espacios contestatarios en años recientes. De hecho, es posible identificar, a grandes rasgos, dos tipos de actores y espacios novedosos: uniones entre actores tradicionales, la Concertación para el Crecimiento¹; y un gran número de asociaciones civiles portadoras de nuevas demandas y formas organizativas. En este sentido, la innovación de la acción social parece radicar, por una parte, en la constitución de alianzas nacionales entre actores colectivos clásicos, cuyo alcance y proyección aún se desconocen, y por otra, en la emergencia de organizaciones de base, de tipo local, que reivindican un lugar específico en la agenda pública por las funciones de “protección social” que están desempeñando.

La diferencia de estos movimientos con los que se generan en otros países de América Latina es que son movimientos o espacios de participación generados, ya sea *a partir* de los actores tradicionales, o por la redefinición de las funciones estatales en materia social, y por ende, *no parecen encontrarse fuera* de los formatos tradicionales de organización colectiva. En otras palabras, la conformación de nuevos actores que intentan dar solución a nuevos conflictos se inscribe dentro de la lógica institucional tradicional y en continua relación con actores como el Estado y los partidos políticos.

A partir del proceso de transición a la democracia en Uruguay, comenzaron a surgir organizaciones relativamente articuladas en torno a la idea de nuevas formas de acción y protección social. Algunas de ellas se consolidaron luego como Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), otras se transformaron en instituciones filantrópicas. Algunas han logrado conformarse como actores referentes en la arena nacional, mientras que otras aún son desconocidas para la opinión pública y se inscriben en ámbitos de acción a nivel micro.

El caso uruguayo se inscribe en un proceso general de crisis del modelo tradicional de Estado de Bienestar y de impulso de ideas como la de *governance*² (Kooiman, 1993), a partir de los cuales, buena parte de estas organizaciones sociales han comenzado a trabajar en una lógica de colaboración con el gobierno para el desarrollo e imple-

1 Experiencia de concertación entre movimientos sociales tradicionales que expresaban intereses históricamente enfrentados (movimiento sindical, cámaras empresariales y federación rural) en el contexto de profundización de la crisis económica y social de los años 2001 y 2002. Al momento de escribir estas líneas (octubre de 2003), lleva varios meses sin actividades de ningún tipo.

2 El concepto de *governance* expresa una nueva forma de gobernar que parte de la base de que los recursos y las lógicas del Estado son insuficientes para dar solución a los problemas de la sociedad, lo que explica la necesidad de recurrir tanto a actores del mercado como de la sociedad civil para el desarrollo de las políticas públicas.

mentación de políticas públicas, especialmente en políticas sociales. Esta modalidad de trabajo conjunta se ha desarrollado en áreas como infancia o juventud, como forma de solucionar los problemas clásicos de administración, tamaño y costos del Estado, y buscando fortalecer los valores típicos de la sociedad civil –solidaridad, confianza, etc.– en la atención a estos y otros grupos desfavorecidos.

En este contexto, aunque las evaluaciones sobre el funcionamiento y resultados de estas experiencias son muy escasas y concretas, las dos preguntas que surgen son: ¿En qué medida la incorporación a la dinámica de trabajo del Estado permite a las ONGs seguir desempeñando sus roles clásicos de cuestionamiento y expresión democrática? Y ¿cuáles son los componentes innovadores que las caracterizan y hasta qué punto pueden introducirse en la prestación de servicios?

Este artículo busca dar respuesta a estas preguntas tomando como referencia la mencionada peculiaridad del caso uruguayo, planteando hallazgos e ideas que permitan abordar el análisis de las transformaciones y desafíos que enfrentan las ONGs desde la literatura académica, pero con un fuerte componente empírico. En este marco, en primer lugar, el artículo revisa los principales cambios internos que el trabajo en convenio con el Estado ha generado en las ONGs. A su vez, analiza las visiones de los representantes de las organizaciones acerca de la capacidad que han tenido de mantener su naturaleza cuestionadora y de expresión democrática, así como su capacidad innovadora en el trabajo cotidiano con el Estado. Finalmente, identifica contradicciones y dilemas que las organizaciones sufren una vez que comienzan a ser “socias” del Estado, así como las diferentes estrategias que utilizan para resolverlos.

EL ESPACIO PÚBLICO NO ESTATAL, EL TERCER SECTOR Y LAS ONGS

La colaboración de la sociedad civil en las políticas públicas del Estado no es un fenómeno nuevo. Desde que comenzaron esbozarse las primeras críticas al modelo clásico de Estado de Bienestar, surgieron también cuestionamientos a su capacidad para llevar adelante políticas sociales. Muchos estudios sostienen que la estructura burocrática del Estado mostraba una gran falta de flexibilidad en el desarrollo de los proyectos sociales (Muñoz de Bustillo, 1989: 70). Esta falta de flexibilidad también contribuyó a que el Estado fuera perdiendo la capacidad de alcanzar a nuevos colectivos sociales y grupos desfavorecidos.

La idea de *governance* –surgida en el marco de la Nueva Gestión Pública o *New Public Management*– se plantea como una alternativa a estos déficits, impulsando la incorporación de otros actores al desarrollo e implementación de tareas que antes estaban sólo en manos del Estado, aunque sin perder de vista el rol central que este debe seguir teniendo (Álvarez Miranda, 1996: 60). Las organizaciones de la sociedad

civil progresivamente cobraron relevancia como un actor válido para la participación en estos procesos, en particular, en la implementación de políticas sociales, tarea para la que presentan algunas características muy importantes que las diferencian del Estado y el mercado. Es en este marco que surge la idea del *espacio público no estatal*.

El espacio público no estatal (Bresser Pereira y Cunill Grau, 1998) surge como forma de avanzar en la definición de la esfera de la sociedad civil que está involucrada directamente en la producción de servicios públicos. En este sentido, podría decirse que dentro de la sociedad civil (que puede o no estar organizada) existen distintos tipos de organizaciones y asociaciones, y uno de los tantos ejes que divide a estas organizaciones es su nivel de involucramiento en la producción de bienes públicos, y los fines que persiguen.

El espacio público no estatal tiene características muy variadas. Entre ellas, Bresser Pereira y Cunill Grau (1998:41) destacan lo siguiente.

La solidaridad, el compromiso, la cooperación voluntaria, el sentido del deber, la responsabilidad por el otro son todos principios que tienden a caracterizar a las organizaciones sin fines de lucro, y en términos más amplios a la “comunidad” en tanto mecanismo de asignación de valores, diferenciable del mercado, basado en la competencia y el Estado, fundado en el poder coercitivo.

En este marco, además, es importante resaltar que las organizaciones de este sector público no estatal pueden ser variadas, incluyendo organizaciones filantrópicas, religiosas, asociaciones y ONGs. Estas últimas, que constituyen el eje de análisis de esta investigación, tienen como base el trabajo voluntario y la defensa de los derechos de la ciudadanía, combinando tareas tanto de producción o prestación de servicios como de control social (Bresser Pereira y Cunill Grau, 1998).

LA NATURALEZA DE LAS ONGS Y LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LOS ROLES O LÓGICAS DE ACCIÓN

Aunque en muchos casos surgen con los mismos orígenes y ambos son parte del universo de la sociedad civil, las ONGs presentan diferencias claras respecto de los movimientos sociales.

En primer lugar, algunos autores señalan que los movimientos sociales tienen su mayor recurso en el público potencial –es decir, en el público que adhiere a principios morales que legitiman sus demandas– y en el discurso que articulen, mientras que en general tienen pocos recursos en el público que normalmente se llama el “núcleo” dirigente de las organizaciones. En contrapartida, las ONGs “son equidistantes en las dos formas de relación: requieren un discurso y un público que

simpatice con sus demandas, pero para que esto se articule su acción debe tener efectos reales sobre la situación de su clientela potencial” (Revilla, 2002: 23). En otras palabras, la naturaleza de las ONGs supone la prestación de algún tipo de servicio, aunque no necesariamente vinculado a las políticas públicas.

Por otro lado, es claro que mientras los movimientos sociales tienden a reivindicar “bienes públicos universales” (es decir, bienes disponibles para colectivos amplios, como los derechos de la mujer o el medio ambiente no contaminado), las ONGs tienden a producir tanto bienes universales como particulares, es decir, aquellos bienes que atañen a grupos específicos de la sociedad. En este sentido, Revilla (2002: 24) señala:

Los movimientos sociales reivindican la producción de determinados bienes públicos universales, pero no reclaman para sí la gestión de los bienes públicos [...] Las ONGs producen bienes públicos de ambos tipos [tanto universales como particulares] pero, sobre todo, reclaman la gestión de los bienes que producen, incluyendo la financiación para su producción.

Según Revilla, a diferencia de los movimientos sociales, por ejemplo, las ONGs tienen un objetivo fundamental de “ayuda”. En este marco, la acción de estas organizaciones se desarrolla en dos niveles muy claros: el *nivel instrumental* y el *nivel expresivo*. El primero está directamente asociado a la búsqueda de resultados, es decir, a la producción de bienes y servicios, mientras que el segundo implica la reivindicación y demostración de valores, sustentados en la idea básica de solidaridad (Revilla, 2002: 51).

De esta forma, la naturaleza de las ONGs implica tres lógicas de acción. La primera lógica de acción está orientada exclusivamente a la ayuda y desarrollo de actividades asistenciales con el objetivo de producir bienes y servicios. La segunda lógica refiere a los propios intereses de las organizaciones por mantener sus espacios de acción, recuperando de esta manera la gestión de los bienes y servicios que reivindica. Finalmente, la tercera lógica de acción es más expresiva, y en ella se hace especial énfasis en la representación y expresión de la diversidad, tomando como principal valor la solidaridad, y con un fuerte componente de cuestionamiento a las instituciones políticas, estatales, etcétera.

Un estudio reciente desarrollado por Salamon et al. (2000) plantea con más detalle y profundidad cuáles son los principales roles que la literatura atribuye a las organizaciones del tercer sector. Según estos autores, estas organizaciones tienen cinco roles básicos: servicio, innovación, *advocacy* o compromiso, liderazgo para el desarrollo, y construcción de comunidad y democratización.

En primer lugar, se espera que el tercer sector cumpla un *rol de servicio*. Los servicios que las ONGs desempeñan son, como se mencionó anteriormente, bienes públicos cuya prestación, a la vez, es difícil de llevar a cabo por el Estado o el mercado.

Varios autores han intentado mostrar que el servicio de las ONGs es fundamental porque teóricamente aporta componentes diferenciales en los que el mercado y el Estado son insuficientes. Entre estas características diferenciales vale la pena señalar las siguientes:

- *Mayor calidad*: los servicios desarrollados por las organizaciones del tercer sector tienen, en teoría, mayor probabilidad de ser de más calidad, dado que estas organizaciones no persiguen fines de lucro ni beneficios económicos. Al no tener ese *anclaje* en objetivos lucrativos, pueden dedicarse a mejorar la calidad. La calidad, por otro lado, se potencia con los formatos menos burocráticos que en general caracterizan a este tipo de organizaciones, lo que les permite ser más flexibles y articular mejor con otras instituciones (Bresser Pereira y Cunill Grau, 1998: 45; Morales, 1998: 85).
- *Más equidad*: por tener fines no lucrativos, pero además por sus valores de solidaridad, las organizaciones del tercer sector tienen mayores posibilidades de alcanzar a públicos que el mercado generalmente no atiende (porque puede no ser rentable hacerlo) y el Estado puede tener dificultades de atender (por su rigidez en la formulación de las políticas). De esta forma, el rol de servicio de las ONGs contribuye a la atención de los más necesitados o aquellos que por distintas circunstancias quedan fuera de la atención de otras esferas (Morales, 1998: 85).
- *Menor costo/eficiencia*: por trabajar muchas veces con recursos voluntarios y acceder a fondos de cooperación, teóricamente puede atribuirse una mejor relación costo-eficiencia a los servicios prestados por estas organizaciones (Salamon et al., 2000). En algunos casos (Uruguay, por ejemplo), como se verá más adelante, la escasez e insuficiencia de evaluaciones ha generado un amplio debate sobre la validez de estas afirmaciones (Morás, 2001; Morales, 1998: 85; Edwards y Hulme, 1996).
- *Especialización*: por los valores que las sustentan, estas organizaciones, además, pueden especializarse en la atención a grupos sociales concretos, zonas geográficas o metodologías de trabajo específicas (Salamon et al., 2000).

Estos son algunos de los argumentos más claros por los que el tercer sector comienza a estar asociado a las políticas sociales en concreto,

dado que es justamente en estos campos (educación, salud, reducción de la pobreza, etc.) donde las características inherentes a las ONGs pueden materializar estos aportes diferenciales en la gestión de servicios.

El segundo rol asociado al universo del tercer sector es el *rol de innovación*. También porque no están “atadas” a los fines lucrativos, pero además por su propio formato institucional, las organizaciones del sector público no estatal son más flexibles y adaptables que el mercado y el Estado. Desde esta perspectiva, las organizaciones del sector público no estatal tienen mayor capacidad para innovar en sus propuestas, desarrollando políticas alternativas que superen el componente uniformizante de las políticas desarrolladas sólo por el Estado, e incorporando nuevos elementos gracias a su flexibilidad y su estructura post-burocrática (Bresser Pereira y Cunill Grau, 1998: 45).

Según Salamon, Hems y Chinnock, el componente de innovación es inherente al rol de las ONGs porque como “la forma de *no lucrativo* está potencialmente disponible a cualquiera que tenga una idea, podemos esperar que este sector sea un incubador de nuevas ideas y enfoques para identificar y solucionar problemas públicos. De esta forma puede desempeñar en la esfera pública el mismo tipo de rol innovador que las pequeñas empresas privadas juegan en la esfera de la acción privada con fines de lucro” (Salamon et al., 2000: 6). En este marco, es razonable esperar que el universo de las ONGs se constituya como actor pionero no sólo en la identificación de nuevos problemas públicos, sino en la formulación de metodologías nuevas y alternativas para la atención y solución de esos problemas (Salinas, 1997: 124).

En tercer lugar, se asume que las organizaciones del tercer sector desempeñan un claro *rol de advocacy o compromiso*. Este rol tiene su base en el compromiso que normalmente caracteriza a las personas que trabajan en ellas, y se expresa en dos dimensiones diferentes. Por un lado, las ONGs están comprometidas con el involucramiento ciudadano y la representación de demandas y, por otra parte, el compromiso también se expresa en términos de presiones concretas para el desarrollo de políticas públicas. Este compromiso está, en general, más relacionado con los objetivos y públicos específicos de las organizaciones y está revestido, como se señaló anteriormente, de un carácter claramente más instrumental (Salamon et al., 2000: 6).

El cuarto rol que los citados autores atribuyen a las organizaciones del tercer sector es el de *liderazgo en el desarrollo y expresión de la ciudadanía*. En este sentido, se espera que las ONGs, además del compromiso reseñado anteriormente, desempeñen un rol importante como líderes de desarrollo, garantizando especialmente la expresión de los distintos grupos e identidades de la sociedad (Salinas, 1997: 124). Desde esta perspectiva, algunos estudios han planteado inclu-

so que estas organizaciones tienen una función importante como “guardianes de valores” (Kramer, 1981), porque actúan como verdaderos vehículos de expresión de individuos y grupos, promoviendo la participación ciudadana y protegiendo intereses sociales, religiosos, culturales, etcétera.

Finalmente, se asume que las organizaciones del tercer sector pueden desempeñar un *rol de construcción de comunidad y democratización*. Esta función complementa el rol de expresión de la diversidad señalado anteriormente, contribuyendo a la creación de códigos comunes, hábitos compartidos y valores de confianza y solidaridad entre actores. En este sentido, pueden aportar a la construcción de capital social y valores democráticos.

Es evidente que no todas las organizaciones desempeñan con la misma intensidad todos estos roles. Algunas hacen hincapié en unos, y otras ponen el énfasis en otros. Lo que sí es claro es que tanto unos como otros son parte de la naturaleza de las ONGs y, por lo tanto, son la fuente básica de su legitimidad. Además, en el caso uruguayo, el intento por desempeñar estos roles implica una competencia clara con los partidos políticos, quienes han monopolizado el desarrollo de buena parte de estas funciones por más de 150 años.

PROBLEMAS Y DESAFÍOS DE LAS ONGS A PARTIR DE SU INCORPORACIÓN A LOS SISTEMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Como se señaló en la sección anterior, en teoría, las ONGs desempeñan roles muy variados, que van desde la prestación de servicios a la expresión de ciudadanía. Además, por la naturaleza de sus fines e intereses y el lugar que tradicionalmente han ocupado, se enfrentan a problemas de diversa índole. Estas características definitorias se configuran de distinta manera en las organizaciones, que resuelven las dificultades con estrategias diversas y ponderan los roles de forma también variada.

Ahora bien, varios estudios coinciden en que una vez que las ONGs pasan a colaborar con el Estado en el desarrollo e implementación de políticas públicas, las dificultades reseñadas se vuelven más graves para las organizaciones, y además surgen otros problemas y contradicciones generadas por el solo hecho de pasar a trabajar dependiendo de fondos estatales, y formando parte del sistema de políticas del gobierno (Tonkiss y Passey, 1999; Vernis, 2000).

En principio, este cambio de lógica implica un proceso de institucionalización con consecuencias y tensiones importantes en términos organizacionales, porque al ser implementadoras de políticas gubernamentales están sujetas a evaluaciones más estrictas, y están obligadas a articularse con el Estado para lograr objetivos comunes. El problema es planteado por Tonkiss y Passey (1999: 272) de forma muy clara.

Las relaciones con el Estado están cambiando el foco de atención de los “resultados amplios” (las relaciones de confianza explícita basadas en evaluaciones comunes del bien social) a los “rendimientos específicos” (relaciones de confianza implícita basadas en los contratos para la definición de objetivos) [...] Estos cambios alumbran la problemática y potencialmente contradictoria relación entre la naturaleza institucional de las organizaciones voluntarias y su base de valores.

Desde esta perspectiva, las lógicas de acción de las ONGs señaladas en párrafos anteriores, o los roles (en términos de Salamon, Hems y Chinnock) entran en una tensión cada vez más clara, forzando a las organizaciones a asumir nuevos formatos institucionales y a priorizar determinados objetivos frente a otros.

Teóricamente, en países como Uruguay, durante la etapa en que el financiamiento de las organizaciones del tercer sector provenía básicamente de donaciones y de la cooperación internacional, la producción de servicios se realizaba en base a proyectos formulados por las ONGs que rendían cuentas a los organismos financiadores, en muchos casos con criterios bastante laxos. El compromiso de las organizaciones estaba orientado al logro de nuevos proyectos en beneficio de distintas poblaciones desfavorecidas, y no entraba en colisión con los roles de expresión de ciudadanía y construcción de comunidad; por el contrario, las iniciativas de innovación y producción buscaban fortalecer estos dos aspectos. Pero una vez que los fondos de la cooperación internacional comienzan a recortarse (algo que en países como Uruguay ha sido sistemático en la década del noventa) y las ONGs pasan a participar activamente en las políticas públicas a través de los convenios con el Estado para poder seguir financiándose, la posibilidad de ejercer estos cinco roles se complica, y surgen contradicciones muy fuertes. A continuación se describen algunas de las más relevantes.

LA CONTRADICCIÓN DE SER PRODUCTORAS Y CUESTIONADORAS

En primer lugar, se generan tensiones al interior de las organizaciones porque en este nuevo escenario pasan a colaborar con el Estado y a formar parte de su estrategia en términos de políticas públicas. Al prestar servicios con fondos del Estado, se transforman en un actor “socio” o, siendo más críticos, le “hacen el juego” o son “cómplices” del Estado. El problema de ser colaboradoras del Estado es que la capacidad de ejercer los roles de expresión ciudadana (reivindicando, por ejemplo, ideas de grupos excluidos o poco atendidos por el Estado) y construcción de comunidad y democratización (favoreciendo la participación y el control a la gestión pública) se debilita, porque su posibilidad de reivindicación

y contestación al Estado es menor, dado que, en cierta forma, son parte de las políticas del Estado. En este sentido, Revilla señala:

En el proceso de institucionalización [...] la capacidad de hacer, de obtener resultados específicos, se convierte en el eje que define el espacio de las ONGs: se comprometen formalmente unos resultados de los que hay que dar cuenta detallada. Y, teniendo en cuenta el análisis sobre la relación con la política, se institucionaliza la negación de la política, de los hechos frente a las ideas, lo que se puede hacer y se hace, frente a las utopías de cambio (2002: 60).

Lo que parece claro es que el cambio de financiación y de “arena” de trabajo de las ONGs pone de manifiesto la contradicción de los diferentes roles que normalmente ejercen, y se evidencia con claridad la incompatibilidad que surge entre ellos.

Es importante rescatar que, al incorporarse a las políticas públicas, las organizaciones del tercer sector son *productoras* de servicios y, a la vez, cumplen tradicionalmente tareas como *cuestionadoras* y *controladoras* de las acciones del Estado. La pregunta que surge es: ¿pueden las ONGs mantener los roles de expresión democrática y cuestionamiento al formar parte y ser socias en la implementación de políticas públicas prestando servicios? En un estudio reciente se señala:

Aunque estos dos roles no tienen por qué estar contrapuestos, la evidencia empírica demuestra que normalmente lo están. La contradicción se genera, sobre todo, en la progresiva dependencia y “acoplamiento” que se produce en las ONGs en relación al Estado. Al depender de los proyectos que financia el Estado, muchas ONGs parecen perder autonomía y capacidad crítica. Por esta razón, ejercer la participación efectiva y el control democrático que implica la *governance* se vuelve una tarea más difícil (Monestier y Rossel, 2003: 18).

Pese a lo aparentemente inevitable que resulta este problema, no todas las organizaciones reaccionan frente a él de la misma manera. La variedad de estrategias para resolver la contradicción de roles es esperable. Lo que no está claro es si existen determinados patrones o caminos elegidos dependiendo del tipo de organización. Por ejemplo, ¿que influencia tiene en la elección de la estrategia el origen de la ONG –religiosa, académica, barrial? ¿Y el tamaño? Esta investigación intenta ser un primer avance en el estudio de estas cuestiones.

EL PROBLEMA DE LA DEPENDENCIA

Quizás, el problema que contribuye con más fuerza al surgimiento de las contradicciones señaladas en párrafos anteriores es la dependencia

de las organizaciones del tercer sector respecto del Estado. Los recortes de los fondos de la cooperación internacional han generado una fuerte dependencia de los fondos estatales por parte de las ONGs. Según Vernis (2000: 248), “esta situación de dependencia es muy dañina para la colaboración porque termina convirtiéndose en un ‘enlace de supervivencia’: si la agencia pública retira la financiación, la ONL [organizaciones no lucrativas] corre peligro de desaparecer”.

La dependencia económica que presentan las ONGs respecto de los fondos públicos puede aparejar diversas dificultades. Por un lado, se genera una incertidumbre dentro de las organizaciones, porque no saben si van a tener los fondos suficientes cada año. Por otra parte, se propicia la competencia entre las organizaciones por el reparto de estos recursos limitados. Finalmente, se fomenta el surgimiento del clientelismo (Jerez y Revilla, 1997: 38).

Como se expuso anteriormente, la dependencia económica genera un peligro de asimetría en la relación entre los actores y en el intercambio institucional. Esta asimetría se expresa en campos muy variados, y puede generar algunos de los siguientes problemas o contradicciones.

En la medida en que las ONGs dependen de los fondos públicos para su subsistencia, pueden estar expuestas a una situación de debilidad frente al Estado, que tiene mayor capacidad para imponer sus criterios, y reducir las negociaciones a cuestiones sólo operativas.

Este punto constituye una gran contradicción para el universo de las ONGs, porque puede poner en cuestión su rol innovador y su capacidad de introducir elementos realmente nuevos y alternativos a la prestación de servicios estatales. Sobre esta cuestión, Serrano establece lo siguiente:

Si observamos que los márgenes de actuación de las ONGs para incidir en el diseño de los programas y su aplicación son cada día más limitados, deberíamos preguntarnos cuál es entonces el valor añadido que aporta la ejecución de proyectos por parte de las ONGs. Dicho de otra forma, ¿cuál es el papel que pueden jugar las ONGs como ejecutoras de proyectos? ¿Son las entidades responsables de la ejecución de las políticas de compensación del ajuste? ¿Son entidades capaces de fortalecer las organizaciones populares y empoderarlas? ¿Cuál es el valor añadido, o la diferencia respecto al de una empresa o una consultora, más allá de su menor coste? (Serrano, 2002: 76).

Relacionado con lo anterior, algunos autores entienden que a causa de la dependencia, pero también a causa de la incapacidad de las organizaciones y las contradicciones que marcan al tercer sector, la cooperación Estado-

sociedad civil está lejos de ser crítica, y se restringe a elementos de poca importancia en el ámbito de los “proyectos” concretos, transformándose en una “cooperación operativa” (Serrano, 2002: 92; Covey, 1998).

El tercer problema que la dependencia económica genera es la fuerte competencia por los recursos que son limitados, algo que genera mucho malestar entre las ONGs (Rossel, 2003). La proliferación de organizaciones que persiguen la financiación estatal genera un escenario de competencia para la supervivencia, donde la cooperación y el acuerdo entre iguales es cada vez menos frecuente (Jerez y Revilla, 1997: 39). Las preguntas que vale la pena realizarse son: ¿Se pierden los valores del tercer sector por el avance de la lógica de competencia por recursos? ¿Se diluyen los valores de solidaridad?

Finalmente, y relacionado con la pérdida de autonomía, surge el peligro de la pérdida de identidad. Según algunos autores, por depender de los fondos estatales y desarrollar cada vez con más claridad un *enlace de supervivencia* con este, las ONGs enfrentan aún más dificultades para basar su identidad en la resistencia y el cuestionamiento, agregando a la contradicción referida en párrafos anteriores la noción de que existen pocos caminos para dar solución a este problema (Bebbington, 1997).

PROFESIONALES VS. VOLUNTARIOS

Uno de los principales cambios que las ONGs experimentan al incorporarse al trabajo en las políticas públicas es la progresiva profesionalización. En el pasado, trabajando con fondos de la cooperación internacional, las necesidades de profesionalizarse eran menores. Una vez que deciden comenzar a trabajar con financiamiento estatal esto se vuelve casi imprescindible porque se enfrentan a un escenario de competencia fuerte, que además asigna los recursos en base a la adjudicación de proyectos, que deben ser elaborados con normas técnicas cada vez más estrictas; y el trabajo cotidiano de coordinación con el Estado exige, cada vez más, el manejo de sistemas de información y técnicas hasta ahora poco conocidas por las ONGs.

Esta progresiva necesidad de profesionalización también encierra contradicciones, dado que las organizaciones deben priorizar determinados roles frente a otros. Los criterios de eficiencia –que por la propia condición del tercer sector tenían poca relevancia en el pasado– pasan a ser clave para la supervivencia de las organizaciones, generando problemas o peligros de diversa índole (Aguilar et al., 2001).

El primer problema o peligro que surge es que los criterios de eficiencia pueden estar enfrentados con las ideas que sustentan el voluntariado, porque este nuevo criterio puede bloquear la prestación de servicios a públicos “difíciles de alcanzar”, apartados, excluidos, etc., al ser la atención a estos más costosa y poco rentable.

El segundo problema/peligro que aparece es que la obligación de adquirir conocimientos para profesionalizarse, y el tiempo que deben dedicar a estos aprendizajes, pueden complicar el trabajo del personal, tanto voluntario como no voluntario. En este marco, el componente burocrático que siempre encierra el intercambio de un contrato con el Estado puede ser fundamental en la disminución de motivación de los actores de la sociedad civil. Además, algunos estudios muestran que el progreso de los convenios entre Estado y sociedad civil debilita la característica “actitud altruista” que el personal de las ONGs tenía, y que tradicionalmente aportaba un componente diferenciador a la prestación de servicios sociales (Vernis, 2000).

LO PÚBLICO NO ESTATAL Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN URUGUAY: ALGUNAS CLAVES PARA EL ANÁLISIS

En el marco de las iniciativas de fortalecimiento de la *governance*, Uruguay ha sido testigo de un aumento significativo del sector “público no estatal”, es decir, el sector de la sociedad civil que se involucra en la producción de servicios públicos. En el caso uruguayo, la participación de este sector en el desarrollo e implementación de políticas ha estado fuertemente concentrado en áreas sociales muy específicas, como la protección a la infancia, la educación o la juventud. En este marco, uno de los organismos estatales pioneros ha sido el Instituto Nacional del Menor (INAME, actualmente INAU), que progresivamente ha ido pasando recursos a ONGs y organizaciones filantrópicas para la prestación de algunos de sus servicios esenciales, como la atención a niños en situación de calle o el apoyo educativo a niños de bajos recursos.

Un estudio reciente que recoge los resultados de una investigación realizada por el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) –estudio sobre voluntariado en Uruguay– muestra que casi la mitad de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan actualmente en temas relacionados con la infancia realizan tareas de guardería y cuidado integral de niños, mientras que aproximadamente un quinto presta servicios de alimentación y una proporción similar da servicios educativos. Además, datos del mismo estudio revelan que buena parte de las organizaciones que hoy realizan convenios con el INAME en el desarrollo de las políticas fueron fundadas, como se señaló al inicio de este documento, en los años de la transición a la democracia, es decir, entre 1986 y 1998 (Midaglia, 2000: 53).

Las escasas evaluaciones que se han realizado sobre la relación Estado-sociedad civil en el desarrollo de políticas públicas revelan que las experiencias de *governance* en el Uruguay están en un claro proceso de consolidación, y enfrentando dificultades casi de forma cotidiana (Rossel, 2003; Lournaga, 1998; Midaglia, 2000).

Uno de estos estudios intenta precisar en qué medida existe una brecha entre las visiones teóricas y las experiencias concretas en dos campos específicos de políticas: inserción laboral de jóvenes y atención a la infancia carenciada. Además de identificar como problemas aspectos como la *insuficiencia de recursos* o el *amateurismo* en las ONGs (Vernis, 2000), los resultados de un conjunto de entrevistas a representantes de ONGs muestran que también es muy frecuente, en especial en las organizaciones más pequeñas, la sensación de estar dependiendo del Estado, no sólo en términos económicos, sino también a la hora de formular propuestas innovadoras (Rossel, 2003).

Por otro lado, el trabajo destaca los principales problemas que las ONGs que llevan adelante convenios con el Estado (INAME, en este caso) en las dos políticas mencionadas identifican en la relación institucional (Rossel, 2003)³. Lo interesante es que, aunque de forma preliminar, buena parte de las contradicciones y problemas referidos en párrafos anteriores surgen con relativa claridad entre los entrevistados. El estudio no profundiza en los problemas surgidos a partir de la colaboración de las organizaciones del tercer sector con el Estado. Sin embargo, los entrevistados sí reconocen que los problemas en la relación con el mismo están marcados por la dependencia económica, la contradicción generada a partir de las necesidades de profesionalización, y las dificultades para mantener roles contestatarios al ser financiados con fondos públicos (Rossel, 2003).

En la sección que sigue se intenta profundizar en estos aspectos, rescatando el análisis de las estrategias que estas organizaciones eligen para resolver estas contradicciones y el peso que otorgan a los roles que tradicionalmente han desempeñado a partir de su incorporación en el sistema de políticas públicas de infancia.

EL ANÁLISIS EMPÍRICO

El análisis empírico se basó en la información recogida a partir de un conjunto de entrevistas a representantes de organizaciones que actualmente están trabajando en convenio con el INAME en las políticas de atención a niños en situación de calle y club de niños⁴. La información

3 El estudio analiza las ventajas y desventajas de la modalidad de colaboración Estado-sociedad civil en la implementación de políticas, así como la percepción de los involucrados sobre cómo es la relación con la contraparte en tres políticas concretas: la política de atención a niños en situación de calle (a cargo del INAME), la política de centros juveniles (también a cargo de INAME), y la política de inserción laboral de jóvenes de bajos recursos (a cargo de PROJOVEN, un programa con financiamiento proveniente del BID, que depende de la Junta Nacional de Empleo y la Dirección Nacional de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

4 La política de atención a niños en situación de calle es implementada por INAME desde hace ya varios años, aunque es más reciente la ejecución a través de convenios. El objetivo

recogida en los tres casos intenta comparar situaciones, problemas, percepciones y estrategias diferenciadas de distintas organizaciones, una vez que comienzan a trabajar en la modalidad de convenio con el Estado.

La selección de las tres organizaciones elegidas contempló la posibilidad de representar diferentes orígenes y estructuras. Por esto, se seleccionaron una organización de base barrial, una organización académica/de promoción y una organización religiosa⁵.

La información aquí presentada pretende ser un avance hacia categorías de análisis que puedan ser útiles para entender los procesos de cambio que las ONGs están viviendo a partir de estos nuevos escenarios. En este sentido, el objetivo de este estudio es básicamente exploratorio y, por lo tanto, sus resultados no deben ser extendidos al universo de las ONGs en su conjunto, ni siquiera de aquellas que establecen convenios con INAME en las dos políticas mencionadas.

Además de las opiniones de los representantes de estas tres ONGs sobre lo que ocurre en sus organizaciones, las entrevistas recogieron sus percepciones sobre lo que sucede en el conjunto de las ONGs que realizan convenios con el Estado. Estas opiniones, aunque parciales y sesgadas dado que son ONGs grandes, pueden servir como una primera orientación que habilite a investigaciones posteriores a profundizar en lo que está ocurriendo en el universo de la sociedad civil.

Complementando esto, se recogieron opiniones de personas que trabajan en el INAME y que están en continua relación con las instituciones entrevistadas, como forma de “triangular” algunos de los planteos realizados por los representantes de las ONGs.

genérico de la política consiste en la atención a “niños, niñas y adolescentes que desarrollan actividades, en la vía pública, buscando satisfacer necesidades básicas, afectivas y relacionales, más o menos alejados de los ámbitos de cuidado y protección –familia, instituciones educativas, u otras redes de sostén–, exponiéndolos a diversas situaciones de riesgo y pérdida del goce de sus derechos, constituyéndose en una población con alta vulnerabilidad” (INAME: 2002). Por otro lado, la política de clubes de niños atiende a chicos de entre 5 y 12 años y hasta 14 si no han completado el ciclo escolar. Son “centros de atención integral de tiempo parcial que contribuyen al proceso socio educativo, constituyéndose en un espacio de apoyo escolar, de recreación y socialización de niños y niñas, desde una acción complementaria a la escuela y la familia, procurando se modifique alguno de los factores condicionantes de la situación que llevaron a la población objetivo, a vincularse con el servicio” (INAME, 2002).

5 Para obtener opiniones que pudieran realizarse en un nivel de abstracción adecuado a los objetivos de la investigación, se resolvió trabajar con organizaciones relativamente grandes y que, en lo posible, ya tuvieran algún nivel de reflexión sobre los temas de la investigación. Además, se trabajó con ONGs con base en Montevideo, por las diferencias que la ubicación geográfica implica en términos de interlocución política. Por estas razones, las organizaciones elegidas, aunque son casos muy relevantes para el análisis exploratorio, no pueden ser tomadas como representativas del universo de las ONGs que realizan convenios con el Estado.

LOS CAMBIOS Y LA CONFIGURACIÓN DE LOS ROLES Y PROBLEMAS CLÁSICOS EN LAS ONGS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA

Uno de los primeros aspectos que el estudio se propuso abordar es la percepción de los actores sobre los cambios que el trabajo en convenio con el Estado ha generado en sus organizaciones. En los tres casos estudiados, los entrevistados coincidieron en que el trabajo en políticas públicas los llevó a formalizar distintos elementos de su funcionamiento cotidiano.

En primer lugar, los entrevistados hicieron referencia a los cambios que el trabajo con el Estado generó en sus estructuras de recursos humanos, con una tendencia clara a la contratación de técnicos y de personal rentado que pueda garantizar la estabilidad de los servicios. En este sentido, en uno de los casos se destacó la importancia de los cambios organizativos que estas transformaciones en el perfil del personal han tenido.

La existencia de recursos económicos permite la incorporación de técnicos no educadores. O sea, asistentes sociales había algunos, pero más simbólicos... después empiezan a tener un rol más protagónico, a ser muchos de los coordinadores asistentes sociales... se formaliza la integración del psicólogo (Entrevista al representante de una ONG religiosa).

Como se verá más adelante, esta incorporación progresiva de técnicos está en la base de la contradicción que internamente se genera en las organizaciones, entre mantener un perfil voluntario o transformarse en profesionales de la prestación de servicios.

En segundo lugar, remarcaron las transformaciones de la lógica tradicional de formulación de proyectos, incorporando con más frecuencia criterios técnicos, así como conocimiento específico en las áreas de diseño de metodologías de intervención e indicadores de evaluación.

En tercer lugar, destacaron los cambios que el trabajo en convenios generó en términos de control de recursos, contabilidad y rendición de cuentas. En los tres casos, los entrevistados coincidieron en que este elemento ha sido fundamental para poder tener proyectos “saneados económicamente”, aunque implica una lógica de mantenimiento y sistematización de información que requiere dedicación de tiempo generalmente escaso.

Esta dimensión ha sido rescatada en varios estudios previos y, como se verá más adelante, es una de las bases del dilema que muchas organizaciones sociales tienen al reconocer que el trabajo en convenio con el Estado implica, además de la incorporación de criterios formales de contabilidad y administración, estar controlados siempre por un actor externo.

A su vez, buena parte de estos cambios se ven plasmados en las visiones de los actores sobre otro de los aspectos que el proyecto se planteó como esencial: el grado en que identifican los cinco roles planteados por Salamon et al. (2000): servicio, innovación, *advocacy* o compromiso, lide-

razgo para el desarrollo, y construcción de comunidad y democratización. La información sugiere que las tres instituciones entrevistadas reconocen, en su funcionamiento cotidiano, el desarrollo de los cinco roles básicos atribuidos a las ONGs. Asimismo, las tres concuerdan en que el trabajo en las políticas públicas a través de convenios ha sido importante para el desarrollo del rol de prestación de servicios. Aunque en las tres organizaciones este rol siempre tuvo un lugar clave, el trabajo con el Estado parece haber dado más oportunidades de continuidad, fortaleciendo esta dimensión. De igual manera, existe acuerdo en que el rol de innovación está presente en su trabajo cotidiano, pese a que, como se analizará en el siguiente punto, es una dimensión que no siempre es evidente y que, en muchos casos, se limita a la introducción de cambios en aspectos muy concretos de los proyectos.

Por otro lado, todas las instituciones coinciden en que el rol de compromiso no necesariamente se ha visto afectado a partir del trabajo con el Estado, aunque cada vez es más evidente la contradicción presente en el hecho que, al tener que garantizar un servicio público, es inevitable contar con recursos rentados, recursos que finalmente comienzan a desplazar a buena parte del personal voluntario hacia trabajos de menor importancia. Este punto constituye el eje de una de las contradicciones (profesionales vs. voluntarios) referidas en párrafos anteriores, y será analizado con mayor profundidad más adelante.

En lo que refiere al rol de construcción de comunidad, las tres organizaciones señalan que esa ha sido siempre una dimensión central en su trabajo, y que el trabajo con el Estado no ha generado cambios en ese aspecto.

Finalmente, dos de ellas coinciden en que el rol de liderazgo se ha fortalecido tras comenzar a trabajar con el Estado. Sus visiones y estrategias en este campo han sido relativamente similares. Por un lado, el representante de la ONG académica/de promoción señalaba que el involucramiento de su organización en políticas públicas los ha obligado a plantearse nuevas metas en términos de posicionamiento en el sistema político, por lo que han tenido que resolver, entre otras cosas, la forma en que se iban a relacionar con los partidos, el Estado, las organizaciones sindicales, etc. Por otra parte, el representante de la ONG religiosa señala que este rol se ha visto particularmente reforzado, aunque más como una reacción que como un proyecto previamente gestado.

En términos más abstractos, las visiones de estas tres organizaciones también tienden a coincidir en su diagnóstico con la forma en que los roles se configuran en el universo de la sociedad civil que lleva adelante convenios con el Estado. En general, opinan que el rol de prestación de servicio está presente, aunque, como se analizará más adelante, consideran que el de innovación es casi inexistente. Asimismo, reconocen que el

compromiso y la función de construcción de comunidad se mantienen, pero no ven un fortalecimiento del rol de liderazgo para el desarrollo.

En resumen, las opiniones recogidas entienden que, de alguna manera, la dimensión más cuestionadora y de transformación del trabajo de las organizaciones sociales se ha visto debilitada o no ha logrado desarrollarse de la manera en que debería. Uno de los entrevistados expresaba esta idea de la siguiente forma:

Hay muchas instituciones que se han transformado totalmente, absolutamente en ejecutoras, porque además la capacidad cuestionadora de las ONGs es discutible. Yo te pregunto ¿en qué se cristaliza la capacidad cuestionadora de las ONGs en el Uruguay de 2000 para acá? ¿En qué hechos políticos...? Ninguno. La discusión de que las ONGs cuestionan es discutible. En la peor crisis social y económica de la historia del país, y bueno..., no han sido actores relevantes, al menos no colectivamente (Entrevista a representante de ONG académica/de promoción).

Entre los factores que explican este debilitamiento o dificultad para desarrollar el rol cuestionador, de liderazgo y capacidad transformadora, los entrevistados señalaron los siguientes. Por un lado, la falta de un discurso articulado a nivel político (especialmente en la izquierda) sobre el rol de la sociedad civil, y su relevancia como “socia” en el desarrollo e implementación de políticas públicas. Por otra parte, uno de los entrevistados mencionó como factor explicativo la enorme distancia que existe entre la época de la transición democrática y la actualidad, no sólo en términos de movilización social y en lo que refiere a la posibilidad de colocar demandas en la agenda. En este sentido, destaca que las condiciones para mantenerse como, o convertirse en, actores de relevancia, y con capacidad transformadora han cambiado, y la actualidad presenta escenarios menos propicios para esto.

Hay mucha fábula con respecto a que las ONGs en sí mismas representan un núcleo portador de cambio, y eso no es verdad... En el origen, eran como un alero de resistencia contra la dictadura, pero después cambiaron las reglas... en democracia funcionan de manera distinta (Entrevista a representante de ONG académica/de promoción).

Pese a esto, es importante señalar que las opiniones de los tres entrevistados coinciden en que, en primer lugar, aunque hayan tenido capacidad cuestionadora en el pasado, muchas se han burocratizado y rutinizado, perdiendo terreno en este campo; en segundo lugar, muchas organizaciones, aun habiendo surgido en la coyuntura de la transición a la democracia, tuvieron siempre como objetivo central la prestación

de un servicio o la solución a un problema concreto, no habiéndose planteado en ningún momento la necesidad de incidir a un nivel más macro, o no habiéndose percibido a sí mismos como portadoras de cambio, transformación o cuestionamientos al sistema.

Hay muchas instituciones que han perdido capacidad de cuestionar... pero no hay que engañarse... hay muchas instituciones que nunca tuvieron capacidad de cuestionar... y no han tenido siempre los cinco roles (Entrevista a representante a ONG académica/de promoción).

Esta idea recoge la necesidad de pensar, cuando se analiza el caso uruguayo, en una sociedad civil muy heterogénea y desigual, en la que buena parte de las organizaciones (al menos desde el punto de vista de los entrevistados) no tienen hoy (pero tampoco han tenido en el pasado) capacidad cuestionadora y de reflexión.

Finalmente, de las entrevistas surge que otro factor explicativo de la pérdida de perfil cuestionador es el bajo peso relativo de las redes de organizaciones. En general, como se verá más adelante, las redes de ONGs existentes tienen, desde el punto de vista de los entrevistados, poca capacidad de generar un discurso común y, por lo tanto, poca representatividad e incidencia en el sistema político en general.

El siguiente cuadro resume las principales tendencias recogidas en las entrevistas en profundidad sobre la configuración de los roles y los factores que las explican.

Cuadro 1
Roles atribuidos a las ONGs en su trabajo cotidiano y tendencias de configuración a partir del trabajo con el Estado

ROLES	ONG de base barrial	ONG académica/ de promoción	ONG religiosa	El universo de las ONGs que trabajan con el Estado
Servicio	Sí Se fortaleció dado que se cuenta con más recursos para llevarlos a cabo	Sí Se mantiene, aunque con más oportunidades	Sí Se fortaleció a partir de los convenios con el INAME	Sí Se fortalece porque se cuenta con recursos para llevarlos a cabo
Innovación	Sí	Sí Se ha fortalecido, en la medida en que han podido aportar elementos innovadores en los proyectos y políticas	Sí Aunque la innovación no se da en proyectos/convenios que ya están en marcha	No · Muchas organizaciones se rutinizan y pierden capacidad de reflexión · La mayoría de las organizaciones nunca tuvo capacidad real de innovar
Advocacy o compromiso	Sí Se mantiene	Sí Se mantiene	Sí Aunque es difícil de mantener	Sí Se mantiene en la mayoría de los casos

Cuadro 1 [continuación]

ROLES	ONG de base barrial	ONG académica/ de promoción	ONG religiosa	El universo de las ONGs que trabajan con el Estado
Liderazgo para el desarrollo	Sí No cree que se haya fortalecido a partir del trabajo con el Estado	Sí Se ha perfeccionado. Han logrado un reposicionamiento político y han apostado a tener un lugar en el sistema político	Sí Siempre ha formado parte de los objetivos de la organización. Se fortaleció una vez que se comenzó a trabajar con el Estado	No · La mayoría de las organizaciones tiene visibilidad o posicionamiento político, o son actores relevantes · La mayoría perdió la capacidad cuestionadora que tenía en la transición democrática
Construcción de comunidad	Sí Se mantiene e incluso se fortaleció a partir del trabajo en redes territoriales	Sí Se mantiene igual. Siempre han puesto énfasis en este rol	Sí Siempre ha formado parte de los objetivos de la organización	Sí Se mantiene. De hecho, muchas organizaciones, aunque no tienen capacidad cuestionadora, han sido sostenes importantes a través de los servicios que prestan durante la crisis

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas.

La información recogida permite vislumbrar que, en principio, el cambio de escenario que implica el trabajo en convenios con el Estado, tiene también un correlato en el funcionamiento y estructura interna de las organizaciones, así como en la configuración de los diferentes roles que generalmente se les atribuyen.

Por un lado, las transformaciones que viven las ONGs –al menos en estos tres casos y en sus visiones sobre lo que ocurre sobre el conjunto de las organizaciones que establecen convenios con el Estado– parecen tener un patrón común: requerimientos de formalización de criterios de funcionamiento y formulación de proyectos, creciente burocratización, incorporación progresiva de técnicos, etcétera.

Por otro lado, parece claro que la incorporación a la lógica de trabajo en políticas públicas plantea desafíos para mantener los cinco roles definidos por Salamon et al. (2000). En principio, el desafío principal está relacionado con la pérdida de capacidad para mantener –en caso de que estuvieran presentes antes de comenzar a trabajar con el Estado– los roles de innovación y liderazgo para el desarrollo, es decir, aquellos que están más asociados a la línea cuestionadora y transformadora más propia de los movimientos sociales. Este cambio genera cuestionamientos y dudas a las organizaciones sobre sus posibilidades para mantener aquellos signos clásicos de su origen o, en otras palabras, puede implicar una crisis de identidad.

En cualquier caso, la información sugiere con claridad que el proceso de incorporación al trabajo con el Estado es también un proceso de aprendizaje, al que todas las organizaciones están expuestas, y que es procesado por cada una de manera diferente. Esta diferenciación en las estrategias será analizada más adelante.

LA IDENTIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN Y SU PESO EN LA ACTIVIDAD DE LAS ONGS

Como ya se señaló, uno de los efectos esperados de la lógica de trabajo con el Estado sobre el universo de las ONGs es la pérdida de capacidad cuestionadora e innovadora que tradicionalmente caracterizó a este conjunto de instituciones. La evidencia hasta aquí presentada indica que las tres organizaciones elegidas para este estudio identifican el rol de innovación en su funcionamiento cotidiano y, en contrapartida, consideran que este rol no está presente en la mayoría de las instituciones que actualmente realizan convenios con el INAME. Frente a esta asimetría en las visiones, se les preguntó a estas tres organizaciones sobre los aspectos concretos en los que creían innovar: las respuestas fueron claras, identificando proyectos, metodologías e instancias en las que consideran haber aportado elementos innovadores y haber logrado introducir transformaciones sustantivas al trabajo que se realiza con financiación estatal. Uno de los entrevistados habla sobre esta cuestión de la siguiente manera.

Las innovaciones, si son hechas por fuera de los recursos del Estado, y al Estado le gustan, las financia... pero normalmente la innovación no surge de un servicio que está siendo prestado con recursos del Estado... Son reflexiones previas que el Estado llega a financiar... porque desde que se armaron los perfiles, te tenés que ajustar a los perfiles y no te podés salir (Entrevista al representante de una ONG religiosa).

La visión desde el Estado pareciera ser más optimista en relación a las posibilidades de las organizaciones de introducir elementos innovadores en la intervención, tanto en la formulación previa de los proyectos, como una vez que estos ya están funcionando a través de los convenios.

El hecho que estas políticas o algunas actividades de atención a la infancia estén a cargo de otras instituciones, no gubernamentales, que no son el Estado, da la posibilidad de propuestas creativas, flexibles, diversificadas. Yo veo que muchas veces lo que se ofrece desde el organismo estatal es tan universal y tan homogéneo, que pierde riqueza y cercanía al beneficiario. Y la ONG, chica, con otra tradición, puede articular a otros

actores, cosa que el Estado parece no poder hacer (Entrevista al representante de INAME N° 2).

En cualquier caso, a partir de las entrevistas a todos los actores, las innovaciones identificadas pueden clasificarse en cuatro tipos.

En primer lugar, innovación en el diseño de proyectos que luego el Estado decide financiar (en este caso, los entrevistados mencionaron ejemplos de políticas de alfabetización de adultos, y tratamientos para la reducción de riesgos y daños en drogadictos).

Segundo, innovación a través de sugerencias para introducir modificaciones a los perfiles de atención, a partir de la experiencia acumulada y los aprendizajes en el campo (aquí se mencionaron nuevos componentes diferenciales y novedosos de los perfiles de atención a niños en situación de calle, y de clubes de niños de INAME).

Hubo que aprender un *know how* burocrático. Y el segundo proyecto surgió en base a la evaluación del primer proyecto, y fue una idea conjunta con la división laboral de INAME. Nosotros fuimos, a medida que trabajábamos, planteando los techos con los que nos íbamos topando (Entrevista al representante de una ONG de base barrial).

En tercer lugar, innovación en los proyectos en marcha, específicamente introduciendo cambios en las metodologías de intervención (en particular, los entrevistados señalaron que las escasas innovaciones que se dan en este campo están asociadas a la cercanía de las organizaciones a los beneficiarios, por su tamaño y su inserción barrial, así como a la mayor flexibilidad).

Finalmente, innovación en términos del relacionamiento con el Estado, a través de la creación de mesas de diálogo, fortalecimiento de las redes de ONGs y participación de las mismas en instancias de toma de decisiones y definición de políticas (entre los ejemplos que se destacan están la consolidación de las redes territoriales, los espacios de diálogo y mesas de coordinación de INAME con los coordinadores de los programas en convenio, etcétera).

Preguntados sobre estas dimensiones en concreto, los entrevistados señalaron que en el conjunto de las ONGs que llevan adelante convenios con INAME, cuando está presente, la innovación se reduce a la formulación de proyectos novedosos que el organismo decide financiar y, en algunos casos, a sugerencias para la modificación de los perfiles basadas en los aprendizajes y el trabajo cotidiano. En contrapartida, señalan que la mayoría de las instituciones no innovan una vez que los proyectos ya están en marcha, así como no aportan elementos novedosos al relacionamiento con el Estado. El siguiente cuadro resume la

situación en la que se encuentran, según las opiniones de los entrevistados, las tres organizaciones elegidas como caso, así como el conjunto de las organizaciones que establecen convenios con el INAME.

Cuadro 2
Aspectos en los que las ONGs reconocen e identifican innovaciones concretas

¿En qué/cómo innovan?	ONG de base barrial	ONG académica/ de promoción	ONG religiosa	El universo de las ONGs que trabajan con el Estado
Diseñan proyectos que luego el Estado decide financiar	Sí	Sí	Sí	En algunos casos
Sugieren al Estado cambios y logran introducir modificaciones a los perfiles de atención que el Estado maneja en sus políticas	Sí	Sí	Sí	No, casi nunca
Introducen cambios sustantivos en la prestación de servicios de un convenio en marcha	No	Sí	Sí	No
Impulsan y participan en mesas de diálogo y negociación para considerar innovaciones	Sí	Sí	Sí	No

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas.

Según los entrevistados, las razones que explicarían la gran dificultad por parte del conjunto de las organizaciones de la sociedad civil para mantener el rol de innovación una vez que comienzan a trabajar en convenio con el Estado son variadas.

Un primer grupo de argumentos tiene relación con las condiciones y capacidades de las propias organizaciones de la sociedad civil.

En primer lugar, pareciera razonable pensar que, como se señaló anteriormente, no todos los roles teóricamente atribuidos a las ONGs han estado presentes en las organizaciones de la sociedad civil uruguaya. La ausencia de innovación puede estar asociada a una baja capacidad de reflexión y de tiempo dedicado a la sistematización de experiencias y aprendizajes. Uno de los entrevistados refleja esta idea de forma precisa.

En términos generales, la posibilidad de innovar prestando un servicio está en la metodología de intervención y en la pedagogía, lo que sucede es que esa área de reflexión, que muchas veces es marginal para las instituciones que financian, también es marginal para las instituciones de la sociedad civil, que no tienen una reflexión fuerte sobre los procesos pedagógicos..., son ejecutores... les cuesta mucho pensarse como agentes educativos (Entrevista al representante de una ONG académica/de promoción).

Por otro lado, y relacionado con lo anterior, surge claramente la visión de que buena parte de las organizaciones que hoy trabajan en conve-

nios con el INAME tiene poca capacidad técnica, lo que imposibilita la formulación de estrategias innovadoras de más largo plazo. Este punto puede ser ilustrado con la siguiente cita.

En general, la gente que participa en las ONG no toda tiene alta calificación profesional. Este te diría que es un tema fundamental, y una variable explicativa clave de la poca capacidad institucional que hay. Entonces bueno, ahí, puede ser que haya instituciones que no tengan el volumen o la capacidad para impactar en las políticas sociales... pero más allá de eso, podrían tener un margen para impactar en la intervención directa, pero eso es un tema de capacidad intelectual, institucional, vocación, querer hacerlo (Entrevista a representante de ONG académica/ de promoción).

El segundo grupo de razones está relacionado con la capacidad institucional del Estado para fortalecer y hacer efectivo el rol innovador de las ONGs. En esta línea, por un lado, se destaca la rigidez del Estado en el manejo de los proyectos y, en especial, en la formulación de las modalidades e indicadores de evaluación de la actividad de las ONGs. Así expresaba esta idea uno de los entrevistados.

El control o la supervisión necesita que cuanto más homogéneo mejor. Entonces al querer homogeneizar, todo lo que pueda ser innovación se les desperfila (al Estado). Entonces es bien visto aquel que cumple lo que se le indica, y no aquel que intenta cambiar y crear formas nuevas de intervención. Ahora, esto lleva a que se esté pensando más en la réplica del servicio, y no en si se está dando o no la mejor respuesta a la problemática social que se quiere atender (Entrevista al representante de una ONG religiosa).

La segunda razón que atañe directamente al Estado refiere a los pocos esfuerzos que este ha realizado, según los entrevistados, a fin de destinar recursos para fortalecer a la sociedad civil, a la que, cada vez con más frecuencia, le transfiere parte de sus recursos para llevar adelante servicios básicos.

Yo no creo que el Estado tenga la convicción de dar vida a la sociedad civil, sino que tiene que/quiere derivar costos, y a la vez quitarse responsabilidad en los programas sociales (Entrevista al representante de una ONG de base barrial).

La tercera razón está vinculada a la capacidad técnica y política del Estado, y a sus condiciones para ser una contraparte legitimada. Así lo expresa el representante de una ONG.

Por la situación del Estado, las políticas sociales del Uruguay tienen una debilidad política y están conducidas por gente sin experiencia. Muchas veces dentro del mismo Estado hemos llegado a ser interlocutores más fuertes y creíbles las ONG que los técnicos del propio Estado que financia las políticas (Entrevista al representante de una ONG religiosa).

Hasta aquí, el análisis de la información surgida de las entrevistas en profundidad muestra un panorama relativamente negativo sobre la capacidad real de la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil de desarrollar su rol innovador, introduciendo transformaciones relevantes en las formas de intervención social, así como en el relacionamiento con el Estado. Como se señaló, las causas de este proceso de debilitamiento (u obstaculización de la posibilidad de desarrollo de la innovación) están asociadas a fenómenos de distinta índole, tanto relacionados a las características de las organizaciones sociales como a las condiciones en que el Estado lleva adelante la transferencia de recursos. En cualquier caso, y aunque la información que aquí se presenta es sólo una aproximación exploratoria al tema, parece claro que la realidad difiere, en muchos casos, de las tendencias que se plantean en la teoría, y en buena parte de los abordajes analíticos en estos temas.

Además de estas explicaciones, pueden establecerse otro grupo de razones que explican la baja capacidad de incorporar innovación, y que están relacionadas con los procesos y transformaciones generados en las organizaciones a partir de su colaboración con el Estado bajo la modalidad de convenios. Como ya se ha rescatado en otros estudios, muchas ONGs atraviesan –una vez que comienzan a trabajar en convenio con el Estado– un proceso de creciente burocratización, cuyas características generales ya fueron presentadas. Este proceso parece tener dos efectos específicos sobre la posibilidad de innovación de las organizaciones. Por un lado, por lo engorroso de los procesos de contabilidad y control al que muchas veces las empuja el trabajo con el Estado, las ONGs pierden progresivamente interés en introducir transformaciones en los proyectos, en especial por el alto costo de negociación que esto implica con el Estado, pero, sobre todo, por los costos que implica en términos de cambiar modalidades ya adquiridas y probadas en su funcionamiento cotidiano. Por otro, la creciente burocratización exige del personal de las ONGs una dedicación cada vez más grande a los aspectos formales de los proyectos, la contabilidad y la adecuación de la información para que sea posible de control. Esta situación deja cada vez menos tiempo a los mismos para poder dedicarse a generar los espacios de reflexión necesarios para la gestación de innovaciones.

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS O CONTRADICCIONES SURGIDAS A PARTIR DE LA COLABORACIÓN CON EL ESTADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN

Uno de los aspectos centrales que se planteó en la investigación fue el chequeo empírico de algunas de las hipótesis que la literatura reciente propone sobre las contradicciones que se generan en las ONGs involucradas en la prestación de servicios públicos, una vez que comienzan a recibir transferencias estatales y a trabajar cotidianamente en políticas públicas. A continuación se analizan los resultados de las entrevistas desde la perspectiva de los tres dilemas que viven las ONGs, y que fueron planteados en el marco teórico de este trabajo: tensión entre ser productoras y controladoras, entre ser autónomas y depender del Estado, y entre ser organizaciones voluntarias o profesionales.

PRODUCTORAS VS. CONTROLADORAS

La primera contradicción que planteaba la teoría era la dificultad progresiva de las organizaciones para desempeñar simultáneamente el rol de productoras de un servicio y, a la vez, de operar como agentes controladores del Estado. En los tres casos elegidos para esta investigación, las respuestas fueron muy claras: la contradicción existe en cada una de ellas y se expresa, en general, en los ámbitos cotidianos de negociación con el Estado.

La vivencia de la contradicción es expresada por los entrevistados de la siguiente manera.

Hay una serie de ONGs que han aceptado el desafío, y otras han aceptado ser funcionales a ese esquema, algunas de forma cuestionadora y otras no. Hay muchas que han sido excesivamente realistas porque tienen que sobrevivir, y se prestan a cosas de INAME que son inaceptables, y hay ONGs (las más grandes) que van teniendo reflexión sobre el tema y le están haciendo el juego al Estado, tomando tareas que antes desempeñaba el Estado y que, a juicio nuestro, deberían seguir siendo responsabilidad del Estado (Entrevista al representante de una ONG de base barrial).

Hay una dificultad entre la lealtad política y el manejo del Estado... entonces, bueno, hay ciertas condiciones, de que vos no podés traspasar ciertos umbrales en la crítica pública porque tenés convenio... Ese tipo de cosas son permanentes... la derecha también lo hace, te presionan y te condicionan... eso es así (Entrevista al representante de una ONG académica/de promoción).

Desde estas perspectivas, la contradicción o dilema entre ser controladoras del Estado y a la vez “socias” en la producción de bienes públicos

tiene resoluciones que difieren según la ONG, y que están relacionadas directamente con la capacidad de cada organización de tomar posiciones firmes frente al Estado. Esta capacidad –como también, en cierta medida, la capacidad de innovar– parece estar fuertemente asociada con el tamaño y la aptitud de reflexión de cada organización, así como a las posibilidades de formar parte activa de las redes que negocian con el Estado.

¿Cuáles son las estrategias de estas organizaciones para poder mantener su identidad cuestionadora y contrapuesta al Estado, en una lógica en la que se consideran socias del Estado para la implementación de políticas?

Aunque las tres organizaciones estudiadas perciben la existencia de la contradicción, sólo una de ellas –la de base barrial– reconoce que esta contradicción la está llevando a perder capacidad cuestionadora y, sobre todo, a ocupar un rol cada vez más funcional a los intereses del Estado, abandonando a la vez los propios.

De nuestra parte, como te decía que hay varios grupos de ONGs, aunque no somos las más funcionales, estamos siendo atrapadas. La dinámica de trabajo te aprieta, y te lleva a que si no estás reflexionando sobre esto, te atrapa la rutina. No queremos reproducir una relación funcional y utilitaria con el Estado, pero la estamos reproduciendo. Ese es un desafío ético (Entrevista al representante de una ONG de base barrial).

En las otras dos ONGs, la estrategia para manejar la contradicción y no perder su condición cuestionadora ha sido la creación de espacios de reflexión sistemática para la elaboración de líneas de acción que permitan a la organización “no perder el rumbo”, y mantener el rol cuestionador, pese a estar formando parte de los sistemas de políticas públicas. A su vez, en el caso de la ONG académica/de promoción, ha habido una estrategia clara de mejorar el posicionamiento político y transformarse en un interlocutor válido para el sistema político. Para ello, se rescata como importante no sólo el trabajo que individualmente han llevado a cabo para lograr este fin, sino la apuesta al fortalecimiento de “mini-redes” de ONGs justificadas por el trabajo en un tema concreto, como la red Intercalle, que nuclea al grupo de organizaciones que trabaja con el Estado en el programa de atención a niños en situación de calle. Finalmente, la ONG religiosa reconoce que parte de su estrategia de supervivencia a este dilema ha sido la participación y fortalecimiento de la red de organizaciones católicas, AUDEC.

Por otro lado, la estrategia de la ONG de base barrial (que vive la contradicción de manera más amenazante) ha sido la participación

activa en el fortalecimiento de las redes locales de actores como forma de convertirse en interlocutores de peso frente al Estado.

Hay otra cosa que son las redes territoriales, que involucran organizaciones de todo tipo. Se están dando procesos a nivel territorial que buscan construir nuevos sectores que se relacionen con el Estado, para incidir en las políticas, para ejecutar políticas, etc. Y como la base es territorial, no son las ONGs más grandes las que tienen más capacidad de lobby, las que participan. Esta nueva modalidad nos da capacidad de incidir y de ser más respetadas (Entrevista al representante de una ONG de base barrial).

Esta estrategia de acción se contrapone con la idea de las otras dos ONGs de apostar al fortalecimiento de redes a nivel nacional (como AUDEC), o las “mini-redes” temáticas, que ha constituido una de las estrategias principales de los otros dos casos.

En términos generales, las estrategias utilizadas por los actores, aunque diferentes, buscan superar el peligro o la amenaza de perder progresivamente sus líneas originales de acción (los cinco roles básicos para la teoría) y, en definitiva, su identidad. Lo interesante es que, al menos en el caso uruguayo, no todas las identidades son igualmente permeables a estas contradicciones, porque no todas las organizaciones consideran que este peligro de pérdida de autonomía exista o las afecte directamente (Rossel, 2003). Por el contrario, muchas ONGs valoran positivamente este paso de roles más contestatarios a roles de prestación directa de servicios, sin considerar que por esto hayan perdido su condición de actores alternativos. En esta línea, ven muy legítimo que el Estado y la ciudadanía controlen sus movimientos, sin por esto asumir que hoy son menos independientes que otrora.

DEPENDENCIA VS. AUTONOMÍA

La dependencia económica fue reconocida por dos de las tres organizaciones elegidas como un problema clave, especialmente en lo que implica a la pérdida de autonomía. En principio, se confirma la idea de que en la medida en que cada vez más las ONGs dependen del Estado para sobrevivir, su capacidad de acción o margen de maniobra se ven limitados. Uno de los entrevistados planteaba el problema de la siguiente manera.

La financiación del Estado te condiciona... Hay muchas instituciones que han perdido autonomía. ONGs que tengan una masa crítica son relativamente pocas... Sí, hay muchas ONGs, pero hay de todo... Hay muchas, muchas asociaciones civiles que sólo prestan servicios... organizaciones barriales que figu-

ran como asociaciones civiles, pero que no son ONGs en el sentido en que somos nosotros... Hay un conjunto importantísimo de sectores, que probablemente sean la mayoría, donde no hay ningún tipo de capacidad de cuestionamiento, y para el Estado son instrumentos de ejecución (Entrevista al representante de una ONG académica/de promoción).

El sólo hecho de firmar un convenio, a ti te condiciona [...] te puede afectar mucho en tu autonomía... pero depende también de la capacidad de pararse de la institución. Porque con el tema de que te dan la financiación, a algunas las amenazan con quitarles los recursos. Por ejemplo, de retener partidas si las instituciones no hacen determinadas cosas. Nosotros nos hemos planteado este tema... hicimos toda una reflexión sobre esto (Entrevista al representante de una ONG religiosa).

Estas opiniones reflejan los efectos que la debilidad de la sociedad civil para actuar en forma conjunta como interlocutor válido del Estado puede tener sobre la posibilidad de autonomía de las organizaciones. En este sentido, la dependencia se expresa al menos en dos problemas concretos. Por un lado, la pérdida de autonomía que muchas ONGs viven, al estar supeditadas a los recursos de los organismos del Estado para subsistir. Esta pérdida de autonomía tiene efectos claros no sólo sobre la capacidad de innovación, sino sobre la capacidad cuestionadora de las organizaciones. Por otra parte, el uso que de esa pérdida de autonomía puede hacer el Estado para negociar con las organizaciones, reforzando aún más el fenómeno antes planteado.

¿Cómo hacen las ONGs para mantener su autonomía? Ante esta amenaza, las organizaciones desarrollan dos tipos de estrategias. Primeramente, trabajan constantemente por crear nuevas líneas de financiamiento y tener proyectos que no dependan de los recursos del Estado. Por último, de la misma forma que en el dilema anterior, buscan participar activamente en el fortalecimiento de los actores colectivos, tanto sea en redes nacionales, “mini-redes” temáticas o redes territoriales.

Dependiendo de los recursos, la autonomía y la identidad se pueden mantener... Y ahí es central el trabajo en redes, más que el tamaño de las instituciones... porque las redes son las que pueden definir líneas colectivas para la acción y defender la identidad (Entrevista al representante de una ONG religiosa).

Es importante resaltar que –como ya han mostrado otros estudios (Rossel, 2003)– aunque la dependencia económica de las ONGs respecto del Estado en Uruguay parece tener un efecto claro sobre la autonomía

de las mismas, también hay visiones alternativas sobre esta discusión. En particular, dos de los tres entrevistados destacaron que, en muchos casos, el financiamiento del Estado, aunque generando una situación de dependencia, ha fortalecido a muchas instituciones que previamente no eran autónomas –es decir, no contaban con otro tipo de recursos– o no tenían una fuerte identidad definida. Uno de ellos señala:

Hay muchos casos en que cuando el Estado empieza a financiar-te y sos una institución chica, la institución pasa a ser un medio de vida, que tiene una forma jurídica que es una asociación civil, pero si la legalidad dijera que hay que transformarla a una sociedad anónima no habría demasiado problema, no cambiaría demasiado el contenido de lo que la gente hace... Tampoco mucha gente dudaría en dar ese paso, de hecho muchos lo hicieron a los efectos de tener un marco jurídico distinto (Entrevista al representante de la ONG académica/de promoción).

PROFESIONALES VS. VOLUNTARIOS

El tercer dilema o contradicción planteado es la dificultad cada vez más clara que las ONGs tienen para resolver las tensiones entre seguir siendo organizaciones voluntarias y aumentar cada vez más el personal rentado para poder garantizar los servicios públicos que prestan. Este dilema fue asumido como propio en la ONG de origen religioso, mientras que las otras dos, aunque pasaron por el proceso de profesionalización, no consideran que este haya generado una contradicción o dilema significativo.

En el caso de la ONG religiosa, la contradicción fue planteada de la siguiente manera.

Hay un dificultad de articular, porque cuando tú no tenías convenio con el Estado generalmente era todo un componente voluntario. Ahí, quien disponía de más tiempo, tenía mejor liderazgo, era el que llevaba la cosa adelante... cuando entrás a rentar, el que lleva adelante la cosa ya no es ese voluntario... La cosa se empieza a complicar... Se generan distintos problemas, porque en muchos casos, por ejemplo, el servicio que antes prestabas no era todos los días, era dos o tres veces por semana, con los convenios es todos los días, entonces el voluntario puede participar menos, entonces el que está más es el que tiene más poder, más autoridad, más capacidad de tomar decisiones... Es un tema que hay que resolver. No se pierde el compromiso, pero se genera una dificultad para articular el personal voluntario y el personal no voluntario (Entrevista al representante de la ONG religiosa).

Es importante destacar que, usualmente, la mayoría de las personas que terminan siendo parte del personal rentado de las ONGs fueron antes voluntarios y son, en general, miembros históricos de las organizaciones. Esto hace que, aunque se generen transformaciones organizativas y en la distribución de tareas y responsabilidades, el perfil de la organización no varíe sustancialmente, lo que habilita a algunas a seguir definiéndose como voluntarias pese a que una parte importante del personal sea rentado. En este marco, la estrategia fundamental de esta organización ha sido mantener lo que llaman la “mística” del voluntario en el personal rentado.

Creo que no hay que contraponer... no son excluyentes. El profesional también puede ser voluntario. Yo creo que lo mejor es la intervención profesional con la mística del voluntario. Eso es lo que genera mejores resultados. ¿Que es la mística del voluntario? El entusiasmo, el sentido de compromiso, las ganas de hacer, el impulso que lo lleva a actuar, el poner en juego su propia vocación en la intervención, el no trabajar esperando una remuneración... el consustanciarse con la misión de la institución (Entrevista al representante de la ONG religiosa).

Esta visión debe ser complementada con el hecho –no mencionado por ninguno de los entrevistados– de que, una vez que las personas (hayan sido o no voluntarias antes en la organización) dependen del ingreso que reciben al ser rentadas, la ecuación y forma de funcionamiento cotidiano puede cambiar, tanto de forma individual como colectiva. Ese es un riesgo inevitable.

Cuadro 3
Dilemas/contradicciones que surgen en las ONGs a partir de su trabajo con el Estado
Espacios en los que se manifiestan y estrategias de resolución de cada una de ellas

	ONG de base barrial	ONG académica de promoción	ONG religiosa	El universo de las ONGs que trabajan con el Estado
Productoras vs. controladoras	Sí	Sí	Sí	Sí
¿En qué se manifiesta?	No sabe/No responde	En la negociación con el Estado	En la capacidad de innovar y negociar con el Estado	No sabe/No responde
¿Qué estrategias han utilizado para resolverlo?	Armar redes barriales, de implante barrial, de varios tipos de organizaciones	Reflexionar internamente, diversificar proyectos y tener un posicionamiento político más fuerte. Fortalecer “mini-redes” temáticas	Potenciar la red de AUDEC de alcance nacional y su capacidad para actuar como actores colectivos válidos frente al Estado	Se convierten en productoras, “ejecutoras” de los intereses del Estado

Cuadro 3 [continuación]

	ONG de base barrial	ONG académica de promoción	ONG religiosa	El universo de las ONGs que trabajan con el Estado
Dependencia vs. autonomía	Sí	Sí	No	Sí
¿En qué se manifiesta?	En la capacidad de negociar	No sabe/No responde	No sabe/No responde	En que muchas ONGs pierden progresivamente su identidad y capacidad de acción
¿Qué estrategias han utilizado para resolverlo?	No menciona estrategia de fuentes de financiamiento. Fortalecimiento de redes territoriales	Diversificación de fuentes de financiamiento para no depender del Estado. Fortalecimiento de "miniredes" temáticas	Generar proyectos productivos que permitan auto-financiar los mismos. Fortalecimiento de la red de AUDEC	Generar espacios internos de reflexión y participar en redes colectivas de ONGs
Profesionales vs. voluntarios	No	No	Sí	Sí
¿En qué se manifiesta?	No sabe/No responde	No sabe/No responde	No sabe/No responde	No sabe/No responde
¿Qué estrategias han utilizado para resolverlo?	No sabe/No responde	Se sigue definiendo como organización voluntaria	Mantener la "mística" del voluntario	No sabe/No responde

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas.

El resumen aquí presentado establece en qué medida los distintos actores entrevistados perciben en el funcionamiento cotidiano de sus organizaciones las contradicciones que buena parte de la literatura académica asume deberían estar atravesando desde que comenzaron a trabajar con el Estado. La información muestra que, salvo excepciones, los problemas que la teoría planteaba son reales y afectan –desde el punto de vista de los entrevistados– al conjunto de la sociedad civil que hoy realiza convenios con INAME

Aunque de forma muy preliminar y exploratoria, también pueden establecerse algunas diferencias en las estrategias utilizadas por cada una de las organizaciones para resolver estas contradicciones, en especial las dos primeras, que hacen al problema de la pérdida de autonomía y de capacidad cuestionadora.

Como se señaló, la ONG de base barrial busca fortalecerse a través de la participación en redes de alcance local. En contrapartida, la ONG académica/de promoción parece estar realizando muchos esfuerzos individuales de fortalecimiento y posicionamiento público, trabajando a la vez en el fortalecimiento de Intercalle. Finalmente, la ONG religiosa ha buscado defenderse de la amenaza de crisis de identidad apostando al fortalecimiento de la red de asociaciones católicas (AUDEC).

Como se destaca al inicio del documento, las redes de organizaciones podrían jugar, al menos en la teoría, un rol clave en la resolución

de las contradicciones o dilemas presentados en la sección anterior. La evidencia recogida en este y otros estudios sugiere, sin embargo, que el análisis de las posibilidades reales de que desempeñen ese rol crucial está condicionado por los siguientes aspectos.

Por un lado, a pesar de –¿o como expresión de?– la debilidad que normalmente se atribuye a la sociedad civil uruguaya, las organizaciones sociales que trabajan actualmente con INAME participan en distintos tipos de redes: Intercalle, Asociación Nacional de ONGs (ANONG), Asociación Uruguaya de Educación Católica (AUDEC), redes territoriales, etc. En este marco, las acumulaciones, recursos y resortes de poder de cada una de estas redes son diferentes y, aunque no es el objetivo de este estudio analizarlo, estas cuestiones afectan de forma clave la manera en que pueden ser actores colectivos válidos y “útiles” para enfrentar las amenazas que plantean los nuevos escenarios de trabajo en convenio.

Por otra parte, la mayoría de estas redes –que son las que tienen mayor visibilidad pública– son de arraigo montevideano, de manera que dejan afuera –formalmente o en la práctica– a buena parte de las organizaciones que trabajan con INAME en convenios en el resto del país.

El alcance de las redes: hay una mitad representada y una mitad no representada... y los no representados son los más débiles, en términos de equipo, de recursos, de calidad de las propuestas... son los más serviles... son en general, asociaciones civiles, chicas, del interior, con un servicio... (Entrevista al representante de una ONG religiosa).

En este marco, ¿qué rol cumplen las redes en la resolución de estos dilemas?

Con respecto a la ANONG, las opiniones son muy contundentes: el peso que parece tener en la resolución de estos dilemas es mínimo. La razón fundamental que los entrevistados señalan para explicar esta situación es la heterogeneidad de las organizaciones que la componen, los problemas internos que esto genera, y las dificultades que la red tiene para representar a todos sus socios.

La ANONG tiene una variedad tan amplia de instituciones que no puede manejar nada. La ANONG no puede llevar adelante acciones conjuntas importantes, no puede representar a sus socios porque hay intereses muy contradictorios dentro de la propia institución. No tiene un discurso de acumular, de definir, de representar... No ofrece nada a los socios, sirve para información, más que nada, y eso es el caso uruguayo, porque en otros países, como Brasil, las redes son muy fuertes (Entrevista al representante de la ONG académica/de promoción).

[La ANONG] es débil porque reúne a las organizaciones por su matriz de origen y no por sus intereses. Además, en el universo de la sociedad civil aún no está resuelto el tema de la competencia. En las cámaras empresariales, compiten y conviven... En el universo de la sociedad civil todavía no se enfrenta la competencia despiadada que hay entre las ONGs por los recursos. En definitiva, la ANONG no procesa debates (Entrevista al representante de la ONG académica/de promoción).

Con respecto a Intercalle, en general, los entrevistados opinan que los logros han sido mayores, entre otras cosas porque es una red que nuclea a los actores en base a un interés particular.

A veces nos reunimos como Intercalle y otras veces de forma separada. Yo me siento con la suficiente confianza como para decir: “no, esto no es así”, e Intercalle funciona muy bien como núcleo. Así se han revertido algunas situaciones importantes (Entrevista al representante de la ONG de base barrial).

Además, también la visión de los actores involucrados en la política de atención a niños en situación de calle en el INAME es positiva respecto de este punto.

Desde 1997 hasta hoy, empezamos a trabajar en mesas de trabajo. Por ejemplo, con representantes de los proyectos calle, de los centros para discapacitados. Mesas en las que nos reunimos regularmente, con una agenda común, con temas que hacen a la relación. Eso ha permitido articular acciones y entendernos mutuamente (Entrevista al representante de INAME N° 1).

Finalmente, la otra red institucionalizada relevante para el análisis es la red de organizaciones impulsada a través de AUDEC.

Yo creo que las redes han ayudado a que se pueda llegar a esta concepción. Yo puedo hablar más de AUDEC, y ha servido. Se han logrado cosas, que a veces pueden parecer muy concretas, pero que para el trabajo cotidiano son importantes (Entrevista al representante de la ONG religiosa).

En términos generales, la información recogida permite concluir que el peso de las redes en la resolución de los dilemas a los que se enfrentan las ONGs es diferente de acuerdo a la red. En el caso de la ANONG, el peso parece muy escaso. En contrapartida, el peso de Intercalle es mayor, aunque nuclea solo a un pequeño grupo de ONGs que trabajan en los programas de calle de INAME. El peso de AUDEC, finalmente, parece ubicarse en medio de ambas, con algunos avances importantes,

pero aún con dificultades para ser un actor relevante en la búsqueda de respuesta a las contradicciones planteadas.

CONCLUSIONES

La información recogida en los tres estudios de caso confirma, una vez más, que la colaboración del Estado con la sociedad civil en el desarrollo e implementación de políticas públicas está lejos de ser simple y funcionar adecuadamente. En particular, son muchos los problemas y contradicciones a los que se enfrenta la sociedad civil uruguaya cuando comienza a trabajar en políticas públicas con financiamiento estatal, especialmente para mantener sus rasgos de origen, su identidad, sus objetivos principales y sus lógicas tradicionales de acción.

En el inicio, este documento planteaba como pregunta central: ¿en qué medida estas organizaciones, que surgieron como movimientos cuestionadores de la lógica tradicional de prestación de servicios sociales por parte del Estado, no reproducen –al establecer convenios con este– estrategias típicas de acción en materia de protección social, que al mismo tiempo terminan burocratizando a las propias organizaciones? La información aquí presentada no puede responder de forma concluyente a este interrogante. Sin embargo, permite establecer algunas guías o pistas para el análisis de las transformaciones –tanto negativas como positivas–, dilemas y contradicciones que se generan en las ONGs una vez que comienzan a trabajar con el Estado en la modalidad de convenios. Entre los principales hallazgos deben destacarse los siguientes.

Primeramente, el trabajo con el Estado parece haber generado modificaciones en las lógicas de acción y roles específicos desempeñados por las ONGs. Aunque en los tres casos elegidos los entrevistados consideran que han logrado mantener los roles cuestionadores y de expresión democrática, manteniendo y fortaleciendo la prestación y la innovación en los servicios, sus visiones son marcadamente más negativas cuando se refieren al universo de las organizaciones que trabajan con el INAME.

Este último punto se encuentra también asociado a la idea de que la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil uruguaya no tienen –pero tampoco han tenido en el pasado– capacidad cuestionadora efectiva y desarrollo real de los roles de expresión democrática y construcción de ciudadanía. Estas dudas sobre la aplicabilidad de las posturas teóricas al caso uruguayo y a los roles efectivos que las ONGs cumplen, llevan a formular las siguientes preguntas: ¿tienen realmente las ONGs capacidad cuestionadora, capacidad de expresión de intereses y de innovación?; ¿lo tenían en el pasado, cuando la principal fuente de financiamiento era la cooperación internacional?

En segundo lugar, en lo que refiere específicamente al rol innovador, aunque las tres organizaciones estudiadas parecen haber podido

mantener un margen de maniobra como para introducir transformaciones en los proyectos, sugerir nuevas modalidades de intervención, etc., el conjunto de las ONGs que llevan adelante convenios con INAME están, según estos entrevistados, teniendo serias dificultades para mantener el rol innovador. Esta primera aproximación a responder a la pregunta sobre cómo funciona/en qué se expresa la innovación inherente a estas organizaciones, una vez que empiezan a trabajar con el Estado, permite, aunque de forma muy preliminar, plantear algunas ideas para posteriores abordajes:

- La posibilidad y capacidad de innovar una vez que se comienza a trabajar en convenio con el Estado depende de factores tanto internos como externos a las organizaciones.
- La capacidad técnica y la reflexión sistemática parecen clave para que se genere en las organizaciones ideas nuevas, basadas en la experiencia y el aprendizaje cotidiano.
- Tanto la capacidad técnica como la reflexión son características que, al menos en el caso uruguayo, parecen estar fuertemente relacionadas con el tamaño de la institución, expresado no sólo en el número y diversificación de sus recursos humanos, sino también en términos de recursos materiales que permitan generar transformaciones en esta dimensión.
- La posibilidad de innovar por parte de la sociedad civil también está sujeta a las oportunidades que el Estado esté dispuesto a dar. En este sentido, es evidente que las oportunidades difieren de un organismo a otro del Estado. En el caso de INAME, los entrevistados coinciden en que, en general, ellos son escuchados y sus opiniones para generar cambios e innovaciones en proyectos futuros son tenidas en cuenta. En contrapartida, la forma en que están planteados los perfiles de atención da poco margen para introducir cambios una vez que los convenios ya están en marcha.
- Esta idea intenta mostrar que, en muchos casos, es posible que el rol innovador no se desarrolle en la medida en que el Estado no siempre vea “con buenos ojos” a aquel que intenta generar transformaciones a las definiciones del INAME.

La secuencia anterior, aunque esquemática, intenta mostrar la forma y los motivos por los que, a partir de distintos factores combinados, las organizaciones de la sociedad civil pueden haber ido perdiendo capacidad de innovación.

En tercer lugar, la información recogida en las entrevistas confirma buena parte de las sospechas, emanadas del marco teórico de este docu-

mento, respecto de tres dilemas clásicos a los que las ONGs se enfrentan a partir de que comienzan a trabajar con el Estado: el dilema entre ser productoras de servicios estatales y al mismo tiempo controladoras del Estado, entre depender progresivamente del Estado y pretender mantener cierta autonomía del mismo, y entre ser organizaciones voluntarias y la incorporación creciente de recursos rentados y profesionales.

El primer dilema fue asumido por las tres organizaciones estudiadas en su funcionamiento diario, así como en el universo de la sociedad civil que establecen convenios con INAME y, en general, parece manifestarse con claridad en las instancias cotidianas de negociación con el Estado. Para los tres casos elegidos, las estrategias de resolución de esta contradicción son similares: los tres buscan fortalecer su participación en las redes de ONGs. Sin embargo, cada caso parece enfocarse en la participación en una red diferente.

La segunda contradicción fue reconocida por dos de las tres organizaciones y, en principio, expresa las consecuencias claras que se pueden generar cuando la principal fuente de financiamiento de las organizaciones es el Estado. La estrategia de resolución, en ambos casos, apunta a la diversificación de la financiación.

Por último, el tercer dilema fue reconocido como propio sólo por una de las tres instituciones y, en general, las estrategias de resolución están orientadas a la contratación de personal rentado que provenga del ámbito del voluntariado como forma de mantener, aunque con un salario, el perfil “voluntario” de las personas que trabajan en los proyectos.

Finalmente, la información recogida sugiere, además, que el peso de las redes en la resolución de estos conflictos parece ser (con excepción de Intercalle) relativamente débil. En algunos casos, esta debilidad parece estar modificándose a través del fortalecimiento del rol de algunas organizaciones (como AUDEC), en otros, las perspectivas de cambio son poco alentadoras (como en el caso de ANONG). El bajo peso de las redes puede ser uno de los factores que más claramente puedan explicar la dificultad que han tenido las organizaciones para desarrollar en un primer momento, y mantener en un segundo momento, la doble naturaleza que caracteriza su identidad: la naturaleza instrumental (de prestar servicios) y la naturaleza expresiva (de expresar demandas, representar valores, etcétera). En una sociedad civil tan poco desarrollada y, a la vez, tan desigual y heterogénea, son precisamente estos actores (las redes y asociaciones de ONGs) los que podrían contribuir a consolidar posturas y estrategias comunes y, al mismo tiempo, generar una legitimidad que hoy sigue siendo muy débil.

A la luz de todos estos hallazgos, cada vez parece más necesaria la realización de un diagnóstico más general y exhaustivo de las

características de la sociedad civil uruguaya, tan pautada por la existencia de un Estado fuerte y, a la vez, tan enmarcada en un sistema de partidos que aún conserva parte de su legitimidad. Este diagnóstico constituirá una herramienta fundamental para “afinar” la teoría sobre el rol de la sociedad civil uruguaya en políticas públicas, rol que hasta ahora, desde una perspectiva normativa, parece haber estado sobredimensionado, puesto que muchas veces se esperan comportamientos y responsabilidades de las ONGs en su conjunto, que apenas unas pocas de ellas pueden asumir.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar, M.; Ves Losada, M. y Yudi, R. 2001 “¿Solidaridad o eficiencia? Notas referidas a las tensiones relacionadas con el rol del Tercer Sector en las políticas sociales”. Ponencia para el III Encuentro de la Red Latinoamericana y del Caribe de la Sociedad Internacional de Investigación del Tercer Sector (ISTR), Buenos Aires, septiembre.
- Álvarez Miranda, B. 1996 “El Estado de Bienestar: veinte años de argumentos críticos” en *Dilemas del Estado de Bienestar* (Madrid: Argentario).
- Bebbington, A. 1997 “New Status, New NGOs? Crises and transitions among rural development NGOs in the Andean Region” in *World development*, Vol. 25, N° 11.
- Bettoni, A. y Cruz, A. 2001 *Voluntariado en Uruguay: perfiles, impacto y desafíos* (Montevideo: ICD).
- Bresser Pereira, L. y Cunill Grau, N. 1998 “Entre el Estado y el mercado: lo público no estatal” en Bresser Pereira, L. y Cunill Grau, N. (comps.) *Lo público no estatal en la reforma del Estado* (Buenos Aires: Paidós).
- Brown, D. and Kalegaonkar, A. 1999 “Addressing civil society’s challenges: support organizations as emerging institutions” in *IDR Reports* (Institute for Development Research) Vol. 15, N° 2.
- Covey, J. 1998 “Critical cooperation? Influencing the World Bank through Policy Dialogue and Operational Cooperation” in Fox, J. and Brown, L. D. (eds.) *The struggle for accountability. The World Bank, NGOs and Grassroots Movements* (Cambridge, Mass: MIT Press).
- Cuello, R. 1999 “El neoliberalismo, una ideología contraria a la equidad social” en Boron, Atilio; Gambina, Julio y Minsburg, Naum

- (comps.) *Tiempos violentos. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO/EUDEBA).
- Diez Rodríguez, A. 2002 “Las ONGs como campo de las relaciones sociales” en Revilla, Marisa (ed.) *Las ONGs y la política* (Madrid: Istmo).
- Edwards, M. and Hulme, D. 1996 “Too close for comfort? The impact of official aid in nongovernmental organizations” in *World Development*, Vol. 24, N° 6.
- Filgueira, F. 1994 “Un estado social centenario. El crecimiento hasta el límite del estado social batllista” en Filgueira, C. y Filgueira, F. *El largo adiós al país modelo* (Montevideo: Arca).
- INAME 2002 “Modalidades y perfiles para proyectos de atención de tiempo parcial y de tiempo completo”, Asociación Uruguaya de Educación Católica (AUDEC) mimeo.
- Jerez, A. y Revilla, M. 1997 “El tercer sector: una revisión introductoria a un concepto polémico” en Jerez, A. (coord.) *¿Trabajo voluntario o participación? Elementos para una sociología del tercer sector* (Madrid: Tecnos).
- Kooiman, J. 1993 *Modern governance: new government-society interactions* (London: Sage Publications).
- Kramer, R. 1981 *Voluntary agencies in the Welfare State* (Berkeley: University of California Press).
- Laurnaga, M. E. 1998 *Políticas públicas de infancia en la reforma del Estado* (Montevideo: Instituto de Comunicación y Desarrollo).
- Midaglia, Carmen 2000 *Alternativas de protección a la infancia carenciada. La peculiar convivencia de lo público y privado en el Uruguay* (Buenos Aires: CLACSO).
- Monestier, F. y Rossel, C. 2003 “Governance en América Latina: la distancia entre lo deseable y lo posible” en Crespo, Ismael (ed.) *El estudio de la política: problemas y desafíos* (Madrid: Thomson-Civitas).
- Morales, C. A. 1998 “Suministro de servicios sociales a través de organizaciones públicas no estatales” en Bresser Pereira, L. y Cunill Grau, N. (comps.) *Lo público no estatal en la reforma del Estado* (Buenos Aires: Paidós).
- Morás, L. E. 2001 “Desafíos de la articulación público-privado en la gestión de programas sociales. Síntesis sobre aspectos controversiales en la relación público-privado”, Informe técnico al V Foro Colaboración entre agencias estatales y ONGs en el diseño e

- implementación de políticas sociales, Ciclo “Mañanas Complejas”.
En <www.gandhi.edu.uy/complejas/foro5>.
- Moreira, C. 1997 *Democracia y desarrollo en Uruguay* (Montevideo: Trilce).
- Muñoz de Bustillo, R. 1989 “Retos y restricciones del Estado de Bienestar en el cambio de siglo” en Muñoz de Bustillo, R. (comp.) *Crisis y futuro del Estado de Bienestar* (Madrid: Alianza).
- Real de Azúa, C. 1984 *Uruguay, ¿una sociedad amortiguadora?* (Montevideo: Banda Oriental).
- Revilla, M. 2002 “Zona peatonal: las ONGs como mecanismos de participación política” en Revilla, M. (ed.) *Las ONGs y la política* (Madrid: Istmo).
- Rossel, C. 2003 “Un modelo para armar: el intercambio institucional Estado-sociedad civil en tres políticas sociales innovadoras” en *Cuadernos de CLAEH* (Montevideo) N° 86-87.
- Salamon, L. 1987 “Partners in Public Service: The scope and theory of Government. Non profit relations” in Powell, W. *The non profit sector. A research Handbook* (New Haven: Yale University press).
- Salamon, L.; Hems, L. and Chinnock, K. 2000 “The non-profit sector: for what and for whom?”. Working papers of the John Hopkins Comparative Non-profit sector project N° 37, The John Hopkins Center for Civil Society Studies, Baltimore.
- Salinas, F. 1997 “El Estado de Bienestar y las organizaciones voluntarias” en Jerez, A. (coord.) *¿Trabajo voluntario o participación? Elementos para una sociología del tercer sector* (Madrid: Tecnos).
- Seoane, J. y Taddei, E. 2001 “Protesta social, ajuste y democracia: la encrucijada latinoamericana” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 4, junio.
- Seoane, J.; Taddei, E. y Algranati, C. 2001 “Neoliberalismo, crisis y resistencias sociales en América Latina: las configuraciones de la protesta” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 5, setiembre.
- Serrano, M. 2002 “Las ONGD en la encrucijada: del Estado de Bienestar a la franquicia del Estado” en Revilla, M. (ed.) *Las ONGs y la política* (Madrid: Istmo).
- Tonkiss, F. and Passey, A. 1999 “Trust, confidence and voluntary organisations: between values and institutions” in *Sociology*, Vol. 33, N° 2.

- Velásquez, F. 1998 “La veeduría ciudadana en Colombia: en busca de nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad civil” en Bresser Pereira, L. y Cunill Grau, N. (comps.) *Lo público no estatal en la reforma del Estado* (Buenos Aires: Paidós).
- Vernis, A. 2000 “La relación público-privado en la provisión de servicios sociales” en Longo, F. y Zafra, M. (coords.) *Pensar lo público* (Madrid: CEMCI).

Hernán Ouviaña*

LAS ASAMBLEAS BARRIALES Y LA CONSTRUCCIÓN DE LO “PÚBLICO NO ESTATAL”: LA EXPERIENCIA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

*Habrá aún asambleas en las plazas públicas
y movimientos en los que no teníais pensado intervenir.*

Primer Manifiesto Surrealista
André Breton

INTRODUCCIÓN

El presente artículo es producto de una investigación realizada durante el año 2003 que se centró, en un principio, en la caracterización del fenómeno asambleario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, planteando en primera instancia algunas comparaciones con las asociaciones vecinales existentes durante el siglo XX en Argentina, organizadas en torno a los problemas territoriales en sus respectivos barrios. En segundo término, nos propusimos abordar las dimensiones organizativas de las asambleas surgidas en los diferentes barrios capitalinos, atendiendo a su ubicación geográfica, al tipo de estructura interna que generan en sus prácticas, a la composición social de los miembros que las integran, a las actividades que están encarando en relación al barrio y los vecinos, a las instancias de articulación que establecen con otras asambleas, y también al vínculo que entablan con otras organizaciones y actores sociales, tales como los movimientos de trabajadores desocupados (piqueteros), los obreros de las empresas “recuperadas” y las cooperativas de cartoneros.

* Licenciado en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires. Becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y docente de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Miembro del Comité Editor de la revista *Cuadernos del Sur*.

Durante el transcurso de nuestra investigación fuimos reformulando nuestro marco analítico-conceptual, en particular en lo referido a la delimitación entre lo que definimos como práctica política y lo que caracterizamos como “espacios públicos no estatales”, entendiendo bajo este nombre a un tipo de instancia que involucra formas de intervención colectiva y participación voluntaria de los vecinos, bajo lógicas que se distinguen de las que tradicionalmente guiaron a los órganos de gestión pública, por no estar acotadas al ámbito estatal ni al mercantil. En este sentido, nos abocamos a investigar los alcances y límites de estas modalidades de participación que –creemos– inauguran novedosos escenarios de vivencia democrática, así como sus posibles articulaciones con otras formas de autoorganización urbana, preguntándonos si pueden o no consolidarse como mediadoras reales de la acción política de los sectores populares por sus intereses, bajo control de estos, sin atarse mecánicamente al derecho estatal ni a la forma organizativa partidaria que regulan la representación política (Genro, 2000). Al respecto, una faceta relevante en esta etapa ha sido el análisis de otras modalidades de gestión que se están llevando adelante en diversas asambleas, explorando similitudes y diferencias en las posibilidades de articulación con otras formas de gestión como la estatal y la privada. Tal es el caso de los predios “recuperados”, los llamados socio-emprendimientos, y proyectos de economía solidaria.

A lo largo del artículo, intentaremos dar cuenta de todo este complejo proceso. Comenzaremos discutiendo en un nivel teórico qué entendemos por lo “público no estatal” y cuán innovadores resultan estos espacios con respecto a fenómenos similares surgidos en otros contextos históricos (por ejemplo, sociedades de fomento). Luego se realizará una breve reseña de lo que consideramos es el preludio social y político de las asambleas, en los años previos a su surgimiento, haciendo hincapié en la dinámica de construcción de los movimientos de trabajadores desocupados a partir de 1996 y 1997, así como de los acontecimientos que se sucedieron durante el año 2001 y que desembocaron en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de ese año. En tercer lugar, se abordará el análisis del propio fenómeno asambleario, ahondando en las principales dimensiones que lo caracterizan, e intentando dar cuenta de su complejidad y singularidad. Por último, a modo de complemento, se efectuará un breve balance de la experiencia de las asambleas barriales, a la luz de su aparente repliegue y, en algunos casos, virtual desaparición.

ALGUNAS ACLARACIONES CONCEPTUALES EN TORNO A LA NOCIÓN DE LO “PÚBLICO NO ESTATAL” Y AL FENÓMENO ASAMBLEARIO

La década del noventa implicó una profunda modificación de los límites entre lo público y lo privado, en particular en Argentina. El proceso de

privatización de los servicios públicos y de descentralización de determinadas funciones estatales –iniciado en los primeros años, en el marco de las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado– fue exhibido como un intento por parte del gobierno de Menem de fortalecer la sociedad civil. En esto tuvo que ver un diagnóstico hegemónico que observaba a la hipertrofia del Estado como principal responsable de los serios desajustes producidos en el financiamiento del gasto público. De ahí que los programas neoliberales de ajuste estructural aparecieran como la respuesta “técnicamente racional” para recuperar los equilibrios macroeconómicos perdidos. Sin embargo, el balance provisorio realizado por numerosos investigadores del tema indica que, en realidad, se terminó incrementando el poder de un reducido grupo de conglomerados económicos, beneficiarios del creciente predominio del mercado como reasignador de recursos (Oszlak, 1997; Boron, 2000; Thwaites Rey, 2001; Ouviaña, 2002c).

La propuesta neoconservadora de la instauración en la región de un “Estado mínimo” no sólo tendió a acentuar las desigualdades sociales y económicas de gran parte de la población latinoamericana, sino que además tornó endeble a los propios aparatos estatales para garantizar de manera idónea sus funciones básicas. Poco a poco, distintas instituciones y especialistas comenzaron a hacerse eco de la necesidad de una “reconstrucción del espacio público”, otorgando una importancia sustancial en este proceso a las formas de propiedad y de control social “no estatales” (Fernandes, 1994; Bresser Pereira y Cunill Grau, 1998; Cardoso, 1997). La mayoría de estos autores, tal como expresa Cunill Grau (1997: 58), coinciden en que la noción de lo “público no estatal” remite a la creación de una institucionalidad que no sólo involucre la necesidad de tornar la gestión pública más permeable a las demandas emergentes de la sociedad, sino también de retirar del Estado y de los agentes sociales privilegiados el monopolio exclusivo de la definición de la agenda social. Esto implica un concepto de interés público plural y descentrado que, de acuerdo a Vera Telles (1994), brinde además la posibilidad de “publicitar conflictos privados, universalizar reivindicaciones, forzar el reconocimiento de alteridades y constituir actores colectivos que no pueden más dejar de ser tomados en cuenta en políticas y programas del Estado”¹.

1 Si bien teóricos como Bresser Pereira y Cunill Grau (1998) entienden que este tipo de instancias permitirían la “renovación del sistema político”, no es esta la lectura que hacemos nosotros. Nuestra definición de lo “público no estatal” se emparenta más a la efectuada por Paolo Virno (2003: 70), quien lo concibe como *una comunidad política que tiende a subvertir las relaciones de producción capitalistas*.

Cierto es que la sociedad civil en abstracto como tal no existe. En este sentido, consideramos que Antonio Gramsci (1998) aporta una definición interesante, entendiéndola como aquel terreno en donde se disputan relaciones de fuerza entre polos sociales antagónicos. De ahí que tampoco pueda equipararse a la sociedad civil con “lo público” a secas, ya que ella cobija también (y hasta está moldeada por) vínculos mercantiles y enajenantes. Así pues, lo “público no estatal” se construiría en esa especie de *zona gris* entre el mercado y el Estado, pero no como ámbito complementario con respecto a estas dos esferas, sino en tanto potencial impugnación de la existencia de estas mediaciones que apuntan a organizar la vida misma en función del proceso de acumulación capitalista. La noción nos obliga entonces a repensar y revisar el concepto de política. En este punto, coincidimos con Joachim Hirsch (2001) en que es preciso trascender las categorías tradicionales que identificaban política *con* Estado.

Aunque pueda resultar paradójico, habida cuenta de la importancia crucial de las transformaciones ocurridas en la relación Estado/sociedad, en Argentina existe una escasa literatura especializada referida a estas nuevas formas de gestión pública y participación social denominadas “no estatales”, e incluso la misma se ha ocupado en forma fragmentaria del tema. Si bien algunos trabajos abordan la problemática, lo hacen a partir de análisis de casos específicos, tales como la opción de cogestión cooperativa de servicios públicos urbanos en la ciudad de Córdoba (Zilocchi, 1998), o bien la experiencia realizada por una ONG en materia de fiscalización ciudadana (Kohen, 1998). En ambas ocasiones, además, se tienden a omitir ciertos factores sociales, políticos y económicos que, a nuestro entender, permitirían dar cuenta de una manera más englobadora de este tipo de procesos.

Por otro lado, debido al carácter reciente y novedoso de las asambleas barriales², prácticamente no existen investigaciones o artículos que intenten teorizar este fenómeno. Antes de su surgimiento, los pocos autores que en los últimos años tuvieron como foco de análisis las protestas vecinales hicieron especial hincapié en las figuras del “consumidor” y el “usuario”, postulando que casi la totalidad de las luchas ancladas en lo barrial se caracterizaban por expresar demandas de tipo

2 Al parecer, no existen antecedentes a nivel mundial, al menos en las últimas décadas. En rigor, habría que remontarse a experiencias de *mayor* envergadura, como las realizadas por la Confederación Nacional del Trabajo en Cataluña y otras regiones del estado español, entre 1936 y 1939, así como a los soviets rusos de 1905-1917 y los consejos obreros alemanes, húngaros e italianos de 1919-1920. Salvando las diferencias, pueden rastrearse también ciertas similitudes en el breve pero intenso proceso de la Comuna de París, en marzo y abril de 1871. Asimismo, queda pendiente indagar en las semejanzas con las llamadas “Asambleas Comunales”, surgidas en Estados Unidos a mediados de la década de 1770.

particular, desarrollando una especie de “lobby” a favor de un interés corporativo (Nardacchione, 2000).

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA (AUTO)ORGANIZACIÓN VECINAL

En Argentina³, el fenómeno más cercano a las asambleas barriales en términos históricos es el llamado “fomentismo”, constituido mayoritariamente por Juntas Vecinales y Consejos Comunitarios del Gran Buenos Aires. Si bien pueden rastrearse sus orígenes hacia finales del siglo XIX, es a partir del proceso de industrialización sustitutiva de importaciones iniciado en 1930 que cobra relevancia y se expande, adquiriendo arraigo social junto al crecimiento de la ciudad que se generaliza en la segunda mitad de la década del cuarenta (García Delgado y Silva, 1989: 219). Su característica principal en términos de demandas era una especie de *vecinalismo de petición*, centrado en la reivindicación de obras públicas para el mejoramiento del barrio que habitaban.

Un proceso similar se vivió por aquellos años en la Ciudad de Buenos Aires. Al proceso de migración interna se le sumaron los nuevos medios de transporte, la extensión del pavimento y los loteos de tierras baldías; fenómenos todos que, en conjunto, hicieron que muchos trabajadores abandonaran los conventillos del centro y se trasladaran a la periferia de la ciudad. Así nacieron numerosos barrios, como Almagro, Caballito, Flores, Belgrano, Pompeya, Mataderos y Villa Urquiza. Estos factores, combinados con la paulatina ampliación de la participación política y la necesidad de acelerar la extensión de los servicios urbanos, impulsaron el surgimiento de asociaciones de fomento, clubes de barrio y bibliotecas populares, todos ellos verdaderos espacios que respondían a la “recreación, educación y sociabilidad que se iban generando en el seno de la sociedad barrial” (Thompson, 1995: 51-52).

No obstante, el objetivo prioritario del fomentismo –no siempre reconocido por sus dirigentes– no era tanto el desarrollo de la “cultura popular”, como el convertirse en *portavoces* de las demandas edilicias ante el gobierno municipal o provincial. La instalación de los principales

3 En el resto de América Latina, dejando de lado las Asambleas Populares surgidas al calor de la insurrección de masas de 1952 en Bolivia, podemos enumerar una serie de organizaciones y movimientos barriales que nacieron, durante las décadas del setenta y ochenta, de la lucha por satisfacer necesidades concretas, “logrando articular los intereses *propios* frente al Estado” (Harnecker, 1987: 120-123). Sin embargo, a diferencia de las asambleas vecinales argentinas, estas organizaciones están constituidas por pobladores en “situaciones de emergencia” que les imponen –en la mayoría de los casos– buscar soluciones de *corto plazo*. Los casos más recientes y similares son, por un lado, el de la Asamblea de Barrios constituida en 1987 en México y, por el otro, el de la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad boliviana de El Alto, la cual, si bien fue conformada en 1957, cobró suma relevancia en el contexto de la insurgencia aymara y popular de octubre de 2003, como red articuladora de *microgobiernos barriales*.

servicios públicos, en especial los de transporte y electricidad, constituía un reclamo de los habitantes del barrio que se nucleaban cada vez más en torno a estas organizaciones, en la medida en que se incrementaba el desfase entre sus expectativas vecinales y la capacidad de realización de obras de infraestructura por parte del Estado. Cabe destacar, además, que la estructura organizativa propia de las sociedades de fomento era jerárquica, basada en una Dirección Ejecutiva elegida, por lo general, sobre la base de una lista única, que garantizaba la reelección por varios mandatos consecutivos de sus referentes máximos.

Con la consolidación del populismo, la regulación de las asociaciones vecinales por el Estado se intensifica, tendiéndose a la captación de lo social en parámetros estatales (González Bombal, 1995: 68)⁴. Los sucesivos gobiernos civiles y militares no hacen sino disminuir aún más el poder autónomo de las organizaciones barriales, intentando que su rol se restrinja al de meros apoyos de un régimen restrictivo, teniendo como horizonte una concepción corporativa de la acción política. Durante la presidencia de Videla se llega incluso a prohibir a las asociaciones fomentistas la posibilidad de federarse, y a las comisiones barriales se les prohíbe integrar autoridades de las sociedades de fomento.

A partir de finales de 1982, con los llamados “vecinazos” producidos en el sur de la provincia de Buenos Aires a raíz del incremento de la tasa de alumbrado, barrido y conservación de la vía pública, emergen dirigentes y organizaciones barriales que tienden a desbordar la dinámica institucional propia de las sociedades de fomento tradicionales⁵. No obstante este crecimiento y radicalidad (reflejados en su entendimiento de la política como algo constitutivo del movimiento, así como en estructuras de funcionamiento más horizontales y democráticas), sus demandas tendían a restringirse –en tanto ciudadanos “contribuyentes”– a un interés inmediato como vecinos-propietarios, solicitando una razonabilidad por parte de las autoridades municipales en el cobro de los impuestos (González Bombal, 1989).

Durante los años noventa no se produjeron grandes protestas vecinales, aunque sí se vivieron situaciones en las cuales habitantes de varios barrios capitalinos manifestaron su descontento frente a incumplimientos por parte de las autoridades de los servicios públicos o

4 También podemos mencionar, por esta época, el surgimiento de las “unidades básicas” peronistas como nuevas organizaciones territoriales de raigambre popular, que en la práctica se superponen –dada su concepción comunitaria e integradora– con las entidades fomentistas ya existentes (García Delgado y Silva, 1989: 220).

5 Se podría afirmar que las prácticas constitutivas de estas organizaciones vecinales son lo más cercano a las de las actuales asambleas barriales, por cuanto toman “en sus manos la resolución de problemas ligados a la reproducción cotidiana de sus condiciones de vida [...] cuestionando en mayor o menor medida la presencia o ausencia del Estado” (Jelin, 1987: 22).

del gobierno. Tal es el caso del prolongado “apagón” sufrido en pleno verano de 1999 por vecinos de los barrios de Almagro, Boedo, Parque Patricios, Once, Congreso, Constitución, San Cristóbal, San Telmo, Puerto Madero y San Nicolás. En aquella ocasión, cientos de usuarios llegaron a cortar, en varias oportunidades, calles y avenidas, incendiando neumáticos y bolsas de basura como modalidad de protesta frente a la negligencia de la empresa Edesur y la inoperancia del gobierno nacional y municipal (Ouviaña, 2001). Aunque no llegaron a articularse gestando algún tipo de organización territorial (salvo el caso de los vecinos de Boedo que crearon una especie de foro de debate barrial), el hecho puede ser visto, en parte, como un antecedente del profundo descontento que tiempo después desencadenaría la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Hecho este breve *racconto*, consideramos que la emergencia de las asambleas en los distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye un quiebre –o cambio *cualitativo*– con respecto a los diferentes casos mencionados, debido a que gran parte de sus prácticas, como veremos, tienen como objetivo satisfacer necesidades públicas, a través del fortalecimiento de la “sociedad civil”, entendida como una tercera esfera entre *el Estado* y *el mercado* (Bresser Pereira y Cunill Grau, 1998)⁶. Precisamente, una de nuestras hipótesis es que ellas operan desde una lógica inversa al “fomentismo” antes descripto: la intervención vecinal, lejos de menguar, en muchas ocasiones se amplía e intensifica en la medida en que se logran ciertos objetivos consensuados a nivel comunitario en la propia asamblea. Esta creciente apertura de procesos decisorios y autogestivos en el ámbito social nos obliga a repensar –a la vez que distinguir– las nociones tradicionales de Estado y espacio público.

Las asambleas –en tanto instancias de “desprivatización” de lo social– permitirían recuperar la idea de lo “público” como algo que excede a (y hasta se contrapone con) lo propiamente estatal⁷. El hecho

6 Somos conscientes de que, tal como expresa Ruth Cardoso (1997), si bien el concepto de *tercer sector* describe un espacio de participación y experimentación de nuevos modos de pensar y hacer sobre la realidad social, “es un campo marcado por una irreductible diversidad de actores y formas de organización”. En el caso de las asambleas barriales, esto se vislumbra especialmente en la heterogeneidad generacional y social de sus miembros.

7 A modo de ejemplo, vale la pena señalar que esto resulta de particular importancia en la discusión actual sobre qué hacer con las empresas privatizadas. Si bien la mayoría de las organizaciones populares propone su “reestatización”, cabe pensar en formas alternativas de control social directo, sobre la base de la expansión de instancias democráticas de gestión colectiva. Este debate ha aparecido en las reuniones realizadas en el marco de la campaña de las asambleas vecinales por el control y recuperación de los servicios y empresas públicas privatizadas, lanzada a mediados de 2002 por la Comisión de Privatizadas de la Interbarrial de Parque Centenario, con el objeto de recolectar firmas para la presentación de un “exigitorio” de cinco puntos referidos a los derechos de los usuarios de los servicios públicos.

de que la mayoría de ellas funcionen en ámbitos abiertos, en muchos casos reapropiándose de terrenos anteriormente sumidos en una lógica privada⁸, no hace más que reafirmar esta hipótesis. La recuperación activa de lo “público”, tan imprescindible para la superación de la dinámica mercantil propia de la sociedad capitalista, es practicada a diario por los vecinos-asambleístas⁹. Reformulando el planteo del movimiento feminista, podría decirse que “lo vecinal es político”. Así pues, aquello que tanto desde el Estado como desde el mercado es considerado un problema individual emerge como una cuestión colectiva, a resolver en el ámbito de la comunidad. Se quiebra así uno de los pilares básicos para el triunfo del neoliberalismo.

La política –entendida en su más amplio sentido– se reinscribe en lo barrial, al calor de la lucha y la construcción constante¹⁰. Este interés se

8 Un caso paradigmático ha sido el de la asamblea de vecinos autoconvocados de Villa Urquiza, que en sus inicios se reunía en la Plaza Echeverría. Al enterarse de que el supermercado Coto había *usurpado* unos terrenos baldíos cercanos a la estación de tren, decidieron derribar el alambrado y bautizar ese espacio como Plaza de los Vecinos, trasladando el lugar de encuentro de la asamblea. Desde ese entonces, allí se han realizado numerosas actividades (charlas-debates, festivales, etc.), e incluso se ha logrado también recuperar un local deshabitado –a cargo del Órgano Administrador de Bienes del Estado– ubicado frente al predio, con el objetivo de instalar allí un comedor comunitario y un centro cultural. De manera similar, la asamblea “20 de diciembre” de San Telmo recuperó un predio ubicado en San Juan y Cochabamba, en donde actualmente funcionan un club del trueque, reuniones de organizaciones sociales, ferias ambulantes y un sinnúmero de actividades más. Meses más tarde, la asamblea Popular de Paternal ha tomado un enorme lote municipal en Cucha Cucha al 2500, constituyendo allí un merendero, así como talleres de prevención de VIH y grupos de apoyo escolar. También las asambleas de Palermo Viejo, Almagro, Villa Crespo, Cid Campeador y Lezama se reapropiaron en sus respectivos barrios, con fines similares o complementarios (creación de huertas orgánicas, talleres de oficios para desocupados), de ex bancos, oficinas estatales o centros de abastecimiento en desuso. Como veremos en el apartado del artículo referido a la experiencia de los predios “recuperados”, en algunos casos (Lezama Sur y Villa Crespo), luego de meses de trabajo territorial, han sido desalojados por orden de la justicia.

9 Es interesante, al respecto, reproducir lo que un asambleísta de la zona norte de Capital Federal escribió en un mail de comunicación inter-asamblearia: “A este nuevo espacio acuden los parecidos y los diferentes, los de siempre y los de ahora, los sensibles y los duros, los dogmáticos y los poetas, los simpáticos y los serios, los impacientes y los tranquilos y también los desesperados. A diferencia del shopping, en estos espacios tenemos relaciones con el semejante (en todos los sentidos de la palabra), y esto es quizás lo fundamental de la asamblea, porque es a partir del vínculo con el semejante que podremos construir una comunidad que resista al individualismo imperante” (Quintar et al., 2003).

10 Tal como expresa la Asamblea de Scalabrini Ortiz y Córdoba (2002) en su Boletín N° 3, “nos dimos cuenta de que no podemos salir de esta situación cada uno por la suya, que tenemos que hacer algo entre todos. Hemos dado el primer paso: romper el aislamiento”. La práctica política –según ellos– excede por demás a la tradicional lógica gubernamental: “queremos meter la nariz y las manos en lo que siempre nos dijeron que era prerrogativa de otros: de los especialistas, nuestros ‘representantes’, los políticos profesionales”.

ha materializado en la constitución de *Comisiones de Trabajo*¹¹ que abordan una multiplicidad de cuestiones a niveles micro y macrosocial, dinamizando el debate y, sobre todo, las acciones llevadas a cabo desde ese territorio en disputa permanente –o espacio vivido– que es el barrio¹².

Esta y otras características que desarrollaremos más adelante nos permiten definir a las asambleas vecinales como ámbitos de construcción de un espacio “público no estatal”. Veamos, por último, el contexto inmediatamente previo en el cual emergen, para así comprender de manera más cabal sus dimensiones principales.

EL PRELUDIO ASAMBLEARIO

Sería erróneo suponer que las asambleas barriales surgieron como consecuencia directa y unívoca de los acontecimientos sucedidos el 19 y 20 de diciembre de 2001. No obstante, podemos establecer esta fecha como condensación de un momento histórico que da origen a la auto-organización vecinal, especialmente en barrios de la Ciudad de Buenos

11 Sin duda, merece destacarse el papel jugado por la Comisión Multisectorial de la Asamblea de San Cristóbal, en conjunción con el Hospital Ramos Mejía: trabajadores, pacientes, médicos y vecinos han decidido afrontar de manera colectiva la emergencia sanitaria que vive el barrio, reconociendo las autoridades el derecho de la comunidad a intervenir en la organización hospitalaria. En los últimos meses han abierto un consultorio gratuito para desocupados que atiende tres veces por semana, en paralelo a la elaboración de un vademécum de genéricos. No obstante, en la mayoría de los casos, los organismos estatales se muestran reticentes a llevar adelante el Programa de 26 Puntos levantado por Intersalud –instancia representante del conjunto de las Comisiones de Salud de las asambleas barriales–, entre los que se destacan la producción “desmercantilizada” de medicamentos, el control sobre los insumos y el presupuesto por parte de los usuarios y trabajadores de la salud, la instauración de un “boletín sanitario” que posibilite que el conjunto de la población tenga acceso real a una atención gratuita, así como el inmediato nombramiento de todos los cargos, congelados desde hace años en casi la totalidad de los hospitales.

12 De acuerdo con Ana Esther Ceceña (2000), el territorio es “espacio de síntesis de la disputa por la cultura y los derechos humanos, sociales y políticos de todos los miembros de la sociedad y no sólo de los ‘representantes institucionalizados’, y es el eje de una confrontación civilizatoria entre la mercantilización de la vida bajo todas sus formas que impulsa el neoliberalismo y la sociedad del respeto a la diferencia, con democracia, libertad y justicia, y en la que quepan todos los mundos”, adquiriendo además sentido y significación a partir de su relación con los procesos sociales. La organización social del territorio es, asimismo, “un espacio de confrontación en el que se cruzan modalidades y dimensiones distintas de acumulación de capital, así como concepciones societales de temporalidades y legalidades también distintas. Este privilegio semiótico de *lo territorial* –entendido como construcción social– le confiere un lugar metodológico esencial en la comprensión de las dinámicas sociales y, dentro del horizonte capitalista, particularmente de las económicas”. La dinámica de la competencia lleva a desdoblarse el espacio territorial entre aquello que es considerado útil y lo superfluo, rentabilizando el espacio con todos los elementos que lo componen. El territorio se reduce así a “la suma de sus elementos rentables o a sus potencialidades geoestratégicas”. Podemos concluir entonces que, a contrapelo de las concepciones dominantes, el territorio no se restringe a lo meramente físico, aunque por supuesto lo incluye. También contiene las múltiples prácticas e historias de vida que constituyen la subjetividad de la comunidad que lo habita.

Aires y, en menor medida, del conurbano bonaerense y otras regiones céntricas del país¹³.

El antecedente más próximo de prácticas asamblearias, dejando de lado las experiencias que anteriormente enunciamos, lo constituyen los numerosos grupos “piqueteros”, que en diversos barrios y rutas comenzaron a realizar, desde fines de 1996, un claro ejercicio de democracia directa. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de los MTD de la zona sur del Gran Buenos Aires¹⁴, uno de los primeros movimientos de desocupados surgidos al calor de las políticas neoliberales. De acuerdo con uno de sus integrantes, al comienzo “una de las cosas que más cautivó fue la forma organizativa, que todo se manejara en asambleas, que nadie tuviera el cargo comprado, que todos fueran removibles” (MTD-CTD Aníbal Verón, 2000: 4). De manera análoga, un compañero del MTD de Solano afirma lo siguiente:

La asamblea es el órgano que tiene la mayor importancia, es el lugar donde se discuten las propuestas, donde se toman las principales decisiones: los planes de lucha, la creación de nuevas áreas, la elección de delegados para cada barrio (Colectivo Situaciones, 2001: 26).

Por su parte, el Movimiento Teresa Rodríguez, integrante del Bloque Piquetero Nacional, expresa lo siguiente en su “Libro Celeste” (especie de manifiesto fundacional):

El alma de nuestro Movimiento son los Cabildos (asambleas). Quienes integramos el MTR gobernamos y deliberamos a través de nosotros mismos. No delegamos en nadie ni el gobierno ni nuestra capacidad de deliberar. Nos reunimos en Cabildos y decidimos por consenso o por mayoría qué se hace o se deja de hacer. Además, elegimos entre nosotros a los compañeros que consideramos los más capaces para encabezar la ejecución –y sólo la ejecución– de lo resuelto.

13 Aun cuando nuestra investigación hace “foco” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, huelga aclarar que, especialmente en la zona norte y sur del conurbano, las asambleas barriales han tenido –y en muchos casos aún tienen– una presencia notable, sobre todo en lo referente a las luchas en contra de la contaminación medio-ambiental, en el caso de las asambleas de Wilde (con respecto a la empresa tercerizada de recolección de residuos CEAMSE) y Avellaneda, Sarandí y Dock Sur (denunciando al Polo Petroquímico radicado en la región); la represión policial e institucional; y la privatización de espacios y tierras públicas, en el de las asambleas de Carapachay, Vicente López, Florida Este, Munro y Villa Martelli. También en Rosario y Córdoba capital se ha constatado, desde mediados de 2002, una dinámica asamblearia similar.

14 Nos referimos a los Movimientos de Trabajadores Desocupados de carácter *autónomo*, entendiendo por tales a aquellos que, desde una construcción territorial cotidiana de nuevas relaciones sociales, no dependen de ningún partido político ni central sindical.

Siguiendo a Ana Dinerstein, podemos entonces afirmar que “la energía y los espacios ganados con las luchas que surgieron contra la violencia de la estabilidad, herederas de una historia de resistencia en Argentina, dieron forma a la insurrección de diciembre” (2002: 24). En efecto, previo a estas jornadas, se sucedieron una multiplicidad de hechos de enorme envergadura que concluirían el 19 y 20 de diciembre de 2001 su ciclo de ascenso. Merece destacarse, sin duda, la creciente relevancia que asumen los *cortes de ruta* efectuados por trabajadores desocupados y, en menor medida, ocupados. Esta nueva modalidad implica una sustancial transformación de la forma de protesta en la Argentina, que trae como consecuencia la emergencia de un nuevo actor social y político en la segunda mitad de la década del noventa: el movimiento piquetero. La conflictividad irá en ascenso hasta adquirir dimensión nacional en julio y agosto de 2001, meses antes del estallido popular. Cabe destacar que, en los sucesivos piquetes, la dinámica asamblearia devino no sólo en órgano de decisión política, sino en auténtico dispositivo de regulación de la vida, tomando como parámetro la solidaridad y el compañerismo. De esta manera, tal como expresa Pablo Perazzi (2002: 56), poco a poco el piquete “deja de representar únicamente una medida de acción directa –y por lo tanto de duración limitada–, expresando cada vez más un modo de organización relativamente estable que suele exceder la inmediatez del reclamo puntual”, buscando tornar visibles idearios político-sociales, a través del traslado de la oscura realidad barrial a una geografía pública.

Asimismo, a las sucesivas acciones de protesta bajo la modalidad de “apagones”, contra las arbitrariedades cometidas por las empresas públicas privatizadas (evidenciadas en la explosiva combinación de una deficiente prestación del servicio y la imposición de aumentos tarifarios), cabe agregar el hecho de que en los comicios legislativos del 14 de octubre el llamado “voto bronca” resultó primera fuerza en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, registrando un incremento, sin antecedentes en la historia, en el resto del país. A pesar de existir cerca de veinte propuestas en cada uno de los distritos, un considerable porcentaje de votantes optó por votar en blanco, anular el sufragio o directamente no participar del acto electoral. Sobre un padrón de 24.883.991 votantes, 10.218.924 no habían elegido candidatos (Camarasa, 2002: 12). Casi 1.400.000 personas, además, votaron por partidos de izquierda (*Clarín*, 2001: 20). A esto se sumó la confiscación de ahorros realizada por el gobierno nacional desde el 3 de diciembre, hecho que generó un profundo malestar en alrededor de 3 millones de personas que se veían imposibilitadas de extraer de sus cuentas corrientes y cajas de ahorro más de 250 pesos por semana de dinero en efectivo.

Como respuesta al conjunto de medidas implementadas por el gobierno, las tres centrales sindicales –Confederación General del Trabajo (CGT) “oficial”, CGT “disidente” y Central de los Trabajadores

Argentinos (CTA)– convocan para el 13 de diciembre a un paro activo nacional. Además de lograr un alto acatamiento, la jornada culmina con varios incidentes, destacándose los cruentos enfrentamientos que se producen entre la policía y numerosos desocupados en Neuquén. En los sucesivos días, los “saqueos” y expropiaciones a comercios y supermercados, que en un comienzo no eran más que focos aislados, se generalizan a varias provincias argentinas, incrementando la espiral de violencia. Asimismo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabajadores pasantes de la empresa Telefónica de Argentina deciden ocupar por esos días las oficinas centrales, en demanda de mejores condiciones de empleo y contra la amenaza de despidos. Bajo este delicado contexto, la consulta popular realizada entre el 13 y el 17 de diciembre de 2001 por el Frente Nacional de Lucha contra la Pobreza (FreNaPo) logra convocar a más de 3 millones de personas. Esta concurrencia masiva, así como el llamado “voto bronca” de octubre, fueron claros indicadores del descontento generalizado de una porción importante de la población, y pueden leerse retrospectivamente como antecedentes inmediatos del 19 y 20 de diciembre de 2001¹⁵.

En cuanto a las jornadas mismas –conocidas popularmente como el “argentínazo”–, han sido caracterizadas de la más diversa manera. Si para algunos este “levantamiento popular” fue “el más preparado de todos los que lo antecedieron” (Altamira, 2002: 27), para otros, en cambio, significó una “insurrección espontánea” (Cotarelo, 2002: 87). Por su parte, autores como Sanmartino y Romano (2002: 17) hablarán de “jornadas revolucionarias”, en el marco de una suerte de *empate* transitorio –expresado como crisis hegemónica– entre las clases fundamentales en pugna.

Consideramos que, al margen de los aportes y/o deficiencias de estas diferentes posturas¹⁶, nos acercamos más al planteo de concebir aquel acontecimiento en tanto *insurrección*¹⁷ de masas, fundamental-

15 Vale la pena mencionar que el 18 de diciembre de 2001, día previo a estas masivas jornadas de protesta, la fábrica textil Brukman –que durante 2002 y 2003 se convertirá en uno de los espacios “recuperados” que más acciones y sentimientos de solidaridad genera en el seno de los movimientos sociales– era ocupada por sus trabajadoras.

16 Podríamos afirmar que varias de ellas parecen olvidar la advertencia realizada al respecto por Antonio Gramsci: “La realidad abunda en combinaciones de lo más raro, y es el teórico el que debe identificar en esas rarezas la confirmación de su teoría, ‘traducir’ al lenguaje teórico los elementos de la vida histórica, y no, al revés, exigir que la realidad se presente según el esquema abstracto” (1998: 330).

17 Siguiendo a Antonio Negri (2001: 84), podemos definir a la insurrección como “la forma de un movimiento de masas que resiste, cuando deviene activo en poco tiempo, o sea cuando se concentra sobre algunos objetivos determinados y determinantes: ello representa la innovación de las masas de un discurso político común. La insurrección hace confluir las distintas formas de resistencia en un único nudo, las homologa, las dispone como una flecha que atraviesa en forma original el límite de la organización social establecida, del poder constituido. Es un acontecimiento”.

mente contra las políticas gubernamentales, implicando en términos históricos un punto de “no retorno”. Con ella se cierra definitivamente un ciclo iniciado –a escala nacional– el 24 de marzo de 1976 con el terrorismo de Estado, y continuado (más allá de los avances y retrocesos) durante los sucesivos gobiernos civiles de Alfonsín, Menem y De la Rúa, a lo largo del cual los sectores subalternos no logran trascender, más allá de breves interregnos, su accionar defensivo.

En cuanto al debate en torno al *carácter espontáneo de la revuelta*, podemos expresar, siguiendo a Negri (1994: 361), que “la espontaneidad no es un hecho negativo; al contrario, es el resultado de experiencias y de luchas pasadas, inteligencia que se hace cuerpo y voluntad y que por eso se convierte en activación insurreccional”. A esto aludía Antonio Gramsci (1998: 327) cuando manifestaba que en la historia nunca se da la espontaneidad pura, ya que ella coincidiría con la mecanicidad “pura”. Por ello, hasta en el movimiento “más espontáneo” existen elementos de dirección consciente; lo que ocurre es que estos no han dejado huellas o documentos identificables. Tal es el caso del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando lo que pasó fue que convivieron una multiplicidad de elementos, sin que ninguno de ellos tendiera a predominar. Por otra parte, si espontaneidad se entiende en su sentido etimológico (del latín, *sponte*, es decir, que se hace libre o voluntariamente, sin causa externa), entonces los acontecimientos que quebraron la institucionalidad burguesa en diciembre de 2001 fueron más luxemburguistas que leninistas clásicos.

Ambas jornadas tuvieron, además, un *componente social sumamente amplio*, destacándose el 20 de diciembre la presencia juvenil. Es de resaltar, asimismo, la ausencia tanto de organizaciones sindicales como de movimientos piqueteros. De ahí que, si bien el detonante inicial de la rebelión fue la declaración del Estado de Sitio, que se sumaba a la falta de medidas oficiales concretas para paliar los efectos negativos del “corralito”, no deba descontarse toda la serie de acontecimientos antes mencionados, que supusieron una lenta acumulación de fuerzas que culminó con la caída –por primera vez como consecuencia de una agitación de masas– del gobierno civil.

CARTOGRAFÍA DE LAS ASAMBLEAS BARRIALES SURGIMIENTO TERRITORIAL Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Según relatan los vecinos protagonistas del 19 y 20 de diciembre de 2001, ya en esos días se comienzan a reunir en plazas, monumentos y esquinas cientos de hombres y mujeres que, en función de la cercanía territorial, confluyen en puntos neurálgicos de cada uno de los barrios capitalinos. Ezequiel, de la asamblea del Cid Campeador, describe el surgimiento de esta de la siguiente manera:

En las cercanías del Cid, una chica de 19 años se enteró de que en otros barrios comenzaban a organizarse asambleas. Fue a ver cómo funcionaban, y se le ocurrió que nuestro barrio necesitaba una. Con la ayuda de una amiga y de un comerciante de la zona de unos 60 años, pegó carteles invitando a una reunión para el viernes siguiente. Muchos vecinos, entre ellos yo, vieron esos carteles y decidieron concurrir. Así nació la Asamblea Popular del Cid Campeador, que funciona semanalmente desde el 11 de enero (Adamovsky, 2002: 48).

La caracterización de la situación inicial se asemeja a la realizada por numerosos asambleístas consultados. A modo de ejemplo, podemos reproducir el caso de la asamblea de Plaza Palermo Viejo. El siguiente es un breve relato brindado por sus integrantes.

En el barrio algunos vecinos nos reunimos por primera vez el lunes 28 de enero de 2002, en la esquina de Thames y Nicaragua. La asistencia a la convocatoria fue en aumento, hasta que se resolvió cambiar el lugar de reunión. Decidimos entonces trasladarnos a la plaza que lleva el nombre del barrio. El cambio de espacio finalmente se concretó el 18 de febrero y en esa misma reunión se decidió el nombre que hoy nos identifica (Asamblea de Plaza Palermo Viejo, 2002: 2).

No hay, por lo tanto, coincidencia total sobre el momento en el cual se gestó la primera asamblea vecinal: mientras algunos la ubican en el barrio porteño de Floresta a finales del mes de diciembre (Colectivo Situaciones, 2002: 174), otros postulan como instante fundacional el propio miércoles 19 a la noche en San Martín y Juan B. Justo, barrio de Paternal (Guerrero, 2002: 54). Sin embargo, de acuerdo con nuestra investigación, muchas datan –si bien todavía sin nombre ni consistencia plena– de días antes del estallido, como las reuniones llevadas a cabo por los vecinos del barrio de Liniers, o los autoconvocados de San Cristóbal. Pero más allá de la discusión que este contrapunto generó, lo cierto es que podemos afirmar que la inmensa mayoría de las asambleas surgieron con posterioridad al 19 y 20 de diciembre de 2001, más específicamente hacia finales de diciembre y todo el mes de enero de 2002, al menos en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya a partir de febrero y marzo comienzan a funcionar de manera plena las diferentes comisiones que dinamizan el debate surgido en las asambleas, favoreciendo así “el proceso de recuperación de la capacidad de acción” de las mismas (Svampa, 2002a: 57).

Por otro lado, con respecto a la ubicación geográfica de las asambleas, podemos mencionar que, al menos en los primeros meses de

emergencia, casi la mitad de ellas se encuentran en la ciudad capitalina (donde viven uno de cada diez habitantes del país), mientras que el resto se distribuyen mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires y, en menor medida, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, La Pampa, Neuquén y San Juan (Pereyra, 2003). Cabe agregar que, en el caso específico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la mayor concentración se ubica en aquellos barrios cuya composición social es predominantemente de clase media, tales como Belgrano, Palermo, Almagro y Flores¹⁸. En las regiones periféricas de la Capital Federal (Pompeya, Villa Luro, Villa 31, Villa Soldati) su número es mucho más reducido, registrándose en casi la totalidad de estos barrios sólo una asamblea permanente. No obstante, es importante no absolutizar estos datos, ya que en algunos barrios con mayor poder adquisitivo también se verifican escasas asambleas (Recoleta). Consideramos que la composición social es uno de los factores relativos, aunque desde ya no el único, que influye en la proliferación o no de una mayor cantidad de asambleas. Otros condicionantes que pueden mencionarse a modo de ejemplo son la existencia o no de organizaciones vecinales previas, con trabajo territorial en la zona, así como el carácter espontáneo o no del surgimiento de cada asamblea (es decir, si fue convocada desde un comienzo por partidos políticos o referentes de agrupaciones no gubernamentales, o por el contrario se gestó como consecuencia directa de los sucesivos “cacerolazos”).

Sería infructuoso reseñar la totalidad de asambleas existentes en los diferentes barrios que componen la ciudad. Mientras algunas de ellas han sido disueltas, muchas se han fracturado, al tiempo que otras han decidido fusionarse. No obstante, en su mayoría todavía continúan funcionando y realizan múltiples actividades. Incluso en el transcurso de la segunda mitad de 2002 y comienzos de 2003 se han creado nuevas asambleas, producto de rupturas o de la propia iniciativa de vecinos autoconvocados.

LA COMPOSICIÓN SOCIAL DE LAS ASAMBLEAS: UNA MULTIPLICIDAD EN MOVIMIENTO

Siguiendo a Maristella Svampa, podemos decir que tanto amplios sectores de las clases medias como grupos de jóvenes “encontraron su espacio de articulación –bajo la forma de la convergencia o del conflicto latente– en las asambleas” (2002b: 29). No obstante esta primera gran definición, debemos aclarar que, tanto en diferentes estudios efectua-

¹⁸ Esta tendencia relativa parece constatararse también en el caso de la provincia de Buenos Aires: los distritos de mayor proporción de clase media, como Vicente López y Avellaneda, son aquellos que presentan mayor cantidad de asambleas.

dos (Quintar et al., 2003; Svampa et al., 2002; Fernández et al., 2002) como en las entrevistas realizadas, se refleja una compleja multiplicidad en términos de edades, género, inserción laboral, nivel educativo o experiencias políticas previas. Así pues, una de las características distintivas de las asambleas es su alto grado de *heterogeneidad*, que, lejos de suponer un eclecticismo caótico y amorfo, emerge en tanto diálogo permanente y transversal entre las diversas prácticas y corrientes de opinión al interior del campo popular. En este tipo de espacios (auto) organizativos, cientos de vecinos y vecinas confluyeron en pos de un proyecto colectivo diverso, que se delinea en su propia acción cotidiana como una instancia fundamental de aprendizaje (con)vivencial.

Ligado a esta cuestión, un tema que generó mucha discusión desde el origen mismo del movimiento fue su *carácter vecinal*. Algunos autores han planteado que esto no hace más que expresar el contenido pequeñoburgués de esta instancia organizativa: la categoría de vecino –afirman– subsume y opaca la clásica dicotomía entre capital y trabajo, o bien entre burguesía y proletariado. Sin embargo, creemos que la recuperación de una palabra tan bastardeada como la de “vecino” contiene numerosas potencialidades. Merecen destacarse las siguientes.

- La noción se vincula con la idea de territorialidad. Esto puede observarse también en el movimiento piquetero, pero no sólo en él, ya que tanto los zapatistas chiapanecos como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil arraigan gran parte de sus luchas en la recuperación de un espacio a nivel colectivo, en paralelo a la recomposición de los lazos de solidaridad rotos por el Estado y la dinámica fragmentaria del mercado. El vecino no necesita, pues, hacer “entrismo” en su barrio. Sería sencillamente un contrasentido.
- El vecindario permite asumir un compromiso de lucha que, hoy en día, a raíz de la reestructuración capitalista de las últimas décadas, se torna cada vez más difícil en el ámbito laboral. Frente a una tasa de desocupación y subocupación enorme, y una flexibilización galopante, muchos hombres y mujeres encuentran en el barrio un espacio propicio para la construcción de una contrahegemonía social, política y cultural.

LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y SUS DINÁMICAS DE FUNCIONAMIENTO

La organización de cada asamblea, más allá del barrio, tiene características similares, que podemos sintetizar de la siguiente manera: ausencia de una estructura interna con cargos permanentes, dinámica de exposición y posterior debate coordinado, por lo general, por un vecino

rotativo, designado por la propia asamblea¹⁹. Además de este plenario general en el que se delibera sobre problemáticas nacionales pero también aquellas restringidas al barrio, fueron surgiendo, con el correr del tiempo, comisiones temáticas –prensa, salud, compras comunitarias, política y economía, etc.–, con el objetivo de operativizar las acciones discutidas semanalmente (Quintar et al., 2003). En algunos casos, estas instancias llegaron a autonomizarse al punto de constituir un colectivo con una dinámica propia con respecto a la reunión asamblearia semanal²⁰.

Con referencia a los numerosos debates generados en torno a las limitaciones y potencialidades de la democracia directa, las asambleas han dado cuenta de esta tensión en sus propias prácticas. Desde sus orígenes, fueron conscientes de que la horizontalidad, si bien imprescindible para la construcción permanente de nuevos vínculos, no puede, bajo ningún concepto, devenir en un “fetiche” remedio de todos los males²¹. Antes bien, es necesario combinar los métodos de participación y discusión colectiva con los de la designación rotativa de delegados, que permitan llevar a cabo las actividades consensuadas con los vecinos. Esta forma de construcción no implica, sin embargo, la generación de liderazgos ni la escisión entre dirigentes y dirigidos. Tampoco, reificar una falsa dicotomía entre representación política y democratismo acérrimo, principal “caballito de batalla” de los impugnadores de la forma asamblearia. A contrapelo, las múltiples comisiones de trabajo, Mesas de Enlace, Encuentro de Asambleas Autónomas y respectivas Interzonales por barrio demuestran cuán equivocados están quienes interpretan como caótico y desarticulado a este espacio comunal. No están ausentes en él, por supuesto, las contradicciones. Aquí radica, aunque pueda resultar paradójico, uno de los sustanciales aportes de las asambleas: lejos de intentar saldarla –o anularla lisa y llanamente–, han decidido *poner la contradicción en movimiento*, echarla a andar para que, en la misma dinámica de la lucha y la discusión, pueda ir constituyendo un motor para la creación de lo nuevo, sustentada por recursos y fuentes no convencionales que potencian la desobediencia

19 Esta dinámica parece haberla advertido el diario *La Nación* (2002), alertándonos desde su editorial sobre el peligro de que las asambleas puedan “acercarse al sombrío modelo de decisión de los soviets”.

20 A modo de ejemplo, podemos mencionar los casos de la Cooperativa de Trabajo “La Carcerola” (que surgió de la comisión de desocupados de la asamblea de Plaza Almagro, y hoy se ha desvinculado totalmente de ella, integrándose al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas) y el Taller Popular de Serigrafía (grupo de intervención artística creado en el marco de la asamblea Popular Plaza Dorrego, que ha devenido un colectivo con plena autonomía con respecto a esta asamblea del barrio de San Telmo).

21 Al respecto, cabe señalar que, si bien la inmensa mayoría de las asambleas funcionan de manera totalmente horizontal, existen algunas pocas en las que se ha constituido una especie de Comisión Directiva o instancia decisional superior.

civil. Sepultar la soberbia política ha sido uno de los objetivos prioritarios de las asambleas. Al parecer, en el transcurso de este tiempo, los partidos y organizaciones tradicionales fueron los menos permeables a esta tarea quiijotesca que plasma en la praxis misma una profunda autocrítica con relación a las formas de in(ter)venición política.

Cabe agregar que, en especial a partir de 2003, casi la totalidad de las asambleas han dejado de votar para la toma de decisiones, llegando a acuerdos generales basados en el consenso. Consideramos que esto no anula la diversidad ontológica que cada espacio asambleario cobija, sino que evidencia una notable madurez social ligada a una nueva forma de construcción basada en la confianza, el respeto y la escucha de esa pluralidad de voces habitada por el hacer-pensar, estando contenidos los *finés* propuestos en los propios *medios* de construcción. Se ha pasado, en palabras de un vecino de la asamblea Gastón Riva de Caballito, “de la declamación a la pregunta”. De esta manera, la práctica militante, lejos de ser obturada por lo afectivo, se ha ido nutriendo de ello, dando origen así a una amalgama de acciones cooperantes, en donde el deseo no se contrapone sino que confirma la validez de la creación política por parte de esta congregación de voluntades críticas, que reniega de aplazar para “después de la revolución” la consolidación de vínculos fraternales.

LA VINCULACIÓN CON OTROS ACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS

Otro aspecto que merece destacarse es la relación o vínculo que las asambleas barriales han generado desde su surgimiento. En primer lugar, cabe mencionar al Estado, no solamente como interlocutor sino también en tanto antagonista político. Resulta claro que, más allá de ser reacias, nunca fueron totalmente ajenas con respecto al Estado²²: de manera análoga al movimiento piquetero, tres son las formas de “vinculación” de las asambleas con respecto a lo estatal.

- Reapropiación colectiva de las energías expropiadas por la forma-Estado a la comunidad (gestión democrática de espacios y servicios públicos, apertura de merenderos, etcétera).
- Cooptación institucional (por ejemplo, a través de los Centros de Gestión y Participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u otras instancias estatales)²³.

22 Entendiéndolo en sus diversas dimensiones, a saber: relación social de dominación; conjunto de aparatos institucionales; y políticas públicas. Para una profundización de esta concepción, ver Ouviaña (2002a).

23 Es sintomático el eslogan utilizado durante 2002 y 2003 por parte de los CGP del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –“¡Que se vengan todos... los vecinos!”–, con una clara intención de acercamiento a, y búsqueda de *institucionalización* de, los espacios asamblea-

- Represión manifiesta (como la sufrida por los vecinos de la asamblea de Merlo) o latente (amenazas reiteradas de Eduardo Duhalde y el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, denunciando que “con asambleas en la calle no es posible gobernar”)²⁴.

En el caso específico de las asambleas de la Capital Federal, la relación más frecuente la establecen con el Gobierno de la Ciudad, a través de sus diferentes instituciones. Los Centros de Gestión y Participación, ubicados en cada uno de los barrios, son un referente permanente a la hora de exigir demandas vecinales²⁵. También la Comisión Municipal de la Vivienda y la Secretaría de Promoción Social, debido a sus funciones asistenciales, tienden a recibir petitorios y propuestas por parte de las asambleas (bolsones de alimentos, subsidios habitacionales, etc.). De las entrevistas realizadas se deduce que casi la totalidad de ellas han tenido o mantienen en la actualidad un vínculo con el gobierno municipal, aunque en la mayoría de los casos este vínculo no implica subordinación o dependencia política con respecto a él.

En cuanto a los partidos políticos, coincidimos con Ana Fernández en que la tensión asambleas/organizaciones partidarias es una de las más presentes desde el comienzo mismo del proceso abierto con el 19 y 20 (Fernández et al., 2003). También, diversas son las estrategias que han desplegado los partidos políticos para garantizar la dirección de las asambleas en las cuales participan sus miembros²⁶.

rios de autoorganización barrial, que tendían a impugnarlos desde su mismo surgimiento. Basta recordar que una de las resoluciones aprobadas por la primera Asamblea Interbarrial Nacional el 17 de marzo de 2002 instaba a la “disolución de los CGP y que todos sus bienes pasen bajo el control de las Asambleas Barriales”.

24 Un caso paradigmático fue el del senador Raúl Alfonsín, quien, apelando al artículo 22 de la Ley de Defensa de la Democracia, intentó –en sus propias palabras– “armar una acción política en contra de la anti-política” de las “sediciosas” asambleas barriales (*Página/12*, 2002).

25 Una discusión central que atraviesa a casi todas las asambleas capitalinas es qué posición tomar con respecto a la supuesta descentralización del poder a través de la creación de las Comunas y la sanción de un presupuesto participativo. Si bien no podemos extendernos en este punto, vale la pena mencionar el proyecto de “Iniciativa Popular” para que la Legislatura Porteña trate y apruebe la propuesta de *participación directa* impulsada por la asamblea de Villa Mitre, que cuenta con el aval de más de 8.500 firmas de vecinos de la ciudad (el doble de aquellos que hasta el momento han asistido a la totalidad de reuniones barriales convocadas por los distintos Centros de Gestión y Participación para consultar sus opiniones acerca de la Ley de Comunas). Apoyado activamente por varias asambleas (Coghlan, Villa Urquiza, Colegiales y Plaza Noruega, entre otras), este proyecto propone la constitución de “veinte unidades descentralizadas de gestión política y administrativa con competencia territorial”. Cada una de estas Comunas, a su vez, se dividiría en diez Vecindarios, de manera tal que se torne posible la participación directa de los vecinos, quienes a través de Asambleas Comunales y Vecinales elegirían a los mandatarios.

26 Los propios dirigentes de los partidos de izquierda han realizado acusaciones mutuas entre sí, denunciando sus respectivas prácticas de *entrismo*. Así, por ejemplo, Pablo Rieznik, del Partido Obrero, alude al integrante de una asamblea como miembro “de un grupito auto-denominado Partido Bolchevique, disfrazado de militante vecinal” (*Prensa Obrera*, 2002), y

- El tradicional intento de *aparatear* el espacio por parte de militantes que trazan su línea de acción al interior del partido, buscando luego imponer a la asamblea sus opciones.
- El *copamiento*, es decir, la práctica de una organización que, explicitando su pertenencia, trata de llevar el movimiento de las asambleas de modo tal que confluya con sus intereses partidarios.
- La *infiltración*, metodología empleada por afiliados a partidos que participan de la asamblea sin mencionar su pertenencia, pero tratan de influir en sus deliberaciones y acciones.
- El *amedrentamiento*, estrategia propia de los sectores de derecha, que puede ir desde el merodeo amenazante del lugar donde se desarrolla la asamblea hasta la agresión física directa.

Teniendo en cuenta estas relaciones conflictivas, es importante destacar que el recelo de muchos asambleístas con respecto a los partidos de izquierda no significa, *per se*, despolitización. Por el contrario, en muchos casos supone un paso frustrado y traumático por sus asfixiantes filas. El antes mencionado intento de *aparateo* de algunas agrupaciones quedó abollado, desde el inicio, por la férrea voluntad de numerosos vecinos con pasada experiencia militante, que encontraron nuevamente un ámbito de participación en las asambleas. Resulta sorprendente observar a cientos de personas que promedian los cincuenta años debatir en plazas y esquinas. Tres años atrás, la mayoría de ellos no trascendía tal vez de la protesta individual frente al televisor o la noticia de tapa del diario. Además, si bien denuncian y luchan contra el sometimiento y la opresión general, hacen un fuerte hincapié en desarticular las relaciones de dominación locales y específicas que, aunque (o precisamente por) invisibles y sutiles, garantizan la reproducción del orden existente día a día. Esto ha sido olvidado por casi la totalidad de las organizaciones populares, que reducen el combate a una mera disputa y acumulación de fuerzas por el poder estatal, subestimando las redes capilares de expropiación del hacer humano que operan cotidianamente.

Christian Rath, del mismo agrupamiento político, denuncia “la conspiración del MST [Movimiento Socialista de los Trabajadores] en el seno de las asambleas populares” (reproducido en <www.poloobrero.org.ar>). Por su parte, Adriana Vitoli, candidata por Izquierda Unida a la Legislatura Porteña e integrante de la asamblea de Entre Ríos y San Juan, contraataca acusando al Partido Obrero de no haber “dudado en utilizar todos los medios a su alcance, incluyendo la agresión física”, para “lograr que el movimiento asambleario tome su política” (*Prensa Obrera*, 2003). Varios asambleístas entrevistados coinciden en criticar este tipo de acciones. Mientras uno de ellos expresa que “a los militantes de izquierda no les interesa la discusión entre vecinos ya que tienen su propio ámbito de debate que es el partido”, otro agrega que “el error de los partidos es tratar de imponerles a los vecinos un pensamiento político, cuando ese pensamiento lo tenemos que construir entre todos” (Fernández, 2002: 6).

En tercer lugar, podemos mencionar el caso de los cartoneros. Varias asambleas, desde sus inicios, han tenido una íntima vinculación con este actor social. La asamblea de Colegiales, por ejemplo, debido a su proximidad geográfica con el ramal del llamado Tren Blanco (destinado a trasladar exclusivamente a trabajadores cartoneros), ha realizado actividades junto con ellos. Durante el año 2002, se llevó a cabo una campaña de vacunación que dio resultados sumamente positivos, consiguiéndose además –luego de movilizaciones conjuntas de las asambleas de Colegiales, Palermo Viejo y Núñez-Saavedra– la autorización de acceso a la estación Carranza para los cartoneros, quienes se habían visto imposibilitados de ingresar a ella durante ocho meses. En particular, la asamblea de Colegiales brinda la casa de uno de sus integrantes para el acopio de materiales reciclables y alimentos juntados por cartoneros y vecinos. También la asamblea de Palermo Viejo ha enviado un cargamento, junto con cartoneros con quienes trabajan hace ya más de un año, para los inundados de Santa Fe. Por su parte, la asamblea popular de Villa Pueyrredón viene colaborando, junto con otras asociaciones y ONGs del barrio, en un proyecto de (auto)organización de los cartoneros como Cooperativa de Recuperadores Urbanos. En una carta abierta dirigida a los vecinos, en donde comentan las actividades que están llevando a cabo en el predio recuperado en Artigas y las vías, expresan:

Los cartoneros son trabajadores y su función, la de ser el primer eslabón en la cadena de reciclado de basura, tiene importantes consecuencias económicas y ecológicas que redundan en beneficios para todos (QSVT, 2004: 3).

El 9 de abril de 2003, varias de estas asambleas barriales participaron junto a un grupo de cartoneros de una Audiencia Pública en la Legislatura, con el objeto de debatir los contratos sobre recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, logrando parar un proyecto que aspiraba a restringir la actividad de los cartoneros en los barrios capitalinos. Actualmente, las respectivas *Comisiones de acción social* de las asambleas dinamizan el vínculo con los cartoneros²⁷. Esto ha traído aparejado un debate al interior de la propia organización vecinal, en la medida en que muchas perciben que el compromiso de la asamblea es escaso con relación a esta problemática.

²⁷ Una actividad que muchas asambleas han generado al poco tiempo de su conformación, con el objetivo de constituir redes de apoyo mutuo con este sector social, es la realización de una olla popular de carácter “autogestivo”. En un volante que distribuyen a quienes asisten a ella, la asamblea de Ángel Gallardo y Corrientes aclara que la misma “no tiene nada que ver con el asistencialismo o la caridad de la iglesia que no busca otra cosa que limpiarse la conciencia dando limosna y mantener la brecha entre ricos y pobres. Nuestra olla pretende ser un lugar de encuentro en el que todos los que participemos de él lo sintamos como propio y, además de combatir el hambre que genera este sistema, empecemos a construir, a partir de la solidaridad, la autoorganización y la lucha, otra forma de relacionarnos, mirándonos a los ojos y preguntándonos cómo cambiar esta realidad” (2002).

Con respecto a los movimientos piqueteros, desde un comienzo, la relación ha sido muy fluida, plasmada en la famosa consigna: “pique y cacerola, la lucha es una sola”. Podemos mencionar el recibimiento por parte de los vecinos nucleados en la asamblea popular de Liniers realizado a los hombres y mujeres integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) como uno de los puntos culminantes del encuentro entre ambos sectores. En esta ocasión, más de 200 personas prepararon en Rivadavia y José León Suárez una calurosa bienvenida a los miles de trabajadores desocupados que ingresaban a la ciudad de Buenos Aires, en el marco de una marcha originada en el partido bonaerense de La Matanza. Esto, de acuerdo al testimonio de un miembro de la asamblea, fue una verdadera “fiesta de confraternidad”, ya que “antes, en todas las marchas que hacían los desocupados, los comerciantes de Liniers cerraban las persianas automáticamente. Pero, por un trabajo que se hizo en el barrio, por primera vez se mantuvieron las persianas abiertas”.

Asimismo, debemos destacar el hecho de que varias comisiones de desocupados de asambleas hayan devenido, con el tiempo, en espacios autónomos con una dinámica de construcción propia y diferenciada: de las prácticas desplegadas por parte de la asamblea de San Telmo surgió, a mediados de 2002, el núcleo embrionario del Movimiento de Trabajadores Desocupados de San Telmo; de la de Juan B. Justo y Corrientes y parte de la de Villa Crespo, el MTD de Villa Crespo; de la de Parque Lezama, un importante sector de lo que luego constituiría el Polo Obrero de San Telmo y La Boca; y de la del barrio de Floresta, el MTD “1° de mayo”.

En otras ocasiones, el reparto de bolsones de comida por parte de asambleas generó un vínculo cercano al asistencialismo con vecinos en condiciones de pobreza extrema, tornando problemático el trabajo territorial en el barrio. El resto de las asambleas, si bien no descartan prácticas en común con ningún grupo, han ido priorizando, crecientemente, el vínculo y la solidaridad con los MTDs integrantes de la Coordinadora Aníbal Verón, debido a su mayor grado de afinidad, por su carácter “autónomo”. De hecho, alrededor de veinte de ellas han conformado un espacio de reunión mensual denominado Ronda de Pensamiento Autónomo, que, si bien comenzó realizándose en la fábrica recuperada Grisínópoli, al poco tiempo se trasladó a Roca Negra, un predio cedido por las Madres de Plaza de Mayo a los MTDs de Solano, Almirante Brown y Lanús, ubicado en el barrio de Monte Chingolo²⁸.

28 Algunos asambleístas entrevistados reconocen haber tenido conflictos en sus barrios con ciertos movimientos piqueteros, en especial con aquellos que “responden” a partidos de izquierda. Por ejemplo, podemos mencionar el caso de la asamblea de Parque Rivadavia y el Movimiento Sin Trabajo “Teresa Vive” (brazo piquetero del MST), o el de las asambleas de Villa Crespo y el Cid

A su vez, con relación a las empresas “recuperadas” (gestionadas, bajo diversas modalidades, *sin patrón*), nuevamente podemos referirnos a la asamblea de Colegiales, Chacarita y Villa Ortúzar, que ha apoyado desde el comienzo la lucha de los obreros de Grissinópolis (fábrica de grisines rebautizada por ellos como Cooperativa “Nueva Esperanza”), brindando cobertura social a sus actividades políticas y culturales. La asamblea de Pompeya, asimismo, realizó numerosas acciones en pos del fortalecimiento de las prácticas autogestivas defendidas por la imprenta Chilavert, que incluyen la apertura de un centro cultural en sus instalaciones. La asamblea de Lacarra y Directorio, por su parte, si bien no tiene una cercanía geográfica con la fábrica metalúrgica IMPA (gestionada por sus trabajadores desde 1998), ha establecido con ella (y, en un plano más general, con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas) redes de solidaridades, así como planificación de prácticas en común, llegando inclusive a pensar en la presentación de una lista unificada para la elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. También la asamblea de San Cristóbal, y la de San Juan y Boedo, han hecho lo propio con las trabajadoras de la empresa textil Brukman, lográndose generar inclusive un espacio de coordinación entre asambleas –que funcionó durante varios meses todos los miércoles a las 19 hs– en la plaza donde se ubicaba la *carpa del aguante*, instalada a metros de la fábrica como repudio al violento desalojo sufrido por parte de las fuerzas policiales. La organización del “maquinazo” del 30 de mayo frente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, el “mesazo” del 13 de junio en el microcentro para juntar firmas y otras actividades de menor envergadura contaron con la iniciativa y participación activa de numerosas asambleas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Por último, el Hotel Bauen, ubicado en pleno centro porteño, contó desde los primeros días con “guardias” rotativas brindadas por numerosas asambleas, y hoy se ha convertido en un ámbito de confluencia y hermandad de estos sectores en lucha.

LOS ESPACIOS RECUPERADOS

La dinámica de constante deliberación y acción callejera antes descrita fue generando en muchas asambleas una *bifurcación* en su trayectoria que dio comienzo a un proceso propio de ocupación de predios abandonados, con el objeto de recuperarlos para su uso público. En algunos casos, este derrotero estuvo acompañado por un abandono de las

Campeador que, luego de haber “recuperado” predios, devinieron territorios a ser “disputados” por grupos como el Polo Obrero. Por lo general, la crítica de estos últimos a las asambleas se vincula con la “composición de clase” de las organizaciones vecinales, su tendencia hacia el horizontalismo y el debate “excesivo”, y su “falta de práctica política concreta”.

esquinas y plazas como ámbito de reunión, trasladando las asambleas a lugares públicos pero cerrados; y, en tal sentido, los ámbitos ocupados fueron un espacio privilegiado para esos encuentros (Quintar et al., 2003). La noción de lo “público no estatal” cobró, en estas ocasiones, una relevancia sustancial a los efectos de caracterizar el tipo de densidad asociativa que se pretendía construir territorialmente.

Su función comunitaria fue variando de acuerdo al tipo de lugar “recuperado”, pero en todos los casos implicó un sinuoso tránsito desde dispositivos asamblearios de debate colectivo a la búsqueda de concreción de formas de *gestión* popular solidaria, a través de la implementación de comedores para sectores pauperizados, emprendimientos de trabajo cooperativo, ferias artesanales, salas de asistencia médica y centros culturales, que inauguraron nuevas prácticas políticas, no exentas de tensiones.

La ocupación de predios y espacios públicos por parte de diversas asambleas barriales fue una de las actividades más originales y pujantes realizadas desde este movimiento. El primer espacio fue un ex Banco Mayo ubicado en las inmediaciones de Parque Avellaneda. Al poco tiempo, el sábado 16 de febrero, la asamblea de Vecinos Autoconvocados de Villa Urquiza recuperó para el barrio, con el objetivo de convertirlo en una plaza pública, el predio que supermercados Coto había usurpado “ilegítimamente”. De acuerdo a los vecinos, “mediante una dudosa concesión por 20 años, la empresa pretendía asegurar la posesión de espacio sin contemplar los intereses del barrio” (*Periódico Asamblea de Villa Urquiza*, 2002). Semanas más tarde, varias asambleas avanzaron en un mismo sentido tomando espacios, en sus respectivos barrios, sumidos en el abandono y la suciedad, para convertirlos en ámbitos de experimentación colectiva²⁹.

Según relatan varios asambleístas que participaron en tomas de espacios, en cada uno de los casos ha sido una constante el hecho de que los meses posteriores a la apropiación del edificio estuvieron surcados por las lógicas contingencias vinculadas a cómo garantizar en el tiempo

29 A modo de simple descripción, podemos mencionar los siguientes: asamblea Popular del Cid Campeador; Av. Ángel Gallardo 752 (local abandonado del Banco Mayo); asamblea de Florida Este, Vicente López (ex complejo de canchas de paddle); asamblea de Almagro, Medrano al 400 (predio abandonado); asamblea de Villa Crespo, Padilla y Scalabrini Ortiz (local abandonado del Banco Provincia); asamblea de Parque Lezama Sur, Suárez 1244 (local abandonado del Banco Mayo); asamblea de Paternal, Cucha Cucha 2452 (predio municipal); asamblea de Villa Pueyrredón (lavadero de autos abandonado); asamblea Popular de Villa Urquiza, Triunvirato entre Monroe y Roosevelt (ex pizzería La Ideal); asamblea de Villa del Parque, Cuenca y Marcos Sastre; asamblea de Parque Avellaneda, Lacarra y Directorio (ex bar La Alameda); asamblea Palermo Viejo, Bompland 1660 (ex mercado municipal); asamblea Plaza Palermo Viejo, Gurruchaga y Nicaragua (ex mercado municipal); asamblea de Saavedra, Plaza Oeste y Núñez; asamblea de las 7 esquinas, Escalada y Alberdi (ex mercado abandonado); asamblea de Corrientes y Juan B. Justo, Humboldt y Corrientes (local abandonado).

la *toma* del local (Svampa et al., 2002: 54). La mayoría de la veces, esta cuestión tendió a desgastar a los integrantes de la asamblea, en la medida en que, tal como testimonian numerosos vecinos, muchas de sus prácticas “estaban supeditadas a ese objetivo prioritario”.

El balance provisorio brinda resultados disímiles: mientras que en unos pocos casos la ocupación de edificios generó una especie de implosión y quiebre al interior de la asamblea vecinal (tal es el caso de la frustrada experiencia del predio recuperado por la asamblea de Villa Crespo), en otros brindó un espacio para la expansión de múltiples actividades comunitarias de vinculación con el barrio (Asamblea Popular del Cid Campeador y La Alameda de Lacarra y Directorio), potenciando –y hasta desbordando– la práctica territorial de los propios asambleístas.

A pesar de que en un comienzo no sufrieron grandes amedrentamientos judiciales, a lo largo de 2003 varios de los predios recuperados han sido desalojados, en un contexto de ofensiva enmarcado en acciones similares sufridas por los habitantes del Patronato de la Infancia (edificio público en desuso ocupado por decenas de familias “sin techo”), integrantes del MTD de San Telmo, artistas del Centro Cultural Tierras del Sur y del Circo Trivenchi, y trabajadores de las fábricas Sasetru, Zanón y Brukman. Por su parte, la asamblea vecinal de Boedo fue obligada a desalojar el local lindero a la autopista en el cual, además de realizar actividades culturales y educativas, funcionaba un merendero. También la asamblea de Lezama Sur perdió el edificio del ex Banco Mayo, ubicado en Suárez 1244, luego de un impresionante operativo policial que desplegó más de 50 agentes. Meses más tarde, la asamblea de Haedo, en provincia de Buenos Aires, padeció un desalojo similar, y todo parece indicar que en el corto plazo varios espacios más se encuentran amenazados por la misma problemática³⁰. El caso más emblemático ha sido el de la asamblea popular “20 de diciembre”, de Parque Avellaneda: luego de sufrir un desalojo, los vecinos lograron recuperar el predio, y se encuentran a la espera de la sanción de una ley de expropiación por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Es por ello que la adquisición reciente de predios por parte de asambleas tiene un carácter menos confrontativo, y se vincula más a la negociación con el Gobierno de la Ciudad que al esfuerzo y aporte solidario de los propios vecinos. Así, desde hace unos meses, la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes obtuvo un permiso municipal para usufructuar un local ubicado en Humboldt y Corrientes, mientras que la asamblea

30 Las respuestas frente a la posibilidad de un desalojo son múltiples: mientras que asambleas como la de Lacarra y Directorio y la de Paternal se encuentran gestionando la conformación de una cooperativa legal, a los efectos de continuar usufructuando el predio, en otro caso, los integrantes de la asamblea de Almagro –especialmente los más jóvenes– se muestran reticentes a cualquier negociación con el Estado, instando a la realización de acciones de resistencia civil en contra de su accionar judicial.

popular de Liniers optó por alquilar uno en Cosquín al 500, a metros de donde realizan su reunión habitual.

LOS SOCIO-EMPREDIMIENTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA “ECONOMÍA SOLIDARIA”

Una de las actividades que más se ha extendido en los últimos dos años en varios barrios capitalinos es la consolidación de socio-emprendimientos (diferenciados, en la mayoría de las veces, de los microemprendimientos, asociados a los proyectos que tienden a ser financiados por las ONGs y el Estado) que apuestan a una “producción libre de explotación”, en base a un “precio justo” y un “consumo responsable”, según los comentarios de varios asambleístas consultados. La experiencia de mayor envergadura es la impulsada por los integrantes de la asamblea de Núñez-Saavedra, quienes, teniendo como punto de partida un emprendimiento llamado “La bolsa y la vida” (anclado en las tradicionales compras comunitarias), avanzaron en la constitución de una red cooperativa de distribución de productos generados por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el Movimiento Agrario Misionero, quinteros del Gran Buenos Aires, fábricas recuperadas y emprendimientos realizados por varias comisiones vecinales. Procurando el encuentro de consumidores dispuestos a optar por artículos elaborados de forma alternativa, la cooperativa apuesta a que estos tengan un precio “en el que se cristaliza una relación que trasciende la compra-venta y supone un intercambio social donde lo determinante es el valor del trabajo incorporado” (volante de La Asamblearia, octubre de 2003).

Asimismo, merece destacarse la fabricación de artículos de limpieza por parte de la asamblea Gastón Riva de Caballito, la elaboración de papel reciclado por miembros de la asamblea de Villa del Parque, las artesanías y títeres en cartapesta realizados por la asamblea de Scalabrini Ortiz y Córdoba, las bolsas de residuos generadas por los vecinos de Pompeya, así como el taller de reciclado de computadoras del Espacio de Proyectos de Parque Patricios, la fabricación de pañales por la asamblea de Boedo, la producción de alpargatas por parte de la de Plaza Palermo Viejo de fideos artesanales en la de Colegiales, y las ferias de productos comunitarios armadas por la asamblea de Ángel Gallardo y Corrientes en su tradicional esquina, y por la de Palermo Viejo en un enorme predio recuperado en la calle Bompland, en donde funcionaron durante meses más de cien puestos de exhibición e intercambio. De acuerdo con un proyecto diseñado por los integrantes de esta última asamblea, la “economía solidaria” es una apuesta a “resignificar el intercambio económico a partir de nuevas relaciones entre los ámbitos de la producción, la circulación y el consumo”, fortaleciendo “todo el

movimiento de autogestión social y de formas colectivas de gestión de lo público” (Asamblea de Palermo Viejo, 2003).

Por su parte, Lucio, de la asamblea de Núñez-Saavedra, reconoce que este sector o “subsistema de economía alternativa”, al menos por el momento, “necesariamente va a tener que manejarse dentro de un contexto capitalista”. Sin embargo, agrega que la de ellos constituye “una forma de producir, distribuir y consumir que rechaza el lucro y pone el acento en la forma de decisión igualitaria y democrática”. Más allá de las posibles limitaciones, consideramos que este tipo de prácticas, muchas de ellas todavía embrionarias, apuestan a reinventar un universo de *comunidades político-laborales* compuesto no meramente de “ciudadanos”, sino de cooperantes voluntarios que (re)construyen vínculos y tejidos sociales, así como bienes públicos, capaces de contrarrestar el poder privatista del capital, sin delegar ese cuidado en funcionarios profesionales.

LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN ENTRE ASAMBLEAS

La conformación de la Asamblea Interbarrial –cuya primera reunión data del 13 de enero de 2002 en el Parque Centenario– apareció, al menos en sus comienzos, como un emergente de *coordinación* entre las más de treinta asambleas que venían funcionando desde el mes de diciembre en Capital Federal y, en menor medida, en el Conurbano bonaerense³¹. Su función primordial era potenciar los reclamos de los vecinos de la ciudad y, a la vez, crear un espacio en donde puedan discutirse objetivos comunes. Si bien durante los primeros meses mantuvo su heterogénea masividad (con una concurrencia semanal fluctuante de entre mil y cuatro mil personas), poco a poco su rol se fue desvirtuando, deviniendo en una arena de resolución de los conflictos y mezquindades de los partidos políticos y organizaciones de izquierda más sectarias. Esto fue percibido por numerosas asambleas, que optaron por generar instancias intermedias de articulación entre ellas mismas, en función de la cercanía geográfica y la filiación barrial. Así es como han ido emergiendo las Interzonales y las Mesas de Enlace, conformadas por alrededor de una decena de asambleas, aunque su número varía según el caso. Estos espacios, si bien hicieron menguar el nivel de intervención de los vecinos en la Interbarrial de Parque Centenario, instaron a su vez a un profundo debate acerca de las modalidades de deliberación en este último ámbito. Como consecuencia, se decidió finalmente modificar la dinámica de participación en la Interbarrial, restringiendo la votación resolutive a un delegado rotativo

31 En el caso de la provincia de Buenos Aires, se llegaron a constituir con menor fuerza otras Interbarriales: Zona Norte (frente a la Quinta de Olivos); La Plata, Berisso y Ensenada; Zona Oeste (en la Unión Ferroviaria de Haedo); y Lomas de Zamora. También en Rosario funcionó durante varias semanas un espacio de coordinación de similares características.

con mandato por asamblea barrial³². No obstante, en un primer momento logró aglutinar a un gran número de asambleas de Buenos Aires, a punto tal que el 17 de marzo de 2002 se llevó a cabo la primera Asamblea Nacional Interbarrial, reuniendo a alrededor de 150 asambleas de todo el país en la zona de Parque Centenario. Meses más tarde, se intentaría repetir la experiencia con la segunda Asamblea Nacional, aunque en un contexto ya de reflujó general de este movimiento en el país³³.

Otro ámbito de articulación asamblearia fue el llamado Espacio de Colombres. La denominación alude a la calle donde se encuentra ubicado el Centro Cultural creado por ex empleados del Banco Mayo, y que es utilizado por numerosas organizaciones sociales y políticas para la realización de reuniones y encuentros en común. En este caso, su surgimiento se vincula con algunos partidos –el Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Partido Comunista– que explicitaron al interior de las asambleas barriales la necesidad de configurar una instancia en la cual confluyan movimientos de tipo social con organizaciones “estrictamente políticas”.

Por su parte, la Asamblea Interzonal de Salud, o Intersalud, nuclea a los referentes de las Comisiones de Salud que funcionan en cada una de las asambleas barriales de Capital Federal y GBA. Constituida entre marzo y abril de 2002 en función de la confluencia en la acción de dichas comisiones, según sus propias palabras, trata de “encargarse del problema cada vez más agravado de la salud en la Ciudad y alrededores”. En tal sentido, visitan hospitales públicos, piden medicamentos a laboratorios, realizan eventos, se conectan con trabajadores de la salud y pacientes, han participado del Foro Social de Salud y debaten medidas a tomar ante la inacción o complicidad de los responsables de esta situación. La Intersalud también ha elaborado un programa de 30 puntos con demandas específicas del área. Uno de sus logros más importantes ha sido el proyecto de fábrica de pastas y panadería para el Hospital Borda, el cual, con sólo 20.000 pesos que tiene que ceder el Gobierno de la Ciudad, puede alimentar y dar trabajo no sólo a los internos de ese hospital, sino también a los del Moyano y el Tobar García, y a los comedores

32 Sugestivamente, la reunión Interbarrial concluyó con el canto generalizado de una consigna: “¡Respeten los mandatos, basta de aparatos!”.

33 Recién el 7 de junio de 2003, convocado por las asambleas de la provincia de Entre Ríos, se realizó en Paraná un nuevo encuentro que aspiraba a tener un carácter *nacional*. Sin embargo, por la escasa difusión y relativa lejanía, no participaron demasiadas asambleas de Capital Federal y Gran Buenos Aires, aunque sí hubo representantes del Encuentro de Asambleas Autónomas. Una nueva reunión nacional ha sido llamada para el 9 de agosto de 2004 en Rosario. El temario central a debatir es el siguiente: la unidad asamblearia desde la autonomía y la diversidad; la construcción de una Red Nacional de Asambleas; y la construcción de una “herramienta política nueva, útil para promover el cambio”.

populares de los barrios de la Boca y Barracas. En su último Informe de Reunión del 23 de junio de 2003, han expresado en tono crítico:

La Intersalud no pretende ser el espacio líder en defensa de la salud y el hospital público y gratuito, sino aportar lo mejor que pueda a la lucha y buscando permanentemente la coordinación con otros espacios de luchadores tan válidos como el nuestro. En esa dirección venimos recomponiendo nuestro espacio con un criterio más abarcativo de contención y potenciación de las compañeras y compañeros. Como en su momento hemos acordado, la Intersalud no es sólo un ámbito de assembleístas sino también de todos aquellos que en forma individual o de grupos estén comprometidos en la lucha contra estas políticas sanitarias, construyendo al mismo tiempo coordinación y unidad para ser más contundentes con nuestras iniciativas.

Del mismo modo, merece destacarse la Comisión por el control y recuperación de los servicios y empresas públicas privatizadas, surgida en febrero de 2002 en el seno de la Interbarrial de Parque Centenario. Una assembleísta miembro entrevistada relata:

[La Comisión] se viene juntando desde hace más de un año, más específicamente la primera reunión en Colombres fue el 7 de mayo de 2002 (me acuerdo porque era el aniversario del nacimiento de Eva); desde ahí hubo reuniones todos los martes. Aparte también se hicieron encuentros para temas particulares. La idea de empezar a reunirse todas las asambleas surgió en Parque Centenario; después de que cada asamblea hablara, se nos ocurrió juntar a todas las que habían hablado de esto. Si bien nuestra asamblea había pensado en hacer algo al respecto, al poco tiempo nos empezamos a reunir con otros de la mesa de enlace³⁴.

34 Entre las principales actividades realizadas, podemos destacar: elaboración de un “exigitorio” que, al ser respaldado por miles de firmas de vecinos con quienes se debatió en profundidad el tema, fue presentado en la Cámara de Diputados y la Defensoría del Pueblo de la Nación; realización de una encuesta en los diferentes barrios porteños, “apuntando sobre todo a ver qué medida de desobediencia civil estaba dispuesta a hacer la gente” en contra del aumento tarifario; escraches varios en muchas oficinas de las empresas privatizadas y de entes reguladores, según lo decidían la distintas asambleas; charlas informativas y de debate, con especialistas y trabajadores; apoyo y participación en actos y acciones del espacio de resistencia “Salvemos al tren”; audiencia pública “popular” frente a la oficina central del Ente Regulador del Agua (ETOSS), convocada por las asambleas barriales; apagón con cacerolazo, la noche anterior a ser realizada la primera Audiencia Pública convocada por el organismo regulador del servicio de agua; movilización y corte de calle en la sede central de la empresa Aguas Argentinas; presentaciones y movilizaciones en los Tribunales a los jueces que debían decidir si daban curso a los amparos presentados por las defensorías y asociaciones ante los diversos intentos de aumentos de tarifas; y caravana vecinal de “resistencia contra el tarifazo” por todos los barrios capitalinos y algunas zonas de la Provincia de Buenos Aires, finalizando en la sede de Aguas Argentinas.

La Intertomas, a su vez, se gestó como una necesidad por parte de aquellas asambleas que habían recuperado predios, ante las constantes intimidaciones judiciales que sufrían. Su actividad ha sido sumamente acotada, y en la actualidad ha dejado de reunirse. Teniendo como lema la consigna “si tocan a una, tocan a todas”, sirvió en un comienzo como espacio de socialización de prácticas de resistencia frente a la posibilidad de desalojo, o bien a la intención de tomar algún edificio público.

Piquete y Cacerola es un espacio generado a iniciativa de la asamblea de Lezama y de asambleístas integrantes del Partido Obrero, en el marco de las sucesivas Asambleas Nacionales de Trabajadores Ocupados y Desocupados, convocadas en su mayor parte por el Bloque Piquetero Nacional, aunque con presencia de otros sectores sociales, sindicales y políticos. En él confluyen alrededor de diez asambleas que han tenido un rol más protagónico en la vinculación con el movimiento piquetero. En la actualidad ha menguado el nivel de participación de las asambleas barriales. De acuerdo con un vecino participante del espacio, esto en parte fue producto “del intento de algunas de ellas de hegemonizar su dirección”.

Por último, recientemente comenzó a funcionar el llamado Encuentro de Asambleas Autónomas, en tanto instancia aglutinante de aquellas asambleas que no se encuentran subordinadas a partidos políticos o instancias gubernamentales como los Centros de Gestión y Participación. Si bien la primera reunión ocurrió en enero de 2003 en el barrio de Villa Real, el antecedente inmediato que dio lugar a su conformación fue la Primera Jornada Nacional de Intercambio de Experiencias de Asambleas realizada el 7 de septiembre de 2002 en Villa Elisa (La Plata), que contó con la presencia de miembros de 19 asambleas. Cada encuentro general se realiza una vez por mes, de manera rotativa, por lo general en predios recuperados. Allí, en una primera etapa se debate en Comisiones (Política Institucional, Trabajo y Economía Solidaria, Salud, Cartoneros, Justicia, Medios Alternativos, Empresas Privatizadas, Cultura y Vivienda), para luego realizar una puesta en común, dando lugar a un Plenario en donde se discuten las acciones centrales a desarrollar por parte del movimiento asambleario en las próximas semanas. En la actualidad, están participando en este ámbito buena parte de las asambleas de Capital y Gran Buenos Aires, con la salvedad de que la mayoría de quienes asisten no lo hacen con “mandato”.

En medio de una tensa turbulencia, cruzada por intentos de cooptación por parte de ciertos nucleamientos de izquierda y amenazas o represiones realizadas por patotas del Partido Justicialista, ha resultado sin duda todo un logro que, tras el supuesto repliegue generalizado que se vivió en los meses posteriores a la caída de De la Rúa, se hayan mantenido incólumes buena parte de las asambleas vecinales y sus ámbitos de coordinación, consolidando cada una de las prácticas horizontales

y democráticas que las caracterizan, en el propio territorio del barrio. Más aún teniendo en cuenta que los espacios que se vienen ensayando últimamente –no sólo entre asambleas sino también con respecto a otras organizaciones– tienden a sepultar los vicios y mezquindades vanguardistas que en un comienzo atravesaban instancias como la de Parque Centenario o Colombres.

Hoy, los mejores ejemplos de ello son, además del mencionado Encuentro de Asambleas Autónomas, las Rondas de Pensamiento Autónomo. En ambos casos, más allá de ciertos límites y tensiones, se busca generar un diálogo entre prácticas y saberes sociales, multiplicando los ámbitos informales y deliberativos ajenos a la representación delegativa. Estas y otras instancias de *composición* no implican, sin embargo, una apuesta en pos de que la desobediencia disruptiva se concentre en un solo punto que opere como antesala de una futura mayoría gubernamental. Lo más fructífero no parecen ser los “plenarios” fogoneados por los pocos integrantes de partidos de izquierda que aún pululan por las asambleas, sino los bordes que se tejen de manera subterránea en estas redes, socializando experiencias e iniciativas varias, distanciadas tanto de la acción espectacular como del autismo político.

A MODO DE CONCLUSIÓN: LAS ASAMBLEAS BARRIALES COMO LABORATORIOS DE EXPERIMENTACIÓN

Revisadas las principales dimensiones que caracterizan a las asambleas barriales, podemos expresar que la multiplicidad de emprendimientos, acciones y espacios de coordinación llevados a cabo por las asambleas les han permitido conquistar una legitimidad social considerable en la población, que ya no ancla en la práctica mediática que al inicio reificaban muchas de ellas a través de desgastantes movilizaciones hacia la Casa Rosada, supuesto emblema del “poder”. Numerosos vecinos que quizás no participan más, físicamente, de la asamblea de su barrio, mantienen todavía una vinculación permanente con ella a través de variadas redes de intercambio y apoyo, que exceden en demasía a la propia reunión semanal. A tal punto esto es así que, en varias ocasiones, ocurre que el arraigo territorial de la asamblea es inversamente proporcional a la cantidad de miembros que la componen. De cientos de vecinos vociferando de manera caótica en esquinas y plazas, hoy han quedado –luego de sucesivos tamices– comprometidos activistas que pueden ser vistos como *sedimentos* del 19 y 20 de diciembre de 2001, materializados en prácticas cooperantes, periódicos alternativos, bibliotecas y ollas populares, comisiones de trabajadores desocupados, talleres de serigrafía, de salud reproductiva y de autoempleo, merenderos, grupos de arte callejero, y un conjunto de actividades colectivas que conforman un espacio “público no estatal”, allí donde antes existían

bancos quebrados, predios abandonados, terrenos baldíos, espacios privatizados o lazos de solidaridad rotos. En esta edificación, medios y fines instituyen una reciprocidad inmanente.

En la actualidad, varios son los interrogantes que atraviesan a las asambleas: cómo articular lo estrictamente barrial con las luchas nacionales, regionales y hasta mundiales que se desenvuelven a diario de forma dramática, o cuáles deben ser los criterios que fomenten la conformación de nuevas relaciones sociales *duraderas* y sustraídas de la lógica de la dominación estatal, sin perder la creatividad exploratoria que constituye la columna vertebral del movimiento. Las respuestas, por supuesto, no son meramente teóricas, sino un producto de la praxis que se va delineando en el propio andar. De ahí que “Caja de Pandora” sea quizás la metáfora más correcta para caracterizar el destino de las asambleas barriales, en la medida en que su forma de construcción supone una apuesta sin garantías. Por ello, si bien podemos expresar que las asambleas han sido y son un complejo espacio “público no estatal” en el cual se combinan, de manera desigual, las diversas dimensiones constitutivas enunciadas a lo largo de este artículo, desde su inicio mismo esta instancia estuvo atravesada por diferentes tensiones y ambivalencias, cuya persistencia y cristalización ponían en riesgo, según Svampa (2002a), esa misma dinámica inaugural.

Cierto es que algunas asambleas han desaparecido, otras sufrieron divisiones, y muchas han mutado o bien sobreviven al calor de la intemperie y la fragmentación, con unos pocos vecinos que a fuerza de pulmón y alegría batallan contra la soberbia del poder. No obstante, luego de sucesivas marchas, represiones, rupturas, abandonos y frustraciones, siguen aventurándose a construir una nueva manera de hacer política, anclada en una temporalidad opuesta a la electoral. La cuestión es saber si, como vecinos de la ciudad, estamos dispuestos a ejercer prácticas de in(ter)venición desde su núcleo vivencial, para que –tal como añoraban los surrealistas del siglo pasado– nuestros sueños *conmuevan* la realidad.

APÉNDICE

EXCURSUS: NOTAS INTERPRETATIVAS SOBRE LA CONSIGNA “¡QUE SE VAYAN TODOS!”

Sin duda alguna, la consigna *política* que aglutinó desde el comienzo a las asambleas barriales fue: “¡que se vayan todos!”. Las interpretaciones en torno a su significado han sido, desde ya, múltiples. No es nuestra intención reproducir en este apartado cada una de ellas, sino más bien dar cuenta de las tensiones discursivas, así como de las potencialidades que la frase encierra. Repetida hasta el hartazgo, ella podría implicar –desde una lectura inmediatesta y literal– la suposición de que el problema político crucial se reduce a un cambio de autoridades al

interior del aparato estatal (sintetizado en la apelación a la “caducidad de todos los mandatos”), sin realizar en paralelo una crítica radical al mismo, conteniendo por tanto el peligro potencial de caer en una concepción instrumentalista del Estado. Una vez “saneado”, este asumiría un carácter neutro, permitiendo que los nuevos *representantes* llenen de contenido anticapitalista dichas estructuras. Este discurso subyace en forma explícita en agrupaciones como la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), pero empapa también a varios de los partidos de izquierda que participan activamente al interior de las asambleas³⁵.

Sin embargo, si bien no desmerecemos esta interpretación (esencialmente como posibilidad cierta), desde otro ángulo podríamos aventurar que el sintagma contiene un aporte fundamental a la construcción de una alternativa total a la escisión entre dirigentes y dirigidos. Tal como se postula en Fernández et al. (2002: 73), el mismo no opera tanto a modo de propuesta programática, sino que confronta con la política pensada en términos de lo posible, poniendo en evidencia la radicalidad de aquello que habrá que inventar colectivamente. Por ello, la importancia no estribaría en la literalidad inocente de la frase, sino “en el vacío que deja cuando reclama aquello que no es posible”, demandando la ineludible invención de lo por-venir. Asimismo, configura una universalidad que no busca englobar ni *atravesar* a las diversas identidades presentes durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, abriendo “una zona de creación y disputa política acerca del sentido de la misma en la que puede participar cualquiera” (Cerdeiras, 2002: 63).

Podemos postular que, además, el enunciado sintetiza algo que para el marxismo tradicional resulta una piedra en el zapato: el que se vayan todos es, por definición, anti-vanguardista. La *negatividad* –paradójicamente positiva– y el quiebre con respecto al orden existente son el motor político de las asambleas. Más allá de ellas no hay casi nada, salvo las nuevas e inestables relaciones humanas sobre las que se solventan. En este sentido, Walter, de la asamblea de Colegiales, Chacarita y Villa Ortuzar, expresa que el slogan ¡QSVT!, si bien “nació antes de definirse, resume la catarsis del ‘ya no aguanto más’” (Asamblea de Colegiales, Chacarita y Villa Ortuzar, 2002).

Es posible, entonces, afirmar que, más que una crisis de *representantes*³⁶, lo que existe en Argentina desde hace años, y terminó por

35 En el caso de la CTA, su concepción es explicitada en uno de sus documentos gremiales: “El Estado es una herramienta que no es ni buena ni mala en sí misma: un martillo puede ser usado para construir o para destruir, depende quién lo utilice. Ahí se define la voluntad, la intención política” (ATE-CTA, 1996).

36 Al respecto, es interesante destacar la ausencia *absoluta* de dirigentes o voceros asamblearios, en paralelo a la apelación permanente al término “autoconvocados”.

consolidarse el 19 y 20 de diciembre de 2001, es una radical crisis de *representación*³⁷, en el sentido etimológico del término: en Grecia, originariamente estaba ligado a la actuación (praxis) del *prot-agon* que asumía una forma de lucha o combate histórico. En efecto, durante aquella dramaturgia urbana acontecida en un verano tan intenso como caluroso, se impugnó toda una serie de modalidades tradicionales de pensar y hacer política. La precondition para “que venga lo que nunca ha sido” es despojarnos del ropaje de espectadores, (re)apropiándonos creativamente de ese escenario público cuyo tizón aún se mantiene encendido. De lo contrario, tal como profetizaba Marx, la tragedia se repetirá indefectiblemente como farsa.

BIBLIOGRAFÍA

- Adamovsky, Ezequiel 2002 “Imágenes de la nueva y de la vieja izquierda” en *El Rodaballo* (Buenos Aires) N° 14.
- Altamira, Jorge 2002 *El Argentinazo. El presente como historia* (Buenos Aires: Rumbos).
- Asamblea de Ángel Gallardo y Corrientes 2002 “Olla Popular: ¿Quiénes y por qué la hacemos?”, Buenos Aires, mimeo.
- Asamblea de Chacarita, Colegiales y Villa Ortuza 2002 “Boletín” (Buenos Aires) N° 3, 25 de marzo.
- Asamblea de Palermo Viejo 2003 “Proyecto de Economía Solidaria. Aportes preliminares”, Buenos Aires, mimeo.
- Asamblea de Plaza Palermo Viejo 2002 “Boletín” (Buenos Aires) N° 1.
- Asamblea de Scalabrini Ortiz y Córdoba 2002 “Boletín” (Buenos Aires) N° 3.
- ATE-CTA 1996 “¿Un país sin Estado?”, Buenos Aires, mimeo.
- Boron, Atilio 2000 “Los nuevos leviatanes y la polis democrática” en *Tras el Búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).

37 Uno de los mayores críticos de la noción de representación es, sin duda, Antonio Negri. De acuerdo al filósofo italiano, ella opera como “uno de los instrumentos jurídico-constitucionales fundamentales para el control y la segmentación del poder constituyente”, no siendo “más que una rueda de la máquina social de la división del trabajo”. Por contraposición, el poder constituyente “se define emergiendo del vértice del vacío, del abismo de la ausencia de determinaciones, como una necesidad totalmente abierta. Es por esto por lo que la potencia constitutiva no se concluye jamás en el poder” (1994: 20-32). De manera coincidente, diversos autores han caracterizado a la práctica asamblearia como una *construcción desde este abismo*.

- Bresser Pereira, Luiz Carlos y Cunill Grau, Nuria 1998 “Entre el Estado y el mercado: lo público no estatal” en Bresser Pereira, Luiz Carlos y Cunill Grau, Nuria (comps.) *Lo público no estatal en la Reforma del Estado* (Buenos Aires: CLAD).
- Camarasa, Jorge 2002 *Días de furia. Historia oculta de la Argentina desde la caída de De la Rúa hasta la asunción de Duhalde* (Buenos Aires: Sudamericana).
- Cardoso, Ruth 1997 “Fortalecimiento da sociedad civil” en Berg, Evelyn (ed.) *Terceiro setor. Desenvolvimento social sustentado* (São Paulo: Paz e Terra).
- Ceceña, Ana Esther 2000 “Revuelta y territorialidad” en *Actuel Marx. América Latina, los nuevos actores sociales* (Buenos Aires: Kohen & Asociados Internacional).
- Cordeiras, Raúl 2002 “La política que viene” en *Acontecimiento. Revista para pensar la política* (Buenos Aires) N° 23.
- Clarín* 2001 (Buenos Aires) 16 de octubre.
- Colectivo Situaciones 2001 *MTD-Solano* (Buenos Aires: Ediciones de Mano en Mano).
- Colectivo Situaciones 2002 *19 y 20. Apuntes para un nuevo protagonismo social* (Buenos Aires: Ediciones de Mano en Mano).
- Cotarelo, María Celia 2002 “Un punto de inflexión en las luchas populares: la insurrección espontánea de diciembre de 2001” en *Herramienta* (Buenos Aires) N° 19.
- Cunill Grau, Nuria 1997 *Repensando lo público a través de la sociedad: nuevas formas de gestión pública y representación social* (Caracas: Nueva Sociedad).
- De Lucía, Omar Daniel 2002 “La revuelta de diciembre: hipótesis y perspectivas” en *Herramienta* (Buenos Aires) N° 19.
- Dinerstein, Ana 2002 “¡Que se vayan todos! Crisis, insurrección y la reinención de lo político en Argentina” en *Bajo el volcán* (Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) N° 5.
- Fernandes, Rubem 1994 *Privado porém público: o terceiro setor no América Latina* (Rio de Janeiro: Relume Dumará).
- Fernández, Ana 2002 “La lógica situacional de las asambleas: los juguetes rabiosos de los barrios” en *Campo grupal* (Buenos Aires) N° 40.

- Fernández, Ana et al. 2002 “Una apuesta colectiva al borde del abismo. El mar en una botella” en *Cuadernos del Sur* (Buenos Aires) N° 34.
- Fernández, Ana et al. 2003 “Las asambleas y sus relaciones. Espacios colectivos de acción directa” en *Campo grupal* (Buenos Aires) N° 44.
- García Delgado, Daniel y Silva, Juan 1989 “El movimiento vecinal y la democracia: participación y control en el Gran Buenos Aires” en Jelin, Elizabeth (comp.) *Los nuevos movimientos sociales* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina).
- Genro, Tarso 2000 “Los espacios públicos no estatales” en *Reinventar el futuro. Democracia y socialismo en la era de la globalización* (Barcelona: Ediciones del Serbal).
- González Bombal, Inés 1989 “Protestan los barrios (el murmullo suburbano de la política)” en Jelin, Elizabeth (comp.) *Los nuevos movimientos sociales* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina).
- González Bombal, Inés 1995 “¿Entre el Estado y el mercado? ONGs y sociedad civil en la Argentina” en Thompson, Andrés (comp.) *Público y privado. Las organizaciones sin fines de lucro en la Argentina* (Buenos Aires: Losada).
- Gramsci, Antonio 1998 (1977) *Escritos políticos* (Buenos Aires: Siglo XXI).
- Guerrero, Emilio 2002 “Emergencia y desafíos de las asambleas barriales” en *Herramienta* (Buenos Aires) N° 19.
- Harnecker, Marta 1987 *Enemigos, aliados y Frente Político* (El Salvador: Venceremos).
- Hirsch, Joachim 2001 *El Estado Nacional de competencia. Estado, democracia y política en el capitalismo global* (México DF: Universidad Autónoma Metropolitana).
- Intersalud 2002-2003 “Informes de la Comisión”, Buenos Aires, mimeo.
- Jelin, Elizabeth 1987 “Movimientos sociales y consolidación democrática en la Argentina actual” en Jelin, Elizabeth (comp.) *Movimientos sociales y democracia emergente* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina).
- Kohen, Beatriz 1998 “Poder Ciudadano y las acciones de interés público. Un ejemplo de control desde la sociedad civil: el programa de participación y fiscalización ciudadana en Argentina” en Bresser Pereira, Luiz Carlos y Cunill Grau, Nuria (comps.) *Lo público no estatal en la Reforma del Estado* (Buenos Aires: CLAD).

La Nación 2002 (Buenos Aires) 14 de febrero.

MTD-CTD Aníbal Verón 2000 “Trabajo, dignidad y cambio social”,
Buenos Aires, mimeo.

Nardacchione, Gabriel 2000 “La influencia de las nociones de servicio
y vecino para la redefinición de las organizaciones sociales en su
relación con el Estado municipal” en Oszlak, Oscar (comp.) *Estado y
sociedad: las nuevas reglas de juego* (Buenos Aires: EUDEBA) Vol. 2.

Negri, Antonio 1994 *El poder constituyente* (Madrid: Libertarias).

Negri, Antonio 2001 “Contrapoder” en *Contrapoder. Una introducción*
(Buenos Aires: Ediciones de Mano en Mano).

Oszlak, Oscar 1997 “Estado y sociedad: ¿nuevas reglas de juego?” en
Reforma y democracia (Caracas) N° 9.

Ouviaña, Hernán 2001 “Cuando se apaga la luz... se enciende la protesta.
Crónica de una noche eterna anunciada”, Buenos Aires, mimeo.

Ouviaña, Hernán 2002a “El Estado: su abordaje desde una perspectiva
teórica e histórica” en Lifszyc, Sara (comp.) *Introducción al
conocimiento de la sociedad y el Estado* (Buenos Aires: Gran Aldea).

Ouviaña, Hernán 2002b “Las asambleas barriales: apuntes a modo de
hipótesis de trabajo” en *Bajo el volcán* (Puebla: Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla) N° 5.

Ouviaña, Hernán 2002c “¿Minimización o metamorfosis del Estado?
Las transformaciones de la última década en el aparato estatal
argentino” en Bonnet, Alberto; Galafassi, Guido y Zarrilli, Adrián
(comps.) *Modernización y crisis. Transformaciones sociales y
reestructuración capitalista en la Argentina del siglo XX*
(Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes).

Página/12 2002 (Buenos Aires) 22 de febrero.

Perazzi, Pablo 2002 “Radiografía de los MTDs. Un enfoque antropológico”
en *Cuadernos del Sur* (Buenos Aires) N° 34.

Pereyra, Daniel 2003 *Argentina rebelde. Crónicas y enseñanza de la revuelta
social* (Madrid: El Viejo Topo).

Periódico Asamblea de Villa Urquiza 2002 (Buenos Aires) N° 1.

Prensa Obrera 2002 (Buenos Aires) N° 770, 5 de septiembre.

Prensa Obrera 2003 (Buenos Aires) N° 809, 16 de julio.

QSVT 2004 (Buenos Aires: Comisión de Prensa y Comunicación del Plenario de Asambleas Autónomas) N° 3.

Qué son las asambleas populares 2002 (Buenos Aires: Peña Lillo).

Quintar, Aída et al. 2003 “De las asociaciones locales a las asambleas vecinales: ensayando nuevas modalidades de prácticas políticas”, Informe final de Investigación, Universidad Nacional de Gral. Sarmiento, Buenos Aires.

Sanmartino, Jorge y Romano, Manolo 2002 “Crisis de dominio burgués: reforma o revolución en Argentina” en *Estrategia Internacional* (Buenos Aires) N° 18.

Svampa, Maristella 2002a “Las dimensiones de las nuevas movilizaciones sociales: las asambleas barriales” en *El Ojo Mocho* (Buenos Aires) N° 17.

Svampa, Maristella 2002b “Las dimensiones de las nuevas protestas sociales” en *El Rodaballo* (Buenos Aires) N° 14.

Svampa, Maristella et al. 2002 “El análisis de la dinámica asamblearia: las asambleas de Villa Crespo y Palermo” en *Movimientos sociales en la Argentina de hoy. Piquetes y asambleas* (Buenos Aires: CEDES).

Telles, Vera 1994 “Sociedade civil e os caminhos (incertos) da cidadania”, São Paulo, mimeo.

Thompson, Andrés 1995 “Beneficencia, filantropía y justicia social. El ‘tercer sector’ en la historia argentina” en Thompson, Andrés (comp.) *Público y privado. Las organizaciones sin fines de lucro en la Argentina* (Buenos Aires: Losada).

Thwaites Rey, Mabel 2001 “Privatizaciones y reforma del Estado en la Argentina”, Buenos Aires, mimeo.

Virno, Paolo 2003 *Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas* (Buenos Aires: Colihue).

Zilocchi, Gustavo 1998 “Autogestión social de obras y servicios públicos locales. Lo ‘público no estatal’ a partir de un estudio de caso en la ciudad de Córdoba” en Bresser Pereira, Luiz Carlos y Cunill Grau, Nuria (comps.) *Lo público no estatal en la Reforma del Estado* (Buenos Aires: CLAD).

Gabriel de Santis Feltran*

LIMITES DA VIRTUDE ISOLADA

MOVIMENTOS SOCIAIS E POLÍTICA NO BRASIL

APRESENTAÇÃO

Esse artigo conta a história de um movimento popular por terra e reforma agrária do sul do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Nascido no início dos anos oitenta, este movimento gerou um assentamento rural conhecido como Fazenda Pirituba¹, e atravessou contextos políticos muito distintos, da ditadura militar à democracia formal consolidada. A partir de suas relações com estes contextos, extremamente complexas, elaboro uma interpretação dos dilemas que os movimentos populares brasileiros enfrentam hoje, em suas tentativas de agir politicamente.

Alguns critérios fundamentaram a escolha desse estudo de caso, e creio ser necessário explicitar ao menos três deles. Em primeiro lugar, trata-se de um movimento que passou por diversos períodos constitutivos e que, não por acaso, tem praticamente a mesma idade da democra-

* Doutorando em Ciências Sociais e Mestre em Ciência Política pela Universidade de Campinas (UNICAMP), Brasil. Pesquisador do projeto Sociedade Civil, Esfera Pública e Democratização na América Latina, UNICAMP, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP).

1 Na região da área conhecida como Fazenda Pirituba, localizada entre os municípios de Itaberá e Itapeva, no sul do estado de São Paulo, 250 famílias ocuparam 6.700 hectares (160 mil m²) em 13 maio de 1984, dia da abolição da escravidão no Brasil. Este primeiro assentamento rural desta ocupação deu origem à *Área 1*, depois chamada de *Agrovila 1*. Ao longo dos anos mais 5 Agrovilas se estabeleceram, e o total de assentados hoje, chega a 360 famílias.

cia liberal brasileira. Em segundo lugar, trata-se de estudo de caso que se relaciona intimamente com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que é hoje, sem dúvida alguma, o principal movimento popular brasileiro e o que causa maior impacto nas pautas de debate político nacional. Por essas duas razões, tratar da história desse assentamento em sua construção política interna e externa, não se pode fazer sem o foco nas relações que assentados iniciais e movimento tiveram com o Estado brasileiro, nos níveis federal, estadual e municipal, ao longo desse período de vinte anos de lutas. Isso conduz a um terceiro ponto, que também justifica a eleição desse caso na pesquisa realizada: o assentamento Fazenda Pirituba foi e é laboratório de boa parte das concepções de reforma agrária que se traduziram em políticas públicas no Brasil e, portanto, espaço privilegiado para pensar sobre as relações entre os movimentos sociais e o Estado no país.

Apesar de não poder abordar aqui cada uma dessas três características com a profundidade que mereceriam, o caso estudado permite, a meu ver, vislumbrar com algum cuidado os trânsitos entre discursos e conflitos que se construíram internamente a essa experiência, com o campo discursivo e os processos mais ampliados que fortaleceram ou limitaram a capacidade de figuração política dos movimentos sociais brasileiros pelas últimas décadas. Através do mapeamento dos conflitos presentes no cotidiano dos militantes, moradores e assessoria técnica da Fazenda Pirituba, ao longo do tempo, é possível notar de que modo e com que intensidade as dinâmicas internas de seu funcionamento remetem a elementos presentes nas distintas conjunturas que atravessaram os movimentos sociais contemporâneos no Brasil. Em suma, os conflitos percebidos na história deste assentamento permitem ativar análises sobre os campos de tensão política criados no Brasil desde a transição para sua democracia institucional até hoje.

Estes campos de tensão, que remetem à racionalidade eminentemente conflitiva da política, atravessam a argumentação do artigo de fora a fora, por terem aparecido em toda a pesquisa de campo. A partir da análise dos conflitos que constroem o movimento em questão, nesses mais de vinte anos, discuto a relevância de *campos discursivos e públicos* para que os movimentos sociais contemporâneos constituam-se como sujeitos políticos, o que seria sua intenção primeira (Paoli, 1995). Argumento que a diminuição centralmente organizada dos espaços públicos societários e a conseqüente despolitização da vida civil, processos sentidos com força nos anos noventa no Brasil, atuam como obstáculos específicos à circulação das falas populares, e explicam parte da dificuldade dos movimentos sociais aparecerem como sujeitos de transformação política. Especialmente nas regiões urbanas, ainda que se encontre inúmeras práticas movimentistas bem sucedidas do ponto

de vista social, e os movimentos conquistam efetivamente uma série de benefícios para seus integrantes e famílias, suas palavras têm sido progressivamente isoladas do espaço público, o que bloqueia a passagem entre benefícios conquistados e direitos universais.

Em princípio na contramão dessa tendência geral, o MST tem aparecido há alguns anos como movimento fundamentalmente disposto a forjar novos espaços de circulação política de demandas populares no debate nacional. Como pesquisador do tema dos movimentos sociais, é impossível não ficar inebriado ao se deparar com a trajetória do MST, que escapa radicalmente das tendências de desmobilização e perda de força política sentidas na década de noventa por tantas outras iniciativas populares de origem semelhante. Pelo contrário, o MST conseguiu nesse período manter sua visibilidade pública, mantida pela sua capacidade de pressão e de gerar conflitos políticos, e ao mesmo tempo sustentou uma espiral crescente de conquistas sociais efetivas, muitas delas pela via de negociação com governos; atualmente o movimento é um sujeito popular instituído no cenário político nacional, interlocutor indispensável seja para tratar das lutas populares ou das questões fundiárias no Brasil. Desde logo, entretanto, é preciso fazer uma advertência ao leitor desse texto: está longe de minhas intenções e capacidades tratar do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra como um todo, neste artigo. O MST aparece apenas na medida em que as trajetórias empíricas estudadas se cruzam com ele.

Em primeiro lugar, porque a aposta analítica a que me propus implica em deixar de focar especificamente nos sujeitos para, em outra direção, buscar os trânsitos e tensões entre diferentes esferas e relações de poder que eles constituem, e que os constituem. Em segundo lugar, porque seria impossível pensar o MST como um todo a partir da pesquisa empírica tão específica: as proporções que esse sujeito popular tomou no país são imensas e a profundidade da discussão acerca dos seus méritos e contradições são múltiplos na vasta bibliografia sobre ele. O que proponho nesse artigo, em última instância, não é uma análise nem mesmo do assentamento específico de que trato aqui², mas apenas de sua trajetória política. A trajetória da Fazenda Pirituba, contextualizada, me interessa apenas e tão somente na medida em que seus acertos e desacertos, virtudes e contradições, apresentem-se como mediadores dos trânsitos de discursos populares ao mundo público.

Na primeira parte do artigo apresento o mapa das questões teóricas e empírico-analíticas que fundamentam minha argumentação, além de algumas informações sobre a inserção dos movimentos sociais no contexto político brasileiro recente e das apropriações que faço do

2 Para algumas análises específicas do assentamento Fazenda Pirituba, ver Bergamasco e Norder (1999) ou Quevedo (1995).

conceito de política. Na segunda parte do artigo, após apresentar brevíssima trajetória do MST, conto histórias retiradas do estudo de caso realizado em 2003; aí são percorridos diferentes momentos da trajetória das lutas locais estudadas, nas últimas duas décadas. Ao final dessa parte, a trajetória do assentamento é relacionada à trajetória geral do MST e dos desdobramentos mais gerais dos movimentos sociais no Brasil. Essas relações conduzem então à terceira parte do artigo, propriamente analítica, e às notas finais, que recolocam alguns dos dilemas que os movimentos sociais brasileiros me parecem enfrentar atualmente, na sua tentativa de se figurarem como sujeitos políticos.

CONTEXTOS, QUESTÕES

Com o declínio das ditaduras militares, na década de oitenta, a questão democrática ressurgiu na pauta de debates de diversos segmentos sociais e acadêmicos da América Latina. A idéia que se fazia da consolidação democrática, em geral restrita à implementação de um regime político, passou nesse momento a ser questionada por diversos atores sociais, como os novos movimentos sociais, que se mostravam publicamente como sujeitos políticos, as Organizações Não Governamentais (ONGs) que iniciavam sua expansão, então ligada a este movimentos, e as administrações públicas do campo das esquerdas. Surgiram no Brasil, nesse período, propostas críticas e alternativas aos limites da institucionalidade democrática representativa, portanto propostas alternativas de democracia, menos ligadas ao regime político e mais atentas à criação e difusão de uma cultura democrática na textura social³. Sem desdenhar da transição importantíssima de regime político, o que se fazia era apostar nas noções de direitos e cidadania como estratégia para uma construção democrática aprofundada. Direitos e cidadania, portanto, passariam a ser entendidos como calcados tanto nas formas legais quanto, para além delas, na busca por uma sociabilidade igualitária, construída pelo reconhecimento do direito próprio e do outro nas práticas cotidianas. Como afirma Telles (1994), esse reconhecimento seria *medida* de construção da sociabilidade, e seria mesmo a partir dele que se fundamentariam as leis e instituições, numa sociedade democrática⁴.

3 Dagnino (1994: 104-105), cita a necessidade da *construção e difusão de uma cultura democrática* para o aprofundamento da democracia. Para além da democracia no plano formal, os esforços devem ser dirigidos para construir *mais do que um regime político democrático, uma sociedade democrática*.

4 “Não se trata aqui, é preciso esclarecer, de negar a importância da ordem legal e da armadura institucional garantidora da cidadania e da democracia. A questão é outra. O que se está aqui propondo é pensar a questão dos direitos em outro registro. Pois, pelo ângulo da dinâmica societária, os direitos dizem respeito, antes de mais nada, ao modo como as relações sociais se

Esse debate montava, ainda nos anos oitenta, um *campo discursivo* específico no país, que forjava a abertura de canais de debate ampliado. Desde campo surgiam propostas concretas de uma democracia efetivamente mais atenta à difusão de uma cultura democrática, e foi ele que ofereceu pano de fundo para que os movimentos sociais aparecessem na cena pública. Essa foi, sem dúvida, a principal novidade do cenário político nacional nas últimas décadas, e não foi à toa que a aparição popular desse período foi tão tematizada na academia⁵. Foi do interior deste campo político, ainda, que surgiram os experimentos de Orçamento Participativo e Conselhos Gestores de Políticas Públicas, destaques entre as práticas de gestão governamental participativa efetivamente implementadas nas últimas décadas no país, originalmente pelo Partido dos Trabalhadores (PT)⁶.

Entretanto, paralela a essa tendência nacional de construção democrática e abertura de canais de participação popular, e mesmo no interior dela, como se demonstra recentemente, a década de noventa mostrou uma impressionante expansão da privatização neoliberal, no sentido amplo e radicalmente antidemocrático do termo, em muitos setores do globo e particularmente na América Latina. No Brasil, os movimentos sociais não ficaram imunes a esse processo e tiveram sua presença pública dificultada recentemente, o que foi interpretado de modos divergentes pelos analistas⁷. O que se viu nos primeiros anos do

estruturam. Seria possível dizer que, na medida em que são reconhecidos, os direitos estabelecem uma forma de sociabilidade regida pelo reconhecimento do outro como sujeito de interesses válidos, valores pertinentes e demandas legítimas [Os direitos] constroem uma gramática civil que baliza práticas e interações sociais por referência ao que é reconhecido como medida de interações sociais por referência ao que é reconhecido como medida de justiça, medida que é sempre alvo de questionamentos e reformulações nos embates e litígios de posições e interesses, valores e opiniões, mas que é sempre solidária com critérios, muitas vezes implícitos, não redutíveis a prescrições legais, que fazem a partilha entre o legítimo e o ilegítimo, entre o permitido e o interdito, o obrigatório e o facultativo” (Telles, 1994: 91-92, grifo meu).

5 Para revisões da literatura brasileira e européia sobre os movimentos sociais, segundo linhas de abordagens distintas, ver Paoli (1995), Baierle (1992) e Doimo (1995).

6 A implementação de sistemas paritários de deliberação sobre políticas públicas, os Conselhos Gestores de Políticas Públicas (Carvalho e Teixeira, 2000) tornou-se, com o passar dos anos, uma tendência nos diversos níveis de governo no Brasil, do municipal ao nacional, a partir da Constituição de 1988. Os Orçamentos Participativos também cresceram muito na década de noventa, como demonstram os dados de muitas pesquisas recentes no Brasil (ver especialmente Avritzer e Navarro, 2003 ou Ribeiro e Grazia, 2003). Com a ampliação da implementação dessas experiências, aumentam as ambigüidades e ambivalências dos processos participativos institucionalizados; além disso, é bastante claro que o PT deixa de ser o único partido a implementar essas experiências de gestão e que, com a crise do partido, elas deixam de ter o impacto inovador que desfrutavam em sua origem.

7 Essa diminuição da aparição pública dos movimentos foi prematuramente analisada por parte da literatura específica como a “morte” dos movimentos sociais (Carvalho e Laniado, 1989; e mesmo Alain Touraine, entre outros) ou seu “refluxo” (diversos trabalhos de Ruth

novo século, ao lado das tentativas democratizantes, ainda bastante recentes, foi um aprofundamento da desigualdade social e a restrição de sua tematização na cena política. Esta restrição é entendida, aqui, como um obstáculo efetivo à aparição política dos movimentos sociais⁸. Um paradoxo fundamental que se coloca às análises políticas brasileiras, então, está no fato de efetivamente existir um regime político “democrático” consolidado, inclusive repleto de experiências participativas, e que ainda assim permite que a esfera pública, especialmente aquela forjada pelos setores populares, seja tão (e tão progressivamente) restrita.

No caso brasileiro, a constatação desse paradoxo traz de volta a reflexão sobre o traço de autoritarismo que persiste arraigado às práticas cotidianas, muito tratado na literatura nacional, que se constitui em obstáculo fundamental à democratização social. A reposição deste obstáculo, quando esperava-se que ele se diluísse, faz com que a “nova democracia” brasileira seja descrita, por parte da literatura, como uma linha de continuidade do autoritarismo social tradicional, ou até mesmo como “totalitarismo” e “fascismo”⁹. Ainda que haja divergências importantes nesta literatura, toda ela trabalha com a premissa de que é preciso *radicalizar no sentido de cobrar as promessas do conceito; no caso sob exame, as promessas contidas na democracia* (Oliveira, 1998: 221). É nesse contexto analítico que se situa a discussão proposta aqui, sobre o papel político dos movimentos sociais no Brasil de hoje. Para tornar claro de onde parte minha argumentação, exponho a seguir as apropriações que faço neste artigo da noção de política e de seus elementos constituintes.

Cardoso no Brasil). O contraponto a esses autores, talvez otimista demais, vinha dos que observavam nesse processo um “ponto de inflexão”, uma “mudança” nas formas de atuação e no papel exercido pelos movimentos, nessa nova fase mais voltados a ações propositivas e negociadas junto a governos, sem tanto o foco na mobilização de uma base popular ampliada (Carvalho, 1997). Trabalhos como os de Doimo (1995); Alvarez, Dagnino e Escobar (2000); Paoli (1995; 2002), entre outros, procuraram problematizar essas tendências de modo mais elaborado e crítico, entre os pólos, apesar das distinções entre eles.

8 Referências para pensar esse processo, também chamado de *supressão, anulação, seqüestro, acantonamento, deslocamento* ou *encolhimento* da política podem ser encontradas, com muito detalhe, nos diversos capítulos da publicação organizada por Oliveira e Paoli (2000), em especial os textos dos próprios autores.

9 Evelina Dagnino (1994) descreveu, ainda antes de pensar as mudanças impostas pelo neoliberalismo, o que chamou de “autoritarismo social” nas práticas sociais cotidianas. Francisco de Oliveira (2000), já pensando momento atual, introduz a idéia de “totalitarismo neoliberal”, também trabalhado, por outro caminho teórico, por Maria Célia Paoli. Boaventura de Sousa Santos, chama repetitivamente a atenção para o fato de que nas formas ditas democráticas do sistema político escondem-se relações sociais “fascistas”, e pede a “democratização da democracia” (Santos, 2002). Nos movimentos sociais transnacionais têm-se evidenciado a centralidade dos privilégios dos capitalistas no comando das atuais “democracias liberais”, reforçando a tese já antiga de Lindblom (1979) de que a democracia liberal –poliarquia, no sentido de Dahl (1997)– é comandada pelos interesses privados do mercado.

A NOÇÃO DE POLÍTICA E OS MOVIMENTOS SOCIAIS

As distintas matrizes teóricas utilizadas pelos analistas dos movimentos sociais produziram divergências internas à literatura que pensou sobre estes atores. Em relação à noção de política, e aos principais elementos que a constituem, as divergências analíticas fundadas em distintas linhas teóricas de abordagem são muito significativas. A política está baseada em uma racionalidade conflitiva para as correntes do marxismo, que romperam com a tradição reducionista ou economicista. Para essas vertentes, a política teria papel decisivo na História, que não é determinada pela economia, mas herda dela as potencialidades para que construa, ativamente, as transformações na sociedade. A História seria a história das mudanças e a política está no centro das possibilidades de mudança. Partindo dessas premissas, aparecem os principais elementos do conceito de política marxista: o Estado, elemento central da prática política; e a luta de classes, agente de mudanças históricas. O conceito de política marxista se firma, então, como o confronto entre as classes sociais pela tomada e subversão do Estado capitalista¹⁰. Dada a enorme diversidade interna ao debate marxista, baseados nestes critérios analistas marxistas elaboraram juízos também os mais diversos sobre os potenciais transformadores dos movimentos sociais brasileiros desde os anos oitenta.

Em Gramsci a noção de política recoloca os termos desta tradição (Dagnino, 2000: 66). A noção ampliada do político, no autor, inclui de modo central as imbricações entre cultura e política; rompe-se com a idéia da condensação de todas as contradições no Estado, e com a noção de política como dirigida unicamente ao domínio e reconfiguração do aparelho estatal, ainda que entendida em grande medida como surgida do conflito entre as classes sociais. A transformação social em Gramsci é a luta política pela construção da hegemonia¹¹, um modo *específico de construção do poder* (Dagnino, 2000), baseado no *consentimento ativo*, ou seja a adesão voluntária e crítica de setores sociais a uma *concepção de mundo*, nos termos do autor. Abre-se para além do confronto as possibilidades de *oferecer condições de reconhecimento* ao interlocutor político, na conquista negociada de cada vez mais posições na sociedade.

10 Poulantzas (1968: 40-41), sugere essa definição: “[A política é] um modo preciso da prática política: esta tem por objeto o momento atual, produz as transformações –ou por outro lado a manutenção– da unidade de uma formação, na única medida, contudo exata, em que tem como ponto de impacto, como ‘objetivo’ estratégico específico as estruturas políticas do Estado”.

11 “Nesta ação [a hegemonia] não se trata apenas de conquistar o poder, de apoderar-se do Estado, de administrá-lo técnica e pragmaticamente melhor que a burguesia, mas de romper com a concepção de poder e de Estado capitalista, de superar a visão de política como esfera separada, estranha, acima do sujeito e das relações sociais. Para Gramsci, ao contrário, no processo de construção da hegemonia, trata-se de alcançar uma profunda transformação pessoal e social que gere [...] a socialização do político” (Semeraro, 2000).

A forma de entender a política em Gramsci é coerente à sua estratégia de “guerra de posições” para a construção hegemônica no ocidente, em contraposição ao ataque frontal ao Estado (ou Guerra de Movimento), preconizado pelo marxismo clássico. O conflito em Gramsci ganha um terreno de persuasão, na interlocução possível entre atores em luta; usando termo que não é do autor, abre-se a possibilidade de se pensar o espaço público. Hegemonia se distinguiria de dominação, e daí toda a influência dessa matriz de pensamento para pensar os movimentos sociais no contexto da “democratização” latino-americana¹².

Em Hannah Arendt, uma outra matriz teórica utilizada mais recentemente para pensar os movimentos sociais brasileiros, a política tem como elementos constitutivos a idéia de *liberdade*, de *espaço público* e de *palavra, discurso*. Para Arendt, política refere-se a nada mais do que se relacionar com o mundo. Pensar, falar e agir livremente no espaço público. A palavra é política porque proferida por indivíduos que pensam, que refletem, e que por isso habitam o mundo. A palavra política está para Arendt em permanente disputa pública: os conflitos agonísticos sobre as questões de interesse dos homens fazem o sentido real do mundo aparecer, o que permite a aparição de um mundo comum. A política, para a autora, não se refere portanto às categorias sociológicas, como em outras teorias, o que leva Arendt a romper com as noções de política tradicionais das ciências sociais, especialmente da ciência política. A autora procura “recortar” criteriosamente o conceito, remetendo-se para tanto ao período clássico e à filosofia desse período, anterior ao que ela denomina como “ascensão do social” (Arendt, 1987; 1990; 2001). Jürgen Habermas, também amplamente “utilizado” na literatura dos movimentos sociais, herda como Arendt a noção da política como potencialidade comunicativa entre pessoas, mas acrescenta a seu pensamento uma fundamentação epistemológica e normativa que a autora rejeitava veementemente. Quanto à noção de política entendida como *gestão*, das vertentes da ciência política americana de tradição utilitarista (institucionalistas, *rational choicers*, pluralistas, etc.) e tão presente no ideário dominante hoje, sua ruptura é radical, seria desnecessário dizer.

CONFLITO, DISSENSO, ESPAÇO PÚBLICO

Em Hannah Arendt o *conflito* é constitutivo do espaço público, dada a pluralidade existente entre os homens e o pressuposto de liberdade na ocupação desse espaço. Mas não há na autora uma reflexão específica sobre os conflitos introduzidos pelas classes populares na constituição das esferas social e política contemporâneas. Quem faz esse trabalho

12 Para referências do próprio autor, ver Gramsci (1986; 1987).

de forma original é Jacques Rancière, seguindo pressupostos políticos tanto arendtianos quanto marxistas. O autor propõe:

Uma reformulação no conceito de política em relação às noções habitualmente aceitas. Estas designam com a palavra *política* o conjunto dos processos pelos quais se operam a agregação e o consentimento das coletividades, a organização dos poderes e a gestão das populações, a distribuição dos lugares e das funções e os sistemas de legitimação dessa distribuição. Proponho dar a esse conjunto de processos um outro nome. Proponho chamá-lo *polícia* [...] dando-lhe um sentido neutro, não pejorativo [...] Ao ampliar assim o conceito de polícia, proponho restringir o de política. Proponho reservar a palavra política ao conjunto das atividades que vêm perturbar a ordem da polícia pela inscrição de uma pressuposição que lhe é inteiramente heterogênea. Essa pressuposição é a igualdade de qualquer ser falante com qualquer outro ser falante (Rancière, 1996a: 372).

O conflito, proposto por Rancière em crítica aberta à noção de consenso em voga pela difusão (por vezes inapropriada) do pensamento de Habermas, ganha o nome de *dissenso*, forma específica de instaurar a igualdade política em sociedades hierárquicas, ato fundamental para que de fato potencialmente se criem os espaços públicos, e qualquer forma de razão comunicativa. Para Rancière é necessário, dada a desigualdade real e empírica de nossas sociedades, montar primeiramente um mundo comum entre os seres que debatem, e só o dissenso é capaz disso. Só o dissenso, portanto, instaura a possibilidade da política. Nas palavras do autor:

A política, em última instância, repousa sobre um único princípio, a igualdade. Só que esse princípio só tem efeito por um desvio ou uma torção específica: o dissenso, ou seja, a ruptura das formas sensíveis da comunidade (1996a: 370).

É isso o que chamo de dissenso: não um conflito de pontos de vista nem mesmo um conflito pelo reconhecimento, mas um conflito *sobre a constituição mesma do mundo comum*, sobre o que nele se vê e se ouve, sobre os títulos dos que nele falam para ser ouvidos e sobre a visibilidade dos objetos que nele são designados. O dissenso não é a guerra de todos contra todos. Ele dá ensejo a situações de conflito ordenadas, a situações de discussão e de argumentação. *Mas essas discussões e argumentações são de um tipo particular*. Não podem ser a confrontação de parceiros já constituídos sobre a aplicação de uma regra geral a um caso particular. Com efeito, *devem primeiro constituir o mundo no qual elas são argumentações* (1996a: 374, grifos meus).

A apropriação que pretendo fazer do pensamento de Rancière, neste artigo, pressupõe que os conflitos que portam os movimentos sociais são anteriores a estes próprios movimentos específicos, e que por isso são constitutivos da própria noção de movimentos populares¹³; e mais, que a forma como esses conflitos são incorporados na atuação dos movimentos sociais recentes delinea os modos como estes atores se projetam na sociedade, e portanto seus potenciais de figurarem nela como sujeitos políticos.

As modalidades de conflitos populares contemporâneos na América Latina são, quase sempre, reação à tendência dominante na região de esvaziamento dos conteúdos de debate público, reação portanto à frase “não há alternativas”¹⁴. Dada a complexidade de constituição dos movimentos sociais contemporâneos, há sem dúvida muitas possibilidades analíticas para pensá-los. O crivo específico a que pretendo submeter o momento por que esses personagens passam, neste artigo, é o da capacidade de estabelecimento de um campo de discussão pública sobre temas de interesse público, um campo discursivo que permita elaboração de alternativas. Esse é um crivo eminentemente político, que relega a um plano menos relevante, do ponto de vista analítico, as conquistas sociais de movimentos populares específicos e a um mais importante a capacidade deles em gerar terrenos de discussão pública sobre as demandas dos setores populares como classe¹⁵. A hipótese analítica é que para que haja outras alternativas às tendências privatistas ora dominantes na América Latina, é necessário o estabelecimento de um terreno político no qual os sujeitos populares se mostrem como sujeitos políticos. Sua aparição pública é necessária não porque eles sejam o “pólo da virtude”, mas porque é preciso que a cena política contemple a pluralidade social¹⁶.

13 E aqui a relação é direta com Thompson (1989) e Sader (1988), que se utiliza das proposições do historiador inglês.

14 Laymert Garcia dos Santos (2000) condensou na tentativa de produção absoluta desta frase a intenção (anti)política neoliberal.

15 É evidente que essas conquistas sociais objetivas não são pouco relevantes para os movimentos, e que o mundo das necessidades, onde grande parte das lutas se inicia, tem profundas relações com a política. Entretanto, privilegio apenas uma questão aqui na tentativa de demonstrar como uma e outra questão atuam segundo lógicas distintas, muitas vezes tomadas em conjunto na literatura dos movimentos sociais.

16 Trato desta necessária pluralidade da esfera política, e especialmente do papel dos movimentos sociais populares nela, em Feltran (2005). Neste mesmo trabalho, esclareço a especificidade da noção de *virtude* que tenho utilizado, e aparece desde o título do presente artigo: trata-se da manifestação, na dimensão do sujeito, de suas qualidades singulares e de seu pertencimento à sociedade. Quando a virtude dos oprimidos vem a público, o que depende não só deles para ocorrer, tanto suas características singulares quanto suas privações sociais são reconhecidas como parte de um mundo cognitivamente compartilhado, o que possibilita maior pluralidade à cena pública. Ao demonstrar sua virtude publicamente, o sujeito aparece então como sujeito político.

A NOÇÃO DE CAMPOS POLÍTICOS

A noção de campos políticos parte da busca por categorias de análise coerentes com as noções teóricas de política em Arendt e em Rancière, entretanto pouco “aplicáveis” como tais. Tomo como referência estes conceitos, portanto, para utilizar categorias presentes nas análises dos movimentos sociais no Brasil, que também enfatizam os elementos *discursivos* e *públicos* que subsidiam a aparição conflitiva dos *personagens* como sujeitos políticos, sua *entrada em cena*. Evidentemente, portanto, que a referência central aqui é o trabalho de Eder Sader, especialmente quando ele afirma:

Nas lutas sociais, os sujeitos envolvidos elaboram suas representações sobre os acontecimentos e sobre si mesmos. Para essas reelaborações de sentido, eles recorrem a matrizes discursivas constituídas, de onde extraem modalidades de nomeação do vivido. Porque há sempre uma defasagem entre a realidade e a representação, entre acontecimento e palavra, embora não seja jamais possível depurar uma da outra, tão impregnadas estão umas das outras. Ao usar palavras feitas para nomear conflitos onde justamente se enfrentam interpretações antagônicas e se instauram novos significados, os sujeitos em luta operam mudanças de sentido nessas mesmas palavras que eles usam. Os sujeitos não são livres para produzir seus discursos e nem podem inventar na hora seus sistemas de comunicação. Eles recorrem a matrizes discursivas constituídas e, em primeiro lugar, à matriz da própria cultura instituída, reproduzida através de uma pluralidade de agências sociais (Sader, 1988: 142).

O autor em seguida nomeia as matrizes discursivas que existiam na elaboração das reivindicações populares (sindical, marxista e católica), no início do período que analisa – finais da década de sessenta até meados dos anos oitenta. A crise dessas matrizes, reelaboradas pelos novos movimentos sociais que emergiam, na interpretação do autor, possibilitou a entrada desses *novos personagens* na cena pública. A reconstrução das matrizes discursivas feita por eles sobre terreno público construía novos sujeitos políticos. Essa reconstrução repercute politicamente e se reforça porque a aparição pública legitima a luta dos movimentos; porque quando movimentos de favela saem da sua invisibilidade de *paisagem* urbana, e falam publicamente sobre seus problemas, suas demandas aparecem para aqueles que não os enxergava, ou preferia não as enxergar¹⁷.

17 Hannah Arendt e Rancière trabalham exatamente nessa passagem, como vimos. Seria importante diferenciar a noção de campo político utilizada aqui das proposições de Bourdieu, muito mais específicas, coerentes com outras categorias teóricas, e fundadas social e institucionalmente. O autor explicita seu conceito de “campo político” por exemplo em Bourdieu (2002).

A aparição movimentista cria dissensos, faz pensar, ainda que por pouco tempo, que o mundo em que habitam favelados pode ser o mesmo que também habita quem os vê. A fala pública deles se torna ainda objeto de outros discursos, e isso monta um espaço próprio de argumentações.

É por isso que, aparecendo publicamente e expondo seus discursos entre os anos setenta e oitenta, no Brasil, os “novos movimentos sociais” se figuraram como sujeitos políticos, como notou Sader. Os significados que eles atribuíam à sua atuação na luta por bens sociais rompia um campo tradicional de figuração desses atores, sempre à margem da política, e iniciava outro, renovado e muito promissor no período. Os movimentos não apenas alcançavam benefícios em esfera mais ampla às suas “comunidades”, eles formulavam *direitos*. Para tanto, fincavam suas lutas em terreno político.

Outra contribuição importante para pensar a categoria de campo político foi dada em seguida por Doimo (1995) e por Sônia Alvarez e Evelina Dagnino (1995), que utilizaram-se da expressão *campo ético-político*, as últimas relacionando as matrizes discursivas de Sader à idéia de *counterpublics* (espaços públicos alternativos) de Nancy Fraser (1995), bem como à noção de *princípio ético-político*, utilizada por Sérgio Baierle (2000) com inspiração gramsciana. As autoras afirmam que “discursos e práticas dos movimentos sociais demarcaram [até aquele momento] um campo comum de referências e diferenças para a ação coletiva e contestação coletiva” (Alvarez e Dagnino, 1995: 15)¹⁸, delimitando um novo *campo ético-político* na sociedade. Era nesse campo, legitimado pela explicitação de injustiças inegáveis, que os movimentos sociais apoiavam suas lutas.

Se esses autores todos pensaram a construção de um campo político na sociedade brasileira desde os anos setenta, e viram como os movimentos sociais o forjaram e ocuparam, os últimos anos fizeram pensar sobre os *limites* do projeto portado por estes atores quando o campo que se constituía se restringe. Atualmente, têm-se pensado mais sobre as conseqüências que se mostram aos atores populares quando se passa a estar fora deste campo político. Até porque essa parece ter sido a tendência dominante nos movimentos sociais brasileiros na virada do século; quando perceberam, o campo político construído pelos setores populares durante a transição democrática já havia se desmontado, e o cenário político instituído não contava com eles.

18 Citando Baierle (2000) tradução livre.

A PESQUISA: HISTÓRIAS DA PIRITUBA PARA SITUAR: BREVÍSSIMA TRAJETÓRIA DO MST

Apresento telegraficamente aqui algumas informações, pontuais, sobre a trajetória do MST. Apesar do movimento não ser o objeto desta análise, é importante aqui percorrer as linhas gerais de sua constituição, em primeiro lugar para contextualizar o caso tratado a seguir nas lutas agrárias que lhe são anteriores, e em segundo lugar para relacioná-lo à trajetória dominante entre os movimentos sociais urbanos brasileiros desde os anos setenta. Pois o MST, que surge em campo comum à maioria deles, apresenta trajetória política absolutamente divergente nos anos noventa¹⁹.

Formalmente consolidado apenas em janeiro de 1984, as lutas do MST já haviam se estabelecido desde a perspectiva da abertura política do regime, que também impulsionava inúmeras organizações urbanas. Os setores envolvidos nesse campo discursivo movimentista, como já dito, eram basicamente a Igreja progressista, especialmente os setores dela vinculados à Teologia da Libertação, os sindicatos e a esquerda marxista socialista, que englobava setores das matrizes anteriores, até por lhes oferecer conteúdo programático, e alguns intelectuais. Se há uma série de fatores comuns no surgimento deste ciclo de protestos no campo e nas cidades, nesse período, há também uma série de especificidades da atuação movimentista no campo, bem como do desenvolvimento capitalista nessas áreas, que merecem ser minimamente citadas.

Como lembra o texto polêmico de Navarro (2002), que elabora didaticamente os períodos vividos pelo movimento social brasileiro no campo, a década de setenta foi marcada por modernização da economia rural, que abriu espaço para partidos e sindicatos mais autônomos e para a intensificação da violência no campo. Os setores populares que se organizaram, nesse contexto, muitas vezes o faziam de forma reativa às inúmeras injustiças sociais que deslizamentos produtivos dessa natureza provocam. Nestas lutas, entretanto, recuperava-se uma tradição de conflitos que havia se estabelecido nos anos cinquenta e fora abortada pelo golpe militar de 1964. O autor apresenta, então, algumas fases do desenvolvimento do MST no país, que é preciso recuperar.

Entre 1980 e 1986, o movimento passa por uma primeira fase, de formação; o desenvolvimento da organização se dava especialmente no sul do país, com destaque para o Rio Grande do Sul, e a organização dos trabalhadores rurais se fazia especialmente por mediadores religiosos, ligados à Comissão Pastoral da Terra (CPT). A ação do movimento era basicamente de pressão não violenta, em geral sem confrontação forte, para que se abrissem canais de negociação com os governos esta-

19 O trabalho de Fernandes (1999) talvez seja a tentativa mais global de descrever e comentar a trajetória da formação política do movimento.

duais. Foram conquistados alguns assentamentos, não muitos, e o lema do movimento era “Terra para quem nela trabalha”.

Entre 1986 e 1993, Navarro aponta o que seria uma segunda fase do desenvolvimento do movimento, quando a sede da organização foi estrategicamente transferida para São Paulo, de modo a tentar projeção nacional da organização. A partir dessa fase aparece com mais força a ideologia marxista-leninista na direção do movimento, que passa a ser mais centralmente organizado e focado na formação ideológica de um conjunto restrito de quadros, que faria a função de “frente de massa”. Nesse período se fortalece a circulação de jornais e da propaganda do movimento. Os mediadores religiosos são alijados a uma função mais subalterna que a da fase anterior, passando a ser considerados como auxiliares da equipe de coordenação. A interlocução do movimento passa a ser prioritariamente com o governo federal, conquistada através da tática de enfrentamento mais pesado. O número de assentamentos conseguidos aumenta muito. O lema do movimento passa a ser “Ocupar, resistir e produzir”.

A terceira fase da organização seria, ainda segundo o autor, impulsionada tanto pela confrontação violenta contra grandes proprietários de terra, quanto pela necessidade premente de organização dos assentamentos para que esses se tornassem modelos de produção agrícola. É evidente que a lógica do tipo de ação que a produção nos assentamentos demanda do movimento tem muito pouco a ver com a lógica da pressão por mais terra, para continuar pautando a questão publicamente. O MST se viu, entretanto, forçado a dar conta de ambas. Esse ponto certamente traz um série de ambigüidades na atuação recente do MST, que são denunciadas na literatura²⁰ e nos depoimentos coletados nessa investigação²¹, o que aparecerá mais adiante. De 1994 a 1997, então, o MST propôs e impôs uma série de cooperativas em seus assentamentos, segundo modelos soviéticos e cubanos, para produção coletiva. Esse processo foi referido por diversos autores como de “ideologização da produção”. O perfil das lutas do MST estabelece então clivagens importantes se comparado às tendências gerais de mobili-

20 Os estudos mais abertamente críticos ao MST, de modo bastante incisivo, são conduzidos por Zander Navarro (por exemplo, no citado Navarro, 2002); o estudo de Souza (1999), bem como outros de sua autoria, denunciam tanto as contradições internas quanto os processos de resistência a elas dentro do próprio grupo de assentados.

21 Esse depoimento, proveniente de uma mulher liderança de grupo dissidente da direção atual do MST, referindo-se a um diálogo que teve com a principal liderança do movimento na Pirituba, é exemplar disso: “Um dia eu falei por Miguel: Miguel, vamos organizar os assentamento.. ele disse: Ah, Dona Zilda, eu acho que não vai dar mais pra perder tempo não. Eu acho que não vai dar mais... vamos partir pra ocupação... eu falei: Não. Ocupa, que que nós temo pra mostrar pros acampado que a reforma agrária dá certo? Nós não tem o que mostrar” [Zilda].

zação de outros movimentos populares, muito mais voltados, já nesse momento, a estratégias de inserção institucional.

O MST fortalece sua hegemonia em regiões importantes do país, como o Pontal do Paranapanema, no estado de São Paulo. Aparece ainda uma outra característica muito relevante para as lutas, nesse momento: uma segunda geração de militantes, formada já dentro do movimento, inicia sua atuação; esses jovens passam a compor uma “frente de massa” mais ideologizada, tática e radical. Aparecem nessa fase, ainda, divergências regionais internas ao movimento, que efetivamente já tem inserção nacional e impactos políticos muito fortes. O pico da pressão política do movimento, provavelmente, foi a marcha sobre Brasília em abril de 1997, que culminou com a reunião de mais de uma centena de milhares de pessoas, no dia do primeiro aniversário do massacre de Eldorado do Carajás, em que 19 agricultores sem terra foram assassinados pela polícia militar, no Pará. A manifestação teve um peso simbólico e político fundamental para o período. O lema entoado passou a ser “Reforma Agrária, uma luta de todos”.

O período mais recente, que Navarro afirma poder figurar uma nova fase na luta do movimento, sem dúvida demonstra o desdobramento, em diferentes direções, das ambigüidades que já se manifestavam até 1997-1998. A tática da coordenação central do movimento passa a priorizar o enfrentamento e as novas ocupações de terra, prédios públicos e ações diretas. Na região que estudei, essa passagem é muito bem marcada, fenômeno que nem sempre se verifica em outras regiões, dadas as dimensões fantásticas assumidas pelo movimento em todo Brasil. A manutenção de uma camada de militantes intermediária leal à direção central, fortemente ideologizada (até pela formação política intensiva a que foram submetidos, ainda que questionável em método e conteúdos) mantém a capacidade do movimento de recrutar indivíduos e grupos de muitas regiões para promoverem as ocupações em diversas partes do país. Especialmente dentro dos assentamentos, como o estudado aqui, no entanto, essa camada de militantes tem mais dificuldade em manter sua representatividade e legitimidade. O movimento, nos últimos anos, passa a conviver com ampla presença política e, simultaneamente, com o descrédito de parcelas crescentes dos agricultores assentados, que manifestam dissidências e divisões na sua base de apoio.

A ênfase que a maioria dos trabalhadores já assentados esperavam do movimento, efetivamente, seria a de focar nos investimentos voltados para a produção, que elevasse o padrão de vida deles próprios e dos assentamentos. Não tem sido esse o caminho escolhido em geral, o que é justificável, como se verá, e na Fazenda Pirituba isso é muito evidente. Voltemos, então, duas décadas no tempo, e acompanhemos agora trechos das narrativas dos protagonistas deste drama.

LUTAS INSTITUINTES CARA E CORAGEM

Ainda que indivíduos e grupos não façam sua história livres de determinações, o que é evidente, recorrer à memória das lutas populares é, invariavelmente, adentrar âmbito povoado de virtudes pessoais e coletivas dignas de nota. A construção de terrenos políticos, e os movimentos sociais seriam sujeitos dessa construção, introduz então mediações, tensões e trânsitos discursivos entre estruturas e capacidade de ação, bem como entre o mundo das necessidades objetivas e a esfera pública.

A narrativa que elaboro a seguir parte, portanto, do reconhecimento de um âmbito em que homens e mulheres, acossados por necessidades e carências da vida, impõem como alternativa o que não seria alternativa natural *a priori*, ou seja, sua aparição política. Esta aparição demanda, para além de contextos amplos favoráveis, coragem de lutar e persistência na luta por parte dos sujeitos, e é esta a dimensão central dos discursos de movimentos sociais caracteristicamente fundadores. Na trajetória estudada, esta coragem esteve no centro das narrativas recolhidas na pesquisa de campo.

O cenário da Fazenda estatal tomada há muito por grileiros, somado à ausência de trabalho para quem não tinha terra, incomodou um grupo pequeno de moradores do município de Itararé, ainda em 1980. Antes desse grupo de lavradores sem-terra ocupar a área em que vivem hoje, entretanto, a ousadia deles construiu discursos que lhes possibilitaram propor o que, sem esse passo, seria impensável. Para ocupar a terra foi necessário, inclusive, recorrer “à matriz da cultura instituída” (Sader, 1988), e rever alguns conteúdos aprendidos nela:

Começamos, que nós não tinha terra mesmo, não tinha onde trabalhar. Tinha uma morada em Itararé, que eu morava lá em Itararé... depois aí não tinha terra pra arrendar e a gente tinha conhecimento da Pirituba, que era uma fazenda do Estado e só grileiro que vivia aqui... nós resolvemos vir aqui arrendar uma terra. No fim não deu certo, convidamos quatro companheiros e viemos ocupar a área [Zico].

Depois tentada uma solução mais bem aceita socialmente (o arrendamento), e depois dessa tática não dar certo, restava reinterpretar o que foi aprendido. Um grupo pequeno de lavradores decidiu ocupar uma área de terra ociosa, e a ocuparam. As necessidades semelhantes de muitos outros lavradores fez com que, aberta a porteira, o movimento inicial, formado por apenas quatro pessoas, crescesse rapidamente:

Era eu, ele [aponta para Adonir, filho dele] e mais quatro companheiros... dos quatro companheiros, veio nove... de nove, passou

mais um bocadinho, consegui trazer 25, inteirando 34 família... depois das 34 famílias tinha mais gente que queria vir, veio mais outro, veio mais outro, inteirou 56 família... eu sei que já começamos a fazer barracos, fazer casas, casinhas... sem autorização de ninguém, com a cara e a coragem [Zico, grifo meu].

O que o grupo fazia, apesar de justo e correto para quem construía-se por esta experiência, permanecia como discurso impensável, inimaginável, para quem vive em um mundo organizado a partir de outras premissas, nas quais, como diz Marilena Chaui:

A linguagem sofre uma restrição que poderia ser assim resumida: não é qualquer um que pode dizer a qualquer outro qualquer coisa em qualquer lugar e em qualquer circunstância [No mundo instituído] os interlocutores já foram previamente reconhecidos como tendo direito de falar e ouvir [os] lugares e circunstâncias já foram predeterminados para que seja permitido falar e ouvir e, enfim, conteúdo e forma já foram autorizados segundo os cânones da esfera de sua própria competência (Chaui, 2000: 7).

Para criar outras possibilidades para além das admitidas é necessário de fato “cara e coragem”, é preciso agir, como diz “seo” Zico, evidentemente *sem autorização de ninguém*. Aos que sempre foram vistos, e assim aprenderam a se ver como tendo a obrigação de buscar a autorização prévia de um superior, o simples fato de não buscá-la é dissensual. Estabelecer esse dissenso expõe a própria face, o que se faz com a certeza da repressão. E a repressão de fato vem.

À BALA

A chamada à ordem é cotidiana, simbólica e maciça, como se sabe. Entretanto, quando apesar dela há eventos que requerem especial recomposição da paisagem social dada, a repressão se faz também no mais objetivo dos planos.

Nós sabíamos que alguma coisa ia acontecer [...] Pra algumas pessoas que tinham confiança eu contava: olha, cabe de nós sermos despejados. De repente [...] apareceu jagunço, lutamos, lutamos, lutamos [...] Jagunço veio conversar: Não, vocês vão embora, porque aqui é do Marconde, vocês tem que ir embora; e se não for embora por bem, vai por mal [Zico].

O grileiro, que detinha ilegalmente a posse da terra estatal, já havia enviado homens, pobres como Zico e seus companheiros, para coagir à força o grupo a se retirar da área ocupada: os jagunços chegaram. Era o ano de 1981. Depois de alguma negociação e ameaças, os jagunços resolveram atirar:

Depois, de noite ele [o jagunço] veio, com a turminha dele, e começou a dar tiro, nas casas... tiro pra lá, de uma casinha da beira da estrada, lá em cima, pra cá. Quando saíram os primeiros tiros, teve gente que veio se reunir comigo: Ah, eu vou embora... eu vou embora. De 12 dias [de ocupação] em diante, sobramos só cinco [Zico].

Sobraram na terra, depois de coagidos à bala a sair do lugar almejado, apenas os mesmos cinco lavradores do início da contenda. A cara e a coragem virou violência, em resposta à violência sofrida. A área ocupada se tornou centro de embates armados entre interesses e forças antagônicas, em terreno privado, como se vê até hoje²².

Quando foi um dia, fizemos um tiroteio neles... eles fizeram em nós, nós fizemos neles... tinha o tal de Padre Narciso que acompanhava nós, né? Esse padre foi e falou: Ói, Zico... nós num pode só receber tiro, nós tem que devolver alguma coisa! Então, falei: Fica de prontidão, moçada... esse dia já tinha uma turminha boa: quando eles começaram a atirar, nós preparemos os carros nossos, tudo, três carros nossos, e quando eles voltaram de lá pra cá, nós *chumbamos* três carros deles... mas só por baixo. Hã, chumbamos, atiramos nos três carros, dois carros arrastando aro... só com aro, até lá em cima, nas casinhas... aí nós fomo lá, olhamos os carros, tinha sangue no banco. Falei pros companheiros: Nesse carro aqui, caboclo tomou uma pancada de chumbo [...] O grileiro fez parte [denunciou], veio a polícia [...] Falei: Cadê a ordem do juiz? Num tem, então ordem de jagunço [eu não aceito]. Passou mais 4 ou 5 dias, outro tiroteio... [Zico].

A violência domina a cena e destrói os espaços de locução abertos pelo dissenso inicial²³. A repressão executa a tentativa de recomposição da ordem, e tenta empurrar os pobres novamente para o local que em geral

22 Mais de vinte anos depois dessa ocupação, quase diariamente ainda há, no Brasil, notícias de conflitos armados envolvendo grupos populares organizados e forças privadas ou públicas de repressão armada às suas ações. No Brasil do século XXI está novamente em questão, como nos anos setenta e oitenta, a formação de milícias armadas no campo e nas cidades, patrocinadas por grandes proprietários de terra no campo e por comerciantes e empresários nas cidades. Trata-se, novamente, da repressão armada à possibilidade de aparição de sujeitos populares organizados.

23 "O que se passa, com efeito, quando as forças da ordem são enviadas para reprimir uma manifestação política? O que se passa é uma contestação das propriedades e do uso de um lugar: uma contestação daquilo que é uma rua. Do ponto de vista da polícia, uma rua é um espaço de circulação. A manifestação, por sua vez, a transforma em espaço público, em espaço onde se tratam os assuntos da comunidade. Do ponto de vista dos que enviam as forças da ordem, o espaço onde se tratam os assuntos da comunidade situa-se alhures: nos prédios públicos previstos para esse uso, com as pessoas destinadas a essa função. Assim, o

ocupam nessa paisagem, ou seja, o da invisibilidade e impossibilidade de fala. Ali são de novo os homens incivilizados, os “fora da lei”, e a polícia deve cuidar deles.

Aí veio polícia, comandante, capitão, coronel, com dois ônibus de polícia... pra despejar só 9 pessoa. E lá no asfalto, na pista lá, ficou uns cinqüenta polícias. Veio o capitão, andando, tudo: Como vai? Conversando, diz que tinha ordem de despejar... ordem do juiz, nós respeita, né? Respeitamos, fomos pra Itaberá... esse aí [o filho dele, Adonir] e outro companheiro dele foram algemados. A polícia e o grileiro pegou eles, algemou e levou pra Itaberá [Zico].

Apesar da repressão, o patamar de negociação do movimento agora já era outro. Os pobres, nesse caso, não retornaram ao mesmo local em que estavam, mas a outro. A mediação da polícia no processo conferiu aos lavradores sem terra, ao menos, um patamar de reconhecimento de sua existência e organização. A interposição de uma mediação estatal, ainda que repressiva, de toda forma interfere num sistema de dominação baseado em critérios privados, o que se viu em diversas ocasiões na história das lutas de povos oprimidos²⁴.

OUTRAS MEDIAÇÕES

Seria simples demais imaginar que toda a luta inicial do movimento transcorreu nos limites das narrativas acima, ou seja, tendo como base apenas as virtudes *internas* ao grupo de agricultores que buscava terra. O momento instituinte das lutas desse assentamento é importante, justamente, para constatar os diversos patamares das lutas populares em sua complexidade. Outras mediações foram buscadas por estes agri-

dissenso, antes de ser a oposição entre um governo e pessoas que o contestam, é um conflito sobre a própria configuração do sensível. Os manifestantes põem na rua um espetáculo e um assunto que não têm aí seu lugar. E, aos curiosos que vêem esse espetáculo, a polícia diz: ‘Vamos circular, não há nada para ver’ [...] Antes de ser um conflito de classes ou partidos, a política é um conflito sobre a configuração do mundo sensível na qual podem aparecer atores e objetos desses conflitos” (Rancière, 1996b: 373).

24 Ver Hannah Arendt (2000: 330), sobre a expressão “direito a ter direitos”, elaborada pela autora para tratar da condição dos judeus apátridas na Europa, povos sem Estado do período entre guerras. Apesar das distinções profundas entre aquele contexto e o que se examina aqui, nos dois casos chega-se a tal ponto de privação de direitos que pequenas transgressões da lei podem restituir condições mínimas de cidadania aos indivíduos. No caso brasileiro, Chalhoub (1990) reflete sobre situações em que, ao final da escravatura, final do século XIX, tornou-se uma estratégia de escravos cometerem pequenos crimes, que forçavam que o Estado interviesse, pela polícia, na estrutura estritamente privada de dominação senhorial, colocando entre o senhor e o escravo uma mediação pública, que em última instância conferia direitos mínimos aos negros. A repressão estatal ainda era preferível à manutenção da condição privada de escravo.

cultores mobilizados, a luta local precisava se fortalecer, e o contexto era propício. Havia discursos emancipatórios que circulavam mais amplamente pela sociedade brasileira, e que simultaneamente eram constituídos e constituíam os movimentos populares daquele momento. No início dos oitenta, como dito, setores progressistas da Igreja Católica, dos sindicatos e da intelectualidade marxista solidificavam a luta popular, oferecendo-lhe campo de interlocução e articulação que facilitava o alcance de um estatuto político (Sader, 1988; Paoli, 1995).

Não foi diferente na Fazenda Pirituba. Estabelecida esta luta inicial e local, o movimento acessou diversas mediações importantes de suporte às suas demandas. Foi essa articulação que permitiu que “seo” Zico não ficasse sozinho, com seus poucos companheiros. A virtude interna ao grupo, basicamente sua coragem, não resistiria muito mais tempo centrada em si mesmo. O início dos anos oitenta, no estado de São Paulo, é o período por excelência da articulação entre grupos populares mobilizados e setores médios e intelectuais descontentes com a ditadura, sob a bandeira da democracia, da anistia, dos direitos universais. A abertura iminente do regime político anunciava mudança na estrutura de classes no poder estatal, e pipocaram ações de apoio e assessoria ao conjunto amplo de movimentos sociais do período, tanto estatais como não governamentais.

No caso específico da Fazenda Pirituba, foi fundamental ao movimento poder acessar a mediação da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e da Frente Nacional do Trabalho (FNT), ambas instituições relevantes na luta dos setores progressistas da Igreja e do movimento sindical junto aos movimentos populares rurais. E como esses organismos já possuíam alguma experiência de luta, sua assessoria consolidava estratégias de pressão e negociação junto ao Estado, que tinha na época, especialmente em São Paulo, uma ânsia por remodelação. Graças a esta articulação, e a estas mediações, o movimento a princípio autônomo de lavradores estabelece um contato direto com o Governo do estado de São Paulo, já sob a liderança da figura carismática de Franco Montoro, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido de oposição à ditadura militar.

Depois de quase um ano da primeira desocupação, já na virada de 1982 para 1983, os agricultores liderados por “seo” Zico já sabiam exatamente como continuar a luta, para desta vez permanecerem na terra. Eles se formavam e amadureciam na própria experiência de luta. O relato de “seo” Tonho, outro dos pioneiros do assentamento, é bastante significativo da interpenetração das distintas esferas em que as lutas populares se davam: de um lado, a ação direta autônoma, como durante o período de maior repressão da ditadura; de outro já havia a possibilidade de pressão institucional, negociada, envolvendo o aparato jurídico:

Quando eu soube, já tinha ido algum preso, já... a polícia pegou e levou pra Itaberá, o Adonir, filho do Zico. E daí já foi telefonar, já, e em São Paulo mandou soltar: *já tá na mão no advogado... vai dar certo! Nós sabia que o causo era pra acontecer assim* [“Seo” Tonho, grifo meu].

LUTA INSTITUCIONAL: VOCÊ TEM ADVOGADO?

*Daí, nós tava organizado pá mod'entrar
e o advogado pegar a questão.
Que as coisa, se num bulir com eles,
num tem como aparecer²⁵.*

E fomos lutando... até 1983 [...] Aí um belo dia eu falei: hoje vou procurar o Procurador do Estado, vou lá e quero ver como é que é... chegamos lá e procuramos o Procurador do Estado: num aparecia, ninguém apresentava [Depois de dias, ele consegue o contato]: Cumprimentei ele, perguntei se era ele, parece que tava meio com cisma, né? Falei pra ele: Olha doutor, eu faz 3 dias que to ligando aqui pra falar com o senhor, num tem jeito. Agora falaram que o senhor ia sair, fiquei esperando. Desculpa atrapalhar o senhor, [fui] pedindo desculpa pra ele, né? Ele: Não, eu to aqui pra atender mesmo, num tem nada, mas qual o assunto? Eu falei: O assunto é sobre a Pirituba: ele olhou... e num é você aquela pessoa que saiu na televisão, ou é você mesmo? Falei: É eu mesmo... então entra aqui, vamos sentar. Eu falei: Num vim aqui por banditismo, nada, vim aqui pedir socorro. Ainda brinquei, falei: Uma dor que eu tenho quem pode curar é o senhor, sobre a Pirituba. Ele perguntou pra mim: *Você tem advogado?* [Zico].

Depois de terem sido expulsos duas vezes da terra ocupada, entre 1981 e 1983, os agricultores acessaram a dimensão institucional das decisões jurídicas. A primeira pergunta que foi feita a “seo” Zico, então, foi a seguinte: *você tem advogado?* Não bastava mais a luta espontânea, eram necessárias também outras capacidades para o movimento. O campo político armado do período, no entanto, permitia esse passo. As assessorias do movimento permitiam que Zico tivesse resposta à pergunta. O *sindicato* tinha advogado. Depois de muita discussão e de reuniões entre agricultores, advogados

25 Todas as epígrafes que abrem tópicos do texto são de autoria de Roque Ferreira, morador do assentamento, entrevistado para a pesquisa empírica que gerou esse artigo.

e o Estado, houve o acordo para ocupar a área com mais de cem famílias²⁶, para que a decisão judicial posterior fosse pressionada.

A ocupação definitiva, portanto, ocorrida em 13 de maio de 1984, data comemorativa da abolição da escravidão no Brasil, já foi feita de modo inteiramente articulado aos setores sindicais, da Igreja e, o que é mais importante nesse caso, do Estado²⁷. Um técnico contratado pelo governo estadual, responsável pela negociação com as famílias, planejou com eles a ocupação, e esteve com os agricultores quando eles entraram no terreno. Se ainda havia um peso simbólico importante na pressão que a ocupação por centenas de famílias causava na opinião pública local, e se ainda havia muita resistência das elites locais a ela, as lideranças do movimento já tinham a segurança de que entravam na área definitivamente. O Estado os avalisava.

Nós já estávamos sabendo que nós íamos ganhar mesmo a área [...] marcamos pra dia 13 de maio ocupar a área [...] amanhecemos dia 13 aqui. Trezentas e tantas famílias. Ficamos mês de maio, quando foi mês de julho saiu o seqüestro [judicial] da área [Zico].

Dada essa articulação prévia, depois de três meses de ocupação a área da Fazenda Pirituba foi “seqüestrada” judicialmente, o que significava que o Estado despejaria os grileiros e assentaria os agricultores sem-terra, seguindo um plano de administração²⁸. A medida foi inédita, nunca havia ocorrido no país, trata-se do assentamento rural mais antigo do estado de São Paulo. O Estado brasileiro, reconfigurando-se no período, buscava formas novas de lidar com questões relativas aos direitos dos trabalhadores, e também nesse plano apareciam novidades. O momento era instituinte, e havia grande pressão popular por democratização. Cabe notar entretanto, para não idealizar este processo, que as relações de movimentos populares com o Estado não foram lineares nem isentas

26 “Aí falou, olha, num tá tendo jeito, o negócio lá tá pesado. Lá tá pesado e vocês tem que organizar, arruma bastante família e entra... mas tem que entrar com mulher e criança! Então daí foi como que nós nos arrumamos, sabe?” [“Seo” Tonho].

27 Um dos responsáveis pela assessoria técnica ao assentamento conta como a história se deu, de modo resumido: “Foi lá com trinta família, os jagunço botaram eles pra correr de lá, ele foi lá, arrumou outro grupo, mais 80 família, a turma botaram eles pra correr de novo [risos] aí na terceira ocupação aí já veio junto com o movimento sindical, mais apoio, mais articulado, aí inclusive com a própria articulação, na época, com o pessoal do... da Coordenadoria de Socioeconomia da Agricultura, que era responsável pela ocupação da área, né?” [Nico].

28 “A terra que na realidade era do Estado, ela acabou sendo seqüestrada judicialmente e foi despejado o grileiro que tava aqui em cima [...] Mas até que se resolvesse essa situação na justiça, definitivamente, se era do grileiro, num era, do Estado, a situação, aí foi proposto um plano de administração dessa área” [Nico].

de contradições. No dia 13 de junho de 1984, portanto um mês depois da ocupação da Fazenda Pirituba, ocorria em São Paulo uma manifestação importantíssima do movimento de favelas e cortiços, justamente contra o governo Montoro. A manifestação foi reprimida fortemente por esse mesmo governo, e se tornou evento muito lembrado na história de luta dos movimentos sociais urbanos em São Paulo.

Ao mesmo tempo em que se abriam portas de negociação com alguns movimentos, e se inovava mesmo judicialmente no trato dos direitos de seus integrantes, reprimia-se violentamente outros movimentos semelhantes. As relações dos atores populares com o Estado no Brasil, desde então, caminham sob contradições dessa natureza. Desde os anos oitenta, percebeu-se que deveria haver mais do que uma forma de lidar com as estruturas estatais, dadas suas ambigüidades constitutivas. O MST talvez represente, hoje, a organização popular que de modo mais hábil consegue articular a negociação com setores do Estado, no estabelecimento de convênios e parcerias institucionais, com a fortíssima pressão sobre eles, através de ações diretas de enfrentamento, especialmente as ocupações de terra. Já naquele momento, 1984, essa tática começava a aparecer; a pressão popular articulada à negociação em terrenos institucionais, por vezes ainda hoje denunciada como estratégia contraditória dos movimentos populares, não por coincidência existe desde o início da democracia liberal brasileira.

Os canais de interlocução com o governo, abertos já na metade da década de oitenta, possibilitaram ao movimento de lavradores da Fazenda Pirituba uma condição mais favorável para negociar. Abria-se brechas às demandas populares, entre elas o projeto de assentamento da Fazenda Pirituba, assumido pelo Estado como um experimento de Reforma Agrária. O processo introduz pequenas mudanças de sentido na luta inicial. Mesmo antes da ocupação definitiva, como já disse há pouco, junto dos militantes sem-terra já estava um técnico do governo estadual, que se tornaria, a partir de 13 de maio de 1984, o gerente do *assentamento*.

ASSENTADOS OS TEMPOS DA ASSOCIAÇÃO

*Oh! A corrente que o Zeca falou funciona mesmo.
Quer dizer, então nós gostou daquele plano...*

Zec Beze, ou simplesmente “Zeca”, destacado pelo Estado para elaborar e gerenciar o plano de produção do assentamento, é figura muito lembrada pelos assentados iniciais. Figura firme, competente e muito carismática, esse engenheiro agrônomo parece ter contribuído muito para a coesão interna do grupo de assentados em torno de um projeto de produção

agrícola, que foi implementado com muito sucesso. Além disso, a personalidade forte com que “Zeca” conduzia as discussões e negociações, tanto internamente quanto na relação com o Estado, não impedia que os agricultores pudessem sentir-se como protagonistas da ação que se empreendia. São vários os depoimentos que afirmam que ele se colocava à disposição para executar o que os assentados decidissem, e então coordenava as ações decididas, e não o inverso. Dessa atitude surgiu um profundo respeito dos assentados por ele, que se mantém até hoje²⁹.

O grupo de agricultores sentia-se bem com as conquistas, estar sobre um pedaço de terra era realizar um sonho antigo, que havia demandado muita luta. Empolgados, homens e mulheres aceitaram o desafio, imenso em princípio, de buscar as condições materiais para que pudessem produzir coletivamente. A primeira providência foi a montagem de uma Associação, que oferecesse figura jurídica para que se pudesse obter financiamento público para a produção agrícola:

Foi feita a proposta de criar uma Associação, que envolvesse todas as pessoas que deveriam ter direito à terra [...] aí foi feito um levantamento, uma pré-seleção, de quantas famílias cabiam, tudo, e todas essas famílias ficaram sócias. Aí foi apresentado esse plano pro juiz e o juiz, com o Estado, uma figura que tem durabilidade, confiabilidade, essa coisa toda, então falou: Ah, tudo bem, então *vai ficar sob a tutela do Estado e o Estado vai tutorar essa associação, vai ser o tutor*. A associação vai ficar responsável pela administração da área, e aí onde seria realizado esse plano de assentamento durante o período, até que a terra se julgasse definitivamente do Estado pra promover o assentamento definitivo [Nico, grifo meu].

Na negociação com o Estado e devido à conjuntura muito específica do momento, o que se viu foi uma inversão do cenário anterior. Se no início das lutas os agricultores demandavam direitos de modo autônomo, sem nenhum apoio, e tinham mesmo que lidar com repressão privada, jagunços, ou violência policial de um Estado refratário às suas demandas, em pouco tempo o assentamento Fazenda Pirituba se transformou em algo *oficial*. Um dos depoimentos demonstra como, simbolicamente, essa inversão se deu:

Ah, na época do governador Montoro, vou falar bem a verdade pra você: Óia, nós tinha uma advogada que andava junto com nós aqui, ela ligava junto com nós direto pro Franco Montoro... falava o que fosse preciso falar, direto [Orlando].

29 “O Zec Beze é o fundador aqui. Muito bom, muito bom, sem defeito!” [Aparício].

A partir de 1984, o que se viu na Fazenda Pirituba foram experimentos de muitas das políticas estatais de Reforma Agrária, tanto do nível estadual como federal. Já no primeiro ano houve muitos investimentos públicos no assentamento, para garantir a infra-estrutura que possibilitaria a produção³⁰. O orçamento de crédito agrícola liberado para a Associação foi elevado, e assegurou as condições para a produção inicial:

Fomos no banco, por São Paulo, por tudo, Caixa Econômica, tudo, conseguimos financiar... 5 tratores pequenos, 4 tratores grandes, bateadeira e niveladora. Quer dizer, todo implemento pra agricultura nós tínhamos... tudo! Niveladora, plantadora, plantadeira, duas plantadeiras grandes, duas aradoras, grade aradora, niveladora, conseguimos tudo isso através da Associação [Zico].

Nem no melhor sonho, do mais idealista dos militantes iniciais, o cenário pós-ocupação poderia ser mais favorável. Menos de três anos depois de terem sido recebidos à bala, estavam sobre o mesmo terreno ocupado inicialmente, agora com todas as condições e segurança para que o fizessem. Evidente que havia razões, na esfera institucional, que favoreciam essa situação, bastante peculiar. O assentamento Fazenda Pirituba era agora considerado um modelo para os assentamentos rurais no Estado, e o governo resolveu apostar em seu projeto-piloto:

A concepção da equipe que assumiu o Estado, na época do governo Montoro, que começou os assentamentos, coordenada pelo José Eli da Veiga, tinha a seguinte tese: que o agricultor vendia a terra, ou seja, que ele não era incluído no processo, porque ele não tinha acesso a crédito e não tinha acesso a tecnologia da produção moderna... *então isso tudo foi garantido* [Nico, grifo meu].

Os tempos foram muito prósperos, os primeiros anos do assentamento são ainda hoje figurados como uma época memorável. O período que vai até 1988 é lembrado por todos os entrevistados como uma fase de bonança, com ares de sonho e realização. E de resultados concretos muito expressivos.

30 É aí que o Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP), órgão estadual responsável pela assessoria técnica aos assentamentos rurais, inicia sua atuação junto ao assentamento, que será muito relevante em toda a trajetória dessa experiência. Nico Barbosa, técnico do ITESP, conta que o processo judicial de posse da terra, iniciado em 1984, foi definido apenas em 1991, mas que nesse período “a gente já adiantou todo o processo do assentamento. Vai lá, levantamento topográfico, dividir as áreas de reserva, as áreas que era agricultável, que não era agricultável, separar tudo isso. Ir lá, dividir os lote, montar a infra-estrutura da comunidade, onde as família iam ficar, os lote de agrovila, etcetera” [Nico].

PRIMEIRAS SAFRAS

...e dali foi bonito, sabe?

Alguns depoimentos falam em 18, outros em 21 mil sacas de feijão, obtidas logo na primeira colheita do assentamento³¹. É certo que essa produtividade foi recorde na região, e que a fartura na produção legitimou ainda mais a aposta, tanto dos assentados, quanto do Estado, no sucesso da experiência em curso no assentamento Fazenda Pirituba.

Na verdade o que garantiu nós aqui foi a produção. Se não fosse a produção, nós não conseguiríamos ganhar essa terra aqui. Então a reforma agrária só deu início em cima da produção [Orlando].

A venda da safra de feijão e milho, que também era intermediada pelo Estado nos primeiros anos³², sempre possibilitava recursos suficientes para quitar as dívidas de financiamento, junto aos bancos estatais, e gerava lucro para a Associação, que repassava parte às famílias; com o restante, investia-se na sua estrutura tanto física como de equipamentos agrícolas³³. O que se viu neste assentamento, ao menos até 1988, foi uma estrutura produtiva muito bem montada, que contava com implementos modernos, assistência técnica garantida e amplo acesso a crédito, cenário propício para uma alta produtividade. Estabeleceram-se mais duas áreas de assentados, e a Fazenda Pirituba contava agora com as Agrovilas 1, 2 e 3. O modelo de produção competente parecia validar a concepção de que a reforma agrária se faz ofertando terra e estrutura produtiva aos trabalhadores sem-terra. A luta continuava. Mas logo em seguida os problemas começaram a surgir:

Trabalhou 4 anos, bem trabalhado, com a Associação [...] Depois de 4 anos que a Associação tava toda formalizada, barracão bonito, bem feito, empacotadora, nós tínhamos, nós

31 Os depoimentos são muito regulares no sucesso desse momento, e têm uma beleza específica, como se nota nesses dois trechos: “Foi comprado máquina, nós compramos máquina, financiado, assim, pra... nós trabalhar. Foi comprado nove. Teve um trator que foi comprado a dinheiro, sabe... foi esse trator que nós coiemos a feijoada, panhamo 18 mil sacos de feijão na primeira safra, encheu de feijão...” [“Seo” Tonho]; “Primeiro ano, ‘84 mesmo a gente já começou a trabalhar, a gente fez uma colheita muito boa em ‘84, até, de feijão, e depois ‘85 milho, que a gente plantou milho no ano de ‘84 pra colher no ano de ‘85, foi uma colheita muito boa, a colheita de feijão foi recorde da região” [Aparício].

32 “Vendemos tudo pra São Paulo, por intermédio da Associação e intermédio do governo” [Zico].

33 Orlando conta como se dava a partilha dos lucros: “Saía o custeio, do custeio tirava 20% pra eles [as famílias] comer, ficava 80% pra produção”.

tínhamos tudo, secador, empacotador, o pessoal resolveu de num pagar as contas... [Zico].

Começava o declínio. Quatro anos depois de fundada, ainda que o apoio estatal que a havia levantado permanecesse, a Associação perdeu todo o patrimônio conquistado e desmoronou. Um castelo de cartas. É assustador visitar as famílias na virada do século e constatar, sem necessidade de estatísticas, a precariedade em que vivem ainda hoje os assentados mais antigos da Reforma Agrária em São Paulo, talvez do Brasil. Depois de toda luta, os indicadores socioeconômicos da primeira área ocupada da Fazenda Pirituba ainda são assustadores: 86% dos assentados têm renda anual que equivale a menos de dois salários mínimos mensais, 44% ganha até um salário; 75% dos assentados não completaram nem o ensino fundamental; as condições de saneamento e habitação são muitíssimo precárias, duas décadas depois da terra conquistada. Mais impressionante: hoje, apenas 51% dos assentados trabalha em seu próprio lote, e os 49% restantes são forçados a outras atividades, em geral o trabalho como diaristas em fazendas vizinhas, para manterem-se vivos³⁴. O que se passou para que, depois de vinte anos de conquista da terra, e na área mais antiga e bem estruturada da Fazenda Pirituba, as pessoas ainda vivam de modo tão precário?

O DECLÍNIO DA ASSOCIAÇÃO: HOMOGENEIDADE E DIFERENÇAS

*Só que daí, é como eu tava falando...
quando começa bonito,
sempre tem qualquer coisa,
tem que tomar cuidado, sabe?*

Pela regularidade dos depoimentos obtidos na pesquisa empírica, não é difícil compreender os fatos objetivos que desencadearam a desagregação da Associação, narrado com muita precisão pelos entrevistados. Objetivamente, o que ocorreu foi que uma série de agricultores, quase um terço do total de integrantes da Associação, após os quatro anos de prosperidade, sentiram que poderiam produzir por sua própria conta, de modo individual ou em pequenos grupos, e dispensaram a organização coletiva que lhes havia sido proposta e que haviam integrado até então³⁵. Esses agricultores perceberam que teriam condições de produ-

34 Estes dados referentes à Agrovila 1, área mais antiga do assentamento, estão em Shimbo (2003: 77).

35 “Nós é criado na roça... então ele num queria aquele sistema de ser mandado, vamo supor, pegar a lavoura pronto... ele queria ele mesmo fazer. E aí o pessoal foi corroendo

zir por sua própria conta e, depois de comercializar a produção, receber mais do que os 20% do valor total obtido, que recebiam da Associação. Esse grupo se negou a continuar colaborando e iniciou um processo de disputa interna por recursos e por poder, por vezes para além da questão específica da Associação. Essa quebra na coesão do grupo fundamentou o início da desagregação da iniciativa.

Mais especificamente, em 1987, um parte dos assentados, após receberem o financiamento via Associação, resolveram não pagar suas dívidas, e comercializar sua produção direta e individualmente³⁶. A partir dessa ruptura, que teve ares de enfrentamento em relação à diretoria da Associação, esses assentados decidiram se desfiliar dela sem quitar as dívidas³⁷. Como se tratava de parcela significativa dos associados, a Associação se endividou pela primeira vez. Ainda assim, entre 1987 e 1988, a diretoria conseguiu renegociar a dívida com o Estado e obter novo financiamento. O processo se radicalizou, no entanto, e a dívida cresceu assustadoramente no ano seguinte, obrigando a Associação a vender todos os implementos de produção (seu patrimônio adquirido nos anos anteriores) como forma de quitá-la³⁸. Ao final de 1988, e apesar de ainda assim o Estado ter disponibilizado crédito para a produção de 1988-1989, ocorreu um fato antes inimaginável: os assentados se recusaram a receber o crédito estatal, eles o negaram. Havia um medo, justificável, de se endividarem ainda mais, dado o efeito-dominó que a inadimplência interna causava. Agora, não havia mais patrimônio da Associação que pudesse garantir o pagamento do crédito³⁹.

A partir dessa data, sem renovação do crédito, o assentamento da Fazenda Pirituba viu declinar sua capacidade produtiva incrivelmente, e jamais se recuperou, também por uma série de outras razões

a Associação. Que jeito foi corroendo? Uns num queria mais o crédito junto, queira pegar o dele separado... o tratorista ele num queria... ele queria que fosse o dele, num queria o tratorista que nós mandava, né... não queria mais os grupo dentro da Associação, queria tocar individualmente, e aí começaram a desviar a produção... e muitos... e muitos chegou uma época que nem custeio num queria mais... teve pessoas que nós colhia e num deixava colher a produção dele, e ele mesmo colhia pra ele mesmo pagar o banco... queria fazer no nome dele, direto, né... aí chegou num ponto que viu que não dava mais pra mexer com eles, a gente abriu mão da sociedade [...] e foi tocar cada um pra si" [Orlando].

36 "Eles pegava os 6 e meio [alqueires-lote padrão] plantadinho, com adubo, semente boa, e em vez de entregar pra Associação, eles vendia direto. Isso foi fim de '87... vendia direto e em vez de pagar a Associação, não pagava... foi quebrando" [Zico].

37 O argumento para não pagar, reproduzido por Zico, é muito interessante: "Nóis num deve nada pra ninguém... quem deve é a Associação e nós num quer mais Associação".

38 "Foi preciso vender trator, vender caminhão, tinha 2 caminhão, tinha esses trator, tinha tudo, precisou vender pra acertar" [Zico].

39 "Quando foi sair um financiamento pra Associação, nós num aceitamos... nós reunimo 16 pessoa: num vai sair financiamento que o pessoal num vai pagar, vai só aumentar a dívida... a dívida vai só crescer" [Zico].

e fatos posteriores. Se o processo objetivo de declínio é relativamente simples de se compreender, é preciso ir um pouco mais fundo dimensionar o que ele significa, politicamente. É quase certo que, na base do conflito interno que destruiu a Associação, está o obscurecimento das diferenças internas ao grupo dos assentados, manifesto mais fortemente desde o contato desta luta popular com o Estado. Aparece então, pela primeira vez até aqui, a relevância da heterogeneidade dos setores populares, inclusive de classe, que atravessa as famílias da zona rural brasileira, constatação ainda hoje desconhecida da grande maioria das ações públicas relativas a elas. Isso equivale a dizer, para as questões de interesse aqui, que nem todos os sem-terra são iguais.

No caso estudado, os grupos assentados em conjunto tinham histórico de diferenças importantes, tanto nos perfis familiares quanto nas condições socioeconômicas e capacidades funcionais, para além dos critérios de raça, naturalidade e papéis desempenhados por gênero. Havia ao menos dois grupos de famílias na ocupação inicial do assentamento, com histórias claramente definidas e distintas⁴⁰. Havia grupos de pessoas que, sendo os mais pobres dos pobres do campo, eram originárias de famílias que sempre trabalharam como empregados, funcionários ou bóias-frias, em produções alheias, e que nunca haviam vivido a experiência da produção autonomamente. A unidade de produção, para elas, estava alheia à seu mundo privado: estes indivíduos trabalhavam para outrem, para garantir seu sustento. Mas havia outro grupo de pessoas, não menos importante, que apesar de também ter conquistado a terra apenas com a luta movimentista, em 1984, há gerações era proveniente de famílias que já haviam sido pequenos sítiantes, ou que trabalhavam em terras arrendadas de outros proprietários, ou em sistema de parceria. Essas famílias já conheciam tradicionalmente o ato de produzir, dominavam as técnicas da lavoura e sentiam-se capacitadas para plantar, colher e comercializar por sua própria conta. A família era a própria unidade produtiva, para elas.

Um dos tópicos relevantes a que essa discussão conduz, que infelizmente não pode ser tratado aqui a contento, diz respeito à característica excessivamente homogeneizadora das políticas de crédito, nesse caso, que talvez possa ser generalizada para boa parte das políticas públicas nas democracias liberais. Ao se criarem como programas técnicos, estas ações quase sempre desconsideram as diferenças internas aos seus “públicos-alvo”, reconhecidos não como sujeitos mas como ob-

40 Não me é possível, a partir dos dados obtidos, tecer considerações mais aprofundadas a respeito da estrutura desses grupos em relação a categorias como etnia, sexo, etc. Entretanto, certamente essas também poderiam ser categorias para se pensar sobre a heterogeneidade da composição e da estrutura das relações de poder internas a esse assentamento.

jeto de intervenção estatal. Esse é um dilema antigo das relações entre movimentos sociais e Estado, que no entanto ainda merece ser debatido, especialmente em países com alta institucionalização das políticas sociais, como no Brasil. Esta afirmação pretende recolocar a questão da *diferença* em destaque, em ruptura crítica com a homogeneização superficial que ronda os discursos –inclusive vindos da esquerda– sobre as *classes populares*, os *pobres*, etcetera.

A heterogeneidade interna aos assentados ficou subsumida enquanto durou a coesão interna do grupo mantida tanto pela motivação inicial, gerada pela conquista da terra, quanto pela firmeza da condução e coordenação da produção do “Zeca”, o engenheiro agrônomo do Estado. A partir da saída desse indivíduo, que com seu carisma mantinha o grupo unido em propósitos, as disputas internas apareceram de modo muito mais claro⁴¹ e, sem canais de elaboração, constituíram-se em fatores importantes para a desagregação da Associação. Não foi por acaso, assim, que exatamente as famílias que já tinham tradição de produzir foram as que, primeiramente, decidiram-se por romper com a Associação:

Quem era agricultor, já era agricultor e já tinha um acúmulo mais ou menos colocado, ele começava a resistir a esse processo, porque ele queria ter o lote dele e ele tocar, do jeito que ele queria administrar [Nico].

A vontade de retornar à produção familiar, dada a tradição da região, e a ideologia de classe média próspera, visitada nos primeiros anos da iniciativa, talvez estejam igualmente envolvidas no abandono do empreendimento coletivo por parte destas famílias. Os lotes de mesmo tamanho, em que cada família podia produzir, rendiam mais nas famílias que já tinham tradição de produção, e elas sentiam-se prejudicadas com a divisão coletiva igualitária. Algumas famílias se conformaram, outras deixaram de se dedicar à produção, por saberem que mesmo sem muito esforço, receberiam o mesmo que todos. Outras resolveram sair. O cenário no final da experiência da Associação era negativo tanto do ponto de vista da coesão interna aos grupos, quanto dos recursos: mesmo os assentados egressos da Associação, inadimplentes por estarem vinculados às dívidas da organização anterior, viram-se impossibilitados de obter crédito para produzir por conta própria. Também amargaram anos de pobreza, dali por diante.

41 “Esse engenheiro já tinha ido embora, tinha vindo outro engenheiro mais fraco um pouco, num tinha coragem de fazer” [Zico].

MST NA PIRITUBA. OUTRAS HISTÓRIAS

A partir de 1987, ao mesmo tempo em que a Associação entrava em declínio, havia na Fazenda Pirituba uma outra disputa importante, centrada na possibilidade de entrada do MST na organização do assentamento. De um lado, os técnicos do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP), ao mesmo tempo militantes do MST, pressionavam pela entrada do Movimento; como já trabalhavam ali há alguns anos, eles já haviam se tornado lideranças internas entre os assentados. De outro lado, as lideranças antigas da Associação opunham resistência forte à entrada das formas e metodologias empregadas pelo MST na área ocupada⁴². Mas os conflitos internos já eram praticamente insolúveis, o desgaste da Associação e a ausência de crédito tornavam a situação difícil. O MST talvez pudesse oferecer alguma solução.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, por outro lado, crescia no país e considerava importante estar presente no assentamento mais antigo do estado, com tamanho potencial histórico, político e produtivo. O movimento já chegou extremamente organizado à região, por isso, articulado a uma série de organizações nacionais e internacionais, reconhecido por interlocutores políticos e pelo senso comum como a organização popular mais relevante no debate sobre a Reforma Agrária no Brasil. Foi já assim que o MST chegou à Pirituba. A estrutura hierárquica do movimento já era também bem definida: a direção nacional coordenava os trabalhos das direções estaduais, e na região da Pirituba se constituiu uma direção regional, posteriormente. Esta estrutura impunha métodos, estratégias e táticas de ação coordenadas centralmente, que chegavam ao assentamento com muita capacidade de pressão e mobilização.

Aos poucos, o MST começou a fazer parte da vida dos assentados, e sua inserção foi crescente no correr dos anos⁴³. Em 1989, as formas de organização do MST já coordenaram o estabelecimento de um novo

42 Orlando, que participava da diretoria da Associação, conta que “o movimento [MST] já entrou no tempo da Associação, mas só que o seguinte: nós era contra o movimento. Na época da associação o presidente da associação era o Miguel, né? Nós era muito contra o movimento e nós ia na reunião e combatia pra ele não entrar aqui! Pra você ver... daí nós fomo em cada reunião ali de sair lasca, rapaz, pra não entrar... na época quem tava puxando muito, pro movimento entrar aqui, era um... Gilmar, um que trabalhava aqui no ITESP, era escrivão do ITESP. Puxava, puxava muito pro MST entrar aqui, né... o próprio Nico Barbosa, né? [...] e a gente foi contra, foi contra, chegou um ponto que o Miguel falou: Viu... nós vamo ter que entrar nessa coisa aí... e aí acabou entrando mesmo” [Orlando].

43 Aparício conta como ingressou no MST, para se tornar hoje uma liderança interna importante: “Eu entrei no Movimento Sem Terra em 1987... eu não tinha nenhum conhecimento do Movimento Sem Terra, eu ouvia falar do Movimento Sem Terra, mas eu detestava quando ouvia falar do movimento... eu, detestava, porque eu não sabia... até que veio uma pessoa [...] aí fez uma reunião com a gente e falou que que era o Movimento Sem Terra, qual era o significado do Movimento Sem Terra, qual era as pretensões do Movimento Sem Terra e daquele dia em diante passei a ser membro do Movimento Sem Terra e sou até hoje” [Aparício].

acampamento na área, que viria a ser conhecido como a Agrovila 4. Como a Agrovila 3 ainda não tinha a terra assegurada legalmente, e os militantes ainda estavam acampados sobre ela, os métodos de organização do MST também entraram nessa área rapidamente: o movimento já sabia como organizar as pessoas, tinha experiência acumulada e obteve sucesso na disputa. A conquista formal da terra para Áreas 3 e 4 – histórias muito bonitas, inclusive, que infelizmente não posso narrar aqui – abriram ainda caminho para outros acampamentos, conhecidos como Agrovilas 5 e 6. Todos os acampados foram assentados legalmente, em anos posteriores. Toda essa expansão do assentamento Fazenda Pirituba, portanto, já se dava na virada para os anos noventa, e sob a coordenação do MST; o sucesso das estratégias de conquista da terra, nesse período, são mesmo impressionantes. A hegemonia se completa quando as áreas mais antigas, as Agrovilas 1 e 2, também aderem em parte à coordenação central do movimento, em meados dos anos noventa. Agora, a Fazenda Pirituba já era um assentamento do MST.

A entrada do movimento oferecia esperanças às famílias assentadas. A forte capacidade de pressão que o movimento exercia sobre o Estado possibilitava a liberação de novas linhas de crédito, ainda que fossem obtidas por formas novamente coletivas de organização da produção. A expansão dos métodos de organização do movimento contava ainda com o apoio de funcionários da assessoria técnica estatal (contra a própria linha institucional estatal, naquele período), mas agora também com uma série de lideranças locais dos tempos da Associação, que se “converteram” ao movimento⁴⁴.

A história do MST na Pirituba é plena de realizações, conquistas, belezas, contradições, disputas, injustiças e frustrações; não é linear nem pode ser banalizada. Na impossibilidade de fazer jus a ela toda neste artigo, o que me forçaria a refletir sobre as seis Agrovilas implementadas ali, de histórias distintas uma a uma, restrinjo o objeto de investigação aos desdobramentos sentidos, internamente, desde a entrada do MST no comando da Agrovila 1, que já vínhamos conhecendo. Mais especificamente ainda, foco a análise a partir de agora nas interpretações dos assentados desta Agrovila acerca da implementação das grandes cooperativas de produção no assentamento.

44 O caso mais impressionante é o de Miguel, principal liderança interna do assentamento hoje, ex-presidente da Associação, que ao perceber que não poderia barrar a entrada do MST, adere ao movimento e se torna a principal liderança interna do MST na Pirituba. Permanece então no poder internamente, se destaca na Direção Regional e Estadual e, atualmente, é uma das lideranças mais expressivas da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Internamente, entretanto, perdeu muito de sua legitimidade desde 1997, com a mudança tática do movimento.

TEMPOS DE “COLETIVIZAÇÃO”

*Eu posso explicar, porque sofre um lado, sofre o outro,
sofrer assim, sabe, sofre de desgosto...
é o tar do pano branco: por cima tá coisa linda,
por baixo tá feio.*

Um tópico fundamental da história política do assentamento Fazenda Pirituba certamente será a implantação de Cooperativas de produção do MST, a partir do início dos anos noventa. Em todas as Agrovilas, sob as orientações recebidas da direção nacional do movimento, que havia negociado linhas de crédito específicas para elas, junto ao Estado, foram instituídas grandes Cooperativas coletivas de produção nos assentamentos. O modelo era o mesmo, para todos os assentamentos:

O movimento tinha uma posição político-ideológica que era importante, trabalhar com as empresas coletivadas, e tal [...] Em praticamente todas as áreas [foi implementada] a metodologia do Laboratório Organizacional de Campo, o LOC, que chama, que é uma metodologia de uma capacitação massiva, de transformar um grupo de pessoas num processo de operário, né? Quer dizer, pegar o cara, que vem, sei lá, você tem uma unidade, um agricultor familiar, naquela lógica... você... não! Nós vamos montar uma grande empresa, no estilo de Cuba, por exemplo, da União Soviética, então a concepção é essa. Nós vamos pegar esse pessoal que tá aí, e transformar eles... e aí pegar esse grupo inteiro e aí botar a Cooperativa [...] *Porque qual é a tese política que o pessoal falava? Que pro pessoal virar cidadão, esse homem novo, o cara tinha que virar operário... porque o agricultor é pequeno burguês, e pequeno burguês num pode, é um atraso* [Nico].

Esse discurso, por mais que esteja superado teoricamente há tempos, inclusive dentro da tradição marxista, e por mais que hoje seja reconhecido como um erro por parcela do próprio movimento, delineou parte significativa das ações –e dos equívocos– que se viram na trajetória do MST na Fazenda Pirituba nos anos noventa. Os agricultores que haviam conseguido a terra, para que não caíssem na “ilusão” de serem proprietários, para que combatessem a “falsa consciência”, para que não reproduzissem a perversidade do ciclo capitalista de produção, foram forçados a trabalhar coletivamente, como operários, sob a moeda de troca do crédito. Negociado junto aos governos pela capacidade de representação do MST, o crédito só seria liberado para quem estivesse integrado às cooperativas do movimento. Dada a inexistência de outra saída, pelo declínio da As-

sociação e a impossibilidade de créditos a pequenos grupos, sem figura jurídica, a maioria dos produtores filiou-se às cooperativas.

Isso foi a partir de '90, '91, '92 aí começou a ser feito esses Laboratórios... juntava o grupo coletivamente, aí dividia por setor, como uma forma empresarial mesmo. Onde o cara seria empresário, aí começou esse processo todo. E aí ficou um tempo meio mascarado esse processo, porque aí tinha a discussão do crédito também [...] Se é crédito organizado, o crédito sai pra quem é grupo organizado. Então vai sair pra quem tá nos coletivo. Quem não tá nos coletivo, num participa das luta, num sai crédito [Nico].

Se a experiência da Associação havia desmoronado, apesar de pertencimento e da motivação com que todos se dedicaram a ela, a princípio, o que se poderia esperar desse novo empreendimento, que desconsiderava ainda mais radicalmente as tradições familiares e distinções entre os assentados⁴⁵?

Começou a dar problema também, do ponto de vista da concepção. Porque tinha aquele um que queria ser agricultor familiar, tocar seu próprio lote. E tinha aqueles outros que se acomodavam... como assim, num é que acomodava, que era bóia-fria, então trabalhava, chegava cedo, falava: Que que eu tenho que fazer? Então tarefa, mesmo, como um operário, mesmo, então ele não se sentia como cooperado, como dono, da responsabilidade, e aí tinha começado conflito patrão-empregado [dentro da Cooperativa], porque a direção assumia o papel de patrão... aí, patrão, né? Então começava todas as táticas de sabotagem que vocês podem imaginar, que é a relação normal de patrão-empregado [Nico].

Não foi necessária uma década para que essa experiência se demonstrasse profundamente problemática e também declinasse, até desaparecer. O que era para ser exemplo de igualitarismo, passaria em breve a ser exemplar da relação mais viciada do sistema capitalista: os cooperativados vigiavam seus iguais, para mantê-los trabalhando oito horas por dia, sobre uma terra que haviam conquistado juntos. Uma das principais lideranças femininas do assentamento, com história de vida toda marcada pela militância de esquerda na cidade e no campo, me disse o seguinte:

Operário... é operário. Quando a gente chegava do serviço que você vê que tinha que ter um chefe que tá marcando a hora que

45 A tradição de agricultura familiar brasileira, os ritmos e técnicas da tradição popular, regional, seus processos culturais de afirmação e significação foram totalmente suprimidos pelo discurso instituído, trazido de fora para dentro, inspirado em marxismo leninista bastante banalizado.

“você perdeu, aquilo dói pra você, dói na gente, sabe? É você ter liberdade... liberdade de trabalhar, de se expressar, de decidir, então isso é que é mais importante: sem chefe. Sem chefe. Sem marcar hora que tem que fazer... [Zilda].

Em poucos anos as cooperativas frustraram as expectativas das famílias assentadas, e foram perdendo a capacidade de manter os “cooperados”, até se extinguirem. No plano objetivo, restaram muitas dívidas, divididas entre os participantes, quase todos inadimplentes junto aos bancos públicos ainda hoje. Entretanto, foi no plano simbólico, dos imaginários e concepções de mundo, que a experiência marcou mais.

Começa um processo de debandada [saída das cooperativas], os primeiros grupos a sair. E aí vem um processo complicado, porque o grupo que tinha coragem de sair começava a peitar a direção das Cooperativas, que era também a direção mais ideológica do movimento. E aí vinha em contrapartida as retaliações e as perseguições, mas assim “stalinistas” mesmo... tudo que vocês imaginarem de perseguição [Nico].

As estratégias de controle da base pela coordenação do movimento, então, passaram a gerar conflitos que se traduziram, logo depois, em boicotes aos produtores não coletivizados, e favorecimento na distribuição de recursos públicos obtidos junto ao governo para os membros da cooperativa. Pela força política que tem e que consegue graças à sua ação pública conflitiva, o MST passou a ser reconhecido nacionalmente como representante “natural” dos setores pobres rurais nas suas relações com o Estado. A legitimidade do movimento como representante “dessas populações” é, sem dúvida, reconhecida hoje em todos os níveis do Estado brasileiro. Junto com essa legitimidade, vem a possibilidade de gerenciar a destinação de recursos repassados aos assentamentos, e então é possível utilizá-los não mais para garantir o direito universal conquistado pelo trabalhador rural, mas por vezes para garantir uma base de apoio específica do movimento. Aos grupos internos que romperam com a direção local, e buscaram outros caminhos, não há mais recursos públicos. “Ou entra na luta, ou que se ferre”, me disse uma das lideranças⁴⁶.

46 Parcela desse grupo chega, inclusive, a formalizar um outro Movimento, chamado Movimento dos Assentados Independentes (MAI), que os possibilitasse organização coletiva para fazer frente ao MST e para estabelecer contato com o Estado, na disputa pelos créditos agrícolas. Já que os canais de relação com setores ligados ao PT (e demais partidos de esquerda) eram fortemente hegemonizados pelo MST, do nível regional ao nacional, os agricultores do MAI encontram, como saída, estabelecer contatos com setores do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). Essa decisão acirra ainda mais a distensão interna entre os grupos.

Os conflitos internos se agravaram muito nos anos noventa, e as grandes safras do período instituinte do assentamento não voltaram mais. Além disso, o processo de endividamento gerado pelos insucessos coletivos, causados por sua vez pela impossibilidade de mediação entre interesses divergentes, aumentou muitíssimo. Hoje 85% das famílias assentadas são inadimplentes, e a obtenção de novas linhas de crédito estava bloqueada junto às agências e bancos públicos de fomento até o final desta pesquisa. O endividamento dos agricultores familiares assentados, absolutamente disseminado pelo país, é reflexo dos equívocos de concepção que regeram tanto as políticas de crédito estatais, quanto as ações internas aos assentamentos na última década. Nessa perspectiva, me parece que há equívocos inerentes tanto ao modo como o Estado brasileiro pensa seu encontro com os movimentos sociais, como na forma como os próprios movimentos se utilizam deste equívoco para garantir sua legitimidade. O tópico do crédito aos sem-terra, absolutamente complexo e relevante para a Reforma Agrária, mereceria só nesse caso um artigo à parte, dados os elementos a serem abordados para o caracterizar minimamente.

Entretanto, agora importa dizer que, atualmente, o que se vê na Agrovila 1 da Fazenda Pirituba, justamente a área em que se fundaram as lutas coletivas, é uma fragmentação profunda dos assentados em pequenos grupos, cada qual buscando melhorar sua condição de vida da forma como consegue, à sua própria sorte, desarraigados e descrentes de qualquer saída coletiva. A fragmentação das soluções formula entretanto, de modo muito claro e peculiar, uma polarização ideológica entre o grupo dos “coletivos” e o grupo dos “individuais”, como eles se denominam. Esse falso debate, até por que me parece se fazer sobre terreno privado, minou profundamente as possibilidades de fundação de soluções políticas emancipatórias, quanto de produção que garantisse melhoria social dos assentados, nos últimos anos. A situação de desmobilização e pobreza da enorme maioria das famílias da Agrovila 1 deste assentamento, depois de duas décadas da conquista da terra, questiona centralmente as propostas de Reforma Agrária tentadas pelos governos e movimentos sociais brasileiros neste período.

Uma fotografia atual da Fazenda Pirituba revelaria que as famílias que permaneceram ligadas ao MST, e consentem em continuar na base das ações diretas de pressão do movimento –o que sem dúvida era a prioridade eleita pela direção central até o término desta pesquisa– ainda obtém crédito para produzir, e alguns outros benefícios, como programas de infra-estrutura, moradia, etc. Os grupos internos dissidentes, aliados dessa possibilidade e profundamente endividados, não se sentem representados pelo MST e não têm outro representante junto ao poder público. Saída comum: estes grupos buscam apoio junto

a quaisquer outros políticos locais, e então reproduzem o clientelismo tradicional das relações políticas do meio rural brasileiro. As oligarquias se mantêm. Outras famílias assentadas, alheias às duas opções anteriores, isolam-se mais e mais. Nesse isolamento resta-lhes, para sobreviver, arrendar as terras conquistadas depois de tanta luta e, aí sim nos casos mais perversos, passam a trabalhar como diaristas em lavouras vizinhas, em regime extremamente precário. Não são raros os casos na Pirituba em que famílias inteiras voltaram à condição de bóias-frias. A paisagem se refaz.

TRAUMA

Discriminação qualquer um sente...

No assentamento em questão, há então um debate colocado de modo muito polarizado, entre o grupo de assentados que prefeririam soluções “individuais” para seus problemas, e o grupo do “coletivo”, vinculados em sua maioria ao MST. Os primeiros querem liberdade para produzir em seus lotes, associando-se no máximo aos seus familiares, e repelindo o quanto possível as ingerências do movimento. O outro grupo, em contrapartida, permanece enfatizando as formas de produção coletivas, funciona sob um manto ideológico forte e beneficia-se dos convênios estabelecidos pelo movimento; a produção agropecuária no assentamento é, portanto, considerada como subsidiária da atuação política do MST, especialmente nas relações do movimento com o Estado. Uma vez mais, a montagem do espaço de conflito, nessas bases, mascara a distinção original, já situada nos tempos da Associação, entre os grupos de assentados. A existência dessas diferenças sustenta então, ainda hoje, debate potencial e conflito latente que, apesar de potencialmente político, não encontra meios para realizar-se. Sem espaço público para discussão dos ideais em questão, para manifestação das singularidades e coletividades possíveis, resta espaço para ressentimentos privados: *desânimo*, *mágoa*, e *trauma* foram palavras muito escutadas na pesquisa de campo.

A partir de 1997, a tática de atuação do MST na região seguiu orientação nacional, bastante compreensível do ponto de vista mais geral, de radicalizar a ação direta e ofensiva como possibilidade de manter-se vivo como sujeito político. Combatendo e combatido por um governo federal em clima de forte antagonismo, até o governo Lula, o movimento precisava continuar mantendo sua conflitividade para garantir aparição pública, que mantivesse seu patamar de negociação para novos convênios, que financiasse a continuidade das lutas. Essa tática foi bem sucedida, o movimento manteve-se vivo, e promoveu intensa discussão e ação política no Brasil. Muitos outros acampamentos

e assentamentos foram conquistados no período, que coincide paradoxalmente com o declínio efetivo do potencial político de muitos outros movimentos sociais. O MST percebeu a tendência de desmobilização que se acercava dos movimentos populares nas cidades e, até como reação às pressões fortíssimas que continuou a sofrer dos setores dominantes, teve de optar entre dois caminhos. A luta política tem lógica distinta da luta pela melhoria social dos assentamentos.

A tática nacional, que parece ter surtido os efeitos desejados em princípio, tornou-se altamente questionável para uma parcela muito significativa dos assentados da Pirituba, inclusive provocando dissidências internas ao MST naquela região⁴⁷. A partir da mudança dos modos de atuar, a produção no assentamento deixou de ser prioridade, e os recursos obtidos pela capacidade ampliada de pressão do movimento foram ficando, cada vez mais, restritos aos grupos que estavam na base da ação política movimentista. As referências à “discriminação”, então, surgiram com muita força dentro do assentamento, não sem razão, e permanecem sendo freqüentes. Os grupos internos à Pirituba acirraram sua disputa, e a força externa do MST praticamente sufocou e isolou parcelas crescentes de agricultores assentados ali.

A questão da representatividade do movimento, associada à da legitimidade, sempre centrais para pensar sobre os papéis políticos dos movimentos sociais na democracia, surgem então como categorias centrais para pensar o momento contemporâneo da Fazenda Pirituba. Ator político experimentado na luta, inclusive institucional, o MST da Pirituba obteve, nos anos noventa, acesso a espaços de formulação e implementação de uma série de programas estatais relevantes⁴⁸. A partilha do que se obtém externamente, entre assentados, revela entretanto as ambigüidades dessa relação:

47 “Até mais ou menos 1996-1997 [...] aquele pessoal que tava na direção, eles tinham a tática de fazer a pressão, mobilizava o pessoal, tudo, fazia a pressão, deixava o máximo tensionado, depois sentava pra negociar. Então aí, nessa sentada pra negociar ia conseguindo algumas coisas aí. Aí o pessoal achou que tava muito fácil: ó, nós conseguimos terra, conseguimos dinheiro, arrancamo tudo do governo, então agora nós vai... aí o movimento fez uma avaliação que o Brasil tava quase num estado pré-revolucionário, que agora nós vamo fazer a revolução, aí vocês devem ter escutado isso: ó, nós vamos fazer saque em supermercado, etcetera... a chamada desobediência civil. Aí chamaram uma reunião em São Paulo, da Coordenação Estadual, e falaram o seguinte: ó, agora nós vamo radicalizar, que nós tamo sentindo isso, que dá pra nós fazer a revolução. [Foram] pro enfrentamento... e aí aquelas liderança que era mais prática, do ponto de vista, ó, nós senta, negocia, falou: não, nós tamo fora desse negócio. Aí endureceram: falaram: quem vai, nós vamo em frente, quem não vai, tá fora. Aí começou a sair boa parte das liderança saiu... que era mais qualificada, saiu fora do movimento nessa época” [Nico].

48 O assentamento em questão obteve via MST, por exemplo, duas Escolas Públicas e o Programa de Saúde da Família, entre uma série de outros programas de crédito agrícola, habitação e infra estrutura.

O MST domina todas as áreas... domina assim, dizendo que trabalha pra todas, né? Na verdade num trabalha... isso aí ele faz pro lado que tem o MST... o MST que tem a turma que é da coordenação, então eles ali se reúnem, e daí eles começam a ir pra São Paulo. Pra cabeça de muitos coitadinhos, coitadinhos dizer meu, assim, ele num guarda entendimento, e ameaçado de tomar a terra dele, né? Então entra junto. É isso aí que [acontece]. Então a injustiça que eu digo é isso [“Seo” Tonho].

É evidente que só os grupos internos ligados ao MST é que obtiveram acesso, nos últimos anos, aos “direitos” que os programas públicos conquistados gerariam. Os “individuais” ficaram de fora, o que ajudou a dissolver as relações internas ao assentamento. Aumenta a coesão interna do grupo dos “coletivos”, ou ligados ao MST, que na Agrovila 1 são minoritários mas têm muitos recursos concentrados; reproduzem-se relações de dominação, sob a égide de uma ideologia igualitarista; e dado o endividamento crescente dos assentados, o que se vê hoje é que nem um grupo, nem outro, conseguem obter renda suficiente para suas famílias por via da produção agrícola.

É preciso deixar claro, para evitar mal entendidos, que tenho profundo respeito pela luta do MST e pelas organizações e indivíduos que lutaram durante décadas, no Brasil, pelo sonho da reforma agrária, e pela superação da desigualdade, autoritarismo e violência que constituíram a sociedade brasileira. Durante quinhentos anos elites mantiveram maiorias alijadas de quaisquer direitos, e o MST é uma reação a isso. É desse respeito que nasce a vontade de debater, desde alternativas à esquerda, as críticas situadas ao movimento. É do respeito a esse histórico de lutas dos agricultores sem-terra desse assentamento que me vem a necessidade de tentar elaborar criticamente as dinâmicas que fazem com que, vinte anos de luta passados, a palavra “trauma” seja o qualificativo preferido para adjetivar sentimentos que palavras como “cooperativa”, “associação” e “coletivo” despertam nas pessoas.

CAMPOS POLÍTICOS, DILEMAS RECENTES

Agora, já é possível recontar a história narrada, em poucos parágrafos, para expor minhas notas finais. A origem da mobilização da Fazenda Pirituba é clássica: nasce do mundo das necessidades, das carências prementes de homens e mulheres aos quais a cidadania sempre foi negada. Privações encaradas com coragem e força de lutar surpreendentes encontraram, no início dos anos oitenta, um contexto politizado. Havia um campo político montado na sociedade, que ofertou pano de fundo e visibilidade pública às demandas formuladas pelo pequeno grupo de lavradores que lutavam. Os grupos de esquerda do período renovavam

sindicatos, pastorais e comunidades de base que, associadas aos intelectuais que regressavam ao cenário político, construíam espaços públicos populares, terrenos políticos.

Colocados nesses terrenos, o pequeno grupo de lavradores do sul do estado de São Paulo logo seria um movimento social. A organização, local e baseada em compromissos privados, ao transitar para este campo tornava-se organização política. A conjuntura do período, paradigmática, permitiu que milhões de pequenas iniciativas como a daqueles lavradores, articuladas sob os conteúdos discursivos de mudança que se aproximava, forjassem a abertura de uma esfera pública popular. As condições institucionais facilitavam a aparição deste espaço: o Estado se abria à mudança de regime e a proposta democrática surgia com legitimidade enorme, no Brasil e em diversos outros países da América Latina.

A mobilização dos poucos agricultores se tornou mobilização de muitos, que marcharam sobre a Fazenda Pirituba: a demanda por justiça social é muito reprimida, e ao menor sinal de que se pode efetivá-la, aparecem muitos requerendo sua parcela. O movimento mais ampliado e organizado se tornou então sujeito reconhecido politicamente, fez pressão sobre o Estado, abriu caminho por terrenos institucionais, conseguiu canais de negociação, fez mais pressão neles, e obteve o que buscava: a garantia legal do acesso à terra. O campo de discursos políticos respaldava os agricultores numa luta mais ampla, e comum; isso fazia da conquista social obtida uma conquista política. O sindicato, a igreja e mesmo o governo de transição –estávamos em 1984– foram mediadores importantes. A ação política repercutia, então, também nos universos privados das famílias recém assentadas: os critérios de entendimento do mundo das famílias rurais do interior de São Paulo, a religiosidade popular que em geral a acompanha, o ritmo da produção agrícola e manutenção da vida de repente se chocavam com uma dimensão de elaboração até então desconhecida: a esfera pública⁴⁹. Pela experiência de luta nesse contexto os militantes descobriram a existência do mundo público, e se viram fazendo movimento popular.

Essa descoberta não faz com que as carências objetivas sejam supridas, evidentemente. Aliás, mesmo as primeiras safras, e a fartura delas, não garantiu estabilidade ao grupo, que não encontrava canais apropriados para resolução de suas diferenças internas. Desde a queda da Associação, no final dos oitenta, iniciou-se um processo de restrição da ação pública dos assentados da Fazenda Pirituba. Esse processo corresponde à diminuição dos espaços públicos na sociedade como um todo.

49 Para apresentação e análise clássicas, e apaixonantes, da cultura do homem do interior do estado de São Paulo, ver Candido (1987).

As causas do declínio da Associação e do fracasso das cooperativas do MST no assentamento foram analisadas rapidamente, nesse artigo. Em minha interpretação, essas passagens simbolizam a restrição das potencialidades políticas daquela comunidade, e de seu progressivo isolamento em relação ao âmbito público. Para pautar publicamente a fratura que separa os que têm direitos dos que não têm, não basta a virtude inicial das lutas, é preciso um campo político permanentemente aberto às demandas populares. Não foi o caso da democracia institucional brasileira, em sua consolidação. Depois dos assentados encontrarem um contexto que lhes permitia formular publicamente suas demandas, depois que haviam se projetado sob pano de fundo político, que lhes permitiu sonhar com mudanças, o chão lhes foi retirado. Disputas internas desmancharam as conquistas anteriores, e as saídas coletivas fracassaram.

Foi aí que o MST chegou à Fazenda Pirituba, recriando esperanças. O movimento adentrava os anos noventa procurando manter-se ativo politicamente apesar do cenário político já ser muito adverso à figuração dos movimentos sociais como sujeitos políticos. Nascido num cenário muito mais propício à aparição popular, pelo campo político forjado durante a transição institucional, o MST superou, nos anos noventa, os inúmeros bloqueios contrapostos à sua atuação, e manteve sua relevância no debate nacional. Foi bem sucedida a saída proposta pelo movimento, de apostar na ação direta, priorizar e tecnificar os procedimentos para novas ocupações e acampamentos conquistados, contando com a formação de “frentes de massa” radicalizadas. Assim, simultaneamente a esta especialização da militância intermediária, que garantiu a frente de combate do movimento, houve uma maior centralização da direção, que comandou as estratégias combinadas de luta e negociação com governos, para assegurar tanto a manutenção da visibilidade do movimento, quanto sua sobrevivência material, na última década. A opção pelo conflito público, nessa medida, foi extremamente bem sucedida. Por apostar tudo no dissenso que sua aparição pública carrega, aliás, é que o MST se distanciou da tendência à invisibilidade de uma série de outros movimentos populares, especialmente urbanos, nascidos no Brasil no mesmo período.

Este processo, entretanto, teve custos importantes para a dimensão interna do movimento, e estes custos foram sentidos na pele pelos assentados da Fazenda Pirituba. Em primeiro lugar, custou a progressiva desvinculação das “frentes de massa” e da direção do movimento em relação às suas bases –as famílias acampadas e, especialmente, as já assentadas, deixaram de ser prioridade para o movimento. A direção centralizada e a especialização de uma frente de combate, em realidade, passou a “produzir” abaixo delas uma massa, por definição homogênea e portadora de interesse único, a ser representada quase que

naturalmente por sua direção. A realidade empírica conspirou contra esta concepção, entretanto. A homogeneização dos grupos de agricultores assentados na Fazenda Pirituba, que pela segunda vez desconsiderou suas trajetórias anteriores e a construção de suas identidades, redundou não em emancipação social, mas em autoritarismo.

Se houve ganhos com esta ênfase tática na dimensão externa ao movimento, o que se perdeu progressivamente nesta passagem foram os canais entre a construção interna de sua representatividade e o âmbito público, que garantissem a formulação política de suas demandas. O que se perdeu na Fazenda Pirituba foram os processos políticos necessários, internamente, para que de fato pudesse ser construída uma representatividade orgânica do movimento. Quando se desmanchava a possibilidade de emancipações microcósmicas entre os assentados, considerada como “alienação” no discurso movimentista oficial (Carvalho, 2002: 239), desmanchava-se a fundação da política na base do sujeito popular que o movimento se propõe a ser, e portanto sua razão política. Na experiência das lutas estudadas, centradas em dimensão externa ao movimento, passou-se a considerar-se a representação como fato dado, natural, e a “massa” perdeu a possibilidade de se constituir efetivamente como sujeito político ou, em outra terminologia, como classe.

Nos assentamentos já estabelecidos surgem então, como se observa em inúmeras etnografias realizadas recentemente, formas quase sempre pouco elogiáveis de manter a militância de base sob controle. No limite, como a história da Fazenda Pirituba demonstra, instrumentalizar a produção e a vida dos assentados para garantir a aparição pública conflitiva do MST força o movimento, de fora para dentro, a diminuir suas capacidades orgânicas. Com estas capacidades reduzidas, sua aparição pública necessariamente precisa se tecnificar para manter a conflitividade em pauta, e tecnificada esta aparição passa a ser centrada na produção de *atos políticos*.

Estes fatos são, ainda que politicamente relevantes, submetidos então à lógica da circulação da informação, ou seja, à lógica do consumo da informação numa sociedade, aí sim, de massas. Os fatos têm de ser produzidos de modo intenso, para que a informação política se mantenha circulando. As ações da direção e das “frentes de massa”, conseqüentemente, tendem com o passar do tempo a serem focadas no gerenciamento destes processos, alheios aos militantes de base do movimento, e à dimensão interna de construção da representatividade. Estabelece-se, assim, um ciclo pouco virtuoso e certamente difícil de se sustentar politicamente, a longo prazo. A atuação política do movimento tende, submetida a este ciclo, a incorporar a racionalidade instrumental em seu seio (o que a transforma paulatinamente em seu oposto).

Um dilema fundamental está colocado, portanto. Se é compreensível e justificável a ênfase do movimento em manter sua aparição pública, para sustentar-se como um sujeito político no debate brasileiro, o contexto contemporâneo de restrição progressiva dos espaços públicos populares lhe impõe dilemas severos. De um lado, persiste a extrema pobreza material das populações rurais, inclusive as acampadas e asentadas pelo movimento, que solicita da luta política urgências gerenciais. De outro lado, a restrição progressiva dos espaços públicos para a aparição popular solicita do movimento escolher entre a construção de sua representatividade interna e sua aparição pública. Este dilema não se resolve teoricamente; é o desdobramento histórico, portanto a ação dos sujeitos envolvidos em seu enfrentamento, que demonstrará quais suas conseqüências políticas futuras.

O que fica claro, entretanto, é que este não é um dilema particular do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Na trajetória recente dos movimentos sociais brasileiros, é evidente que o mesmo dilema tem se colocado a todos os atores sociais preocupados em agir politicamente. Para eles, a luta política é extremamente exigente. Como sujeitos sempre expostos à desqualificação e repressão pelos discursos dominantes, não lhes é possível dedicar-se exclusivamente aos trabalhos de base e esperar o tempo político da grande transformação; nem lhes é permitida apenas a tentativa de ocupação de canais de relação com o Estado, com partidos ou políticas públicas, como fossem eles próprios os governantes; nem tampouco podem focar-se apenas nas ações diretas de confronto, que fundam espaços de locução renovados porém efêmeros. A luta política destes movimentos parece se situar, hoje, necessariamente *entre* todas estas esferas. Nos trânsitos entre elas é que a construção política destes atores parece poder romper com os constrangimentos que, de um lado, tentam restringir os movimentos sociais ao mundo privado e, de outro, os aprisionar em um simulacro de mundo público, fundado pelos mesmos mecanismos pelos quais a vida civil tem se despolitizado. Fortalecer as mediações entre esses espaços, já existentes e por serem fundados, é o que permite aos movimentos sociais agir politicamente. Sem estas mediações construídas e discutidas amplamente, as alternativas serão sempre autoritárias.

BIBLIOGRAFIA

Alvarez, Sônia e Dagnino, Evelina 1995 "Para além da 'democracia realmente existente': movimentos sociais, a nova cidadania e a configuração de espaços públicos alternativos". Trabalho apresentado no XIX Encontro Anual Da Anpocs, Caxambu.

- Alvarez, Sônia; Dagnino, Evelina e Escobar, Arturo (orgs.) 2000 *Cultura e política nos movimentos sociais latino-americanos* (Belo Horizonte: UFMG).
- Arendt, Hannah 1987 *Homens em tempos sombrios* (São Paulo: Companhia das Letras).
- Arendt, Hannah 1990 *Da revolução* (São Paulo: Ática).
- Arendt, Hannah 2000 *Origens do totalitarismo: anti-semitismo, imperialismo, totalitarismo* (São Paulo: Companhia das Letras).
- Arendt, Hannah 2001 *A condição humana* (Rio de Janeiro: Forense Universitária).
- Avritzer, Leonardo e Navarro, Zander (orgs.) 2003 *A inovação democrática no Brasil* (São Paulo: Cortez).
- Baierle, Sérgio Gregório 1992 “Um novo princípio ético político: prática social e sujeito nos movimentos populares urbanos em Porto Alegre nos anos 80”. Dissertação Mestrado em Ciência Política, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
- Baierle, Sérgio Gregório 2000 “A explosão da experiência: emergência de um novo princípio ético-político nos movimentos populares urbanos em Porto Alegre” in Alvarez, Sônia; Dagnino, Evelina e Escobar, Arturo (orgs.) *Cultura e política nos movimentos sociais latino-americanos* (Belo Horizonte: UFMG).
- Bergamasco, Sônia M. P. Pereira e Norder, Luiz Antônio Cabello 1999 “Os impactos regionais dos assentamentos rurais em São Paulo (1960-1997)” in Medeiros, Leonilde Servolo de e Leite, Sérgio (orgs.) *A formação dos assentamentos rurais no Brasil: processos sociais e políticas* (Porto Alegre/Rio de Janeiro: Ed. Universidade/UFRGS/CPDA).
- Bourdieu, Pierre 2002 *O poder simbólico* (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil).
- Candido, Antonio 1987 *Os parceiros do Rio Bonito* (São Paulo: Duas Cidades).
- Carvalho, Horácio Martins de 2002 “A emancipação do movimento no movimento de emancipação continuada (resposta a Zander Navarro)” in Santos, Boaventura de Sousa *Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista* (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira).
- Carvalho, Inaiá e Laniado, Ruthy 1989 “Rediscutindo o tema: movimentos sociais e democracia”, mimeo.

- Carvalho, Maria do Carmo 1997 “Eppur si muove...’ Os Movimentos Sociais e a Construção da Democracia no Brasil”. Dissertação Mestrado em Ciência Política, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
- Carvalho, Maria do Carmo e Teixeira, Ana Cláudia Chaves (orgs.) 2000 “Conselhos Gestores de Políticas Públicas” in *Publicações Polis* (São Paulo: Polis) Nº 37.
- Chalhoub, Sidney 1990 *Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte* (São Paulo: Companhia das Letras).
- Chauí, Marilena 2000 *Cultura e democracia* (São Paulo: Cortez).
- Dagnino, Evelina 1994 “Os Movimentos Sociais e a emergência de uma nova noção de cidadania” in Dagnino, Evelina (org.) *Os anos 90: política e sociedade no Brasil* (São Paulo: Brasiliense).
- Dagnino, Evelina 2000 “Cultura, cidadania e democracia” in Alvarez, Sônia; Dagnino, Evelina e Escobar, Arturo (orgs.) *Cultura e política nos movimentos sociais latino-americanos* (Belo Horizonte: UFMG).
- Dagnino, Evelina 2002 “Sociedade civil, espaços públicos e a construção democrática no Brasil: limites e possibilidades” in Dagnino, Evelina (org.) *Sociedade civil e espaços públicos no Brasil* (São Paulo: Paz e Terra).
- Dahl, Robert 1997 *Poliarquia* (São Paulo: Edusp).
- Doimo, Ana Maria 1995 *A Vez e a Voz do Popular: movimentos sociais e participação política no Brasil pós-70* (Rio de Janeiro: Relume Dumará/ANPOCS).
- Feltran, Gabriel de Santis 2005 “Desvelar a política na periferia: histórias de movimentos sociais em São Paulo” (São Paulo: Associação Editorial Humanitas/FAPESP).
- Fernandes, Bernardo Mançano 1999 *MST. Formação e territorialização* (São Paulo: Hucitec).
- Fraser, Nancy 1995 “Rethinking Public Sphere. A contribution to the critique of Actually Existing Democracy” in Robbins, Bruce (ed.) *The Phantom Public Sphere* (Minnesota: University of Minesota Press).
- Gramsci, Antonio 1986 *Concepção Dialética da História* (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira).
- Gramsci, Antonio 1987 *Maquiavel, a Política e o Estado Moderno* (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira).

- Lindblom, Charles 1979 *Política e mercados* (Rio de Janeiro: Zahar).
- Navarro, Zander 2002 “Mobilização sem emancipação: as lutas sociais dos sem-terra no Brasil” in Santos, Boaventura de Sousa (org.) *Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista* (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira).
- Oliveira, Francisco de 1998 *Os direitos do antivalor* (Petrópolis: Vozes).
- Oliveira, Francisco de 2000 “Privatização do público, destituição da fala e anulação da política: o totalitarismo neoliberal” in Oliveira, Francisco de e Paoli, Maria Célia (orgs.) *Os sentidos da democracia: políticas do dissenso e hegemonia global* (Petrópolis: Vozes).
- Oliveira, Francisco de e Paoli, Maria Célia (orgs.) 2000 *Os sentidos da democracia: políticas do dissenso e hegemonia global* (Petrópolis: Vozes).
- Paoli, Maria Célia 1995 “Movimentos sociais no Brasil: em busca de um estatuto político” in Hellmann, Michaela (org.) *Movimentos sociais e democracia no Brasil* (São Paulo: Marco Zero/Ildesfes).
- Paoli, Maria Célia 2002 “Empresas e responsabilidade social: os enredamentos da cidadania no Brasil” in Santos, Boaventura de Sousa (org.) *Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa* (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira).
- Poulantzas, Nicos 1968 *Poder político e classes sociais* (São Paulo: Martins Fontes).
- Quevedo, José Miguel Garrido 1995 “A organização de pequenos produtores e assentados em Itaberá-SP: análise de um processo de intervenção”. Dissertação Mestrado em Engenharia Agrícola, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
- Rancière, Jacques 1996a *O desentendimento* (São Paulo: Editora 34).
- Rancière, Jacques 1996b “O dissenso” in Novaes, Adauto (org.) *A crise da razão* (São Paulo: Companhia das Letras).
- Ribeiro, Ana Clara Torres e Grazia, Grazia de 2003 *Experiências de Orçamento Participativo no Brasil* (São Paulo: Vozes).
- Sader, Eder 1988 *Quando novos personagens entraram em cena: Experiências, Falas e Lutas dos Trabalhadores da Grande São Paulo, 1970-80* (Rio de Janeiro: Paz e Terra).

- Santos, Boaventura de Sousa (org.) 2002 *Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa* (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira).
- Santos, Laymert Garcia dos 2000 “Tecnologia, perda do humano e crise do sujeito de direito” in Oliveira, Francisco de y Paoli, Maria Célia (orgs.) *Os sentidos da democracia: políticas do dissenso e hegemonia global* (Petrópolis: Vozes).
- Semeraro, Giovanni 2000 “O marxismo de Gramsci”.
En <<http://www.artnet.com.br/gramsci>> 15/03/01.
- Shimbo, Lúcia Zanin 2003 “A casa é o pivô: questões, conflitos e potencialidades do diálogo entre arquitetos e moradores em projetos de habitação. Estudo de caso: assentamento rural ‘Fazenda Pirituba’ (Itapeva, SP)”. Memorial de Qualificação, Mestrado em Arquitetura, USP, Escola de Engenharia de São Carlos, São Carlos.
- Souza, Maria Antônia de 1999 “As formas organizacionais de produção em assentamentos rurais do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST”. Tese de doutoramento, Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
- Telles, Vera da Silva 1994 “Sociedade civil e a construção de espaços públicos” in Dagnino, Evelina (org.) *Os anos 90: política e sociedade no Brasil* (São Paulo: Brasiliense).
- Thompson, Edward Palmer 1989 “La sociedad inglesa del siglo XVIII. ¿Lucha de clases sin clases?” en *Tradicción, revuelta y conciencia de clase* (Barcelona: Crítica).

Dolores Nair Calvo*

**ORGANIZACIÓN POLÍTICA
AUTO-REFERENCIADA
EN SECTORES POPULARES**
EL CASO DE LA FEDERACIÓN
DE TIERRA, VIVIENDA Y HÁBITAT

**NOTA INTRODUCTORIA Y ACLARACIONES EN TORNO AL
ABORDAJE TEÓRICO**

En el curso de la segunda mitad de la década del noventa, diversas organizaciones cuyos miembros son en general personas sin empleo protagonizaron acciones colectivas de tipo contencioso¹ que llamaron la atención tanto de agentes del gobierno como de investigadores sociales y periodistas. La mayoría de dichos grupos se apoyaban organizacionalmente en redes asociativas barriales, es decir, estaban estructurados territorialmente. Reparar en esta característica despertó nuestro inte-

* Licenciada en Sociología, Universidad de Buenos Aires. Magíster en Investigación en Ciencias Sociales, UBA. Becaria de Ciencia y Técnica de la UBA (UBACyT) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Desarrolla sus estudios de posgrado en la Universidad de Uppsala, Suecia.

1 Seguimos a Charles Tilly en la definición del concepto de acción colectiva contenciosa como “acontecimientos en los que algunas personas se reúnen en un lugar públicamente accesible y, de palabra o de hecho, realizan reclamaciones contra otros, reclamaciones que, de llevarse a cabo, afectarían a los intereses de esos otros” (1990: 169). La acción colectiva es siempre explicada por Tilly a partir de modelos de interacción estratégica dinámica entre actores múltiples dentro del marco de repertorios de acción específicos para cada par de interlocutores.

rés por conocer qué hay más allá de las acciones contenciosas protagonizadas por tales organizaciones.

La investigación que hemos desarrollado versa sobre *los intentos de organización política en sectores de menores recursos*. Nuestro objeto de estudio es el entramado de relaciones sociales desde el cual se constituyen *formas de organización política auto-referenciada* y se desarrollan *marcos interpretativos*² de la acción por parte de *sectores populares*³, lo que a su vez da lugar a la conformación de un tipo específico de *politicidad*. La tarea de investigación tuvo como objetivo general explicar las condiciones de posibilidad de *formas de organización política auto-referenciada* en Argentina, a los fines de contribuir a una explicación sociológica de las (re)orientaciones políticas de una parte activa de los sectores populares, las respuestas organizativas desarrolladas, y su presencia como actor político en la escena pública.

Dentro de esta temática, abundan los trabajos que correlacionan necesidades materiales y acción política. En este tipo de lecturas, que Edward P. Thompson denominó “visión espasmódica de la historia popular” (1995: 213), las prácticas políticas de los sectores populares se presentan, al decir del autor, como “compulsivas, más que autoconscientes o autoactivadas; son simples respuestas a estímulos económicos”. Si siguiéramos esta línea, bastaría correlacionar el incremento de los índices de desocupación y/o pobreza con el del número de participantes en organizaciones de desocupados para explicar esa participación. En cambio, consideramos que la situación de desocupación o pobreza no es la causa directa de que una parte de los sectores de menores recursos de la sociedad argentina confluya en formas de organización política auto-referenciada: si así fuera, la totalidad de la población afectada por el desempleo y la pobreza participaría de cierta manera en alguna organización de desocupados. En este trabajo, en cambio, nos proponemos construir una explicación de nuestro objeto de estudio desde una perspectiva que tome en cuenta los aspectos referidos a los procesos políticos y a la historia de los actores individuales y colectivos, atendiendo a las relaciones sociales, con el propósito de, parafraseando a Max Weber,

2 Con *marcos interpretativos* o *procesos enmarcadores* nos referimos a los esfuerzos estratégicos conscientes de parte de los actores en pos de forjar formas compartidas de considerar el mundo y a sí mismos que legitimen y muevan a la acción colectiva y al desarrollo de instancias organizativas. Los marcos interpretativos hacen posible la acción colectiva. Para un tratamiento sintetizador del concepto ver McAdam et al. (1999). También puede revisarse la discusión en Tarrow (1997: 210-233).

3 En nuestra definición conceptual de *sectores populares* o *sectores de menores recursos* incluimos no sólo los elementos que remiten a la trayectoria socioeconómica (específicamente el capital económico expresado en dinero o títulos de propiedad que posee, o no, una persona) sino, también, a su situación en lo referido a *capital social* y a *capital cultural*, según las formulaciones de Pierre Bourdieu (2000c: 131-164).

“comprender e interpretar la acción social para poder explicarla en su desarrollo y efectos” (1996: 5). A estos fines adoptamos determinados lineamientos teóricos y elaboraciones conceptuales que permiten avanzar en ese sentido. Antes de referirnos a esas líneas teóricas y batería de conceptos, presentaremos algunas aclaraciones puntuales acerca de la investigación.

El objetivo específico consistió en explicar un estudio de caso, desentrañando las prácticas políticas que tienen lugar en el marco de las redes sociales existentes en los ámbitos en los que se indagó. Buscamos dar cuenta de su densidad organizativa, sus lógicas de acción y los procesos de *enmarcamiento*, de manera de comprender cómo y por qué se dio el desarrollo de una organización política auto-referenciada. Para construir un esquema explicativo de este tipo fue fundamental poner en relación la *posición* de los actores, con sus variaciones en el espacio social, y la *experiencia* de los mismos en sus ámbitos de pertenencia, lo cual implicó prestar atención a sus *trayectorias*.

La organización estudiada es la Federación Nacional de Trabajadores por la Tierra, la Vivienda, y el Hábitat⁴ (FTV), organización territorial miembro de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA). Hemos centrado la indagación en la localidad de San Francisco Solano (SFS), Partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires. En función de realizar comparaciones y enriquecer el análisis, recortamos otro ámbito espacial bonaerense conformado por ciertas localidades del Partido de La Matanza. Efectuamos esta selección porque en ambos lugares las prácticas y estrategias organizacionales han nacido y se desarrollan de modo tal que presentan rasgos específicos que las diferencian significativamente de prácticas y estrategias propias de organizaciones más tradicionales, como partidos políticos o sindicatos, características típicas que hacen precisamente a nuestra definición de formas de organización política auto-referenciada. Por otra parte, el caso de La Matanza reviste importancia porque es hoy el núcleo organizativo básico de la FTV a nivel nacional.

Definimos la organización política que tomamos como estudio de caso como *territorial*, y no en términos de agrupación de desocupados. Optamos por esta denominación porque se apoya en redes asociativas barriales preexistentes, sus estructuras organizacionales son territoriales, porque ni sus objetivos –pasados y actuales– ni sus acciones concretas se circunscriben a la cuestión del desempleo, sino que com-

4 Cuando se formó la Federación se le otorgó ese nombre, y más tarde pasaría a llamarse Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat. La denominación más común entre dirigentes, referentes y militantes es Federación de Tierra. Es interesante señalar que nos parece significativo que se nombre a la organización poniendo énfasis en “tierra” y no en “trabajadores”.

prenden todo un haz de temas vinculados con la propiedad de la tierra y las condiciones de hábitat⁵, y porque los factores explicativos de mayor peso para comprender su génesis, desarrollo y prácticas se asocian, fundamentalmente, con el ámbito de residencia, y no con dimensiones vinculadas al mundo del trabajo.

En términos analíticos, podemos identificar ciertos contornos que definen de manera *típica* un *sistema relacional auto-referenciado* dentro de cuyos márgenes se desarrollan *formas de organización auto-referenciada*: se encuentra fundado sobre redes de relaciones informales, es decir, observa un importante nivel de informalidad en sus lazos; desarrolla circuitos de relaciones menos cristalizados o más flexibles, en comparación con organizaciones como sindicatos o partidos políticos; en su interior, las relaciones se caracterizan por la independencia de estructuras tradicionales de partidos políticos y sindicatos; d) dentro de sus límites se observa una complementariedad de lazos políticos y no políticos, ambos con incidencia en la conformación de prácticas políticas; en su interior se presentan intereses asociados a necesidades inmediatas de los actores en re-definición cuasi permanente, y no formalmente establecidos de manera corporativa; dentro de sus márgenes opera un requerimiento de compromiso activo y participación continua hacia sus miembros; presenta en su interior vínculos directos con (y reconocimiento hacia) los dirigentes; hacia “afuera”, la definición del “otro” no es unitaria sino que varía en función del círculo de posición del sistema relacional que analíticamente tomemos; en el mismo sentido, hacia “afuera” no define explícitamente una “totalidad” a la cual pretenda representar.

De este modo, cuando decimos *formas de organización política auto-referenciada*, o también *fuerzas organizativas auto-referenciadas*, nos referimos a intentos de organización relativamente novedosos, constituidos por relaciones sociales con un alto nivel de informalidad e independientes respecto de estructuras organizacionales tradicionales. Es necesario puntualizar que estamos estableciendo una diferencia analítica entre el *sistema relacional auto-referenciado* y las *formas de organización política auto-referenciada concretas que pueden identificarse empíricamente*.

El supuesto más general que guió este trabajo de investigación es que los intentos de crear formas de organización política y el desarrollo de marcos interpretativos están relacionados con condiciones emergen-

5 Al respecto, vale la pena aclarar que tuvo lugar un proceso de mutación en los objetivos de la organización, objeto del estudio de caso. Concreta y resumidamente podemos señalar que a la demanda por las condiciones relacionadas con la tierra, la vivienda y el hábitat se sumaron, ya desde mediados de la década del noventa, los reclamos vinculados al problema del desempleo.

tes de las redes asociativas (de vecinazgo, familiares, fomentistas, etc.) a las que los actores pertenecen. Estas redes, no específicamente políticas, se constituyen como el *locus* del desarrollo de un tipo específico de *politicidad*. En este sentido, consideramos importante indagar a nivel de las redes sociales para comprender la nueva presencia política de estos sectores. Así, examinamos los procesos de constitución y reconstitución de lazos sociales que tienen lugar en esos ámbitos de pertenencia, prestando atención a la *reflexividad* de estos actores, en sus intentos, tanto de instrumentar *formas organizativas auto-referenciadas*, como de desarrollar estrategias de construcción de *marcos interpretativos* que posibiliten la acción política, intentos que dan lugar a un proceso de constitución de una *politicidad* propia.

Cuando decimos *politicidad*, aludimos a las dimensiones referidas a las sensibilidades políticas de los actores, a sus creencias, actitudes y formas de relacionarse con los debates y las decisiones de la esfera pública. Son iniciativas u orientaciones que no se constituyen necesariamente como discursos estructurados conceptualmente con llamamientos a la acción que incluyan una proyección social global o proyectos de cambio político. Esta dimensión de creencias y actitudes se conforma en la práctica concreta y cotidiana de los actores, y va definiendo aquello que para ellos es *hacer política*⁶. El término *politicidad* se halla en estrecha relación con el concepto de cultura política, que apunta al universo de significados que la política y el hacer política adquieren para los actores, pero que además incluye la referencia a la *experiencia* anterior como constitutiva de la percepción y significación actual de las prácticas, y la resignificación continua que se opera en el plano de la memoria. Si ponemos en relación ambos conceptos, *politicidad* da cuenta de la forma en que la cultura política es *incorporada* en (y por) los actores, de forma tal que la *politicidad* encuentra una referencia más inmediata en las prácticas que genera, en el cómo se constituye la cultura política. Luego, introducimos la noción de *marcos interpretativos* o *procesos enmarcadores* para incorporar la dimensión estratégica al análisis de los aspectos relativos a la cultura política.

En relación al cuerpo de datos que hemos analizado, el mismo fue construido a partir de entrevistas en profundidad, observaciones y charlas con informantes clave. Las entrevistas (26 en total) se realizaron con dirigentes, referentes, militantes y afiliados periféricos. Diferenciamos dos conjuntos de entrevistas, a partir de la distinción

⁶ El concepto de *politicidad* es propio. La definición de este concepto la construimos a partir de diversas conversaciones con nuestro director de tesis, Ricardo Sidicaro. La idea de cultura política tal como se define en relación a *politicidad* también es propia.

entre nuevos y antiguos miembros de la organización⁷. Por medio de las observaciones se abordaron las prácticas políticas cotidianas de los actores (actividades en los locales, reuniones de los barrios, comisiones de trabajo, delegados, asambleas, plenarios) y sus acciones contenciosas (cortes de ruta, manifestaciones, movilizaciones). Nuestra pretensión, en este punto, fue captar las distintas dinámicas organizacionales y desentrañar las diferentes lógicas que orientan las acciones de los individuos. Adicionalmente, trabajamos con fuentes secundarias tales como publicaciones y comunicados de prensa de la organización CTA. A los fines de la conformación del corpus y de su posterior análisis, tuvimos en cuenta la distinción entre “conciencia discursiva” y “conciencia práctica”, de acuerdo a las definiciones de Anthony Giddens. El concepto de “conciencia discursiva” alude a lo que los actores son capaces de decir sobre sus actividades. El de “conciencia práctica” refiere al conocimiento tácito empleado habitualmente en la ejecución de cursos de conducta. Es aquel que el actor no es capaz de formular discursivamente (Giddens, 1982: 4).

Es momento de referirnos brevemente a los lineamientos teóricos y al conjunto de conceptos que nos auxiliaron en la tarea de construcción y abordaje de nuestro objeto. Toda investigación en el campo de las ciencias sociales supone una determinada teoría de la acción social; y en la medida en que nuestro objeto de estudio es un entramado de relaciones sociales, y que el supuesto más general de la investigación refiere a que son las condiciones del tejido social las que dan lugar a intentos de organización política, nuestras líneas teóricas apuntan en esa dirección. Las teorías sociales que nos proveen de herramientas conceptuales útiles para enmarcar nuestro trabajo son, básicamente, las de Anthony Giddens y Pierre Bourdieu. Ambas teorías ocupan un lugar preferencial en nuestra tarea de comprensión y explicación del objeto de investigación. Al mismo tiempo, cabe destacar la centralidad en nuestro análisis del punto de vista relacional, una perspectiva que supone que el mundo social no presenta individuos “desprendidos” por aquí y por allá. Por el contrario, en el mundo social existen *entramados de relaciones sociales* en los que los actores están insertos. Dichos sistemas relacionales son múltiples, y un mismo individuo participa simultáneamente de varios de ellos. Siguiendo al sociólogo e historiador Charles Tilly, el enfoque relacional implica el estudio de los procesos de

7 A pesar de que establecemos una línea de indagación histórica de más largo plazo, el límite temporal de esta investigación está dado por los años 1998 y 2002. La diferenciación entre nuevos y antiguos miembros de la organización se define por la trayectoria al interior de la misma, siendo antiguos los entrevistados afiliados antes del año 2001, y nuevos aquellos cuyo vínculo se funda a partir de ese año.

constitución, desarrollo y cambio de lo social, colocando la mirada en las relaciones sociales: desde las transacciones a nivel de la interacción social, pasando por la constitución de lazos sociales, la concatenación en redes de relaciones, hasta la configuración de organizaciones sociales a nivel macro. En todo ese haz de relaciones sociales se encuentra el proceso dinámico de formación, cambio, desaparición, utilización y efectos de las formas de organización social (Tilly, 2000). Se trata entonces de tener presente, como afirma Alain Touraine, “el principio central del análisis sociológico: *el sentido de las conductas no se ha de explicar por la conciencia del actor o por la situación en que se encuentra, sino por las relaciones sociales en que está implicado*” (1995: 29; énfasis en el original). En este sentido, es de suma importancia tener presente la propuesta de Bourdieu (1991) consistente en dejar de lado tanto el objetivismo que concibe la acción humana como reacción mecánica sin agente, cuanto el subjetivismo que presenta la acción como la obra deliberada de una conciencia “desligada” de cualquier materialidad. Igualmente relevante es la elaboración teórica de Giddens (1998), que explica la conducta humana a partir de la acción y su sentido, al tiempo que da a los conceptos estructurales un lugar en esa explicación.

La categoría de *dualidad de la estructura*, núcleo de la teoría de la estructuración, nos es de gran utilidad. La *dualidad de la estructura* se encuentra implicada en toda reproducción social, y alude al hecho de que las propiedades estructurales de los sistemas sociales son *medios* para las prácticas que constituyen esos sistemas sociales –y como medios, *habilitan* a la acción– al tiempo que son *resultado* de esas mismas prácticas –y, por lo tanto, las *construyen* (Giddens, 1987: 150). La *dualidad de la estructura*, en tanto permite y condiciona la acción, coloca en el centro al concepto de *agencia*, que remite a un actor que produce y reproduce la sociedad. Al hablar de agencia aludimos a un proceso continuo, un *fluir corriente* en el cual el *registro reflexivo* que el actor mantiene es importante para el control del cuerpo, el contexto y la propia acción en la vida cotidiana (Giddens, 1998: 46). Además, reparar en la dualidad de la estructura supone “reconocer que el control reflexivo de la acción utiliza y reconstituye la organización institucional de la sociedad” (Giddens, 1979: 17). Así, entre las categorías fundamentales de la teoría de la estructuración de Giddens, es importante definir el concepto de *reflexividad*.

Es la forma específicamente reflexiva del entendimiento de agentes humanos la que interviene a mayor profundidad en el ordenamiento recursivo de prácticas sociales. Una continuidad de prácticas presupone reflexividad, pero la reflexividad misma sólo es posible en virtud de la continuidad de prácticas, que las

define claramente como “las mismas” por un espacio y un tiempo. “Reflexividad”, entonces, no se debe entender como mera “auto-conciencia” sino como el carácter registrado del fluir corriente de una vida social [...] El registro reflexivo de la actividad es un rasgo permanente de una acción cotidiana, que toma en cuenta la conducta de un individuo, pero también la de otros. Es decir que los actores no sólo registran de continuo el fluir de sus actividades y esperan que otros, por su parte, hagan lo mismo; también registran por rutina aspectos sociales y físicos de los contextos en los que se mueven (Giddens, 1998: 40-41 y 43).

Es relevante tener en cuenta el concepto de *reflexividad* al momento de comprender y explicar la acción social, de modo que nuestra tarea de investigación no se reduzca a la transcripción en forma de memoria de “reflexiones conscientes” de los sujetos, sino que intente una interpretación de los marcos de sentido que los actores construyen, de las prácticas que llevan a cabo en y para ese marco, y del contexto conformado por el conjunto (delimitado) de *condiciones objetivas* de la acción; contexto que si bien el actor no maneja a su antojo, sí es capaz de tener en cuenta al momento de actuar, de llevar a cabo prácticas, de diseñar estrategias. En nuestro problema de investigación, el *registro reflexivo* se identifica como una propiedad de la acción que constituye de manera definitoria las características que hacen a la dinámica del tejido social cuya constitución y reconstitución está en juego. Además, el concepto de *reflexividad* nos es útil para dar cuenta de las características específicas de auto-referencia y autonomía de la *politicidad* de los actores.

Nuestra explicación, entonces, le otorga una centralidad específica al actor capaz y conocedor que produce la sociedad, y tiene en cuenta primordialmente que el mismo agente es producto de esa sociedad; él produce consecuencias que no previó, y las produce en condiciones que no conoce de manera consciente ni en su totalidad. En esta dirección, creemos que, en virtud de conocer los condicionantes objetivos de la acción, es imprescindible contar con información constitutiva del contexto en el cual el actor lleva a cabo sus prácticas. También es necesario, por un lado, desentrañar las estructuras sociales ya incorporadas por los propios actores que dan forma –inevitablemente– a sus prácticas, que las condicionan, las dirigen, las moldean; por otro lado, y simultáneamente, incorporar en nuestro análisis las instituciones sociales, en tanto sedimentación de prácticas, que entran en juego en cada caso de estudio de acción social. Para ambas cuestiones es imprescindible atender a la dimensión histórica de lo empírico: la historia de los actores, como individuos y como colectivo, que es su propia historia y la de sus ámbitos específicos de pertenencia.

Siguiendo esta línea hemos tenido en cuenta la *posición* que el actor ocupa en el espacio social, y la *experiencia* desarrollada a lo largo de su *trayectoria* vital para intentar una comprensión y explicación de la acción social. Es decir, planteamos la explicación de la acción (social) política organizativa atendiendo a la *posición* y la *experiencia* del actor, para lo cual abordamos las prácticas cotidianas e indagamos las *trayectorias* en tanto individuos, pero considerándolos *puntos* dentro de complejos entramados de relaciones sociales; esto es, actores atravesados por los *entramados relacionales* en los que están insertos. Por ello, nuestro planteo analítico supone, por un lado, un plano de *posición* de los actores en el tejido social. Es decir que implica visualizar la inserción concreta presente y/o pasada de los actores en redes sociales: laborales, barriales, político-partidarias y auto-referenciadas. Por otra parte, dicho planteo requiere atender al nivel de la “disposición” de los actores. Con “disposición” nos referimos a la presencia de un sistema de predisposiciones para la acción –y la percepción– que está marcado constitutivamente por las *experiencias* sindical, barrial o territorial, político-partidaria y auto-referenciada. Por eso hablamos de *experiencia social* al tiempo que aludimos a la “posición” de los actores dentro de los diferentes sistemas relacionales. El recurso a las categorías de “posición” y “disposición” remite a la obra de Bourdieu.

En tanto, pensamos en términos de trayectorias de los actores, tradición, prácticas y estrategias, y valoramos la utilidad del concepto de *habitus*, central en la sociología de Bourdieu, porque permite pensar la relación entre *estructura* y *prácticas*. Así, *habitus* se define de la siguiente manera:

Sistemas de *disposiciones* duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente “reguladas” y “regulares” sin ser producto de obediencia a reglas, y, a la vez que todo esto, colectivamente orquestadas sin ser producto de la acción organizadora de un director de orquesta (Bourdieu, 1991: 92).

El concepto de campo también resulta útil para abordar nuestro problema de investigación. Según Bourdieu (2000b: 112-113), un campo es un espacio estructurado de posiciones cuyas propiedades “pueden ser analizadas independientemente de las características de sus ocupantes”, al tiempo que esas características están en parte determinadas por la posición en el campo. Un campo es un sistema de relaciones objetivas

socialmente estructurado dentro del cual los agentes luchan en función de la posición específica que ocupan en ese espacio social. De modo que no es un conjunto de lugares vacíos a ser ocupados, sino que es un espacio de juego y, como tal, existe si existen jugadores interesados, y dotados de un *habitus* para jugar ese juego (Bourdieu, 2000b: 113). Es por ello que *habitus* y *campo* se comprenden sólo en relación uno con el otro. El “campo estructura el *habitus*” al tiempo que “el *habitus* contribuye a constituir el campo como [...] mundo dotado de sentido” (Bourdieu y Wacquant, 1995: 87-88). Entonces, nos es útil la noción de *habitus* en tanto principio generador de prácticas “ajustadas a las estructuras [...] y dotadas de un sentido objetivo [...] trascendente a las intenciones subjetivas y a los proyectos conscientes”, ya sean individuales o colectivos (Bourdieu, 1991: 100). No obstante, al mismo tiempo, de acuerdo a la estructura del campo y a los diferentes estímulos presentes en él, un “mismo *habitus* puede generar prácticas diferentes e incluso opuestas” (Bourdieu y Wacquant, 1995: 92). La categoría de *habitus* da cuenta, precisamente, de la generación creativa de prácticas dentro de los límites dados por la historia del campo en el que el *habitus* genera prácticas. Así, se trata de prácticas “relativamente imprevisibles”, por la imprevisibilidad misma de las diferentes condiciones, y “limitadas en su diversidad” porque son producto de un determinado sistema de disposiciones, a partir del cual la innovación es posible sólo dentro de los límites dados por la experiencia pasada (Bourdieu, 1991: 97). En síntesis, el *habitus* es capacidad generativa y creadora. Hablar de prácticas producidas por un *habitus* es hablar de las prácticas como productos de un sentido práctico, un sentido en virtud del cual los actores actúan competentemente aunque no enuncien explícitamente el modelo lógico que guía sus actividades (Bourdieu y Wacquant, 1995: 83). Por ello, como analistas de lo social, no podemos atenernos sólo a lo discursivo, lo cual es válido especialmente para las prácticas políticas, es decir, las prácticas producidas por un sentido político⁸.

Las categorías de *habitus* y *campo* refieren a nudos de relaciones sociales *históricamente constituidas*. Un *campo* se constituye por un conjunto de relaciones históricas objetivas entre posiciones; por su parte, el *habitus* alude también a un conjunto de relaciones históricas que han sedimentado en los cuerpos individuales en forma de esquemas mentales y corporales de percepción, pensamiento y acción (Bourdieu y Wacquant, 1995: 23). En esta dirección, la *historia* está, entonces, convocada a jugar un rol cardinal en la explicación de las prácticas sociales por cuanto, tal como lo expresa Bourdieu, sólo es posible explicar las prácticas si se po-

⁸ Bourdieu se refiere a este sentido político (2000b: 241).

nen en relación, por medio del trabajo científico, las condiciones sociales en las que se ha constituido el *habitus* que las engendró con las condiciones sociales en las que se manifiestan esas prácticas (1991: 97).

Entonces, el proceso de explicación de nuestro objeto de estudio, como un *entramado de relaciones sociales*, contempló dos niveles de análisis. El *nivel de la interacción social*, o más en general, el de las prácticas; y la *dimensión organizativa*, con lo que nos referimos a un nivel estructural en el que se incluye lo vinculado a la génesis y desarrollo de las estructuras organizacionales; aquí se hace evidente el papel fundamental de la historia en el análisis social. A partir de esta distinción a los fines del análisis, queremos colocar el acento en la importancia de pensar *relacionalmente* a la hora de definir y acercarse al objeto de estudio, por un lado, y a lo primordial que resulta tener presente que las relaciones sociales tienen su espacio y tiempo de producción y reproducción en ambas dimensiones, por el otro.

Con este dimensionamiento analítico pretendemos subrayar que estos dos niveles de análisis son básicos para cualquier intento de explicación de la acción social. En nuestro caso, el interés por las *formas organizativas auto-referenciadas*, los procesos de desarrollo de una *politicidad* a la que dan lugar y los *esfuerzos enmarcadores* (interpretativos) sólo puede ser abarcado contemplando ambas dimensiones, entendiendo lo estructural no como algo fijo (un “dato” dado de una vez y para siempre) sino como, precisamente, la sedimentación de prácticas sociales a través de la historia. Teniendo en cuenta la relación compleja entre estas dos dimensiones es posible atender cómo y por qué se producen y reproducen las *formas de organización política* que nos interesan.

En este artículo nos proponemos mostrar cómo la experiencia de las tomas de tierras en los dos ámbitos en los que centramos nuestra indagación fue uno de los factores más relevantes en el proceso de génesis de la FTV, de modo tal que las tomas de tierras y la conformación de asentamientos⁹ en el conurbano bonaerense se erigieron como factor explicativo de la constitución de la organización. Atenderemos también a la forma en que los vínculos organizacionales y las redes de relaciones que se conformaron a partir de aquellas experiencias confluyeron en el espacio de la CTA, dentro de los límites del cual la FTV tomó cuerpo en términos más formales y desplegó su propio

⁹ Un asentamiento se origina a partir de una ocupación ilegal organizada de tierras públicas o privadas que se constituye como barrio siguiendo la traza urbana. En Buenos Aires, los asentamientos han tenido y tienen lugar en el conurbano. Lo que diferencia principalmente un asentamiento de una villa es su configuración espacial. Para una comparación entre villas, loteo popular y asentamientos, ver Merklen (1997).

proceso de desarrollo. Asimismo, nos referiremos a las dimensiones relacionadas con la *politicidad* de los actores que están en el centro de nuestro objeto de estudio, delineando las características constitutivas de las sensibilidades y actitudes de estos actores hacia la política y el hacer política.

LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA AUTO-REFERENCIADA Y EL PESO DE LA EXPERIENCIA

A comienzos de la década del ochenta, las tomas de tierras dieron origen a los primeros asentamientos en el conurbano bonaerense, y durante la década del noventa perduraron como un importante mecanismo de obtención de terrenos para buena parte de los sectores populares. Estos procesos de constitución de asentamientos han tenido y tienen consecuencias significativas tanto sobre las formas organizacionales como sobre la experiencia colectiva de los actores, cuyo desarrollo influye en el *enmarcamiento* interpretativo de la acción y en la conformación de un tipo específico de *politicidad*.

Las tomas de tierras y la creación de los asentamientos juegan un papel cardinal en tanto experiencia organizativa de los actores, de modo tal que pueden entenderse como condiciones de posibilidad para el posterior desarrollo de organizaciones políticas. En nuestro estudio de caso es fundamental tener en cuenta la dimensión de estructuración territorial de la organización en los dos ámbitos a los cuales nos aproximamos.

En su investigación acerca de los primeros asentamientos en La Matanza, Denis Merklen desarrolló especialmente el tema de la estructura del modelo de organización, y destacó puntualmente el hecho de la transmisión del modelo organizativo de parte de los “tomadores” de San Francisco Solano en el partido bonaerense de Quilmes a los de La Matanza (1991: 91-139). La existencia de vínculos directos de conocimiento y reconocimiento entre los “asentados” de San Francisco Solano y los de La Matanza se remonta a los años ochenta. Luego, en la década del noventa, se desarrollaron los primeros encuentros, que terminarían por formar la FTV en 1998, entre los “tomadores” de Solano que ya habían comenzado a organizar la CTA en la zona y los otros habitantes de los diferentes barrios y asentamientos de La Matanza, quienes en ese momento estaban organizados como Red de Barrios. Al respecto, en un acto de la FTV en San Francisco Solano, el presidente de la organización a nivel nacional, habitante de uno de los asentamientos de La Matanza, se refería en estos términos a ese estrecho vínculo:

Compañeros, compañeras, para mí es un honor estar acá, con tantos luchadores, pero quiero contarles un secreto, es un sentimiento que me aflora cada vez que piso este lugar. Esta es

una tierra heroica la de Solano, porque fue la tierra donde se le hizo uno de los mayores bastiones de resistencia a la dictadura militar, que fueron las enormes tomas de tierra de 1981 y 1982. La Matanza es hija de Solano; llegaban del sur las noticias de que era posible apropiarse de la tierra urbana y repartirla. Ahí conocí a tipos que fueron construyendo con el tiempo unidad, solidaridad y organización. Tipos algunos que ya no están, como el gordo Juan, y otros que siguen teniendo la autoridad moral que les dan más de veinte años de lucha por la tierra, que es mi querido hermano y compañero Juan Carlos Sánchez [...] Si alguna vez en mi corazón comenzó a anidar la posibilidad de hacer un asentamiento fue porque lo aprendí de la boca del negro Juan Carlos (CTA, 2002a).

LA MATANZA

La conformación de los asentamientos que nos interesan del Partido de La Matanza (en el Gran Buenos Aires) fue producto de la ocupación organizada durante el año 1986 de terrenos privados y estatales situados en las localidades de Gregorio de Laferrere, Isidro Casanova y Ciudad Evita. La toma de El Tambo, localizado en Gregorio de Laferrere, tuvo lugar el 6 de enero de 1986; fue el primer asentamiento y es el más pequeño. El asentamiento 22 de enero se encuentra en Ciudad Evita, y la ocupación de las tierras se produjo en la fecha que le dio el nombre. El asentamiento 17 de marzo está en la localidad de Isidro Casanova, y su nombre también evoca la fecha de la toma en el año 1986 (Merklen, 1991: 23)¹⁰. Actualmente, en La Matanza se localizan muchos otros barrios nacidos de tomas de tierras, entre ellos, Costa Esperanza, José Luis Cabezas y Costa Azul.

Las familias de los primeros asentados, como así también de quienes habitan en los “viejos” barrios obreros, se ampliaron debido al casamiento de los hijos y la llegada de los nietos, y con frecuencia estas nuevas familias salen en busca de su propio terreno. Las tomas se han desarrollado de diversas formas, a saber, a partir de la búsqueda individual de terrenos, de la toma de predios deshabitados dentro de los antiguos barrios por parte de pequeños grupos, como producto de la organización de algún *puntero* del Partido Justicialista (PJ), etc. En definitiva, para los sectores populares, la toma de tierras perdura como un mecanismo importante para la obtención de un lugar para vivir.

Especialmente a partir de la experiencia de trabajo de la Cooperativa Unión, Solidaridad y Organización (USO) del asentamiento El Tambo, varios barrios aledaños comenzaron a conformar el grupo que

10 Para un estudio exhaustivo de los asentamientos en La Matanza recomendamos los trabajos de Merklen (1991; 1997).

luego adoptaría el nombre de Red de Barrios¹¹. Según varios testimonios, la Red comenzó agrupando, en 1993, cuatro barrios vecinos a El Tambo; en el año 1995 ya sumaban 23 barrios; en 1996, entre 30 y 35; y a mediados de 2003, aproximadamente 100. Fueron los miembros de esa Red de Barrios quienes se incorporaron a la CTA a través de la afiliación directa, dadas las estrechas relaciones que mantenían con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de La Matanza, y también fueron quienes más tarde, junto con otros actores, conformarían la FTV. De modo que cuando ingresó en la CTA, la Red de Barrios ya era un entramado organizacional complejo con una presencia barrial continuada. La estructura organizativa a nivel territorial era importante, fundamentalmente en el caso de la cooperativa USO del asentamiento El Tambo. Así, dicha cooperativa se constituyó como núcleo organizativo de la Red de Barrios y, a su vez, esta última, posteriormente, de la FTV.

SAN FRANCISCO SOLANO

Con relación a la experiencia de la toma de tierras en el caso de San Francisco Solano, puntualizaremos algunos aspectos con mayor profundidad, debido a que este fue el punto de entrada a nuestro estudio de caso, y a que como experiencia organizativa es temporalmente precedente. Las tomas en Solano forman parte de un proceso de creación de tres asentamientos que ocuparon los predios ubicados entre las avenidas Pasco y San Martín, y formaron un arco que abarca desde San Francisco Solano en el Partido de Quilmes hasta el Monte de los Curas en Rafael Calzada, Partido de Almirante Brown. La primera toma ocurrió entre agosto y septiembre de 1981, cuando vecinos de la zona comenzaron a ocupar terrenos abandonados (Fara, 1985: 125). Frente a los problemas de agua y luz, los ocupantes se acercaron al sacerdote de la Parroquia Itatí, y desde ese espacio comenzó a organizarse lo que luego sería la Comisión Vecinal. Posteriormente, en la misma parroquia se organizó la segunda toma de tierras, que daría forma a los actuales asentamientos La Paz, Santa Lucía, Santa Rosa de Lima y El Tala. El tercero y último de los asentamientos en conformarse fue el San Martín, que en el momento de la toma se desbordó hasta llegar al llamado Monte de los Curas (Fara, 1985: 126)¹².

11 En un primer momento, los diferentes grupos más o menos organizados de los diversos barrios comenzaron a juntarse (sobre todo a partir del conocimiento mutuo producto de la actividad en las Comunidades Eclesiales de Base) movidos por la necesidad de asfalto en la zona, pero las necesidades fueron sumándose y, en consecuencia, comenzaron a coordinarse varias acciones encaminadas a lograr otras mejoras y soluciones a diversos problemas.

12 A los fines de nuestro estudio, interesa tener en cuenta los cinco asentamientos que pertenecen al Partido de Quilmes. Asimismo, en virtud del desarrollo de nuestra investigación, otros barrios de la zona se incluyen en la indagación, dado que hay afiliados a la

Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) jugaron un papel central, tanto en la organización concreta de las tomas, como en la legitimación simbólica del hecho ante los “viejos” vecinos de la zona y entre los propios protagonistas de las mismas. Desde la Parroquia Itatí, dependiente del Obispado de Quilmes, se proporcionaron recursos humanos y organizacionales para las tomas en 1981. Los integrantes de las CEB, en su mayoría jóvenes, fueron los encargados de medir los lotes de tierra, ubicar en los terrenos a quienes llegaban a asentarse, coordinar luego la organización de las manzanas y comprometer a los vecinos de los barrios “viejos” a prestar ayuda a “los hermanos” que la necesitaban. Como nos decía uno de nuestros informantes: “fueron los que más orientaban a organizarnos”. El mismo entrevistado nos narra la toma de El Tala y nos cuenta lo que para él significó “asentarse” en su terreno:

El cura estaba organizando sí, sí. Así que vinimos... pero, cientos de personas, muchísimas creo que estaban ¿no? anotadas y que a la madrugada estuvimos para hacer la toma, así que para mí fue algo totalmente nuevo, una cosa, una experiencia tan tan buena que hoy uno la valora porque digo: de ahí comenzó el tema de la militancia tanto en el campo sindical como en lo social (hombre, 43 años, dirigente, antiguo).

El caso de este entrevistado resulta paradigmático en nuestro planteo, dado que es a partir de las prácticas en el ámbito barrial y luego en las CEB que comienza su participación gremial en la fábrica en que trabajaba. Así, en su caso, la experiencia en el medio barrial es cardinal, y acarrea consecuencias sobre otras esferas de prácticas.

Actualmente, la mayoría de quienes participan activamente en la FTV-CTA de San Francisco Solano se han conocido a través de alguna de las CEB de la Parroquia Itatí. Es significativa la cantidad de personas que ha coincidido en algún momento en las Comunidades como medio relacional específico, y de hecho las señalan explícitamente como un ámbito de formación política.

En La Matanza, las CEB también ocupan un lugar privilegiado en cuanto a su inserción en el medio barrial y como punto de referencia para los que hoy forman parte de la FTV. Muchos de los miembros de la FTV, afiliados, referentes, militantes y dirigentes, provienen de las CEB, ámbito en el cual desarrollaron una trayectoria de actividad política significativa en el medio territorial. No obstante, de acuerdo con el citado trabajo de Merklen, las CEB no tuvieron la misma relevancia que

organización que son vecinos de los mismos. Nos referimos a La Paz barrio viejo, Dreymer, Santa Teresa, San Pablo, La Gloria (Partido de Almirante Brown) y al asentamiento La Matera, que se formó a partir de una toma el 31 de marzo de 2001.

adquirieron en Solano en el inicio mismo de las tomas y en su posterior desarrollo. Más aún, según uno de los principales dirigentes, fue ante la indiferencia de la iglesia que en aquel momento ellos se “apartaron” y se “animaron” a las tomas (Merklen, 1991: 108).

La experiencia de la toma de tierras en el caso de San Francisco Solano resulta relevante en el marco de las prácticas organizativas actuales y en los discursos de sus protagonistas. A partir de la ocupación de las tierras tuvo lugar un proceso de aprendizaje para quienes realizaron las tomas en lo que refiere al desarrollo de *estructuras organizativas*, como así también en lo relativo a las diferentes formas de percibir la propia acción política, y la influencia de la misma en el ámbito residencial.

La estructura organizacional que se conformaba a partir de la toma consistía en un delegado y un subdelegado por cada manzana, de modo tal que la manzana constituía la unidad organizativa; luego, asambleas de manzaneros funcionaban como comisión interna de cada barrio y elegían a los representantes del asentamiento; finalmente, se reunía una comisión coordinadora de los cinco barrios conformada por esos representantes de cada asentamiento que habían sido elegidos por cada comisión interna.

Así es que una de las primeras tareas para los asentados era elegir a su delegado, el “manzanero”, y al subdelegado. El manzanero “tenía la responsabilidad de su manzana, de estar bien medidos los terrenos, de que por cada terreno haya una sola casa, que no haya problemas en la manzana” (hombre, 60 años, referente, antiguo). Luego, la comisión interna se encargaba de los problemas más generales del barrio, y depositaba en la comisión coordinadora las cuestiones que, por ser más complejas, no podían ser resueltas en el ámbito del barrio –es decir, cuestiones de injerencia en espacios de decisión públicos. Así, la comisión interna operaba como nexo entre las inquietudes de la manzana en la voz de los delegados y la comisión coordinadora. Esta última constituía el ámbito desde el cual se establecían relaciones con la esfera pública; si se quiere, consistía en un plano de acción política más general. Como nos contaba un antiguo referente barrial:

[Los integrantes de la comisión coordinadora] eran los que hacían toda la tarea exterior del barrio, o sea, ir a la municipalidad, ir a la gobernación, ir adonde sea [...] todos los trámites que se hacían en aquel momento íbamos los representantes de cada barrio a hacer la gestión, nosotros todas las gestiones que hacíamos al exterior [del barrio]: gobernación, donde sea, hacíamos los trámites y veníamos, hacíamos reunión con las comisiones internas cada uno en su barrio, se lo trasmitíamos los pasos que habíamos hecho, traíamos los papeles, lo que habíamos gestionado, pedido, y le bajábamos a la comisión, a

su vez la comisión interna le transmitía al cuerpo de delegados, así se manejaba (hombre, 60 años).

La descripción de las divisiones y recomposiciones de las diferentes comisiones barriales y de la comisión coordinadora de los cinco asentamientos es bastante extensa, pero dentro de los límites de este artículo nos interesa señalar algunos puntos de la trayectoria organizativa en Solano, teniendo en cuenta, al recorrer la historia, los diferentes contextos políticos en los que se conformaron y se desarrollaron las organizaciones.

EL QUIEBRE DEMOCRÁTICO

La coordinadora de los cinco asentamientos de Solano funcionó de manera continuada hasta el año 1984¹³. Cuando, hacia fines del año 1982, comenzó la apertura democrática, diversos conflictos afloraron en el ámbito barrial, marcados por el ritmo de la competencia inter e intrapartidaria. Así, la que era una organización más o menos compacta comenzó a resquebrajarse de acuerdo con diversas opciones político-partidarias. Dentro de la comisión coordinadora, las posturas iban desde quienes bregaban por que la comisión en su conjunto adoptara una misma línea partidaria hasta quienes pretendían mantener la autonomía respecto de los posicionamientos electorales, pasando por aquellos que simplemente esperaban tener suficiente espacio de movimiento para tomar individualmente algún camino en carreras partidarias.

Para las primeras elecciones en el país luego de la dictadura militar, la comisión coordinadora de los cinco barrios decidió intentar que un representante propio accediera al Concejo Deliberante, tras evaluar que no se debía desaprovechar el nuevo espacio político. Para eso crearon la agrupación Justicia Social, organizativamente independiente de la comisión coordinadora, pero en la que participaban de forma activa todos los delegados de manzana. Luego, la agrupación se incorporaría en algún partido ya existente que asegurara el triunfo, para lo cual los vecinos tenían que decidir cuál, y afiliarse. El partido elegido resultó ser el PJ. Finalmente, el objetivo de tener un concejal no se concretó y la relación con el PJ fue deteriorándose porque, entre otras cosas, fue el único partido cuyos candidatos no se comprometieron con el anteproyecto de Ley de Expropiación que la comisión estaba diseñando¹⁴. A

13 Recordamos que, organizativamente, la comisión coordinadora de los cinco barrios es diferente a cada una de las comisiones barriales o comisiones internas de cada uno de los asentamientos.

14 Finalmente, la Legislatura bonaerense aprueba el proyecto de Ley de Expropiación de los terrenos de San Francisco Solano. La Ley provincial 10239 se promulgó en 1984 (Fara, 1985: 137).

partir de ello, la comisión coordinadora decidió mantener su autonomía respecto de los partidos políticos (Fara, 1985: 135). No obstante, varios testimonios señalan el fin de la comisión coordinadora en ese momento, cuando la comisión se dividió de acuerdo con su participación en el PJ y en la Unión Cívica Radical (UCR). En este punto, importa señalar que es generalizada la percepción de la entrada en escena de los partidos políticos en el medio barrial con la vuelta de la democracia como una situación de caos, desorganización y desunión.

El caso del asentamiento El Tala es el que más nos interesa para observar lo que sucedió con las comisiones dentro de cada uno de los cinco barrios de la zona, porque es el embrión organizativo de la FTV-CTA de San Francisco Solano, y porque, de los cinco asentamientos que se constituyeron en 1981, es el único que mantuvo su comisión barrial como organización más o menos regular (con altibajos en la participación de los vecinos), hasta que, luego de algunas recomposiciones, finalmente se incorpora a la CTA¹⁵. Además, con el tiempo, la tarea de coordinación de los asentamientos de Solano terminó en manos de la comisión del barrio El Tala, dado que las comisiones de los demás barrios adquirieron un perfil más bajo en la relación con los diferentes ámbitos de gobierno. Realizando una comparación entre la coordinadora y la comisión barrial de El Tala, uno de nuestros informantes decía:

Se rompió la comisión coordinadora, cuando comienza la apertura política, se abre la democracia, ya cada uno comienza a jugar a su color político, y eso fue lo que a nosotros nos destruyó la comisión [coordinadora]. La única comisión que sigue perteneciendo o que sigue funcionando, la única que quedó en pie vamos a decir es la nuestra [la de El Tala]. Con un montón de diferencias en algún tiempo ¿vio? Porque también cada uno tenía su color político y bueno, respondía a su puntero político (hombre, 60 años, referente, antiguo).

En las primeras elecciones para la conducción de la comisión de El Tala, luego de la apertura democrática, gana un grupo vinculado al PJ. Y aunque hubo varias comisiones barriales actuando al mismo tiempo, a mediados de los años ochenta el predominio continuaba siendo de los militantes de este partido.

15 Aún hoy, el "Asentamiento El Tala, Solano-Quilmes" y la "Cooperativa USO, La Matanza" figuran entre las "más de 240 organizaciones" adheridas a la CTA (extraído de ficha de afiliación directa a la CTA).

LA HISTORIA MÁS RECIENTE

A fines de la década del ochenta funcionaba en El Tala una Comisión de Madres que se había formado con los vecinos que participaban en la comisión barrial. Luego, por requerimientos de la municipalidad para el otorgamiento de recursos, pasó a llamarse Club de Madres y estuvo integrada exclusivamente por mujeres. Más tarde, frente a la injerencia del municipio y de los referentes del PJ en el barrio, el grupo de mujeres decidió incorporarse a la iglesia y conformó una CEB: la Comunidad María de Nazaret. En el año 1996, el mismo grupo que participaba en la Comunidad (que por su parte continuaría existiendo) pasó a denominarse Centro Comunitario María de Nazaret, nuevamente a los fines de ingresar en un programa social de la gobernación de la provincia de Buenos Aires¹⁶.

Así, entrada la década del noventa el Centro Comunitario María de Nazaret era el que albergaba la actividad barrial de tipo social en El Tala. Allí funcionaban, por ejemplo, un “área de tierra” dentro de la que se trataban, entre otras cuestiones, los problemas relacionados con los trámites por los títulos de propiedad; un “área de la comunidad”; talleres de capacitación organizados frente a la creciente desocupación; y un área que se encargaba de la contención de chicos de dos a cinco años, ofreciéndoles el desayuno, el almuerzo, y realizando con ellos actividades recreativas. De esta forma, el Centro Comunitario fue la sede del trabajo territorial. Algunos vecinos que participaban en este Centro Comunitario ya estaban integrados como afiliados directos en la CTA y, en gran medida por ello, desde este Centro empezó a conformarse lo que luego sería la CTA Solano y, más tarde, la FTV¹⁷. Finalmente, mientras la comisión barrial se reorganizaba en medio de la actividad del Centro Comunitario y de las discusiones de las propuestas de la CTA, el

16 El testimonio de una de las fundadoras de la CTA Solano expresa en parte la cuestión: “Nosotros nos codeábamos con todos los políticos y a todos los sacábamos algo. En ese momento, nos dicen desde Caritas: ‘¿Por qué ustedes no le cambian el nombre al Centro, en vez de ser Club de Madres, pónganle: Centro Comunitario María de Nazaret, y más abajo, Jorge Novak, porque nuestro Obispo se llama Jorge Novak’. Entonces desde 1996 ya estamos con ese nombre. Pero el trabajo en sí, es el mismo con que nos iniciamos allá por el ‘87” (testimonio extraído de Rauber, 2000: 105).

17 Tuvo lugar un proceso de discusión en torno a la necesidad de superar la tarea de “contención” que se desarrollaba en el comedor del Centro Comunitario y de discutir los problemas de fondo que afectaban a la comunidad, como la desocupación que obviamente era lo que desbordaba la capacidad del comedor. Uno de los vecinos que comenzó con la tarea de conformación de la CTA Solano lo expresa así: “La gente del comedor veía que efectivamente ellos podían asistir a las familias de los trabajadores sin tener una iniciación dentro de lo que es la clase trabajadora como identidad; faltaba esa etapa de crecimiento. También había cosas que nos unían porque veníamos de la Comunidad Eclesial de Base [...] Había cosas que nos unían pero todavía en ese momento, no veíamos juntos lo que era la identidad de los trabajadores con los problemas de nuestro barrio. Así comenzamos a trabajar juntos” (testimonio extraído de Rauber, 2000: 107). Es interesante que muchos de los niños que estaban insertos en aquellos programas de “contención” y alimentarios, actualmente, participan en la FTV-CTA Solano.

resto de los integrantes de la comisión se afilió a la Central. Es importante señalar que en la actual comisión barrial de El Tala, que está integrada a la CTA, conviven vecinos con diferentes trayectorias respecto de las posiciones de las varias comisiones que hubo en el barrio, como así también con diferentes posturas político-partidarias. Hoy todos los miembros de la comisión de El Tala participan en la FTV y en la CTA. Al respecto, nos contaba un antiguo referente barrial:

Todas las gestiones que hacemos, algunas gestiones las hacemos en nombre de la comisión barrial y otras, o la gran mayoría, a través de la CTA, que es el respaldo que se tiene, que por eso se consiguen muchas veces cosas [...] Nosotros nos integramos más porque somos del barrio y los compañeros que manejan, que dirigen los destinos de esta Central son todos del barrio, entonces la gran amistad que tenemos, y porque todos estamos apuntando al mismo objetivo: las tierras, todo eso, la vivienda, la salud, la educación, todo eso, siempre estuvimos peleando por lo mismo, bueno, no vamos a estar peleando... trabajando uno por un lado por lo mismo y el otro por el otro, vamos a nuclearlo todo, como los pensamientos son los mismos, o las inquietudes mejor dicho son las mismas... (hombre, 60 años).

De esta manera, con diferencias en cuanto a la continuidad o no de la permanencia de muchas de las organizaciones barriales anteriores, lo que ha tenido lugar a partir del proceso de toma de tierras es un *aprendizaje* por medio del desarrollo de prácticas en comisiones barriales, centros comunitarios, cooperativas, juntas vecinales, etc. En este sentido, las consecuencias son similares en el caso de La Matanza, especialmente en lo que hace al trabajo cooperativo en el ámbito territorial. Tal el caso de la cooperativa USO del asentamiento El Tambo que, entre otras cosas, regularizó la situación dominial de los asentados, abrió una sala sanitaria, y lleva a cabo proyectos de desarrollo de barrios en la zona.

Un antiguo referente barrial de El Tala nos dice mucho acerca de la *experiencia territorial* que se conformó a partir de la toma de tierras, y continuó en desarrollo como parte de un proceso relacional de construcción de organización e identidad colectivas:

Yo vine a aprender lo que es organización, ser delegado, para qué ser delegado, para qué estar integrando una comisión, cuál es el significativo, el significado mejor dicho, acá, yo me hice a los golpes acá, como yo como otros compañeros [...] Yo lo aprendí acá. Claro. Cuando a mí me eligen como delegado de mi manzana, digo ¿qué es delegado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? (hombre, 60 años).

Al atender a la experiencia social de los actores que están en el centro de nuestro objeto de estudio, y al observar las prácticas políticas que han desarrollado a lo largo de más de veinte años, cobra sentido la existencia, verificable en los discursos y las prácticas actuales, de sentidos de pertenencia política que enmarcan la participación y el compromiso en las formas organizacionales desarrolladas.

Así, nuestra hipótesis es que la preexistencia de redes asociativas, conformadas en nuestro caso a partir de las tomas de tierras, fue una de las condiciones de posibilidad de los intentos de organización por parte de estos actores pertenecientes a los sectores populares. Allí donde más densas eran esas redes¹⁸, fue donde más éxito encontraron los *intentos de organización* y los esfuerzos estratégicos de creación de *marcos interpretativos*.

ENTRADA EN ESCENA DE LA CTA

La Central de los Trabajadores Argentinos se constituyó como Congreso de Trabajadores Argentinos el 23 de diciembre de 1991, y recién adoptó su nombre definitivo en el Congreso Nacional de Delegados que se desarrolló en el estadio Luna Park, de la ciudad de Buenos Aires, el 5 de noviembre de 1996. Luego, en el año 1997, obtuvo la representación gremial por parte del gobierno nacional¹⁹.

A partir de una rápida mirada sobre el proceso de génesis y desarrollo de la CTA recordamos que el 17 de diciembre de 1991 se firmó la Declaración de Burzaco. Dicha declaración contiene un apartado –“Por un nuevo modelo sindical”– en el que se detallan cuatro puntos que consideramos relevantes en función de nuestro estudio:

Este encuentro de organizaciones sindicales se propone realizar un plan de trabajo que amplíe el debate y las propuestas desde una corriente sindical y hacia un movimiento político-social que surja de una práctica que contemple: 1-Autonomía sindical con respecto al Estado, los patrones y los partidos políticos. 2-Democracia sindical, rechazando las estériles divisiones y el sectarismo. 3-Apertura a otras organizaciones sociales que expresan las múltiples demandas de los sectores

18 Al decir redes sociales más o menos densas nos referimos al mayor o menor flujo de relaciones sociales dentro de los márgenes de determinado ámbito relacional; para nuestro caso, nos interesan las relaciones sociales que influyen sobre desarrollos de organización política auto-referenciada.

19 Para unificar la redacción, nos referimos a “la CTA” independientemente de que hasta el 5 de noviembre de 1996 su denominación fuera Congreso de Trabajadores Argentinos. En el año 2003 la CTA contaba con un padrón de 867.353 afiliados. Para un interesante análisis acerca de la historia de la organización en relación tanto con las transformaciones identitarias del actor sindical como con los cambios en las formas de protesta, ver Armelino (2005).

populares y que reflejan la realidad de los cinco millones de argentinos con problemas de empleo. 4-Revalorización de la ética gremial atacando la corrupción y el pseudo-pragmatismo con el que dirigencias caducas terminan legitimando el ajuste (Rauber, 1998: 322).

En el Congreso fundacional de 1992 en Parque Sarmiento se votó y aprobó el estatuto que, entre otras cosas, estipuló la afiliación individual y directa, y el voto directo²⁰. Básicamente, las innovaciones que la CTA reconoció como propias son: afiliación directa, apertura a otras organizaciones sociales, democracia sindical y autonomía sindical. Luego vendrían otras como la organización por región, organización por sector de actividad y por grupo empresario.

En términos generales, podemos identificar una estrategia que se caracterizó por valorar la *organización* de los trabajadores como colectivo, dar relevancia a la definición de *poder*, asignarle un rol preponderante al *conocimiento* como “herramienta de lucha”, y hacer hincapié en la importancia de la *articulación con otros sectores sociales*. Esta estrategia se instrumentó a partir de determinados recursos innovadores dentro del campo sindical como son la afiliación directa, el voto directo y el desarrollo de nuevas formas organizativas.

Nos interesa subrayar la afiliación individual y directa como uno de los principales quiebres en lo organizativo, ya que da cuenta de una lógica organizativa dirigida a posibilitar la incorporación de vastos sectores actualmente desindicalizados²¹. Ahora bien, junto con el mecanismo de afiliación directa e individual, encontramos otra innovación de la Central relevante para nuestro estudio: la “apertura a otras organizaciones sociales” o la “articulación con otros sectores sociales”. Esta propuesta se ha traducido en el intento de generar “nuevas formas de organización” por parte de la CTA, formas organizacionales que fueran capaces de incorporar las problemáticas tanto del ámbito laboral como territorial. Articular con otros sectores sociales implicaba, por un lado, conformar organizaciones en el ámbito territorial que dieran cuenta de

20 El voto directo está contemplado en el artículo 25 del estatuto de la CTA (1996: 20). El voto es individual, directo y secreto en todo el territorio de la República Argentina. Las primeras elecciones por voto directo en la CTA fueron el 6 de junio de 1995.

21 Vale la pena recordar el artículo 2 del Estatuto de la Central donde se detalla que, “en principio podrán afiliarse: los trabajadores activos; los trabajadores sin trabajo; los trabajadores beneficiarios de alguna de las prestaciones del régimen previsional público o privado, nacional, provincial o municipal; y los trabajadores autónomos y cuentapropistas en tanto no tengan trabajadores bajo su dependencia” (CTA, 1996: 5). Y se especifica que “la afiliación se efectivizará a través del sindicato, unión, asociación o federación de cualquier tipo, afiliada a la CTA, a la que pertenezca el trabajador; y/o en su defecto, en forma individual a través de la organización local, provincial o regional de la CTA” (CTA, 1996: 7).

las problemáticas de los sectores populares en forma más integrada y, por otro lado, desarrollar en el medio laboral organizaciones por grupo empresario, teniendo en cuenta las profundas y diversas transformaciones operadas sobre el capital económico.

De este modo, en el segundo Congreso Nacional de Delegados de Mar del Plata, que se realizó en 1999, se formalizó el “modelo organizativo de las Federaciones”. Dentro de la Central se han conformado la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines, la Federación Nacional de Salud y Seguridad Social, y la Federación de Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat. El recurso de desarrollar estas “nuevas formas organizativas” se presentó como estrategia fundamental de parte de los actores, dado que los mecanismos de voto y afiliación directa no resolvieron los aspectos de organización y de intervención cotidiana frente a los conflictos específicos en ámbitos distintos del gremial.

La definición de “nuevas formas organizativas” refería a tres ámbitos de conflicto diferentes: el grupo de actividad social o económica, el ámbito laboral y el territorio. La CTA se propuso desarrollar organizaciones en estos tres ámbitos; así, las federaciones serían formas organizativas susceptibles de ser desarrolladas en cualquiera de los tres ámbitos de conflicto. Las federaciones fueron definidas como “nuevas identidades [que] están convocadas a convertirse, de hecho, en las nuevas estructuras organizativas de la clase trabajadora que, sin desconocer las identidades preexistentes, permitan transitar un proceso de nuevas identificaciones sostenidas desde las luchas cotidianas” (CTA, 1999: 42). Dentro de nuestra delimitación temática nos interesa centrarnos en lo relativo al ámbito territorial.

La CTA comenzó a impulsar el desarrollo de estructuras territoriales expresando que “la presencia en el territorio permite afrontar conflictos promoviendo un amplio accionar comunitario y conjugando el esfuerzo con otras organizaciones sociales y políticas que actúan en ese nivel” (CTA, 1999: 33). Hay aquí un reconocimiento explícito de que el territorio es, en muchos casos, el lugar donde lo que se denomina “actividad social” toma cuerpo. Así, el barrio es definido como “la nueva fábrica [...] Un lugar donde se puede reconstruir lo colectivo no ya desde la producción sino desde las demandas cotidianas” (CTA, 1999: 42).

De las Federaciones que se conformaron en el seno de la CTA la que llama nuestra atención es la FTV. En ella, lo que ha sucedido concretamente en el ámbito territorial fue que organizaciones preexistentes pasaron a formar parte de la CTA y luego se constituyeron como Federación. En este sentido, es importante aludir al hecho de que recién en el último Congreso Nacional de Delegados de la CTA, que se llevó a cabo

en diciembre de 2002, la FTV terminó de unificar la representación de todas las organizaciones territoriales adheridas a la CTA²².

Más aún, si ponemos en relación las condiciones de “afiliación individual y directa” y “la apertura a otras organizaciones sociales”, la afiliación individual a la CTA a través de la FTV, como espacio de inserción inmediato, se presentó como el medio de vinculación cuando las formas más tradicionales de lazo, como el sindicato o el partido político, no tuvieron una presencia fuerte en los ámbitos territoriales de inserción de dichos sectores.

LA CONSTITUCIÓN DE LA FTV EN EL MARCO DE LA CTA

El primer Encuentro Nacional de Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat se desarrolló en La Matanza el 6 de septiembre de 1997. El 18 de julio de 1998 tuvo lugar en la Capital Federal el primer Congreso de la FTV, con la asistencia de 1.615 delegados en representación de 17 provincias. Luego, también en ese año, la FTV se conformó dentro de la CTA (CTA, 1999: 48). La Federación, como organización, agrupó un conjunto de redes e individuos en torno a problemáticas relacionadas con el tema territorial, de vivienda y de hábitat. De modo que dentro de la FTV se nuclearon varios tipos de organizaciones y grupos, conformados a partir de realidades tales como asentamientos, villas, barrios carenciados, edificios ocupados, pueblos originarios, etcétera²³. En los siguientes términos lo define su actual presidente:

Nuestra lucha se materializa en la radicación definitiva para los villeros, la reforma agraria para los campesinos, la ciudad democrática para los ocupantes de las grandes urbes, la posesión de la tierra para los pueblos originarios, la regularización dominial de los asentamientos de la periferia en las grandes ciudades, la propiedad social para los beneficiarios del BHN [Banco Hipotecario Nacional] burlados por la privatización; sosteniendo toda forma de descentralización y autogestión que fortalezca a todas las organizaciones territoriales, a lo largo y ancho del país (CTA, 2002b).

22 Fue precisamente a partir de esa resolución que el Movimiento Territorial de Liberación (MTL), que pertenece al Partido Comunista (PC), abandonó la FTV y la Central.

23 Nuestra aproximación específica a la FTV se centra, como ya dijimos, en dos ámbitos: los partidos de Quilmes y La Matanza, en los que las redes territoriales se constituyen con eje en asentamientos y barrios carenciados. Pero también hemos explorado el caso de los “edificios ocupados” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el año 1998 en San Francisco Solano la conformación de la CTA era una realidad²⁴. La CTA Solano eligió su conducción por primera vez en 1997, pero ya en 1991 quien desde entonces es su secretario general había comenzado a participar en todo el proceso de génesis de la Central. Y a partir de ello, tal como lo explicáramos anteriormente, desarrollaba acciones dirigidas a constituir la regional Solano de la CTA junto con otros vecinos.

La CTA Solano tiene la particularidad de ser una regional que carece de sindicatos adheridos²⁵, de modo que está principalmente compuesta por personas sin empleo. Esto implica, sin duda, un esfuerzo organizativo comparativamente mayor respecto de otras regionales, y conlleva, al mismo tiempo, tanto una dependencia financiera de los afiliados directos como una autonomía simbólica respecto de los principales sindicatos de la Central. En este sentido, es importante señalar que la regional Solano posee un alto reconocimiento dentro de la CTA, debido precisamente a esta singularidad de no estar apoyada en sindicatos, es decir, de haber sido constituida a partir de la actividad en el territorio, y no de la inserción gremial. Esta particularidad es definitoria de los *enmarcamientos* de la acción que se construyen. Se pueden observar elementos de este *enmarcamiento* en este fragmento de un diálogo con una de las antiguas militantes de la CTA Solano:

Sabés que es gratificante estar dentro de la CTA de Solano porque nosotros... yo he ido a Congresos que se hicieron [...] y la CTA de Solano tiene muy buena referencia porque nosotros no estamos integrados por sindicatos sino que somos todos desocupados ¿viste?, y aparte nosotros tenemos un trabajo de base con la gente. ¿Sabés qué?, el otro día me acordaba cuando fui a una capacitación que se hizo allá en la CTA, estaba en un grupo y me tocó estar con uno que está en Aerolíneas²⁶ [...] estábamos contando nuestra experiencia con la gente ¿viste? y sabés que, después cuando hicimos un recreo viene y se me acerca y me dice que él [el dirigente sindical] no entendía qué era el trabajo con la gente porque él está acostumbrado a

24 En el año 1997, entre 100 y 150 vecinos votaron en las primeras elecciones para elegir la conducción de la CTA Solano. Hacia 1999, ya constituida la FTV, los afiliados llegaban a 600. A mediados del año 2001 había casi 1.000 afiliados, y los beneficiarios de planes sociales de trabajo sumaban 30. Hacia fines de 2002, la FTV-CTA Solano contaba con aproximadamente 1.200 afiliados, de los cuales 575 eran beneficiarios de dichos planes. A mediados de 2003, y a escala nacional, el padrón de la FTV sumaba 90 mil afiliados (extraído de entrevista con dirigente antiguo, hombre, 43 años).

25 En la CTA de Quilmes están nucleados los sindicatos del Partido de Quilmes adheridos a la Central.

26 Se refiere a un dirigente sindical que pertenece a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), entidad gremial que a su vez está adherida a la CTA.

trabajar a nivel gremial y decía “pero ¿cómo es ese trabajo?”, ¿viste? no, no entendía [...] entonces nos preguntaba [...] y todos, incluso el otro día viene un economista [...] y él dijo de que, que el pueblo iba a salir cuando realmente se organice ¿no? y que decía que la CTA de Solano es uno de los ejemplos, porque es la que más organizados estamos a nivel, así, pueblo ¿no? desde el barrio” (mujer, 40 años).

En La Matanza, para ser más exactos, en algunos de los barrios que están en las localidades de Isidro Casanova, Gregorio de Laferrere, Virrey del Pino y Rafael Castillo, las relaciones entre la Red de Barrios y ATE eran fluidas. De acuerdo con lo que nos contaba uno de los dirigentes de la FTV de La Matanza, el secretario general de la CTA había mostrado en varias oportunidades especial interés por “la experiencia de trabajo que teníamos [en] los barrios”, y a partir de una acción contenciosa –la toma de la Iglesia del Sagrado Corazón en San Justo en 1996– varios dirigentes de la Central habían comenzado a visitar y conocer los barrios que junto con El Tambo conformaban la Red de Barrios. En ese momento quienes formaban parte de la Red decidieron incorporarse a la CTA. Más tarde, desde ese lugar, darían forma a lo que hoy es la FTV. Un dirigente antiguo de La Matanza nos contaba acerca de la decisión de incorporarse.

Al principio, como todo, lo charlamos mucho con... inclusive te voy a decir dónde tuvimos la primer charla, con los curas, en el Patronato, acá en el barrio de... ¿qué barrio es? Barrio Cone, un barrio de acá, periférico, una iglesia que es la iglesia madre de todas las Comunidades de Base, nos juntamos los referentes de los distintos barrios, ahí en una mateada, discutimos la propuesta de la CTA de incorporarnos, junto con los tres curas y, bueno lo veíamos con buenos ojos, entendíamos que era la oportunidad como para pegar un salto cualitativo de lo que hace a lo organizativo, salíamos de lo barrial ya, entrábamos en un marco mucho más grande, un marco mucho más amplio que era una Central de Trabajadores. Bueno, aceptamos (hombre, 37 años).

Así, identificamos como los dos ejes de conformación de la FTV (consistentes en vínculos tanto personales como organizacionales), por un lado, a la experiencia de los asentamientos de 1981 en San Francisco Solano y a las tomas de tierras en el partido de La Matanza; ambos episodios se constituyen como experiencia social sedimentada en forma de organizaciones políticas estructuradas territorialmente que dieron lugar a la génesis de la FTV. Por otro lado, al proceso de constitución de la CTA en Solano a partir del trabajo de militancia territorial (principalmente en el asentamiento El Tala, aunque también en otros barrios

aledaños) y a las relaciones entre la Red de Barrios y los sindicatos de La Matanza adheridos a la CTA (especialmente ATE, pero también el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, SUTEBA); esos vínculos organizacionales, que se desarrollan tanto en Solano como en La Matanza, suponen un desarrollo organizativo previo, y experiencia de los actores que producen esa organización. Una y otra línea de experiencia se constituyeron como una *red de relaciones que permitió la conformación de una organización política*.

De modo que, si bien es claro que el núcleo organizativo de la FTV se ubicaba en La Matanza, fundamentalmente a partir de la experiencia de la cooperativa USO del asentamiento El Tambo, es importante subrayar que, tanto la *experiencia de las tomas de tierras* en la década del ochenta, como la *entrada en escena de la CTA* en los años noventa, fueron factores fundamentales que hicieron a la convergencia de vínculos de reconocimiento y relaciones entre diferentes organizaciones barriales y sindicales para dar lugar a la constitución de la FTV.

Llegados a este punto y para continuar nuestra argumentación, enunciamos como hipótesis que la experiencia previa de dirigentes, referentes, militantes y afiliados periféricos, junto con diversas formas de capital social²⁷ disponible, hicieron posible la organización. A su vez, los diferentes grados de *reflexividad* en la orientación de las acciones incidieron sobre los procesos de construcción organizativa e interpretativa. Junto con estos factores, intervino la capitalización de diversos recursos por parte de estos actores –tal el caso de los planes sociales provenientes del Estado, que funcionan como *recursos organizativos*, por cuanto juegan un rol central en el proceso de constitución de lazo social, al retroalimentar el flujo relacional dentro de los ámbitos en que esos recursos circulan (Calvo, 2002), y al ser capitalizados organizacional y simbólicamente, dado que su obtención es visualizada como “resultado de la lucha”. De este modo, lograron implementarse respuestas políticas más o menos estables en el tiempo.

27 Seguimos la definición de *capital social* de Pierre Bourdieu como aquel “constituido por la totalidad de los recursos potenciales o actuales asociados a la posesión de una red duradera de *relaciones* más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos. Expresado de otra forma, se trata aquí de la totalidad de recursos basados en la *pertenencia a un grupo*” (2000c: 148). Es importante puntualizar que utilizamos el concepto de *capital social* para referir a su dinámica de transformación respecto de los capitales económico y cultural, en virtud de lo que esta dinámica implica para la posición de los actores en un determinado lugar del espacio social, y de ningún modo pensamos el *capital social* como una propiedad de las redes sociales en las que indagamos. Para un interesante tratamiento del concepto ver Portes (1999).

REFLEXIVIDAD, *POLITICIDAD* Y PROCESOS DE (RE) CONSTITUCIÓN DEL LAZO SOCIAL

En este apartado nos aproximaremos a un registro de análisis referido al universo de las sensibilidades y las creencias de los actores. Así, haremos referencia a los significados que adquieren la política y el hacer política para estas personas.

Las transformaciones en el tejido social que han tenido lugar en nuestro país en las últimas tres décadas del siglo XX han acarreado un proceso de desestructuración de organizaciones y de identidades y representaciones previas, al tiempo que han dado lugar al hecho de que los individuos se hallen más *desligados* de sus anteriores tradiciones políticas y, en ese sentido, se han tornado sin lugar a dudas más *reflexivos* respecto de su relación con la política en general –una mayor *reflexividad* que, obviamente, invade otras esferas de prácticas, fenómeno que, huelga aclarar, no es privativo de nuestro país. En este sentido, podemos comprender que las organizaciones políticas “novedosas” se caractericen por ser más flexibles si se las compara con las más tradicionales, como las de los partidos políticos o las sindicales, tipos de organizaciones que expresaban un *cuerpo social* que hoy ya no existe o, al menos, ha sufrido una profunda metamorfosis.

En el caso de nuestro objeto de estudio nos interesa hacer hincapié en las *capacidades reflexivas* de los actores por cuanto se orientan hacia *esfuerzos organizativos auto-referenciados*. Al aproximarnos a nuestro objeto tuvimos presente que la regularidad de las prácticas de los actores da cuenta de ese proceso continuo de generación organizativa en el que están implicados. Como ya señalamos, el *monitoreo reflexivo* constituye una propiedad de la acción de estos actores que define las características que hacen a la dinámica del tejido social cuya (re)constitución está en juego. Decimos, entonces, que la mayor *reflexividad*, en parte producto de la desestructuración más o menos profunda de los diferentes ámbitos relacionales, es *condición de posibilidad* de un trabajo de generación organizativa, es decir, de un *proceso de (re) constitución del lazo social*.

El estrecho vínculo entre *reflexividad*, *politicidad*, y *procesos de (re) producción social* se observa en los esfuerzos organizativos de los actores en tanto prácticas políticas. Porque esa (re)producción organizacional es al mismo tiempo causa y efecto de su *politicidad*. En este sentido, subrayamos especialmente la relación entre el concepto de *politicidad* y el de *formas de organización política auto-referenciada*. Esta relación es de carácter tanto conceptual como empírico. Ambos conceptos refieren a dos dimensiones de las prácticas políticas de los actores en cuestión –precisamente, son conceptos construidos a partir de la observación de las relaciones sociales que se desenvuelven dentro de la organización.

Por eso, al hablar de *politicidad* es fundamental reparar en el despliegue organizativo, entendido en términos de la utilización recursiva de un *saber o conocimiento* práctico y discursivo. A partir de la génesis y el desarrollo de lo que denominamos *experiencia social*, los actores son capaces de implementar acciones encaminadas a la concreción de formas de organización que en nuestro caso hemos situado analíticamente dentro de un *sistema relacional auto-referenciado*, por cuanto adquieren características distintivas respecto de las estructuras de organización más tradicionales como los partidos políticos o los sindicatos.

Entonces, si nos apartamos de la materialidad supuesta en el hecho de que estamos frente a un grupo de personas que se reúne sólo porque se encuentran sin empleo y el Estado les otorga una serie de planes sociales de trabajo y alimentarios, podremos ampliar el campo de análisis y observar las relaciones sociales que se producen en los espacios en los que las organizaciones se desarrollan. En esa producción cotidiana de lo social, los actores ponen en juego un complejo conjunto de sensibilidades políticas, creencias y actitudes que va definiendo, en un plano simbólico, aquello que para ellos es *hacer política*. El universo de percepciones y actitudes que llamamos *politicidad* atraviesa el discurso y las prácticas de quienes participan en la red de relaciones sociales auto-referenciada.

Es en el proceso mismo de constitución de lazo social cuando las definiciones en torno a la política son construidas, y se conforman dentro de límites dados por la experiencia pasada de los actores, por la historia de los ámbitos en los que esa experiencia se desarrolló, y por las condiciones organizacionales actuales. Es decir, el conjunto de dimensiones referidas a las sensibilidades políticas de los actores, a sus creencias, a sus actitudes y a sus formas de relacionarse con los debates y las decisiones de la esfera pública es una construcción relacional que, sin duda, se produce en el transcurso de la interacción social, pero que de ningún modo tiene lugar en el vacío. En cambio, ocurre sobre el sedimento de las experiencias anteriores de los actores en diferentes ámbitos de inserción, que a su vez tienen su propia *historia estructural* que condiciona las prácticas y percepciones, y sucede también en el marco de las condiciones actuales dadas por la estructura organizacional dentro de la que desarrollan sus actividades cotidianas.

De modo que para poder decir algo comprensivamente sobre la cuestión de la *politicidad*, deberíamos pensar en términos tanto de condiciones del tejido social como de experiencia social de los actores desarrollada en el transcurso de sus trayectorias. Todo esto, a su vez, en una perspectiva de largo plazo, porque existe un sustrato de tradiciones culturales en términos amplios vinculado especialmente con la experiencia del peronismo en los sectores populares, que hace que en

las evaluaciones se asigne un lugar central, por ejemplo, a las creencias en torno a la justicia social, el derecho al trabajo, a la movilidad social ascendente; y, en lo específicamente político, se trata de una cultura que subraya el modelo de construcción organizacional “desde el campo popular”, es decir, el tipo de organización en la cual los sectores populares ocupan un lugar protagónico.

En líneas generales, hemos observado que la búsqueda permanente de asociación de parte de los actores se relaciona directamente con el desarrollo de una *experiencia* específica en los ámbitos laboral, residencial y político-partidario en los que cada uno tuvo o tiene una *posición* específica. Esa *posición y experiencia* están influidas por las condiciones del tejido en el que están insertos los actores. Ese mapa que constituye el entramado social, en el que *posición y experiencia* se coordinan de uno o varios modos específicos, da lugar a que las prácticas se dirijan a la generación asociativa, es decir, a que procesos de constitución y reconstitución del lazo social encuentren espacio y tiempo.

CONDICIONES DEL TEJIDO SOCIAL Y EXPERIENCIA

La experiencia organizativa desarrollada en el ámbito barrial a partir de los procesos de toma de tierras marca significativamente las apreciaciones en torno al *poder hacer* autónomo. El hecho de que las organizaciones barriales en las cuales han participado los actores se caractericen por un trabajo más o menos continuado es suficiente para que los logros se aprecien de manera positiva y como propios. Dentro de comisiones barriales, cooperativas, centros comunitarios, etc., estos actores han logrado, en sus propios términos, “gestionar”²⁸, al tiempo que “organizar a los vecinos” y tener “discusión política”. Aquí también, en el plano simbólico, juega un rol fundamental la presencia de las CEB que, como ya dijimos, fueron para muchos de los actores ámbitos de formación política. De allí que las definiciones de la política como “servicio”, o el reconocimiento positivo hacia la “opción por los que menos tenemos”, ocupen un lugar central en las argumentaciones evaluativas de los actores.

La participación continuada en el ámbito territorial supone primordialmente un compromiso que se (re)vive en forma cotidiana al concretar mejoras puntuales, cuando se logra modificar la realidad existente. Al mismo tiempo, por medio de ese trabajo, en el ámbito barrial los actores se proponen reconstruir la “confianza” de los vecinos, que se erige como condición de posibilidad para la integración, la par-

28 Cuando los actores dicen “gestionar” o “hacer gestión” se refieren a lo que podríamos definir como “gestiones autónomas”: peticiones formales o informales de parte de los actores organizados, que pueden estar acompañadas o no de expresiones públicas de disconformidad.

ticipación y el compromiso. Uno de nuestros entrevistados, un antiguo dirigente, explicaba el modo en que la regularización de la situación dominial de los terrenos del asentamiento es uno de los tantos hechos objetivos que hace que los vecinos adquieran “confianza” en ellos mismos, en la organización y sus miembros, y en la acción política como medio para cumplir objetivos.

Confianza de lo que debe ser la política, la confianza también de los compañeros de comenzar a levantar, a tener convicción y mística [...] esto es lo que realmente a nosotros nos fortalece para seguir luchando, son muchos años que venimos ¿no? siendo coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, porque para nosotros no es poca cosa, es decir, conseguir hacer viviendas para nuestros vecinos donde realmente se había ya planteado como idea en el año ‘81 donde llegamos a luchar por la tierra, por la vivienda, por la educación y por la salud, casi a veinte años hoy seguimos siendo coherentes con lo mismo, hemos logrado las tierras, estamos haciendo viviendas [...] esto es lo que realmente fortalece al conjunto de los compañeros que siempre fuimos coherentes con lo que decíamos o con lo que dijo la comisión en algún momento, y muchos fueron los que realmente se borraron por tener ambiciones desmedidas e individuales, nosotros tenemos ambiciones colectivas, es decir que creo que eso es lo que realmente ¿no? nos fortalece para seguir en todo esto (hombre, 43 años).

Las definiciones en torno a lo que “debe ser la política” incluyen una serie de aspectos tales como la participación continuada, que entraña un compromiso profundo, a la vez que coherencia en las prácticas desarrolladas. Además, junto con la acción ejecutiva, la palabra ocupa un lugar central en las prácticas políticas de los actores, de modo que la discusión y el cuestionamiento permanente son centrales para la construcción de organización. Esta organización así construida “demanda” militancia, a través de la cual la “reivindicación concreta” y la “elaboración de política” conviven, de modo que se subraya la necesidad tanto de la “gestión” como de la “convicción y mística”. Nos decía el mismo dirigente:

Acá se discute la reivindicación y también se discute la política [...] eso es buscarle la causa, la causa del problema que sufre nuestro pueblo, es decir, no es una casualidad, no es que el problema [es] porque Dios no pasó por acá que somos todos pobres y marginados, es decir, hay una causa que es el modelo cultural y político y económico ¿no?, ese es el problema.

La alta valorización de la organización, del *despliegue organizativo* del cual se es o no capaz, es una característica definitoria del modo en que el hacer política es comprendido y percibido por los actores. Existe un reconocimiento explícito acerca del hecho de que *poder* constituirse como grupo organizado es central para la concreción tanto de las reivindicaciones como de las discusiones en torno a las causas de la situación actualmente vivida, o la proyección a futuro de las acciones a desarrollar²⁹.

En este sentido, podemos decir que el debilitamiento de la injerencia territorial del PJ –o, como nos decía uno de los referentes entrevistados, del “poder de hacer asistencias” que poseía el partido– parece haber jugado a favor de la posibilidad concreta de desarrollo organizacional de la FTV. En contraposición con el PJ, una vez más se presenta, de parte de los miembros de la organización, la percepción de que la discusión y el cuestionamiento permanente son centrales para la construcción de organización. En palabras de uno de los dirigentes:

Lo que no tienen ellos [miembros del PJ] es poder de discusión política, entonces cuando ellos [...] ya en la segunda etapa de gestión de Menem, ya no tenían respuestas para dar en el tema asistencial, fuimos creciendo nosotros, porque nosotros también seguíamos haciendo gestión... (hombre, 43 años, dirigente, antiguo).

La experiencia político-partidaria, ya sea en forma de pertenencia orgánica o más informal, también se conjuga con estas condiciones del tejido social, marcadas preponderantemente por la retirada del PJ, para dar lugar a ciertas características de lo que llamamos *politicidad*. En el caso de los miembros de la organización que habían desarrollado una trayectoria dentro del PJ, la misma se ha caracterizado por la adopción de actitudes “críticas” desde el plano ideológico. Dicha postura se ha

29 Como mecanismo para el desarrollo organizativo, cuando se acerca un vecino buscando algún tipo de ayuda (ya sea alimentos, medicamentos o un plan de trabajo) se le pide que reúna a otros nueve vecinos y elijan entre ellos a un delegado que concurra a la reunión semanal del cuerpo de delegados. Uno de los entrevistados, miembro de la conducción, nos decía que está convencido de que ese tipo de práctica es una de las que posibilita que la gente se organice. En este sentido, es interesante ver el caso de un vecino que actualmente es el delegado de su barrio: “Yo hoy estoy 10-12 horas acá adentro [...] por ahí [al principio] escuchaba, por respeto ¿no?, pero no podía entender cómo ellos [los de la mesa de conducción de la organización] querían meter a la gente... cómo le podían meter eso, lo que ellos creían, a la gente en la cabeza. Yo era uno de esos que pensaba ‘¡chist! ¡Estos me van a venir a dar vuelta la cabeza!’. Entonces uno después que va escuchando va entendiendo, se ve que no es chamuyo lo que uno está escuchando, yo siempre lo planteé, me lo planteé yo mismo en la reunión, que yo cuando vine acá pensaba que era todo una joda, cuando me di cuenta, me metí en serio” (hombre, 29 años, referente, nuevo).

expresado en (y ha sido expresión de) la participación activa en diversas “agrupaciones disidentes”, encuadradas dentro del propio peronismo. Entre las argumentaciones de los actores vemos que la definición de las características de la política partidaria se conforma de manera muy diferenciada respecto de las cualidades de las prácticas que se desarrollan en el marco de la organización a la cual pertenecen en la actualidad. Pero además, este tipo de evaluaciones cobra significatividad por cuanto está presente con fuerza también entre aquellos que han tenido una inserción anterior más directa en *redes clientelares*³⁰ –y decimos más directa porque todos en diferente medida han sido miembros de ese tipo de redes, ya sea como *punteros* o *clientes*. Un antiguo afiliado a la organización nos explicaba diferentes cuestiones en torno a cómo cambió su actividad respecto de cuando era *puntero* del PJ:

Acá somos nosotros los que mandamos, no es el político [...] antes era el político, vos dependías del político, y ahora somos nosotros, no dependemos... ahora si vos no participás no pasa nada, y antes vos esperabas una orden de allá arriba, que viene a ser el candidato, y acá decidimos nosotros en una reunión. Hay que decidir algo y bueno, decidimos nosotros: la comisión, antes no (hombre, 43 años).

Es necesario considerar el clientelismo como práctica y como experiencia política. Como decíamos, es significativo el deterioro de muchas de las redes clientelares del PJ en los ámbitos en los que se ha centrado nuestra indagación. Tal deterioro no es sólo material sino también, y en gran medida, simbólico. Dichas redes ya no solucionan problemas, y han dejado en disponibilidad a muchos individuos que participaban de las mismas. Teniendo en cuenta la existencia de posiciones diferenciadas en las redes de participación que están en el centro de nuestro análisis, existen características similares entre muchos de los miembros de las mismas y lo que se denomina “cliente”. Sin embargo, hay diferencias significativas en el tipo de prácticas que se desarrollan en la organización que es nuestro caso de estudio, y es en este sentido que hablamos de *auto-referencia*.

En el plano material, los recursos que se constituyen como bienes son equivalentes: alimentos, medicamentos, planes sociales de trabajo, etc. No obstante, pueden observarse las variaciones en las formas en las que la entrada y el flujo de bienes tienen lugar. Si en una primera aproximación las prácticas pueden aparentar ser las mismas, no lo son tanto, y esto está en estrecho vínculo con el hecho de que, desde la perspectiva

30 Seguimos las formulaciones de Javier Auyero (2001) en torno al tema del clientelismo político.

de los actores, la propia acción es lo que modifica las condiciones de existencia. Concretamente, la diferencia reside en *cómo se consiguen los bienes y con qué criterios se reparten*.

Un referente explicaba lo que significa obtener los recursos:

[Me siento] orgulloso porque yo me lo gano a esto, esto es una lucha de todo un año que venimos haciendo con los compañeros, le digo, salimos a la calle con todos los compañeros, que no es lo mismo que venga uno, te use un mes o un día nomás, y esté todo bien [...] Se les explica [a los compañeros nuevos] cómo se consiguen las cosas: que nosotros conseguimos las cosas a través de las marchas, a nosotros nadie vino y nos dio, nosotros tenemos que ir a reclamar (hombre, 29 años, referente, nuevo).

Por su parte, un antiguo dirigente relataba cómo la organización decidió que debía proceder sistemáticamente al momento de repartir los bienes obtenidos por medio de acciones contenciosas o gestiones, cuando estuvieron por primera vez frente a esa situación en el año 1995: “En aquel momento decidimos que cuando se le entregara la bolsa de alimento se le iba a explicar al vecino cómo se había conseguido” (hombre, 43 años).

De esta forma, tanto cuando se obtienen como cuando se reparten los recursos y bienes provenientes de diferentes órbitas del Estado, va construyéndose una explicación en torno a la relación con el Estado³¹ en general, y con aquello que se obtiene en particular. Al mismo tiempo, los miembros de la organización construyen vínculos específicos entre sí, y con la organización misma. Así, todo aquello que se consigue del Estado se percibe como resultado de una acción propia con una direccionalidad específica, como resultante de una “lucha”, y no como la acción contingente de otro actor. De modo que “la lucha” aparece en un lugar central a la hora de buscar mejoras específicas y de intentar modificar la realidad existente. “Lucha” implica principalmente un compromiso que se vive en cada acción cotidiana, pero que se prolonga hacia el espacio público, y se la concibe como conducente a la concreción de objetivos. En términos individuales, es significativa

31 Respecto al tema de la relación con el Estado, todas las cuestiones referidas a la *politicidad* de los actores se encuentran estrechamente vinculadas con las relaciones que la organización mantiene con los gobiernos nacional, provincial y municipal en los ámbitos en los que indagamos. Dentro de los límites de este artículo, nos ceñimos a decir que el Estado, a través de sus agentes de gobierno, ha conjugado respuestas inclusivas y excluyentes. Así, los diferentes grupos de desocupados y organizaciones territoriales han accedido a través de distintos mecanismos a diferentes ámbitos de gobierno, al tiempo que han sido blanco de persecución y represión. Para la periodización de las relaciones entre las organizaciones y los gobiernos en lo que hace al manejo de planes sociales, ver Svampa y Pereyra (2003: 86-100).

la percepción de autonomía de la propia acción, al mismo tiempo que el hecho de canalizar esa acción autónoma en la organización colectiva adquiere una valoración altamente positiva.

En cuanto al impacto del deterioro de las redes clientelares del PJ sobre la dimensión simbólica, podemos señalar que los actores construyen una clara impugnación moralizante en torno a las prácticas clientelares del partido. La crítica excede la referencia a actores como puede ser un “puntero”, para abarcar al conjunto de prácticas que se desarrollan o se han desarrollado dentro de los límites de la red clientelar en el medio territorial y, más en general, hacia las prácticas políticas del partido como organización.

Sin embargo, esta disposición crítica hacia las prácticas del PJ no implica que el peronismo haya desaparecido como elemento constitutivo de la cultura política de gran parte de estos actores, en tanto “representación social con la que la mayoría de los sectores populares se pensó a sí misma, a su lugar en la sociedad y en el juego político” (Sidicaro, 1995: 151). Esto se observa tanto en el uso concreto de liturgias vinculadas al peronismo, como en los discursos legitimantes de la propia acción, en los que se recurre al bagaje ideológico construido por el peronismo. En términos generales, la des-tradicionalización de la política es efectivamente un fenómeno de envergadura; no obstante, muchas de las interpretaciones acerca de la política y el hacer política están profundamente influenciadas por la experiencia construida en la pertenencia al peronismo, tanto bajo la forma de militancia partidaria continuada como de simple adhesión política. Así, retomar “las banderas del peronismo”, colocar “la justicia social” en el centro del debate y del reclamo concreto, proponerse una “construcción desde el campo popular”, entre otras, son las formas en que los actores expresan su percepción acerca de sus prácticas políticas actuales. Más aún, el hecho de pensarse a sí mismos con “autoridad” para realizar reclamos también se encuentra en íntima relación con la función del peronismo, en tanto representación social a partir de la cual gran parte de los sectores populares aún concibe su propio lugar en la sociedad. Lo que está en juego es un proceso de des-tradicionalización de la política junto con la persistencia de una tradición en términos de cultura política estrechamente vinculada al lugar que ocupó el peronismo.

Ahora bien, la crítica hacia los partidos políticos tradicionales y hacia su forma de hacer política es clara y abierta. El ámbito barrial es un espacio de competencia directa entre organizaciones como la FTV y las estructuras partidarias, competencia que comenzara con la apertura democrática en 1983. En este sentido, es importante remarcar que para los afiliados, militantes, referentes y dirigentes, la política de partidos es muy diferente a las prácticas que por su parte ellos desarrollan. De

modo que la “política partidaria de los partidos políticos” es “engaño” y “mentira”, mientras que la “política más social” desarrollada por la organización es “consecuente” y “comprometida” con los valores declarados por ella y por sus miembros. Sin embargo, la política de partidos y los espacios institucionales a los que pueda accederse desde la propia organización también son “herramientas” juzgadas como válidas y, más aún, valiosas³². Así, especialmente los dirigentes y referentes, realizan una operación lógica a partir de la cual se afirma que si desde la participación política en la propia organización se accede a determinados espacios político-partidarios y/o de gobierno, la “política de partidos” se transforma efectiva y exitosamente en una “política más social” y por lo tanto limpia, coherente y consistente³³. La idea de la “política como herramienta” útil socialmente si es manejada por formas organizacionales como la propia lleva al convencimiento declarado, excepto en el caso de los afiliados periféricos nuevos, de que la política en términos amplios “es todo en la vida”, y las prácticas políticas se perciben como la única posibilidad de cambio, de transformación de las condiciones existentes.

Entonces, cómo decíamos, la política que se desarrolla en el marco de los partidos, de la cual la mayoría de los dirigentes, referentes y militantes de la FTV conocen su dinámica por experiencia propia, se presenta con características significativamente contrapuestas a la política que se despliega en la organización. Y aun así existe la clara pretensión de acceder a espacios institucionales por medio de los mecanismos de la democracia representativa. Podemos pensar esta cuestión con Bourdieu y observar que dentro del *campo político* conviven varias matrices relacionales (redes clientelares, sistemas de representación formal, sistemas auto-referenciados, etc.), de modo que el *habitus* propio de cada una de

32 El mismo presidente de la FTV ha ocupado y ocupa cargos políticos a los que accedió mediante el voto en elecciones democráticas.

33 Un dirigente antiguo nos decía: “El partido va a ser, va a ser buena herramienta en tanto y en cuanto la gente participe” (hombre, 43 años). También decía una militante antigua que “cuando realmente nos organicemos y de esa misma gente sale alguien nuevo, alguien puro, vamos a suponer, así, políticamente, ahí sí nos va a representar” (mujer, 40 años). No obstante, un vecino, que en el año 1986 llegó a concejal, recuerda con amargura que “de los asentamientos salió un compañero elegido por la comisión para que militara en la política y bueno, tuvo la suerte, ganó, se alineó en uno de los sectores del peronismo y tuvo la suerte, ganaron, subió como concejal, en el ‘86, en la época cuando ganó Cafiero la gobernación, ¿me entiende? Y yo no sé si la ambición de todo político, por supuesto, es llegar a lo que se propone. Yo siempre digo que la política es muy sucia, pero también digo que no todos los políticos son corruptos, pero a la larga, el que no es corrupto se tiene que hacer corrupto porque la realidad lo muestra, la realidad toda la vida lo mostró. Y este compañero que asume como concejal se olvidó de sus raíces, no que se haya olvidado del resto de los barrios [donde] creció y llegó a esa función, que lo más triste es olvidarse de su propia familia, que abandonara a su familia, que abandonara a sus hijos, ¿me entiende? Pero esto porque se lo inculcan dentro de la política, esto está a la vista” (hombre, 60 años, referente, antiguo).

ellas genera prácticas compatibles con diferentes condiciones objetivas dentro de ese mismo campo político. Muchas prácticas políticas aparentemente contradictorias entre sí de parte de los actores se explican en este sentido. Así, las prácticas “contradictorias” pueden comprenderse en función de las diferentes condiciones objetivas de cada una de las matrices relacionales en el marco de las cuales tuvo lugar la génesis del *habitus*, y en el marco de las cuales este produce las prácticas.

Estamos pensando en tres ámbitos típico-ideales en los cuales esta parte activa de los sectores populares desarrolló y desarrolla prácticas políticas, en los que identificamos cuestiones relativas a su *politicidad*. Por un lado, el ámbito ligado a formas y relaciones clientelistas que se delimita por las prácticas vinculadas con estructuras burocrático-administrativas de los partidos políticos tradicionales como el PJ, la UCR o los partidos provinciales. Aquí puede pensarse en términos de una participación política que queda “encuadrada” en *redes clientelares*. Por otro lado, en un nivel más general de las relaciones políticas, tenemos el espacio de la *performatividad* o representación. Dentro de este tipo, los individuos entran en relación con quienes pretenden *nombrarlos* y ser *portavoces* de un *movimiento* que, de ese modo, es constituido (Bourdieu, 2000a: 158-172). En este caso, los actores *son hablados* y se produce un *efecto de oráculo* que eclipsa otras formas de *politicidad*. Los actores pueden ser nombrados desde diferentes lugares (partidos políticos de izquierda, organizaciones de raíz sindical, sectores eclesiales) y de distintas maneras: excluidos, pobres, desocupados, desposeídos, etc. Por último, está el ámbito que hemos denominado *sistema relacional auto-referenciado* dentro del cual identificamos el fenómeno al que remite nuestro análisis: la *organización auto-referenciada*. La práctica organizacional auto-referenciada conlleva un proceso de constitución de una *politicidad* con características específicas.

Vale aclarar que la distinción es analítica: cada uno de los actores puede estar inserto en más de un ámbito, y la posición presente o pasada en alguno de esos ámbitos influye en la conformación de la experiencia. En este sentido es que hablamos del peso de la misma, y consideramos importante reparar tanto en las prácticas clientelares, especialmente las del PJ, como en el fenómeno característico del peronismo en términos amplios y en relación con la cultura política.

Ahora bien, al observar las prácticas y los discursos de los actores advertimos que sus *disposiciones* obedecen a una lógica que poco tiene que ver con el funcionamiento actual de los partidos políticos tradicionales. Esto se torna evidente si, además, tenemos en cuenta tanto la posición marginal de estos actores respecto del ámbito de acción política definido por las instituciones de gobierno, cuanto el escaso éxito que estos actores obtienen cuando se trata de competencia electoral.

En este sentido, decimos que en política la auto-referencia implica una disposición a actuar que no es *eficaz* cuando lo que impera es la lógica de la política partidaria. Siguiendo esta línea de análisis pueden interpretarse las definiciones en torno a la política como algo que “se discute de manera permanente”, o aquellas definiciones referidas a la “mística” de la política. En palabras de un dirigente antiguo:

La política no es por ahí lo que nos muestran diariamente los políticos de turno ¿no? Es decir, la política es parte de la vida, y uno tiene que tener ese espíritu de lucha para modificar la mala situación que a veces nos toca vivir y estar convencidos de eso que es posible ¿no? de modificar, en tanto y en cuanto estemos unidos y organizados [...] ¿Por qué vos creés que no hay mística en los partidos políticos tradicionales? Se ha cambiado la mística por lo que es el sistema clientelar, mmm..., que es un negocio ¿no?, como que no hay, no hay ideales ¿no?, lo que se compra es conciencia, si hay. Nosotros tenemos ideales [...] Venimos convencidos porque vemos a nuestros compañeros que diariamente están acá en el local y están poniendo esa mística ¿no?, metiendo esos ideales que es posible modificar esto y la convicción de convencidos porque lo ves diariamente (hombre, 43 años).

Este aspecto de la existencia de una *lógica auto-referenciada* contrapuesta a una *lógica partidaria* es constitutivo de lo que hemos denominado *politicidad*, dado que hace a la definición y caracterización misma de lo que es una organización política auto-referenciada. En el mismo sentido, no es menor la importancia de otra dimensión en juego en las definiciones de lo que es hacer política, y que marca la contraposición entre la *lógica auto-referenciada* y la *lógica sindical*: nos referimos a la relación con los sindicatos, principalmente con aquellos pertenecientes a la CTA, puesto que, como ya lo mencionamos, son aquellos con los que esas relaciones efectivamente se desarrollan. Dentro de los límites de la CTA, en tanto estructura de organización, la disputa entre lógicas de organización es evidente.

Si bien la CTA se constituye como un espacio propicio para el desarrollo de la Federación territorial, la misma comienza a institucionalizarse de manera más o menos autónoma precisamente por la diferencia significativa entre las dos lógicas de construcción organizacional. En función de los espacios organizativos en cierta medida alternativos que encontraron su génesis en el interior de la Central, se hizo factible que lo sindical conviviera, aunque en permanente tensión, con lo territorial.

Esto se observa, en buena medida, al atender a las relaciones entre los dirigentes, a partir de las que podríamos pensar que la disputa se configura en términos personales, mientras que, sin embargo, dicha disputa es entre lógicas organizativas, y la confrontación se desarrolla en aque-

llos espacios en los que se comparte actuación en tanto organización. Es necesario tener en cuenta que los sindicatos y la FTV no comparten el mismo estatus dentro de la CTA. La mayoría de las organizaciones sindicales preceden temporalmente a la Central, en tanto la FTV se conformó a partir de la existencia misma de la CTA. A esto se suma el hecho de que los gremios más importantes que componen la CTA poseen más recursos económicos y organizacionales que la FTV³⁴.

Es importante considerar que en los casos en que nuestros entrevistados de la FTV desarrollaron una experiencia sindical, la misma se conformó en una trayectoria signada por la acción gremial “al margen” o “por afuera” de la estructura sindical oficial, “criticando” y “oponiéndose” a “la burocracia sindical y política”. De modo que en lo referente a experiencia sindical estamos frente a trayectorias marcadas por disposiciones de *autonomía*, en las cuales dicha experiencia es puesta en práctica *hábilmente* en formas relacionales *auto-referenciadas*. Tal experiencia se reconfigura en otro registro y entra en disputa con la eminentemente sindical –en el sentido de más tradicional y corporativa.

Observando la relación sindicatos-FTV vemos que hay varios aspectos que contraponen los modos de acción. El más relevante es el que hace al tipo de *demandas* que cada una de las organizaciones mantiene, lo cual se vincula con las *formas* específicas de organización. Mientras que las demandas gremiales son corporativas, los planteos de la Federación apuntan a “universalizar el reclamo”, poniendo en discusión temas como “el derecho a la tierra y a la vivienda digna”, o “el problema del hambre” y las condiciones básicas de subsistencia en general. Así, las demandas tradicionales de los sindicatos son consideradas no-universales y menos urgentes que aquellas formuladas por la FTV. Nos decía un antiguo dirigente:

El sindicalismo tiene una estructura y una forma de armado que obedece a cierto régimen estatutario que nada tiene que ver con lo que es un armado en lo barrial, en el barrio tenés organizaciones como cooperativas, clubes, sociedad de fomento y organizaciones de hecho, y que el sindicato reivindica lo

34 Para aludir sólo a un ejemplo en el plano material podemos recordar que la mayoría de los sindicatos de la Central (SUTEBA, ATE, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina-CTERA, entre otros) posee sus propias locaciones, a diferencia de las Federaciones (como la de Tierra y Vivienda o la de Trabajadores de la Industria) y sindicatos autónomos (como el de gastronómicos), quienes no tienen estructura ni logística comparable con la gremial antes aludida. En el plano simbólico, basta presenciar los despliegues sindicales en los actos en los que la CTA participa para observar la disputa entre la lógica que suponen y la territorial. Por supuesto, de más está decir, los límites entre la organización territorial y las sindicales están siendo redefinidos permanentemente, y esa redefinición ha tomado preponderancia a partir del crecimiento abrupto de la Federación territorial dentro de la CTA en comparación con los sindicatos.

salarial, reivindica el derecho del trabajador como tal, pero nosotros no sólo reivindicamos la búsqueda de un pleno empleo sino también que reivindicamos el derecho a los salarios indirectos como por ejemplo es la iluminación, el derecho al asfalto, el derecho a poder tener gas, el derecho a poder tener una casa digna, el derecho a tener la familia integrada, el derecho a tener la tierra que nos corresponde, el derecho a la seguridad, [es] mucho más abarcativa la reivindicación de lo social que lo sindical (hombre, 37 años)³⁵.

PERTENENCIA, PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO

Cuando nos aproximamos al estudio de caso nos encontramos con este conjunto de sensibilidades y actitudes, observables en el despliegue de las prácticas políticas de los actores, y en sus argumentaciones en torno a las mismas. Como vimos, son varias las características de esta *politicidad* y todas ellas observan, a su vez, desarrollo propio. Es decir que, como ya señalamos, la politicidad es una construcción que tiene espacio y tiempo en el proceso de producción de las relaciones sociales. La politicidad de los actores en sí misma posee ciertas características diferentes según la posición y disposición de cada actor en perspectiva histórica, es decir, en proceso.

A partir de nuestros datos observamos que son varios los miembros de la organización que se incorporaron a la misma “con una cultura que son 150 y nada más”³⁶ y que luego, a través de una *trayectoria de participación continuada*, fueron adoptando un compromiso mayor. Como nos decía un referente nuevo: “yo cuando vine acá pensaba que era todo una joda, cuando me di cuenta me metí en serio” (hombre, 29 años). Podríamos decir que existe un camino hacia la profundización del compromiso, propio de la lógica de la acción colectiva, de modo que los miembros de la organización transitan desde una posición en que la organización es una referencia periférica en sus vidas, hacia aquella en la cual la organización pasa a ser el centro de la cotidianidad.

Podemos distinguir tres tipos de *actitudes*, que hemos denominado: “en busca de los 150”, “la lucha es todo en esta vida”, y “vamos por más-vamos por todo”. Estos diferentes tipos de actitud hacia el hacer política en la organización están vinculados tanto con el tipo de experiencia

35 Cabe destacar que el entrevistado, en este caso, antes de llegar al barrio en el que vive actualmente, se desempeñaba como empleado en un sindicato.

36 Refiere a la cantidad (150) de Lecops que, en el momento de referencia (año 2002), el Estado pagaba a los beneficiarios de los planes sociales de trabajo Jefes y Jefas de Hogar. El Lecop (Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales) es un tipo de bono emitido por el Estado Nacional.

de los actores como con la posición actual en la red de relaciones auto-referenciada (como afiliado periférico, militante, referente, dirigente). Ello no implica que exista una correspondencia directa entre actitud y condición, sino que se observa una afinidad entre un determinado tipo de actitud y una combinación específica entre posición actual y experiencia. Al enunciar las actitudes típicas en un continuo que va entre “en busca de los 150”, “la lucha es todo en esta vida” y “vamos por más-vamos por todo”, señalamos una variación desde una menor hacia una mayor intensidad en la *pertenencia*, la *participación* y el *compromiso*. La relación con la decisión de participar o no, al comienzo, puede ser una relación de tipo costo-beneficio, a partir de la cual empiezan a desplegarse cuestiones referidas al desarrollo de vínculos personales y de confianza recíproca.

Así, “el trato con la gente”, que es parte de la actividad cotidiana, y “el respeto con que se trata a la gente” en la organización, son considerados aspectos centrales de las relaciones a la hora de comprometerse y de profundizar vínculos con ella y con los demás miembros. Estas son algunas de las características principales de las relaciones en la organización presentadas por los actores como justificación de su acción dentro de la organización, así como también algunos de los motivos aludidos para explicar y explicarse la mayor participación y/o el creciente compromiso. Se alude a este tipo de características como propias y distintivas de la organización, en contraposición con otras organizaciones de pertenencia anterior como son, en general, los partidos políticos.

La actitud típica “vamos por más-vamos por todo” incluye diversas cuestiones que hacen a las formas en que los actores se relacionan entre ellos, con sus propias prácticas y con el contexto en las que las mismas son producidas y, de un modo típico, da cuenta de ese universo de percepciones y actitudes frente a la política y a las propias prácticas políticas. Engloba la idea, compartida por dirigentes, referentes, militantes y afiliados, de que la *propia acción es capaz de modificar* la realidad existente. Incorpora, a su vez, tanto la demanda reivindicativa –que circunstancialmente puede expresarse en un plan social de determinada cantidad de dinero– como la creencia de que sólo por medio de la “lucha” se consiguen esas reivindicaciones y, más en general, se “progresar” en la vida. La definición en torno a lo que es la pertenencia a la organización, el compromiso y la participación son cardinales para la percepción de auto-referencia de la propia acción que desarrollan los actores.

La *participación* es un elemento fundamental en la definición de lo que se entiende por hacer política. Nos referimos a la participación concreta en diversas actividades como tareas cotidianas en la organización, acciones contenciosas como cortes de ruta, manifestaciones frente a organismos públicos, reclamos colectivos a empresas privadas, o asistencia a reuniones, asambleas o plenarios de la orga-

nización –acciones que definimos como “políticas” al margen de que no siempre los actores las perciban como tales. La participación en actividades políticas implica y expresa un *compromiso* de parte de los actores hacia los miembros más próximos de su red de relaciones, los referentes, dirigentes y la organización misma.

Al referirnos a la *participación* aludimos a una dimensión concreta de la vida política de los actores. El *compromiso*, en cambio, refiere al nivel de la percepción de los actores acerca de dicha participación, y se vincula estrechamente con el *sentido de pertenencia* a la organización. La percepción de la participación como compromiso, su importancia y significación en cuanto a la incidencia que el mismo posee en el curso de acción propio y en el de los demás miembros con los que se comparte la condición de afiliado, es constitutiva de la dimensión de creencias, sensibilidades y actitudes políticas del actor.

Ya hemos destacado que la reflexividad, en tanto característica de la acción, está presente en la conformación de la politicidad, en parte, dado que el mismo trabajo de construcción de formas de organización auto-referenciada (trabajo que supone reflexividad) conlleva un proceso con características específicas de constitución de esa politicidad. En el proceso mismo de (re)constitución del lazo social se construyen las definiciones respecto de la política, y esa construcción se efectúa dentro de los límites dados por la experiencia pasada de los actores, por la historia de los ámbitos en los que esa experiencia se desarrolló, y por las condiciones organizacionales actuales. Partiendo de este supuesto, señalamos algunas características que definen al conjunto de sensibilidades políticas, creencias y actitudes hacia la política y el hacer política de los actores, a saber: la capacidad de despliegue organizativo; la auto-referencia política que funciona como lógica organizativa y se contrapone a las lógicas sindical y partidaria; el poder hacer autónomo respecto de estructuras tradicionales y más formales; la creencia en la capacidad de modificar la realidad existente a través de la propia acción (la “lucha” y la decisión propias); la utilización de liturgias vinculadas a la *performance* peronista; el uso de discursos legitimantes de la propia acción recurriendo al bagaje ideológico construido por el peronismo; y, las definiciones acerca de la pertenencia a la organización, el compromiso y la participación continuada.

En síntesis, en este apartado trabajamos bajo el supuesto de que en la producción cotidiana de lo social los actores ponen en juego un extenso conjunto de sensibilidades políticas, creencias y actitudes que va definiendo en un plano simbólico aquello que para ellos es *hacer política*. Así, delineamos algunos aspectos definitorios de la *politicidad* de esos actores observando las relaciones sociales que se producen en los espacios en los que la organización se desarrolla. Vimos que las condiciones del tejido social se conjugan con las experiencias desarrolladas a lo largo

de las trayectorias individuales para conformar el universo de percepciones y actitudes hacia la política de quienes están insertos en la red de relaciones sociales auto-referenciada. La conformación de organización y la participación continuada dan lugar al desarrollo de un compromiso con la organización y con sus miembros, a partir del cual se constituyen los sentidos de pertenencia que dotan de significado a la acción auto-referenciada. En ese significado está implícito, entonces, un conjunto de sensibilidades y actitudes vinculado no sólo con la experiencia y posición actual, sino también con aquella experiencia desarrollada a lo largo de las trayectorias en los ámbitos de inserción pasada.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES PROPOSITIVAS

Hemos intentando mostrar cómo la experiencia de las tomas de tierras y la conformación de asentamientos en los dos ámbitos en los que centramos nuestra indagación se constituyen como factor explicativo del proceso de génesis de la FTV. Además, vimos que los vínculos organizacionales y las redes de relaciones que se conformaron a partir de aquellas experiencias confluyeron en el espacio de la CTA y que, dentro de dicha estructura de organización, la FTV desplegó su propio proceso de desarrollo.

Identificamos dos ejes de conformación de la FTV, consistentes en vínculos tanto personales como organizacionales. Por un lado, la experiencia de los asentamientos en San Francisco Solano y las tomas de tierras en La Matanza, episodios que se constituyen como experiencia social sedimentada en forma de organizaciones políticas estructuradas territorialmente que dieron lugar al nacimiento de la FTV. Por otro lado, la constitución de la CTA en Solano y las relaciones de la Red de Barrios con los sindicatos de La Matanza adheridos a la CTA, vínculos organizacionales que suponen un desarrollo organizativo previo y experiencia de los actores participantes. Ambas líneas de experiencia se constituyen como *red de relaciones que posibilita la organización política*.

Sostuvimos como hipótesis que la preexistencia de redes asociativas, conformadas en nuestro caso a partir de las tomas de tierras, fue una de las condiciones de posibilidad de los intentos de organización por parte de estos actores pertenecientes a los sectores populares. Allí donde más densas eran esas redes, fue donde más éxito encontraron los *intentos de organización* y los esfuerzos estratégicos de creación de *marcos interpretativos*.

La segunda hipótesis es que la experiencia previa de dirigentes, referentes, militantes y afiliados periféricos, junto con diversas formas de capital social disponible, hicieron posible la organización. A su vez, los diferentes grados de *reflexividad* en la orientación de las acciones incidieron sobre los procesos de construcción organizativa e interpretativa. Junto con estos factores intervino la capitalización de diversos

recursos por parte de estos actores. De este modo, lograron implementarse respuestas políticas más o menos estables en el tiempo.

Señalamos que las profundas transformaciones en el tejido social acarrearón un proceso de desestructuración de organizaciones y de identidades, al tiempo que dieron lugar a que los individuos se encontraran más *desligados* de sus anteriores tradiciones políticas y, en ese sentido, se tornaran más *reflexivos* respecto de su relación con la política en general. En relación con esto, lo más interesante en nuestro caso es que la mayor *reflexividad*, en parte producto de la desestructuración más o menos profunda de los diferentes ámbitos relacionales, da lugar como *condición de posibilidad* a un trabajo de generación organizativa, es decir, a un *proceso de (re)constitución del lazo social*.

Bajo el supuesto de que en la producción cotidiana de lo social los actores ponen en juego un extenso conjunto de sensibilidades políticas, creencias y actitudes que va definiendo en un plano simbólico aquello que para ellos es *hacer política*, delineamos algunos aspectos definitorios de la *politicidad* de esos actores al observar las relaciones sociales que se producen en los espacios en que la organización se desarrolla. Vimos que las condiciones del tejido social se conjugan con las experiencias desarrolladas en el transcurso de las trayectorias individuales, para conformar el universo de percepciones y actitudes hacia la política de quienes están insertos en la red de relaciones sociales auto-referenciada. La conformación de organización y participación continuada da lugar al desarrollo de un compromiso con la organización y con sus miembros, y así se constituyen los sentidos de pertenencia, que a su vez sostienen el *enmarcamiento* de la acción auto-referenciada, dotándola de significado. En este está implícito un conjunto de sensibilidades y actitudes vinculado no sólo con la experiencia y posición actual, sino también con la experiencia obtenida en los ámbitos de inserción pasada.

Más en general, en este artículo, tratamos de, por un lado, observar las condiciones y transformaciones en las redes sociales donde, y a partir de las que, la organización tomada como caso se estructura; y, por otra parte, ver cómo el proceso de des-tradicionalización de la política se despliega junto con la persistencia de una tradición en términos de cultura política estrechamente vinculada al lugar que ocupó el peronismo en lo que hace a prácticas políticas.

Creemos que lo que está en la base de los desarrollos organizacionales como el que investigamos, en tanto fenómeno sociológico, es un proceso de (re)constitución del lazo social. En la medida en que esto tiene lugar, al mismo tiempo, como parte de un proceso de (re)orientaciones políticas, las consecuencias de estas recomposiciones relacionales, simbólicas y materiales, en tanto políticas, adquieren sin duda una especial preeminencia. Desde una mirada sociológica, es decir, que

atienda a las relaciones sociales, podemos apreciar que en contextos de profunda descomposición institucional y desintegración social como el actual, los procesos de (re)constitución del lazo social se presentan con una relevancia más que importante, puesto que van más allá de la experiencia concreta y cotidiana de los actores directamente implicados.

No hay dudas de que nos encontramos frente a un proceso de (re)constitución política con una manifiesta injerencia en la escena pública. La crisis de representatividad de los partidos políticos y la generalizada desafección respecto a la participación política expresan transformaciones de largo plazo relacionadas con los cambios en el tejido social. La desocialización y descolectivización perjudicaron a diversas organizaciones sociales. El debilitamiento de estructuras sindicales y la descomposición institucional que afecta, entre otros, a los partidos políticos, impactó sobre el cuerpo social en su conjunto. Así, la “crisis de la política” se presenta como consecuencia de aquellos procesos de mutación social.

En todo caso, aún no podemos saber si estos procesos de (re)constitución del lazo social y, más en general, de orientación política auto-referenciada se traducirán en una acción política organizada con injerencia en la esfera pública, en el sentido de operar modificaciones de largo plazo sobre las condiciones reales existentes. Habrá que esperar el desenvolvimiento de los acontecimientos para saber si las lógicas y estrategias organizacionales puestas en juego en este tipo de organizaciones auto-referenciadas encuentran eficacia en el juego por la disputa de los espacios institucionales que, aunque deteriorados, parecen ser el lugar, incluso desde la misma evaluación de los actores interesados, desde el cual se supone que las transformaciones pueden llegar a instrumentarse. En relación con esto, decíamos, la auto-referencia en política implica una disposición a actuar que no es *eficaz* cuando lo que impera es la lógica de la política partidaria.

En esta investigación hemos intentado construir una explicación de nuestro objeto de estudio desde una perspectiva que ponga el foco en cómo y por qué se produce lo social, es decir, sobre las condiciones y las formas de producción de las relaciones sociales, sus características específicas y sus consecuencias. Pensar en términos de relaciones sociales, al decir de Charles Tilly, “de vínculos y no de esencias” (2000: 16-53), supone pensar el mundo social como entramados de relaciones sociales. Tal como lo señalamos al comienzo de este artículo, esto implica pensar al actor a partir de los sistemas relacionales en los que está inserto.

Por otra parte, pensar el problema de investigación en términos de relaciones sociales es relevante porque, entre otras cuestiones, permite problematizarlo teóricamente en tanto cuestión ya planteada a partir de categorías del sentido común. Pensar el problema de investigación en términos de relaciones sociales implica plantearlo a par-

tir de categorías sociológicas. En nuestro caso nos encontramos con el “problema” de “los grupos de desocupados”. Tomar en bloque este “problema-objeto” implica no objetivarlo, no delimitarlo, no definir sus propiedades (sociales) específicas. En cambio, la tarea de construcción del objeto de estudio supone necesariamente un acercamiento sistemático al conocimiento de lo empírico desde una perspectiva relacional del problema. Ahí donde parece haber individuos “suelos” tenemos que ver relaciones sociales; allí donde vemos un grupo de actores más o menos coordinados tenemos que ver sistemas de relaciones sociales, necesariamente conflictivos y atravesados por tensiones.

En este sentido, hablamos de la imbricación entre estructura y prácticas, que torna necesaria una construcción del objeto en términos de relaciones sociales. En nuestro caso, creemos que la construcción del objeto, y su abordaje, desde una perspectiva relacional, es la forma más adecuada de no caer en “esencialismos” y, al mismo tiempo, no quedar atrapados en el relato –sea heroico, demoníaco o simplista– de los actores implicados e interesados. Cuando se trata de la acción política de sectores populares, es recurrente esa tramposa caída tanto desde posturas que alaban la acción de estos sectores señalándoles (imponiéndoles), al mismo tiempo, un camino por donde esa acción *debe* transitar, como desde posiciones condenatorias preocupadas por remarcar el fracaso intrínseco hacia el que se dirigen los actores. Por cierto, entendemos que desde ninguna de las dos posturas pueden construirse explicaciones de la acción social.

BIBLIOGRAFÍA

- Armellino, Martín 2005 “Resistencia sin integración: protesta, propuesta y movimiento en la acción colectiva sindical de los ‘90. El caso de la CTA” en Naishtat, Francisco; Schuster, Federico; Nardacchione, Gabriel y Pereyra, Sebastián (comps.) *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea* (Buenos Aires: Prometeo).
- Auyero, Javier 2001 *La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo* (Buenos Aires: Manantial).
- Bourdieu, Pierre 1991 (1980) *El sentido práctico* (Madrid: Taurus).
- Bourdieu, Pierre 2000a (1987) *Cosas dichas* (Barcelona: Gedisa).
- Bourdieu, Pierre 2000b *Cuestiones de sociología* (Madrid: Istmo).
- Bourdieu, Pierre 2000c *Poder, derecho y clases sociales* (Bilbao: Desclée de Brouwer).

- Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loïc J.D. 1995 *Respuestas por una antropología reflexiva* (México DF: Grijalbo).
- Calvo, Dolores 2002 “La cultura política de los afiliados individuales a la Central de los Trabajadores Argentinos de tradición de sufragio peronista”, Informe Final de Investigación Beca UBACyT Estímulo 2001-2002, Buenos Aires, mimeo.
- Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) 1996 “Estatuto” (Buenos Aires) mimeo.
- Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) 1999 “Documento abierto hacia el Segundo Congreso Nacional de Delegados” (Buenos Aires) mimeo.
- Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) 2002a Agencia de Noticias, Acta de agosto, despachos varios. En <<http://agencia.cta.org.ar>> o <<http://www.cta.org.ar/prensa/agencia3.shtml>>.
- Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) 2002b Agencia de Noticias, Acta de septiembre, despachos varios. En <<http://agencia.cta.org.ar>> o <<http://www.cta.org.ar/prensa/agencia3.shtml>>.
- Fara, Luis 1985 “Luchas reivindicativas urbanas en un contexto autoritario. Los asentamientos de San Francisco Solano” en Jelin, Elizabeth (comp.) *Los nuevos movimientos sociales/2. Derechos Humanos, Obreros, Barrios* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina).
- Giddens, Anthony 1979 “Las perspectivas actuales de la teoría sociológica” en *Central problems in social theory* (Londres: Macmillan).
- Giddens, Anthony 1982 “Acción, estructura, poder” en *Profiles and critiques in social theory* (Berkeley/Los Angeles: University of California Press).
- Giddens, Anthony 1987 (1975) *Las nuevas reglas del método sociológico* (Buenos Aires: Amorrortu).
- Giddens, Anthony 1998 (1983) *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración* (Buenos Aires: Amorrortu).
- McAdam, Dough; McCarthy, John D. y Zald, Mayer N. (eds.) 1999 (1996) *Movimientos sociales: perspectivas comparadas* (Madrid: Istmo).
- Merklen, Denis 1991 *Asentamientos en La Matanza. La terquedad de lo nuestro* (Buenos Aires: Catálogos).

- Merklen, Denis 1997 "Un pobre es un pobre" en *Sociedad* (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales-UBA).
- Portes, Alejandro 1999 "Capital social: sus orígenes y aplicaciones en la sociología moderna" en Carpio, Jorge y Novacovsky, Irene (comps.) *De igual a igual. El desafío del Estado ante los nuevos problemas sociales* (Buenos Aires: SIEMPRO/FCE/FLACSO).
- Rauber, Isabel 1998 *La discusión social y sindical en el fin de siglo. Una historia silenciada* (Buenos Aires: Pensamiento Jurídico).
- Rauber, Isabel 2000 *Tiempo de herejías. Nuevas construcciones, debates y búsqueda de la Central de los Trabajadores Argentinos* (Buenos Aires: Instituto de Estudios y Formación-CTA).
- Sidicaro, Ricardo 1995 "Poder político, liberalismo económico y sectores populares en la Argentina 1989-1995" en Hora, Roy y Trímboli, Javier (comps.) *Peronismo y menemismo* (Buenos Aires: El Cielo por Asalto/Imago Mundi).
- Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián 2003 *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras* (Buenos Aires: Biblos).
- Tarrow, Sidney 1997 (1994) *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política* (Madrid: Alianza).
- Thompson, Edward P. 1995 (1991) *Costumbres en común* (Barcelona: Crítica).
- Tilly, Charles 1990 "Modelos y realidades de la acción colectiva popular" en *Zona Abierta* (Madrid) N° 54-55.
- Tilly, Charles 2000 (1998) *La desigualdad persistente* (Buenos Aires: Manantial).
- Touraine, Alain 1995 (1973) *Producción de la sociedad* (México DF: UNAM/IFAL).
- Weber, Max 1996 (1922) *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva* (México DF: FCE).

María Silvana Gurrera*

PROTESTA, CONFLICTO SINDICAL E IDENTIDADES POLÍTICAS: LA CENTRAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS EN LOS AÑOS NOVENTA

*La clase es definida por los hombres al vivir su propia historia,
y, al final, es la única definición.*

The making of the English working class

E. P. Thompson

*Para mí, un sindicato es cualquier organización de trabajadores,
cualquiera que se unifica, como quiere,
para pelear por sus reivindicaciones y transformar la realidad.*

*No es un comercio, ni una empresa,
no tiene clientes... somos nosotros mismos.*

Víctor De Gennaro

Secretario General de la CTA

INTRODUCCIÓN

Durante el ciclo de extendidas transformaciones económicas y sociales que signó el derrotero de la Argentina en la pasada década del noventa, sobresalieron dos fenómenos imbricados. Por un lado, el despliegue de una demoledora saga de reformas económicas adjetivadas generalmente como *estructurales*; y, por otro, la propagación de acciones de protesta que arrojaron sospecha sobre las frecuentes afirmaciones que predicaban la desmovilización y la apatía sociales. Afirmaciones que parecían hallar constatación en la crisis del sindicalismo como actor colectivo, y otrora protagonista privilegiado del inestable devenir político de la Argentina de la segunda mitad del siglo XX.

Este artículo se interna en esa convulsionada coyuntura y propone una reflexión sobre la construcción política de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA).

* Licenciada en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires (UBA). Becaria Doctoral del CONICET, Universidad Nacional de San Martín.

MOVILIZACIÓN SOCIAL, IDENTIDAD Y DISCURSO

A la par del proceso de desarticulación social desencadenado en la Argentina y en otros países de la región durante los últimos años, cobró fuerza un creciente interés académico por los fenómenos de protestas sociales.

Entre los enfoques teóricos dedicados a la acción colectiva, al menos cuatro de ellos resultaron puntos de lectura ineludibles: el enfoque del Comportamiento Colectivo (*Collective Behaviour*), la Teoría de la Movilización de Recursos (*Resource Mobilization*), el enfoque del Proceso Político (*Political Process*), y los análisis sobre los Nuevos Movimientos Sociales.

Desde los iniciales estudios de la psicología sobre las motivaciones individuales, hasta el conductismo, con su afán empirista para explicar las acciones colectivas, los movimientos sociales fueron entendidos como el resultado de acelerados procesos de transformación social y elocuentes indicadores de la existencia de “fallas” en las instituciones y mecanismos de integración sociales.

En la década del setenta, los trabajos de Mayer N. Zald y John D. McCarthy resultaron pioneros de los estudios guiados por la Teoría de la Movilización de Recursos. Sus postulados asumieron el carácter racional de la acción, y concedieron un lugar analítico privilegiado a los rasgos y recursos organizativos –materiales y no materiales– que facilitan y estructuran las acciones colectivas. Desde esta perspectiva, la gravitación de los movimientos sociales, en tanto motores del cambio social, se conectaba con el tipo de organización que lograban conformar.

Próximo a la Teoría de la Movilización de Recursos se desarrolló el enfoque del Proceso Político. Si bien esta aproximación parte de la premisa de que las acciones colectivas tienen una impronta racional, a diferencia de la anterior teoría, existe aquí una acentuada preocupación por el ámbito político e institucional. La mirada se orienta así a rastrear los cambios en las instituciones, o en las relaciones formales e informales de poder que posibilitan las acciones de los movimientos sociales (McAdam et al., 1999: 23). Sidney Tarrow, Chales Tilly y Doug McAdam son algunos de los más significativos exponentes de este enfoque, cuyo principal concepto es el de Estructura de Oportunidad Política¹.

Estas perspectivas animaron igualmente encendidos debates teóricos a raíz de las omisiones que dejaban traslucir. Algunos de los puntos neurálgicos que se les ha cuestionado son la escasa problematización de la dimensión identitaria de los movimientos sociales, y el pretendido carácter racional que impulsa la acción de sus participantes.

1 El concepto de Estructura de Oportunidad Política, originalmente formulado por Peter Eisinger (1973) en su análisis sobre la receptividad del sistema político frente a las protestas sociales en ciudades norteamericanas, ha sido objeto de numerosas críticas por su alto grado de indefinición para determinar cuáles son las estructuras de oportunidades relevantes en cada caso.

La crítica provino ocasionalmente de interpretaciones arraigadas en la tradición europea y en la literatura sobre los nuevos movimientos sociales (Offe, Melucci, Pizzorno, Touraine). Estos aluden a solidaridades que no responden necesariamente al tradicional conflicto de clases en el que se desenvolvían los “viejos” movimientos sociales. Los nuevos movimientos indican profundas transformaciones en las estructuras sociales, y fundamentalmente, el pasaje a un mundo postindustrial propio de los países desarrollados, en el que tienen lugar nuevas articulaciones colectivas en torno a una multiplicidad de cuestiones como la ecología, las luchas estudiantiles, las reivindicaciones de género, la etnicidad, el pacifismo, etcétera.

Si bien las interpretaciones que responden a la literatura sobre los nuevos movimientos sociales no han dado por supuesta la identidad de los actores implicados en los fenómenos de acción colectiva, sino que justamente han buscado dar cuenta de su conformación, la mayoría de ellas ha sido inspirada por experiencias que atravesaron a las sociedades desarrolladas, y que por ende se alejan de la coyuntura latinoamericana, y argentina en particular.

El análisis que aquí se propone apelará a la definición de identidad política postulada por Ernesto Laclau (1996; 2005; Laclau y Mouffe, 2004), definición que se inscribe en una literatura postestructuralista que privilegia la centralidad del discurso como línea interpretativa para el estudio de las identidades y las lógicas políticas.

Conforme a esto, se entenderá por identidad política la fijación parcial de una configuración discursiva –diferencia– resultante de una práctica articuladora de sentido. Fijación que implica el establecimiento de un límite que excluye una alteridad, y que tiene como manifestación discursiva la presencia de un antagonismo que es precisamente el testimonio de la imposibilidad de constitución de identidades plenas (Laclau y Mouffe, 2000: 160). En este sentido, se asume que toda identidad es relacional, y que las articulaciones de sentido resultantes de las relaciones sociales carecen de esencias, y están por ende expuestas a reformulaciones.

En otros términos, el proceso de constitución de una identidad política implica una homogeneización al interior de cada identidad particular y, a la vez, una diferenciación externa a partir de la fijación de un límite (Aboy Carlés, 2003)². En las páginas siguientes se buscará sostener que es precisamente este proceso siempre precario el que se

² Sobre las formulaciones teóricas de Ernesto Laclau, así como otros aspectos abordados en este artículo, agradezco muy especialmente los comentarios de Gerardo Aboy Carlés, quien ha dirigido mi tesis de Maestría en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo, Universidad Nacional de San Martín/Georgetown University.

encuentra en la base de la conformación identitaria de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA).

Para dar cuenta de ello, el objetivo específico del artículo será analizar el modo en que dicho proceso se ha operado, atendiendo a los rasgos que ha asumido la mencionada Central. Concretamente, se indagarán las dimensiones que permiten dilucidar los rasgos identitarios de una agrupación que durante los años noventa se ha presentado como un modelo sindical *democrático e independiente del Estado, los partidos políticos y los patrones*. Las dimensiones que recorren las secciones de este artículo remiten a la relación entre: sindicatos-Estado, sindicatos-partidos políticos, sindicatos-organizaciones de origen no gremial y sindicatos-tradición peronista.

ALGUNAS LECTURAS SOBRE LOS AÑOS DEL MENEMISMO

Los años en los que se inscribe el surgimiento de la CTA tuvieron la particularidad de estar enlazados a una amplia gama de términos tales como neoliberalismo, neopopulismo, decisionismo, o hiperpresidencialismo, los cuales fueron, en el lenguaje académico referido al caso argentino, sinónimos de menemismo.

Uno de los debates más acalorados del período giró en torno de los estilos de liderazgo político que acompañaron las transformaciones económicas del gobierno del presidente Menem. Marcos Novaro señaló, por ejemplo, que el menemismo encarnaba un fenómeno neopopulista en un contexto de crisis de representación. El personalismo, ejecutivismo y pragmatismo eran así el reflejo de la continuidad de viejos rasgos populistas, más allá del abandono de las políticas distributivas, o de la posición que el Estado ocupaba como mediador universal (Novaro, 1994: 180).

Juan Carlos Torre, a su vez, advirtió en el menemismo el retorno de la cultura política movimientista y patrimonialista propia del peronismo, que se expresaba tanto en la asignación de cargos partidarios y del Estado a quienes integraban el entorno presidencial, como en la ambición por la preservación del poder en nombre de una misión histórica (Torre et al., 1999: 49).

Por su parte, Juan Carlos Portantiero reconoció en el menemismo el “reverso” de la política peronista en materia económica e internacional, aunque sugirió la dificultad de oponer esas experiencias, toda vez que se corroboraba la continuidad del relegamiento de los principios republicanos, y la permanencia de un estilo pragmatista de hacer política (Portantiero, 1995: 106 y 107).

Mientras la mayoría de estos análisis centraron sus explicaciones en el contenido de las políticas económicas implementadas, en los atributos personales de un líder político, en las distancias y puntos de contacto con experiencias políticas previas, así como en las consecuen-

cias que de todo esto se derivaban para el régimen democrático, otras miradas advirtieron acentuados cambios en las identidades populistas, cuya dilucidación requería entender los elementos particulares que hacían a su constitución.

En sintonía con esto, Aboy Carlés (2001: 305) ha sostenido que el menemismo no representó un fenómeno (neo)populista. Contrariamente, el menemismo era testimonio de la ausencia de una instancia de gestión de la ambigüedad –inherente a la identidad peronista– entre la dimensión nacional-popular y la dimensión nacional-estatal³.

En definitiva, el menemismo y los adjetivos a él asociados han tenido como telón de fondo el agotamiento de una relación particular entre Estado y sociedad definida por algunos como matriz política-económica estadocéntrica (Cavarozzi, 1996), o como modelo nacional-popular por otros (De Ipola y Portantiero, 1989; Martuccelli y Svampa, 1997). Pero curiosamente, ese terreno surcado por rupturas y continuidades que representó la década del noventa, fue también el espacio en el cual las posiciones de viejos actores fueron resignificadas, a la par del surgimiento de elementos inéditos que manifestaron la presencia de nuevos patrones de comportamiento social⁴.

EL (ANTI)MENEMISMO COMO LÍMITE IDENTITARIO

Aun cuando la construcción de la CTA está ineludiblemente atada a la década menemista, es preciso aludir a la repercusión que tuvo el movimiento político conocido como la Renovación en el devenir político del sindicalismo peronista tras la derrota del Partido Justicialista (PJ) en las elecciones presidenciales de 1983⁵.

3 Como señala Aboy Carlés (2001), a partir de la política hiperinflacionaria, el menemismo anuló la dimensión nacional-popular sintetizada en la promesa peronista de “justicia social”, por lo que el fundamento de reconocimiento quedó reducido a la dimensión nacional-estatal. Para el autor, desaparece de ese modo uno de los rasgos populistas distintivos del peronismo en tanto encarnación simultánea del cambio y el orden.

4 La alusión a los conceptos de matriz estadocéntrica y modelo nacional-popular no pretende asimilar dichos términos, sino apuntar algunos marcos teóricos a través de los cuales se ha interpretado la política argentina del siglo XX. Desde una perspectiva sociológica, Manuel Antonio Garretón ha utilizado el término de matriz socio-política (1984; 1991). Por otra parte, el concepto de movimiento nacional-popular es desarrollado por Gino Germani (1962), Alain Touraine (1989) y Emilio de Ipola y Juan Carlos Portantiero (1989). Adviértase que en el modelo nacional-popular, a diferencia de la matriz política estadocéntrica, el eje de análisis es el proceso de constitución de un sujeto –concretamente el “Pueblo”– y no una fase político-económica.

5 En dichas elecciones, el PJ sufre su primera derrota en elecciones libres y competitivas frente a la Unión Cívica Radical (UCR). El resultado adverso fue atribuido al sindicalismo peronista, cuyos máximos dirigentes fueron señalados como “mariscales de la derrota”.

En el marco del regreso a la democracia, la Renovación significó el pasaje a una práctica política que debía traducirse en la consolidación del peronismo como un auténtico partido político, enterrando los resabios movimientistas que en el imaginario político lo ataban a un pasado de desorden y violencia. Pasado que, a su vez, entraba irremediabilmente en colisión con los aires democráticos que la gestión del entonces presidente radical, Raúl Alfonsín, estaba dispuesta a hacer penetrar en cada rincón de la sociedad argentina, y de cuyo alcance no quedarían exentos los sindicatos⁶. La muestra más evidente de esa voluntad democrática en el ámbito sindical se plasmó en el proyecto de ley de reordenamiento sindical impulsado por el gobierno al poco tiempo de asumir sus funciones, lo cual motivó la rápida reunificación de la CGT.

La resonancia interna por el predominio que fue adquiriendo la nueva corriente del peronismo no se hizo esperar, y el escenario quedó dividido, tanto en el campo sindical como en el político-partidario, entre “ortodoxos” y “renovadores”.

En las elecciones legislativas de 1987, el peronismo logró imponerse, y con él también lo hizo la Renovación. Tras ese triunfo, se eligió una nueva conducción partidaria en la que el sindicalismo ortodoxo

6 Los principales alineamientos sindicales de la década del ochenta son: los “ortodoxos”, representados por las 62 Organizaciones que agrupaban a gremios como la UOM, SUPE, personal de la industria de la carne, FATSAs, Luz y Fuerza, etc. Estos conformaban el ala política del sindicalismo peronista inspirado en el verticalismo, la negociación directa con los sectores económicos y con el Estado, y la aspiración a ocupar un papel preponderante en el PJ; la Comisión de Gestión y Trabajo, nacida durante el proceso militar e integrada por sindicatos –empleados de comercio y de la industria del plástico– que, buscando diferenciarse del papel del sindicalismo tradicional durante el período 1973-1976, se convirtieron en interlocutores de ese régimen autoritario; la Comisión Nacional de los 25 –luego conocida como Movimiento Sindical Peronista Renovador (MSPR)– lideró las protestas contra el régimen militar a fines de los setenta, y fue integrada por sindicalistas escindidos de las 62 Organizaciones y otros gremios combativos de los sesenta y setenta (SMATA, ATE, FOETRA, taxistas, empleados del tabaco, choferes y camioneros, trabajadores mineros) que rechazaban la burocracia y el verticalismo de la ortodoxia, a la vez que propugnaban una nueva posición de los sindicatos frente a la sociedad y el Estado en el contexto democrático; el “ubaldinismo”, cuya emergencia se inscribe en el marco de fragmentación y empate de fuerzas en las filas del movimiento obrero, conformado a partir del liderazgo de Saúl Ubaldini (FOCA) en la conducción cegetista. Desde allí asume la representación de sectores laborales estancados, de algunos trabajadores estatales (UPCN), del transporte automotor (UTA) y del interior del país; y el grupo de “los 15”, que se forma en 1987 nucleando a grandes sindicatos disconformes con la conducción de la CGT por los magros logros obtenidos, prefiriendo profundizar la negociación sectorial con el gobierno, sin dejar de apoyar a Ubaldini al frente de la CGT. Este sector sumó a sindicatos provenientes de las 62 Organizaciones, de “los 25”, antiguos miembros de Gestión y Trabajo e independientes (FATLyF, CGEC, SUPE, FOECYT, SMATA, industria del plástico, etc.). Su gravitación se expresó en la integración del dirigente lucifuerista Carlos Alderete al gabinete nacional de Alfonsín, a cargo de la cartera de Trabajo. Ver, entre otros, Gaudio y Thompson (1990).

resultó desplazado⁷. La composición sindical de la Cámara de Diputados de la Nación tampoco fue ajena a la marcha ascendente del nuevo sector interno. A partir de esas elecciones se observó una disminución de los diputados de extracción sindical, y en especial de aquellos identificados con los “ortodoxos”⁸. El núcleo sindical más cercano al sector renovador era la denominada Comisión Nacional de los 25⁹. Los sindicatos que formaban parte de este núcleo no sólo compartían varios de los principios enarbolados por la Renovación, sino que algunos de ellos serían posteriormente los promotores de la CTA, como es el caso de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El camino de Menem hacia el gobierno nacional se delineó a partir de la articulación de un discurso que reivindicaba la tradición popular, a la vez que construía una coalición de apoyo que incorporaba a aquellos sectores que el impulso renovador había buscado desplazar.

La asunción presidencial de Menem en julio de 1989 y los meteóricos cambios que se desataron a partir de las políticas de estabilización macroeconómica y reformas que encontraban en el Estado su principal objetivo, contribuyeron a crear en el peronismo un clima en el que primó la sensación de confusión, cuando no de desconcierto.

Los contenidos de esas reformas no pasaron desapercibidos para el sindicalismo. Las filas del movimiento obrero se dividieron una vez más en su historia, pero esta vez ante la disyuntiva que suscitaba el posicionamiento frente a la política de un gobierno peronista. El escenario de la fractura fue el Congreso de la CGT celebrado el 10 de octubre de 1989 en el Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires. En esa ocasión se debía elegir una nueva conducción, que contaría en adelante con una renovada legitimidad para fijar la política de la CGT frente al gobierno que había asumido en el mes de julio.

7 Al celebrarse las elecciones de 1983, Lorenzo Miguel, el dirigente metalúrgico que lideraba las 62 Organizaciones y que era el heredero inequívoco del sindicalismo vanguardista, ocupaba la vicepresidencia primera del PJ, ubicándose en la cima del partido debido a la ausencia del país de quien era su presidente: Isabel Perón. Aunque Miguel permaneció en la vicepresidencia primera del PJ hasta diciembre de 1984, cuando pasa a la vicepresidencia segunda al dejar su puesto a José María Vernet –ligado al miguelismo–, el sindicalista metalúrgico logró mantener su capacidad de influencia en la elección de los miembros del Consejo Nacional partidario. Sin embargo, el Congreso del PJ celebrado en enero de 1988 dio lugar un nuevo Consejo Nacional integrado principalmente por representantes renovadores, y en el que la vicepresidencia segunda fue asignada a un dirigente sindical que no contaba con el apoyo de Lorenzo Miguel: Roberto García (taxistas). Asimismo, allí se alteró la cuota de representación sindical en el Consejo Nacional, que pasó del histórico 33% al 15 (Gutiérrez, 2001: 93-112).

8 La evolución del porcentaje de diputados de origen sindical en el bloque peronista, considerando cuatro períodos legislativos, es la siguiente: 1983-1985: 28,3%; 1985-1987: 29,70%; 1987-1989: 24,27%; 1989-1991: 20% (Gutiérrez, 2001: 98-100).

9 Ver nota 6.

En el Congreso cegetista se distinguieron sectores que ya durante la campaña para la presidencia habían comenzado a definir sus posiciones frente al candidato justicialista, devenido ahora jefe del Ejecutivo Nacional. Por un lado se encontraba el núcleo más próximo a la figura presidencial, y que apostaba al desplazamiento de Saúl Ubaldini de la Secretaría General de la CGT. Este sector estaba integrado por quienes durante la campaña habían conformado el Movimiento Sindical Menem Presidente (MSMP) –agrupando a algunos dirigentes de las 62 Organizaciones¹⁰ y a sindicalistas que anteriormente habían integrado el llamado grupo de “los 15”–, así como por dirigentes que hasta no hacía mucho tiempo se perfilaban como renovadores¹¹. En el Congreso de la CGT, estos sectores confluyeron en la denominada Mesa de Enlace Sindical. En oposición a ellos, y en apoyo a la continuidad de Saúl Ubaldini al frente de la CGT, se hallaban el gremio de empleados estatales (ATE), los docentes (CTERA), otros gremios menores, y algunas delegaciones regionales como la CGT San Lorenzo. El “ubaldinismo” contaba además con el apoyo “cauto” de la UOM liderada por Lorenzo Miguel, decidida por entonces a promover la continuidad de Ubaldini como secretario general, pero buscando consensuar y compartir el resto de los cargos de la confederación.

La sesión inicial del Congreso finalizó con una primera votación en la que la Mesa de Enlace Sindical se impuso sobre el ubaldinismo para la conformación de la comisión de poderes que tendría a cargo la elección de la conducción nacional de la CGT. El 11 de octubre, tras la votación desfavorable de la jornada previa, la mayoría de los sindicatos que apoyaban la candidatura de Ubaldini se retiraron del Congreso argumentando la existencia de irregularidades por parte de la comisión de poderes en la acreditación de congresistas alineados con ese dirigente. Pese a esto, el Congreso designó al frente de la CGT a Güerino Andreoni (mercantil) y a Raúl Amín (mecánicos) como secretario adjunto. Ubaldini definió la resolución como ilegal, y consideró que su mandato en la CGT, ubicada en la calle Azopardo, se extendía hasta el 7 de noviembre de 1990. Mientras tanto, el reconocimiento implícito de las autoridades surgidas del Congreso por parte del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fortaleció la posición de la denominada CGT San Martín, que de allí en adelante fue la interlocutora privilegiada del gobierno.

¹⁰ Ver nota 6.

¹¹ En el MSMP se encontraban Luis Barrionuevo (gastronómicos), Diego Ibáñez (petroleros), Delfor Giménez (textiles), Carlos West Ocampo (sanidad), Jorge Triaca (industria del plástico), Juan José Zanola (empleados bancarios). Entre los ex renovadores estaban José Pedraza (ferroviario), que ya a mediados de la década del ochenta se había alineado con el grupo de los “ortodoxos”, Roberto Digón (tabaco), Güerino Andreoni (empleados de comercio) y Roberto García (taxistas). Recuérdesse que muchos de ellos fueron funcionarios durante el gobierno de Menem.

Los sindicatos nucleados en la CGT Azopardo continuaron oponiéndose a las reformas en las que avanzaba el gobierno nacional, y especialmente a aquellas relacionadas con la privatización de empresas estatales. La estrategia que este sector del sindicalismo parecía dispuesto a encarar se basaba en la *resistencia*. Resistencia que encontraba seguidores no sólo en el campo sindical, sino que alcanzaba también a un reducido núcleo de la militancia peronista ligada a la esfera partidaria.

Si bien la resistencia fue la modalidad que asumió la disconformidad con el nuevo rumbo político y económico que parecía guiar al país, llevaba igualmente implícita la inquietud por dilucidar el lugar que le correspondería a la tradición peronista en el nuevo contexto. Esto equivalía a situar en el centro del debate la crisis en la que estaba inmersa la identidad peronista.

El documento final del Encuentro de Militantes Peronistas que se desarrolló en el mes de junio de 1990 en la ciudad cordobesa de Villa María, bajo la consigna “Peronismo o Liberalismo”, hace referencia, en uno de sus breves pasajes, a tres elementos inconfundiblemente ligados al discurso peronista, y que dan cuenta de esa inquietud: la política, el Estado y el movimiento obrero.

La concepción gremial vinculada al modelo sindical que propone el oficialismo suele legitimar sus prácticas mediante afirmaciones tales como: “siendo este un Estado peronista, el movimiento obrero deberá adecuar sus políticas frente a esta nueva realidad”. Semejante planteo marca con claridad los efectos político-ideológicos del intento dictatorial –y exitoso– de resituar la política y el Estado. En él se sella la inversión colosal de la tradición peronista. Desde nuestra perspectiva debiera afirmarse que “siendo el movimiento obrero peronista, el Estado deberá adecuar sus políticas” (CTA, 1990)¹².

El pasaje ilumina los quiebres que la política de reforma del Estado infligía en el imaginario sobre el cual se había construido la relación entre sindicatos y Estado bajo el peronismo. Si bien los límites entre el Estado, el movimiento obrero y la representación de la clase trabajadora que encarnaba Perón siempre fueron tenues, nunca llegaron al punto de una fusión. Y eran paradójicamente esos límites imprecisos los que ahora permitían, según la interpretación de algunos militantes, la

12 El encuentro contó con la presencia de los principales referentes del peronismo disidente, por entonces expresado en el llamado Grupo de los Ocho; y algunos gremios de la CGT Azopardo. El Grupo de los Ocho se forma en 1989 y se consolida a partir de 1990 con la crítica al programa económico del gobierno. Sus integrantes eran los diputados Carlos “Chacho” Álvarez, Germán Abdala, Juan Pablo Cafiero, Darío Alessandro, Luis Brunati, Franco Caviglia, Moisés Fontela y José “Conde” Ramos.

rearticulación de esos elementos a fin de justificar el debido acatamiento del sindicalismo a los cambios que se estaban propiciando.

En ese pasaje también se reconocía la existencia de un modelo sindical estructurado por el oficialismo que, a modo de exhortación, pretendía retrotraerse al lazo histórico forjado entre peronismo y Estado para declarar la ilegitimidad de quienes en nombre de la tradición peronista denunciaban críticamente el cambio del rol social del Estado. Al mismo tiempo, la militancia peronista opositora reunida en Villa María no escatimó palabras al asociar el cambio de rumbo económico con una avanzada autoritaria, que esta vez encontraba a sus promotores, no afuera del peronismo, sino en su interior.

El corolario de esta pronunciación era pues la configuración del propio frente opositor al gobierno, como resultado de la brecha abierta al interior del peronismo entre disidentes y oficialistas.

El eje que articuló esa nueva división al interior del peronismo fue la percepción de una supuesta “traición” que amenazaba la continuidad de la “tradición”¹³. Percepción que iba a tener como primera manifestación una resistencia basada en la reivindicación del peronismo “verdadero”. Ciertamente, es este término el que inundó cada una de las opiniones de quienes habían optado por la disidencia¹⁴. Baste para ello recordar las palabras del entonces secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Víctor De Gennaro, en los entretelones de la reunión que se dio cita en Villa María: “Lo que está en juego es el poder ejercido por un peronismo nacional y popular o por un peronismo vaciado de contenido y transformado en liberal” (*Clarín*, 16 de junio de 1990).

Ciertamente, es el término *traición* el que inundó cada una de las opiniones de quienes habían optado por la disidencia sindical y partidaria,

13 Sobre el triunfo de Menem en 1989, Víctor De Gennaro, secretario general de la CTA, señalaba años más tarde: “Cuando iba a ganar Menem dije: lo primero que va a hacer es quebrar el movimiento obrero, y aun así es preferible votarlo para no permitir que Angeloz haga el ‘lápiz rojo’ con la anuencia de la gente. Por lo menos, Menem lo iba a hacer traicionando y eso nos permitía pelear [...] Ni bien asume empezamos a pelear contra eso: peleamos contra la ley de reforma del Estado, y cuando asume Germán [Abdala] rápidamente se enfrenta y empieza a aparecer el Grupo de los Ocho. Nosotros, en el campo sindical, también damos la pelea [...] Pero ya la CGT venía fracturándose. Fue en el Teatro San Martín donde quiebran definitivamente y eligen una nueva conducción” (Arellano y De Gennaro, 2002: 6). Por otra parte, Germán Abdala recordaba de un modo diferente el triunfo de Menem en 1989: “Nosotros en serio nos creímos lo del 14 de mayo, para nosotros [...] no era un simulacro electoral donde había que buscar la voluntad de la gente y después hacer otra cosa [...] Lo que aquí ha ocurrido es que hubo una defraudación popular” (citado en Giles, 2000: 196).

14 Las posiciones de resistencia que abogaban por un retorno a la tradición peronista también provenían del campo político-partidario. Darío Alessandro (padre) afirmaba en el encuentro de Villa María: “No representamos al peronismo disidente sino al verdadero peronismo” (*Clarín*, 16 de junio de 1990). Asimismo, uno de los cánticos coreados en el encuentro decía: “No queremos un partido/ un partido liberal/ queremos un movimiento/ nacional y popular” (*Clarín*, 17 de junio de 1990).

constituyendo un recurso a partir del cual legitimar la oposición frente al gobierno. No obstante, como podrá advertirse más adelante, el término *traición*, en tanto percepción de los protagonistas del proceso que aquí nos ocupa, no es expresión de una mera estrategia retórica, sino que atraviesa las acciones que el sector disidente emprende en los años noventa

Asimismo, quien encarnaba esa traición no demoró en definir la relación con la columna vertebral del movimiento peronista, dejando en claro quiénes serían los “enemigos” en aquel escenario político. Con estas palabras se expresa por entonces el presidente Menem:

Hay un sindicalismo progresista y de avanzada que acompaña al gobierno [...] Hay [también] un sindicalismo que espera; que como en el póker, está orejeando las cartas. Este no es el momento de tibios: a los tibios los vomita Dios, como dice la Biblia [...] Hay otro sindicalismo que está todavía pensando en 1945 y que es uno de los más férreos oponentes a este gobierno. Ese sindicalismo no sirve para este país (*Clarín*, 16 de junio de 1990).

Estas divisiones trazadas por Menem eran, en el tono confesional tan caro a su retórica, una muestra de que el peronismo se encontraba ahora ante una nueva realidad, y que su adecuación a las circunstancias era innegociable. Quienes decidieran destinar sus esfuerzos a revivir el pasado estaban “condenados” al fracaso, y por ende al confinamiento político.

Pero, lejos de que esos alineamientos sean reducidos a una disputa entre las alusiones a la traición que se hacían de un lado y las acusaciones sobre la existencia de una voluntad nostálgica destinada al fracaso que se esgrimían del otro, ellos dejan más bien traslucir el desdoblamiento que, según Carlos Altamirano (2001), ha recorrido al peronismo desde que la experiencia iniciada en 1945 fuera interrumpida en 1955. Ese desdoblamiento, arraigado en la cultura política peronista, alude a la existencia de un “peronismo verdadero” y un “peronismo empírico”. Al decir de este autor, el peronismo verdadero no es meramente una articulación retórica, aun cuando el presente es un tiempo que jamás llega a pertenecerle. Al peronismo verdadero le corresponde entonces el tiempo de la expectativa de un retorno y el del pasado, pero paradójicamente encuentra su motivo para perdurar en el “peronismo fáctico”¹⁵.

15 “El peronismo verdadero es inactual [...] Se trata de la inactualidad de una expectativa: el peronismo verdadero es una expectativa sobre las virtualidades del peronismo que constituyen su verdad. Si esa verdad hoy no se manifiesta [...] reprimida y extraviada por obra del peronismo fáctico, ella, sin embargo se ha mostrado plena en el pasado. El tiempo de la expectativa –el del retorno o el rescate– y el del pasado son los dos dominios temporales del peronismo verdadero. El presente es el tiempo que consume el peronismo empírico, cuyo reinado, aunque contingente, impide que la verdad del peronismo se consume” (Altamirano, 2001: 110).

Aun así, la comprobación de que el peronismo empírico es, como dice Altamirano, el peronismo a secas, no tardó en ser afrontada por quienes hasta ese momento habían depositado sus esfuerzos en revivir las “virtuales” virtudes del peronismo heredero de la experiencia del ‘45.

El punto de inflexión que condujo a esa comprobación estuvo dado por los resultados de las elecciones nacionales de septiembre de 1991. En esa ocasión, en la que se renovaron cargos legislativos y gobernaciones provinciales, el partido del gobierno emergió como ganador indiscutido¹⁶. La repercusión de estas elecciones, y las lecturas del escenario político que ellas suscitaron, no fueron ajenas al mundo sindical, y mucho menos a la atención de quienes habían privilegiado la oposición abierta a la política del gobierno. El significado que tuvieron esas elecciones para quienes encarnaban la resistencia queda plasmado en la reflexión que, años más tarde, haría Víctor De Gennaro:

El batacazo más grande se produce cuando Menem gana las elecciones en el ‘91. La CGT empieza a plantear la unidad. Ahí nosotros dijimos, “no, basta”. Además, esta crisis era muy profunda, no sólo en la Argentina, en el mundo. En el ‘89 el campo socialista se derrumbaba, y el retroceso de la clase trabajadora era mundial. Nos íbamos a casa o pateábamos el tablero y reconstituíamos desde una nueva identidad [...] Siempre hay miedos [...] que se arrastran desde otros tiempos. La derrota del 24 de marzo [de 1976] fue una derrota por la fuerza: nos habían matado, nos habían reprimido, pero no nos habían convencido nunca. A mí, en el ‘91, eso me cayó. Cuando se votó a Menem por segunda vez, fue la primera vez que los argentinos votaron contra su destino. Todas las elecciones anteriores del siglo, cuando el pueblo argentino pudo votar, siempre votó por el que quería, si había uno bueno, como en el ‘12 o con Perón en el ‘46 y en el ‘52, o por el que no era el candidato del enemigo: Frondizi contra los “otros”, el voto en blanco, en un momento determinado [...] En el ‘89 se votó a Menem que prometía otra cosa. Pero en el ‘91 ya no había dudas: se votó a Menem, a Cavallo, a las privatizaciones, la entrega. La crisis había penetrado en nosotros. Y ahí empecé a dudar (Arellano y De Gennaro, 2002: 6-7)¹⁷.

16 En 1991, en la elección de renovación de la Cámara de Diputados de la Nación, el PJ alcanzó el 40,72% de los votos a nivel nacional, en tanto que la UCR obtuvo el 29,02% (ver <www.observatorioelectoral.org>).

17 La alusión a la elección presidencial de 1912 probablemente sea un error de imprenta o del propio entrevistado al querer referirse a la elección de Hipólito Yrigoyen en el año 1916.

Las palabras de Víctor De Gennaro iluminan cómo las elecciones de 1991 derivaron en un replanteo de la estrategia basada en la resistencia. Uno de los interrogantes que se le presentaba al sindicalismo disidente consistía en explorar qué sentido tenía continuar la reivindicación de un “peronismo verdadero” cuando el electorado avalaba al “peronismo empírico”. La lucha justificada en la denuncia de una traición que oponía la voluntad popular con la de quien en 1989 se había convertido en su representante se desvanecía ante los contundentes resultados electorales, que eran interpretados como la legitimación del programa económico iniciado dos años antes.

Si de todo esto se desprendía que la lucha de oposición basada en la resistencia había llegado a su fin, todavía quedaba por dilucidar cuál sería en adelante el campo en el que se libraría la oposición al “modelo” puesto en marcha¹⁸.

Es en el encuentro de organizaciones y dirigentes sindicales realizado el 17 de diciembre de 1991 en la localidad bonaerense de Burzaco donde se comenzaría a delinear ese campo.

El encuentro, convocado con el nombre de “Debate para la organización de los trabajadores”, y realizado no casualmente tras las elecciones del mes de septiembre, congregó a dirigentes y sectores sindicales peronistas y no peronistas¹⁹. El debate concluyó con la determinación de la necesidad de construir un espacio sindical escindido de la CGT, que representara un nuevo modelo sindical que, a largo plazo, debía contemplar la construcción de un movimiento político y social²⁰.

18 Germán Abdala –diputado nacional y dirigente de ATE– señalaba la necesidad de romper con el pasado de esta manera: “Mi visión hoy es que el Grupo de los Ocho y el peronismo disidente han cumplido una etapa, de la cual queda como autocrítica que no fuimos capaces de construir una oposición al modelo liberal-menemista desde adentro. Nosotros quisimos ser la conducción del verdadero peronismo, pero [...] hemos perdido. En las elecciones de 1991 quedó demostrado que el Partido Justicialista como estructura es lo que hoy gobierna el país, y el Peronismo que intentamos expresar es ya sólo un dato histórico [...] Hay que construir una nueva alternativa popular en la Argentina que sintetice a todos los sectores. Un nuevo partido o frente que rompa con el bipartidismo [...] Una alternativa con diversos sectores políticos y con organizaciones sociales, como el nuevo movimiento obrero (grupo de Burzaco, juntas barriales, jubilados y otros)” (*Página/12*, 13 de junio de 1992).

19 Entre ellos se encontraban ATE, CTERA, FOETRA (delegación Capital Federal), SUPE (delegación Comodoro Rivadavia), UOM (delegación Villa Constitución), CGT (regional San Lorenzo), SUTE, APA, SUTEBA, UTPBA, SUTNA, SAON, SICA, FJA.

20 “Somos conscientes que la posibilidad de una economía al servicio del hombre fundada en niveles crecientes de autonomía y justicia social no constituye un problema económico [...] La situación que afronta nuestra comunidad ante la destrucción de muchas de sus organizaciones políticas y sociales nos plantea el desafío de concretar nuevas formas de construcción política y social capaces de reinstalar el poder de los trabajadores y el pueblo en el escenario nacional [...] El viejo modelo sindical sostenido por su dependencia del poder político y su grado de complicidad con el poder económico no sirve para canalizar las demandas de sus representados ni defender sus conquistas e intereses [...] Este encuentro de organizaciones sindicales se propone realizar un plan de trabajo que amplíe el debate y las propuestas desde una corriente sindical y hacia un movimiento político-social” (CTA, 1991).

Ese modelo sindical debía basarse en cuatro prácticas fundamentales que, en la visión de quienes las propugnaban, rompían con el viejo sindicalismo. La primera de las prácticas enumeradas consistía en la autonomía sindical con respecto al Estado, los patrones y los partidos políticos. La segunda práctica remitía al establecimiento de la democracia sindical, que se expresaría principalmente a través del voto directo como mecanismo de designación de autoridades. En tercer lugar se reconocía la prioridad de promover la apertura del nuevo espacio a otros sectores de la sociedad, y en especial a aquellos que eran parte de los excluidos del “modelo”. La última práctica que se mencionaba consistía en la revalorización de la ética gremial, en rechazo de actos de corrupción y posturas que terminaran perjudicando la situación de la clase trabajadora en nombre de un supuesto pragmatismo como fundamento de la negociación.

Con posterioridad al encuentro de Burzaco tuvo lugar la unificación de la CGT. A esta instancia se llegaba como consecuencia de dos hechos que estuvieron en la base de la debilidad de la CGT Azopardo. Por un lado, este grupo había perdido fuerza debido a que varios de los sindicatos que lo integraban se desplazaron hacia las filas de la CGT San Martín, o retiraron su apoyo. El alejamiento más significativo fue el de la UOM, ya que su ausencia minó una parte importante de la fuerza que podía ejercer Ubaldini en su enfrentamiento abierto a las políticas implementadas por el gobierno. Debilidad que se reflejó en el abandono de la posición confrontativa que hasta ese entonces sostenía Ubaldini²¹.

En segundo lugar, el triunfo de las elecciones de septiembre, como ya se señaló, fue decisivo para la revalidación de las políticas del gobierno, y para que este fuera reconocido como interlocutor por gran parte del sindicalismo. Pero las elecciones no sólo ratificaron la legitimidad del gobierno, sino que tuvieron un significado especial para los sectores del sindicalismo disidente. Por un lado, Ubaldini, que se había presentado como candidato en la provincia de Buenos Aires por afuera del Partido Justicialista, obtuvo resultados contundentemente negativos. Por otro, los sindicatos alejados de las filas ubaldinistas, entre los que se encontraban aquellos que posteriormente participaron de la convocatoria al encuentro de Burzaco, y que en abril de 1991 habían conformado el llamado ENSIPRON –Encuentro Sindical por un Proyecto Nacional– a través del cual apoyaron la candidatura de Oscar Alende para la gobernación de la

21 El abandono de la posición de cautela que mantuvo la UOM, tras el Congreso cegetista de 1989, se correspondió con la posición ambigua que siempre sostuvo y que le permitía no distanciarse por completo de ningún sector sindical. Aun así, este gremio era reticente a convertir demandas sectoriales en reclamos del conjunto del sindicalismo. Esto se evidenció cuando la UOM rechazó respaldar las protestas contra la privatización de ENTel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones), en apoyo a la delegación porteña de FOETRA.

provincia de Buenos Aires, cosecharon resultados igualmente desfavorables (*Clarín*, 19 de diciembre de 1991). No obstante, para muchos de los que participaron de esa experiencia, la derrota constituyó la revelación de que la búsqueda de la construcción de una alternativa al modelo en marcha no podía basarse exclusivamente en la competencia partidaria.

Tras el triunfo electoral, el gobierno tomó la iniciativa en determinadas áreas que afectaban intereses sindicales²², y por resolución del Ministerio de Trabajo quedó oficialmente reconocido que la CGT San Martín era la única confederación con derecho a usar esa sigla, ocupar el edificio de la calle Azopardo y ejercer las atribuciones que derivan de esa personería gremial (*Clarín*, 5 de noviembre de 1991).

Todas estas circunstancias condujeron al congreso unificador de Parque Norte que tuvo lugar el 26 marzo de 1992. En ese momento quedó también establecida la conformación de una conducción nacional colegiada, que contaría con cinco miembros que rotarían en el cargo de secretario general cada seis meses. Siguiendo estos lineamientos, los sindicatos de mayor gravitación consensuaron una lista de unidad, que colocaba al frente de la Secretaría General colegiada al dirigente de la Federación de Luz y Fuerza, Oscar Lescano²³. Más allá de la relativa independencia que este dirigente había mantenido con respecto a las dos CGT constituidas en octubre de 1989, en la Secretaría General predominaron los sindicatos más cercanos al gobierno nacional, al tiempo que los sectores más relegados fueron los ligados a Saúl Ubaldini y Luis Barrionuevo.

Días después de la celebración del congreso que selló la reunificación de la CGT, se desarrolló un nuevo encuentro de organizaciones sindicales en la ciudad de Rosario. En él participaron aquellos sindicatos que habían debatido a fines de 1991 en la localidad de Burzaco, y que no habían asistido al último Congreso de la CGT, en una decidida señal de autoexclusión.

22 En noviembre de 1991, el Poder Ejecutivo dictó los decretos 2.284/91 y 1.334/91. El primero contenía la desregulación de la economía, incluyendo allí el sistema de obras sociales; el segundo decreto condicionaba los aumentos salariales a los aumentos de productividad. Además, el Senado sancionó la Ley de Empleo, que era una iniciativa del Poder Ejecutivo. Frente a este panorama, comienza a gestarse la unidad sindical en el marco del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, previsto en la Ley de Empleo. Este Consejo, designado por el gobierno a propuesta de la CGT, se conformó con 16 sindicalistas de los cuales 10 eran aliados de Menem; 2 respondían a la UOM; 3 eran independientes, entre ellos, Armando Cavalieri (mercantil), Oscar Lescano (FATLyF) y Juan José Zanola (bancarios); y 1 respondía al "ubaldinismo" (*Clarín y La Nación*, 23, 26 y 27 de diciembre de 1991).

23 Con el nuevo estatuto, la CGT pasó de tener 20 secretarías a 40. Cada secretaría correspondería a un gremio. Así, los 40 sindicatos rotarían en la Secretaría General compuesta por 5 miembros. Este sistema buscaba evitar las disputas que desataron la ruptura de la CGT en 1989. La Secretaría General quedó integrada por Oscar Lescano, Aníbal Martínez (UOM), José Rodríguez, José Pedraza y Ramón Baldassini (FOECYT). A partir de allí, Ubaldini pasó a integrar la secretaría de Relaciones Internacionales (*Clarín y Página/12*, 26 y 27 de marzo de 1992).

Si algo había quedado claro de la experiencia de recuperar la tradición del peronismo resistiendo las políticas del gobierno, era que el camino para quienes no aceptaban esos lineamientos no podía pasar ya por la asunción de su condición de minoría al interior del movimiento obrero y, consecuentemente, la aceptación de una estrategia que privilegiara la espera y la construcción de una oposición interna en la CGT. Contrariamente, el encuentro de Burzaco constituyó la clausura definitiva de esa opción, al tiempo que la ausencia de esos sindicatos en el congreso cegetista de Parque Norte fue la confirmación de una decisión previamente tomada. El camino incierto que comenzaban a transitar algunos sindicatos opositores era el de la construcción de un espacio de los trabajadores que, como el debate de Burzaco había adelantado, debía asumir la superación de la experiencia peronista. El siguiente comentario de Claudio Lozano (ATE), resume este proceso:

Diría que todo el proceso que va desde los '80 hasta comienzos de los '90 está signado por una estrategia que piensa en términos de la recuperación del Peronismo y [...] el proceso de recuperación del Peronismo incluía el proceso de reconstrucción del movimiento sindical y de recuperación de la CGT [...] De alguna manera lo que [...] decreta el final de esta discusión es el techo de Ubalдини y la política de Menem. Menem es la clausura definitiva de cualquier perspectiva o intento de transformar el Peronismo en lo que alguna vez para algunos fue, si alguna vez se entendió que el Peronismo fue un movimiento que brindaba un cauce de transformación para el pueblo argentino. Lo que Menem termina de definir es que luego de la dictadura y de las transformaciones vividas, la historia era otra. Y a partir de allí comienza una nueva etapa que es empezar a explicitar otra estrategia de construcción política que implica la conformación de una nueva experiencia política [...] en todos los campos [...] Lo cual implicaba recrear formas organizativas que tuvieran que ver con la nueva realidad que presentaba la Argentina y sus sectores populares²⁴.

El encuentro realizado en la ciudad santafesina de Rosario en el mes de abril de 1992 fue un paso más en la *conformación de una nueva experiencia política*, que implicaba la construcción de un espacio sindical alternativo. La consigna del encuentro fue “concretar la unidad de los trabajadores antes que la unidad de las cúpulas”, en una alusión más que explícita al clima que había rodeado a la reciente reunificación de la CGT. El resultado del segundo encuentro fue la designación de una

24 Entrevista a Claudio Lozano realizada por la autora y Guillermo Dyszel, el 25 de abril de 2003.

Mesa Nacional Provisoria cuya función sería organizar un Congreso de los Trabajadores Argentinos para la conformación de un ámbito permanente de discusión sindical (CTA, 1992)²⁵.

Ese objetivo se concretó el 14 de noviembre de 1992 cuando se funda *el CTA* como Congreso de los Trabajadores Argentinos, ante la presencia de 2.600 delegados, y se firma una declaración de principios en la cual se establecen las características organizativas que asumiría el nuevo nucleamiento sindical²⁶.

De allí en más, los pasos dados se orientaron al logro de que ese nuevo espacio, cuya raíz se hallaba en los sindicatos, fuera reconocido oficialmente. Logro recién alcanzado con la elección de autoridades nacionales por medio del voto directo en el año 1995, la celebración del Congreso Nacional de delegados que en diciembre de 1996 resuelve que el Congreso de los Trabajadores Argentinos pase a denominarse Central de los Trabajadores; y, finalmente, con la resolución N° 325/97 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que aprueba la inscripción gremial de la CTA en el año 1997²⁷.

Ese reconocimiento no fue sino el resultado del derrotero seguido durante los años noventa, años que fueron, para quienes integraron esa central, sinónimo de “menemismo” y de concreción de un modelo económico y social neoliberal nacido bajo el régimen autoritario instaurado en 1976.

El par menemismo-neoliberalismo llevó así a un sector minoritario del sindicalismo a encabezar una articulación política que no aspiraba únicamente a representar una oposición a las *políticas* del gobierno, sino a buscar la superación de la institucionalidad y las prácticas sindicales asociadas a la experiencia peronista.

Esa búsqueda, que se tradujo en el alejamiento de un sector sindical de origen peronista de la estructura del Partido Justicialista, y en el resque-

25 La mesa provisoria fue integrada por Cayo S. Ayala (SAON), Víctor De Gennaro (ATE), Mary Sánchez (CTERA), Eduardo Otero (Federación de Vialidad Nacional), Elido Veschi (Asociación de Personal de Ferrocarriles), Eduardo Fernández Novoa (FJA), Pedro Wasiesjko (SUTNA), Roberto Miller (SICA), Alberto Piccinini (UOM Villa Constitución), Edgardo Quiroga (CGT San Lorenzo), Amancio Pafundi y José Zárate (Plenario de Organizaciones de Jubilados).

26 Recordando los encuentros de Rosario y Parque Sarmiento del año 1992, De Gennaro decía: “[En Rosario] pudimos constatar la necesidad que existía, para que todos los dirigentes [...] encontráramos una respuesta organizativa. La crisis de representatividad política, sindical y social de los trabajadores [...] no se resolvía juntando a secretarios generales [...] Allí se acordó construir una verdadera herramienta de los trabajadores y se convocó al primer Congreso de los Trabajadores Argentinos [...] Nos llamamos Congreso porque esa palabra da la idea de debate, de que estamos en construcción. No dijimos: ‘vamos a fundar la central de los trabajadores’; dijimos: ‘vamos a hacer el congreso de los trabajadores, que es algo en construcción’” (Rauber, 1998: 285). En adelante, se hará referencia a “la CTA” pese a que originalmente su nombre era “Congreso de los Trabajadores Argentinos”.

27 La CTA continúa reafirmando el derecho de libertad y pluralidad sindical ausente en la legislación argentina. Esta ausencia impide la formación de una confederación paralela a la CGT, y explica que, más allá de haber obtenido la inscripción gremial, la CTA no cuente aún con la personería gremial.

brajamiento de una concepción de unidad del movimiento obrero, marcó a su vez límites entre la CTA y otros grupos sindicales que, aun oponiéndose a la política económica menemista, no aceptaron esa doble ruptura, tal como lo revela el caso del Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA) surgido en el año 1994, posteriormente autodenominado CGT disidente, y actualmente al frente de la conducción de la CGT unificada en 2004²⁸.

LA CTA FRENTE A LAS POLÍTICAS MENEMISTAS

Las políticas de estabilización macroeconómica y de reformas estructurales han sido parte de la agenda del gobierno aun con anterioridad a la década del noventa. Sin embargo, ellas son, sin duda, un rasgo distintivo de la era menemista.

La búsqueda de la estabilización macroeconómica a partir del establecimiento de una política monetaria de cambio fijo en el año 1991, el vertiginoso ritmo de la privatización de empresas públicas, la eliminación de precios fijos y aranceles externos, y la concesión de servicios públicos son ejemplos puntuales de las políticas que marcaron los años que aquí nos ocupan. El conjunto de estas medidas expresó la voluntad política de propiciar el alejamiento del Estado de su rol de agente del desarrollo económico.

Como fue esbozado anteriormente, la CTA desplegó una tenaz oposición a estas políticas y al estilo de liderazgo que las acompañaba. La política y las *políticas* del menemismo fueron percibidas como la aplicación deliberada del “modelo neoliberal”. Esta sentencia trascendió, sin embargo, los límites de un diagnóstico de coyuntura, y representó un significativo en torno al cual se agregaron posiciones y se definieron respuestas visibles por parte de la Central. De esas respuestas se derivan dos aspectos clave: por un lado, la distancia existente entre la CTA y otras vertientes sindicales; y, por otro, los alcances que han tenido las prácticas organizativas sobre las cuales se erigió el proyecto de una *nueva experiencia política*, y en particular el principio de autonomía respecto de los partidos políticos.

Tres controvertidas áreas de políticas permiten rastrear los elementos antes señalados: la política de reforma laboral, la política de seguridad social y el conflicto en el área de educación²⁹.

28 El MTA se formó como una corriente interna de la CGT y opositora a su conducción, considerada menemista. Esta corriente nucleó fundamentalmente a los gremios del transporte (UTA y camioneros) cuyos principales referentes son Juan Manuel Palacios y Hugo Moyano. Asimismo, este sector volvió integrarse a la CGT en 1996, pero en el mes de junio de 1997, ante las nuevas negociaciones por la reforma laboral a las que estaban llegando los miembros de la CGT más dialoguistas con el gobierno, decide nuevamente separarse de la conducción de la CGT.

29 El concepto de reforma laboral sigue la definición de Etchemendy y Palermo (1998: 562-563), aunque con alguna modificación. Esa definición contempla tres dimensiones relativas a la reducción del “costo laboral”: la flexibilización asociada al derecho individual del trabajo, comprendiendo formas de contratación con plazos fijos, menor peso impositivo al trabajo,

La reforma laboral constituyó un paso más del gobierno en el camino de profundización de las reformas de mercado. Acorde con esta orientación, las medidas concernientes a dicha reforma se presentaron bajo la asunción de que las normas legales que regulaban el mercado de trabajo y los derechos colectivos de los trabajadores constituían obstáculos para la generación de puestos de trabajo y para el desarrollo económico. El contenido y las modalidades que asumió esa política fueron ocasionalmente percibidos como una señal de la fragilidad del sindicalismo y de su subordinación ante la presencia de un gobierno peronista.

Aun así, no fueron pocas las interpretaciones que atenuaron las visiones “decisionistas” y sugirieron, en cambio, el carácter negociado que caracterizó a la relación entre sindicatos, Gobierno y Poder Legislativo durante los años noventa (Etchemendy y Palermo, 1998; Murillo, 1996; 2000).

Si se presta atención a la reforma laboral, la revisión de algunos datos sobre producción legislativa y reglamentación corroboran la afirmación precedente. Concretamente, en el primer gobierno de Carlos Menem (1989-1995) sólo el 40,9% de los proyectos en materia laboral presentados por el Ejecutivo alcanzaron el carácter de ley³⁰. Es decir, sólo nueve proyectos de los 22 que ingresaron al Congreso fueron aprobados por esta institución³¹. Esta referencia cobra mayor significación

menores indemnizaciones por despido, movilidad funcional, flexibilidad en el pago de aguinaldos, menores costos por accidentes de trabajo, etc.; cambios relativos a los derechos colectivos del trabajo como la negociación colectiva descentralizada y eliminación de la ultraactividad; y asignaciones familiares, reducción directa de impuestos patronales a las obras sociales y desregulación del sector salud. En este artículo, la última dimensión incluirá únicamente los proyectos sobre asignaciones familiares, y el tema de las obras sociales será contemplado como parte de la política de Seguridad Social. Esta modificación no introduce cambios sustanciales, ya que Etchemendy y Palermo abordan el tema de las obras sociales en forma separada a la reforma laboral debido a que las iniciativas del Ejecutivo en esa materia no pasan por el Congreso. Por último, se incluye en reforma laboral proyectos menores que no implican necesariamente reducción del costo laboral, pero que afectan a los sindicatos. Por “conflicto en el área de educación” se entiende la conflictividad resultante de políticas como la Ley Federal de Educación, la Ley de Educación Superior y el nivel salarial docente.

30 Los datos del período 1989-1995 (hasta el 10 de diciembre de 1995) corresponden principalmente a Etchemendy y Palermo (1998). Los años restantes son una elaboración propia en base a datos de la Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación.

31 Los proyectos que se convirtieron en ley son: Ley Nacional de Empleo 24.013 (sancionada en noviembre de 1991); Ley 24.098 de Accidentes de Trabajo (noviembre de 1991); Ley 24.185 de Negociaciones Colectivas de Trabajo del Estado (noviembre de 1992); Ley 24.522 de Concursos y Quiebras (julio de 1995); Ley 24.557 de Modificación del Régimen de Accidentes de Trabajo (septiembre de 1995); Ley 24.465 de Modificación del Régimen de Contrato de Trabajo (marzo de 1995); Ley 24.467 de Régimen Laboral para Pymes (marzo de 1995); Ley 24.635 de creación del Instituto de Conciliación Obligatoria (octubre de 1996); Ley 24.714 de Régimen de Asignaciones familiares (octubre de 1996). Esta última ley, cuyo proyecto había sido presentado en agosto de 1995, fue vetada parcialmente por el decreto 1.165/95, y posteriormente debatida por el Congreso el 12 de marzo de 1997 (Etchemendy y Palermo, 1998; Dirección de Información Parlamentaria).

si se tiene en cuenta que el porcentaje de proyectos sancionados sobre cuestiones que remitían a la política de privatizaciones fue del 90% en ese mismo período (Etchemendy y Palermo 1998: 564)³².

En el segundo gobierno de Menem (1995-1999) fueron presentados cinco proyectos de reforma laboral, de los cuales sólo dos se convirtieron en ley; es decir, el 40% de los proyectos elaborados por el Poder Ejecutivo. La primera de esas leyes correspondía al proyecto de Reforma Laboral que comenzó a ser considerado en el Congreso Nacional el 13 de mayo de 1998, y fue aprobado bajo la Ley 25.013, el 2 de septiembre de ese mismo año³³. La segunda ley tenía un carácter netamente sectorial, y consistía en el proyecto de Ley Marco de Regulación del Empleo Público, presentado por el Poder Ejecutivo en agosto de 1997, y sancionado recién en septiembre de 1999.

La ley de reforma laboral de 1998 es importante atendiendo a dos cuestiones fundamentales que hacen a su contenido y a la estrategia por medio de la cual se llegó a su aprobación. En cuanto a la primera cuestión, la reforma contemplaba la introducción de amplias pautas de flexibilización laboral. Este avance no solamente requirió un largo proceso de negociación con los grupos de interés –sindicatos y organizaciones empresarias–, sino que incluyó el fracaso de dos proyectos anteriormente presentados a comienzos de 1996³⁴. La negociación que posibilitó la aprobación de la ley transitó desde la amenaza de instrumentar un decreto de necesidad y urgencia, a su efectiva concreción³⁵. En rigor, en diciembre de 1996, el presidente Menem había dictado tres decretos de flexibilización laboral ante la ausencia de una sanción legislativa. Estos decretos fueron, en realidad, utilizados para presionar el tratamiento legislativo de la flexibilización laboral, ya que un posterior decreto de enero de 1999 (50/99) derogaría dos de los decretos de 1996

32 Para un análisis detallado de la negociación sobre la reforma laboral en el primer gobierno de Menem, ver Etchemendy y Palermo (1998).

33 Se trata del proyecto de Reforma Laboral del Poder Ejecutivo Nacional correspondiente al expediente 0016-PE-98.

34 Se trata de los proyectos 0046-PE-96 sobre Convenciones Colectivas de Trabajo, y especialmente del proyecto 0053-PE-96, sobre nuevas modalidades de contratación, presentado en noviembre de 1996.

35 Etchemendy y Palermo señalan que con excepción del decreto 2.184/90 que reglamentaba el derecho de huelga, las iniciativas del Ejecutivo que fracasaban en el trámite parlamentario no eran legisladas por decreto, lo que sugería una disposición del gobierno a alcanzar un consenso con el Congreso en este tema. Sin embargo, hubo dos medidas que no habían tenido una previa iniciativa legislativa y que afectaron los intereses sindicales. Entre ellas, la que más afectó al sindicalismo fue el decreto 1.334/91 que estableció que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) no homologaría aumentos salariales que no se atuvieran a pautas de productividad. El decreto 470/93 conservó esta pauta para los aumentos salariales, mientras se procuró nuevamente bajar el nivel de la negociación colectiva, permitiendo, sin homologación por parte del MTEySS, los convenios de empresa (Etchemendy y Palermo, 1998: 565-566).

y modificaría el tercero, argumentando que la sanción de la Ley 25.013 había puesto fin a la anomía existente³⁶.

Las idas y vueltas que rodearon el trámite parlamentario de la citada ley también encendieron la llama en el seno del sindicalismo. Como consecuencia de esto, los díscolos gremialistas del MTA, que poco tiempo antes habían vuelto a las filas cegetista tras negociar un espacio en su cúpula, se alejarían nuevamente de ella. La CTA, por su parte, mantendría en este caso su intransigente posición de rechazo absoluto a las nuevas disposiciones impulsadas por el menemismo; al tiempo que el arco opositor contaría también en esta ocasión con la presencia de las siempre ambiguas 62 Organizaciones, con Lorenzo Miguel a la cabeza.

Pero el camino de la reforma laboral recién aprobada no acabó allí. El Poder Ejecutivo recurrió una vez más a sus facultades, y vetó ciertos puntos de la ley que, no casualmente, habían conformado los “premios” otorgados al sindicalismo negociador representado por la CGT oficial. Específicamente, se trataba del monopolio de las negociaciones colectivas por rama de actividad, recurso que el conjunto del sindicalismo se resistía a resignar y que con el veto presidencial podrían ser resueltas por empresa (*Página/12*, 23 de septiembre de 1998).

Al considerar todo el ciclo menemista (1989-1999), puede observarse que el 81,5% de los proyectos en materia de reforma laboral fueron presentados en la primera gestión de gobierno, y sólo el 40,7% de los mismos llegaron a ser sancionados. En valores absolutos esto representó un número de 11 leyes sancionadas sobre un total de 27 proyectos presentados por el Ejecutivo nacional.

36 Los decretos dictados en diciembre de 1996 son el 1.553, 1.554 y 1.555. El decreto 1.553/96 facultaba al MTEySS a revocar la homologación de una convención colectiva de trabajo cuando: “a) sus cláusulas se opongan a las normas legales dictadas con posterioridad; b) exista declaración de ilegalidad dictada para algunas de sus cláusulas; y c) habiendo vencido el término pactado, considera que su vigencia no reúne ya los requisitos del artículo 4° de la Ley 14.250 (t.o. Decreto 108/88)”. El decreto 1.554/96 modifica el decreto 200/88 de reglamentación de la Ley 23.546 sobre procedimiento para la negociación colectiva, y establece que en caso de desacuerdo entre las partes para determinar el ámbito funcional, personal y territorial para la negociación, tal decisión quedará a cargo del MTEySS. El decreto 1.555/96 reglamentaba disposiciones sobre Negociaciones Colectivas para Pymes (Ley 24.467), descentralizando la negociación y favoreciendo a la entidad sindical de menor grado, así como el llamado a negociación colectiva en caso de que cualquiera de las partes así lo solicite independientemente del convenio que rija. El decreto 50/99 derogó los decretos 1.553 y 1.555, y modificó el decreto 1.554, retirando la facultad que allí se le daba al MTEySS. Esto se justificó argumentando que el Poder Legislativo había sancionado la Ley 25.013, quedando así cubierta la ausencia de legislación. Esos decretos fueron también declarados inconstitucionales por algunos jueces de primera instancia. La presentación de causas por inconstitucionalidad al Poder Judicial era, en muchas ocasiones, la estrategia adoptada por las organizaciones sindicales, ya que esto permitía que en los hechos se suspendiera la aplicación de la medida hasta que exista una sentencia firme, ampliando así el margen para la negociación.

Estas observaciones sobre las dos presidencias de Menem refuerzan los argumentos que Etchemendy y Palermo formularon sobre la reforma laboral durante el primer gobierno menemista, a saber: que el caso argentino demostraba que la reforma laboral se concretaba sólo cuando los cambios eran previamente acordados y diseñados en conjunto con las organizaciones de interés (Etchemendy y Palermo, 1998: 560).

Los autores señalan que el bloqueo parlamentario de las políticas de reforma que se producía cuando las mismas no eran negociadas, se debía en gran parte a que el sindicalismo había logrado retener el control de la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, incluso en circunstancias en las que la participación de los legisladores de extracción sindical había disminuido desde el retorno a la democracia (Etchemendy y Palermo, 1998: 577)³⁷.

Al seguir el derrotero de la política de seguridad social, es posible reconocer algunas similitudes con el proceso de reforma laboral. La seguridad social presenta un doble componente, ya que involucra tanto la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, como el sistema de seguro social de salud (obras sociales).

La discusión del proyecto de reforma previsional que impulsaba el Ejecutivo adquirió una fuerte repercusión en la opinión pública, no sólo por las oposiciones internas, y de todo el espectro político, sino porque además involucraba a una franja de la población –los jubilados– que desde hacía tiempo padecía las consecuencias de un sistema que atravesaba continuas crisis de financiamiento. Una singularidad de la dinámica que adquirió el tratamiento de este proyecto fue que el Poder Ejecutivo encontró dificultades para recurrir al dictado de decretos como estrategia de presión y mecanismo legislativo, por tratarse de un tema que, de antemano, suponía la necesidad de un grado de legitimidad y de seguridad jurídica que sólo una ley podía otorgar (Alonso, 2000: 82).

La gravitación de los sindicatos en el pasaje de un sistema de reparto que databa de mediados del siglo XX, a un sistema mixto que tenía como propósito privilegiar un régimen de capitalización individual, fue clave. Sin entrar en una descripción pormenorizada de la negociación, baste subrayar que el apoyo político sólo se logró cuando se permitió que los sindicatos pudieran obtener réditos del nuevo sistema,

37 La participación sindical en la Cámara de Diputados de la Nación disminuyó en las dos últimas décadas. En el período 1983-1985, el porcentaje de diputados de extracción sindical era del 14,96%, en 1989-1991 caía al 9,44%, en 1991-1993 descendía al 8,95%, en 1993-1995 era del 6,61%, en 1995-1997 subía al 7,39%, en 1997-1999 era del 7%, para 1999-2001 era del 7,78% y, finalmente, en 2001-2003 fue del 6,61% (Gutiérrez, 2001: 99; Dirección de Información Parlamentaria del Congreso Nacional). Agradezco a Ricardo Gutiérrez la información ofrecida para elaborar y actualizar estos datos.

a través de su participación en las futuras Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJPs) (Alonso, 2000: 91).

Pero si la negociación fue la actitud que siguió el sector sindical agrupado en la CGT oficial, que reunía a los gremios de producción y servicios más importantes, tanto la CTA, como el MTA desde 1994, mantuvieron su posición contraria a dicha reforma.

La CTA, en particular, se pronunció a través de una campaña que convocaba a reunir un millón de firmas con el fin de solicitar el llamado a un plebiscito para que “la Sociedad” fuera consultada acerca de la reforma previsional. La llamada “Campaña por el millón de firmas”, que se llevó adelante el 10 de marzo de 1993, contó con el apoyo de gran parte del arco político opositor al gobierno –especialmente, el Frente Grande, el socialismo y el radicalismo–, así como de otras organizaciones sociales. El dispositivo discursivo que articuló el reclamo no fue para nada casual; la apelación a la necesidad de propiciar la participación ciudadana en el curso de las políticas sociales, resultando de ello la entrega de 980 mil firmas a los diputados nacionales que conformaban el Grupo de los Ocho, coincidía y reforzaba la retórica democrática que la CTA buscaba consolidar como sello propio en señal de alejamiento de los acuerdos extrainstitucionales que eran parte de la relación entre sindicatos y gobierno. Esa campaña fue la primera acción visible que emprendía el emergente sector sindical, y su despliegue de alcance nacional marcaría una estrategia que se repetiría con la “Marcha Federal” en julio de 1994 y la “Marcha Grande”, entre julio y agosto de 2000.

El sistema de obras sociales fue igualmente blanco de las medidas del gobierno y, a partir de 1992, constituyó un punto de fricción con los sindicatos. La tensión se debía no sólo al hecho de que las obras sociales sindicales conformaban el sector mayoritario a nivel nacional, de acuerdo al número de entidades y la población cubierta, sino también a que ellas representaban una fuente de financiamiento de los sindicatos y un mecanismo estratégico para encaminar acciones colectivas (Alonso, 2000: 204).

El objetivo de máxima del gobierno era desregular el mercado del seguro de salud, permitiendo la competencia tanto entre las entidades sindicales, como entre estas y las empresas de medicina privada. Según Alonso (2000), los reiterados intentos encaminados hacia ese objetivo, y las limitaciones que hallaron en el camino, respondieron en gran medida a las tensiones propias de la coalición de gobierno menemista. Coalición que impulsaba políticas que propiciaban el debilitamiento de los actores colectivos, pero que a la vez no podía prescindir del apoyo político de los sindicatos. De ahí que el gobierno haya utilizado, en reiteradas oportunidades, la amenaza de la desregulación total del sistema

como herramienta para lograr la aceptación por parte del sindicalismo de algunas reformas en otras áreas, como era el caso de la reforma laboral. Más allá de esto, en los diez años que se mantuvo en el poder, el gobierno menemista nunca avanzó hasta el punto de convertirse en el artífice de la abierta competencia entre las obras sociales sindicales y el sector privado, de modo tal que sólo llegó a implementar una desregulación acotada³⁸.

La postura de la CTA frente al proyecto de desregulación del sistema de obras sociales que impulsaba el gobierno reviste ciertas particularidades. El proyecto fue recibido como un ejemplo más de la fe “neoliberal” del gobierno, así como de su afición a las recomendaciones de los organismos de crédito internacional, los cuales eran parte de esa política en la medida en que estaban dispuestos a apoyar el proceso de reconversión de las obras sociales. Sin embargo, la disposición que estableció la desregulación acotada del sistema, y dio lugar a que los trabajadores pudieran elegir entre un abanico de obras sociales sindicales, favoreció indirectamente la posición política y organizativa de la CTA. A partir de esa medida se abrió la posibilidad para que los gremios que integraban la Central concentraran los aportes de sus beneficiarios en la obra social de un sindicato que no estuviera enrolado en la CGT oficial. De allí en más, entonces, los trabajadores estatales afiliados a ATE podrían prescindir de derivar obligatoriamente sus aportes a la obra social de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), estrechamente vinculada al menemismo³⁹.

El 2 de abril de 1997 se inició una etapa clave en la relación entre la CTA y el gobierno nacional. Ese día se erigió frente al Congreso Nacional una Carpa Blanca destinada a albergar a docentes de todo el país, quienes en reclamo de una recomposición salarial emprendieron una campaña de ayuno voluntario. La protesta, que se prolongó durante mil días (hasta el 30 de diciembre de 1999), simbolizó la oposición más

38 Para un análisis detallado de la política sobre obras sociales, ver Alonso (2000).

39 Según un artículo publicado en *Página/12* (24 de agosto de 1997), la mayoría de los gremios opositores debieron adaptarse a las nuevas condiciones por motivos financieros y políticos. Una de las alternativas que siguieron los gremios de la CTA fue concentrar los aportes de sus beneficiarios en una sola obra social, específicamente la del personal aeronáutico (OSPA). Esta entidad aglutinó las contribuciones de las seccionales que se apartaron de la CGT y de afiliados individuales de gremios cegetistas y del MTA. En agosto de 1997, OSPA recibía el aporte de los trabajadores de 75 gremios, lo que duplicó el número de afiliados. Según el ranking de traspasos, durante el período enero-abril de 1997, OSPA ocupaba el quinto lugar, con 4.200 nuevos aportantes, y era la única obra social de las ubicadas en los primeros lugares que no había acordado la reconversión del Banco Mundial o terciarizado tareas con prepagas ni grupos de gerenciamiento. Asimismo, según el citado diario, OSPA estableció una medida interna de transparencia por la cual todas sus autoridades debían ser elegidas, en el futuro, por el voto directo de los beneficiarios.

significativa de la CTA frente al gobierno de Carlos Menem (*Página/12*, 31 de diciembre de 1999).

El reclamo salarial impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), uno de los gremios mayoritarios de la CTA, había sido una constante desde comienzos de la década del noventa, y aun con anterioridad a esta. Pero durante los años noventa, a la disconformidad del gremio docente por los niveles salariales se sumó su decidida oposición a las políticas de reforma educativa que alentó el gobierno nacional. Entre ellas, se destacan la Ley Federal de Educación (N° 24.195), sancionada el 14 de abril de 1993, y la Ley de Educación Superior (N° 24.521), aprobada por el Congreso Nacional el 20 de julio de 1995. Estas leyes suscitaron un extendido debate público y eran, en opinión de quienes las rechazaban, la manifestación de la voluntad neoliberal de un gobierno que se proponía “privatizar” la educación pública, siguiendo ciegamente los lineamientos económicos de los organismos de crédito internacionales, específicamente del Banco Mundial y el FMI⁴⁰.

El reclamo de los sectores docentes expresado en la Carpa Blanca se deslizó en dos frentes articulados por una lógica que implicaba la nacionalización del conflicto. Por un lado, se abrió un frente político-institucional que tenía como objetivo la negociación con el gobierno y con las fuerzas políticas presentes en el Parlamento, apuntando así a que el reclamo salarial tuviera una respuesta consensuada a través de una ley nacional. El segundo frente –el social– tenía por finalidad articular el apoyo público de amplios sectores de la sociedad, a partir de identificar la demanda salarial docente con el resguardo de la educación pública, definida esta como un bien nacional. Los carteles que portaban los ayunantes con la inscripción “hoy somos todos docentes”, o la alusión a la Carpa Blanca de la “dignidad docente”, eran caracterizaciones a las que difícilmente algún sector social o político podía oponerse sin ser calificado como un “enemigo” de la educación pública.

La Carpa Blanca supo ser, a la vez, una protesta que articuló diferentes demandas, trascendiendo los intereses sectoriales que la motivaron y constituyéndose, de algún modo, en un *significante vacío* (Laclau, 1996; 2005). Muestra de ello es que en ese espacio se reclamó el esclarecimiento del asesinato de un periodista gráfico, se elevaron demandas sociales desatendidas por el Estado, e incluso fueron cobija-

40 Los gremios docentes enfatizaban la relevancia de participar en la discusión sobre reformas del sistema educativo, aun cuando estas no involucrasen cambios económicos del sector. De ahí que Marta Maffei, secretaria general de CTERA, afirmara en más de una ocasión que “no puede haber reforma educativa sin consenso docente” (*Página/12*, 3 de mayo de 1997).

das expresiones de disconformidad por parte de líderes sindicales “no escuchados” por el gobierno nacional⁴¹.

La negociación político-institucional recibió el apoyo explícito de la Alianza, la coalición política integrada por la UCR y el Frente País Solidario (FREPASO) de cara a las elecciones legislativas de 1997, y que luego se proyectara para las elecciones presidenciales de 1999. El respaldo de la Alianza al gremio docente se reflejaba en los medios de comunicación y en el ámbito parlamentario, en donde los diputados de esa fuerza política fueron voceros del reclamo gremial. Este apoyo se explicaba no sólo por el hecho de que la Alianza se presentaba como la oposición y antítesis del menemismo, sino también porque algunos de los diputados pertenecientes a los partidos que integraban esa coalición estaban vinculados a CTERA y a la CTA⁴².

Tras largos embates con el gobierno, el 18 de octubre de 1998 se sancionó la Ley del Incentivo docente, creando un impuesto y un fondo especial destinados a la recomposición de los niveles salariales de los maestros. Si bien la ley apareció como un triunfo exclusivo de la oposición sindical y político-partidaria, el PJ no fue del todo ajeno a ese resultado. Una de las fases decisivas del trámite parlamentario tuvo lugar en el espacio de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, cuyo dictamen orientaría la votación en el recinto del Congreso. En las discusiones que se dieron en esa Comisión fueron determinantes las negociaciones que llevaron adelante algunos integrantes del Consejo Directivo de CTERA de origen peronista, para lograr el apoyo de ciertos diputados justicialistas⁴³.

De todas formas, la protesta de los maestros no llegó a su fin con la sanción de la ley. Los inconvenientes que se sucedieron para su aplicación prolongaron la continuidad de la Carpa Blanca hasta la asunción del gobierno de la Alianza en diciembre de 1999, sin que esto evitara

41 La Carpa Docente atrajo al máximo dirigente metalúrgico, Lorenzo Miguel. Su acercamiento “solidario” a los ayunantes se produjo en los días en que la CGT oficial acordaba con el gobierno los lineamientos del proyecto de Flexibilización Laboral que sería remitido al Congreso Nacional y al que se oponían el MTA, la CTA y la UOM. Las palabras que el líder sindical dirigió a los docentes resultaron implícitamente un mensaje para el gobierno en señal de desacuerdo con las negociaciones sobre el tema laboral. Miguel decía, por entonces: “Jamás creíamos que un gobierno democrático y constitucional no escuchara a los trabajadores. La lucha de los señores maestros nos [...] hacen redoblar la lucha [...] Hay una deuda y una falta muy grande con la educación y las deudas hay que pagarlas... por eso en las luchas estaremos siempre juntos” (*Página/12*, 27 de junio de 1997).

42 En el trámite parlamentario de la Ley Federal de Educación, Alfredo Bravo, diputado socialista de origen sindical, firmó junto con Carlos “Chacho” Álvarez, uno de los tres dictámenes de minoría que se elaboraron en la comisión de educación de la Cámara de Diputados en rechazo al proyecto de ley que auspiciaba el gobierno (*Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación*, 26 y 27 de agosto de 1992: 2.137).

43 Según una dirigente del Consejo Directivo Nacional de CTERA, entrevistada por la autora el 5 de diciembre de 2003, la indisciplina partidaria de un diputado del PJ definió la aprobación del dictamen de la Comisión de Educación y derivó en la sanción de la ley.

posteriores reclamos para el efectivo cumplimiento de lo acordado con las nuevas autoridades.

El despliegue de grandes marchas y campañas de alcance nacional fue, pues, una modalidad de acción distintiva de una Central en formación que carecía de amplios recursos económicos, políticos e institucionales. Recursos que remiten a la capacidad de la Central de influir directa o indirectamente en áreas de toma de decisiones que resultaran relevantes para sus intereses sindicales.

En este sentido, cabe consignar que si bien la CTA ha propugnado un modelo de sindicalismo independiente de los partidos políticos, la cantidad de diputados nacionales vinculados a ella, y en especial a su conducción, ha aumentado de uno a seis entre 1989 y 2003. Hecho más que significativo si se considera que la representación sindical en el Congreso ha seguido el camino inverso⁴⁴.

Aunque la presencia de diputados de origen sindical no implica, claro está, una correspondencia entre las decisiones de estos y los intereses de su organización aun así es interesante analizar qué carácter ha asumido dicha participación, prestando atención a cuáles han sido las comisiones parlamentarias de las que formaron parte los diputados cercanos a la CTA.

Al observar la ubicación de estos diputados, surge que no ha habido una tendencia a privilegiar la participación en la Comisión de Legislación del Trabajo en tanto espacio clave para influir en el diseño y modificación de la política laboral. De ello se deriva, a su vez, que la capacidad de este sector sindical para oponerse o influir en el tratamiento de los proyectos de reforma laboral durante el menemismo y el gobierno de Fernando de la Rúa fue débil, a pesar del aumento del número de diputados pertenecientes a sus filas⁴⁵.

44 Aunque para el período legislativo 1989-1991, la CTA no había nacido, Germán Abdala y Carlos Custer eran los únicos diputados de extracción sindical (ATE) ligados a los gremios que luego formarían la CTA. En el período 1991-1993, los diputados ligados al CTA eran dos, para 1993-1995 era uno, para 1995-1997 eran cuatro, entre 1997-1999 eran cinco, en 1999-2001 eran siete, y finalmente en 2001-2003 fueron seis. En diciembre de 2003 se incorporaron a la Cámara de Diputados dos dirigentes de primera línea de la CTA: Marta Maffei como representante de Alternativa por una República de Iguales (ARI) por la Provincia de Buenos Aires; y Claudio Lozano (Fuerza Porteña), hasta ese momento Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA.

45 A partir de la composición de la Comisión de Legislación del Trabajo (LT) de la Cámara de Diputados de la Nación entre los años 1989-2003, se observa que para el período 1989-1991 el sector sindical que luego conformaría la CTA no contaba con ningún representante en esa comisión. En el período 1991-1993, uno de los diputados ligados a la CTA, Germán Abdala, integra la Comisión de LT y ocupa el cargo de secretario de la misma hasta el momento de su fallecimiento en 1993, pero sin la presidencia o la vicepresidencia de la comisión. Entre 1993-1995 y 1999-2001, ninguno de los diputados ligados a la CTA integró la Comisión de LT. Entre 1995-1997 y 1997-1999, la diputada Mary Sánchez (CTERA) participó de esa comisión. Entre 2001 y 2003 sólo uno de ellos la integró, específicamente el diputado Alberto Piccinini (ARI). Sin embargo, se constató que todos los diputados ligados a la CTA integran comisiones relacionadas con el sector gremial de pertenencia.

Pero si el principio de autonomía de los partidos políticos no ha significado que la CTA reniegue de la participación electoral y partidaria, queda aún por dilucidar qué sentido ha adquirido entonces esa máxima durante la década del noventa.

Un modo de iluminar este punto es observar cuáles han sido los partidos políticos en los que han participado los diputados de origen sindical ligados a la CTA. Significativamente, casi la totalidad de ellos ha alcanzado ese cargo a través de estructuras partidarias que no eran las del PJ. Entre las excepciones más destacadas se encuentra el caso del diputado peronista Germán Abdala quien, tras acceder a esa banca a través del PJ, se alejó de sus filas al producirse las reformas económicas que iniciara el menemismo⁴⁶.

Asimismo, el apoyo mutuo entre la CTA y el Frente Grande, primero; con el FREPASO, después; y a partir de 1997, con la Alianza, no se tradujo en un compromiso “incondicional” con la gestión de gobierno que esa coalición emprendió a fines de 1999. La ausencia de un respaldo incondicional, que puede ser entendida como una actitud autonómica, quedó reflejada en varias de las posiciones críticas que adoptó la CTA durante los primeros meses de la gestión aliancista. Un ejemplo de ello fue la convocatoria a una huelga nacional apenas asumido el nuevo gobierno, motivada por el conflicto social y los episodios de represión que se registraron en la provincia de Corrientes, que derivaron en la intervención federal de la misma. Esa huelga, que careció de una adhesión significativa al no contar con el respaldo de la CGT oficial y del núcleo disidente encabezado por el sindicalista Hugo Moyano, sin embargo, expresó el objetivo de la Central de no convertirse en la “CGT oficial” de la Alianza. Otras muestras de autonomía fueron el rechazo a la controvertida Ley 25.250 de Reforma Laboral sancionada a mediados de 2000, el cuestionamiento a la designación de ciertos ministros del gabinete nacional, como ocurrió con Juan José Llach en el área de Educación, y la convocatoria a formar un Frente Nacional Contra la Pobreza por la Producción y el Trabajo (FRENAPO). Este Frente, convocado por la CTA a comienzos de 2001, combinaba la denuncia de la inequitativa distribución del ingreso con una propuesta de “shock redistributivo” que explícitamente invertía la consigna que por entonces enarbolaba el gobierno de impulsar un “shock de confianza” dirigido al mercado y a los organismos de crédito internacionales a partir de políticas de ajuste fiscal. Acorde con ello, el plan de acción comprendía articular la partici-

46 El resto de los diputados alcanzaron bancas nacionales por: la Unidad Socialista, Alfredo Bravo en 1991-1993; el FREPASO, Marcela Bordenave y Mary Sánchez; la Alianza, Jorge Giles y Luis Brandoni; y, en 2001, por la Unidad Socialista, Ariel Basteiro y por el ARI, Eduardo Macaluse, Elsa Quiroz, Marcela Bordenave y Alberto Piccinini.

pación de “diferentes actores sociales y políticos”, y la puesta en marcha de un movimiento para realizar una consulta popular que legitimara, a través de ese mecanismo de democracia directa, la implementación de un seguro de empleo y formación para jefes y jefas de familia, y una asignación universal por hijo.

Más allá de las evidencias sobre la posición crítica de la CTA frente al gobierno de la Alianza, no deja de ser cierto que la vinculación al sistema partidario y al juego de la política electoral pone de algún modo en cuestión el principio de autonomía partidaria erigido por la Central, especialmente en la medida en que esa pauta de acción no ha sido sinónimo de renuncia a la posibilidad de influir sobre las instituciones de gobierno o los partidos políticos. Esta constatación plantea entonces dos alternativas interpretativas: subrayar las contradicciones entre práctica y retórica observadas a través de las distancias existentes entre las propuestas fundacionales de la CTA y sus acciones a lo largo de la década del noventa; o, por el contrario, discernir los sentidos que subyacen a la pretendida voluntad autonómica.

Siguiendo la última alternativa, la apelación a la autonomía organizativa que realiza la CTA encierra dos sentidos. El primero de ellos, quizás próximo a la etapa fundacional de la organización, alude a las fronteras con el peronismo y a la relación histórica que este mantuvo con el movimiento obrero. No obstante esta búsqueda por definir la alteridad, el tejido de lazos político-partidarios y sociales del cual formó parte la CTA durante los años noventa condujo, por un lado, a la profundización de la distancia con el partido justicialista por parte de ciertos miembros de la Central, y por otro, a la afirmación de la coexistencia de una pluralidad de identificaciones y pertenencias partidarias que desde el inicio se hicieron presentes en esa organización. Por esto mismo puede decirse que la ambición autonómica de la CTA se tradujo en una firme determinación de rechazar la ocupación de espacios de decisión tanto en el gobierno menemista como en el justicialismo, entendiendo por este último exclusivamente a su estructura partidaria, y por ende, el juego de “competencia” interna para el acceso a cargos públicos y/o partidarios.

El segundo sentido presente en la consigna de autonomía remite al lugar que ocupan en la construcción identitaria de la Central las propuestas de política económica y social por ella elaboradas e impulsadas. Esta faceta sugiere que la reivindicación de autonomía no transita únicamente por la resolución de la CTA de no encolumnarse detrás del proyecto de un partido político o coalición electoral, sino más bien por otorgar prioridad a las alternativas de políticas resultantes de la elaboración interna y, especialmente, aquellas ligadas a su centro de estudio y formación.

Estos dos sentidos que asume el principio de autonomía sostenido por la CTA, a saber, la primacía de los proyectos propios y la ambi-

gua distancia con los partidos políticos, están a su vez asociados a una concepción de la política.

Apartadas de una actitud proclive a la impugnación de la política, las principales figuras de la CTA han reiterado en más de una oportunidad su aspiración de crear una “herramienta política”, así como su intención de “construir poder”. A juzgar por estas consignas, la política no deviene entonces objeto de rechazo. Por el contrario, ella parece ser más bien entendida como práctica de articulación múltiple y relativamente plural de espacios, fundamentada en la reclamación de derechos y, por ello mismo, no completamente renuente a su proximidad con el Estado. El carácter múltiple supone que la política, entendida aquí como práctica atravesada por relaciones de poder y, a la vez, como cuestionamiento de las mismas, conecta espacios no ceñidos únicamente al de los trabajadores o al de las instituciones de gobierno, sino que, como se verá más adelante, enlaza prácticas y experiencias disímiles que exceden el campo de reivindicación gremial tradicional. Por otro lado, la articulación emerge también como relativamente plural en tanto que por medio de ella se coordinan y confrontan diversas orientaciones políticas. Por último, la definición de la política como articulación múltiple y plural de espacios no resulta ajena al conflicto, a las eclosiones internas ni a las rupturas. Muy por el contrario, estos rasgos asoman como reflejo de una permanente tensión, cuyo procesamiento pone en juego constantemente la configuración de sentido que representa la CTA.

LA CTA EN (LA) PROTESTA

La literatura que ha dado cuenta del fenómeno de la protesta social ligada a los cortes de rutas ha comprendido diversas interpretaciones. En tanto que algunas de ellas han reconocido en ese fenómeno el efecto directo de las transformaciones ocurridas en la estructura productiva (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2000); otras, contrariamente, han sugerido la necesidad de no afirmar una relación de causalidad, sino explorar la relación entre políticas de ajuste y crisis de representación (Scribano, 1999). También se ha afirmado que la evolución de la protesta social tuvo como corolario la conformación de un movimiento piquetero que es expresión de una forma de reconstitución del tejido social y de una *nueva política*, en cuya base se encuentra la convergencia entre las puebladas y cortes de ruta producidos en las provincias del interior, con las lógicas de organización comunitaria arraigadas en los barrios (Svampa y Pereyra, 2003).

Aunque gran parte de estas interpretaciones no han soslayado la existencia de una tradición de movilización que halla en la práctica sindical su antecedente, no abundaron, sin embargo, los análisis que rastreen con detenimiento los lazos entre ese antecedente y el tono que adquirió la protesta de los últimos años. Antes bien, se ha recordado agudamente que los cortes de rutas reconocen un rico historial en las

protestas de los sectores rurales, que la interrupción de la circulación también formó parte de los reclamos de los obreros urbanos a comienzos del siglo XX, y que en los primeros años de la década del noventa los cortes fueron protagonizados por los trabajadores que reclamaban mejoras salariales, o por aquellos que se oponían a la privatización o cierre de empresas estatales.

La posición asumida por algunos sectores sindicales ante la problemática de la desocupación, la precariedad laboral y la exclusión social fue percibida como un proceso que se desarrolló, fundamentalmente, a partir de la segunda mitad de los años noventa, en un contexto en el que se combinaban factores como: los elevados índices de desocupación –que por entonces ascendían al 18,4%; las protestas desatadas en algunas provincias; la repercusión de las ollas populares en partidos del conurbano bonaerense; o la participación de ciertas organizaciones de base en los relevamientos realizados en el marco de programas provinciales de asistencia alimentaria, que luego derivaron en la conformación de una “red de barrios” entre los años 1995 y 1996⁴⁷.

En el caso de la CTA, la Marcha por el Trabajo y la Justicia realizada el día de la huelga general del 8 de agosto de 1996, y en la que participó la organización barrial del partido bonaerense de La Matanza que encabeza Luis D’Elía; así como las reuniones mantenidas en el año 1997 a fin de articular diferentes experiencias comunitarias relacionadas con el conflicto por la vivienda y la tierra; y, finalmente, la fundación oficial de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV)⁴⁸ el 18 de julio de 1998 en el Colegio San Francisco de Sales de la Ciudad de Buenos Aires, constituyeron evidencias de una tardía posición asumida por ese sector sindical.

Sin embargo, esta sucesión de encuentros, que culminaron en la incorporación de organizaciones comunitarias y barriales a una estructura sindical, no puede ser contemplada como un recurso meramente estratégico por parte de una organización a todas luces carente de peso político y representatividad entre los trabajadores privados de áreas significativas de la producción y los servicios. Lo que subyace, en cambio, es un proceso previo de reformulación identitaria que encierra una resignificación del concepto de “clase trabajadora”.

Este último término no alude aquí a una categoría que remite a la ubicación de un grupo social en la estructura productiva, o a un análisis

47 Las delegaciones locales de ATE y SUTEBA colaboraron asiduamente con las iniciativas que surgían en los barrios, que inicialmente consistían en reclamos por bolsones de alimentos.

48 Además de la cooperativa USO –Cooperativa Unidad, Solidaridad y Organización– liderada por el dirigente Luis D’Elía, en la FTV confluyeron otras organizaciones próximas al tema de la vivienda y la tierra, como por ejemplo el MOI (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos). Este movimiento nació en los años ochenta a partir de las ocupaciones masivas de grandes edificios en la Ciudad de Buenos Aires, y se retiró de la FTV a comienzos de 2003.

que recupera un enfoque arraigado en el materialismo histórico. Por el contrario, el objetivo es pensar la “clase trabajadora” como un término que encierra sentidos sedimentados, en torno a los cuales se conforman y reformulan las identidades. En otras palabras, interesa rastrear de qué manera los sindicatos que integran la CTA han cambiado el modo de construir el sujeto de su representación y cómo, al hacerlo, delinear rasgos de su propia identidad. De ahí que tras esa reformulación no se encuentre únicamente una fase de adaptación sindical frente a la crisis de la sociedad salarial, sino también un signo de desarticulación de tradiciones políticas arraigadas en las prácticas del sindicalismo argentino.

La creación de la FTV en el marco de la CTA puede ser entonces comprendida atendiendo a los lazos forjados por ciertos sindicatos que integran la CTA con las organizaciones de base comunitaria nacidas en los años ochenta, y por la participación de la CTA en la protesta social y en los cortes de ruta en el interior del país⁴⁹.

Las organizaciones barriales que protagonizan las protestas de los últimos años reconocen su origen en el alcance que adquirieron los fenómenos de la ocupación de tierras y la formación de asentamientos en el Gran Buenos Aires durante los primeros años de la década del ochenta, como así también en la influencia del movimiento villero peronista⁵⁰.

Sin embargo, si se trata de recoger muestras precisas de acercamiento entre las organizaciones sindicales y barriales del Gran Buenos Aires, se destaca la posición que hacia el final de la última dictadura militar adoptó la CGT Brasil, de la cual formaba parte la actual conducción de ATE. En efecto, en el año 1982, la CGT Brasil brindó apoyo tanto a las protestas barriales conocidas como “El vecinazo”, que se desata-

49 Para este estudio de la CTA se omiten las referencias a otras organizaciones que participaron en la protesta social durante los años noventa, como es el caso de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) a partir de 1994. Las organizaciones identificadas con tradiciones de izquierda comenzaron a discutir la incorporación de los sectores de desocupados a partir de mediados de los años noventa, y con fuertes debates internos en torno a la categoría de clase asalariada. Muestra de ello es el siguiente pasaje de una conversación con el dirigente Amancay Ardua (CCC): “Si vamos a tomar a los desocupados [porque] entendías que había una ventaja estratégica en relación al otro auge, [el revolucionario]; [entendías también] que antes el detonante estaba fuera de la clase, y ahora [...] en el seno de la misma clase. Por eso nosotros definimos tres afluentes de la misma clase: ocupados, desocupados y jubilados. [Además,] la inmensa mayoría de los sindicalistas quedaron fuera de esto. No sólo los traidores, los que nos vendieron la década de Menem, sino los de izquierda, las propias fuerzas de izquierda tomaron el problema de los desocupados después de la Asamblea Piquetera” (entrevista realizada por Guillermo Dyszel y la autora, 17 de julio de 2003).

50 A comienzos de los años ochenta emergen en el Gran Buenos Aires demandas de los sectores populares ligadas a la tierra y la vivienda. Ese proceso reconoce entre sus causas algunas medidas asumidas por el último régimen autoritario. En la provincia de Buenos Aires se modificó el Código de Planeamiento Urbano y se levantó el congelamiento de los alquileres; mientras que en la Capital Federal existió una política de erradicación de las villas miseria (Fara, 1985: 121-123).

ron en reacción a aumentos impositivos, como así también a la ocupación de tierras en zonas marginadas del conurbano bonaerense, como La Matanza y Florencio Varela (González Bombal, 1985: 96-119).

Asimismo, la cercanía entre el principal referente de la FTV, Luis D'Elía, y algunos sindicalistas de ATE puede ser rastreada en el espacio de resistencia que abrieron las organizaciones de derechos humanos hacia fines de los años setenta. Fue una de ellas, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) presidido por Adolfo Pérez Esquivel, la que reunió entre sus miembros a integrantes de la corriente gremial Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad de ATE (ANUSATE), como Germán Abdala y Víctor De Gennaro; a militantes que habían iniciado su participación política en la juventud peronista, como Claudio Lozano; y también a aquellos que tenían una participación social más ligada al trabajo comunitario en los barrios, como Luis D'Elía⁵¹.

Pero más allá del espacio de encuentro que significó el SERPAJ, las repercusiones que a mediados de la década del ochenta alcanzaban las problemáticas de la pobreza y la precariedad laboral fueron esenciales para la evolución de la reformulación del concepto de “clase trabajadora” que la CTA concretaría en la década menemista. El dirigente Germán Abdala expresaba esa preocupación ya en 1985 cuando sugería la necesidad de encontrar nuevas formas de representación de los trabajadores.

Hoy el eje fundamental de todo movimiento, de toda forma organizativa, es la defensa de la fuente de trabajo, cuando hace una década atrás el movimiento obrero y sus distintas vertientes estaba directamente discutiendo cómo dirigía o cómo gobernaba, en última instancia, el país. Este hecho no está hoy en el mismo plano [...] *tenemos que plantearnos formas alternativas* para resolver [la crisis de la sociedad], ya que no hay respuestas dentro de este marco económico y político [...] Nosotros enmarcamos este tema en que acá hay todo un sector social que ha quedado sin expresión política, sin expresión estratégica, todo un sector social que tal vez antes estaba incluido dentro de todo un proyecto de país, un proyecto de vida (Abdala, 1985: 61-62).

De este modo, no resulta extraño que en la reunión de Burzaco de 1991 quedara definida la voluntad de “propiciar la apertura del sindicato a otras organizaciones sociales”; y que en el artículo 2 del Estatuto elaborado en noviembre de 1992 se haya establecido que la nueva central afiliaría a: “a)

51 La ANUSATE nació el 10 de diciembre de 1977 como una corriente opositora a la conducción del sindicato. Con la normalización sindical que siguió al advenimiento de la democracia, ANUSATE ganó las elecciones nacionales del gremio. En esa elección, Luis D'Elía participó como fiscal (entrevista a Luis D'Elía, 28 de julio de 2003).

los trabajadores activos; b) los trabajadores sin trabajo, los trabajadores beneficiarios de alguna de las prestaciones del régimen previsional público o privado, nacional, provincial o municipal; y, c) los trabajadores autónomos y cuentapropistas en tanto no tengan trabajadores bajo su dependencia”⁵².

La participación de ATE, y posteriormente de la CTA, en las protestas desarrolladas desde comienzos de la década se corresponde con estos lineamientos. Los trabajadores estatales han encabezado reivindicaciones en diferentes puntos del país que los han llevado a confluir con otros gremios. Muestra de esto es la intervención de ATE en el Frente de Gremios Estatales de Jujuy, cuyo máximo referente era Carlos “Perro” Santillán. Las demandas de ATE, sostenidas a través de huelgas y manifestaciones callejeras, fueron acompañadas casi paralelamente por sucesivos intentos de conformar comisiones de trabajadores desocupados en ciudades del interior del país como Rosario, o la capital de la provincia de Neuquén⁵³.

Justamente es esta provincia sureña la que se convirtió en cuna del término “piquete”, a partir de la pueblada que en 1996 se produce en las localidades petroleras de Cutral-Co y Plaza Huincul. Este episodio se constituyó no solamente en símbolo del reclamo por fuentes de trabajo, sino también en un punto de inflexión en el ciclo de protesta. A partir de allí se asistió a la generalización de sucesos similares que se inscribieron bajo la categoría de acción piquetera, como lo prueban los acontecimientos ocurridos en las localidades salteñas de General Mosconi y Tartagal, en el noroeste del país⁵⁴.

No obstante, la provincia de Neuquén es un escenario de particular interés para el estudio de la CTA en los años noventa. Aparte de las protestas de los trabajadores estatales –ATE, docentes, empleados judiciales– que adquirieron allí una marcada intensidad, es posible reconocer un episodio de corte de ruta previo a la pueblada de 1996, que tuvo como uno de sus principales protagonistas a la CTA. Concretamente, el 14 de noviembre de 1994, la delegación de ATE del municipio neuquino de Senillosa, con el apoyo de la CTA provincial, realizó un corte en la ruta nacional 22⁵⁵.

Los principales dirigentes de esas organizaciones convocaron simultáneamente a la población del pequeño municipio de 6 mil habi-

52 Ver versión electrónica Estatuto del Congreso de los Trabajadores Argentinos, 14 de noviembre de 1992 en <www.cta.org.ar>.

53 En el caso de Neuquén, testimonios recogidos en entrevistas realizadas por la autora en esa provincia durante agosto de 2003 confirman, ya en el año 1993, la existencia de comisiones de desocupados integradas usualmente por beneficiarios de programas de empleo provinciales o nacionales.

54 Las experiencias de Plaza Huincul y Cutral-Co en 1996 y 1997, así como las de General Mosconi y Tartagal en 1997, 1999, 2000 y 2001 son detalladas por Svampa y Pereyra (2003).

55 Así surge de los testimonios de algunos participantes de ese corte de ruta y de los relatos periodísticos del diario *Río Negro* (15 de noviembre de 1994 y días sucesivos).

tantes para que se sumara a la protesta, que sintetizaba el pedido de fuentes de trabajo y la destitución definitiva del intendente, sospechado de estar involucrado en actos de corrupción.

Los neumáticos incendiados, la presencia policial, la amenaza de participación de la gendarmería nacional, la intervención de la justicia federal, y las asambleas populares se dieron cita en ese corte que tenía como telón de fondo una amplia gama de factores que incluía desde el déficit de las arcas municipales, hasta los altos índices de desocupación y un contexto electoral próximo⁵⁶.

La interrupción del tránsito se prolongó en forma parcial durante tres días y culminó cuando una comisión negociadora integrada por pobladores, comerciantes, dirigentes sindicales y políticos acordó con el gobierno provincial la continuidad de los subsidios de los trabajadores desocupados que realizaban contraprestaciones en el ámbito de la municipalidad, y la reactivación de las obras públicas paralizadas⁵⁷. Incluso, el 9 de agosto de 1995, meses después del conflicto de Senillosa, la Legislatura de la provincia de Neuquén sancionó la Ley 2.128, por la cual creaba un Fondo Complementario de Asistencia Ocupacional que contemplaba el otorgamiento de subsidios a desempleados. Tras estos acontecimientos se realizaría, en mayo de 1996, un primer congreso de desocupados de la provincia, convocado por la CTA y una coordinadora de desocupados⁵⁸.

El corte de Senillosa constituyó, de esta manera, una antesala de la pueblada de 1996, y fundamentalmente un signo de la reformulación que se estaba operando en el concepto de “clase trabajadora”, al conectar los intereses de ciertos sectores de desocupados con la acción gremial⁵⁹.

56 Los manifestantes protestaban por la caducidad de subsidios nacionales pertenecientes al Programa Intensivo de Trabajo (PIT), el retraso en su pago, la interrupción de obras públicas en el municipio, así como la falta del pago de deudas de la municipalidad a sus acreedores.

57 Nótese que el corte de ruta de Senillosa ha pasado desapercibido para gran parte de la literatura académica sobre el movimiento piquetero, que ha “fijado” como su momento fundacional los acontecimientos de Cutral-Co y Plaza Huincul en el año 1996. No obstante, el caso de Senillosa ha sido advertido en los relatos de militantes sociales y miembros de partidos políticos. Ver, entre otros, Oviedo (2001) y Kohan (2002).

58 Luis Oviedo, militante del Partido Obrero y autor de *Una historia del movimiento piquetero*, señala que en febrero de 1996, pocos meses antes del “cutralcazo”, se habían producido algunas manifestaciones debido a los intentos de reducción de los haberes de los trabajadores docentes y estatales, al igual que del subsidio que recibían los beneficiarios de la Ley 2.128 (Oviedo, 2001: 41).

59 Los miembros de ATE y CTA de la provincia de Neuquén entrevistados reconocen el carácter comunitario de la pueblada de 1996, y admiten haber participado en forma individual una vez que el sector político que había impulsado el corte —es decir, la línea interna del Movimiento Popular Neuquino liderada por Jorge Sobisch— había perdido el control de la protesta. Estos relatos que enfatizan los factores políticos y los recursos organizativos que propiciaron el desencadenamiento de la protesta en Neuquén coinciden con la interpretación de Auyero (2002; 2004).

Pero más allá del antecedente de Senillosa, la FTV ha sido el ensayo más organizado de articulación de los intereses de los sectores excluidos con aquellos que son el sujeto tradicional de la representación sindical, reflejando así que *la nueva fábrica es el barrio*.

Esto último sugiere que el diagnóstico que la CTA hizo de la protesta social no sólo fue de la mano de una resignificación del término “clase trabajadora” sino también de la idea de territorio. Pero la resignificación del territorio no involucró un mero cambio de la geografía de la protesta. Por el contrario, ella llevó implícita la redefinición misma de “conflicto”, en tanto concepto que delimita el espacio de interés de la acción sindical. Las palabras de Claudio Lozano sobre este tema son más que elocuentes.

La idea nuestra de territorio no es lo mismo que barrio. Es decir, para nosotros el territorio es el espacio donde confluyen el conjunto de los conflictos en los que están involucrados los trabajadores. Los conflictos de los trabajadores, a diferencia de lo que ocurría en etapas anteriores, ya no son sólo conflictos por la relación obrero-patronal [...] Están las problemáticas barriales, están las problemáticas ambientales, están las problemáticas generacionales, están las problemáticas de género [...] Por lo tanto, la idea de recuperar la noción de territorio como perspectiva de construcción tiene que ver con encontrar un espacio donde recrear la unidad política de los trabajadores y en donde poder asumir de manera conjunta, digamos, el conflicto social. Y, de hecho, el haber puesto esa prioridad en lo territorial, que para nosotros en tanto uno haga esto fortalece también la discusión al interior de los espacios de laburo, esto es lo que ha permitido a su vez que la Central se transformara, por un lado, en una organización que discute con las estructuras políticas tradicionales [...] y, en segundo lugar, el territorio fue lo que permitió que la Central tuviera y mantuviera un nivel de presencia en el conflicto social que de otra manera no hubiera podido tener, si se hubiera quedado restringida al ámbito estrictamente laboral (entrevista, 25 de abril de 2003).

La ampliación del espacio de conflicto que la CTA planteó como cemento del mundo de los trabajadores, cuyos intereses pretendía representar, supuso además canales concretos de participación organizacional. La elección directa de autoridades, presente en el modelo sindical de ATE y CTERA, y sobre todo la afiliación individual, fueron mecanismos que propiciaron la integración de los trabajadores de los barrios a la estructura sindical.

Sin embargo, esos canales de integración de ningún modo son sinónimo de efectiva unidad entre las prácticas de las experiencias barriales y aquellas propias de mundo sindical. Las tensiones entre unas

y otras conviven al interior de la CTA. Así, es posible reconocer algunas voces próximas al legado sindical que esgrimen la transitoriedad de las formas de organización de los desocupados, o el carácter desvirtuado que en los últimos años ha tenido la FTV al acentuar su orientación como organización de desocupados y su perfil político, y relegar el problema de la tierra, la vivienda y el hábitat. Mientras que desde otro lugar, aquellos vinculados a las organizaciones de base critican los resabios verticalistas y corporativos aún presentes en algunos sindicatos de la Central, reivindicando la autenticidad y “horizontalidad” de sus prácticas. A propósito de estas tensiones, resulta interesante la opinión de un referente de la FTV de la provincia de Buenos Aires.

Es verdad que ha cambiado mucho el tema del trabajador y del desocupado. Algunos dicen “trabajador desocupado” [...] Muchas veces el que surgió como nuevo sujeto de acción es el piquetero, o trabajador desocupado, decile como quieras. Y eso no quiere decir que sos [piquetero] porque no tenés otro método... Yo me explico mejor con un ejemplo. Cuando terminé el congreso de la CTA [de diciembre de 2002], la FTV tenía una tribuna llena, más de tres mil [personas]. Entonces, [Victorio] Paulón, que es secretario, dijo: “¡qué alegría sería si dentro de un tiempo esta tribuna [por la tribuna de la FTV] está vacía y estén todos allá [del lado de los trabajadores metalúrgicos]!” [...] Y bueno... era un discurso. Yo iba a decir: “no”. Porque por más que tengan trabajo no van a dejar de ser de la Federación Tierra y Vivienda. Porque también creás una identidad, una forma de ser, tus símbolos. Entonces pueden tener trabajo, de los tres mil, dos mil novecientos, y no van a irse a otro lado porque ya tuvieron una identidad. Y entonces vos vas creando tu mística [...] No van a dejar de estar acá porque van a seguir siendo parte de esta organización que fue la que los nucleó, los ayudó a caminar y a luchar (entrevista de Guillermo Dyszel y la autora a “Juanjo”, 11 de abril de 2003).

Estos comentarios dejan traslucir la existencia de una cierta autonomía que caracterizaría la relación de la FTV con la CTA. Esto se debe, en parte, a la historia previa que han recorrido las organizaciones y cooperativas que confluyeron en esa federación, pero también al crecimiento cuantitativo que esta ha tenido a partir de las repercusiones que alcanzaron el movimiento piquetero y el acceso al manejo de subsidios por desempleo.

Finalmente, la distancia que existe entre los proyectos políticos que impulsan algunos dirigentes de la CTA es igualmente motivo de discordia. En este sentido, la reiterada insistencia del líder piquetero Luis D’Elía para que la CTA defina una línea de acción político-partidaria, y la ausen-

cia de una respuesta institucional clara sobre este tema por parte de los máximos dirigentes de la Central, es una muestra de esas diferencias.

La postulación de D'Elía a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2003, por el Frente Cambia Buenos Aires, derivó en un rotundo fracaso, que se plasmó en la obtención del 0,76% (43.834) de los votos. No obstante, el respaldo explícito que el líder piquetero reclamaba para su candidatura hubiese demandado la definición política de la conducción de la Central por un candidato en particular. En ese caso, la existencia de cierto equilibrio interno habría resultado afectada, ya que ese escenario electoral también contaba con la postulación de otros dirigentes de la CTA como Ariel Basteiro (Partido Socialista) y Marta Maffei (ARI).

LA PROYECCIÓN DEL MOVIMIENTO POLÍTICO, SOCIAL Y CULTURAL: ¿EL IMAGINARIO PERONISTA EN ENTREDICHO?

Por último, cabe explorar brevemente la relación entre los sentidos presentes en las prácticas, formas organizativas y proyecciones políticas de la CTA, y las representaciones e imaginarios derivados de la retórica peronista, que se resumen en la vinculación entre los siguientes términos: clase trabajadora-pueblo-justicia social-unidad nacional.

En primer lugar, la redefinición del concepto de “clase trabajadora” que la CTA efectúa durante el menemismo puede ser interpretada como la imposibilidad de “concretar” el postulado de la “justicia social” en tanto síntesis de la promesa de movilidad social e integración política que hacía de la clase trabajadora el “pueblo” merecedor de esa máxima peronista. En sintonía con esto, la intención de la Central de extender la categoría de trabajador a franjas sociales como los desocupados, los precarios o los vulnerables actúa como un mecanismo de integración política en la medida en que estos pasan a estar “incluidos” en el “pueblo”.

El fundamento integrador que adquiere esta reformulación de la “clase trabajadora” probablemente sugiera la continuidad del legado peronista, en la medida en que representa la búsqueda de una integración de los sectores vulnerables que se opera en el pasaje de su condición de “masa inorgánica” a la de “clase trabajadora organizada”. Sin embargo, la voluntad “organizativa” de la CTA parece inscribirse más bien en las prácticas propias de la tradición gremial, ya que la mirada social del dispositivo retórico del peronismo lleva implícita la percepción de una amenaza de disolución de los lazos sociales susceptible de ser desarticulada, y por ende controlada, a partir del reconocimiento político de quienes la encarnan⁶⁰.

60 Para un estudio sobre la lectura social presente en el dispositivo discursivo del peronismo, ver Svampa (1994).

Por otra parte, el proyecto de la CTA de conformar un movimiento político, social y cultural, anunciado por primera vez en 1991, reedita en un contexto de desocupación, pobreza y fragmentación de la fuerza trabajadora el llamado a la unidad del pueblo. Unidad que, en este caso, es concebida como una construcción política de articulación y no como una constatación. Según Víctor De Gennaro:

El partido es una herramienta electoral importante... o un frente... yo no tengo ningún prejuicio con ninguna estructura que se pueda dar. La recuperación de espacios institucionales es muy importante. Ahora, más que construir un partido, creo que *tenemos que construir un entero, que es el entero del protagonismo del pueblo* [Y esto] es un proceso, no es una sola forma de tomar el poder. Porque el poder está afuera y adentro de uno. Alguna vez en el '76, o antes del '76, nosotros decíamos: "tomar el poder" [...] Creo que el poder se construye todos los días [...] Entonces, los embriones de nueva sociedad no están en un partido selecto, están en todos lados. Y esos embriones son la construcción de nuevas relaciones, también culturales (entrevista de la autora y Guillermo Dyszel, 21 de agosto de 2003).

Este pasaje ilumina, además, la deliberada imprecisión organizativa que rodea la pretensión movimientista de la Central. Trazando un paralelismo con las virtudes superadoras que Perón atribuía al "Movimiento" (en contraste con el carácter sectario y faccioso del partido político), es posible reconocer que los principales dirigentes de la CTA apelan a una retórica igualmente equívoca cuando minimizan la ausencia de una definición político-partidaria, y anteponen la necesidad de "*construir un entero*" y no "una parte".

Pero más allá de la vigencia de la tradición retórica del peronismo que se puede advertir en esas semejanzas, el apoyo de diferentes actores sociales y políticos que la CTA siempre ha procurado obtener a la hora de desplegar sus acciones de protesta es un antecedente de la voluntad movimientista de esta Central sindical. En este sentido, la propuesta del Frente Nacional Contra la Pobreza (FRENAPO), opacada por el escenario de inestabilidad política y social de fines de 2001, ha sido quizás la muestra más acabada de articulación política, social y cultural, al propiciar la participación organizada de sectores sindicales, político-partidarios, eclesiales, de defensa de los derechos humanos barriales y de pequeños empresarios. Uno de los documentos difundidos por el FRENAPO señalaba:

En la decisión [...] de imponer el “combate a la desocupación” como punto central de la agenda de la Argentina contemporánea es que se afirma la voluntad de nuestra Central de promover junto al conjunto de las organizaciones sociales, políticas, culturales y eclesiales que así lo entiendan, la autoconvocatoria definida como “Movimiento por la Consulta Popular”. Bajo ningún punto de vista puede entenderse esta decisión como una propuesta exclusiva de nuestra organización [...] Es una propuesta [...] que asume que en el campo popular se observa hoy el fracaso de dos estrategias. Por un lado, la de aquellos que creyeron que con la sola acumulación de espacios institucionales se podía afirmar una política diferente. Por otro, la de aquellos que pensaron que acumulando en el terreno social iban a poder influir en las instituciones [...] Ambas estrategias contribuyeron a fragmentar la práctica política dando lugar a experiencias institucionales huérfanas de anclaje social y a experiencias sociales carentes de influencia institucional [...] El Movimiento por la Consulta [...] pretende articular las experiencias institucionales y sociales que ya tenemos en orden al objetivo de instalar la demanda de un modelo de sociedad deseable y desde esta definición organizar a la comunidad para poder sostenerla y construir las condiciones sociales para su vigencia (FRENAPO, 2001).

El escenario que siguió a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001 abrió una etapa de debate en el seno de la Central, que finalizó en el Congreso de Mar del Plata, en diciembre de 2002, con la determinación de construir un Movimiento. Sin embargo, ni esta resolución, tomada en un contexto aún caracterizado por las acciones de protestas y las experiencias asamblearias en grandes ciudades, ni el bagaje de diez años de acción política basada en la apertura hacia otras experiencias de organización política y social, redundaron en la construcción de la “unidad del campo popular” que los dirigentes de la CTA auguraban.

El Movimiento sigue siendo aún una promesa. Una promesa que en tanto voluntad de acción futura aparece cada vez más debilitada a la luz de la dinámica que ha seguido la política en el último tiempo. Política de la que fueron parte los programas de contenido asistencial implementados por el gobierno de Eduardo Duhalde, la continuidad que en esa área ha tenido la gestión de Néstor Kirchner, y la “apropiación”/desarticulación del discurso de quienes protagonizaron la protesta social de los años noventa, efectuada por el actual gobierno, al presentarse como una propuesta política transversal, confrontativa y decidida a no olvidar el pasado.

Si bien en la Argentina el Estado posee el monopolio del reconocimiento legal de las entidades sindicales, y pese a que la única organización de tercer grado con personería gremial es la CGT, la CTA logró instalarse en el escenario político siendo reconocida de hecho por el presidente Fernando de la Rúa en 1999, por el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, y por el presidente Néstor Kirchner. Este último no sólo dio claros testimonios de su posición en favor del esclarecimiento de los hechos de represión durante la última dictadura militar, en sintonía con lo exigido por la CTA en su apoyo a las organizaciones de derechos humanos, sino que además propició la integración de la Central al Consejo del Salario, desoyendo las objeciones de la CGT unificada en 2004⁶¹.

No obstante, cabe consignar que la decisión de la CTA de emprender, a comienzos de los años noventa, un camino autonómico respecto del partido justicialista y del Estado, así como los lazos sociales que su redefinición de la “clase trabajadora” promueve, expresan rupturas y continuidades con la tradición peronista, a la vez que permiten advertir la presencia de una tensión inherente a esa articulación.

Esta afirmación se corresponde en parte con la temprana interpretación que ofrecían Martuccelli y Svampa (1997) al apuntar que el proyecto sindical que representaba la CTA transitaba un *equilibrio inestable*. *Equilibrio* que remitía a la íntima combinación de la continuidad y la ruptura con el modelo nacional-popular, y cuya *inestabilidad*, advertida por los autores, parecía sugerir la necesidad de su superación por medio de una identidad nueva.

Sin embargo, antes que pensar en un *equilibrio inestable* que denote una fase de transición hacia un estadio superador, cabría sugerir que aquello que justamente define a la CTA es su ambigüedad entre ruptura y continuidad. La urgencia de crear una “identidad ofensiva”, como alguna vez ha señalado Víctor De Gennaro, o las frecuentes asociaciones que los dirigentes trazan entre la Central y la imagen de un camino inacabado y en permanente construcción, actúan más como elementos de cohesión interna que como un proyecto de ruptura radical a ser concretado.

61 La presencia de los representantes de la CTA en el Consejo fue controvertida al no contar esa organización con personería gremial, como lo fija la Ley de Empleo. La CGT condicionaba la participación de los delegados de la CTA a su incorporación en la delegación cegetista, evitando así la asistencia como organización independiente. Esto hizo peligrar la participación de la CTA, ya que sus principales dirigentes rechazaban una intervención que negara la identidad de la organización y cerrara en el futuro la discusión por la libertad sindical. Tras las negociaciones por el cupo sindical en el Consejo del Salario entre el Ministerio de Trabajo y la CGT, esta accedió a ceder tres lugares de los dieciséis que por ley le corresponden, dando lugar a la concurrencia de la CTA. La inclusión de la CTA en contradicción con la ley se justificó apelando a la representación de sindicatos adheridos a esa organización que cuentan con personería gremial como ocurre con los casos de ATE y CTERA.

ALGUNAS PALABRAS FINALES

El análisis de la Central de los Trabajadores Argentinos durante los años noventa ilumina cuestiones de orden teórico, al igual que aspectos sustantivos sobre el caso en particular.

En términos teóricos, el estudio de la CTA ha mostrado las limitaciones que presentan algunos marcos conceptuales para dar cuenta de la complejidad de un caso que, si bien constituye un ejemplo de acción colectiva sindical, adquiere también singularidades que trascienden los contornos de esa categoría. De ahí, pues, la dificultad de abordar este fenómeno a la luz del concepto de nuevo movimiento social, movilización de recursos u organización de interés (Schmitter, 1974; Collier y Collier, 1979; Murillo, 1996; 2000; Etchemendy y Palermo, 1998). Por el contrario, la adopción del concepto de identidad política, y el seguimiento de una línea de interpretación que hace pie en el discurso, permitieron avanzar en la explicación del fenómeno en cuestión, revelando además las potencialidades de un enfoque teórico frecuentemente objetado por su nivel de abstracción.

En efecto, la incorporación de comunidades de pueblos originarios, las experiencias barriales, la afiliación de asociaciones de meretrices, de grupos de desocupados y otros aleja a la CTA de los rasgos de un sindicalismo de negocios, o de las acciones de los “viejos movimientos sociales” erigidos sobre un clivaje clasista. No obstante, la continuidad de reivindicaciones centradas en la defensa de los derechos de los trabajadores, contemplando prácticas que remiten a las acciones colectivas sindicales de tipo tradicional, revela igualmente la inadecuación del concepto de nuevo movimiento social.

Asimismo, los análisis sobre el sindicalismo en tanto organización de interés atribuyen a las formas que adquiere la solidaridad entre trabajadores la consecución de beneficios sectoriales y específicos que no se orientan a cuestionar las desigualdades del sistema social como resultaba propio del movimiento obrero que aspiraba al cambio radical o revolucionario. De modo tal que el planteamiento de una dicotomía entre movimiento social y organización de interés, como punto de partida para el abordaje de la acción de la CTA, se presentaría aquí como un obstáculo. Antes que encasillar a este núcleo sindical en una u otra categoría, es conveniente pensar en un continuo que permita privilegiar los matices que atraviesan a diversas organizaciones sociales. La CTA constituiría, entonces, un ejemplo en el que ambas orientaciones se combinan y en donde, además, el cuestionamiento social conlleva la búsqueda de la integración y organización de quienes no pertenecen a la fuerza laboral y se encuentran en una situación de vulnerabilidad respecto del mercado de trabajo.

En cuanto al caso de estudio propiamente dicho, se concluye que los rasgos distintivos sobre los cuales la CTA construye su identidad

como sujeto político en la década del noventa manifiestan la presencia de una ambigüedad en cuya base se encuentra la reformulación de sentidos y prácticas sedimentadas en décadas previas, que expresan rupturas y continuidades con respecto a la tradición sindical forjada por el peronismo. Asimismo, se sostiene que es justamente el despliegue de ese carácter ambiguo, alcanzado en un contexto de conflictividad social, el que ha contribuido a la coexistencia de distintas orientaciones políticas al interior de la Central, así como a su crecimiento político e institucional⁶².

Estas afirmaciones se desprenden del análisis de un proceso de construcción identitaria que se desarrolló bajo ciertas condiciones, presentes fundamentalmente durante los años noventa.

La primera condición comprendió la férrea oposición adoptada por la CTA frente al menemismo, el cual representó el principal “límite” de esa articulación de sentido.

La segunda condición estuvo dada por el despliegue de una autonomía ambigua frente al Estado y a las estructuras partidarias, que bajo ninguna circunstancia condujo al rechazo de la política. En cuanto a la posición frente al Estado, baste señalar que la CTA nunca percibió como una amenaza para su autonomía el reclamo de subsidios por desempleo que llevaron adelante las organizaciones que la integran⁶³. Así también, este núcleo sindical no renunció al juego político-partidario, sino que, en este punto específico, la autonomía implicó fundamentalmente la negativa a participar a través de la estructura del

62 En las elecciones que siguieron a su reconocimiento como asociación gremial, la CTA tenía 635.640 afiliados. Ese número trepó a 767.430 en 2000, a 867.353 en agosto de 2003; mientras que en mayo de 2006, la CTA difundía en su sitio en Internet una membresía de 1.071.312 afiliados. También aumentó el número de organizaciones afiliadas a la Central. Para agosto de 2003, la CTA contaba con 268 organizaciones de las cuales sólo el 46,3% (124) tenía algún tipo de inscripción legal. Del total de organizaciones, el 63,4% (170) eran organizaciones gremiales y el 36,6% (98) eran agrupaciones no sindicales. En comparación con la CGT, la CTA es aún minoritaria en cuanto a representación de trabajadores. Los datos consignados son una elaboración propia a partir de información proporcionada por la CTA <www.cta.org.ar>.

63 La autonomía frente al Estado proclamada por la CTA es un aspecto controvertido, ya que sus gremios mayoritarios pertenecen al ámbito estatal, y sus propuestas para paliar la desocupación enfatizan la ineludible injerencia del Estado a través de subsidios por desempleo. La aceptación de subsidios traza fronteras entre las organizaciones de desocupados. Incluso, existen grupos piqueteros minoritarios, como el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de La Matanza, que rechazan el manejo de esos subsidios por considerarlos un instrumento de dominación y dependencia del Estado. Por otra parte, en el 7° Congreso Nacional de Delegados celebrado en marzo de 2006 en la ciudad de Mar del Plata, la CTA modificó su estatuto, avalando la compatibilidad entre la ocupación de cargos directivos de la Central y puestos políticos en el gobierno nacional, provincial o municipal.

PJ, así como a brindar un apoyo explícito e incondicional a las demás opciones partidarias⁶⁴.

Por último, la tercera condición consistió en la reformulación de la categoría tradicional de sindicato, a través de una redefinición del concepto de “clase trabajadora” y del “territorio” como espacio de acción sindical. Esta reformulación, expresada en la búsqueda permanente de un anclaje social basado en la apertura hacia las organizaciones no gremiales, hizo que la CTA fuera un sindicato *en (la) protesta*, al tiempo que proyectara la construcción de un *movimiento político, social y cultural*.

BIBLIOGRAFÍA

- Abdala, Germán 1985 “El movimiento de democratización sindical” en Jelin, Elizabeth (comp.) *Los nuevos movimientos sociales/2. Derechos Humanos. Obreros. Barrios* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina).
- Aboy Carlés, Gerardo 2001 *Las dos fronteras de la democracia argentina. La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem* (Rosario: Homo Sapiens).
- Aboy Carlés, Gerardo 2003 “Repensando el populismo” en *Política y gestión* (Rosario: Homo Sapiens) Vol. 4.
- Alonso, Guillermo V. 2000 *Política y seguridad social en la Argentina de los '90* (Madrid: Miño y Dávila/FLACSO).
- Altamirano, Carlos 2001 *Peronismo y cultura de izquierda* (Buenos Aires: Temas).
- Arellano, Karina y De Gennaro, Lucía 2002 *Identidades, palabras e imaginario. Entrevistas* (Buenos Aires: IDEP-CTA).
- Auyero, Javier 2002 *La protesta. Repertorios de la beligerancia popular en la Argentina democrática* (Buenos Aires: Libros del Rojas-UBA).

64 En los últimos años, ciertos dirigentes de la CTA se han encolumnado tras la figura del presidente Néstor Kirchner. Esto implicó, en algunos casos, la incorporación al gobierno nacional por parte de dirigentes de la Central, tal como ocurre con Luis D'Elía –flamante subsecretario de Tierras para el Hábitat Social–, o con Carlos Custer –embajador ante el Vaticano. También se ha advertido un alineamiento de carácter electoral que se evidencia, por ejemplo, en la participación del secretario de organización de la CTA, Edgardo Depetri, en el Frente para la Victoria. Esta etiqueta electoral condujo a Kirchner a la presidencia de la Nación en 2003, y lo representó también en las elecciones legislativas de 2005. Depetri resultó electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en esas últimas elecciones, e integra actualmente la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación.

- Auyero, Javier 2004 *Vidas beligerantes. Dos mujeres argentinas, dos protestas y la búsqueda de reconocimiento* (Bernal: Universidad Nacional de Quilmes).
- Cavarozzi, Marcelo 1996 *El capitalismo político tardío y su crisis en América Latina* (Rosario: Homo Sapiens).
- Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) 1990 “Primer Encuentro de militantes peronistas ‘Peronismo o Liberalismo’”, Villa María, Córdoba, junio, mimeo.
- Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) 1991 “Debate para la organización de los Trabajadores”, Encuentro de organizaciones y dirigentes sindicales, Burzaco, Provincia de Buenos Aires, 17 de diciembre, mimeo.
- Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) 1992 “Hacia el Congreso de los Trabajadores Argentinos. Para volver a creer que es posible una sociedad más justa. Para que nuestra dignidad se ponga en marcha”, Encuentro sindical, Rosario, 4 de abril, mimeo.
- Collier, Ruth and Collier, David 1979 “Inducement versus constraints: disaggregating corporatism” en *American Political Science Review*, Vol. 73, N° 4.
- De Ipola, Emilio y Portantiero, Juan Carlos 1989 (1981) “Lo nacional-popular y los populismos realmente existentes” en De Ipola, Emilio *Investigaciones políticas* (Buenos Aires: Nueva Visión).
- Della Porta, Donatella and Diani, Mario 1999 *Social movements. An introduction* (Oxford: Blackwell).
- Eisinger, Peter 1973 “The conditions of political protest behavior in American cities” in *American Political Science Review*, N° 67.
- Etchemendy, Sebastián y Palermo, Vicente 1998 “Conflicto y concertación. Gobierno, congreso y organizaciones de interés en la Reforma Laboral del primer gobierno de Menem (1989-1995)” en *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales* (Buenos Aires: IDES) Vol. 37, N° 148.
- Fara, Luis 1985 “Luchas reivindicativas urbanas en un contexto autoritario. Los asentamientos de San Francisco Solano” en Jelin, Elizabeth (comp.) *Los nuevos movimientos sociales/2. Derechos Humanos. Obreros. Barrios* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina).
- FRENAPO 2001 “Fundamentos, propuestas y estrategia del movimiento por la consulta popular”, marzo. En <www.cta.org.ar>.

- Garretón, Manuel Antonio 1984 *Dictadura y democratización* (Santiago de Chile: FLACSO).
- Garretón, Manuel Antonio 1991 “Política, cultura y sociedad en la transición democrática” en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 144.
- Gaudio, Ricardo y Thompson, Andrés 1990 *Sindicalismo peronista/ gobierno radical. Los años de Alfonsín* (Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert/Folios).
- Germani, Gino 1962 *Política y sociedad en una época de transición* (Buenos Aires: Paidós).
- Giles, Jorge 2000 *Los caminos de Germán Abdala* (Buenos Aires: Colihue).
- González Bombal, María Inés 1985 “Protestan los Barrios (el murmullo suburbano de la política)” en Jelin, Elizabeth (comp.) *Los nuevos movimientos sociales /2. Derechos Humanos. Obreros. Barrios* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina).
- Gutiérrez, Ricardo 2001 “La desindustrialización del peronismo” en *Política y gestión* (Rosario: Homo Sapiens) Vol. 2.
- Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia 2000 “Reestructuración productiva y formas de la protesta social en la Argentina” en Garza Toledo, Enrique de la (comp.) *Reestructuración productiva, mercado de trabajo y sindicatos en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).
- Kohan, Aníbal 2002 *A las calles. Una historia de los movimientos piqueteros y cacerolazos de los '90 al 2002* (Buenos Aires: Colihue).
- Laclau, Ernesto 1996 *Emancipación y diferencia* (Buenos Aires: Ariel).
- Laclau, Ernesto 2005 *La razón populista* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal 2000 “Posición de sujeto y antagonismo” en Ardití, Benjamín (ed.) *El reverso de la diferencia* (Caracas: Nueva Sociedad).
- Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal 2004 (1987) *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- Martuccelli, Danilo y Svampa, Maristella 1997 *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo* (Buenos Aires: Losada).
- McAdam, D; McCarthy, J. y Zald, M.N. 1999 “Oportunidades, estructuras de movilización y procesos enmarcadores. Hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos sociales” en McAdam, D.;

- McCarthy, J. y Zald, M.N. (comps.) *Movimientos sociales: perspectivas comparadas* (Madrid: Istmo).
- Melucci, Alberto 1994 "Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales" en *Zona Abierta* (Madrid) N° 69.
- Murillo, M. Victoria 1996 "Los sindicatos frente a la reforma del Estado en Argentina y México" en *Sociedad* (Buenos Aires) N° 8.
- Murillo, M. Victoria 2000 "Del populismo al neoliberalismo: sindicatos y reformas de mercado en América Latina" en *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales* (Buenos Aires: IDES) Vol. 40, N° 158.
- Novaro, Marcos 1994 *Pilotos de tormentas. Crisis de representación y personalización de la política en Argentina (1989-1993)* (Buenos Aires: Letra Buena).
- Offe, Clauss 1990 *Contradicciones en el Estado de Bienestar* (Madrid: Alianza).
- Oviedo, Luis 2001 *Una historia del movimiento piquetero. De las primeras coordinadoras a las asambleas nacionales* (Buenos Aires: Rumbos).
- Pizzorno, Alessandro 1994 "Identidad e interés" en *Zona Abierta* (Madrid) N° 69.
- Portantiero, Juan Carlos 1995 "Menemismo y peronismo: continuidad y ruptura" en Boron, Atilio et al. *Peronismo y menemismo. Avatares del populismo en la Argentina* (Buenos Aires: El cielo por asalto).
- Rauber, Isabel 1998 *Una historia silenciada. La discusión social y sindical en el fin de siglo* (Buenos Aires: Pensamiento Jurídico).
- Schmitter, Phillippe 1974 "Still the century of corporatism" in *The Review of Politics*, Vol. 36, N° 1.
- Scribano, Adrián 1999 "La Argentina 'cortada': cortes de ruta y visibilidad social en el contexto del ajuste" en López Maya, Margarita (ed.) *La lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste* (Caracas: Nueva Sociedad).
- Svampa, Maristella 1994 *El dilema argentino. Civilización o Barbarie. De Sarmiento al revisionismo peronista* (Buenos Aires: El cielo por asalto).
- Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián 2003 *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras* (Buenos Aires: Biblos).
- Torre, Juan Carlos; Novaro, Marcos; Palermo, Vicente y Cheresky, Isidoro 1999 *Entre el abismo y la ilusión. Peronismo, democracia y mercado* (Buenos Aires: Norma).

- Touraine, Alain 1989 *América Latina: política y sociedad* (Madrid: Espasa-Calpe).
- Vázquez, Silvia Andrea y Balduzzi, Juan 2000 *De apóstoles a trabajadores. Luchas por la unidad sindical docente 1957-1973. Historia de CTERA I* (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Pedagógicas Marina Vilte/ Confederación de Trabajadores de la República Argentina-CTERA).

ÍNDICE DE SIGLAS

- ANUSATE Asociación Nacional de Unidad y Solidaridad de ATE
AOT Asociación Obrera Textil
APA Asociación del Personal Aeronáutico
ARI Alternativa por una República de Iguales
ATE Asociación de Trabajadores del Estado
CCC Corriente Clasista y Combativa
CGEC Confederación General de Empleados de Comercio
CGT Confederación General del Trabajo
CTERA Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina
FATLyF Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza
FATSA Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad
FJA Federación de Judiciales de Argentina
FOCA Federación Obrera Cerveceros y Afines de Argentina
FOECYT Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones
FOETRA Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina
FRENAPO Frente Nacional contra la Pobreza
FREPASO Frente País Solidario
FTV Federación de Tierra y Vivienda
MOI Movimiento de Ocupantes e Inquilinos
MSPR Movimiento Sindical Peronista Renovador
MTA Movimiento de los Trabajadores Argentinos
MTD Movimiento de Trabajadores Desocupados-La Matanza
MTEySS Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
OSPA Obra Social del Personal Aeronáutico
PJ Partido Justicialista
SAON Sindicato Argentino de Obreros Navales
SICA Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina
SMATA Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor
SUPE Sindicato Único de Petroleros del Estado

- SUTE Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Mendoza
- SUTEBA Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires
- SUTNA Sindicato Único de Trabajadores del Neumático
- UCR Unión Cívica Radical
- UF Unión Ferroviaria
- UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
- UOM Unión Obrera Metalúrgica
- UPCN Unión del Personal Civil de la Nación
- UTA Unión Tranviarios Automotor
- UTPBA Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires

Marcelo Rosa*

SEM-TERRAS E SINDICALISTAS: A INFLUÊNCIA DAS AÇÕES RECENTES POR REFORMA AGRÁRIA NAS LUTAS SINDICAIS NA ZONA DA MATA DE PERNAMBUCO

*No passado foram as Ligas que começaram a navegar
hoje são os sem terra não adianta negar
para se entrar na luta alguém tem que começar.*

Biu da Luz

O SINDICALISMO RURAL brasileiro teve nos trabalhadores das lavouras de cana-de-açúcar de Pernambuco um de seus pontos de apoio mais fortes. As greves aí realizadas, no final dos anos setenta, reivindicando melhores condições de trabalho, foram as maiores manifestações de trabalhadores rurais da história do país. Com elas os sindicalistas locais se notabilizaram como os mais ativos do país. A postura preponderante voltada para questões de ordem trabalhista, que caracterizava a prática política daqueles sindicatos, mudou radicalmente em meados dos anos noventa quando a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco (FETAPE) passou a capitanear um expressivo número de ocupações de terra na região canavieira; chegando, em determinados momentos, a suplantarem o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que tradicionalmente detinha o monopólio desta reivindicação em todo o país.

Como esta alteração de perspectiva e de atuação se processou e quais os seus efeitos para a estrutura sindical de uma das principais federações de trabalhadores rurais do país? Este artigo pretende for-

* Doutor em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), Brasil. Professor do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito na Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, Brasil.

necer algumas pistas para tais questões a partir dos dados de uma pesquisa realizada entre o final de 2002 e meados de 2003 na região da Zona da Mata de Pernambuco. Nas próximas páginas, depois de uma breve apresentação da história da formação do sindicalismo rural em Pernambuco, pretendo reconstituir o processo que levou a FETAPE a ingressar na seara das ocupações de terra, demonstrando que, mais do que uma estratégia deliberada, este tipo de mudança foi reflexo de um intenso drama social que envolveu gerações distintas de sindicalistas.

ESTADO DAS ARTES: HISTÓRIA DOS SINDICATOS E DAS LUTAS POR TERRA E SALÁRIO NA ZONA DA MATA DE PERNAMBUCO

A região do litoral de Pernambuco, no nordeste do Brasil, é conhecida geograficamente por Zona da Mata (em referência à Mata Atlântica localizada à costa brasileira). Neste local foram introduzidas as primeiras lavouras de cana-de-açúcar do país ainda no período colonial. Em torno dessa estrutura produtiva (*plantation*) se formou uma oligarquia de grandes proprietários com forte poder econômico. Esses senhores de engenho exerciam enorme influência sobre o Estado brasileiro, tendo como lastro de sua força centenas de milhares de trabalhadores rurais reunidos sob seu comando.

LUTAS POR TERRA

Em meados da década de 1950, o sindicalismo rural ainda não havia sido regulamentado do Brasil. Nesse período na cidade de Vitória de Santo Antão na Zona da Mata, um grupo de agricultores que cultivavam suas lavouras em terras arrendadas criou uma associação de plantadores em um engenho chamado Galiléia. Identificada pelos proprietários como uma ameaça a seu poder centenário, a pequena associação foi tenazmente combatida e seus associados ameaçados de expulsão da terra.

Aquilo que era um movimento isolado de um grupo de agricultores, logo passou, pela própria intransigência dos proprietários das terras, a ser um ícone das reivindicações por reforma agrária na região. Associados pela imprensa local com ligas camponesas que haviam sido formadas pelo Partido Comunista na década de quarenta, os plantadores do engenho Galiléia acabaram por assumir oficialmente o nome de Liga Camponesa e, auxiliados por grupos políticos de esquerda, se ampliaram rapidamente em toda Zona da Mata e em diversos outros estados do país.

A partir desta vinculação entre reforma agrária e grupos de esquerda (vulgarmente chamados de comunistas), setores importantes da igreja católica se envolveram em serviços de formação e orientação de lideranças rurais, nos diversos estados do nordeste, ainda no final dos anos cinquenta. Os grupos organizados pela igreja católica formaram um grande contingente de jovens, por toda a Zona da Mata, os quais,

aos poucos, passaram a fundar sindicatos de trabalhadores rurais (STR's) em diversas cidades. Tais sindicatos deveriam coibir o avanço das ligas. Além da igreja, ironicamente, o próprio Partido Comunista Brasileiro, que nunca chegou a aceitar completamente as alternativas de “revolução camponesa” propaladas no processo de expansão das ligas, passou a investir na sindicalização rural como uma das formas de penetrar sua política no campo brasileiro.

Nessas disputas, gradualmente foi sendo gestada uma polarização que punha, de um lado, as Ligas Camponesas associadas diretamente com a reforma agrária e, de outro, os sindicatos de trabalhadores rurais que visariam a regulamentação das condições de trabalho nas lavouras. Cabe advertir, no entanto, que as divergências estavam referidas mais ao espectro de orientação teórico dos grupos, do que às suas práticas. O próprio Francisco Julião (1969), que se tornou a principal figura das Ligas, em uma das suas manifestações saudou a criação dos sindicatos de orientação comunista ou religiosa como uma frente aliada às Ligas, incentivando que seus membros também se filiassem aos sindicatos de trabalhadores rurais¹. Nos primeiros anos da década de 1960, pressões dos partidos políticos, de setores da igreja católica e das organizações sindicais que começam a se formar propiciaram condições favoráveis à regulamentação específica da atividade sindical no campo em todo o país. A partir desse período, o número de sindicatos aumentou significativamente, sobretudo em Pernambuco, onde foi criada, associando católicos e comunistas, a FETAPE. A expansão e consolidação do sindicalismo rural naquele estado também foram favorecidas pela ascensão, em 1963, ao governo do estado de Pernambuco, de Miguel Arraes, um candidato que teve o apoio tanto das Ligas, como de importantes parcelas do sindicalismo rural.

Depois da regulamentação do sindicalismo rural e da criação de uma estrutura estatal que dava apoio à sua formação, as Ligas perderam seu papel de principais protagonistas das reivindicações camponesas, ocupando um lugar secundário, que lhes dava um diminuto poder de barganha política. Esta situação agravou-se mais ainda depois do golpe militar de 1964, quando os principais dirigentes da Ligas foram presos, assassinados ou exilados, como ocorreu com o próprio Julião e com o governador Miguel Arraes. Em meados da década de sessenta as Ligas já faziam parte do passado das organizações rurais.

¹ Nesta mesma época já havia, principalmente nos estados do sul do Brasil, uma federação de trabalhadores e lavradores chamada União dos Trabalhadores e Lavradores Agrícolas do Brasil (ULTAB) que fora criada sob influência direta do Partido Comunista Brasileiro.

AS LUTAS POR DIREITOS

O gradativo fim das Ligas teve lugar, concomitantemente, com o fortalecimento do sindicalismo rural que, em 1963, criou, sob a chancela do governo federal, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). A CONTAG seria o único órgão nacional de representação dos trabalhadores rurais ao qual estariam filiadas as federações estaduais (como a FETAPE, por exemplo) que, por sua vez, congregariam os sindicatos municipais. Veja-se o Quadro 1.

Quadro 1
Organograma do sindicalismo rural brasileiro



Fonte: CONTAG (2005).

A CONTAG foi formada com predominância de sindicalistas católicos, mas teve o abono também de grupos comunistas: seu presidente era de São Paulo e o vice-presidente da FETAPE, isto é, de Pernambuco. Nesse processo de sociogênese institucional ou corporativa as demandas por reforma agrária, mesmo presentes nas principais resoluções do sindicalismo, como pano de fundo em todos os seus manifestos e publicações, deixaram gradativamente de ser uma prioridade prática dos sindicalistas rurais.

Em 1964, logo após o golpe, o governo militar decretou intervenção na CONTAG e em sindicatos de todo o país, afastando as diretorias eleitas. A intervenção durou até 1967, quando um grupo liderado por um sindicalista pernambucano disputou e venceu a chapa dos interventores, numa eleição para a diretoria da entidade. Desde aquele evento, quando se desafiou a ordem imposta pelo governo ditatorial, o sindicalismo rural de Pernambuco se tornou uma referência para todo o país.

Durante o período do governo militar, os sindicatos da Zona da Mata de Pernambuco se desvencilharam das influências religiosas e, liderados pela FETAPE, marcaram sua atuação basicamente pelas batalhas jurídicas contra os grandes proprietários de terra que desrespeitavam suas obrigações legais para com o empregados. É importante ressaltar que se tratava de um tempo de grande perseguição às lideranças políticas de esquerda no Brasil e que suas ações pela manutenção de direitos trabalhistas se desenrolavam nos tênues limites dos marcos legais postos e impostos pelo governo. Nesta mesma época ainda, dado um suntuoso e inaudito investimento estatal, a lavoura de cana conheceu uma era de grande prosperidade alavancada pelo PROALCOOL, programa governamental de incentivo à cultura de cana-de-açúcar que subsidiava a produção de álcool combustível visando a substituição do petróleo.

O progressivo aumento dos incentivos estatais à produção de cana não foram porém acompanhados de melhorias relativas nas condições de trabalho dos canavieiros. No final dos anos setenta, em 1979, a FETAPE organizou, respeitando todas as exigências legais, a maior greve de trabalhadores rurais da história do país, mobilizando cerca de 250 mil canavieiros na Zona da Mata que se levantaram em busca de seus direitos trabalhistas.

Os acontecimentos de setembro de 1979 serviram como um sinalizador das potencialidades do sindicalismo em mobilizar a enorme massa de trabalhadores da lavoura canavieira, de modo que no ano seguinte uma mobilização ainda maior amealhou os canavieiros em luta. As manifestações de 1979 e 1980 criaram e consolidaram as greves e as campanhas salariais como o principal instrumento de pressão do sindicalismo rural de Pernambuco e do Brasil. O sucesso das greves da zona canavieira teve grande repercussão na Confederação nacional que propagava e reafirmava o caráter exemplar das ações promovidas naquela região pelos quatro cantos do país. Tavares (1992) demonstra que as greves se tornaram o emblema máximo do sindicalismo nacional, constituindo-se num modelo que deveria ser seguido por todos os estados. Durante a primeira metade dos anos oitenta, sindicalistas de todo o país visitaram a Zona da Mata no período em que eram realizadas as campanhas salariais, para aprenderem como se organizavam greves e campanhas salariais.

O relativo sucesso das reivindicações por melhores condições de trabalho reafirmou a proeminência da FETAPE no sindicalismo rural brasileiro, consagrando também seus dirigentes.

A prosperidade da lavoura canavieira e dos sindicatos manteve-se até o final da década de oitenta. Durante o governo de Collor de Mello (1990-1992) foram cancelados os subsídios à produção de álcool e açúcar e revogada uma série de vantagens concedidas aos produtores de cana como, por exemplo, a garantia de compra pelo governo federal de todo o excedente produzido. Nesta conjuntura, veio mais uma vez à tona a dependência dos grandes produtores de cana-de-açúcar em relação ao Estado. O corte dos incentivos parece ter incidido diretamente sobre a produção. Vejamos a Tabela 1.

Tabela 1
Cana-de-açúcar. Produção 1986-1995 em milhares de toneladas

Safra	Cana colhida
1986-1987	2.576.011,6
1987-1988	2.011.060,0
1988-1989	2.049.949,8
1989-1990	2.188.628,9
1990-1991	1.867.926,0

Tabela 1 [continuação]

Safra	Cana colhida
1991-1992	1.832.815,7
1992-1993	1.725.259,8
1993-1994	1.205.593,8
1994-1995	1.695.531,8

Fonte: Sindaçúcar/PE (2003).

O endividamento da maioria dos produtores contribuiu para que, diante da ausência de subsídios, a produção fosse sendo gradualmente reduzida. Esta queda teve reflexos diretos sobre os trabalhadores rurais. Informalmente os sindicalistas estimam, a partir do número de filiados, que o conjunto dos trabalhadores nas lavouras de cana tenha diminuído de cerca de 240 mil (no tempo das greves dos anos oitenta) para menos de 100 mil (na segunda metade da década de noventa).

Diante deste quadro de arrefecimento dos investimentos públicos no setor, quatorze das principais usinas de beneficiamento de cana foram fechadas ao longo da década². Muitos dos engenhos onde a cana era plantada ficaram abandonados ou foram entregues aos bancos estatais para o pagamento de dívidas. Ao longo desse processo, estas empresas demitiram seus trabalhadores sem o pagamento de qualquer indenização, alegando não terem fundos para arcar com as despesas contratuais³.

A reação inicial dos sindicatos e da FETAPE foi incentivar os trabalhadores, assim como nos anos setenta, a recorrerem à justiça para receber a indenização. No entanto, o endividamento dos donos de terra era tão pesado que grande parte deles não possuía de fato fundos para saldar suas obrigações patronais.

Nesse contexto foi revelado um dos paradoxos que estruturaram a notoriedade dos sindicatos rurais na região. Para que um sindicato tivesse sucesso nas suas demandas o mesmo precisava que elas fossem, de alguma forma, atendidas pelos patrões. Enquanto os incentivos estatais garantiram a boa saúde das oligarquias, os trabalhadores da região conquistaram avanços importantes nas suas condições de trabalho e também na sua remuneração, que era a mais alta de todos os trabalhadores rurais do país. Quando a oligarquia foi atingida no seu principal sustentáculo, o Estado, os trabalhadores e os próprios sindicatos perderam seu ponto de referência.

2 Segundo dados do *Jornal do Comércio*, edição de 25/06/2000.

3 No Brasil a demissão de um funcionário sem justificativa obriga o patrão ao pagamento de uma multa.

O MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) nasceu nos estados do sul do Brasil em reação a um reconhecido processo de concentração fundiária. Descendentes de colonos europeus, que gradualmente perderam suas parcas terras, capitanearam no final dos anos setenta as primeiras fileiras dessa organização que viria a ser uma das mais emblemáticas contemporaneamente da luta pela reforma agrária.

Críticos à restrita legitimidade das lutas trabalhistas (que podemos para efeitos analíticos nomear como “modelo pernambucano”), sindicalistas, universitários e também religiosos se aliaram a esses agricultores sem-terra e montaram um acampamento formado por barracas de lona preta em uma fazenda no norte do estado do Rio Grande do Sul. Ao princípio, suas manifestações visavam resolver o problema específico de reprodução desse grupo social, para o qual a posse da terra era um elemento central. Com o passar dos anos as demandas desses chamados colonos foram sendo ampliadas e, em 1984, seus principais líderes fundaram formalmente o MST, cujo objetivo central era lutar pela reforma agrária em todo o país.

No decorrer dos anos oitenta o MST foi se alastrando para outros estados brasileiros e suas manifestações pela desapropriação de latifúndios improdutivos se tornaram o símbolo por excelência da demanda por reforma agrária no país.

A reforma agrária nas mãos do MST ganhou uma forma própria de ser expressa, epitomizada por um conjunto de símbolos políticos tanto peculiares, quanto fortes. O acampamento nas áreas improdutivas, as barracas de lona preta e a bandeira vermelha tornaram-se a marca registrada do grupo. Com esses símbolos, a presença dos sem-terra passou a se tornar pública na dupla acepção desse termo: tanto a sociedade começou a reconhecer essas pessoas e suas questões, quanto o Estado precisou assumir que não poderia mais se furtar diante daquelas pressões. A gradativa aceitação, por parte dos órgãos estatais, de algumas demandas do MST contribuiu também para sua consolidação como um representante legítimo dos trabalhadores rurais que se consideravam sem-terra. Nesse processo, a sede do movimento foi transferida de Porto Alegre para São Paulo, o centro econômico do país. Ao mesmo tempo, os acampamentos se proliferaram por várias regiões do país. O MST se organizaria então a partir de uma coordenação nacional, que congregava coordenações estaduais, regionais e municipais.

CONSEQÜÊNCIAS, PARA O SINDICALISMO RURAL, DA CONCORRÊNCIA COM O MST

O MST aporta em Pernambuco em 1989, ano da primeira eleição para presidente da república depois do golpe de 1964. Reunindo militantes que estavam nos estados vizinhos e com o apoio de alguns prefeitos mu-

nicipais, o movimento organizou a ocupação de uma área pertencente ao governo do estado na Zona da Mata. Esta ocupação é considerada atualmente, pelos dirigentes do MST, um fracasso, pois se tratava do governo de Miguel Arraes, uma figura unânime entre os agricultores, que acabara de retornar do exílio. Ao se negar veementemente a atender a solicitação dos sem terra, instalou-se entre o governador e o movimento uma tensão. A principal justificativa do governo à época foi de que o MST não era um representante legítimo dos trabalhadores rurais de Pernambuco, já que suas lideranças vinham de outros estados. A falta de apoio da FETAPE, sem dúvida a única entidade considerada legítima para representar os trabalhadores da região, foi outro fator decisivo para os problemas de interlocução do MST com os representantes do governo de Miguel Arraes.

Poucos dias depois da ocupação, os militantes e as famílias que haviam montado o acampamento foram violentamente removidos pela polícia. Do acampamento todos se transferiram para a frente do palácio do governo, na cidade de Recife. Depois de um longo período de negociações o governo teria oferecido uma área de terra na região mais árida do estado, para onde as famílias acabaram por se dirigir. A falta de infra-estrutura teria levado os sem-terra a abandonarem a área ofertada, ao longo dos meses seguintes.

O MST somente voltaria à região da Zona da Mata no ano de 1992. Desta feita, ao contrário de 1989, seus militantes procuraram manter contato com os sindicatos de trabalhadores rurais. Diante dos primeiros sinais de queda na produção canavieira e da diminuição dos postos de trabalho na região, a proposta do MST de mobilizar trabalhadores rurais para ocuparem engenhos que não estivessem produzindo soou interessante para os sindicalistas de duas cidades do sul da Zona da Mata. Em ambos os casos os presidentes dos sindicatos, que somente conheciam o MST pela televisão, viram nas suas propostas uma possibilidade plausível para mobilizar os trabalhadores rurais da região.

Segundo um desses dirigentes, da cidade de Rio Formoso, os militantes do MST o haviam procurado para pedir abrigo nas dependências do seu sindicato enquanto estivessem fazendo seu “trabalho de base” na cidade, ou seja, enquanto visitavam as periferias do pequeno município convidando trabalhadores rurais desempregados para participar de uma ocupação de terra. O trabalho dos militantes do MST atraiu a atenção do presidente e também de um pequeno grupo de jovens que ocupavam posições inferiores na hierarquia do sindicato. O que deveria ser apenas uma ajuda do sindicato ao MST se transformou em trabalho conjunto das duas organizações.

Em abril de 1992, no período de entressafra da cana (quando muitos dos trabalhadores rurais ficam sem emprego), militantes do MST e dirigentes sindicais realizaram a ocupação de um engenho improdutivo

nesta cidade. Mesmo não tendo sucesso na reivindicação da área, aquela ocupação serviu como uma espécie de sinal para sindicalistas e trabalhadores rurais da região de que surgia uma alternativa aos modos já tradicionais de luta, tais como as greves e os processos judiciais.

Neste trabalho não poderei tratar dos pontos de vista dos trabalhadores rurais em relação às ocupações, mas creio que o trabalho de Sigaud (2001) forneça pistas suficientes para a compreensão do sentido de seu engajamento nesta novidade. Da perspectiva dos sindicalistas, a ocupação parece ter servido como um novo tempero às suas atividades, pois mesmo depois de despejados da primeira ocupação, o grupo manteve o acampamento em outras áreas, configurando o que Sigaud (2001) chamou de uma “saga” de ocupações, que, no ano de 1995, culminaram nas primeiras desapropriações de terra para fins de reforma agrária na região.

De fato, após esta primeira ocupação, os militantes do MST e dirigentes sindicais daquela pequena cidade estabeleceram uma espécie de concorrência por áreas que estavam sem produzir. Neste período, Rio Formoso foi dividida em dois municípios (uma parte da cidade foi emancipada) e um novo sindicato foi formado com a liderança de um jovem sindicalista, oriundo da diretoria do sindicato antigo. Essa jovem liderança, que havia participado da primeira ocupação feita em conjunto com o MST, tornou-se o principal organizador de acampamentos da região e fez da reforma agrária sua principal marca⁴.

Entre 1992 e 1995 foram organizados acampamentos em outras cidades da Zona da Mata, alguns por sindicatos e outros pelo MST. Em 1993 a FETAPE, sob a luz dos eventos do ano anterior, alterou seus estatutos e, pela primeira vez em sua história, criou uma diretoria específica para tratar da reforma agrária. Segundo o dirigente que assumiu a diretoria de reforma agrária, sua pasta não significou muitas mudanças na perspectiva da FETAPE em relação às ocupações de terra. A atuação da Federação teria se limitado a apoiar ou mediar as negociações nos acampamentos montados pelos sindicatos ou pelo MST. Segundo este mesmo senhor, os dirigentes mais antigos, a quem chamou de *históricos*, relutavam em associar a FETAPE às ocupações de terra. A reticência dos diretores mais antigos e do próprio presidente da Federação concentrava-se no fato de que as ocupações, que eram consideradas ilegais e condenadas pelos principais jornais da região, romperiam com a tradição da Federação de defender os trabalhadores dentro dos marcos legais.

A dificuldade da FETAPE em assumir a bandeira das ocupações também pode ser atribuída à novidade que as ocupações representavam

4 Dados comprovados pelos pedidos de desapropriação de terras solicitados ao INCRA.

para a região. Tratava-se de uma experiência inédita que na época ainda não havia produzido resultados satisfatórios⁵.

A posição cautelosa da FETAPE somente começou a se alterar a partir de 1995. Este ano parece sido decisivo para os propósitos tanto da FETAPE, como do MST. Numa das inúmeras manifestações conjuntas que as duas entidades promoveram, tendo sempre o MST à frente, a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) foi ocupada. A demanda principal a ser atendida era a nomeação de um diretor permanente para o órgão, que se responsabilizasse pela implementação dos assentamentos de reforma agrária. A manifestação teria sido violentamente reprimida pela polícia, o que levou os dirigentes da FETAPE a retirarem os trabalhadores do local, enquanto os do MST permaneceram. Quando, horas depois de sua retirada, o presidente da república nomeou um novo superintendente para o cargo, os louros da conquista foram revertidos apenas para o MST.

Se até aquele evento o MST precisou se associar à FETAPE para garantir sua legitimidade, depois de ter saído “vitorioso” ao garantir a nomeação de um novo diretor, o movimento sentiu-se independente e abandonou o diálogo com a Federação⁶. Daquele momento em diante o MST intensificou as ocupações de terra por toda a Zona da Mata.

Não há como recuperar os dados de todas as ocupações de terra feitas nos primeiros anos da década de 1990. Também não existem registros confiáveis sobre quais seriam as organizações atuantes. Os dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), no entanto, indicam o ano 1995 como um marco na intensificação das ocupações na região. Vejamos a Tabela 2.

Tabela 2
Zona da Mata de Pernambuco. Ocupações de terras 1993-2000

Ano	Ocupações
1993	1
1994	6
1995	21
1996	57
1997	55
1998	76
1999	61
2000	87

Fonte: Comissão Pastoral da Terra (2003).

5 Lembro que as primeiras desapropriações realizadas pelo governo federal datam do ano de 1995, ou seja, dois anos depois da implantação da secretaria de reforma agrária na FETAPE.

6 Segundo dados de entrevista com lideranças do MST.

No mesmo ano ocorreu outra eleição na FETAPE. O grupo *histórico* (dos dirigentes que participaram das primeiras greves) foi, mais uma vez, vencedor e a principal alteração na composição da diretoria foi a mudança na secretaria de reforma agrária. O secretário anterior foi substituído por um sindicalista mais jovem, oriundo da cidade de Vitória de Santo Antão –a mesma das Ligas Camponesas. João Santos era, pelo menos, vinte anos mais novo do que os principais dirigentes. Ele era filho de um importante líder sindical dos anos sessenta e setenta. Foi funcionário da FETAPE entre o final dos anos oitenta e o início dos noventa, em um pequeno município da região. Naquela cidade conheceu alguns militantes do MST que organizavam um grande acampamento. Quando seu pai deixou a direção do sindicato, depois de várias décadas, ele foi indicado para substituí-lo. Eleito pela primeira vez em 1993, organizou logo a seguir a primeira ocupação de terras conduzida por um sindicato, sem a colaboração direta do MST.

João entrou para a FETAPE no final de 1996 e, já no início do ano seguinte, a Federação passou a assumir publicamente a coordenação das ocupações de terra e acampamentos na região. Da mesma época data a criação da bandeira da FETAPE que passou a marcar, assim como já fazia a flâmula do MST, a filiação dos agricultores nos seus acampamentos. Sob a coordenação de João, a Federação tratou de incorporar os símbolos que antes eram somente utilizados pelo MST, ampliando igualmente o leque de ações dirigidas à ocupação de prédios públicos e, principalmente, da sede do INCRA em Recife.

Nesta época a FETAPE começou a disputar com o MST o número de áreas de acampamentos na região da Zona da Mata. No ano de 1997 a FETAPE realizou o mesmo número de ações que o MST na região metropolitana de Recife. Na Zona da Mata foi responsável por cerca de 30% das ocupações, enquanto o MST respondeu por 47% dos casos⁷.

Sob a batuta de João Santos, a FETAPE voltou novamente à vanguarda do sindicalismo rural brasileiro, tornando-se a primeira federação sindical do país a realizar ocupações de terra. Na esteira desse sucesso o presidente da FETAPE foi eleito para dirigir a CONTAG, ou seja, as ocupações teriam reforçado o reconhecido mérito do dirigentes pernambucanos.

Na eleição local seguinte, João Santos foi mantido no cargo de secretário de política agrária e intensificou ainda mais as ocupações de terra na região da Zona da Mata. O sucesso dessas, medido pela sua grande repercussão nos jornais, trouxe a FETAPE novamente à cena política de Pernambuco. No entanto, os feitos exaltados publicamente já não corres-

7 Segundo dados do INCRA para 1997.

pondiam aos feitos até então capitaneados pelo grupo *histórico*. Mesmo que tivessem apoiado a criação da secretaria de reforma agrária, os sindicalistas do grupo *histórico* nunca chegaram a participar efetivamente das ocupações, ou dos acampamentos promovidos por João Santos.

CONFLITOS INTERNOS

No ano de 2001 fui pela primeira vez a um evento promovido pela FETAPE em Pernambuco. Tratava-se de um encontro entre os dirigentes estaduais e os “delegados”, isto é, os representantes dos sindicatos nos locais de trabalho da região da Zona da Mata.

O evento era dedicado a organizar a pauta de reivindicações que a FETAPE entrega às entidades patronais em todo o mês de setembro, desde as greves de 1979. Esses encontros voltavam-se há décadas para os problemas relativos às condições de trabalho na lavoura da cana. Nessa ocasião, em especial, boa parte do tempo de debates entre os sindicalistas foi dedicada às estratégias de reivindicação que poderiam ser adotadas para a efetivação da demandas que estavam sendo formuladas. Naquele contexto chamava atenção a comparação constante entre as campanhas salariais (greves e direitos) e as lutas por reforma agrária (acampamentos).

Erguendo a primeira bandeira estavam os diretores da FETAPE que, na sua maioria, estiveram à frente das greves de 1979, e também das bem-sucedidas campanhas salariais dos anos oitenta, que elevaram a FETAPE ao patamar de principal federação do país. Suas manifestações lembravam os grandes feitos das décadas anteriores e cobravam dos mais jovens a continuidade daquelas estratégias. As respostas dos mais jovens, sindicalistas que não haviam sido socializados no período das greves, era a condenação dos limites das estratégias passadas na sua utilização presente. Em seus discursos propunham que as lutas por salários deveriam ser pensadas no contexto da “crise” das usinas e, portanto, da própria atividade canavieira como centro da vida social da região.

O ápice da disputa entre os dois grupos ocorreu no momento em que o secretário de reforma agrária (ligado aos jovens) propôs a realização de uma manifestação pela desapropriação de terras em plena campanha salarial. A reação da maioria dos presentes foi indignada, pois, ao cabo, aquela proposta rompia com a mais forte tradição do sindicalismo da região que era a unidade de todos, mesmo os que eram considerados inimigos internos, ao tempo da campanha salarial. Não era possível que uns estivessem em uma frente de luta (a campanha salarial) e, outros frente a manifestações em torno da reforma agrária. Como resumiu um velho sindicalista: “reforma agrária tem o ano todo, mas campanha salarial somente em setembro”.

Se os procedimentos tradicionais não fossem tomados como uma obrigação quase natural por todos, a própria magia que animara a vida

sindical nos últimos anos poderia ser desfeita. A campanha salarial estava, portanto, muito além de um mero instrumento reivindicativo que poderia ser medido por seus resultados práticos. Como alertou Sigaud, o “ciclo de greves”, iniciado em 1979, mesmo que não tenha sempre alcançado avanços na regulação do trabalho, tratavam-se de momentos de “afirmação de identidade dos trabalhadores, do fortalecimento de sua unidade em torno de objetivos comuns. Um espaço privilegiado para a consagração do consenso” (Sigaud, 1986: 328).

Embora as campanhas salariais não apresentassem a mesma eficácia prática de tempos anteriores, sua força residia na manutenção da crença que era nutrida a cada pronunciamento de um sindicalista mais antigo. Os feitos passados forneciam o combustível para o pertencimento a uma entidade que a cada dia via seus quadros encolherem, como podemos ver no depoimento de um dos sindicalistas que organizou a greve de 1979 (entrevista):

Dirigente – Amanhã uma chapa só, porque não apareceu outra para disputar. Então aqui a diferença do sindicato que a gente tinha para o que a gente tem hoje é de 95%.

Entrevistador – O que mudou?

Dirigente – Nós temos 5% do que a gente tinha antes.

Entrevistador – Quais são os 5%?

Dirigente – Porque nós tínhamos, digamos assim, 3.500 associados. 3.500 associados. E agora nós temos ao todo 210.

Entrevistador – Duzentos e dez, só?

Dirigente – Associados em dia com o sindicato. A eleição de amanhã é só 260 pessoas que vai votar. Quem tinha 3.000, 3.000 e poucos associados, então isso caiu todas as rendas do sindicato. A gente não tem mais funcionários no sindicato. Não temos mais carro no sindicato [...] Então a gente até dividiu o trabalho.

Entrevistador – Como é que foi?

Dirigente – Porque são três diretores. Eu trabalho segunda e terça, sozinho lá, fazendo tudo. Então o tesoureiro trabalha quarta e quinta, fazendo tudo. Agora na sexta é que junta nós três pra ver o que fica. Passou-se na semana. Que o presidente você sabe, tem que coordenar de qualquer maneira o que acontecer, tem que estar por dentro de tudo para fazer a coordenação.

No entanto, essa fonte de orgulho que do passado lançava um raio de luz para iluminar a penumbra do presente tinha efeitos diversos para as distintas gerações de dirigentes. Os mais antigos se alimentavam de algo no qual foram socializados, ou seja, que realmente lhes tinha sido

fundamental, até mesmo para chegarem à destacada posição social que ocupam hoje. Já para os mais jovens, que não viveram o tempo das greves e adentraram a vida sindical exatamente no momento em que a crise das usinas se intensificava, a memória não servia como alento. Ao contrário, a idealização do passado parecia reafirmar a falta de sentido presente daqueles rituais de conagração, como as campanhas salariais, por exemplo.

O relativo sucesso alcançado pelas reivindicações por reforma agrária pelo MST, mas principalmente por João Santos, que a cada dia ocupava mais espaço nos meios de comunicação com suas ocupações, serviu de farol aos que não encontravam rumo nas palavras dos mais velhos.

As disputas entre as gerações de sindicalistas que foram socializados em períodos distintos se intensificaram a medida que o tempo foi passando. Entre 2001 e 2003, acompanhei uma série de eventos públicos e privados envolvendo sindicalistas de todas as idades. Os mais velhos, sempre que tinham oportunidade, reafirmavam a importância das greves e da mesa de negociação como meios adequados para resolver os principais conflitos com o governo e com as entidades patronais. Ao mesmo tempo criticavam os mais jovens pela falta de temperança, pela forma dita aventureira e individualista como conduziam as reivindicações por reforma agrária. Por outro lado, os sindicalistas envolvidos com as ocupações de terra acusavam seus predecessores de não gostarem de conflitos e de estarem interessados apenas na manutenção de suas posições. Criticavam ainda o grupo *histórico* por não permitir a ascensão de sindicalistas mais jovens aos postos mais importantes da Federação, ou seja, de ter monopolizado as posições de maior prestígio e poder.

De forma sintética foi se estabelecendo entre os grupos uma polarização com estes elementos:

Quadro 2
Oposições classificatórias entre as duas gerações de sindicalistas

Reforma agrária	Lutas pelos direitos trabalhistas e outras
Jovens	Velhos
Presente	Passado
Ocupação	Negociação
Inexperiência	Experiência
Irresponsabilidade	Responsabilidade

Fonte: Pesquisa de Campo 2003.

As diferenças entre os *históricos* e o grupo ligado à secretaria de reforma agrária foram se acentuando a cada reunião da Federação. Em determinado momento, as ocupações de terra ou de prédios públicos já não contavam com o apoio da direção *histórica* da FETAPE.

A ÚLTIMA BATALHA

Em meio a esse processo teve lugar mais uma eleição para a direção da FETAPE em 2003. O grupo *histórico* formou sua chapa e a princípio excluiu o nome do secretário de reforma agrária. Neste momento, encontrei com João Santos que, muito emocionado, chegou às lágrimas quando falou de sua exclusão da chapa principal.

Deste conflito resultou a formação de duas chapas para a disputa da eleição. Uma formada pelo grupo *histórico*, que colocou no cargo principal um jovem sindicalista sem ligação com as ocupações de terra, e a outra formada por João Santos e pelo secretário de reforma agrária que o antecederá. A disputa novamente se concentrou na polaridade entre reforma agrária e lutas salariais, ou seja, entre uma postura dita combativa, associada com as ocupações, e uma conduta responsável e negociadora que não excluía a luta por reforma agrária, mas a realizaria em termos menos conflituosos.

A chapa *histórica* foi representada pela cor verde e a chapa de João Santos pela cor vermelha, transformando os significados populares de cada uma das cores –verde representando esperança e paz, e vermelho, o combate– na proposta de cada facção.

Menos que dividir a unidade tradicional do sindicalismo rural pernambucano, as evidências que colhi durante minha pesquisa apontam para o caráter renovador dos conflitos que se processaram nestes últimos anos no âmbito da FETAPE.

Para Durkheim (1995), “um grupo não é apenas uma autoridade moral que rege a vida de seus seres humanos, é também uma fonte de vida *sui generis*. Dele emana um calor que aquece ou reanima os corações, que os abre a simpatia, que faz ruir os egoísmos”. Porém, como o mesmo autor adverte, este calor que dota de sentido a vida dos indivíduos muda de intensidade com o passar dos anos. A força da história, como processo contínuo de acumulação de experiência, colabora para que os indivíduos se diferenciem a partir de sua socialização. Naquela eleição eram visíveis as diferenças entre sindicalistas socializados em contextos distintos. Como vimos, no caso do congresso de delegados que acompanhei, a própria possibilidade de se recorrer a uma memória idealizada de sucesso no *tempo das greves* despertava sentimentos opostos entre os dirigentes sindicais do grupo histórico e do grupo de ascendente. Para uns, servia de alento em um momento de incerteza e, para outros, demonstrava o descompasso entre as necessidades presentes e as realizações passadas.

As contendas entre o grupo *histórico* e o da reforma agrária animaram de tal forma a vida sindical de Pernambuco que produziram o maior congresso sindical de todos os tempos. Partidários de um grupo e de outro sentiram-se impelidos a estar fisicamente presentes no dia da eleição da nova diretoria. Vestindo suas camisetas verdes ou vermelhas e entoando animados hinos ao som de pequenas orquestras, trabalhadores rurais de todas as partes do estado rumaram para Recife. Naquele momento, estava em jogo a afirmação moral daqueles que se sentiam mais próximos do tempo das greves, ou do tempo da reforma agrária.

Como em todas as eleições anteriores, o grupo *histórico* sagrou-se vencedor da disputa, porém, com uma diferença de votos menor que a de todas as eleições anteriores. Teria a reforma agrária sido derrotada?

UM NOVO COMEÇO

Como descrevi anteriormente, o final do período em que o candidato derrotado no último pleito ocupava a secretaria de reforma agrária foi marcado por uma série de conflitos entre seus simpatizantes e o grupo que aqui chamo de *histórico*. Um dos ícones de suas divergências eram justamente as ocupações da sede INCRA, que tinham se tornado uma rotina nos últimos anos. Consideradas por todos como uma das marcas dos novos tempos da FETAPE (do tempo da reforma agrária), as ocupações deste órgão federal foram, em todas as vezes que acompanhei, planejadas e executadas quase sem interferência da direção da Federação, que era comunicada da ação apenas na última hora. A alegada autonomia do grupo da reforma agrária incomodava os dirigentes mais antigos, tanto pelo fato de não participarem da decisão, como também por se tratar de um evento que, em muitos casos, colocava em cheque o próprio mito da FETAPE ser uma entidade que sabia negociar.

No entanto, o primeiro grande evento organizado pela FETAPE que acompanhei após a vitória do grupo histórico foi uma ocupação do INCRA pelos dirigentes do grupo *histórico*.

O que então teria levado o grupo que vencera a eleição da Federação a lançar mão, meses depois da eleição, do mesmo artifício que em tempos passados havia sido tão criticado, ou seja, a realizar também uma ocupação do órgão federal? A resposta estava na própria ocupação que visitei dias depois.

A ocupação que tomava a sede do INCRA naquela manhã de segunda-feira guardava poucas semelhanças com os eventos que eu acompanhara nos anos anteriores. Se nos momentos passados a presença de uma pequena massa de trabalhadores rurais no pátio do instituto era sinônimo de tensão e conflito iminente, naquele evento de 2003 o clima era de festa. No pátio do órgão estava armada uma pequena feira composta por barraquinhas que vendiam produtos agrícolas, outras

que ofertavam artesanato, e também por balcões das diversas ONGs que prestam assessoria à FETAPE. Havia ainda um carro de som e um trio de zabumba, sanfona e triângulo que animava o evento.

Esta disposição em nada lembrava as ocupações que eu havia presenciado anteriormente, fossem as organizadas pela FETAPE, pelo MST, ou por outros grupos. O arranjo estético distinto, ou seja, a disposição das pessoas ligadas à FETAPE nas dependências do INCRA, indicava sua organização para fora dos muros do órgão federal. No lugar das lonas pretas, das foices, pedaços de pau e enxadas, podiam ser vistos murais de cartolina com fotos e frases exemplares escritas com pincel atômico que lembravam os áureos tempos da FETAPE. Em meio a amontoados de mandioca, mulheres debulhando feijão de corda eram saudadas pelos líderes sindicais que circulavam por entre as barracas, declarando para todos ouvirem as benesses alcançadas com o trabalho na terra. O modelo do evento lembrava muito mais as assembléias que antecedem a campanha salarial, e os demais encontros que são promovidos pela Federação para tratar de assuntos como a previdência social, por exemplo. Ao contrário das outras ocupações cuja intenção era surpreender os diretores do órgão para obrigá-los a permanecer no local e iniciar negociações extraordinárias, aquela ocupação tinha sido previamente agendada com a superintendência do INCRA, que reservara o dia para negociar com a FETAPE. Enquanto os trabalhadores (que nos eventos anteriores abarrotavam os corredores que davam acesso às salas de reunião) permaneciam do lado de fora, vendendo seus produtos ou engatando um fio de prosa com amigos de outras cidades ao som do forró, do lado de dentro dirigentes e assessores apresentavam sua pauta de reivindicações ao superintendente nomeado há poucos dias.

Além das diferenças simbólicas, chamava atenção a presença maciça de dirigentes, funcionários e assessores responsáveis por outras “frentes de luta”, como, por exemplo, educação e previdência social. Pela primeira vez, desde que havia iniciado minha pesquisa, encontrei, numa manifestação identificada explicitamente com a reforma agrária, dirigentes e ex-dirigentes do tempo das grandes greves participando efetivamente da animação dos trabalhadores e das negociações com o superintendente.

A presença dos antigos diretores, do pessoal da animação, das diferentes secretarias e de praticamente todos os funcionários da FETAPE que estavam disponíveis naquele dia, definia claramente o sentido que o apelo à demanda pela reforma agrária, iniciada nas contendas com o MST, teve para o sindicalismo rural pernambucano.

Mesmo que o ato estivesse sendo organizado e animado pelos assessores e dirigentes que outrora organizavam as greves e campanhas salariais; mesmo que a disposição estética, assim como nas campanhas, exaltasse os feitos e as formas do passado; a manifestação pela reforma

agrária tornara-se, sem dúvida, o *leitmotiv* da FETAPE naquele dia. As pessoas eram as mesmas, mas o simples fato de estarem ocupando uma arena anteriormente interdita àqueles identificados com as greves indicava a importância da mudança.

Para os homens e mulheres que se aglomeravam na sede do INCRA e que cotidianamente conformam e reafirmam o espírito do sindicalismo rural em Pernambuco, o ingresso nas contendas relativas à questão agrária parece ter permitido a própria possibilidade de continuidade de suas atividades.

ARTICULANDO DETERMINAÇÕES

Como vimos, até o presente momento, a pesquisa apontou para uma articulação entre diversos determinantes para a renovada força e significação do sindicalismo rural em Pernambuco, dentre os quais se destacam: a crise do complexo agroindustrial canavieiro, o conflito geracional, e a concorrência entre a FETAPE e o MST.

Creio que seja impossível determinar sociologicamente o peso exato de cada uma destas variáveis no decorrer do processo de intensificação das ocupações de terra –mesmo porque, ao procurar aferir o peso exato, estaríamos isolando um elemento que somente existe em relação com outros. Este procedimento, muito usado na sociologia, tende, no entanto, a privilegiar uma lógica analítica que opera por meio da desarticulação dos fatos sociais, em detrimento da própria lógica dos processos, ou seja, da lógica da interação ou da síntese (Marx, 1978; Elias, 1997).

Se, ao longo da pesquisa, emergiram certas características que nos pareceram mais importantes, como a crise econômica, os conflitos geracionais, nos resta aqui compreender como esses elementos relacionados uns com os outros repercutiram sobre o mais tradicional sindicalismo rural do Brasil.

A crise do complexo sucro-alcooleiro pode ser atestada pelo fechamento de algumas das principais usinas de beneficiamento da região e pela redução substantiva do número de trabalhadores rurais empregados nesta atividade social. Cronologicamente podemos localizar a “crise” nos primórdios do processo de mudança nas formas de reivindicação. No entanto, não existe qualquer evidência de que esta crise tenha levado diretamente às reivindicações e ocupações de terra. Como me referi anteriormente, a lavoura canavieira de Pernambuco atravessou dificuldades em diversos outros momentos ao longo dos últimos quatro séculos sem que a reforma agrária fosse vista como uma alternativa⁸. Outro elemento que ajuda a afastar o determinismo econômico como

8 Ver, por exemplo, o trabalho de Palacios (1997).

motor da mudança social é a própria história das reivindicações por terra naquela região. As Ligas camponesas, por exemplo, reconhecidas como um dos mais importantes movimentos que reivindicaram a posse da terra para os trabalhadores rurais, tiveram sua gênese associada a um momento de grande prosperidade da indústria canavieira –nos anos sessenta– no qual os foreiros foram ameaçados de expulsão para que suas terras fossem também aproveitadas para o cultivo da cana, ou seja, num contexto oposto ao que se viu nos anos noventa.

A conduta inicial dos sindicatos de trabalhadores rurais frente ao processo de fechamento de diversas usinas também nos ajuda a desmistificar tal associação. No período de menor produção, entre 1990 e 1994, foram realizadas diversas reuniões para se avaliar as possíveis alternativas à crescente demissão de trabalhadores rurais. Um desses encontros foi o Seminário Regional Crise e reestruturação no complexo sucro-alcooleiro do nordeste, realizado em 1993, com apoio da FETAPE, em cujos anais podemos encontrar diversos depoimentos de sindicalistas sobre a visão desse processo no momento exato em que ele ocorria. Nenhum deles, como veremos no depoimento abaixo, aludia à possibilidade de uma estratégia calcada apenas na reivindicação da desapropriação das terras:

Do outro, há uma parte [dos trabalhadores rurais] que tem uma experiência da pequena produção, do arrendamento, do foreiro, de coisas assim, mas os seus filhos hoje quase não passaram por estas experiências, assumem o assalariamento. Diante disso, como discutir reforma agrária num contexto desse? (Assessor sindical no Seminário, FETAPE, 1993).

Diante da insolvência dos empresários, a avaliação mais comum entre sindicalistas e seus assessores apontava para a necessidade da manutenção das lutas por direitos trabalhistas que estavam sendo constantemente desrespeitados pelos patrões. A crise foi, a princípio, interpretada como uma estratégia patronal para aumentar seus lucros.

Tal avaliação foi adotada por muitos dos sindicatos, cuja atitude inicial foi defender a manutenção dos empregos na justiça do trabalho, exigindo que os empregadores cumprissem suas obrigações legais, principalmente pagando as multas pela demissão injustificada de trabalhadores.

Outro ponto que também chama a atenção é o fato de que a intensificação das ocupações de terra, principalmente por parte dos sindicatos, tenha se dado a partir de 1995 e, principalmente em 1996, no momento em que a produção de cana voltou a crescer consideravelmente. Ou seja, cai por terra a associação direta entre crise na produção e mudanças nas condutas dos sindicatos.

Pelo que vimos até o momento, a “crise” da atividade canvieira teria influenciado somente de forma indireta para a entrada do sindicalismo no mundo das ocupações. Sua maior contribuição parece ter sido disponibilizar uma grande massa de trabalhadores e, mais ainda, justificar ideologicamente a atuação dos sindicatos nesta outra seara. Em todas as entrevistas que realizei com sindicalistas e assessores, a crise sempre foi a justificativa oficial para a reivindicação da reforma agrária. Abaixo apresento alguns trechos de entrevistas em que este tipo de justificação se destaca:

Entrevistador –Eu queria começar sabendo de você como essa demanda da reforma agrária chegou aqui?

Assessor –É uma história antiga [...] Já vem da fase anterior a Julião, mas intensifica-se com ele no Engenho Galiléia em Vitória. Também se liga com a história dos sindicatos... no processo de consolidação dos sindicatos na Zona da Mata e passa a ter uma ênfase mais forte para o final da década de oitenta e durante todo os noventa quando coincidem algumas mudanças dentro de Pernambuco, no país e fora do país. A mais sensível e a mais evidente delas é o início da deterioração da economia sucro-alcooleira. A mudança no regime de subsídios que sustentou essa economia por durante muitos anos (assessor jurídico da FETAPE, setembro de 2001).

Presidente –Tivemos 240 mil trabalhadores aqui, hoje nós temos na faixa de 100 mil. A maior parte são contratados temporários. Só alguns sindicatos que começou a entender que tem que mudar (presidente da FETAPE, setembro de 2001).

Entrevistador –Quando que surgiu esta coisa de acampamentos aqui na região?

Dirigente –No ano de ‘93, ‘94 mais ou menos nessa época surgiu esse primeiro acampamento, surgiu da necessidade dos trabalhadores por conta das demissões em massa das empresas, do desemprego desenfreado e fome que estava batendo solta (ex-presidente de sindicato na parte sul da Zona da Mata, maio de 2002).

Dirigente –Essa crise no setor desestabilizou alguns sindicatos [...] Aqueles sindicatos que as empresas ainda se mantiveram bem, viveram bem, eles estão ainda com o potencial os trabalhadores trabalhando [...] Mas aqui onde tem problema, naquele município que a empresa faliu, está pré-falida a situação é mais complicada. É tal que você há uns

dez anos para traz você falar de reforma agrária na zona canavieira era difícil, era problemático você convencer um trabalhador para ele sair do salário, para ir pegar um pedaço de terra. Você contava nos dedos alguns que queriam... Agora, de uns cinco seis anos pra cá ficou mais fácil você fazer um trabalho de conscientização da terra. Em determinado momento o pessoal ficou sem opção. Ele procura e não encontra.

Entrevistador – Não tem o que fazer?

Dirigente – Não tem o que fazer vai brigar pela terra.

A CRISE COMO MITO

Por meio das entrevistas e dos materiais de arquivo foi possível notar que a justificação das ocupações pela crise é uma elaboração realizada depois do início do processo e encontra ressonância na atividade sindical porque, entre outras coisas, é coerente com o tipo de intermediação entre capital e trabalho realizada pelos sindicatos. No entanto, como vimos anteriormente, não foram os dirigentes que organizaram as primeiras ocupações de terras feitas pelos sindicatos.

A existência de uma crise estabeleceu as condições para a criação uma nova possibilidade para que os jovens sindicalistas pudessem se contrapor à ordem hierárquica até então vigente, desde as greves de 1979. Os problemas práticos passaram a serem enfrentados nos primeiros anos da década de noventa, quando a tradicional prática de “botar na justiça” não surtiu os efeitos que dela esperavam os sindicalistas mais experientes. Essas investidas frustradas renunciaram muito mais do que o esgotamento de uma “frente de luta”. Pela primeira vez em muitos anos foi possível aventar a possibilidade de estar se encerrando o ciclo político da geração das greves .

No entanto, foi por obra de um dos velhos sindicalistas (o dirigente de Rio Formoso) que os sindicatos se aproximaram do MST. Ao abrigar nas suas dependências os jovens militantes que vinham de outros estados, aquele dirigente sindical proporcionou um novo espaço de socialização e, por conseguinte, de aprendizado de novas formas de reivindicação para um grupo de jovens sindicalistas rapidamente seduzidos pela bandeira das ocupações.

Em contextos favoráveis, como o do sindicato de Rio Formoso, que se dividiu em dois, foi possível manter a relação intergeracional sem que o conflito pelo mecanismo de poder se estruturasse de fato, pois havia lugar para todos, diferentemente do que ocorreu na FETAPE, cuja diretoria não podia fortalecer novos integrantes sem prejudicar os dirigentes mais velhos. Como aponta Sigaud (2001), foram esses jovens sindicalistas, radicados posteriormente no recém-constituído sindicato

da cidade de Tamandaré, que passaram efetivamente a disputar áreas improdutivas com o MST.

Como assinalei acima, o congresso de delegados sindicais que assisti foi marcado pela cisão entre os diretores mais antigos, que defendiam a valorização da memória das grandes greves e os mais jovens, que a todo momento lembravam que “a luta agora é outra”. As dicotomias entre passado e futuro, e lutas por terra versus lutas por direitos, também se ancoravam na alegada perda de eficácia das greves como estratégias de reivindicação durante a crise dos anos noventa. Segundo pesquisadores que acompanharam o mesmo evento em anos anteriores, os *atos de contar a história* (encenados pelos antigos sindicalistas) não ocupavam tanto espaço como quando do evento que assisti. Essa informação reforça a hipótese de que a ênfase nas dicotomias entre passado e presente, tanto de um lado, como de outro, serviu para anunciar um embate que se estruturava cotidianamente nos corredores da FETAPE. Naquele momento específico, a concorrência com o MST que incitara a criação e fortalecimento da secretaria de reforma agrária e, daí por diante, os primeiros acampamentos promovidos pela Federação, já não era o carro-chefe que contribuía para a intensificação cada vez maior das ocupações de terra da FETAPE. A concorrência havia penetrado no seio da própria Federação e havia se radicado entre os jovens sindicalistas, que ao organizarem ocupações de terras buscavam angariar novos simpatizantes para, desta forma, aumentar seu poder dentro da Federação.

Como adverte Norbert Elias (1987: 221-222), “seria igualmente simplista incriminar as gerações mais velhas, detentoras das posições mais elevadas de carreira e do *establishment*, por restringir o acesso de pessoas mais jovens às desejadas oportunidades de vida em longos períodos”. Os intensos dramas sociais que vivenciei na região mais tradicional do sindicalismo rural brasileiro não foram fruto de uma estratégia perversa elaborada pelos sindicalistas mais antigos.

Os diretores do tempo das greves haviam construído uma carreira na qual sua história de vida era a história do sindicalismo rural. Todos eles entraram para os sindicatos municipais, e depois para a FETAPE, ainda muito jovens, e dedicaram suas vidas aos combates contra uma das mais poderosas oligarquias do país. Como recompensa receberam remunerações acima da média para um trabalhador rural e, mais do que isto, a admiração e gratidão de milhares de trabalhadores que passaram a desfrutar de direitos que lhes foram historicamente negados. Numa sociedade individualizada, na qual o reconhecimento individual é dado pela interdependência entre os sujeitos sociais, deixar uma posição social que provia a vida de pessoas comuns de um sentido especial não foi tarefa simples. Para os diretores que conheci, perder seu lugar na FETAPE era perder seu lugar no mundo. Era destituir-se do próprio sentido de suas vidas.

Não foi outra a sensação de que me transmitiu o jovem João Santos quando, ao ver que seu nome não seria incluído na chapa favorita, percebeu que sua ascensão social na FETAPE estava bloqueada pelos mais velhos, se derramando em lágrimas diante de um desconhecido pesquisador. A partir do contato com o MST, João aos poucos foi construindo, dentro do sindicalismo, uma reputação cujo símbolo maior eram as ocupações de terra. Foi estando presente nas marchas e ocupações que ele ganhou as páginas dos principais jornais do país ao tornar-se um dos primeiros sindicalistas a adotar as ocupações como instrumento para realização de reforma agrária. Ele, assim como seus companheiros do tempo das greves, tornou-se um indivíduo especial que detinha uma certa possibilidade de decisão sobre a vida de muitos trabalhadores rurais de sua região.

Levando em consideração o caráter coletivo desses dramas individuais, percebemos o quão importante foi a experiência de contanto e concorrência do sindicalismo rural pernambucano com o MST. Filhos de contextos políticos distintos, estes dois tipos de organização compartilharam na região canavieira de Pernambuco um importante processo de mudança social. Se no começo o MST parecia estar mais adaptado à crise, logo a seguir, os sindicatos trataram de dar sua resposta na mesma moeda, e com a vantagem de estarem organizados há muito mais tempo.

Neste artigo tratei apenas dos efeitos que este movimento constante de ação e reação teve para o sindicalismo, mas o contrário poderia também ter sido feito, pois em nenhuma outra parte do Brasil o MST encontrou uma concorrência tão forte. A partir do ponto de vista dos próprios sujeitos que vivenciaram os processos sociais, e não de uma perspectiva teórica exterior ao processo social, do desvelamento de seus dilemas e contradições, foi possível compreender o sentido renovador desta experiência para a atividade sindical na região. Renovador não como uma oposição entre velhas e novas formas de ação, mas como um modo de reanimar o mundo social dos sindicalistas.

O espelho do MST estabeleceu a possibilidade criação de uma nova oportunidade para os jovens que se especializaram numa função que não era prestigiada pelos dirigentes mais antigos, permitindo que viessem a ser reconhecidos através das lutas por reforma agrária. Para o grupo *histórico*, a concorrência com o MST e com uma geração mais nova permitiu a incorporação de novos métodos de reivindicação e, mais do que isto, talvez tenha representado a continuidade do reconhecimento público de sua importância numa época de intensa desregulamentação de direitos trabalhistas antes considerados fundamentais⁹.

9 Na última eleição foi criada uma secretaria somente para tratar de questões relativas aos jovens, demonstrando que as demandas dos derrotados foram também absorvidas.

CONCLUSÃO

Em um momento histórico no qual a Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra se impõe a sociedade brasileira como o principal sujeito das reivindicações de cunho agrário, torna-se premente uma análise do impacto desse fenômeno no sindicalismo rural, que outrora ocupou com destaque este papel. Este trabalho procurou pensar esta relação a partir das suas determinações em diferentes escalas, privilegiando a compreensão do ponto vista do envolvidos na mudança, ou seja, dos próprios sindicalistas.

Além de negar a naturalidade das dicotomias sociológicas que costumavam polarizar lutas por terra e lutas por salários, os fenômenos observados na Zona da Mata de Pernambuco nos últimos anos, nos mostram a importância de se ter em conta que estas instituições são formadas por indivíduos, cujo conjunto de distintos interesses conformam os sentidos das ações mais amplas daquilo que conhecemos por sindicalismo. Através do método de análise que privilegiou o acompanhamento sistemático dos eventos promovidos pela FETAPE, percebemos que a adesão desse tradicional pólo de defesa dos trabalhadores rurais ao modelo forjado pelo MST refletiu não apenas as mudanças estruturais da sociedade brasileira. O processo de mudança foi guiado também pela estruturas internas da formação sindical, e por suas condições históricas de reprodução.

Assim vimos que aquilo que se manifesta exteriormente como uma mudança no sindicalismo foi, mais objetivamente, uma alteração na distribuição de poder dentro da federação de trabalhadores rurais mais importantes do país. A relação entre processos internos (conflitos geracionais) e externos (crise econômica e emergência de novas organizações) possibilitou a unificação de um grupo em torno da demanda por reforma agrária, e reforçou a associação entre os sindicalistas mais velhos e as lutas salariais. O conflito entre novas e velhas formas de organização e lutas política, que num primeiro momento poderia ser visto como prejudicial à unidade federação, contribuiu para que o sindicalismo rural voltasse a ocupar um papel destacado na representação dos trabalhadores rurais da região, ao incorporar seletivamente formas e pautas de reivindicação forjadas por outros grupos sociais. Por fim, a FETAPE não se transformou num movimento social como o MST, ao contrário, a pesquisa demonstrou que os sujeitos e as formas e tradicionais de se fazer política no campo podem incorporar novas demandas sem perder sua identidade histórica, ou seja, sem deixarem de ser um sindicato.

BIBLIOGRAFIA

- Borges, Antonádia 2003 *Tempo de Brasília: etnografando lugares-evento da política* (Rio de Janeiro: Relume Dumará).
- Camargo, Aspásia 1973 “Brésil nord-est: mouvements paysans et crise populiste”, Tese de Doutorado, Universidade de Paris.
- Cardoso, Adalberto 1993 *A década neoliberal e a crise dos sindicatos no Brasil* (São Paulo: Boitempo).
- CONTAG 2005 (São Paulo). En <www.contag.com.br>.
- Durkheim, Émile 1995 *Da divisão do trabalho social* (São Paulo: Martins Fontes).
- Elias, Norbert 1997 *Os alemães: a luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos XIX e XX* (Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores).
- Elias, Norbert 1998 *Envolvimento e alienação* (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil).
- Julião, Francisco (ed.) 1969 “Ligas camponesas, outubro 1962-abril 1964” em *Cuadernos CIDOC* (Cuernavaca: CIDOC) N° 27.
- Mannheim, Karl 1972 “The problem of generations” in *Essays on the Sociology of Knowledge* (London: Routledge & Keagan).
- Marx, Karl 1978 (1857) “Introdução à crítica da economia política” in Giannotti, José (org.) *Marx* (São Paulo: Abril Cultural) Coleção Os pensadores.
- Mayburry-Lewis, B. 1991 “The politics of possible: the growth and the political development of the Brazilian rural workers, Trade Union Movement, 1964-1985”, mimeo.
- Palacios, Guillermo 1997 *Cultivadores libres, estado y crisis de esclavitud en Brasil en la época de la revolución industrial* (México DF: Fondo de Cultura Económica).
- Palmeira, Moacir 1979 “Desmobilização e conflito: relações entre trabalhadores e patrões na agroindústria pernambucana” em *Revista de Cultura e Política* (São Paulo) Vol. 1, N° 1.
- Pialoux, Michel e Weber, Florence 1991 “Crise du syndicalisme et dignité ouvrière” en *Politix* (Paris) N° 14.
- FETAPE 1993 “Crise e reestruturação no complexo sucro-alcooleiro do nordeste”, Seminário Regional, Recife.
- Sigaud, Lygia 1980 *Greve nos engenhos* (Rio de Janeiro: Paz e Terra).

- Sigaud, Lygia 1986 “A luta de classe em dois atos: notas sobre um ciclo de greves camponesas” em *Dados* (Rio de Janeiro) Vol. 29, N° 3.
- Sigaud, Lygia 1996 “Direito e coerção moral no Mundo dos Engenhos” em *Estudos Históricos* (Rio de Janeiro) N° 18.
- Sigaud, Lygia 2001 “Histories de campements” em *Cahiers du Brésil Contemporain* (Paris) N° 43-44.
- Silva, José 1997 “Limites do sindicalismo rural frente à luta pela terra: o caso do Engenho Panorama em Timbaúba-PE. Período entre 1961 e 1996”, Dissertação de Mestrado em Administração Rural da UFRPE, Recife.
- Sindaçucar/PE 2003 (Recife). En <www.sindaçucar.org.br>.
- Tavares, Ricardo 1992 “CONTAG, da ditadura à transição; memória social e construção política do ‘campesinato””, Dissertação de Mestrado, Rio de Janeiro.

Juliana Flórez Flórez*

**UNA APROXIMACIÓN
A LA DIMENSIÓN DEL DISEÑO
DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES:
LA IMPLOSIÓN DE LA IDENTIDAD ÉTNICA
EN LA RED PROCESO DE COMUNIDADES
NEGRAS DE COLOMBIA**

PARA LOS/AS HOY JÓVENES INVESTIGADORES/AS de América Latina, es fácil evocar la fatídica sentencia según la cual no alcanzaría nuestra vida ni la de nuestros/as hijos/as para pagar la *deuda externa*. Haber vivido una adolescencia marcada –con distintas intensidades– por el desasosiego de tener que cancelar lo impagable, es una buena razón para recordar los años ochenta como la *década perdida* para el continente. Pero aquí tendríamos que re-contextualizar nuestros recuerdos. Si bien es cierto que durante los años ochenta perdimos la carrera por alcanzar el desarrollo (moderno), también lo es que durante esos años fuimos testigos de intensas *olas de protesta*. Las cocinas populares en las mega-urbes latinoamericanas, las acciones de Superbarrio en Ciudad de México, los reclamos de las Madres de Plaza de Mayo, las luchas de las feministas chilenas durante la dictadura, las demandas del Movimiento 19 de Abril-Alianza Democrática de Colombia, las denuncias de las organizaciones venezolanas contra la impunidad, las propuestas del movimiento cocalero de Cochabamba, las grandes movilizaciones del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil son algunos

* Investigadora visitante del Programa Comunicación, Cultura y Transformaciones Sociales del Centro de Investigaciones Postdoctorales, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela. Candidata a doctora en Psicología Social Crítica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

ejemplos de la experiencia organizativa que fue ganando Latinoamérica durante los años ochenta y, por lo cual, con Escobar y Álvarez (1992), consideramos que, en términos de movilización, esa década también puede ser evocada como una *década ganada* para nuestro continente.

De hecho, el estudio de los movimientos sociales en América Latina tuvo un importante auge durante esa década, cuando la academia empezó a distinguir entre las movilizaciones que, siguiendo el esquema convencional, articulaban su lucha en torno a un sujeto de derecho (como el movimiento obrero o la primera ola del feminismo) y aquellas otras que, de manera “novedosa”, reivindicaban sus derechos en torno a un sujeto identitario (como el movimiento homosexual, la segunda ola del feminismo, los movimientos étnicos, etc.). Con esta distinción analítica entre *viejos y nuevos movimientos*, se renovaron los análisis de la acción colectiva del continente, centrados durante los años sesenta y setenta en los temas del desarrollo y la revolución. Los análisis funcionalistas y marxistas se quedaban cortos para dar cuenta de las demandas y estrategias planteadas por este nuevo panorama de la acción colectiva. Ya no bastaba con reconocer al proletariado o al “pobre” (a desarrollarse) como protagonista de la acción social, a su relación con el Estado, el mercado o las empresas, como la articuladora del orden societal, ni a los cambios radicales (revolución o modernización) como la meta final de dicha acción (Mires, 1993). Era necesario renovar el análisis de la acción social para poder captar la fuerza política de las movilizaciones del momento, y sus desafíos a las maneras autoritarias y jerárquicas de hacer política.

Durante la segunda mitad de la década del ochenta fue mermando este optimismo de la academia respecto de los movimientos sociales latinoamericanos. Se argumentaba que muchos de ellos habían ido declinando en el contexto de las transiciones a la democracia del cono sur. Su impacto, por tanto, había retrocedido con el retorno de los mecanismos de la democracia electoral.

Sin embargo, en los años subsiguientes no sólo muchos movimientos siguieron vigentes sino que, además, otros tantos afloraron y se articularon con aquellos. Sus demandas ponían de manifiesto las limitaciones de las nuevas condiciones que se imponían en el continente: los reajustes en la inversión social como resultado de la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural exigidos por las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, la desilusión de la población ante los altos niveles de corrupción e impunidad, la pérdida de legitimidad de los partidos políticos, sindicatos y otros mecanismos convencionales de representación, etcétera.

Ya entrados los años noventa, cuando las expectativas de un desarrollo ilimitado, universal y acumulativo se habían resquebrajado y empezaba a reclamarse no tanto un “desarrollo alternativo” como “al-

ternativas al desarrollo” (Viola, 1999), era innegable que, en distintas regiones del continente e independientemente del “nivel” de desarrollo o del régimen político, se habían consolidado *redes de movimientos sociales*. Su estructura y dinámica, como bien señalan Calderón et al. (1992), había cambiado profundamente. Las demandas de los movimientos no se limitaban al ámbito local; intentaban, además, lidiar con reestructuraciones del orden económico mundial, resultado del nuevo régimen de acumulación de capital posfordista, y con la nueva División Internacional del Trabajo tras la aparición de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En ese sentido, los movimientos sociales, además, ponían de manifiesto las limitaciones del sistema político para dirimir los conflictos sociales. Como sostiene Offe (1988), los movimientos sociales inauguraron un *nuevo paradigma político* cuando empezaron a cuestionar la falta de legitimidad de los mecanismos democráticos del sistema político existente, basado en el fordismo y el Estado de Bienestar (o la promesa de alcanzarlo), y en las estrechas relaciones que ambos promueven entre partidos políticos y sindicatos. Al cuestionar la dificultad de resolver los conflictos dentro de los parámetros institucionalizados, los movimientos sociales abrieron la posibilidad de desarrollar otras formas de hacer política, introduciendo nuevos temas a dirimir, otros protagonistas y prácticas democráticas alternativas a las convencionales. Con ello, apostaron ya no por un proyecto histórico en concreto, sino por una crítica al modelo específico de racionalidad desarrollado por la modernidad.

Para contar con herramientas analíticas que captaran la manera en que los movimientos luchaban contra –y al mismo tiempo, evidenciaban las limitaciones del– sistema político predominante, fue necesario el giro interpretativo que vivieron las ciencias sociales del continente desde mediados de los años ochenta. Este giro animaba a dejar de estudiar los factores del desarrollo para ocuparse, más bien, de los *procesos de construcción de sentido de la vida cotidiana*. Una contribución clave al respecto fue la redefinición de cultura ofrecida por los Estudios Culturales. Este campo transdisciplinario, que empezaba a gozar de gran acogida en algunos círculos académicos, permitió dejar atrás las nociones modernas de cultura (humanista, economicista y antropologista) para orientar su análisis en términos de prácticas sociales. Específicamente en el estudio de los movimientos sociales, esta redefinición incorporó un importante tema de discusión: *las políticas culturales*.

El propósito de esta investigación es presentar una aproximación a la dimensión del disenso que acompaña y potencia a las políticas culturales de los movimientos sociales. No pretendo encontrar novedades, sino tender puentes entre la teoría y la práctica, de modo que no sobredimensionemos el alcance de las herramientas teóricas ni subestimemos la complejidad de los fenómenos sociales estudiados. Por ello, las reflexio-

nes serán desarrolladas a partir del trabajo realizado con un movimiento social concreto: el Proceso de Comunidades Negras (PCN) colombiano.

Para desarrollar esta investigación, escogimos la metodología de *Historias de Vida de tipo cruzado*¹, recogidas mediante *entrevistas en profundidad*². Nos inclinamos por esta metodología porque resalta los *procesos de crisis y tránsito* individuales y colectivos que presuponen modificaciones significativas y positivas para un grupo (Pujadas, 1992); un proceso que, además, resalta las distintas perspectivas de los/as activistas y, por tanto, facilita la aproximación a los disensos presentes a lo largo de la trayectoria del movimiento.

LA REDEFINICIÓN POLÍTICA DE LO CULTURAL: MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICAS CULTURALES

Una vez abandonado el concepto de cultura como sistema de valores, el término *políticas culturales* adquirió otros sentidos. Por un lado, fue entendido como un conjunto de *prácticas sociales*, más que de agendas de intervención/inversión en actividades “tradicionales”. Por otro lado, se redefinió como prácticas *no limitadas al ámbito estatal*; es decir, como prácticas que llevan a cabo una multiplicidad de actores sociales. Ambos sentidos redefinieron las políticas culturales como estrategias de apropiación de ciertas prácticas culturales según sus efectos políticos.

Varios años de discusión interdisciplinaria sobre el tema nos dejan un término cargado de polisemia y de difícil aplicación. Ya el sentido atribuido cotidianamente al término *políticas culturales* (líneas de inversión estatal respecto del ámbito cultural) complica su aplicación en las ciencias sociales. A esto se le suma la imprecisión de las traducciones del término del inglés al castellano (*Cultural Politics*, *Cultural Policy*) así como su relación con otros conceptos clave de los procesos de transformación (Políticas de Identidad, Política de la Diferencia). Como explica Ana María Ochoa Gautier (2002), la polisemia del término se debe a la diversidad de fuentes que han nutrido su debate, y podríamos añadir, que también se debe al hecho de que este debate se desarrolla en un campo tan heterogéneo como es el de los Estudios Culturales. La multiplicidad de aproximaciones a la noción de políticas culturales en América Latina –afirma la

1 Estas son definidas como relatos autobiográficos obtenidos por el investigador mediante entrevistas sucesivas en las que el objetivo es mostrar el testimonio subjetivo de una persona y en la que se recogen tanto los acontecimientos como las valoraciones que se hacen de su propia existencia. Al ser de tipo cruzado se entrevistan a distintos miembros del grupo en relación a una serie de temas particulares (Pujadas, 1992).

2 Definidas como un diálogo abierto con pocas pautas en el que la función básica de el/la entrevistador/a es estimular al entrevistado/a para que explicita de la forma más amplia posible las referencias a terceras personas, ambientes y lugares concretos en los que transcurren los distintos episodios biográficos (Santamarinas y Marinas, 1994).

autora— parte de las diferentes maneras en que intelectuales, instituciones o distintos tipos de organizaciones (artistas, movimientos sociales, etc.) se han ido apropiando de la idea de que la cultura es un campo organizativo que puede articularse para lograr fines de consolidación o transformación simbólica, social y política específicos (Ochoa Gautier, 2002). Justamente este proceso de múltiples apropiaciones de la cultura es el indicio de que bajo los actuales procesos de globalización, la cultura se ha convertido —como propone George Yúdice (2002)— en un *recurso* no sólo cultural sino también económico, social, político o una mezcla de ellos.

Del gran número de definiciones del término *políticas culturales*, con Ochoa Gautier (2002) distinguimos dos tendencias. Por un lado, y con un énfasis institucional, hay definiciones que aluden a la *mediación entre lo político y lo social*; es decir, definiciones que entienden las políticas culturales como mediaciones entre la obra artística y el productor. Aquí cabrían los trabajos, por ejemplo, de Richard, Millar y García Canclini. Por otro lado, y haciendo énfasis en la agencia de los actores sociales, existen definiciones del término referidas al *aspecto organizacional de lo simbólico*. Entre estas definiciones se encuentran los trabajos de Escobar, Dagnino y Álvarez; Yúdice y Coelho, entre otros. En el presente ensayo voy a detenerme en esta última tendencia; en especial, en la propuesta conjunta de los/as tres primeros/as.

Arturo Escobar, Sonia Álvarez y Evelina Dagnino definen políticas culturales como “el proceso por el cual diferentes actores políticos, marcados por, y encarnando prácticas y significados culturales diferentes, entran en conflicto con otros actores, al promover prácticas culturales que redefinen lo que cuenta como político” (Álvarez, Dagnino y Escobar, 2001). Este concepto resalta el *vínculo constitutivo entre la cultura y lo político*, reconfigurando los parámetros que definen lo que es un movimiento social. La *cultura*, entendida como conjunto de significados que integran las prácticas sociales, no puede ser comprendida adecuadamente sin considerar las relaciones de poder propias de dichas prácticas. Asimismo, la comprensión de la configuración de esas *relaciones de poder* no es posible sin reconocer su carácter cultural activo, en la medida que expresan, producen y comunican significados (Álvarez, Dagnino y Escobar, 2001). Pero este concepto, además, resalta la *dimensión identitaria* de los movimientos sociales: el hecho de que ciertas movilizaciones desde los años ochenta, sin dejar de lado la reivindicación de las décadas previas por la igualdad, introducen en el plano político la lucha por la diferencia. Las categorías identitarias adquieren entonces un carácter político. No sólo se lucha por acceder a los mecanismos de poder, sino también por reivindicar identidades basadas en la diferencia.

Sin embargo, el vínculo entre “cultura”, “poder” e “identidad” tejido por el concepto de *políticas culturales* deja interesantes interrogantes

para seguir repensando los movimientos sociales. La noción de poder de este concepto remite exclusivamente al conflicto entre actores que parten de *distintos* referentes culturales para construir su identidad, pero no considera el conflicto entre actores que *comparten* una misma identidad cultural. Considerar este segundo aspecto es fundamental para analizar a los movimientos sociales; ya se ha insistido reiteradamente en la necesidad de contemplar las heterogeneidades, conflictos y ambigüedades presentes en sus dinámicas internas (Benford, 1997; Laraña, 1999; Slater, 2001). Estos aspectos propios de las crisis de los movimientos, junto a sus logros, trazan su historia; y sin embargo tienden a ser obviados en los análisis, por considerarlos aspectos “negativos” que no benefician al movimiento, ni al propio análisis.

El punto de partida de esta investigación es que la dinámica por la cual un movimiento abre espacios para las contradicciones y los conflictos, potencia sus políticas culturales frente a otros actores sociales. Este planteamiento implica que, además de las diferencias con respecto al “exterior” de un movimiento, pensemos cómo operan las diferencias al interior del mismo³. Esto es preguntarnos: ¿cómo se producen exclusiones en el seno del propio movimiento?; ¿de qué manera un colectivo corre el riesgo o no de reificar sus fronteras de inclusión/exclusión?; ¿cómo puede generar diferencias productivas e inclusivas para articular acciones políticamente potentes?; o, por el contrario, ¿cómo puede generar exclusiones que in-movilizan? Son preguntas que vinculan el tema de la diferencia al de la igualdad pero no en el sentido de mismidad ni de inclusión sin límites, sino en el sentido de conocer las estrategias del movimiento para vincular la igualdad y la diferencia.

Desde el punto de vista *identario*, la idea de pensar las diferencias al interior de los movimientos sociales invita a conocer el lugar que un movimiento reivindicativo de la *diferencia* atribuye al tema de la *igualdad*; es decir, a la manera de tender puentes entre las diferentes posiciones dentro del grupo. Desde el punto de vista *estratégico*, esta idea llama la atención sobre la manera en que un *movimiento gestiona las diferencias al interior del grupo*, de modo que alcance la estabilidad necesaria pero no exagerada que le reste fuerza a sus acciones políticas. En ambos casos, vincular diferencia e igualdad es una apuesta política de los movimientos. Veamos cómo ha sido tratada por un movimiento social en concreto.

3 Aquí me refiero al núcleo más activo del movimiento, sin que por ello desestime la concepción de movimiento en términos de redes, como se verá más adelante.

ACTOR SOCIAL EN MOVIMIENTO: PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS (DE COLOMBIA)⁴

En Colombia, desde la década del setenta han existido movilizaciones sociales de organizaciones negras. Su trabajo se centró, generalmente, en la reivindicación de la *igualdad* de la población negra colombiana, tomando como ejes la denuncia del racismo y la demanda de su integración al resto de la nación. A principios de los años noventa, sin embargo, hubo importantes cambios que posibilitaron reivindicaciones desde una perspectiva distinta. La *diferencia cultural* de lo negro se convirtió en un eje alrededor del cual se articularon diversas organizaciones. Lo que estaba en juego, ya no era la integración a la nación, sino la defensa de la *Identidad Negra*.

Un factor que contribuyó con este giro en el tipo de reivindicación del movimiento negro colombiano fue el cambio constitucional iniciado en 1990⁵ y, cuyo propósito, entre otros, era declarar a Colombia una nación pluriétnica y multicultural que reconociera los derechos de las minorías étnicas. La población negra colombiana, expoliada a lo largo de la historia del país, se enfrentaba al difícil reto de convencer a una sociedad tremendamente racista de que, en su conjunto, era un pueblo étnico y que, por tanto, merecía el reconocimiento de los derechos garantizados por la nueva constitución. La dificultad de este reto radicaba en el hecho de que en el imaginario social de la “nación colombiana” –como explica Peter Wade– la identidad indígena ha ocupado el lugar del Otro (con respecto a la figura del blanco, el Mismo) mientras que la identidad negra se ha quedado sin un lugar simbólico en dicha representación (Wade, 1996). De modo que no se trataba sólo de obtener ciertos derechos negados hasta el momento, sino de construir en el imaginario social colombiano un espacio étnicamente identitario para poder reclamar esos derechos.

En el marco del proceso jurídico de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), durante el mes de agosto de 1990 se celebró en Cali el Encuentro Pre-Constituyente de Comunidades Negras. Allí se reunieron representantes de las diversas regiones socioculturales de Colombia donde hay población negra (26% de la población del país): Caribe, Pacífico, Valle del Magdalena, Valle geográfico del río Cauca, las islas de San Andrés y Providencia, y el Valle del Patía; y conformaron la Coordinadora Nacional de Comunidades Negras (CNCN). Las diferencias respecto

4 Este relato sobre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y la trayectoria del PCN se basa tanto en entrevistas con activistas del PCN (como parte de esta investigación), como en documentos co-producidos por el movimiento y la academia (Grueso, Rosero y Escobar, 2001).

5 Para comprender ampliamente lo que significó la Asamblea Nacional Constituyente para la sociedad colombiana en general y para el movimiento negro colombiano en particular, puede revisarse el texto de Mauricio Pardo (2001: 321-345).

a la cultura política que debía asumir esta organización produjeron su pronta disolución, y no hubo posibilidad de acordar un/a candidato/a que representara a todo el conjunto de la población negra en la ANC. Así, cuatro meses después, cuando se celebró la elección por votación popular de los setenta miembros de la ANC (en diciembre de 1990), las comunidades negras no tuvieron su representante en la Asamblea.

Afortunadamente, en este caso, primaron las buenas relaciones ancestrales interétnicas, y la demanda del reconocimiento de la población afrocolombiana como grupo étnico fue llevada por un constituyente indígena. Inicialmente, los representantes de la ANC rechazaron la demanda bajo distintos argumentos como, por ejemplo, que la gente negra estaba perfectamente integrada a la vida del país desde hace tiempo. Pero la población afrocolombiana seguía movilizándose (tomas de edificios, envíos de faxes, manifestaciones, etc.) a la par que un lobby presionaba a la ANC. Finalmente, la propuesta de que las comunidades negras eran un grupo étnico, fue incluida en la nueva constitución mediante el Artículo Transitorio-55 (AT-55); una medida jurídica provisional que contemplaba la creación de una Comisión Especial encargada de expedir una ley definitiva que reconociera los derechos de las comunidades negras con respecto a: la propiedad de territorios colectivos, la protección de la identidad cultural y su desarrollo económico y social, y que además contemplaba la participación de representantes de las comunidades en la formulación de dicha ley.

La presión ejercida en la ANC por el lobby de las comunidades negras del Pacífico fue clave para que en la redacción final del AT-55 se tomara el uso de los bosques según prácticas tradicionales (cacería, tala, recolección, etc.) como el criterio para demarcar los territorios colectivos. Debido a que los miembros de la ANC ignoraban las tradiciones del Pacífico, no se percataron del hecho de que el uso del bosque según prácticas tradicionales de las comunidades negras está en función de las dinámicas de la naturaleza y, específicamente, de la marea y el caudal de los ríos, y que, por tanto, un territorio colectivo demarcado según ese criterio correspondería a la cuenca del río en su totalidad y no a viviendas o fincas aisladas⁶. De modo que la reclamación de territorios colectivos tomando el criterio de las prácticas tradicionales no fragmentaba al Pacífico; por el contrario, fortalecía su vivencia como un territorio-región según la cosmovisión negra del Pacífico. Así, la aprobación del AT-55 fue el primer gran paso para desafiar no sólo a los marcos jurídicos de la nación, sino también al imaginario social colombiano, caracterizado por el blanqueamiento de la cultura. Las

⁶ Agradezco esta valiosa información a Libia Grueso, activista del PCN (entrevista de noviembre de 2002).

prácticas culturales de las comunidades negras les permitían ser *sujeto de derecho* desde un marco jurídico que redefinía la ciudadanía a partir de los estrechos vínculos con territorio colectivo; en palabras de activistas negras, una ciudadanía “de acuerdo al uso del espacio ecológico según las dinámicas de la naturaleza” (Grueso y Arroyo, 2002).

En 1991, una vez expedida la nueva Constitución, hubo otro acercamiento entre las organizaciones negras para evaluar los resultados de la ANC, y definir sus candidatos a las elecciones al Congreso. Pero este segundo intento de unificación como estrategia política también falló. Desde ese momento, y hasta el presente, se han mantenido serias diferencias entre las organizaciones. Algunas orientaron sus esfuerzos hacia una política electoral de corte convencional. Otras organizaciones –sobre todo, las vinculadas al trabajo eclesialístico de base, la promoción cultural rural y urbana y la tradición política de izquierda– se abocaron durante los siguientes dos años (que establecía la ANC) a reglamentar el AT-55, base jurídica de la ley definitiva que reconocería sus derechos como comunidad étnica.

ETNIZACIÓN DEL PUEBLO AFROCOLOMBIANO

Un escenario de intensas actividades para la reglamentación del AT-55 fue el Pacífico. En esta zona de bosque tropical húmedo, separada del resto del país por la cordillera occidental andina, el 93% de la población es afrocolombiana; han vivido allí desde la época colonial, cuando los/las cimarrones/as, huyendo de las minas coloniales, se internaban en los bosques y, a partir de ricos intercambios con los indígenas, dejaban atrás la esclavitud para reconstruir una vida libre a orillas de los hermosos ríos que bañan la región. Muchos años después, en la Colombia contemporánea, sus afrodescendientes se dedicaron a reglamentar el AT-55; celebraron un sinnúmero de talleres, asambleas, reuniones y otras actividades para elaborar conjuntamente: mapas, censos y cualquier otro tipo de dato que les permitiera mostrar al Pacífico como un territorio-región de acuerdo a su perspectiva.

Según Restrepo, estas asambleas, talleres, proyectos, etc. constituyen las *técnicas de invención* de las “comunidades negras” mediante las cuales se creó el sentido de comunidad; por otra parte, entiende que los mapas, censos, informes y documentos producidos son las *formas de visibilización* que permitieron “mostrar” que existe una población negra en Colombia con su propio legado cultural. En conjunto, para este autor, ambas estrategias permitieron la *etnización* de la población afrocolombiana; es decir, el reconocimiento de que son una comunidad étnica con prácticas culturales propias (Restrepo, 2002). Desde la perspectiva de las comunidades negras, su proceso de etnización incluye una construcción hacia adentro (o “casa adentro”) y otra hacia fuera;

es decir, una doble re-narración de lo que son las comunidades negras frente a sí mismas, y frente a otros.

Después de la intensa “maratón” realizada para poder reglamentar el AT-55 y formular la ley definitiva, finalmente, en agosto de 1993, se aprueba la Ley 70 que declara a Colombia un país multiétnico y pluricultural, y reconoce a las comunidades negras como un grupo étnico, garantizándoles en zonas rurales (con características semejantes a las del Pacífico) el derecho a la propiedad de territorios colectivos, la protección de la identidad cultural y a contar con mecanismos de participación en la implementación de la ley.

Dos meses después y tras muchas celebraciones, las organizaciones que habían participado en este “proceso” jurídico desde una perspectiva más comunitaria y alejada de la dinámica electoral, articularon la red de movimientos sociales Proceso de Comunidades Negras (PCN). Establecieron como principios de lucha “defender el derecho a: 1) la identidad negra, 2) al territorio, 3) la visión propia del futuro, y 4) ser parte de, y a participar en, la lucha de otros pueblos negros alrededor del mundo” (PCN, 1993).

Dado que la Ley 70 fomentaba la creación de mecanismos de participación de la comunidad en la implementación de la ley (por ejemplo, en la titulación de territorios colectivos, la asignación de profesores según parámetros de etnoeducación, etc.), el PCN planteó una estructura organizativa, nada alejada de su herencia africana y basada en las siguientes instancias: Consejo Comunitario del río, Palenque, Coordinación Nacional, y Consejo de Mayores. Asimismo, organizó equipos de trabajo (de desarrollo, territorio, etnoeducación, etc.). Las comunidades rurales del Pacífico conformaron sus Consejos Comunitarios por territorio colectivo (o río), convirtiéndose en la base organizativa para implementar la Ley 70. Aquellos consejos que formaban parte del PCN, ya con “ley en mano”, empezaron a definir los criterios para *titular territorios colectivos*, manteniendo como referente la *lógica del río*; o sea, las actividades productivas y cotidianas de las comunidades negras, definidas a partir de las dinámicas naturales del río antes mencionadas (Grueso y Arroyo, 2002).

Con esa novedosa herramienta conceptual, las comunidades dejaban clara constancia de que sus aspiraciones están estrechamente vinculadas al territorio y la identidad cultural, en un sentido que desborda los parámetros modernos de territorio contemplados por la constitución. Esta apuesta, en conjunto con aquellas encaminadas a resignificar positivamente la identidad negra y a diferenciarla de las del resto de la nación (identidades blanca, indígena, mestiza, etc.), constituyeron las *políticas culturales* del PCN *respecto de la identidad étnica*, en el sentido de que su confrontación con el Estado para definir lo que es la comunidad étnica, devino en un hecho político: el movimiento logra legitimar a la población negra como una comunidad étnica y, por tanto,

contribuye a sentar las bases para reivindicar el derecho a la permanencia y posesión de territorios colectivos según prácticas ancestrales.

DEFENSA DEL LUGAR: EL PACÍFICO COMO TERRITORIO DE ALEGRÍA, PAZ Y LIBERTAD

En 1995, con la participación activa de los Consejos Comunitarios, se promulga el reglamento del capítulo 3° de la Ley 70, que especifica el procedimiento para llevar a cabo las titulaciones colectivas. Transcurren dos años hasta que realmente se inicia el proceso. En 1997 comienza la *titulación de los ríos como territorios colectivos* y, con ello, la necesidad de afrontar diversos inconvenientes. Por caso, una de las primeras titulaciones exigió al Consejo Comunitario del río Raposo expulsar a una industria minera (y a sus retroexcavadoras saqueadoras de oro) debido a sus efectos contaminantes, a que perjudican la salud de la población e impiden las prácticas tradicionales de uso del bosque.

Situaciones de este tipo se repitieron una y otra vez. Más aún, la dinámica desarrollista (construcción de vías, presas, puertos, etc.) iniciada por el estado colombiano desde los años ochenta, cuando se declara al Pacífico zona “pobre desarrollable”, se intensificó en los años noventa bajo el entonces novedoso discurso del “desarrollo sostenible” y la “conservación de la biodiversidad”. La política de apertura económica para el Pacífico promovida por el gobierno central, significó la entrada desmedida de nuevas formas de capital: industrias madereras y mineras (sobre todo de oro), camaroneras industriales, mega-proyectos turísticos, monocultivos extensos (sobre todo palma africana), incluyendo los cultivos ilegalizados de planta de coca (Escobar y Pedrosa, 1996). Ante este panorama, llevar a cabo la titulación de territorios colectivos significaba luchar contra la proletarianización y el empobrecimiento, producto de la compra forzada o no de tierras, el menoscabo de sistemas de autonomía alimentaria y demás circunstancias de precarización que acompañan las aperturas económicas. Luchar contra la legitimación del Pacífico como “zona estratégica” rica en recursos naturales era todavía más difícil, porque para ese entonces ya el discurso de la biodiversidad había adquirido fuerza a consecuencia de la problematización de “lo biológico” como hecho social central de las políticas globales del siglo XXI (Escobar, 1996). El PCN debía construir su propio modelo de desarrollo alternativo si pretendía defender la visión afrocolombiana de la naturaleza. Siguiendo esta línea, el movimiento ha participado en el proyecto Biopacífico, una estrategia de Desarrollo Sostenible impulsada por el Estado y organismos internacionales (PNUD, Fondo Mundial para el Medio Ambiente) para mejorar las condiciones de vida de la población de la zona, garantizando la conservación de los ecosistemas. Allí ha defendido la visión de las comunidades negras respecto de la naturaleza. Una acción clave en esta labor fue el éxito de la

negociación realizada entre 1992 y 1995 entre el PCN, junto a organizaciones indígenas, y la Empresa Colombiana de Petróleo (ECOPETROL). En alianza con organizaciones indígenas se logró suspender la construcción de un poliducto (Buga-Bahía Málaga) y una terminal marítima, debido al impacto ambiental negativo que, según las comunidades indígenas y negras, implicaba llevarla a término. Con apuestas de este tipo, el PCN ha puesto en tela de juicio las nociones esencialistas de la naturaleza, ofreciendo un marco alternativo de Ecología Política propio (Escobar, 1997). Actualmente, una de sus tareas es desarrollar los Planes de Manejo que establecen el reglamento interno para uso y manejo de los territorios colectivos, y determinan cuáles recursos se perdieron y cómo recuperarlos, y cuáles se tienen y cómo conservarlos.

No obstante, como todo movimiento que actúa en un contexto de guerra, el PCN ha tenido que condicionar su Ecología Política a la necesidad de ofrecer opciones a la lógica bélica. Hubo que considerar el hecho de que el Pacífico, desde inicios de los años noventa, dejó de ser una región donde se promovía la coexistencia y resolución pacífica de conflictos entre comunidades indígenas y negras. Con la llegada de grupos armados a la zona (guerrillas, paramilitares y ejército) y sus prácticas sistemáticas de intimidación y terror empezaron los desplazamientos forzados.

En los últimos diez años se calcula que cerca de 2 millones de colombianos/as se han visto obligados/as a desplazarse para salvar sus vidas. En el año 2000, de las 317 mil personas desplazadas, el 30% son afrodescendientes; estas cifras y, por tanto, el número de personas desplazadas, aumentó para el año 2002, cuando hubo 412.553, y fue semejante para 2005, cuando miles de personas fueron obligadas a abandonar sus conversaciones cotidianas, sus paisajes, sus “cosas”, sus recorridos y la que hasta ahora había sido su “forma de estar en el mundo”. En el caso particular del Pacífico, los desplazamientos forzados aumentaron desde que se iniciaron las titulaciones colectivas. Por ejemplo, el 4 de junio de 2001, luego de doce días de haber recibido el título de propiedad colectiva de su territorio, la comunidad del Río Baudó fue desplazada por orden de los paramilitares. A pesar de que las comunidades y las instancias internacionales han alertado al gobierno de posibles agresiones y prácticas de intimidación, las autoridades no han tomado las medidas necesarias para protegerlas de las masacres ni evitar los desplazamientos. El 55,26% de los desplazamientos son provocados por los paramilitares, el 19,30% por las guerrillas, el 14% por desconocidos, el 3,51% por las Fuerzas Militares y el 9% por otros⁷. Huir al interior del país o a países vecinos (Panamá,

7 Datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y la Red de Solidaridad Social, instancia gubernamental que coordina la intervención en materia de desplazamiento.

Ecuador y Venezuela) es una de las opciones frente a la única propuesta clara del gobierno colombiano: el Plan Colombia; un plan coordinado con EE.UU. y la Unión Europea –especialmente el Estado español– cuyo objetivo de erradicar los cultivos de uso ilícito, no sólo se ha incumplido sino que, paradójicamente, ha sido el opuesto (aumento y desplazamiento de los cultivos). Por otra parte, el gobierno colombiano tampoco cuenta con medidas adecuadas para atender los casos de desplazamiento una vez producidos, y la población afrocolombiana sigue aumentando los cinturones de pobreza de mega-urbes como Bogotá, Cali o Medellín.

Lamentables *desplazamientos*, como los sufridos en Colombia, sean masivos o no, forzados o voluntarios, se han convertido en un fenómeno cada vez más frecuente en el resto del planeta. Las guerras, hambrunas nacionalismos extremos, por un lado, y los desarrollos del capitalismo trasnacional y de las corporaciones mundiales, por otro, han provocado el desplazamiento forzado de millones de personas (McDowell, 1999). Pareciera que el imperativo de la deslocalización ha pasado a ser un mecanismo de control social fundamental durante el llamado capitalismo tardío. Pero también podemos entender los desplazamientos como indicios de los *límites de la modernidad*. Como argumenta Arturo Escobar (2003), por su naturaleza, la modernidad capitalista tiende a generar procesos de *dis-placing* cada vez más difíciles de remediar con los mecanismos de *re-placing* previstos por la misma modernidad. A esta dificultad se suma el menosprecio por *el lugar* como categoría fundamental de la experiencia, y la paralela supremacía del movimiento como garantía de conexión al sistema. La conjunción de estos factores ha ido excluyendo el *vínculo-al-lugar* como una forma válida de participar, de mantenernos vivos/as. En ese sentido, no debemos olvidar –como señala Escobar (2001)– que aun cuando los grupos sociales de hoy no sean estrictamente locales, las *prácticas basadas-en-lugares* continúan siendo importantes en las políticas culturales de muchos grupos subalternos.

Este sería precisamente el carácter de las prácticas desarrolladas por el PCN como mecanismos de *re-placing* frente al desplazamiento. Después de las primeras masacres sufridas en mayo de 2000, la red impulsó una misión humanitaria para que visitara algunos ríos del Pacífico; intervinieron organizaciones de derechos humanos e instancias locales, nacionales e internacionales que, además de ciertas recomendaciones, reportaron la existencia de 37 puntos de alerta⁸. En noviembre de 2000, junto a la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), el PCN convocó al I Encuentro Nacional de Afrocolombianos desplazados en Bogotá. Como acciones ante el desplazamiento, declararon:

⁸ Tras la primera visita de la misión, algunos han sido objeto de masacres.

- 1 Un *principio de retorno* como política general para todos los grupos étnicos del Pacífico dada su cultura particular y su relación con el territorio. En la medida de lo posible, la reubicación debe considerarse una excepción, no la regla, como una medida temporal, nunca permanente, y debe existir una supervisión internacional de todos los acuerdos.
- 2 Considerar la región-territorio del Pacífico como *Territorio de Paz, Alegría y Libertad* libre de toda violencia armada debe implicar acuerdos humanitarios entre los actores armados para prevenir los abusos de los derechos humanos y el subsiguiente desplazamiento, así como la protección de la población local, garantizando las condiciones para un retorno seguro.
- 3 La necesidad de crear un *sistema efectivo de alerta temprana y prevención del desplazamiento*. Casi todos los desplazamientos han sido anunciados con una amplia anticipación, sin que hayan sido tomadas acciones preventivas por parte del Estado. Por el contrario, ha habido una correlación entre la presencia de la guerrilla, seguida por la presencia del ejército y seguida, finalmente, por la presencia de paramilitares, que producen el efecto del desplazamiento ya anunciado.
- 4 La urgencia de recibir *Ayuda Humanitaria* para las comunidades desplazadas y que retornan, que respeten sus condiciones culturales. Esta ayuda tiene que basarse en un registro detallado de los desplazados, con la participación de las organizaciones de la comunidad e implicando aquellas comunidades que han resistido a los desplazamientos en territorios ancestrales. Más ampliamente, esto requiere una gran “estabilización económica” (un término de la Red de Solidaridad Social), es decir, el cumplimiento por parte del Estado de su deber de garantizar el absoluto cumplimiento de los derechos sociales, culturales y económicos de todas las comunidades (PCN y AFRODES, 2000).

Actualmente, las condiciones de trabajo del PCN son complejas. No sólo continúan las amenazas y los desplazamientos de las comunidades negras; la gravedad aumenta por el hecho de que a estas alturas la población rural, incluyendo la afro, ya es parte del conflicto armado. El PCN sigue adelante organizando misiones humanitarias y desarrollando otros mecanismos de resistencia y permanencia en el “Territorio-Región del Pacífico” para frenar los dispositivos de “desplazamiento” activados por los aparatos de la modernidad como el desarrollo, el capital y la guerra. Estas actividades, así como aquellas dedicadas a negociar con el Estado el sentido dado a la biodiversidad y a la conservación de los recursos del Pacífico, constituyen la *política cultural del PCN respecto de la naturaleza*; en el sentido de que el significado otorgado a la naturaleza y más específicamente al territorio, deviene en un hecho

político por la confrontación con el Estado, por un lado –al debatir las mejores opciones de desarrollo y conservación de la biodiversidad del Pacífico– y con los grupos armados, por otro –al defender su derecho a conservar al Pacífico como *Territorio de Paz, Alegría y Libertad*.

Si la política cultural del PCN respecto de la identidad negra es la *etnización*, su política cultural respecto de la naturaleza, es la *defensa del lugar*. Dicha política sigue el principio de *reterritorialización* (en el sentido de Deleuze y Guattari), y es crucial para que el movimiento pueda ampliar el marco de su ecología política, dotándolo de un sentido pacifista. Pero la importancia de la defensa del lugar, más allá del caso colombiano, radica en el hecho de rescatar el valor de las *prácticas locales*, y de lo que la epistemología feminista (Hesse, Haraway, Harding, Fox-Keller) ha llamado el *conocimiento situado*; condiciones ambas hasta ahora despreciadas por la racionalidad y la des-subjetivación de la modernidad/colonialidad.

Hasta aquí hemos recorrido la trayectoria del movimiento. Conocimos sus principios de lucha, sus logros y las políticas culturales desplegadas para alcanzarlos. Dado que las políticas culturales del PCN (etnización y defensa del lugar) han supuesto delimitar la identidad negra a partir de la diferencia con lo Otro (lo blanco y lo indígena, en un caso, y las lógicas modernas del desarrollo, el capital y la guerra, en otro), por pura complacencia teórica podríamos celebrar que la identidad negra es una entidad coherente y, además, caer bajo el efecto “ilusorio” por el cual un movimiento aparece como una unidad homogénea bajo la mirada de el/la analista. Pero ya con la crítica deconstructiva hemos visto que la clausura demuestra ser una imposibilidad lógica (Mouffe, 1999); no queda pues, más remedio que asumir que la construcción de toda identidad se basa en la exclusión de aquello que es diferente y, por tanto, que se funda en un ejercicio de poder que impide el reinado de la armonía y la coherencia. Seguir manteniendo la visión homogénea de la identidad (base del movimiento) sería injusto con el sentido común, con una práctica disciplinar crítica y, sobre todo, con la trayectoria de los movimientos.

LAS CRISIS DE LOS MOVIMIENTOS COMO ESPACIOS DE DES-ENCUENTROS: EL PCN “CASA ADENTRO”

Cuando nos sentamos a conversar con los/as activistas de un movimiento que, siguiendo una trayectoria casi heroica, ha logrado consolidar una identidad colectiva, resulta bastante confrontador tener que escuchar relatos sobre las distancias que han ido apareciendo entre sus miembros a lo largo de los años. En el caso particular del PCN, algunos/as de sus activistas han dejado el movimiento; otros/as se mantienen cerca pero participan menos; algunos, aun siendo desplazados/as lejos de sus fa-

milia, son activos/as; otros/as han sido exilados/as y en el peor de los casos, algunos/as activistas han sido asesinados/as. Pese a estas difíciles circunstancias, el movimiento sigue vivo, y más interesante todavía, mantiene una actitud reflexiva respecto de los momentos de crisis que han marcado un punto de inflexión en su trayectoria. En este sentido, una activista del Palenque el Congal, narrando su experiencia como parte del movimiento explica:

Del '90 al '93 [...] es un período eminentemente comunitario. La carga emotiva es mayor en el trabajo que hacemos organizativamente, porque es un ejercicio mutuo; de la gente del río de reconocerse en su práctica: un espejo donde gano conciencia de lo que soy. Y a nosotros, los que tuvimos el privilegio de vivirlo, nos permitió saber de dónde veníamos... que al menos, esa historia que uno lee no fuera tan lejana; estaba ahí, ¡era viva...! Estábamos haciendo un trabajo organizativo, con proyección política, pero al mismo tiempo estábamos llenando vacíos, ausencias...

Del '94 al '98 es una cosa más racional. Es una cosa frente al Estado... Cuando me encuentro con el otro, es pa' ir contra él, pa' sustentar y corriendo; no hay la posibilidad de recrearse, de reencontrarse... Lo que prima es reglamentar pa' que el gobierno no nos tumbé lo que la ley logró... Nos vinimos por la línea de lo nacional. Empezamos a descuidar lo local... Aparecen responsabilidades personales. Empezamos a abrir puertas internacionales... Empezó la crisis... Un anzuelo organizativo y político fue el territorio: está amenazado y es tangible. Ya está claro, cómo podemos seguir [defendiéndolo]. Hoy, hay necesidad de tener otro elemento cohesionador, otro anzuelo...

Y del '98 a hoy [la situación se] agudiza más y moviliza... No somos la misma unidad, pero es que hay otras fuerzas, hay otros actores de comunidad... Pero entonces, ya no es el territorio contra el Estado, sino contra la guerra... Y ¿cómo logramos separar a la comunidad de la guerra? (Entrevista a activista del PCN, noviembre de 2003).

Podríamos tomar estos sofisticados análisis de los momentos de crisis como prueba de las carencias del movimiento. Por ejemplo, de acuerdo a la teoría *de la movilización de recursos*, diríamos que estos momentos se deben a una reducción paulatina de la capacidad del PCN para organizar y gestionar racionalmente los recursos disponibles, lo cual queda reflejado en los agotamientos coyunturales que vive el movimiento tras las intensas fases de interlocución con el Estado y con los actores del

conflicto armado. Según *el paradigma de los procesos políticos*, diríamos que tales momentos de crisis se deben a la restricción de la estructura de oportunidades políticas ofrecidas al PCN por el sistema político colombiano. De acuerdo a la *teoría de los marcos cognitivos*, diríamos que dejaron de ser válidas las interpretaciones que el PCN hace de las injusticias vividas en el contexto social en el que está inmerso y, por tanto, el activismo se va disipando como opción para combatir las injusticias; en su lugar se van instalando otras opciones, como por ejemplo, las ofrecidas por el discurso neoliberal que favorece el individualismo y legitima la renuncia al activismo político en aras de mejorar el bienestar laboral y económico (que sabemos no es nada estable cuando las personas dedican el 100% de su vida a un movimiento).

Sin menospreciar el valor de este tipo de explicaciones, optamos por buscar otras perspectivas que no limiten el análisis de las crisis de los movimientos a aquellas falencias que debilitan su acción colectiva. Por el contrario, pretendemos un análisis que no pase por alto las tensiones, sino que se plante en el lugar mismo de la crisis, y las entienda como oportunidades para construir los consensos que mantienen la cohesión del movimiento y potencian su acción colectiva; podemos entenderlas como *posibilidades históricas* en el sentido de que se producen tras haber ganado cierta consolidación, cuando el tiempo permite una mirada crítica de la propia acción, y que el hecho de plantear las contradicciones del grupo no suponga frenar el impulso que requiere la movilización inicial. Como explica una activista del Palenque El Congal:

A nosotros, como Proceso de Comunidad Negra, siempre nos vieron radicales; aquí [a la oficina] nadie podía llegar con el pelo alisado. Era un momento en que había que ser así pa' hacerse sentir o que la gente asimilara que estaba haciendo cosas que no eran de la cultura... eso para algunos fue chocante. Ahora ya hay otra forma. Pero entonces, son como momentos donde se requiere ser bien fuerte, porque también era la única manera de que miraran lo que estaba pasando (noviembre de 2003).

En este caso, se plantea cómo a medida que el movimiento ha alcanzado unos logros determinados con respecto a su lucha, tiene la posibilidad de abrir espacios de discusión para replantear la manera de definir la identidad negra y, por tanto, cuestionar las condiciones mismas de su reivindicación. La idea de ubicar el análisis en estos espacios de tensión es evitar la tendencia a dar por sentada la construcción de lo político; es decir, a partir de una definición de lo que cuenta como político dada de antemano, olvidando que justamente el carácter político de una lucha es la posibilidad de negociar los sentidos de aquello por lo que se lucha. Si asumimos las crisis de los movimientos sociales como hechos conge-

lados en el tiempo y, sobre todo, como algo que impide su organización, estaríamos negando que los movimientos, al igual que los/as investigadores/as, están sometidos a constantes procesos de transformación.

Quizá esta tendencia a olvidar que la producción de significados de los movimientos sociales –como la de cualquier otro actor “social”– está marcada por constantes controversias, se deba a que no queremos renunciar a la imagen heroica de un movimiento poderoso e impoluto. Hablar de conflictos al interior de los movimientos sociales, se entendería como un ejercicio de violencia⁹. Pareciera que seguimos arrastrando el presupuesto de que la ciencia (según modelos funcionalistas) o el/la científico/a (según el marxismo) posee los instrumentos para “descubrir la verdad” (Moreno, 1993); en este caso, las certezas sobre los movimientos y sus crisis. Un presupuesto que abriga la esperanza de que los héroes de la historia se mantengan en el ámbito académico o, peor aún, que los movimientos sean “objetos” de estudio con una trayectoria intachable¹⁰. Entonces, en vez de recrear la figura de la *crisis* como algo negativo y pretérito que merma la fuerza de un movimiento, la entenderemos como su apuesta por construir espacios de encuentros y desencuentros necesarios para la negociación de los sentidos de su lucha y la identidad en torno a la cual esta se articula. En el caso del PCN, estos espacios de negociación se dan “casa adentro”; es decir, en discusiones estrictamente internas destinadas a debatir el sentido atribuido a la reivindicación de lo negro.

DIMENSIÓN DEL DISENSO Y SUBJETIVIDAD EN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Para aunarnos a la apuesta del PCN de construir espacios de des-encuentros donde puedan negociar el sentido político de su lucha, desarrollaremos dos temas vinculados al modo como se manejan las diferencias al interior de los movimientos; por un lado, la importancia del disenso en los conflictos y, por otro, la necesidad de considerar los aspectos experienciales del activismo político para poder gestionar los disensos al interior de un grupo.

CRISIS PERO NO DE PÁNICO: LO POLÍTICO Y LA POLÍTICA (CHANTAL MOUFFE)

La conocida obra *Hegemonía y estrategia socialista* (1993) de Laclau y Mouffe, marcó un importante punto de inflexión en el análisis de la acción social. Se propuso tomar el concepto *posiciones de sujeto* como una

9 Además, mantendría activa la fantasía de que basta con obviar los conflictos para que desaparezcan.

10 Agradezco a mi profesor y amigo Andreu Viola esta importante reflexión, que fue decisiva para seguir adelante con la investigación.

noción que permite reemplazar la idea tradicional de identidad como fundamento, y resaltar que esta nunca debe ser entendida como punto de partida sino como efecto de la siempre renovada capacidad de referirse a sí mismo/a y al propio actuar en el mundo (Birulés, 1996). La relevancia de esta propuesta para el análisis de los movimientos sociales radica en el hecho de explicar que para alcanzar los objetivos de la movilización es menester articular una lucha en torno a una identidad (en este caso étnica), lo cual supone, al mismo tiempo, suspender temporal y estratégicamente otras diferencias (identitarias) que hay entre quienes participan en una lucha (diferencias de clase, de género, nivel de formación, etcétera). Sin embargo, Mouffe (1999) insiste en que esas diferencias siguen existiendo, y deben tomarse en cuenta para promover prácticas democráticas. En la presente aproximación a los movimientos sociales, será crucial la tesis de Mouffe (1999) de dejar de entender la política exclusivamente en términos de consenso. Esta autora sostiene que la política no sólo tiene la raíz de “polis” que alude a vivir conjuntamente, sino que además, tiene la raíz “pólemos” que alude a lo polémico, lo conflictivo. Distingue entre *la política* entendida como *consenso* y *lo político* entendido como *disenso*. Y propone como aspecto central de las prácticas democráticas, la tensión entre el consenso –de los principios de lucha– y el disenso –respecto a su interpretación. Siguiendo esta tesis, consideramos fundamental incorporar la dimensión del disenso al análisis de los movimientos sociales. Mi punto de partida, insisto, es que un movimiento se mantiene vivo (o no se institucionaliza) en la medida en que abre espacios de disenso como un ejercicio que acompaña y posibilita la búsqueda del consenso. En el caso del PCN, el consenso respecto de la identidad negra está atravesado por disensos respecto de otros temas identitarios.

El tema *generacional*, por ejemplo, es un tema identitario que ha suscitado interesantes disensos y reflexiones internas en el PCN. Según el movimiento, hay una necesidad impostergable de visibilizar las contribuciones de las “autoridades mayores”, así como de hacer el relevo para formar la nueva generación de activistas. Para gestionar este tipo de disensos, en el primer caso se creó el Consejo de Mayores, y en el segundo, la Escuela de Jóvenes. Otra interesante fuente de disenso interno refiere al tema de la *autoría*; el PCN busca la manera de que se produzca conocimiento respetando el carácter colectivo de su cosmovisión negra. En el caso de ambos temas (el generacional y la autoría) y sobre todo en el primero, el PCN ha desarrollado *estrategias formales* para gestionar los disensos que estos suscitan. En otras ocasiones, sin embargo, el movimiento no ha desarrollado estrategias tan formales. Es el caso, por ejemplo, de los disensos respecto del estilo de trabajo (la mayor o menor cercanía a la política convencional) según la *región* del país donde se lleve a cabo la lucha (Pacífico, Atlántico o

Valle Interandino). Las diferencias al respecto, y las dificultades que estas acarrearán, se reconocen; pero más que una estrategia formal hay una tendencia a prestar más atención a la “experticia” de cada palenque regional para tratar temas específicos (por ejemplo, la etnoeducación en el caso del Palenque de Kusuto, o las demandas territoriales en el caso del Palenque de El Congal). Asimismo, el movimiento ha contemplado el disenso que resulta de la clásica dicotomía identitaria *rural-urbano*; una dicotomía estrechamente vinculada a la identidad de *clase*, y que pone en tela de juicio la legitimidad de la representación de la población rural por parte de activistas urbanos. Según el PCN, es crucial trabajar los disensos al respecto, entre otras cosas, por la imposibilidad de ciertos/as activistas de permanecer en zonas rurales, debido a la situación de desplazamiento. Otro tipo de disenso que empieza a emerger en el movimiento refiere al tipo de *religión* practicada. A pesar de que el sincretismo religioso (sobre todo católico y africano), no había sido un problema relevante para el movimiento, en los últimos años empieza a ser fuente de debate la conversión a la religión evangélica. Algunos/as activistas sostienen que ciertas tendencias de la religión evangélica promueven la desmovilización política (al procurar “dejar los problemas en manos de Dios”), e impiden cuestionar las circunstancias históricas, políticas y personales que enfrenta el movimiento. Sin embargo, como en el caso del sincretismo católico-africano, se ha respetado la elección de culto religioso. Por último, la identidad de *género* ha sido otra fuente de disenso interno que ha suscitado interesantísimos debates, no sólo al interior del PCN sino fuera de este (en la academia, la red de organizaciones feministas y la de organizaciones de mujeres afro, muchas veces vinculadas); como sucintamente explica Juana Camacho en la interesantísima reseña bibliográfica que hace de los estudios sobre la mujer afrocolombiana, la denuncia es que el movimiento antepone la defensa de la identidad negra, y obvia los problemas de género (Asher y González citados por Camacho, 2001). Ciertamente, en un primer período, el movimiento mantuvo una tendencia bastante centrada en las reivindicaciones de lo negro. Retomamos la cita antes referida:

A nosotros como Proceso de Comunidades Negras siempre nos vieron radicales; aquí [a la oficina] nadie podía llegar con el pelo alisado. Era un momento en que había que ser así pa’ hacerse sentir. Que la gente asimilara... Son como momentos donde se requiere ser bien fuerte... Ahora ya hay otra forma... (Noviembre de 2003).

A pesar de la radicalidad inicial del PCN al respecto, durante los últimos años se han potenciado actividades específicamente dirigidas a mujeres de zonas rurales, así como actividades “casa adentro” con el fin

de ir abriendo espacios para discutir y gestionar los disensos referidos al tema de las relaciones de género. De hecho, en el Palenque El Congal se constituyó un Equipo de Género, conformado por mujeres pero también por hombres. Según las líderes del PCN, a pesar de los esfuerzos, queda un largo camino por recorrer.

**MOVIMIENTOS SOCIALES COMO ANTI-HÉROES
(POST-ESTRUCTURALISMO)**

Algunos de los disensos referidos han recibido más atención en la literatura de los movimientos sociales (identidad de clase, género o procedencia); otros, han sido menos estudiados (identidad religiosa). Sin embargo, lo importante es que de una u otra manera, para poder identificar los disensos internos de un movimiento y las estrategias (más o menos formales) que desarrolla para gestionarlas, es imprescindible abandonar la dicotomía moderna y marxista dominado/dominante. No se trata de recrear la figura del actor social “libre y que elige” o que, por el contrario, está sometido y no tiene conciencia. Aquí acudimos a Foucault (1994) para recordar que la resistencia no es una exterioridad respecto del poder, en el sentido de que el *poder* existe en función de una multiplicidad de puntos de *resistencia* que dan cabida a prácticas liberadoras. De ahí la afirmación: donde hay poder hay resistencia y viceversa. De no ser posibles las prácticas de resistencia, no hablaríamos de poder sino de *dominación* para referirnos a aquellas situaciones en las que son escasas las posibilidades de revertir la asimetría de la relación. Siguiendo esta perspectiva, consideramos necesario pensar los movimientos fuera del marco binario que ubica al poder en un espacio puro y ajeno a las resistencias. Esto es comprender que, si bien los movimientos sociales pueden ser entendidos como “lugares de *resistencia*” frente a los aparatos de poder, también es necesario entenderlos como lugares donde se recrean relaciones de *poder*.

Ya Deleuze y Guattari (1988) advertían que las asimetrías de poder no sólo tienen un componente macro, sino que también son reproducidas por nuestras acciones a nivel micro. Y más importante aún, por la propiedad que tiene el poder de circular de un nivel a otro. De ahí que estos autores sostengan que el poder no sólo tiene un *componente molar* que sobre-codifica y centraliza las múltiples diferencias en categorías binarias y abstractas (etnia, género, clase, etc.) sino que el poder también tiene un *componente molecular* que opera a nivel *micro* donde recreamos y perpetuamos las macro-categorías binarias y abstractas que son co-extensivas a todo el campo social. Con esta doble dinámica propongo *renunciar a la imagen heroica de los movimientos* que solemos tener quienes investigamos. Es importante, entonces, conocer cómo *operan las diferencias al interior de un movimiento*, pero también es crucial analizar

las *prácticas de resistencia* desplegadas por ese movimiento para evitar que las relaciones de poder devengan en relaciones de dominación.

En este sentido, un movimiento como el PCN, aún cuando despliega políticas culturales –por ejemplo, contra el Estado– con el fin de revertir las relaciones de poder que sustentan la discriminación racial e impiden el reconocimiento político de la identidad negra, puede recrear a nivel cotidiano otras formas de poder ancladas en categorías identitarias distintas de la étnica. En este sentido, es pertinente la consideración de un activista en relación a que “la resistencia no es sólo para construir la diferencia” sino también “para convivir en la diferencia” (Rosero, 1994). Así, para el PCN no basta con desplegar políticas culturales; debe identificar al mismo tiempo los disensos que existen al interior del movimiento, así como generar estrategias de *resistencia* para gestionarlos, e impedir que relaciones de *poder* pasen a ser de *dominación*.

EN LAS REDES SUMERGIDAS... MÁS ALLÁ DE LOS ACTOS REIVINDICATIVOS

Otro aspecto a considerar a la hora de aproximarnos a la dimensión del disenso de un movimiento es el de ubicar el análisis de la acción social al nivel de lo que Melucci (1989) llamó las *redes sumergidas*; es decir, al nivel del entramado de relaciones que se tejen antes, durante y después de las acciones reivindicativas, y en las que se construyen los modelos culturales y desafíos simbólicos que el movimiento plantea respecto del orden dominante. En ese sentido, tan importantes como las acciones reivindicativas basadas en principios de lucha –previamente consensuados– son los disensos que posibilitan a aquellos. Al nivel de las *redes sumergidas*, se rompe la ilusión de la homogeneidad del movimiento.

Desde mediados de los años noventa, el PCN abrió un debate “casa adentro” sobre los efectos de la *etnización* de la identidad negra. Especial énfasis se dio en ese momento a la necesidad de reconocer las *diferentes expresiones de lo Negro*, con el fin de poder cuestionar en qué medida las estrategias políticas articulan discurso y acción (Rosero, 1994). A partir de entonces, el PCN inició un *proceso de revisión interna* que a nivel general plantea cómo mantener viva la lucha por las comunidades negras sin agotar el discurso en una categoría unitaria del Ser Negro. Más aún, en un momento de fragilidad generalizada por la guerra, el PCN se pregunta cómo hablar en plural de las prácticas de las comunidades negras sin debilitar la lucha del movimiento. Ubicando el análisis en el día a día del movimiento se pueden captar los intentos por llevar a cabo ejercicios de revisión interna que identifiquen los puntos problemáticos a lo largo de su trayectoria. A este nivel de análisis, es evidente la importancia del carácter proxémico de los movimientos sociales; es decir, del valor que tiene el sentimiento de pertenecer a un grupo o red de ellos; un senti-

miento tan intenso como ambivalente, pero que en cualquier caso está estrechamente vinculado a los disensos internos.

Hasta este punto del planteamiento, ha sido crucial la noción de *posiciones de sujeto* para entender los procesos mediante los cuales la lucha de un movimiento articulada en torno a una identidad requiere suspender temporal y precariamente otras marcas identitarias. La identidad étnica, en este caso, se entendería como una posición de sujeto producto, por un lado, del cruce de discursos (por ejemplo, el anti-racista, el cimarronismo, el de los derechos étnicos de la constitución) fortalecidos por el propio movimiento; y, por otro lado, resultado de la suspensión estratégica y temporal de otras identidades distintas de la étnica (la de clase, género, etcétera).

Pero sabemos que no es lo mismo participar en un movimiento social étnico siendo desplazado/a o no, de la ciudad o de zona rural, mujer u hombre, heterosexual o no, profesional o no, madre/padre o no, etc. Y es que las posiciones de sujeto no son “vacías” en el sentido de simples articulaciones discursivas. Por el contrario, la posibilidad de recrear un discurso exige una *experiencia encarnada*, en la medida en que los mecanismos de poder que legitiman un discurso determinado funcionan naturalizando ciertos deseos como “propios” de una identidad dada; y son estos deseos los que nos constituyen, en tanto que los recreamos en las acciones cotidianas (Pujal, 2003). Ahora bien, es importante aclarar que los deseos no son anhelos particulares. Si bien las vivencias pueden sentirse como algo “propio”, el carácter de cualquier experiencia necesariamente es colectivo, pues es elaborado a partir de categorías lingüísticas producidas y des-legitimadas socialmente. Por tanto, entendemos que los deseos son socialmente construidos. Por ejemplo, el deseo de ser madre, ama de casa y cuidadora de otros/as, vinculado a la identidad de género femenina, es un deseo socialmente construido durante el inicio del capitalismo (como complemento al del hombre obrero y proveedor del pan).

Sin embargo, aun cuando el deseo de ser madre sea construido, se trata de un deseo encarnado, al punto de que es común la profunda incomodidad (superable, por supuesto) de llegar a los 37 años sin ser madre. En este sentido, no nos basta hablar de la identidad como posiciones de sujeto articuladas en torno a una categoría discursiva; consideramos necesario incorporar las tensiones inherentes al modo como experimentamos los deseos vinculados a determinadas identidades; más concretamente, las tensiones que resultan del sentimiento de “inadecuación”¹¹ que tenemos cuando nuestras vivencias no pueden ser inteligibles a partir

11 Aquí aludimos al sentimiento de ser un *Otro Inadecuado* al que se refiere Haraway (1995) tomando la expresión de las protagonistas de las películas de la cineasta vietnamita Trihn Mihn-Ha.

de las normas sociales que delimitan nuestra identidad (por ejemplo, la vivencia de ser no una mujer “completa” por no ser madre). En este punto nos apartamos de las propuestas más discursivistas como la de Mouffe y Laclau, para acercarnos a la epistemología feminista que rescata el tema de la experiencia, apelando al concepto de subjetividad.

LO PASIONAL EN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES (EPISTEMOLOGÍA FEMINISTA)

Tras la llamada “muerte del sujeto” (de la modernidad: libre autónomo, racional, transparente y dueño de su destino), según ciertos/as autores/as ha reaparecido el *anhelo de la subjetividad* como un momento del pensamiento filosófico que ha hecho posible la reconstrucción de un sujeto políticamente responsable¹². Aunque de la subjetividad no hay una definición precisa, como bien apunta Gloria Bonder (1998), hay un acuerdo de que el término exige incorporar el tema del poder a la explicación de los procesos identitarios, así como recuperar de modo no esencialista el concepto de identidad y su relación con otros conceptos psicológicos como: Yo, experiencia y memoria.

La redefinición no esencialista de los procesos identitarios, y el reconocimiento de que están atravesados por relaciones de poder/resistencia, resalta el carácter no homogéneo ni transparente de la identidad. Muchas feministas –como Haraway, Scott, Butler y la misma Mouffe, entre otras– han insistido en el *carácter híbrido de la identidad*. Como señala Angélica Nãñez, gracias a la deconstrucción radical del mito de la identidad como algo esencial, inocente, unívoco y coherente, la identidad dejó de ser lo que “somos” esencialmente como resultado de un acto fundante, y pasó a ser aquello que asumimos a diario y constantemente, mediante la actuación y confirmación permanente de esa identidad. Quizá hablamos de ficciones; pero ficciones al fin y al cabo inevitables y necesarias para experimentar las identidades que nosotros/as mismos/as afirmamos con nuestras prácticas cotidianas. Ello no significa –como aclara la autora– apostar por un yo irremediamente condenado a la imposibilidad de agencia. Justamente, el hecho de que afirmamos con nuestras prácticas cotidianas las identidades que nos constituyen, nos ofrece cierto margen para transgredirlas (Nãñez, 2001). Asumir la hibridez identitaria advierte, entonces, acerca de la necesidad de localizar la *agencia* (es decir, la posibilidad de subvertir las normas que limitan la identidad, por ejemplo, étnica) dentro de las posibilidades de variación, ruptura o cuestionamiento, que están siempre condicionadas por otras marcas identitarias (por ejemplo, las de clase, género, lugar de proce-

12 Interesantes planteamientos respecto al *anhelo de la subjetividad* son hechos por Fina Birulés, López-Petit, entre otros/as, y fueron compilados por Manuel Cruz (1996).

dencia, etcétera). Son “mecanismos de sujeción” (Butler, 2001b) a los que estamos sometidos, nunca de manera absoluta.

Dado que las identidades no son homogéneas, las luchas articuladas en torno a ellas tampoco lo son. Las/os activistas del PCN pueden articular su lucha desde la identidad étnica; pero en el día a día también viven, por ejemplo, como jóvenes, pobres o mujeres. Sus vivencias están marcadas por otras aspiraciones (disfrutar la juventud, estudiar para mejorar la calidad de vida en el futuro, o poder dedicar más tiempo a sí mismos/as o a sus hijos/as). Son anhelos que también están mediando y matizando la reivindicación de la identidad étnica, pero que quedan opacados en el momento de desplegar sus políticas culturales frente a otros actores sociales.

Al apostar por la idea de la identidad híbrida, además, dejamos de entender los fenómenos psicológicos, incluidas las *crisis* –individuales o grupales– como algo “privado”; más bien, serían vivencias cuya elaboración pasa por re-producir y legitimar ciertas categorías lingüísticas, así como por la posibilidad de subvertirlas. En ese sentido, “lo psicológico” no se limita a procesos que están dentro o fuera del sujeto, sino a complejos procesos que se producen y transforman en el espacio de la *intersubjetividad*; es decir, en el espacio “entre” los sujetos (Fernández Christlieb, 1994). Se partiría, entonces, de que existe un universo simbólico compartido, o lo que es lo mismo, una *intersubjetividad* en torno a las identidades, la cual sintetiza un consenso generalizado pero nunca fijo, sobre los modos adecuados de experienciarnos en tanto que personas marcadas por una identidad dada. Por ejemplo, en la Colombia racista podemos hablar de una intersubjetividad de la identidad étnica que condenaría los modos “adecuados” de sentirse negro/a y, en parte, daría cuenta del endo-racismo y la “necesidad de blanquear la raza”. Como explica una activista del PCN, quien al aceptar la propuesta de una antropóloga y funcionaria del Estado de trabajar como empleada doméstica, terminó siendo esclavizada:

Yo tenía 14 años, me tocaba trapear, lavar casi toda la ropa a mano, me tocó hasta atender al perro... Cuando yo no hacía las cosas bien, el papá de las muchachas me decía: “¡Maldita negra! ¡No debieron... no debieron salir de la esclavitud!”. Mire, yo recibí las peores humillaciones... Le digo que en ese momento, en lo más profundo, uno no desea ser... negra (Noviembre de 2003).

Lo anterior no significa que nos sometamos dócilmente a una norma identitaria. Justamente, la sensación de malestar o inadecuación al interior de un colectivo o de la sociedad en general evidencia que ese universo compartido que configura la intersubjetividad, tiene manifestaciones particulares que no se ajustan a lo consensuado; y no podría ser de otro modo pues la vivencia de una identidad nunca es pura, porque está mediada por experiencias diversas vinculadas a otras identidades; como

hemos dicho, no sólo se es negro, sino mujer, profesional, pobre, etc. e, irremediablemente, estas otras marcas identitarias también condicionan la identidad étnica y las posibilidades y modos de reivindicarla.

Lo que ha hecho el PCN en la Colombia racista es redefinir la intersubjetividad de “las negritudes que estorban”, abriendo posibilidades para deslegitimar el sentimiento generalizado de que se es menos por “ser negro/a”, y ha relegitimado, por el contrario, el derecho a sentirse orgulloso/a y a reivindicar los distintos modos del “Ser Negro” plasmados en expresiones diversas (que van desde el ámbito espiritual hasta el jurídico, pasando por el musical). En este sentido, resaltamos que la subjetividad es producto de un proceso de *des-sujeción* de la identidad y que el movimiento, desplegando sus políticas culturales, pone en marcha dinámicas de *agenciamiento* mediante las cuales logra redefinir positivamente la identidad étnica, así como reconstruir dignamente la intersubjetividad al respecto.

Sin embargo, dado que partimos de que la subjetividad no es agenciamiento puro sino que también es producto de un proceso de *sujeción*, también nos interesa resaltar que los disensos al interior del movimiento vendrían de la imposibilidad de vehiculizar colectivamente el malestar producido por no experimentar a cabalidad el “Ser Negro” que se reivindica; es decir, por el hecho de tener otras aspiraciones que chocan con la defensa de la identidad negra tal y como el movimiento la ha definido hasta el momento; anhelos que están presentes y condicionan la lucha política, y que en algunos casos son más conscientes que en otros; o que incluso, siendo conscientes, algunas veces pueden compartirse pero otras veces no, porque el propio movimiento no abre espacios para reflexionar al respecto. Un ejemplo es el que comenta un activista del PCN desplazado por amenazas políticas de su pueblo, Tumaco, a Bogotá:

Yo, la única cosa que había sido... yo no sé cómo decir, si me ha dolido mucho y eso, no sé cómo decirlo... dura, dura para mí es que siempre Mercedes, la compañera, la chica con la que nos casamos, ella murió el año pasado de cáncer. Como ella siempre... ella estaba inconforme porque casi nunca estaba en la casa... Nosotros vivimos 10 años y creo que sumado el tiempo... los fines de semana de 6 años no estuve con ella... Entonces sí fue bastante tiempo. Por eso, ahora, los fines de semana me pierdo; los dedico para mí y cuando tenga otra compañera... Estoy tratando de asumir el hábito de ese tiempo para mí... Sí. Más para uno, para la familia, para conversar con los amigos... Entonces ocupo un poco los fines de semana en otras actividades... Además yo jugaba fútbol muy bien pero hace tiempo no juego y quiero volver a jugar (Noviembre de 2003).

La posibilidad del movimiento de abrir estos espacios para reflexionar sobre otras aspiraciones que condicionan el activismo, puede ser potenciada por las interconexiones dentro del propio movimiento, pero también por las conexiones con otros movimientos. Por ejemplo, la conexión con redes feministas ha ayudado a las mujeres del PCN a expresar tanto el malestar con las asimetrías de género, como las posibilidades de mejorar las relaciones de género al interior del movimiento y en su propia vida, muchas veces compartida con activistas del PCN, dado que son sus parejas. Como afirma una activista del PCN:

[El trabajo en la red de mujeres me] ha ayudado a liberarme, a saber que yo existo como mujer; que tengo mis valores y que puedo sobrevivir sin... José. Por ejemplo, sé que si yo termino con José, pues chévere y todo, pero adiós... para mí es muy chévere, es autonomía. Siempre estoy reivindicando... que yo no soy negra solamente... además de ser negra soy mujer (Septiembre de 2003).

Por el contrario, considero que un movimiento tiene menos posibilidades de abrir espacios de disenso en la medida en que sus miembros experimenten el activismo como una *conexión total* con el movimiento; una dedicación al 100% que reduce los deseos a uno solo (ser activista) anulando otros sueños, necesidades distintas al activismo, pero que permanecen allí, con lo cual se perjudica al movimiento, al impedir la posibilidad de disfrutar el activismo. Igual de perjudicial es optar por la *desconexión total*, que niega la importancia del activismo como un anhelo que constituyó la propia subjetividad y que, por supuesto, no redundan en nada productivo para el movimiento. En ambos casos, además, se fortalecen las dinámicas hegemónicas. Veamos el ejemplo de cómo una activista del PCN logra una conexión parcial con el movimiento dando cabida a sus necesidades particulares, sin romper por ello su compromiso con la lucha:

De las cosas que yo sí he añorado en mi vida, es que a diferencia de lo que es normal en el Pacífico, mi familia es muy chiquita... Entonces, cuando yo llegué [como activista] a ese río y encontré a ese poco de tíos aunque no supiera de dónde... pues eran mis tíos y yo la sobrina... sentí que había encontrado esa familia que no había tenido, que tanto había añorado, e incluso siento que eso me hizo echar raíces y yo dije: "esto sí es lo mío". [Fue] sentirme querida por más gente... sentirme halagada, reconocida; la gente le levantó a uno mucho el ego, algo que lo reafirma a uno (Octubre de 2003).

Después de una crisis dentro del PCN, esta activista se retira casi totalmente y se dedica a trabajar las reivindicaciones de las comunidades negras desde el ámbito institucional.

Empecé a vincularme directamente con las instituciones a través de proyectos... perdí mi bebé... de tres meses... Viajé como tres veces de aquí a Bogotá y sin saber que estaba en embarazo y las pistas aquí son chiquitas y el aterrizaje es pesado. [Ahora] estoy esperando a quedar otra vez en embarazo... por un lado tenía que bajarle al ritmo de trabajo, pero si nos metemos [con el PCN] en titulación y hay que sacar la propuesta, rápido... cómo voy a vivir tranquila si hay que sacar eso adelante... Siento que ese mermarle el tiempo al proyecto político como una de las personas que lo está impulsando, tiene que ver con esas otras prioridades personales... Yo sigo en el PCN [pero] represento lo local [no lo nacional ni lo internacional, como antes]. Siento que acá doy más, que apporto más, que me necesitan más... además, dedicándome a esto, tengo espacio pa'mi vida personal (Octubre de 2003).

Desde mi punto de vista, experiencias de *conexiones parciales*¹³ como esta le permitirán al movimiento desarrollar estrategias para gestionar sus disensos internos, y evitar así la tendencia a reificar la identidad étnica que reivindica. Esta posibilidad de cambio, insisto, no pasaría por lo individual sino por lo *relacional*. Como Foucault (1994) sostiene, la posibilidad de agencia del sujeto no es algo que se invente el individuo mismo, sino que se deriva de esquemas que encuentra en su cultura. Por tanto, es una tarea *colectiva* encontrar estrategias que permitan construir una identidad parcialmente estable y que, al mismo tiempo, sean lo suficientemente flexibles para rearticularse desde posiciones que desborden la norma que las posibilitan. Desde posiciones relacionales y, por tanto, dentro de un marco colectivo, un movimiento como el PCN podría vehiculizar colectivamente el malestar producido por las asimetrías que forman parte de las dinámicas internas de un movimiento, y de la vida misma.

Para comprender los procesos a través de los cuales un movimiento logra gestionar sus disensos internos y, por tanto, potenciar sus políticas culturales frente a otros actores sociales, resulta bastante pertinente un aporte de la epistemología feminista: la “implosión” de la categoría Mujer (Correa y Figueroa Sarriera, 1994). Con el fin de evitar la tendencia del feminismo a universalizar la condición femenina, se

13 Aquí hago referencia explícita al concepto *conexión parcial* usado por feministas (Butler, Haraway, entre otras) para referirse “al inevitable y doloroso vínculo de la dependencia con el Otro poderoso” (Butler, 2001b).

plantea la necesidad de *hacer emerger las múltiples posiciones de género* derivadas de procesos de subjetivación atravesados por relaciones de poder asimétricas (según la etnia, clase, edad, orientación sexual, etcétera). En el caso del PCN, hablaríamos de la *implosión de la identidad étnica* dando cabida a distintas experiencias vinculadas a las marcas identitarias de género, clase, nivel de formación, lugar de procedencia, culto religioso, orientación sexual, etc. Sin dejar de anclar su lucha en la identidad negra, la implosión de esta categoría daría cabida a procesos de subjetivación que acompañan y condicionan la construcción de la identidad negra y, por tanto, daría al movimiento la posibilidad de abrir espacios de disenso, así como la oportunidad para gestionarlos. Incluso, creo, podemos aplicar esta noción de *implosión de la identidad negra* para entender que el buen clima de investigación logrado para reconstruir las historias de vida de los activistas se debió, en parte, a que compartía con ellas/os otras marcas identitarias distintas de la étnica (dado que soy mestiza tirando hacia blanca para una persona negra, y hacia “sudaca” para una europea).

* * *

A lo largo de la investigación, reconstruimos las historias de vida del PCN tomando como eje las experiencias del activismo político. Los momentos de crisis del movimiento han sido una oportunidad para que el movimiento identifique y gestione los disensos, dando cabida así, a otros condicionantes históricos de su acción política. Al hacerlo han tenido la ocasión para dejar de entender los malestares del activismo como un problema “personal”, y para reconstruirlos desde una perspectiva intersubjetiva que cobre importancia para todo el grupo. Son intentos del movimiento de reivindicar la igualdad *en* la diferencia, luego de luchar durante más de una década por la igualdad *desde* la diferencia.

No quiero terminar sin decir que para el análisis de la dimensión del disenso de los movimientos sociales es crucial el reto de reflexionar *desde* América Latina; es decir, comprender que ante los conflictos contemporáneos se están generando respuestas colectivamente organizadas que reivindican *otros sentidos de lo político*, distintos a los posibilitados por la cultura política convencional, y *desde otros lugares* alternativos al pensamiento de la modernidad. Esto implica luchar contra lo que Aníbal Quijano (2000) ha denominado la “colonialidad del poder”: un patrón configurado sobre la base de la clasificación social-racial que ha servido para subalternizar no sólo a los grupos, sino a sus conocimientos. Esta lucha es más urgente ahora, pues, como sostiene Daniel Mato

(2005), en las actuales condiciones de pauperización de las sociedades latinoamericanas, las organizaciones y movimientos cobran un papel relevante para crear espacios de práctica intelectual. Es necesario, entonces, reivindicar que los movimientos producen perspectivas críticas de la modernidad y la colonialidad del poder que la ha acompañado. Pero hay que hacerlo yendo más allá de su definición como “territorio cognitivo” (Eyerman y Jamison, 1991) desde donde se diagnostica el contexto social. ¿Por qué no atrevernos con Daniel Mato a considerar a los movimientos como intelectuales extra-académicos y hablar entonces de “co-producción” (Mato, 2005) conjunta entre la academia y los movimientos sociales? En el caso de esta investigación, que pretende explicitar los disensos en el seno del movimiento, quedan pendientes importantes interrogantes al respecto. Si a la academia occidental se le puede reprochar el *logocentrismo*, podemos preguntarnos con Mato (2005): ¿qué espacio ha dejado esta investigación a las prácticas no escritas que se producen en el seno de los movimientos sociales? Más aún en el caso de las comunidades negras que otorgan un papel fundamental en su cultura a la tradición oral. En nuestro caso, que optamos por la tradición escrita, habría que preguntarse cómo acercarnos a otras apuestas de “co-producción” con las comunidades negras¹⁴. Además de estos interrogantes, hay que destacar que la investigación fue rica en términos de aprendizaje cotidiano. Después de varios años, los ejercicios de revisión interna del PCN, dejaron de ser “casa adentro”; sus activistas plantearon la *posibilidad histórica* de compartirlos con el ámbito académico, para poder producir conjuntamente sentidos que permiten problematizar la reivindicación de la identidad negra. Esto ha implicado crear lazos de amistad, discusiones y complicidad en la lucha; nos hemos enviado libros, correos electrónicos, corrección de textos; hemos conversado de nuestros sueños, el papel de la ciencia y la posibilidad de mi alianza con las reivindicaciones de la identidad negra. Por su parte, las/los activistas del PCN –con distintos grados– han compartido conmigo sus conocimientos acerca de la historia del movimiento, del país, de la lucha negra en el mundo, de las hierbas medicinales para mi faringitis crónica, etc. Por mi parte, he compartido conocimientos sobre la psicología social, el feminismo, el caribe venezolano, así como mis posturas como hija, sobrina y compañera que ve sufrir a los hombres de

14 Un ejemplo es el de Catherine Walsh con el PCN ecuatoriano (específicamente, con Juan García, líder del PCN ecuatoriano); en el caso del PCN colombiano, un ejemplo de co-producción teórica es el de Arturo Escobar (antropólogo) con Libia Grueso y Carlos Rosero, y el de Eduardo Restrepo (antropólogo) con Hernán Cortés. Asimismo, cabe destacar el proyecto “a seis manos” adelantado por Jeannette Rojas (activista feminista y funcionaria del Estado) con activistas del PCN colombiano.

su familia, a sus amigos y a su pareja por no poder cumplir a cabalidad con el rol de proveedor, así como a las mujeres y a sí misma por pasar por encima de todo y todos/as (incluyéndose a sí) para poder alcanzar el estándar de la mujer aguerrida que todo lo puede. Se trata sin duda de interesantes retos para pensar el tema de la “co-producción” entre la academia y los movimientos sociales¹⁵.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez, Sonia; Dagnino, Evelina y Escobar, Arturo (eds.) 2001 *Política cultural & cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos* (Bogotá: Taurus/ICANH).
- Benford, Robert 1997 “An Insider’s critique of the social movement framing perspective” in *Sociological Inquiry*, Vol. 6, N° 4.
- Birulés, Fina 1996 “Del sujeto a la subjetividad” en Cruz, Manuel (comp.) *Tiempo de subjetividad* (Barcelona: Paidós).
- Bonder, Gloria 1998 “Género y Subjetividad. Avatares de una relación no evidente”. Encuentro de Universidades de Latinoamérica y el Caribe Género y epistemología: mujeres y disciplinas, Santiago de Chile. En <<http://www.revue.csociales.unchile.cl/genero/mazorka/debate/gbonder.htm>>.
- Butler, Judith 2001a (1990) *El Género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad* (México DF: Paidós/UNAM).
- Butler, Judith 2001b (1997) *Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción* (Madrid: Ediciones Cátedra/Universidad de Valencia/ Instituto de la Mujer).
- Calderón, Fernando; Piscitelli, Alejandro and Reyna, José Luis 1992 “Social Movements. Actors, theories and expectation” in Escobar, Arturo and Álvarez, Sonia (eds.) *The Making of social movements in Latin America. Identity, strategy and democracy* (Boulder: Westview Press).
- Camacho, Juana 2001 “Silencios elocuentes, voces emergentes: reseña bibliográfica de los estudios sobre la mujer afrocolombiana”

15 En 2004, como un ejercicio de co-producción de conocimiento, Julia Cogollo (activista del PCN), Angélica Nández (compañera del doctorado) y yo, aprovechamos nuestra triple identidad común de mujeres, caribeñas y psicólogas y preparamos una ponencia titulada “El Patriarca Imposible: subjetividad masculina afro-caribeña” que más tarde fue publicada en el libro editado por Eduardo Restrepo y Axel Rojas (2004).

- en Pardo, Mauricio (ed.) *Estado del arte de los estudios afrocolombianos en Colombia* (Bogotá: ICANH).
- Correa, Nidza y Figueroa Sarriera, Heidi 1994 "Las mujeres son, son, son... Implosión y recomposición de la categoría" en Figueroa Sarriera, Heidi (ed.) *Más allá de la bella (in)diferencia. Revisión post-feminista y otras escrituras posibles* (República Dominicana: Publicaciones Puertorriqueñas).
- Cruz, Manuel 1996 (comp.) *Tiempo de subjetividad* (Barcelona: Paidós).
- Dagnino, Evelina 2001 "Cultura, ciudadanía y democracia: los discursos y prácticas cambiantes de la izquierda latinoamericana" en Álvarez, Sonia; Dagnino, Evelina y Escobar, Arturo (eds.) *Política cultural & cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos* (Bogotá: ICANH/CEREC).
- Deleuze, Gilles y Guattari, Félix 1988 *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia* (Valencia: Pre-Textos).
- Escobar, Arturo 1996 "Nuevas y viejas formas de capital y los dilemas de la biodiversidad" en Escobar, Arturo y Pedrosa, Álvaro (eds.) *Pacífico: ¿Desarrollo o diversidad? Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano* (Bogotá: CEREC).
- Escobar, Arturo 1997 "Imaginando un futuro: pensamiento crítico, desarrollo y movimientos sociales" en López Maya, Margarita (ed.) *Desarrollo y democracia* (Caracas: Nueva Sociedad).
- Escobar, Arturo 1999 *El final del Salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea* (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología).
- Escobar, Arturo 2001 "Culture sits in place: reflections on globalism and subaltern strategies of localization" in *Political Geography*, N° 20.
- Escobar, Arturo 2003 "Displacement, development and modernity in the Colombian Pacific" in *International Social Science Journal*, N° 175.
- Escobar, Arturo and Álvarez, Sonia 1992 (eds.) *The Making of social movements in Latin America. Identity, strategy and democracy* (Boulder: Westview Press).
- Escobar, Arturo y Pedrosa, Álvaro 1996 *Pacífico: ¿Desarrollo o diversidad? Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano* (Bogotá: CEREC).
- Eyerman, Ron and Jamison, Andrew 1991 *Social movements: a cognitive approach* (Cambridge: Cambridge Polity Press).

- Fernández Christlieb, Pablo 1994 *La psicología colectiva un fin de siglo más tarde* (Barcelona: Anthropos).
- Foucault, Michael 1990 (1988) *Tecnologías del Yo y otros textos afines* (Barcelona: Paidós).
- Foucault, Michael 1994 (1984) *Hermenéutica del sujeto* (Madrid: La Piqueta).
- Gil, Eva 2002 “¿Por qué le llaman género cuando quieren decir sexo?: Una aproximación a la teoría de la performatividad de Judith Butler” en *Athenea Digital* (Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona) N° 2, otoño.
- Grueso, Libia y Arroyo, Leyla 2002 “Mujeres y defensa del lugar en las luchas del Movimiento Negro colombiano” en *Desarrollo, lugar, política y justicia: las mujeres frente a la globalización* (Roma: Society for International Development).
- Grueso, Libia; Rosero, Carlos y Escobar, Arturo 2001 “El proceso organizativo de comundiades negras en el Pacífico sur colombiano” en Escobar, Arturo; Álvarez, Sonia y Dagnino, Evelina (eds.) *Política cultural & cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos* (Bogotá: Taurus/ICANH).
- Haraway Donna 1992 (2000) “Las promesas de los monstruos: Una política regeneradora para otros inapropiados/bles” en *Política y Sociedad*, N° 30.
- Haraway, Donna 1995 (1991) *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza* (Madrid: Cátedra).
- Harding, Sandra 1993 *Ciencia y feminismo* (Madrid: Morata).
- Izquierdo, María Jesús 1998 *El malestar en la desigualdad* (Madrid: Cátedra).
- Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal 1997 (1985) *Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia* (Madrid: Siglo XXI).
- Laraña, Enrique 1999 *La construcción de los movimientos sociales* (Madrid: Alianza).
- Mato, Daniel 2005 “Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder” en Mato, Daniel (comp.) *Cultura, política y sociedad. Perspectivas latinoamericanas* (Buenos Aires: CLACSO).
- McDowell, Linda 1999 *Género, identidad y lugar* (Madrid: Cátedra).

- Melucci, Alberto 1989 *Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society* (Philadelphia: Temple University Press).
- Mires, Fernando 1993 *El discurso de la miseria o la crisis de la sociología en América Latina* (Caracas: Nueva Sociedad).
- Moreno, Alejandro 1993 *El aro y la trama: episteme, modernidad y pueblo* (Valencia: Centro de Investigaciones Populares/Universidad de Carabobo).
- Mouffe, Chantal 1999 (1993) *El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, democracia radical* (Barcelona: Paidós).
- Ñáñez, Angélica 2001 “Reflexión situada sobre la construcción de un objeto de estudio: un ejercicio de deconstrucción del Yo que investiga”. Tesis de Maestría, Universitat Autònoma de Barcelona.
- Ochoa Gautier, Ana María 2002 “La dispersión de las escrituras y la etnografía de las políticas culturales” en Ochoa Gautier, Ana María *Entre los deseos y los derechos* (Bogotá: ICAHN).
- Offe, Claus 1988 *Partidos políticos y nuevos movimientos sociales* (Madrid: Sistema).
- Pardo, Mauricio 2001 “Escenarios organizativos e iniciativas institucionales en torno al movimiento negro en Colombia” en Archila, Mauricio y Pardo, Mauricio (eds.) *Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia* (Bogotá: CES/UN-ICANH).
- PCN y AFRODES-Proceso de Comunidades Negras y Asociación de Afrocolombianos Desplazados 2000 “Documento del I Encuentro Nacional de Afrocolombianos Desplazados”, Bogotá, mimeo.
- PCN-Proceso de Comunidades Negras 1993 “Acta de la Tercera Asamblea de Comunidades Negras”, Puerto Tejada, septiembre.
- Pujadas, Juan José 1992 “El método biográfico: el uso de las historias de vida en ciencias sociales” en *Cuadernos metodológicos* (Barcelona: Centro de Investigaciones Sociológicas) N° 5.
- Pujal, Margot 2003 “Reproducción y cambio psicosociales: interconexiones entre lenguaje, deseo y subjetividad en torno al discurso crítico”. Ponencia presentada en el VI Congreso Nacional de Psicología Social, Oviedo, España, septiembre.
- Quijano, Aníbal 2000 “Colonialidad del poder. Eurocentrismo y América Latina” en Lander, Edgardo (comp.) *La colonialidad del saber:*

eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (Buenos Aires: CLACSO).

- Restrepo, Eduardo 2002 "Memories, identities and ethnicity: making the black community in Colombia". Tesis de Maestría, Chapel Hill.
- Restrepo, Eduardo y Rojas, Axel 2004 *Conflicto e (in)visibilidad. Retos en los estudios de la gente negra en Colombia* (Popayán: Editorial Universidad del Cauca).
- Rosero, Carlos 1994 "Documento Interno del PCN", mimeo.
- Santamarinas, C. y Marinas, J. M. 1994 "Historias de vida e historia oral" en Delgado, J. y Gutiérrez, J. (coords.) *Métodos y técnicas de investigación cualitativa en ciencias sociales* (Madrid: Síntesis).
- Slater, David 2001 "Repensar la especialidad de los movimientos sociales: fronteras, política y cultura en la era global" en Álvarez, Sonia; Dagnino, Evelina y Escobar, Arturo (eds.) *Política cultural & cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos* (Bogotá: Taurus/ICANH).
- Viola, Andreu 1999 "La crisis del desarrollismo y el surgimiento de la antropología del desarrollo" en Viola, Andreu (comp.) *Antropología del desarrollo. Teorías y estudios etnográficos en América Latina* (Barcelona: Paidós).
- Wade, Peter 1996 "Identidad y etnicidad" en Escobar, Arturo y Pedrosa, Álvaro (eds.) *Pacífico: ¿Desarrollo o diversidad? Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano* (Bogotá: CEREC).
- Yúdice, George 2002 *El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global* (Barcelona: Gedisa).

Pablo Stefanoni*

EL NACIONALISMO INDÍGENA COMO IDENTIDAD POLÍTICA: LA EMERGENCIA DEL MAS-IPSP (1995-2003)

INTRODUCCIÓN

*No es solamente la escasez de estadísticas
lo que dificulta el análisis empírico en Bolivia
sino la propia falta de unidad convencional
del objeto a estudiar.*

Las masas en noviembre
René Zavaleta

El 29 de agosto de 1985 el presidente Víctor Paz Estenssoro firmaba el Decreto Supremo 21060 en medio de una fuerte crisis hiperinflacionaria. La expresión “Bolivia se nos muere”, pronunciada por el líder histórico del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) no sólo constituía una instancia de legitimación de las políticas de *shock* para frenar la crisis –*There is no alternative*–, sino que enunciaba la magnitud de las torsiones discursivas y el vuelco en las relaciones de fuerzas que sobrevendrían sobre el conjunto de la discursividad ideológica boliviana (Mayorga U., 1996). Los objetivos de la Nueva Política Económica (NPE) apuntaban más allá de la estabilización macroeconómica y se articulaban con un

* Licenciado en Economía, Universidad de Buenos Aires. Premio Agustín Cueva (2004), otorgado por instituciones académicas de Ecuador. Corresponsal de *Página/12* en Bolivia.

proyecto de gran alcance, destinado a sustituir los componentes residuales del discurso Nacionalista Revolucionario (NR), sus sujetos y el Estado “heredado desde el año” de la Revolución Nacional del ‘52, por un nuevo bloque de poder y un nuevo modelo de normalidad.

Pero luego de una década y media de reformas políticas y económicas, este proceso de “sustitución de creencias” (Tapia, 2000) volvió a chocar con la tradicional “atrofia” hegemónica que caracterizó –y caracteriza– al régimen político boliviano¹. Y la posibilidad de pensar un proyecto de país recayó nuevamente en la Bolivia plebeya que, a través de la sencilla y recurrente pregunta acerca de qué es Bolivia, ha vuelto a desplegar un *litigio*, a instituir una parte de los que no tienen parte (Rancière, 1996) frente al orden colonial consagrado por la guerra de conquista, y preservado a lo largo de la historia oligárquica y republicana. Nuevas narrativas, imaginarios sociales y redes de sentido comenzaron a interpelar fuertemente el discurso “modernizador” impulsado por las elites políticas, económicas e intelectuales del país. Al tiempo que una suerte de “memoria explosiva”² contribuyó a modificar el “vínculo imaginario con las condiciones de existencia” (Ansart, 1983), proponer reorganizaciones alternativas del pasado, y enunciar –aunque sea aun de forma difusa– una reorganización diferente del futuro (Tapia, 2000).

Fue en este proceso de construcción de nuevas identidades –muchas de ellas con base campesino-indígena– y expansión de la acción colectiva, que comenzó a reactivarse la capacidad de las clases populares para creer en sí mismas. Y –luego del fracaso de la Unión Democrática Popular (UDP) a principios de los años ochenta y del aislamiento casi total de la izquierda más radical y extraparlamentaria– se fueron reconstituyendo formas de interpelación eficaces que pluralizaron los centros de irradiación discursiva (García Linera, 2003: 3) frente al “discurso único” neoliberal, que dominó el escenario ideológico desde 1985. Esta vez con *rostro indio*, por fuera del “paraguas” del NR y movilizándolo una fuerza social fundamentalmente rural: cocaleros del Chapare y los Yungas de La Paz, y comunarios aymaras del Altiplano.

En esta línea proponemos leer el ciclo de movilizaciones iniciado en 2000, el desborde electoral de los movimientos sociales en 2002 y la emergencia de una nueva “conciencia nacional”, de matriz indígena-

1 El más serio intento de revertir esta situación y operar sobre una lógica hegemónica –desplegado por el MNR con posterioridad a la Revolución de 1952– tuvo una corta vida y rápidamente derivó en un régimen de características “cesaristas”; y en reducción “de la hegemonía lograda al espacio burocrático del clientelismo” (Prada Alcoveza, 2003a). Intentos previos y más moderados por encarnar un “proyecto de nación”, como el de Germán Busch o Gualberto Villarroel, fueron aun más trágicos y fugaces.

2 Tomamos el término de Baczko (1999); el autor lo utiliza para analizar la emergencia del sindicato Solidaridad en Polonia, en los años ochenta.

popular, y una de cuyas expresiones es el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).

El artículo se estructura en torno a cuatro apartados. En el primero, abordaremos el fin del ciclo estatal abierto con la Revolución Nacional de abril de 1952, y sus consecuencias sobre las estructuras de inter-unificación social y los repertorios de acción colectiva de los sectores subalternos. Al tiempo que una revisión rápida de la Guerra del Agua echará luz sobre los esfuerzos por superar la insuficiencia de las identidades colectivas, resultante del declive de la antigua identidad obrero-minera y de los cambios estructurales operados desde mediados de los años ochenta.

En el segundo apartado abordamos la constitución de las identidades campesino-indígenas a partir de tres ejes de análisis: un breve repaso del impacto de la Reforma Agraria de 1953 en los valles cochabambinos, que nos permitirá visualizar la “génesis” de las actuales organizaciones sindicales, sus funciones paraestatales, sus relaciones de insurgencia/subordinación respecto del Estado, el faccionalismo, y la negociación de una identidad campesina desde la cual gran parte del movimiento campesino boliviano “hace política” hasta el día de hoy; en el katarismo/indianismo (aymara) encontraremos un contra-discurso capaz de releer el pasado y proveer una serie de imágenes de opresión colonial, revalorización de sí mismos y resistencia, que formarán parte del bagaje discursivo del movimiento cocalero, especialmente desde finales de los años ochenta; y, por último, el actual discurso multicultural promovido por las elites políticas, que aparece como un terreno nuevo en el que algunos elementos de la tradición katarista fueron articulados –transformando el antagonismo en mera diferencia– al discurso neoliberal de los años noventa.

En el tercer apartado nos centraremos en la coca y los cocaleros. En la primera parte introduciremos la problemática de la coca, el marco legal en el que se sustentan los proyectos de desarrollo alternativo, y las diferentes iniciativas de erradicación de la hoja de coca; y, apelando a algunos estudios recientes, intentaremos mostrar el porqué de las dificultades de estas iniciativas y la importancia social, económica y cultural de su cultivo. En la segunda parte de esta sección abordaremos el repertorio de acción colectiva (Tarrow, 1997) del movimiento campesino cocalero, transformado en un “centro convergente” (Camacho Balderrama, 1999: 23) de las luchas sociales, en un contexto de pérdida de protagonismo del sindicalismo obrero nucleado en la Central Obrera Boliviana (COB). Estudiaremos aquí los significados que el significante *coca* fue adquiriendo para el movimiento campesino boliviano –e incluso para los sectores urbanos– a partir de una eficaz lucha simbólica de los cocaleros contra los discursos estigmatizantes del Estado y la embajada estadounidense.

Por último, en el cuarto apartado nos interrogaremos acerca de los alcances y límites –en cuanto a productividad política– de la empresa del

MAS, la funcionalidad de los distintos significantes en la construcción de las solidaridades internas del movimiento, y la constitución de los antagonismos y los adversarios que le permitieron aglutinar un campo político, construyendo una superficie de inscripción para el descontento social frente a las políticas neoliberales (transformadas eficazmente por el MAS, y otros grupos políticos y sociales, en un *crimen general* contra la sociedad toda). Nos detendremos en la “tesis del instrumento político” de las organizaciones sindicales, en el desborde electoral de esta experiencia de interpelación política en las elecciones de junio de 2002, y en las características de este nuevo movimiento político-sindical; al tiempo que intentaremos abordar desde una perspectiva crítica su desempeño parlamentario, las diferentes lógicas en juego, y la relación de fuerzas discursivas al interior de las instituciones democrático-liberales.

En nuestro criterio, el recorte propuesto aportará elementos de análisis que permitan avanzar en el estudio y comprensión de esta experiencia cuyos elementos novedosos –al igual que en toda identidad política– se articulan con un conjunto de prácticas sociales sedimentadas y de identidades previas configuradoras de sentido (Aboy Carlés, 2001: 68); en un proceso en el que nuevas contradicciones dan lugar a nuevos antagonismos y nuevas identidades. El texto está construido sobre un enfoque que hará hincapié en las lógicas articulatorias y las luchas hegemónicas presentes en la dinámica político-social; entendiendo por *hegemonía* una forma específica de articulación de universalidad y particularidad, o dicho de otra forma, “una universalidad contaminada por la particularidad” (Laclau, 2003: 56), dado que “los efectos *universalizantes* hegemónicos van a ser irradiados a partir de un sector *particular* de la sociedad” (Laclau, 2003: 55; énfasis en el original) con capacidad para que sus objetivos sectoriales actúen como el “nombre” de una universalidad que los trasciende.

REFORMAS ESTRUCTURALES O EPÍLOGO AL LIBRO DEL ‘52

*Todo debemos aprenderlo en el gran libro de abril
[de 1952], en sus hojas perdidas, todo lo que hoy vivimos
depende de la manera en que ocurrieron esos días; todo está
en aquel espejo hecho de fuego para ver lo que se ha de hacer,
porque el proyecto del porvenir está hecho con los pedazos del
pasado, y también lo que no debemos hacer.*

El Diario
René Zavaleta

Bolivia –un país marcado por la gelatinosidad de sus estructuras institucionales y por la marginalidad en el contexto internacional (García Linera, 2001b: 9)– no fue ajena a las transformaciones operadas en Amé-

rica Latina desde fines de los años setenta, en el contexto de fuertes crisis políticas, económicas y sociales. A mediados de la década del ochenta, la nueva correlación de fuerzas nacionales e internacionales se tradujo en la implementación de un conjunto de “reformas estructurales” que alteraron profundamente la dinámica económica y social, y consolidaron la hegemonía de los sectores portadores de un “discurso antiestatista radical”³ (Mayorga U., 1996: 55) que promovió un nuevo armazón institucional y simbólico, destinado a desmontar las estructuras mentales y las estructuras materiales que produjo el pasado nacionalista (Tapia, 2000), y que durante casi cincuenta años constituyeron “la condición necesaria para las pretensiones y el ejercicio del poder” (Mayorga U., 1996: 79).

Durante todo el siglo XX Bolivia fue conocida por sus riquezas mineras –explotadas por la estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) desde 1952– y por la vigorosidad del movimiento minero como sujeto político-social, especialmente desde los años cuarenta. La previsibilidad del futuro, dada por el contrato por tiempo indefinido y la centralidad técnico-productiva del obrero de oficio, permitió la constitución de una cadena de herencias culturales y simbólicas que aseguraban la acumulación de la experiencia sindical de clase, junto con la construcción del “espíritu épico” y la autopercepción (obrero) protagónica en el mundo, que caracterizaron a los mineros bolivianos (García Linera, 2001a: 69). La presencia de una “narrativa interna de clase” y de un espacio físico de sedimentación y continuidad de la experiencia colectiva posibilitaron –material y simbólicamente– el desarrollo de una identidad obrera caracterizada por “una potencia narrativa de largo aliento” y una fuerte repercusión en el ámbito estatal, capaz “de disputarle [a la burguesía] el sentido de lo general, de lo global, de lo nacional” (García Linera, 2001a: 199). A través del sindicato, los obreros mineros no sólo accedieron a los derechos ciudadanos, sino que fueron capaces de convocar al resto de las clases y fragmentos sociales subalternos y crear hegemonía (García Linera, 2001a). Su “ímpetu por integrar discursiva y prácticamente los reclamos de sectores subalternos con los suyos [construyó] una imagen de nación plebeya articulada al minero” (García Linera, 2001a: 204) que sobrevivió –en alguna medida– hasta 1985.

Como ya mencionamos, el 29 de agosto de ese año se transformó en otro de los “parteaguas” de la historia boliviana: a veintitrés días de asumir el gobierno, Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) dicta el DS 21060

3 Operó aquí una matriz conformada por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Asociación Nacional de Mineros Medianos (ANMM) –cuyo “portavoz carismático” era desde hacía varios años Gonzalo Sánchez de Lozada–; sectores internos del MNR liderados por el mismo dirigente; y una nueva elite tecnocrática de escasa o nula filiación partidaria (Mayorga U., 1996). Este nuevo bloque de poder se consolidó bajo el “paraguas” de Paz Estenssoro, quien contaba con la necesaria legitimación política.

que desmontará completamente las estructuras aún vigentes del Estado de 1952 (Toranzo Roca, 2002: 185)⁴. El MNR afirma que las medidas formaban parte de “la gran batalla contra el poder dual y contra las aberraciones anarcosindicalistas que fueron los factores determinantes para la exasperación de la crisis” del final del gobierno reformista de la UDP, y que se trataba de recuperar la autoridad del Estado de manos de “los saboteadores de la ultraizquierda conservadora y reaccionaria” (Mayorga U., 1996: 121)⁵.

La lectura en clave “ortodoxa” de la crisis estatal, política y económica, y el “trauma de la hiperinflación”⁶ como mecanismo de condicionamiento (Anderson, 1999), ayudaron a imponer una “hegemonía por neutralización” (Moulian, 1998: 209), lograda a través del silenciamiento de los otros discursos, de la estigmatización con la que se les restó eficacia cultural, y del postulado acerca de la “muerte de las ideologías”, difundido por una ideología hegemónica que pretende la tecnificación de la política, despojada ya de la posibilidad de conflictos respecto del orden mismo (Moulian, 1998: 56-57)⁷. El economista Toranzo Roca describe así el proceso de transformaciones, expresando el optimismo inicial de ciertos sectores de la sociedad boliviana, incluyendo a los intelectuales que apoyaron las reformas.

Se asistió a una revolución institucional, cuando antes, más bien existía el hábito de mirar las revoluciones sociales y de insistir en la acción de los movimientos sociales. Y lo que se supone una diferencia todavía mayor, es que todos esos cambios institucionales han sido hechos, por lo general, desde arriba, desde el Estado, dentro del orden democrático, lo que no correspondía a la historia boliviana, habituada a transformaciones traumáticas, “revolucionarias”, emergentes de rebeliones sociales (Toranzo Roca, 2002: 183).

4 Las “cifras” de la crisis económica fueron un elemento central en la estrategia discursiva de Paz Estenssoro. En el mencionado discurso del 29 de agosto apeló a enunciados tales como: “Los fríos y descarnados guarismos nos muestran un cuadro estremecedor [...] Las cifras son de tal magnitud que escapan a la contabilidad de las máquinas comunes de computación [...] La danza enloquecida de las cifras llega a una cima increíble [...] Como si todo esto no fuera demencialmente suficiente” (Mayorga U., 1996: 90).

5 Ver también la página web del MNR <www.mnr.org.bo>.

6 La inflación alcanzó el 8.000% en 1985 y el 22.000% si se la calcula entre julio de 1984 y el mismo mes de 1985, cuando la UDP entregó –anticipadamente– el gobierno (Toranzo Roca, 2002: 186).

7 Tomamos parte del análisis de Tomás Moulian sobre la introducción del neoliberalismo en Chile. Bolivia y Chile fueron las primeras experiencias en la aplicación de las reformas promovidas por los principales referentes de la Escuela de Chicago. Para una síntesis de la génesis del neoliberalismo, ver Anderson (1999).

En consonancia con el contexto ideológico internacional –y bajo el asesoramiento del economista estadounidense Jeffrey Sachs– se abrió paso a un nuevo modelo, la “Nueva Política Económica” (NPE), basado en una perspectiva monetarista sustentada en el ajuste fiscal, la privatización (capitalización⁸) de empresas públicas, la desregulación de los mercados, y la apertura externa de la economía, una tarea completada durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) (1993-1997). Todo ello anudado a un discurso de fondo: la democracia representativa como “el campo discursivo del que no se puede prescindir si se pretende alguna legitimidad” (Mayorga U., 1996: 86).

A los pocos meses de la aprobación del DS 21060 comenzaron a cerrarse las minas estatales deficitarias pertenecientes a la COMIBOL (DS 21377), lo que conllevó el despido –eufemísticamente llamado “relocalización”– de alrededor de 24 mil mineros. El antiguo Estado “intervencionista” dio paso al capital extranjero como locomotora económica, con los capitalistas locales como socios menores en áreas subalternas de la actividad económica, y el Estado en un papel de mendigo internacional y de policía local encargado de disciplinar a las clases peligrosas (García Linera, 2001b: 9); portador, a su vez, de un discurso capaz de enunciar *más y mejor y más rápido* lo que ya formaba parte de la nueva discursividad neoliberal: modernización, eficiencia y racionalidad (Mayorga U., 1996; Anderson, 1999).

De esta manera se puso fin a la formación social que trajo consigo la Revolución de abril de 1952 (Malloy, 1989; Zavaleta, 1987; García Argañarás, 1993), asociada por el nuevo discurso hegemónico con significantes como autoritarismo, dogmatismo, ineficiencia, corrupción, y finalmente, caos e incertidumbre (Mayorga U., 1996), al tiempo que emergía un nuevo bloque de poder, corporizado en el *gonismo*.

“¡EL AGUA ES NUESTRA!”. NUEVAS FORMAS DE INTERUNIFICACIÓN SOCIAL Y ACCIÓN COLECTIVA

A partir de estos cambios estructurales, la *idea de nación* “nacionalista” fue completamente abandonada. Y con ella se diluyó el ideal de la “modernización” a través de la sustitución de las estructuras tradicionales urbanas y campesinas, y se fue consolidando un sistema productivo “dualizado” entre un puñado de medianas empresas con capital extranjero, tecnología de punta, vínculos con el campo económico mundial, y

8 La capitalización consiste en la inyección de capital por un socio estratégico internacional que obtiene el 50% del capital accionario de la empresa y toma para sí el control de su administración; el otro 50% es transferida a los ciudadanos bolivianos mayores de 21 años, mediante su transferencia en fideicomiso a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con cuya renta deben pagar el BONOSOL a los bolivianos mayores de 65 años (Toranzo Roca, 2002: 197).

un mar de pequeñas empresas, talleres familiares y unidades domésticas articuladas, bajo múltiples formas de contrato y trabajo precario, a estos escasos pero densos núcleos empresariales. Las mencionadas transformaciones en la minería no implicaron solamente una reducción de su peso numérico, también se operaron fuertes cambios técnico-productivos. Junto con el peso ascendente de la minería mediana se consolidó un sistema de trabajadores polivalentes, desjerarquizados, precarios, fragmentados y sistemas automatizados, en los que recayeron los saberes productivos, otrora en posesión del obrero de oficio (García Linera, 2001a: 76). La extinción del proletariado de la minería estatal fue tanto física como material y cultural. El ascenso de los obreros de empresas privadas a la conducción de la COB “fue ya sobre un cuerpo muerto, casi extinto y de cuyas glorias sólo quedaba el nombre” (García Linera, 2001a: 203); y sobrevino con ello, la “implosión de la autoconfianza obrera” (García Linera, 2001a: 211), y la sustitución del viejo sindicalismo por lazos de fidelidad personalizada de confianza y subordinación entre el obrero y el patrón (García Linera, 2001a: 214), que minaron las identidades obreras previas sin haber podido alumbrar una nueva narrativa de la clase.

El mencionado DS 21060 cristalizó la nueva correlación de fuerzas sociales impuesta por la NPE. Esta vez, frente a la resistencia minera, el Estado responderá “con el silencio del extranjero que habla otro lenguaje y desconoce los signos del pacto de interioridad que había caracterizado la historia del movimiento obrero y del Estado nacionalista desde 1952 hasta 1985 [esta vez] el que responde es el impersonal empresario que cuenta sus monedas a medida que va colocando candados a los socavones” (García Linera, 2001a: 109).

La fase defensiva pasa por momentos de derrota político-militar del movimiento obrero, a través de dos estados de sitio; y con ella, la versión más radical –y a la vez la negación y superación– del proyecto estatal de nacionalización, y la posibilidad de una efectiva democratización del orden social existente (Tapia, 2002c: 46). En Calamarca –donde la “Marcha por la Vida y por la Paz” (1986) de los mineros fue cercada por el Ejército– ya no habrá nada que negociar. El Estado contra el que se enfrentan los mineros sencillamente es *otro* Estado, que ya no busca legitimarse mediante la inclusión sobornada de la plebe organizada como lo fue el Estado nacionalista, sino que busca hacerlo mediante la desintegración de cualquier atisbo de organización social, y la pulverización del tejido social autónomo de la sociedad (García Linera, 2001a: 109).

El estupor de un regreso sin gloria [desde Calamarca] será la constatación fatal de que la identidad minera [...] había sido una identidad construida en el interior del Estado nacionalista, para el Estado, con el Estado, y que bastó que ese Estado

cambiara su composición, sus características estructurales, para que los mineros se quedaran sin narrativa, sin justificación, sin porvenir (García Linera, 2001a: 110).

Hubo que esperar varios años para que surgieran o se recuperaran –no sin dificultades– formas alternativas de organización, acción y construcción de identidades colectivas, que crecieron en protagonismo junto a la temprana pérdida de legitimidad del modelo de desarrollo neoliberal, y que fueron capaces de interpelar al conjunto de los sectores afectados por la fortísima ofensiva contra el espacio público. De esa forma se fue revirtiendo el ciclo de derrotas y dispersión operado desde mediados de los años ochenta, y las tradiciones de resistencia, oposición y lucha que caracterizaron al movimiento popular boliviano “renacieron” del declive de sus anteriores formas de organización, con una importante carga de renovación y un creciente protagonismo de las organizaciones campesino-indígenas; capaces de cuestionar eficazmente la capacidad de las elites para ejercer la dirección *intelectual y moral* de la sociedad. Nuevas formas de agregación social permitieron reconstruir parcialmente una nueva narrativa en el ambiente de “precariedad simbólica” (García Linera, 2001b: 37) resultante de los mencionados cambios técnico-productivos (precarización laboral, hibridación de las condiciones de clase y emergencia de identidades contingentes, derivadas en parte de los “contornos difusos” entre el trabajo y el no-trabajo), y del fin de la idea de Estado-nación que prevaleció desde 1952.

En términos de Revilla Blanco, los sectores subalternos se vieron forzados a modificar –y (re)constituir– su identidad para adaptarse al nuevo ambiente, y superar la situación de insuficiencia de identidades colectivas previamente constituidas. Para ello adoptaron nuevas estrategias para readaptar preferencias y expectativas; cuyo resultado fue “la integración simbólica de los individuos cuya voz no se recoge en los proyectos existentes en la sociedad” (Revilla Blanco, 1994: 201).

En el caso boliviano puede observarse una agregación de individuos en un bloque de acción colectiva –que García Linera (2001b: 41) denomina *multitud*– emergente de una suerte de “asociación de asociaciones”, donde cada persona, presente en el acto público de encuentro, no habla por sí misma sino en nombre de una entidad colectiva local ante la cual debe rendir cuentas de sus acciones, de sus decisiones y de sus palabras. Estos movimientos –estructurados y unificados territorialmente a partir de reivindicaciones vinculadas a la gestión del agua, el acceso a la tierra y el precio de los servicios públicos– protagonizaron fuertes enfrentamientos con las fuerzas armadas del Estado, y promovieron nuevas experiencias de convergencia multisectorial. Emergieron de ellas procesos de identificación colectiva de los sectores subalternos, agrupa-

dos en torno a la figura del “pueblo sencillo y trabajador”, con capacidad para comportarse como “una forma de democracia y soberanía política” (García Linera, 2001a: 50). Aunque su actuación mancomunada –en tanto agregación bajo la forma multitud– “es siempre una incertidumbre que sólo se resuelve en la práctica” (García Linera, 2001a: 53).

Un ejemplo de ello fue la Guerra del Agua, acontecida en abril de 2000 en Cochabamba contra el aumento de tarifas resultante del contrato de concesión firmado con la empresa Aguas del Tunari⁹. Con la puesta en marcha de métodos democráticos (asambleas y cabildos abiertos) y la construcción de barricadas en plena ciudad, se fue ampliando la participación de la población a través de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida –una asociación flexible que agrupó a organizaciones de base de “regantes”, obreros fabriles, profesionales, cocaleros, trabajadores precarios, desocupados, universitarios, amas de casa y jóvenes– y logró anular los convenios que ya habían sido aprobados por el Parlamento y el Poder Ejecutivo (Estellano, 2002).

Más aún, bajo la consigna “¡el agua es nuestra!”, y la convergencia de vastas fuerzas sociales en la Coordinadora, se puso en el orden del día la discusión sobre el significado del patrimonio público y de los recursos sociales colectivos frente a la ola privatizadora (Gutiérrez Aguilar, 2001b: 196); en una región en la que parte de la provisión de agua (perforación de pozos, verificaciones de calidad, administración del servicio) reposan en el trabajo colectivo de los vecinos y vecinas organizados en comités y asociaciones de agua potable, especialmente en los lugares donde la red central es inexistente. Y todo ello era amenazado por la Ley 2029 de Servicios, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Gutiérrez Aguilar, 2001b: 193)¹⁰.

La defensa de los “usos y costumbres” y de las modalidades populares autónomas de resolución de problemas debe tenerse en cuenta a la hora de ponderar la profundidad y las consecuencias de la erosión del sentido de pertenencia al Estado que atravesaba al “viejo” movimiento obrero –labrado en los paradigmas del ‘52– en favor de nuevas formas de autonomía con respecto a un Estado democrático-liberal cuya asociación con el interés general se había evaporado por completo en el imaginario social, paralelamente al fracaso de las estrategias de modernización. En palabras de Tapia:

9 Empresa subsidiaria de International Water Limited de Londres, un consorcio internacional del que forma parte la firma estadounidense Bechtel Enterprises Inc.

10 Esta ley establecía que “ninguna persona natural o jurídica de carácter público, asociación civil con o sin fines de lucro, sociedad anónima, cooperativa, municipal o de cualquier otra naturaleza, puede prestar servicios de agua potable o servicios de alcantarillado sanitario en zonas concesibles, sin la debida concesión emitida por la Superintendencia de Saneamiento Básico”. El préstamo del BID estaba condicionado a una ley marco: la Ley del Recurso Agua (Orellana Aillón, 2002).

Lo nuevo que pone la Coordinadora es que proporciona un referente de articulación organizativa y de acción para aquella gente que no tiene ninguno y se ve afectada por las reformas económicas, la flexibilidad laboral y los nuevos monopolios. La Coordinadora es un referente incluso para los jóvenes de la calle, lustrabotas, así como para estudiantes o amas de casa (Tapia, 2002c: 58)¹¹.

Estas movilizaciones posibilitaron la construcción de nuevas solidaridades, y el establecimiento de una amplia plataforma de contactos –entre sectores urbanos y rurales, especialmente con los campesinos cocaleros del Chapare, en el subtrópico cochabambino– que se tradujeron en un exitoso “desborde” electoral en las elecciones presidenciales de 2002, fundamentalmente a partir del liderazgo del dirigente cocalero Evo Morales, candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo. La emergencia de nuevas identidades fue haciendo más difusa la aparente contradicción entre el campo y la ciudad, cada vez más subordinada a la contradicción patente entre la sociedad civil y el Estado, en su forma clientelar y prebendal de gobierno (Prada Alcoreza, 2001: 87); al tiempo que las interpelaciones a los sectores plebeyos de la sociedad boliviana asumían una renovada visión étnico-cultural andina.

CAMPESINOS E INDÍGENAS: ENTRE EL COLONIALISMO Y EL MULTICULTURALISMO

El olvido, y yo diría el error histórico, son un factor esencial en la creación de una nación, de modo que el progreso de los estudios históricos es a menudo un peligro para la nacionalidad [...] la esencia de una nación es que todos los individuos tengan muchas cosas en común y que todos hayan olvidado muchas cosas.

¿Qué es una nación?

Ernest Renan

El presente apartado aborda los esfuerzos realizados por los movimientos campesino-indígenas por afirmar su identidad en un contexto en el que el profundo cisma que atraviesa la sociedad y que reproduce las dos repúblicas –sustentadas en la herencia colonial– continúa mediatizan-

11 Se ha señalado, incluso, que la mayoría de los grupos más activos en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad –los denominados “Guerreros del agua”– eran personas que vivían en barrios o espacios donde no llega la red de agua potable y menos la de alcantarillado (Escóbar Álvarez, 2000), jóvenes marginales “mimados por comerciantes minoristas y vecinos solidarios [...] que en otras circunstancias los hubieran linchado por robo” (Orellana Aillón, 2002: 1).

do los antagonismos de clase. Y se expresa en la doble naturaleza de las relaciones de dominación que pesan sobre la gran masa de trabajadores rurales, explotados como productores, pero al mismo tiempo oprimidos colonialmente como sociedad y como cultura (Rivera Cusicanqui, 1984: 16). Contra todos los intentos por neutralizarla, la cuestión de lo indio y colonial –junto con el racismo– resurge con fuerza en diferentes momentos de la lucha social en Bolivia.

El *abigarramiento social* fue la categoría utilizada por Zavaleta, y retomada y actualizada por Tapia, para avanzar en el análisis de las características de la sociedad boliviana. Dicha categoría de análisis hace referencia a una “condición de sobreposición de diversos tipos de sociedad, que coexisten de manera desarticulada, estableciendo relaciones de dominación y distorsión de una sobre las otras” (Tapia, 2002a: 10). El abigarramiento es el resultado de la superposición de “diferentes tiempos históricos, es decir, diferentes civilizaciones, en un mismo territorio y presente político y social” (Tapia, 2002a: 10), dando lugar a un país multisocietal con un Estado monocultural y monosocietal (Tapia, 2002a: 11), resultado del intento de querer unificar nacionalmente –a través de una superposición colonial– algo que pertenece a diferentes tipos de civilización y diferentes culturas a la vez (Tapia, 2002a: 17).

“La forma más general y duradera de la dominación colonial es lo que podemos llamar el estigma de la barbarie. La barbarie son los márgenes y el afuera de la civilización, que es el modelo (en movimiento) de la normalidad” (Tapia, 2002a: 104). El reconocimiento de la existencia de los indígenas y su inclusión en el orden legítimo se operará –desde la época colonial– a partir de la atribución de una identidad –“indio”– que les reserva el rol de súbditos de los conquistadores. Por ello se puede leer el estigma de la *indianidad* como cierre social y cultural más general, que realiza la exclusión política (Tapia, 2002a: 105). La certidumbre inicial de las elites liberal-positivistas acerca de la inexorable extinción física y social del universo indígena pronto dio lugar a la pesadilla del *asedio indio* –cuya imagen remonta a la rebelión de Túpac Katari en el siglo XVIII– la cual generará por mucho tiempo “los sentimientos elementales con que el criollaje urbano moldea su representación de la sociedad india dominada” (Rivera Cusicanqui, 1984: 35). Sentimientos que fueron reforzados con la rebelión de Zárate Willka en 1899, la cual agudizó la imagen del indio como bárbaro al que hay que exterminar. Ese movimiento desafió objetiva y subjetivamente las bases del poder de las elites criollas, ya que se trató del primer movimiento nacional de emancipación aymara, un movimiento que buscaba apropiarse del poder político y no un mero movimiento de protesta (Entrevista a Álvaro García Linera, febrero de 2003).

Recién a mediados de la década del cuarenta encontramos los primeros intentos por revertir –parcialmente– la lógica colonial. Los decretos emanados del Primer Congreso Indigenal de 1945 –durante el gobierno de Gualberto Villarroel– suprimieron los servicios gratuitos de trabajo en las haciendas –*pongueaje*– y regularon obligaciones y derechos entre patrones y colonos. Al tiempo que la presencia del presidente de la República en una reunión de *la indiada* prefiguraba un nuevo proyecto estatal –interrumpido tras la caída de Villarroel y retomado por la Revolución de 1952– en el que el campesinado indígena ocuparía un papel protagónico (Rivera Cusicanqui, 1984: 66). Y el discurso acerca de la ciudadanía universal conllevará –no sin problemas, y más en el discurso público que en las prácticas reales– un quiebre en la legitimidad de la exclusión por criterios de raza y cultura (Tapia, 2002a: 106). Pero esta conquista de derechos ciudadanos se hace en torno a la adscripción a una sola identidad cultural: la mestizo-criolla boliviana. Es una igualación en función de las instituciones democrático-liberales, pero no hay igualación en términos de reconocimiento de las instituciones y la cultura política indígena tradicional. Por ello el “capital étnico” –la “blanquitud” en términos de piel, de lenguaje, de apellido, en tanto *plus* social– complementará al capital económico y social, y ocupará un lugar de primer orden en la construcción de las estructuras de dominación: en el imaginario colectivo de las elites blanco-mestizas *lo indio* es –hasta el día de hoy– portador de una identidad criminalizada y estigmatizada (Entrevista a Álvaro García Linera, febrero de 2003).

Pero mientras que el desarrollo de las instituciones liberales en Europa o en otros países de América Latina fue el fruto de procesos de modernización económica que contribuyeron a desprender a los individuos de las fidelidades comunitarias tradicionales para convocarlos –en tanto “individuos autónomos”– a un nuevo agrupamiento (Žižek, 1998: 165), en Bolivia este proceso de individuación se dio de forma sumamente incompleta. En palabras de Luis Tapia:

[En Bolivia] el Estado-nación se levanta como discurso legal y estatal con un conjunto incompleto de instituciones republicanas pero sin el sustento de reales procesos de integración, ciudadanía y modernización de las estructuras productivas y las relaciones sociales. Esto es lo que [René] Zavaleta llamó *Estados aparentes*. Estados sin nación, sin nación producida en la construcción local del poder (2002a: 12; énfasis propio).

De allí las dificultades para que la nación potencial –cuyos fragmentos el revisionismo histórico nacionalista visualizaba en la historia boli-

viana– se transforme en conciencia nacional efectiva tal como ellos la concebían: como un “proyecto mestizo, elaborado por mestizos y para mestizos” (Tapia, 2002b: 68) con las clases medias como sujeto articulador y dirigente, integrador de las masas populares a los rumbos del mundo moderno como destinos compartidos (Tapia, 2002a: 107).

En las secciones que componen este apartado abordaremos tres aspectos vinculados con las tensiones que acompañaron la conflictiva relación Estado/campesinos/indígenas en tres momentos de la historia boliviana: la Reforma Agraria de 1953 en los valles cochabambinos, la emergencia del katarismo/indianismo en el Altiplano en los años setenta, y el nuevo contexto pluri-multicultural instaurado por el neoliberalismo a partir de la reforma constitucional de 1994.

“YA NO SOMOS ESOS TAPADOS DE ANTES”. REFORMA AGRARIA Y SINDICALISMO EN LOS VALLES COCHABAMBINOS

La Reforma Agraria –promulgada en Ucureña el 2 de agosto de 1953, Día del Indio– fue en gran medida una respuesta del gobierno revolucionario a las fuertes presiones campesinas –especialmente de colonos y piqueros organizados en sindicatos– que transformaron violentamente las relaciones de fuerza entre la ciudad y el campo (y las relaciones de dominio y subordinación entre pueblos y comunidades agrarias) a partir de acumulación de un gran poder político y militar. Estos sindicatos –cuya vanguardia se encontraba entre los pobladores de los valles cochabambinos¹², donde constituían el núcleo de la organización política de las comunidades– fueron fundamentales en la promulgación y puesta en práctica de la reforma, en primer lugar “porque confiscaban tierras y presionaban al gobierno a favor de una ley; en segundo, porque los trámites legales para la distribución de tierras debían iniciarse a través de estos” (Lagos, 1997: 66).

“Los cuarteles de milicias en el valle se convirtieron en los centros de decisión de los problemas cotidianos de la sociedad campesina sobrepasando [incluso] a la autoridad judicial, cuyos fallos difícilmente podían ser aplicados sin el consentimiento sindical” (Gordillo, 2000: 83). Se trató de un enorme aparato sindical al servicio de la consolidación de la presencia campesina en la arena política regional, la destrucción del poder de la oligarquía terrateniente, y la ocupación y distribución de las tierras de las haciendas (Gordillo, 2000: 35-72). En este proceso “todas las tierras de hacienda, calificadas como latifundios por los jueces agrarios, se distribuyeron entre ex colonos;

12 “Los hacendados apoyados por las autoridades locales no aceptaron el nuevo orden [emanado del Primer Congreso Indígena de 1945], dando lugar a que los campesinos se movilizaran y organizaran los primeros sindicatos rurales en los valles de Cochabamba” (Gordillo, 2000: 21).

mientras que las de las haciendas medianas fueron sólo parcialmente afectadas” (Lagos, 1997: 68)¹³.

Las investigaciones citadas –Gordillo (2000) y Lagos (1997) a partir de un trabajo etnográfico en Tiraque– enfatizan la construcción de relaciones de poder en el ámbito local, y relativizan análisis más “estadocéntricos” que hacen hincapié en la subordinación campesina al Estado nacionalista. En dichos trabajos, los autores sostienen que “los doce años de gobierno movimientista (1952-1964) se caracterizaron por una diversidad de alianzas y conflictos entre los que estaban en el poder y entre líderes campesinos regionales, no menos poderosos” (Lagos, 1997: 73); y sus identidades –forjadas en las luchas pre y post revolucionarias– les permitieron a los campesinos proyectarse “como actores dinámicos en la arena política y [...] ubicarse con un alto grado de autonomía en el campo de fuerza donde se negoció cotidianamente el carácter del Estado revolucionario, entre 1952 y 1964” (Gordillo, 2000: 21), cuando las milicias fueron desarmadas por la dictadura barrientista, en el contexto del Pacto Militar Campesino.

Sin embargo, esto no debe ocultarnos que la dinámica sindical desde la Revolución del ‘52 quedó inmersa en la competencia entre las dos principales fracciones del MNR. El ala derecha, operando desde la prefectura de Cochabamba –con apoyo de la Iglesia Católica–, y el ala izquierda desde el Ministerio de Asuntos Campesinos (MAC) –con apoyo de la COB– se disputaron el control del movimiento sindical campesino (Gordillo, 2000: 36), en un contexto discursivo marcado por las frecuentes declaraciones de autoridades policiales y militares acerca de la labor de “agitación comunista” que se desarrollaba en las áreas rurales del país (Gordillo, 2000: 43)¹⁴. Los campesinos de los valles se dividieron en dos liderazgos regionales: la Central Campesina de Ucureña –liderada por

13 “En este caso los hacendados conservaban una porción de tierra cultivable y los ex colonos recibían parcelas individuales. Tanto el hacendado como los colonos podían acceder a tierras no cultivables y comunales de pastoreo” (Lagos, 1997: 68); esta clasificación de las haciendas –como latifundios o haciendas medianas– dependía muchas veces, según la autora, de los contactos políticos de los hacendados, de la organización y militancia de los colonos, y de la propia arbitrariedad de los jueces. La ley también distinguía al latifundio de la “empresa agrícola” (en las cuales el hacendado había invertido capital y pagado salarios) que no eran afectadas (Lagos, 1997: 68). Los intentos del ala izquierda del MNR de formar cooperativas bajo la dirección minera fracasaron, y se optó por la parcelación individual de las propiedades agrarias reclamada por los campesinos (Gordillo, 2000).

14 Mientras la derecha del MNR mantenía el criterio de la inferioridad del campesinado debido a su ignorancia, la izquierda movimientista creía que los campesinos constituían una clase social sin objetivos políticos propios; por lo que ambas fracciones reforzaron las relaciones de dominio/subordinación que enfrentaban a los ciudadanos con los campesinos (Gordillo, 2000: 146). Por otra parte, “la contrarrevolución funcionaba coordinadamente en el país bajo la tutela de un poderoso sector del MNR, el blanco de su artillería era el tema agrario y su objetivo la recuperación del territorio hacendal” (Gordillo, 2000: 103).

José Rojas–en el Valle Alto, y la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Cochabamba –liderada por Sinforoso Rivas– en el Valle Bajo.

Los enfrentamientos intracampesinos se agudizaron en el tercer período de gobierno del MNR (1960-1964) cuando las luchas internas al interior del campo nacionalista adquirieron un carácter violento: la denominada “Champa Guerra”, que enfrentó durante cuatro años a las centrales de Cliza y Ucureña (en el Valle Alto) es una de las mayores expresiones de los enfrentamientos entre facciones campesinas vinculadas con las luchas al interior del MNR (Gordillo, 2000). Pero sin duda el momento de mayor subordinación del movimiento campesino se produjo de la mano del Pacto Militar Campesino, firmado en Ucureña el 9 de abril de 1964, y leído en quechua ante unas 30 mil personas reunidas para celebrar un aniversario más de la gesta de abril del ‘52 (Soto, 1994).

La proclamación del binomio Víctor Paz Estenssoro-René Barrientos para las presidenciales de 1964 se impuso con fuerza en los valles, frente al debilitamiento de las fracciones de izquierda que promovían la alternativa Víctor Paz Estenssoro-Juan Lechín; en paralelo a la construcción de un “espacio militar” con una influencia creciente sobre el sindicalismo campesino valluno. El punto de inflexión en la balanza de las relaciones de poder se produjo cuando el general Barrientos logró la pacificación entre Cliza y Ucureña (1963), y su imagen “no sólo se agigantó en el espectro político, sino que se proyectó hacia las esferas más altas del poder nacional” (Gordillo, 2000: 182-183). En paralelo, los militares incrementaron su actividad asistencial, entregando escuelas y postas sanitarias, y fueron moldeando una nueva imagen de la institución –“alternativa de paz frente a la violencia”– y un discurso redentor de los campesinos, con el claro objetivo de alcanzar el poder (Gordillo, 2000: 183). Cosa que efectivamente ocurriría en noviembre de 1964, cuando se cerró el cerco militar sobre Paz Estenssoro, y Barrientos se hizo con el poder.

La injerencia directa del Ejército en las estructuras sindicales (sustituyendo la articulación sindicato-partido-Estado por una nueva estructura de enlace entre sindicalismo paraestatal y Ejército) perduró hasta finales de la década del sesenta, cuando la reacción campesina frustró el intento de Barrientos de imponer el impuesto único agropecuario a la propiedad individual de la tierra (Rivera Cusicanqui, 1984: 119). En esos años, la subordinación al Estado –sintetizada en el Pacto– se constituyó en la alteridad que facilitó el surgimiento de nuevas identidades al interior del movimiento campesino-indígena (con especial intensidad en el Altiplano) a partir de la desestabilización de las viejas identidades subordinadas al Estado nacionalista y transformadas en fuerzas de choque contra los obreros mineros. Se instituirán así nuevos sentidos y horizontes de acción, que implicarán nuevas posibilidades de inter-unificación entre los sectores subalternos.

El Bloque Independiente Campesino se desarrolló a partir de la denuncia del Pacto, y su beligerancia lo llevó a buscar nuevas solidaridades políticas, afiliándose a la COB. Al tiempo que una segunda vertiente de sindicalismo campesino independiente surgió entre los colonizadores de las regiones tropicales de Santa Cruz, Alto Beni (La Paz) y Chapare (Cochabamba) (Rivera Cusicanqui, 1984: 125), que habían migrado del Altiplano desde los años sesenta y cuya instancia máxima –la Confederación Nacional de Colonizadores de Bolivia– también se afilió a la COB. De esa forma comenzaba a romperse el aislamiento del movimiento minero, duramente reprimido por la dictadura barrientista (masacres de 1965 y 1967).

En apretada síntesis, podemos sostener que la lucha de los campesinos contra el poder hacendal y por la distribución de las tierras, las estrategias de cooptación y subordinación puestas en práctica por los sucesivos gobiernos emenerristas y militares, los apoyos alternativos de Víctor Paz Estenssoro a los diferentes bandos en lucha al interior del sindicalismo, y el pragmatismo que adquirió la relación de las facciones sindicales con gobiernos (nacional y locales) y Fuerzas Armadas, definieron el complejo entramado de luchas cruzadas, en muchas ocasiones un “pasa pasa” en las fidelidades políticas, y un sustrato de violencia cotidiana en que se negoció la identidad campesina de los valles cochabambinos en el período post ‘52. También en esas redes de sentido se moldearon las imágenes acerca del “campesino valluno audaz y temerario” –en ocasiones contrapuesta por la derecha del MNR a imágenes alegóricas de las “virtudes naturales de la ‘raza’ indígena” (Gordillo, 2000: 85 y 166)–, y una densa combinatoria de sumisiones y resistencias frente al Estado nacionalista.

Como constató Lagos (1997) en su trabajo de campo en Tiraque, las identidades y prácticas políticas no responden a una esencia ontológica, sino que se definen de acuerdo a construcciones culturales de clase y etnicidad. Estas giran en Bolivia en torno a la interpretación subjetiva y cultural de dos categorías centrales: campesino e indio. Pese a que “ser campesino” en los valles significa tener acceso a la tierra, hablar quechua y –lo más importante para los varones– saber manejar el arado de bueyes, ambos conceptos son ambiguos, lo que permite “manipular y disputar sus múltiples significados, así como la posibilidad de usarlos para establecer alianzas políticas y crear distancias culturales” (Lagos, 1997: 20). Mientras que el concepto *campesino* es una “categoría inclusiva que esconde las diferencias de clase”, *indio* es “una categoría excluyente que distingue a los vecinos de los campesinos, y que está basada en nociones culturales de raza e imágenes dominantes que asocian el campo, y la gente que allí vive, con la ‘indianidad’” (Lagos, 1997). Estas relaciones “contingentes” entre categorías étnicas

(separadas de los rasgos fenotípicos y en gran medida dependientes de aspectos sociales u ocupacionales) implicaban que los individuos podían “pasar” en ocasiones de una categoría a otra, como la autora constató que ocurría entre los tiraqueños; y cita el caso de piqueros, agricultores y artesanos “blancos” que –según registros de la primera década de 1900– cuando perdieron sus tierras dejaron de ser “blancos” y se convirtieron en “mestizos”¹⁵.

Estas observaciones sobre la formación negociada de las identidades étnicas en los valles cochabambinos ya nos va advirtiendo acerca de las fronteras generalmente difusas con las que nos toparemos a la hora de analizar los discursos del movimiento campesino cocalero, afectado fuertemente por los procesos de mestización, y por autoadscripciones cambiantes de los propios sujetos en diferentes contextos discursivos sobre la cuestión étnica.

“PARA QUE MI HIJA NO SEA TU EMPLEADA”. AUTONOMÍA Y RECOMPOSICIÓN DE LA IDENTIDAD ÉTNICA AYMARA

Las nuevas generaciones indígenas urbanas, producto de las migraciones del campo a la ciudad, habían accedido en parte a los estudios superiores; viviendo con más crueldad la discriminación racial desde las formas más sutiles hasta las más abiertas (Patzí Paco, 1999: 32). Se fue conformando así un estrato intelectual aymara “que busca dar expresión a este sentimiento de aguda frustración que acompaña a su experiencia urbana” (Rivera Cusicanqui, 1984: 127).

Nuevas elaboraciones político-ideológicas irán madurando desde principios de la década del setenta, poniendo en evidencia el fracaso de la política de ciudadanización impulsada por la Revolución del ‘52 que, como mencionamos, concebía a Bolivia como un país homogéneo, integrado y subordinado a la concepción occidental (Patzí Paco, 1999: 34)¹⁶. Estos estratos intelectuales urbanos –principalmente de origen aymara– *reinventarán* al indio como sujeto político-social, junto con una narrativa capaz de darle un sentido histórico a la lucha indígena por la autonomía; y en poco tiempo se articularán con las nuevas generaciones rurales, “producto de la reforma agraria, la escuela rural, el cuartel y la nueva economía mercantil” (Rivera Cusicanqui, 1984: 128), que rechazaban crecientemente los sistemas de cooptación movimientistas, profundizados bajo la dictadura de Barrientos. Raúl Prada Alcoreza señala que al romper con el Pacto Militar Campesino el kata-

15 Un interesante debate acerca de cómo contabilizar a los indígenas se encuentra en Lavaud y Lestage (2002) y los comentarios críticos a su artículo.

16 El *Manifiesto de Tiwanaku* denunciaba: “Somos extranjeros en nuestro propio país”.

rismo rompía también con la herencia ideológica del Movimiento Nacionalista Revolucionario, en un proceso de “desmovimentización” del campo que no había sido logrado por el sindicalismo izquierdista, que tuvo una puntual influencia en el valle cochabambino. Si bien, en los hechos, el Pacto Militar Campesino se rompe con la Masacre del Valle (1974), en el imaginario social se rompe con la irrupción ideológica del katarismo (Prada Alcoveza, 2002a).

Este movimiento –junto al pequeño Partido Indio de Fausto Reinaga– emergerá como un renovado esfuerzo de autonomía y afirmación político-cultural indígena con múltiples manifestaciones institucionales y organizativas, tanto en las ciudades como en diversas áreas rurales, especialmente aymaras (Rivera Cusicanqui, 1984: 131-132). Su afirmación identitaria se constituyó en una forma de resistencia, lucha y autorrealización contra las estigmatizaciones colectivas –de origen étnico o cultural– que padecían en los diversos ámbitos de la vida social (Tapia, 2002a: 111). Para lo cual “arrancaron a la figura de Túpac Katari del discurso dominante, donde figuraba como inocente ‘precursor’ de la lucha por la independencia”, y lo resignificaron como un héroe de la causa indígena, capaz de retornar multiplicado en millones. Al tiempo que resignificaban a la forma sindicato, organismo del nuevo poder autónomo, pero a la vez producto del horizonte histórico del Estado del ‘52 (Rivera Cusicanqui, 1984: 164).

Dos elementos configuran así el discurso katarista: la continuidad de una situación colonial que se impuso sobre una sociedad originariamente libre y autónoma; y la idea del “despertar del gigante dormido”, en alusión a la mayoría étnica nacional, que hace valer su condición numérica frente a la opresión criolla (Rivera Cusicanqui, 1984: 164). Mientras tanto, en el plano estatal se asistía a profundos cambios que minarían en forma decisiva la matriz sobre la que se asentaba el Estado del ‘52. La masacre en los valles de Cochabamba –ante las protestas contra el paquete económico de la dictadura de Banzer (1971-1978)– acabó con el último reducto donde las representaciones colectivas aún permanecían moldeadas por las instituciones del ‘52 (memoria corta) (Rivera Cusicanqui, 1984: 134); mientras las nuevas políticas económicas contribuirán al quiebre del sustento ideológico de la subordinación campesina al Estado (Rivera Cusicanqui, 1984: 137).

Convertida en corriente sindical mayoritaria en el mundo rural, dos organizaciones levantarán las banderas del katarismo en el campo político a fines de los años setenta: el Movimiento Revolucionario Túpac Katari (MRTK) y el Movimiento Indio Túpac Katari (MITKA). Rivera Cusicanqui (1984: 152) analiza los ejes político-ideológicos que diferencian a ambas fracciones: mientras el MRTK adopta una posición más flexible frente a las corrientes de la izquierda criolla y se muestra más

receptivo hacia la herencia del '52, el MITKA se mantendrá más apegado al simbolismo y los modelos organizativos indios, y más refractario hacia las corrientes políticas *q'aras*¹⁷; enfatizando la opresión indígena como eje de su discurso.

La creación en 1979 de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) representó un salto cualitativo en el afianzamiento del nuevo sindicalismo agrario; siendo la corriente katarista la que capitalizó en mayor medida los sentimientos anti-militares generados por la represión banzerista: Jenaro Flores –dirigente del MRTK– fue elegido secretario ejecutivo de la nueva central unitaria, que actuará en el seno de la Central Obrera Boliviana. Y como símbolos de la nueva etapa, ponchos y *lluch'us* romperán la monotonía de los trajes occidentales en la COB (Rivera Cusicanqui, 1984: 156). Esta articulación obrero-campesina constituirá un auténtico movimiento de masas con autonomía ideológica y organizativa (Rivera Cusicanqui, 1984: 159), con una fuerte participación en los años conflictivos que van entre la caída de Banzer en 1978 –en medio de un agravamiento de la crisis política– y el triunfo de la UDP en 1982. Las tres elecciones y los cuatro golpes de Estado entre 1978 y 1980 (Rivera Cusicanqui, 1984: 123) pintan un cuadro de las dimensiones de las crisis que atravesaba al conjunto del régimen político boliviano.

A fines de los años ochenta se observa un escenario nacional caracterizado por la división de la CSUTCB entre el discurso *pluri-multi* y el reclamo de autodeterminación, el ascenso del movimiento cocalero (que se analizará por separado) y la consolidación de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano como aglutinadora de varios grupos étnicos dispersos¹⁸. El discurso autodeterminista quedó plasmado principalmente en el MITKA, uno de cuyos desgajamientos dará a luz a la *Ofensiva Roja de los Ayllus Tupackataristas*, que a fines de los ochenta-principios de los noventa inició una estrategia de lucha armada, principalmente focalizada en sabotajes contra la infraestructura (torres de alta tensión, gasoductos, etc.) y la denuncia de la ineficacia de la acción parlamentaria.

La reivindicación del término “indio” partía de la afirmación de que “como indios nos explotaron, como indios nos liberaremos” (Albó, 2002: 80). Las acciones fueron llevadas a cabo por el brazo armado de la organización: el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK). En poco tiempo la dirección del movimiento es apresada, entre ellos quien lideraba la “guerra de las comunidades”, Felipe Quispe Huanca, conocido como el *Mallku* (au-

17 Literalmente significa *desnudo*; se utiliza para nombrar a las elites blanco-mestizas.

18 Sobre las organizaciones indígenas del Oriente ver Patzi Paco (1999). Allí hay una detallada descripción del proceso, que incluyó la histórica “Marcha por el Territorio y la Dignidad” realizada en 1990, desde Trinidad hasta La Paz.

toridad máxima de las comunidades)¹⁹ quien tuvo participación en el movimiento katarista de los setenta, y el actual vicepresidente de la República, Álvaro García Linera. Su paso por el bachillerato e incluso por la universidad –donde estudió Historia– le permite “tener un discurso ilustrado y coherente sin haber perdido su estilo popular, cuando no demagógico” (Albó, 2002: 81). Su efectivo manejo del discurso lo llevó a responder la pregunta de la periodista Amalia Pando –al momento de entrar en prisión– acerca de por qué realizaban las actividades de sabotaje, con un contundente: “porque no quiero que mi hija sea tu empleada [...] las acciones tomadas son en repudio a 500 años de explotación” (Patzí Paco, 1999: 84).

El ascenso de Quispe a la secretaría ejecutiva de la CSUTCB en 1998 marcó una nueva etapa para el movimiento campesino-indígena²⁰. La revitalización de las estructuras comunales y del discurso étnico-nacional indígena, impulsada por el nuevo liderazgo aymara en la central campesina, se plasmó en los levantamientos aymaras de abril y septiembre de 2000, que conmovieron las estructuras de dominación –materiales y simbólicas– de la nación mestizo-criolla, a partir de estructuras de movilización basadas en la *forma comunidad* (García Linera, 2001b: 56). Con capacidad para expulsar y sustituir al poder estatal por un complejo sistema de autoridades comunales (cabildos, asambleas, comités de bloqueo, etc.), y hacer frente a las fuerzas armadas del Estado a través del traslado de la institución del trabajo comunal al ámbito guerrero (García Linera, 2001b: 70).

La profundidad de los efectos políticos de estas acciones están aún por aprehenderse en toda su dimensión, pero resulta claro el agrietamiento de la estructura simbólica colonial que “había acostumbrado a colonizados y colonizadores a que los indios se dirijan a los *q'aras* en actitud de sumisión, de petición, de genuflexión o de reclamo lloroso” (García Linera, 2001b: 73). El discurso de igualdad entre indígenas y blancos, de autogobierno y de nuevas formas de gestión pública en la administración estatal parecen estar comenzando a remover “los cimientos republicanos de un Estado racista y excluyente que en 176 años de vida, nunca ha incorporado a las mayorías culturales, ni a las lenguas y prácticas indígenas a la esfera pública legítima” (Gutiérrez Aguilar y García Linera, 2002: 21). A su vez, este renacer de la “guerra de razas” (Foucault, 1996) pone de relieve los límites del nuevo discurso multiculturalista articulado con el segundo período de reformas neoliberales (1993-1997).

19 Quienes cuestionan su liderazgo sostienen que Felipe Quispe no ha transitado todos los cargos comunitarios, requisito para ser autoridad máxima de la comunidad (Patzí Paco, 1999: 83; Albó, 2002: 81).

20 Existe una fuerte disputa –al interior de la CSUTCB– entre los campesinos de origen aymara (comunarios) y los cocaleros, quechua hablantes, más ligados a la producción agraria con destino mercantil.

MULTICULTURALISMO, O EL NUEVO DISCURSO DE LAS ELITES
“BLANCOIDES”

*A veces las cosas se nombran para desarticularlas
y no para articularlas, ya que en su clandestinidad
o exclusión se hacen peligrosas;
es una forma discursiva de conjurarlas.*

El retorno de la Bolivia plebeya

Luis Tapia

El katarismo no fue inmune a las políticas de cooptación estatales, esta vez anudadas con un discurso que enfatizaba el carácter multicultural de la nación boliviana. La tendencia que se había transformado en partido político –denominada Movimiento Revolucionario Túpac Katari de Liberación (MRTKL) luego de la escisión de 1985– fue paulatinamente subsumida y asimilada por el Estado. En 1993, su principal dirigente –el aymara Víctor Hugo Cárdenas– acompañó como candidato a vicepresidente de la República al neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, diezmando lo que quedaba de su estructura y legitimidad política (Patzi Paco, 1999: 41).

Xavier Albó (2002: 70) reconoce que su selección como candidato por el MNR, al que no le faltaban candidatos propios con experiencia, fue resultado de un estudio de *marketing* político a través de grupos focales. En opinión de los asesores de imagen, “el compañero de Goni debía tener las cualidades opuestas y complementarias a las del candidato presidencial, que era empresario minero, ligado a la oligarquía blanca, muy relacionado con Estados Unidos –donde vivió de niño y contrajo el acento ‘gringo’ que lo caracteriza– y uno de los principales artífices del modelo neoliberal vigente en el país desde 1985”. De esta forma se fue articulando el discurso *pluri-multi* de los organismos financieros internacionales con el de raíces andinas; dando origen a lo que Patzi Paco (1999: 44) denomina *intermediarios culturales parasitarios*, “ya que en vez de fortalecer la identidad de las naciones oprimidas la usarán solamente como un espacio de adquisición de beneficios grupales o personales”.

Luego de ganar las elecciones, Cárdenas afirmará –en discursos leídos en aymara, quechua o guaraní– que estaba comenzando un *pachakuti*, una nueva era, que se regiría por el código incaico del *ama suwa*, *ama llulla*, *ama qhilla* (no seas ladrón, mentiroso ni flojo), al que agregó un cuarto precepto en línea con su pasado katarista: *ama llunk'u* (no seas adulón) (Albó, 2002: 71). A su vez, como presidente del Congreso, Cárdenas promovió un conjunto de medidas: la incorporación en la Constitución Política del Estado (CPE) –Artículo 1– del

reconocimiento del carácter “multiétnico y pluricultural” del país; el carácter “intercultural bilingüe” de la educación boliviana, la Ley de Participación Popular (LPP), etc. Pero rápidamente se amplió la brecha entre el reconocimiento internacional –y de los no indígenas– al “aymara más globalizado”, y la percepción de las propias comunidades, que comenzaron a llamarle *llunk'u* o traidor (Albó, 2002)²¹.

Como afirma Patzi Paco (1999), el nuevo discurso *pluri-multi* promovido desde el Estado se vio fuertemente reforzado por las líneas de financiamiento de organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial. Las ONGs se erigirán como los nuevos intermediarios culturales legítimos –y ejecutores del financiamiento internacional– para llevar adelante diversas propuestas e iniciativas enmarcadas en la nueva moda ecológica, de respeto al medio ambiente y a los “grupos vulnerables”. Estas políticas adoptadas por el Estado boliviano como parte de su amoldamiento al “modelo de normalidad” de la globalización capitalista reconocerán las instituciones propias de cada cultura solamente en funciones subalternas y periféricas (Tapia, 2002a: 118), mientras que el centro político-económico sigue siendo monocultural.

Slavoj Žižek ha definido al multiculturalismo actual como la *lógica cultural del capitalismo multinacional*. Dice el autor esloveno:

La “tolerancia” liberal excusa al Otro folclórico, privado de su sustancia (como la multiplicidad de comidas étnicas en una megalópolis contemporánea), pero denuncia a cualquier Otro “real” por su fundamentalismo [...] uno se ve tentado aquí de reactualizar la vieja noción marcuseana de “tolerancia represiva”, considerándola ahora como la tolerancia del Otro en su forma aséptica, benigna (Žižek, 1998: 157).

En realidad, se reconoce y acepta lo que le conviene a quien ejerce –desde el Estado– esa distancia y función de universalidad (Tapia, 2002a: 127), configurando así una “forma de aceptación de la diversidad cultural sin democratización efectiva” (Tapia, 2002a) funcional a la des-identificación nacional promovida por el discurso y las prácticas de las clases dominantes. Desde una suerte de “posición global vacía”

21 El documento del IV Congreso de la CSUTCB, reunido en Cochabamba del 27 de enero al 2 de febrero de 1994, afirma: “Víctor Hugo Cárdenas constituye en nuestra historia el típico indígena ‘aymara’ que habiendo leído y escrito, siendo ahora parte de la estructura dominante, ahora piensa como ellos y para ellos y terminó sirviendo a sus patrones [...] el Congreso declara a Víctor Hugo Cárdenas enemigo y traidor por haber entregado nuestros símbolos al representante del imperialismo, en nombre de los indígenas, originarios y campesinos, y si lo hizo es solamente en su condición de *llunk'u* y a título personal” (citado en Patzi Paco, 1999: 116).

esta variante de multiculturalismo asociada a la etapa del capitalismo globalizado, “trata a cada cultura como el colonizador trata al pueblo colonizado: como ‘nativos’, cuya mayoría debe ser estudiada y ‘respetada’ cuidadosamente” (Žižek, 1998: 172).

En otras palabras, el multiculturalismo es un racismo que vacía su posición de todo contenido positivo. El multiculturalismo no es directamente racista, no opone al Otro los valores *particulares* de su propia cultura, pero igualmente mantiene esa posición como un privilegiado *punto vacío de universalidad*, desde el cual uno puede apreciar (y despreciar) adecuadamente las otras culturas particulares: el respeto multiculturalista por la especificidad del Otro es precisamente la forma de reafirmar su propia superioridad (Žižek, 1998). Mientras el capitalismo se expande a lo largo del planeta, provocando una homogeneización sin precedentes del mundo contemporáneo, la “crítica cultural” –en su versión posmoderna– parece actuar como una válvula de escape que incluso hace “invisible” la presencia de este –el capitalismo– a partir de una politización de luchas particulares que deja intacto el proceso global del capital (Žižek, 1998).

COCA, COCALEROS E IDENTIDADES

*Cuando el blanco quiera hacer lo mismo (akullikar)
y se atreva a utilizar como vosotros esas hojas de coca,
le sucederá todo lo contrario.
Su jugo que para vosotros será fuerza y vida,
para vuestros amos será vicio repugnante y degenerador;
mientras que para vosotros será un alimento casi
espiritual, a ellos les causará idiotez y locura.
Leyenda de la coca*

Pocos auguraron que la emergencia del movimiento sindical cocalero a mediados de los años ochenta en la región del Chapare –en el subtrópico cochabambino– alteraría tan profundamente el mapa político y social boliviano²², dando origen a nuevas identidades políticas y mostrando gran capacidad de interpelación sobre los sectores subalternos. Se trata de una región aparentemente sin historia y carente de la resonancia ancestral que tanto fascina a muchos estudiosos sociales

22 Las dos regiones productoras de coca en Bolivia son el Chapare (en el subtrópico cochabambino) y los Yungas (norte de La Paz). Como se explicará luego, la primera región ha sido la más conflictiva dada la normativa vigente (*Ley 1008*). Aunque nos centraremos en las seis federaciones campesinas del Chapare, haremos mención a las otras seis federaciones de los Yungas, a los efectos de dar una visión de conjunto de la problemática abordada.

(Argandoña, 2002). Habitado originalmente por indígenas selváticos yuracarés, el subtrópico cochabambino constituye uno de los contextos sociales más atípicos de la geografía boliviana por sus características sociales, económicas, demográficas y políticas. Su conformación histórica responde a diversos procesos de colonización. Por un lado, dirigidos desde el Estado: iniciados en los años veinte y profundizados a partir de los años sesenta, cuando se funda el Instituto Nacional de Colonización. Por otra parte, espontáneos: especialmente durante los primeros años setenta, producto de la crisis económica, y en la década del ochenta, impulsados por las sequías en el Altiplano (1981-1985) y la “relocalización” minera (1985). Entre 1976 y 1992 la población censada en esta región se incrementó de 32.836 a 108.276 habitantes, un elevado porcentaje tiene un origen quechua y aymara, y un 81% habla quechua (Zegada, 2002: 131-133). De las 40 mil familias que habitan el trópico, una parte de la población es “flotante”, manteniendo una doble residencia entre su actividad en el Chapare y la zona de origen, adonde regresan en época de cosecha o fiestas rituales (Zegada, 2002). Y la mayoría se dedicó al cultivo de coca.

Desde fines de la década del ochenta, esta región ha quedado inmersa en la denominada “guerra contra las drogas” –declarada por el Estado boliviano con apoyo de la Drug Enforcement Agency (DEA) estadounidense– y estigmatizada como “zona roja” donde los narcotraficantes fabricaban cocaína en connivencia con los agricultores para exportarla a los países consumidores; aunque, en realidad, los primeros aprovechaban con intermediarios la oferta de coca de los mercados abiertos de las poblaciones, y la disponibilidad de mano de obra barata como “pisadores” en las pequeñas pozas de maceración de coca, o como porteadores (Ballesteros et al., 2001: 32). Estas consideraciones oficiales, junto a la creciente resistencia de los coccaleros, han proyectado a esta aislada región subtropical a la escena nacional e internacional, como una región de alta intensidad política y de inmediato conflicto con el *imperio* (Prada Alcoreza, 2002b).

“SIN COCA NO HAY VIDA”. ENTRE LA ERRADICACIÓN Y EL DESARROLLO ALTERNATIVO

Tempranamente, la coca fue utilizada como energético para maximizar la productividad de los indígenas en la brutal explotación a la que fueron sometidos, especialmente a partir del descubrimiento de las ricas vetas de plata de Potosí en 1545 (Argandoña, 2002). Sin embargo, en los inicios del período colonial, la hoja de coca era tenida por una invención del demonio, por lo que se la consideraba una hoja diabólica (O’Phelan Godoy, 1995: 141). Este juicio provenía principalmente de su papel en rituales nativos (los pobladores indígenas creían que sabiéndola usar

con propiedad podía traerles suerte, y calamidades al enemigo) y se mantuvo hasta que los jesuitas resaltaron sus atributos medicinales y de sustituto nutricional: los mitayos que la mascaban rendían el doble en el trabajo, y podían prescindir por varias horas de la ingestión de alimentos (O'Phelan Godoy, 1995).

La valoración y los discursos con relación a la coca –en el ámbito internacional– variaron a lo largo del tiempo al ritmo de los cambios en la estructura social y normativa de las sociedades. De la “época dorada” –que acompañó el proceso de *laissez-faire* y medicalización de la sociedad desde principios del siglo XIX– se pasó a la prohibición, impulsada en Estados Unidos por el movimiento puritano, que inició una cruzada moral contra las drogas, llegando a promocionar acuerdos internacionales para regular su producción y comercialización (Argandoña, 2002).

Luego de una serie de intentos, fue en el marco del Convenio de Ginebra de 1936 –“Convenio para la supresión del tráfico ilícito de drogas nocivas”– que se impuso la aceptación internacional del modelo represivo defendido por Estados Unidos (Argandoña, 2002). Luego, otros convenios irían perfeccionando la legislación con relación a la fabricación, distribución y consumo de estupefacientes, como el elaborado por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, reunida en Nueva York; y más recientemente, la Convención de las Naciones Unidas sobre Substancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, reunidas en Viena.

La antigüedad de este producto natural del subtrópico de los departamentos de La Paz y Cochabamba se remonta a los tiempos precolombinos, y es corrientemente utilizado en medicinas y rituales por los pueblos andinos; el hábito del *akulliku* o *pijcheo* se ha mantenido a lo largo del tiempo, especialmente entre los sectores populares. En el caso andino, esta práctica ancestral –succión de una bola de hojas de coca insalivadas que se mantiene en la boca como un estimulante suave y no adictivo– derivó en grandes debates, iniciados en ámbitos académicos peruanos, acerca de los efectos de estas prácticas –asociadas en muchos casos con la “degeneración racial de los indios”–; y la discusión acerca de los efectos de la coca en la salud continuaron por largo tiempo. Incluso representantes teóricos del indianismo boliviano condenaron a la coca. Uno de sus principales exponentes, Fausto Reinaga (1969: 100 y 127), advierte que “la Biblia predicada por la ‘fiera blanca’ le ha caído al indio peor que la coca y el alcohol”, e inserta a la coca en la matriz de opresión que padecen los pueblos originarios: “la coca que masca el indio, que masca el niño indio, que masca el anciano, la coca que

mascan indias e indios es la sustancia que anestesia, que adormece el hambre del indio”²³.

En la década del setenta se asistirá a una segunda “época dorada”, esta vez a partir del incremento de la demanda de clorhidrato de cocaína, principalmente en los países desarrollados; lo que incrementó los cultivos de coca en la región andina y la aparición de redes que luego serían conocidas como “carteles”, especialmente en los países donde se procesaba la coca para obtener la pasta base y luego el clorhidrato de cocaína (Argandoña, 2002). Bajo la dictadura de Banzer (1971-1978) se liberalizó el cultivo de coca, y su transformación en cocaína tuvo un fuerte impulso desde las esferas estatales, un negocio continuado por el también golpista Luis García Meza (1980-1981) (Ballesteros et al., 2001: 32-33)²⁴. En los años ochenta, la administración conservadora de Ronald Reagan inició una renovada “guerra contra las drogas”, que pronto traspasó las fronteras estadounidenses y se centró en la erradicación de la oferta, en este caso de la coca; en paralelo a su criminalización discursiva. Su correlato fue la militarización de la lucha contra las drogas, la implementación de políticas coercitivas para la erradicación de la coca excedentaria, y una creciente intromisión de Estados Unidos en la política interna de los países andinos, entre ellos Bolivia (Plan Colombia, Iniciativa Andina, políticas de certificación y des-certificación como condicionalidad para el otorgamiento de préstamos y ayudas económicas, etcétera).

La Ley 1008 –Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas– del 19 de julio de 1988, constituye el marco legal que regula las políticas estatales frente a la coca, sobre la que se sustentaron posteriores políticas gubernamentales como El Plan de Acción Inmediata Opción

23 Spedding (2003: 17) sostiene que “la visión anti-coca interpreta la expansión posconquista del consumo de la hoja de coca como resultado de la opresión de la población indígena, en particular, en la mita minera, donde los explotadores españoles fomentaban deliberadamente el vicio del acullico con fines de extraer más plusvalía de los colonizados. Por ello se argumenta que los que defiendan el consumo cotidiano de la coca como una tradición andina, se equivocan; en realidad, están defendiendo una señal de la degradación colonial, los andinos libres apenas hubiesen acullicado excepto en las celebraciones más excepcionales”.

24 “Durante el golpe del ochenta, de Luis García Meza –conocido como el golpe de la cocaína– hubo una fuerte represión contra el movimiento cocalero yungueño, porque ya no nos permitieron sacar la coca. Ahora libremente toda la coca sale de aquí, pero en esa ocasión no nos dejaban sacar ni una hoja. Todo estábamos obligados a vender a los funcionarios del Estado, que tenían en todas las poblaciones sus puestos de acopio. Luego nos enteramos que esa coca era llevada en camiones militares a las fosas de maceración. Esto duró unos cuatro o seis meses, hasta que al final se logró sacar una libra por persona. Los agentes de narcóticos ejercían una fuerte represión contra el movimiento sindical, y cometían una serie de abusos (decomisos, robos de bienes, etcétera). Hasta que a fines del ochenta hubo un gran movimiento en los Yungas en el que asaltaron la oficina de narcóticos que había en Chulumani, donde estaban unos doce funcionarios, que completamente desaparecieron, o sea los hizo pedazos la gente. Esa fue una primera acción de respuesta del movimiento cocalero yungueño” (Entrevista a Dionisio Núñez, junio de 2003).

Cero (1994) o el Plan por la Dignidad (1997). A los efectos de nuestra investigación, nos interesan especialmente las normativas de la Ley 1008 referidas a la hoja de coca en “estado natural”, diferenciada de la coca *iter criminis*, que es la coca en proceso de transformación química, que aísla el alcaloide cocaína. El artículo 6° distingue la producción “necesaria” (para consumo y uso lícito definido por los artículos 4° y 5°) de la producción “excedentaria”, que sobrepasa tales requerimientos. A partir de estas especificaciones, la ley delimita, en su artículo 8°, tres zonas de producción cocalera: a) zona de producción tradicional, b) zona de producción excedentaria en transición y c) zona de producción ilícita²⁵.

A diferencia de otros países andinos (Colombia), el artículo 18° establece que la erradicación de cultivos será realizada a través de “métodos manuales y mecánicos, siendo prohibida la utilización de medios químicos, herbicidas, agentes biológicos y defoliantes”. La coca necesaria para cubrir la demanda interna se establece en el equivalente a la producción de un área de 12 mil hectáreas de cultivo, teniendo en cuenta el rendimiento en la zona tradicional (artículo 29°). En todas las zonas queda prohibida la ampliación de cultivos. La ley establece que el desarrollo alternativo y la sustitución de cultivos de coca estarán dirigidos principalmente a beneficiar al pequeño productor de coca de las zonas a) y b) establecidas en el artículo 8°; a través del cambio de los patrones productivos agropecuarios, la asistencia crediticia, el desarrollo de la agroindustria y el fortalecimiento de los sistemas de comercialización y articulación territorial de las regiones afectadas. Este proceso será programado por el Poder Ejecutivo, en coordinación

25 La zona de *producción tradicional* de coca (artículo 9°) es aquella donde “histórica, social y agroecológicamente se ha cultivado coca, la misma que ha servido para los usos tradicionales, definidos en el artículo 4°. En esta zona se producirán exclusivamente los volúmenes necesarios para atender la demanda para el consumo y usos lícitos determinados en los artículos 4° y 5°. Esta zona comprenderá las áreas de producción minifundiaría actual de coca de los subtrópicos de las provincias Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo e Inquisivi del Departamento de La Paz y los Yungas de Vandíola, que comprende parte de las provincias de Tiraque y Carrasco del Departamento de Cochabamba”. La zona de *producción excedentaria* en transición (artículo 10°) “es aquella donde el cultivo de coca es resultado de un proceso de colonización espontánea o dirigida, que ha sustentado la expansión de cultivos excedentarios en el crecimiento de la demanda para usos ilícitos”. Esta zona queda sujeta a planes anuales de reducción, sustitución y desarrollo, mediante la aplicación de un programa integral de Desarrollo y Sustitución, en el marco de los programas de Desarrollo Alternativo, que cuentan con apoyo financiero internacional. Esta zona comprende las provincias Saavedra, Larecaja y Loayza, las áreas de colonización de Yungas del departamento de La Paz y las provincias Chapare, Carrasco, Tiraque y Arani del departamento de Cochabamba. La zona de *producción ilícita* (artículo 11°) de coca “está constituida por aquellas áreas donde queda prohibido el cultivo de coca. Comprende todo el territorio boliviano, excepto las zonas definidas por los artículos 9° y 10° de la presente ley. Las plantaciones existentes de esta zona serán objeto de erradicación obligatoria y sin ningún tipo de compensación” (Ley 1008).

con los productores de coca, con el objetivo de reducir los volúmenes de producción excedentaria (artículo 21°).

Y el artículo 22° agrega que toda sustitución de cultivos de coca será planificada en forma gradual, progresiva y simultáneamente a la ejecución de los programas y planes de desarrollo socioeconómico sostenido a ejecutarse en las zonas de producción a) y b) definidas en el artículo 8°. Estos planes deberán incluir la búsqueda y obtención de mercados internos y externos para las producciones alternativas. Sin embargo, García Argañarás (2001: 18) sostiene que el desarrollo alternativo ha fracasado, ya que siempre ha consistido en programas pilotos, programas donde gran parte del dinero se ha quedado en estratos técnicos y burocráticos. Por su parte, Mario Argandoña (2003) advierte que “el único indicador del éxito del programa es la disminución de los cultivos y no el desarrollo regional, que supondría un proceso mucho más complejo y acuerdos que irían más allá de erradicar la coca”. En el mismo sentido, otros analistas, miembros del Área Coca, Drogas y Desarrollo del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), señalan:

El desarrollo alternativo es asumido por las agencias de cooperación europeas, las Naciones Unidas y la ayuda norteamericana. En su aplicación apenas intervienen los habitantes y menos sus organizaciones sindicales y su aplicación está ligada a programas represivos de erradicación. No se buscan mercados para los productos sustitutivos propuestos por técnicos extranjeros. No se desarrolla suficientemente la infraestructura productiva del Chapare. En general el monto invertido no cubre ni la décima parte del capital que movía la producción de coca (Ballesteros et al., 2001: 31)²⁶.

La socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, especialista en la temática de la coca y participante de las mesas de diálogo entre el gobierno y los cocalleros, afirma:

El desarrollo de las regiones productoras no puede ser “alternativo” a la coca, pues no existen alternativas ecológicas, económicas

26 “La coca, como el café, es un clásico cultivo de minifundio, porque requiere mucha mano de obra, y ciertas etapas de la producción, sobre todo la cosecha, son resistentes a la mecanización. [Pero] en términos de economía campesina, la coca supera al café, porque la inversión inicial aunque alta, es casi toda en forma de mano de obra, y una vez establecida rinde cosechas tres veces al año (y en regiones tropicales más todavía) por unos treinta años; mientras que el café, en el mismo nicho ecológico sólo da una vez al año y, al contrario de la coca no aguanta en suelos gastados [...] Hasta los integrantes de los proyectos de sustitución admiten que ningún otro cultivo puede igualarse con la coca, y es inseparable de la vida en los Yungas. Cuando un hombre llega a casarse, tiene que hacer dos cosas para su nuevo hogar: una casa y un cocal” (Spedding, 1994: 38). Ver también Spedding (2003: 19-22).

y culturales que permitan sustituir este producto [...] el desarrollo sin coca empobrece a los campesinos y les priva de salidas económicas estables y de largo plazo (Rivera Cusicanqui, 2003: 8).

Destaca los límites impuestos por las convenciones internacionales a la posibilidad de “incursionar en mercados modernos y de exportar coca legalmente al mercado mundial” (Rivera Cusicanqui, 2003: 7), ya que los criterios que autorizan –limitadamente– los usos tradicionales parecen presumir que el “consumidor es un indígena arcaico y en vías de desaparición”. Por su parte, la antropóloga británica –y productora de coca sindicalizada en los Yungas– Alison Spedding discute con amplitud el concepto de “zona tradicional” contemplado en la Ley 1008, y se pregunta si lo tradicional está asociado a una determinada región geográfica, o un productor “tradicional” es aquel que puede demostrar su pertenencia a un grupo social que se ha dedicado a la producción de coca desde que se tiene registro de ellos. Los diferentes criterios que se tomen van dejando alternativamente afuera y adentro de las “zonas tradicionales” a diferentes regiones de la geografía cocalera boliviana²⁷.

Pese a la resistencia campesina y a la resiembra, según informes del gobierno estadounidense, “los cultivos de coca en Bolivia son aproximadamente la mitad de lo que eran en su momento máximo en 1995, habiéndose reducido de 48.600 hectáreas a 24.400 en 2002”. Aunque, “debido a la fuerte y violenta oposición cocalera, tanto este como el anterior gobierno no tuvieron la suficiente determinación para implementar la erradicación forzosa en los Yungas” (Informe, 2003). Según el “Plan Bolivia, un nuevo compromiso 2003-2008” existen 3.500 ha por eliminar en la región de los Yungas de La Paz y 6.000 ha en el Chapare, en el subtrópico de Cochabamba. Sin embargo, informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen le otorgan a Bolivia un lugar “casi marginal” en el suministro mundial de cocaína (con menos de un décimo de la producción mundial) (*La Razón*, La Paz, 27 de junio de 2003).

“¡CAUSACHUN COCA!, ¡WAÑUCHUN YANQUIS!”. REPERTORIO DE ACCIÓN COLECTIVA Y PRODUCCIÓN DE SENTIDO

Las organizaciones cocaleras han logrado convertirse, desde fines de los años ochenta, en uno de los componentes más activos de la lucha social en Bolivia y uno de los sectores que más contribuyeron a revitalizar y fortalecer el movimiento sindical campesino. Esta emergencia como movimiento social se vincula principalmente a la “intromisión” del Estado boliviano (y de Estados Unidos) en su actividad productiva

27 Ver Spedding (2003); y para un estudio etnográfico del cultivo de coca en la región de los Yungas, Spedding (1994).

–en el marco de la “lucha contra el narcotráfico”–, mediante planes de erradicación forzosa y desarrollo alternativo que restringen la “libertad de mercado” promovida por la letra del neoliberalismo. Frente a ello, las huelgas de hambre, bloqueos de caminos, manifestaciones y largas marchas han sido constantes desde mediados de la década del ochenta, en el marco de “la inestabilidad de los acuerdos, la posibilidad [siempre latente] de reanudación de los conflictos, el incumplimiento de los convenios y la desconfianza en los procesos de negociación” entre el gobierno y los cocaleros (Camacho Balderrama, 1999: 8).

Los bloqueos de caminos –con capacidad para incomunicar a la región andina con el Oriente boliviano, mediante el bloqueo de la carretera troncal Cochabamba-Chimoré-Santa Cruz en el Chapare, o el acceso al Norte de La Paz a través de los bloqueos en los Yungas– y la confrontación con las fuerzas policiales y militares erradicadoras, han resultado en poderosas demostraciones de fuerza y capacidad de movilización e imposición, que desafían el principio de autoridad y soberanía estatal²⁸. Pero, sin duda, una de las rutinas más eficaces de los cocaleros como mecanismo de sensibilización han sido las marchas de

28 Spedding (2002: 86) habla de una suerte de “ritualización” (“reglas de juego”) en los enfrentamientos entre el pueblo y el Estado tácitamente reconocida por ambas partes, y cuando hay heridos o muertos en el curso de estos enfrentamientos, su impacto es enorme en relación con la incidencia estadística de tales acontecimientos, si se lo compara con lo que ocurre en otros países de la región. El diputado por los Yungas y dirigente cocalero, Dionisio Núñez, describe las tecnologías aplicadas en un bloqueo: “Primero cada federación convoca un ampliado. En el ampliado se resuelve realizar el bloqueo de caminos, por ejemplo para anular un decreto gubernamental. Entonces los compañeros del ampliado retornan a sus centrales, a sus sindicatos de base, e informan todo lo que se ha discutido y aprobado en el ampliado. Cuando se dice bloqueo se dice con 10%, con 25% o con 50% de los afiliados, se determina la cantidad y el lugar a bloquear: dónde, cuándo, todo se discute. Cada sector tiene que controlar la asistencia con una lista. Si los compañeros asignados no concurren al bloqueo, el sindicato –después que termina el conflicto– hace su evaluación y resuelve cuál es la sanción que la comunidad va a otorgar a quienes no han salido. Cuando todos llegan, hay un comité de bloqueo. Llegan unas 400 personas al bloqueo y se decide: esta federación va a bloquear esta parte, esta federación va a estar de guardia, etc. Entonces se arman los campamentos, se arma un lugar de seguridad, y el bloqueo se va organizando. Por seguridad se esparcen troncos y piedras en las rutas, porque en algunas ocasiones, cuando no se hacen bloqueos así con obstáculos en el camino, a veces llega el ejército, a veces llega UMOPAR [Unidad Móvil de Patrullaje Rural] y fácilmente con gas despejan el camino. Nosotros tenemos la estrategia de tirar obstáculos en tres lugares: un bloqueo central, uno mucho más adelante, diríamos una vanguardia, y otro atrás, una retaguardia. Si nos pasan el primero, se da la señal (con dinamita o bengalas), entonces hacemos fuerza común para que no pasen el bloqueo central. En los bloqueos no hay armas, lo único que hay son palos, o a veces algunas dinamitas; fundamentalmente parapetamos compañeros en lugares inaccesibles –zonas de fuertes pendientes– preparados con piedras allá arriba, si hubiese una intervención, pues cae una lluvia de piedras, y a veces alguna que otra dinamita. Y periódicamente se realiza un ampliado. Sin información, la gente no sabe exactamente por qué se está peleando. Nosotros en los bloqueos aprovechamos que la gente está concentrada e informamos sobre el conflicto y sobre otras cosas más, un poco para ayudar a la conciencia de la gente” (Entrevista a Dionisio Núñez, junio de 2003).

grandes grupos poblacionales hasta la sede del gobierno en La Paz, que a través de la explicitación del espíritu de sacrificio y del cuerpo social en movimiento, junto con la eficacia de su resistencia, han logrado visibilizar un conflicto desarrollado al interior del Chapare (y los Yungas) y obtener un fuerte apoyo social.

Al igual que los mineros a mediados de los años ochenta y los indígenas del Oriente, los cocaleros han concebido a la marcha como un recurso desesperado de *revelación* del grupo social en tanto colectividad, que –haciendo uso del propio cuerpo y autoimponiéndose una serie de penalidades– busca la congregación de la solidaridad ciudadana a través de dos formas de interpelación: apelando a los sentimientos humanitarios de la gente (a partir del deterioro de los marchistas por los días de marcha o los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad); y al mismo tiempo, a los sentimientos de solidaridad político-ideológica por medio de la interpelación discursiva (Camacho Balderrama, 1999: 15-17). El nombre mismo con el que es bautizada cada marcha identifica un cierto tipo de interpelación²⁹. A diferencia del efecto, más limitado, del “autosacrificio” en la huelga de hambre o en las crucifixiones, con esta rutina de acción colectiva es posible llegar a un público más amplio, en parte gracias a la atracción que este “espectáculo” genera sobre los medios de comunicación durante varios días, al tiempo que las tensiones operadas a lo largo de la travesía –generalmente a partir de los intentos del gobierno de evitar que las marchas lleguen a la sede del gobierno– permiten conservar la atención de la prensa y construir una narrativa de lucha y resistencia que potencia los efectos señalados.

COCA, SIGNIFICANTES Y SIGNIFICADOS

Uno de los principales hitos en este recurso de acción colectiva fue la Marcha por la Vida, la Coca y la Soberanía Nacional, acontecida entre fines de agosto y septiembre de 1994, poco después del inicio del plan de erradicación forzosa “Opción Cero” (implementado luego de la visita del zar antidrogas Lee Brown a Bolivia), que logró movilizar a 3 mil campesinos que durante veintidós días recorrieron 620 kilómetros

29 A diferencia de los bloqueos de caminos, que tienen un efecto negativo sobre una parte de la comunidad, “circular” por el país no implica mayores efectos negativos sobre la población (Camacho Balderrama, 1999), lo que incrementa, así, el apoyo social. En las últimas dos décadas se han producido: la marcha minera “Por la Vida y por la Paz” (1986), la marcha indígena “Por el Territorio y la Dignidad” (1990) y las marchas cocaleras “Por la Vida, la Coca y la Soberanía Nacional” (1994) y la marcha “Por la Vida y la Soberanía Nacional” (1995), esta última, protagonizada por mujeres cocaleras, para hablar de “mujer a mujer” sobre las “violaciones a la dignidad humana”, con las Primeras Damas, entre ellas, la esposa del vicepresidente aymara Víctor Hugo Cárdenas, Lidia Katari. Para un análisis detallado de ambas marchas cocaleras y los contextos de su realización, ver Camacho Balderrama (1999: 26-58).

entre Villa Tunari y La Paz, sorteando los obstáculos y la represión organizada por el gobierno de Sánchez de Lozada.

Las amenazas del líder de los cocaleros, Evo Morales Ayma, de pasar a la clandestinidad, los enfrentamientos entre comités de auto-defensa y militares erradicadores y los fuertes bloqueos de caminos protagonizados por los cocaleros –con apoyo de la COB y otras organizaciones sindicales– fue crispando el clima político desde abril de 1994, en el marco de un incremento de las actividades de erradicación, y una creciente militarización (Contreras Baspineiro, 1994). Las acciones represivas del gobierno fueron complementadas con una estrategia de soborno y cooptación de algunos dirigentes para debilitar a los principales líderes del movimiento, sembrando la sospecha de su relación con el narcotráfico³⁰. La respuesta cocalera a la escalada represiva llegó el 8 de agosto, en medio de un estado de sitio *de facto*. Burlando a las patrullas policiales, y a escasos metros del cuartel de Chimoré (en el Chapare), más de 10 mil productores de coca de las cinco federaciones del Trópico (Centrales Unidas, Yungas del Chapare, Trópico, Carrasco Tropical y Chimoré), representantes de la COB, de la CSUTCB y de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) decidieron emprender una marcha hacia la sede del gobierno, a la que luego se sumaría la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa (FNMCB-BS) y la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), además de representantes de organizaciones de derechos humanos y de la Confederación Universitaria Boliviana (Contreras Baspineiro, 1994). En un ambiente cada vez más tenso, un “ampliado” (congreso) de emergencia en Quillacollo decidió iniciar la marcha el 29 de agosto. Un día antes de esa fecha, diez agentes de civil apresaron a Evo Morales en Sacaba, cuando se trasladaba al Trópico.

El día fijado, al grito de *¡Causachun Coca! ¡Wañuchun yanquis!* (Viva la coca, mueran los yanquis) –y desafiando las amenazas del gobierno– comenzaron la caminata, cuyo eje reivindicativo se articulaba en torno al rechazo a la Ley 1008, el reclamo contra la militarización del Chapare y el retiro de la DEA (Contreras Baspineiro, 1994: 38); a lo que se agregó la libertad de Evo Morales y los demás detenidos. El conocimiento del territorio (la “transformación de la geografía en poder”, en términos de Zavaleta) por parte de los marchistas fue un elemento decisivo frente a los infructuosos intentos oficiales de evitar el avance

30 El operativo Nuevo Amanecer, lanzado en julio de 1994, incluyó a más de 800 efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), UMOPAR, policía nacional y unidades de tránsito, y culminó con el saldo de un muerto (Felipe Pérez Ortiz) y 600 campesinos detenidos; además de graves denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales represivas.

de la marcha mediante la movilización del ejército y la policía. En palabras de Juana Miranda, cocalera de Carrasco Tropical:

Cuando partimos de Villa Tunari, nos han detenido los leopardos [militares], por aire y por tierra nos han reprimido, pero hemos seguido. Como el presidente nos engaña igualito lo hemos hecho nosotros, hemos aparecido desde el monte, por nuestros caminos hemos avanzado y después nuestras compañeras se han ido a enfrentar a la policía para que nosotros podamos reiniciar la marcha. Todo estaba planificado, era un gran secreto, porque sabíamos que el gobierno a toda costa quería detenernos (Contreras Baspineiro, 1994: 56-57).

Su llegada a La Paz –por “caminos secretos” y con el apoyo de las poblaciones campesinas, coreando consignas como “fusil, metralla, la marcha no se calla” o “con bombas, con gas, la marcha está en La Paz”– representó un duro revés para el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. El apoyo social recibido por los marchistas impactará fuertemente en la lucha simbólica y discursiva que forma parte de la guerra de baja intensidad contra la coca.

El movimiento cocalero fue logrando –mediante una eficaz batalla simbólica– inscribir sobre la superficie discursiva de un espacio político una serie de significados que le han permitido pasar de expresar los intereses sindicales económicos-corporativos de los cultivadores de coca a articular parcialmente una voluntad nacional-popular que interpela al modelo económico e institucional vigente en el país desde 1985; y –en virtud de una suerte de “memoria larga”– a la propia historia de dominación y exclusión heredada del período colonial. Uno de los éxitos de las organizaciones cocaleras consistió en enfatizar la dimensión identitaria y ritual de la hoja de coca para las culturas andinas; y –a través de la popular consigna “la coca no es cocaína”– combatir la estigmatización de su cultivo.

Mediante una operación hegemónico-discursiva, el significativo *coca* –asociado por los gobiernos boliviano y estadounidense con narcotráfico y cocaína– fue progresivamente resignificado como “hoja milenaria heredada de nuestros antepasados” y, fundamentalmente, “defensa de la dignidad nacional”; convirtiendo al discurso en defensa de la coca en una superficie de inscripción para el creciente cuestionamiento a la subordinación nacional a los mandatos de la embajada estadounidense, cuya abierta intervención en los asuntos internos de Bolivia asume características imperiales. La hoja de coca se transformó, en gran medida, en “la bandera de unidad y lucha de todos los explotados y oprimidos de nuestro país” (ASP, 1997), pese a que los cocaleros no representan más que una pequeña proporción de la

población. Por otra parte, la incorporación de símbolos tradicionales como *pututus* y *wiphalas*³¹, o la frase incaica *ama suwa, ama llulla, ama qhilla, ama llunk'u* en las movilizaciones cocaleras, dan cuenta de la andinización o wiphalización de su discurso. A la vez que la coca como recurso natural “de interés estratégico” permite una cierta recuperación –selectiva– de la retórica original del nacionalismo revolucionario (Argandoña, 2002), sólo que ya no se trata de la plata o el estaño, sino de la hoja “sagrada”.

De esta forma, los cocaleros han sido capaces de articular una serie de alianzas que pusieron a la defensa de la coca en el centro de las luchas sociales y políticas del país, y les permitieron hegemonizar una amplia serie de demandas contra el modelo neoliberal; al tiempo que incrementaban su participación en los foros y congresos internacionales “anti-globalizadores” (Foro Social Mundial, congresos campesinos, Campaña Continental contra el ALCA, etcétera).

LA EMPRESA POLÍTICA DEL MAS: SOLIDARIDADES, ANTAGONISMOS Y OPORTUNIDADES

Globalmente, la emergencia del MAS-IPSP es difícilmente desligable de la ruptura del “equilibrio moral”, producto de más de una década de neoliberalismo, y de siglos de prácticas coloniales. Y junto con ella, el fuerte cuestionamiento a la incapacidad de las elites para ejercer la *dirección intelectual y moral* de la sociedad luego del fracaso de los sucesivos proyectos “modernizadores”, cuya última expresión fue la Nueva Política Económica (de corte neoliberal) impulsada a partir de 1985. Asimismo, no es comprensible lo ocurrido desde mediados de los años noventa sin tomar en cuenta la “irradiación” de las formas organizativas e ideológicas del sindicalismo obrero –especialmente a partir de la crisis minera– a las zonas de colonización más reciente, que transmitieron una experiencia acumulada y contribuyeron a politizar reivindicaciones de carácter económico-corporativo.

Al mismo tiempo, otros factores –de carácter más o menos coyuntural– intervinieron en el clima de “disponibilidad política” del que se benefició el MAS (incluso más allá de sus propias expectativas): la reinención de una narrativa de corte étnico que retoma las tesis del colonialismo interno (cuya difusión se debe en gran medida al liderazgo de Felipe Quispe en la CSUTCB); el creciente sometimiento del Estado boliviano a los dictados de la embajada estadounidense –especialmente en la

³¹ *Pututu* es un instrumento tradicional construido con un cuerno de toro; *wiphala*, la bandera indígena de 49 cuadrados iguales con los colores del arco iris. Su emergencia en los años setenta da cuenta del proceso de “reinención” de la tradición y construcción de nuevas narrativas e imaginarios étnicos y sociales.

cuestión de la erradicación de la coca– que creó un clima *antiimperialista* que recorrió transversalmente a diferentes sectores de la sociedad; el rechazo a los partidos políticos tradicionales, común a otras naciones del continente, especialmente en la región andina; la pérdida de capacidad articuladora del nacionalismo revolucionario entre los diferentes grupos sociales; el espacio “vacío” dejado por la profunda crisis de experiencias neo-populistas como el partido Conciencia de Patria (CONDEPA) –y en menor medida la crisis de Unidad Cívica Solidaridad (UCS)– especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto; los efectos político-sociales del Plan Dignidad, que aumentó la violencia del conflicto cocalero y golpeó duramente a la economía del Chapare, con un efecto multiplicador negativo sobre toda la región cochabambina; la Ley de Participación Popular y la introducción de las diputaciones uninominales (reforma del artículo 60 de la Constitución Política del Estado), que mejoró la estructura de oportunidades políticas para el MAS-IPSP, al permitirle acceder a varios gobiernos municipales, especialmente en la región cocalera del departamento de Cochabamba, y cargos legislativos nacionales; y, por último, *last but not least*, la irrupción democratizadora de los movimientos sociales, cuyas expresiones iniciales fueron –como hemos mencionado– la Guerra del Agua en Cochabamba en abril de 2000, y el ciclo de bloqueos aymaras del altiplano, entre abril y septiembre del mismo año.

“VOTAR POR NOSOTROS MISMOS”. LA TESIS DEL INSTRUMENTO POLÍTICO DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES

*No existe el pacto o acuerdo constitutivo
y sin eso la democracia se vuelve
una discusión de abogados
sobre un contrato que no existe.*

Las masas en noviembre
René Zavaleta

René Zavaleta ya advertía que “la institución democrático-representativa no contiene de modo alguno los mismos significados en sociedades homogéneas (como Estados Unidos) que en sociedades abigarradas o heterogéneas” como la boliviana (1983a: 228). El constante desacuerdo entre la manifestación democrática y la determinación real del poder (falta de espacios de consenso y articulación) deriva en gran parte de la primacía del dogma precapitalista de la desigualdad por sobre el prejuicio capitalista de la igualdad; y “no se pueden llevar cuentas [cuantificar uniformemente voluntades políticas] allá donde los hombres no se consideran iguales unos de otros” (Zavaleta, 1983b: 15). Los recurrentes “agujeros” hegemónicos

han erigido a la práctica del golpe de Estado como la “forma incorporada o corriente de cambio político en el país” (Zavaleta, 1983a: 234) hasta 1982.

La debilidad de la articulación hegemónica promovida por el nacionalismo revolucionario –la mayor experiencia articuladora de la historia boliviana (Antezana, 1983)– transformó en gran medida a la historia de Bolivia –desde los años cuarenta– en la historia de una enemistad entre el ejército y las masas populares, lideradas por el movimiento obrero minero; y la prebenda y la violencia política intentaron sustituir esta “atrofia hegemónica”. Aun hoy –después de más de dos décadas de democracia representativa– diversos principios de autoridad y soberanía –sustentados en lógicas sindical-corporativas– desaffian y compiten con el monopolio de la fuerza estatal. Y la consolidación de los movimientos sociales (y comunitarios), de sus propuestas políticas y su impacto en las decisiones es indesligable de la contundencia y densidad de medidas de presión como los bloqueos, las largas marchas y la confrontación con los cuerpos policiales y militares (García Linera, 2001a).

En Bolivia, la superioridad del sindicato sobre el partido, irradia da desde el movimiento obrero minero (y fortalecida por las políticas del Estado Nacionalista)³², ha marcado la lógica organizativa del movimiento campesino, especialmente desde los años cuarenta. Los sectores subalternos son, en primer lugar, clases “sindicalistas”, en la medida en que su *acumulación en el seno de la clase* se da primariamente a través de la forma sindicato; por ello este concepto reenvía –a lo largo de la historia boliviana– a organizaciones más complejas y extensas que el sentido corriente del término (Zavaleta, 1983a: 232-233). En el caso de los campesinos, detrás del nombre “sindicato” se “ocultan” instituciones que en muchos casos se superponen con las instituciones originarias (*ayllus*), y corrientemente constituyen organismos de poder con funciones estatales en las comunidades (Gordillo, 2000; Lagos, 1997), maquinarias territoriales, sociales y ahora electorales.

La Tesis del Instrumento Político se inserta plenamente en esta tradición de acumulación político-social, al tiempo que presenta una importante carga de renovación. Las imágenes de las injusticias padecidas por los pueblos indígenas, la reivindicación de su stock civilizatorio y la narrativa de autodeterminación, se combinan con la pretensión de articular a diversos sectores sociales en un proyecto emancipatorio común. A diferencia de intentos iniciales más radicales, como la Asamblea de Unidad de las Naciones Originarias³³ (o experiencias actuales en el Altiplano,

32 Recordar el cogobierno MNR-COB y el control obrero de las minas estatales post ‘52.

33 Las discusiones a propósito de la Asamblea de Unidad de las Naciones Originarias se remontan a fines de los años ochenta y principios de los noventa. El proyecto de algunos sectores de la comisión impulsora consistía en transformar a la Asamblea en un órgano de poder

como Achacachi), el instrumento político hegemonizado por los cocaleiros no se basará en el autogobierno o el “poder indio”, sino en fórmulas que apelan con mayor fuerza a lograr el reconocimiento de lo indígena dentro del Estado boliviano, asumiendo los procesos de mestización que dan cuenta de lo popular en el país, y presentando una visión más “digerida” del indianismo radical (su posición frente a la participación electoral y las instituciones representativas ilustra alguna de estas características, no exentas de tensiones). David Choquehuanca confiere un papel simbólico importante al contra-festejo de los 500 años del “descubrimiento” de América en este nuevo ciclo de “toma de conciencia” indígena:

La campaña 500 años de resistencia ha significado para nosotros un despertar, un despertar de interpelación hacia nosotros mismos. Nos hemos preguntado con la campaña 500 años de resistencia: ¿quiénes somos?; con la campaña de 500 años hemos abierto los ojos [y] la clase dominante se ha asustado; en 1992 hemos organizado una movilización de más de 70 mil hombres y mujeres aquí en La Paz donde no había ni una bandera boliviana, eran puras *wiphalas*. Hemos dicho “500 años nos han explotado, 500 años nos han humillado, 500 años nos han pisoteado, 500 años nos han marginado, por lo menos que este día nos respeten” (Entrevista a David Choquehuanca, junio de 2003).

El salto cualitativo y novedoso en la creación del Instrumento Político se produjo en 1995, cuando los cocaleiros ya habían consolidado una fuerte presencia política en el movimiento campesino. En marzo de ese año, el Primer Congreso Tierra y Territorio –del que participaron la CSUTCB, la CSCB, la CIDOB y la FNMCB-BS–, aprobó la Tesis del Instrumento Político, que consistía en fundar un movimiento organizado como extensión de las instancias sindicales campesinas, que venían protagonizando grandes movilizaciones en defensa de la tierra, el territorio y contra la erradicación de los cultivos en la región del Chapare, el lugar con mayor represión de las fuerzas policiales bolivianas, con financiamiento y asesoramiento de la DEA y otras entidades estadounidenses³⁴.

A partir de esas resoluciones se puso en pie la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP), presidida por el dirigente cochabam-

cuyo desarrollo reemplazara al actual “Estado Colonial Boliviano”. Pero el proyecto original fracasó porque ningún sector político significativo lo tomó como eje de su estrategia.

34 Uno de los participantes, Felipe Cáceres, resume: “A las naciones originarias no nos queda otra alternativa que empezar a construir el instrumento político con un único color: el de la coca” (Contreras Baspineiro, 1994: 10).

bino Alejo Véliz, la que fue definida –siguiendo las resoluciones de su II Congreso– de la siguiente manera:

Una opción revolucionaria y liberadora que nace del seno de los compañeros campesinos y oprimidos [que] con el transcurso del tiempo ha captado la adhesión de otros sectores, conforme a sus principios de Instrumento Político de los oprimidos y no sólo de los campesinos (ASP, 1997).

De la nueva *síntesis* propuesta por la ASP, emerge la propuesta de una Bolivia Socialista, Multinacional y Comunitaria, resultante de la superposición de la “lucha nacional y lucha clasista”. Se define como el “nuevo sujeto de la Revolución” a “originarios, obreros y campo popular” y se propicia la articulación del Pachakuti andino, el marxismo y la idea de Tierra sin mal del Oriente boliviano, en una interpelación al conjunto de los explotados. Un proceso –que luego de divisiones internas, especialmente el alejamiento de Alejo Véliz– se materializará en el MAS-IPSP³⁵.

De esta forma los “partidos” emergentes del nuevo ciclo de luchas campesino-indígenas han nacido a partir de congresos sindicales de los movimientos sociales (coccaleros del Chapare y los Yungas, e indígenas del Altiplano) para conseguir proyección política y una prolongación parlamentaria de la acción colectiva (García Linera, 2003). Las siguientes declaraciones seleccionadas definen la forma en que la “tesis” del instrumento político fue materializada en el MAS-IPSP, según dos de sus principales dirigentes.

El MAS no tiene una estructura política partidaria, sino que las mismas estructuras del sindicalismo campesino e indígena son las estructuras del MAS, por tanto son esas mismas estructuras las que controlan; acá no se manejan las cosas verticalmente, no hay imposiciones. Los dirigentes principales deben cumplir lo que deciden las organizaciones sociales que componen el IPSP (Entrevista a Evo Morales, agosto de 2002).

[El MAS] es un movimiento político que expresa las aspiraciones de las organizaciones sociales en su lucha por las reivindicaciones nacionales, y las de los sectores populares. La base orgánica está, precisamente, en las organizaciones ante las cuales las

35 El otro movimiento emergente de las luchas campesino-indígenas –que conserva la reivindicación del autogobierno y características más regionalistas– es el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), fundado por Felipe Quispe –el Mallku– el 14 de noviembre de 2000, el mismo día y en el mismo lugar en el que Túpac Katari –el líder indígena que mantuvo un cerco de La Paz en 1781-1782– fuera ejecutado 219 años antes.

direcciones políticas y sus representantes públicos (concejales en los municipios, diputados y senadores) rinden cuenta de su actuación y reciben las directivas principales para su acción. Mediante congresos regionales y nacional se eligen las directivas en los niveles territoriales correspondientes. Como movimiento ligado a las organizaciones sociales, sus actuaciones son abiertas y estas participan tanto en el control de las acciones de sus representantes, como en la elección de los candidatos a las elecciones (Evo Morales en *Punto Final*, 2003, Santiago de Chile, N° 537).

El MAS no es un partido, es un conjunto de movimientos sociales, no queremos que sea un partido, con jefe, estatutos (Dionisio Núñez, Primer Ampliado de Evaluación de la Gestión Parlamentaria del MAS).

Estas gigantescas maquinarias sindicales y las organizaciones comunitarias han mostrado ser eficaces fuentes de “capital político”, con capacidad para disputarle los votos a los partidos tradicionales y modificar el escenario discursivo nacional, en un contexto en el que hacer política electoral ha devenido un mandato de asamblea.

Quienes han entrado a la campaña electoral han sido ellas [las organizaciones] sobre todo las centrales campesinas. En el Norte de Potosí el trabajo lo hicieron los ayllus, que operaron con el nombre de MAS. En el trópico cochabambino no es que gana el MAS, ganaron las seis federaciones [coccaleras], que son lo fundamental del instrumento político y que le dan a Evo Morales una victoria increíble (Filemón Escóbar en *Pulso*, 2002, La Paz, N° 153).

En el Primer Ampliado de Evaluación de la Gestión Parlamentaria³⁶, se pudo observar –incluso en su “escenificación” física– el poder de las organizaciones sindicales que conforman el Instrumento Político, en línea con las palabras iniciales de Román Loayza (CSUTCB): “Este proyecto [el MAS-IPSP] ha nacido del seno de las organizaciones. Nosotros somos fruto de las organizaciones, que nos han parido”. En la mesa coordinadora estaban sentados los representantes de la CSUTCB³⁷, la Federación

36 Realizado en Casa Campestre, Quillacollo, Cochabamba, el 19 y 20 de julio de 2003. A dicho ampliado fueron invitados Álvaro García Linera, Raúl Prada Alcoveza y Andrés Soliz Rada como “evaluadores externos”.

37 Loayza es fruto del congreso de Sucre (1 al 4 de julio de 2003), el cual no fue reconocido por el secretario ejecutivo –en funciones– de la confederación, Felipe Quispe, lo que derivó en la división de ese organismo sindical campesino. La Central Obrera Boliviana no reconoció a ninguna de las dos fracciones y colocó una guardia de mineros armados con dinamita en el ampliado obrero posterior a la reunión de Sucre para evitar incidentes, ante los reclamos de ambos grupos, en ocasiones violentos, para ser acreditados.

Nacional de Mujeres Bartolina Sisa (cuya secretaria ejecutiva, Leonilda Zurita, es también secretaria de Relaciones Internacionales del MAS), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Confederación de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), además de Evo Morales como presidente del MAS. Distribuidos en sillas a lo largo y ancho del salón estaban los diputados, quienes debían informar a sus colegas –pero ante todo a las organizaciones– sobre la actividad parlamentaria desarrollada en el último año (desde julio-agosto de 2002). El responsable político del MAS en el departamento de La Paz, Jorge “Coco” Arzabe explicita esta hegemonía sindical-campesina en el Instrumento Político, con relación a sectores provenientes del medio urbano:

En la dirección hay una hegemonía de los sectores campesinos (un eje aymara-quechua): cocaleros, campesinos indígenas del Altiplano y colonizadores. Esto lo estamos manteniendo para garantizar el espíritu ideológico, la estrategia política y la estructura orgánica. No queremos entramparnos en el populismo. Mucha gente está con la sana visión de cambiar, de transformar el país, pero otras personas tienen una visión muy corta, y sólo buscan un acomodo personal (Entrevista a Jorge Arzabe, junio de 2003).

La inexistencia de un aparato burocrático, intelectual y administrativo separado del sindicato es una de las características organizativas del MAS: “Donde las organizaciones sindicales funcionan bien [y adhieren al MAS] el Instrumento Político no existe por separado”, como por ejemplo en la mayoría de las seis federaciones cocaleras del Chapare (Evo Morales, Ampliado de Evaluación)³⁸. No es extraño que surjan “desconfianzas” y tensiones entre el bloque parlamentario y las organizaciones sindicales. Frases como: “Las bases no estamos ejerciendo suficiente control sobre los diputados”, “Cuando sale una convocatoria de las federaciones los diputados deben estar presentes”, junto con críticas a los diputados que no “bajan a informar a las bases” se pueden escuchar en congresos y reuniones políticas y sindicales³⁹. Este “control” resulta más fuerte en el caso de los diputados uninominales –que a diferencia de los

38 En el caso del MAS, no se trata ni de una organización de cuadros ni actúa en función de la dinámica del debate del aparato burocrático, intelectual y administrativo interno; su base organizativa son los sindicatos agrarios y organizaciones populares urbanas, y una buena parte de las decisiones políticas partidarias se resuelven preponderantemente en ampliados o congresos sindicales antes que en los niveles de la dirección administrativa del partido (García Linera, 2003).

39 Congreso de la CSUTCB, Sucre, 1 al 4 de julio de 2003, y Congreso del MAS de Coripata, 13 de junio de 2003. En Sucre, algunos oradores cuestionaron la existencia de diputados que no están efectuando el aporte establecido a las organizaciones sindicales. En Coripata, el diputado uninominal Dionisio Núñez fue criticado por varios participantes por haber enviado a su suplente y no haber concurrido personalmente, debido a actividades que tenía pendientes en La Paz.

plurinominales– fueron elegidos por las organizaciones. Incluso se puede observar la supervivencia de cierta lógica clientelar “desde abajo”, a través de peticiones de las más diversas (camisetas de fútbol para el equipo de la comunidad, útiles escolares, resolución de problemas de infraestructura, etc.) lo que parece diferenciarse de la relación jerárquica que normalmente caracteriza al clientelismo político; y podría interpretarse –provisoriamente– como cierta “reapropiación” por las organizaciones y comunidades del dinero percibido por los diputados⁴⁰, bajo una lógica comunal de soberanía *no* enajenada (Gutiérrez Aguilar, 2001a).

Esa temática fue abordada de forma crítica en el mencionado ampliado, donde algunos participantes señalaron que “muchos diputados van a sus comunidades sólo a entregar camisetas”. Frente a ello, Evo Morales señaló que “debemos llenar los vacíos que tenemos: políticos, ideológicos y también de conducta ética [...] Hay que analizar la conducta de los legisladores no sólo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista político-ideológico. [Porque] algunos sólo ven el tema económico”. A su vez, Dionisio Núñez destacó la necesidad de “educar a las bases en que no es función de los diputados atender rosarios de peticiones”, especialmente a partir de las próximas gestiones, y utilizar esos recursos en capacitación.

“¡JICHHAPI JICHHAJA!” (¡AHORA ES CUANDO!). EL DESBORDE ELECTORAL DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Nos summus, nos existimus

La sigla de la ASP (Asamblea por la Soberanía de los Pueblos) nunca obtuvo el reconocimiento de la Corte Nacional Electoral (CNE), por lo cual la primera vez que el Instrumento Político se puso a prueba –en 1995– lo hizo en el marco de la alianza Izquierda Unida (IU) y obtuvo 49 concejales y diez alcaldes, todos en Cochabamba. Luego –en 1997– Evo Morales fue elegido diputado uninominal con el 61,8% de los votos (un récord nacional). Pero en 1998 el “matrimonio” político entre Evo Morales y Alejo Véliz se rompió definitivamente, después de tortuosas disputas por el liderazgo campesino en Cochabamba⁴¹, y Morales decidió embarcarse con la sigla del Movimiento al Socialismo (MAS), esta vez ante las difi-

40 Una militante acusó al diputado Dionisio Núñez de “tacaño” por no aportar dinero a las secciones del MAS de Coroico, “por lo menos para el refresco en las reuniones” (Congreso MAS, Coroico, 14 de junio de 2003).

41 Alejo Véliz, finalmente, se alió con la derechista Nueva Fuerza Republicana (NFR), del ex militar Manfred Reyes Villa, de donde luego sería expulsado.

cultades de lograr el reconocimiento electoral del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos; de allí la sigla MAS-IPSP⁴².

Las elecciones presidenciales de junio de 2002 pusieron de relieve la crisis de legitimidad de la “democracia pactada” que imperó desde 1985; percibida cada vez más como “una impostura discursiva” (Gutiérrez Aguilar y García Linera, 2002: 14), detrás de la cual las cúpulas partidarias tradicionales tejen versátiles alianzas para obtener la mayoría parlamentaria que les permita acceso al poder. La creciente brecha entre las siglas partidarias (MNR, MIR, MBL, etc.)—que incluyen significantes como *nacionalista, izquierda o revolucionario*—y los contenidos de las políticas aplicadas, ponen de relieve las transformaciones político-ideológicas de los partidos que se alternaron en el gobierno desde mediados de los años ochenta, y que adhirieron fervientemente a las recomendaciones de los organismos financieros internacionales.

Después de una década y media de hegemonía de los partidos tradicionales, dos figuras surgidas de la resistencia social contra el modelo neoliberal—Evo Morales y Felipe Quispe—fueron legitimados con un gran caudal de votos. De esa forma—relatan con ironía Guzmán y Orduna (2002b)—un “terrorista” (Quispe) y un “narcotraficante” (Morales), devinieron en protagonistas de la “fiesta democrática”. En el caso del líder del MAS, este quedó a menos de dos puntos porcentuales del triunfador—Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR—quien fue finalmente elegido presidente por el Congreso el 6 de agosto de 2002⁴³.

Como señala Romero Ballivián (2002: 181), Evo Morales logró una alianza electoral inédita entre los campesinos, los habitantes de los barrios pobres de las ciudades y consistentes círculos de la clase media intelectual. Desde una intención de voto inferior al 5%, y ajeno a las técnicas del *marketing* electoral convencional, el MAS inició un

42 El MAS proviene originariamente de la Falange Socialista Boliviana (FSB), fundada por Unzaga de la Vega en 1937 emulando a la fascista Falange Española. Unzaga y el falangismo boliviano organizaban los cuadros de choque que atacaban sindicatos e izquierdistas, y durante la Revolución de 1952 fueron la oposición contrarrevolucionaria y expresaban a los terratenientes “blancoides” racistas que defendían sus propiedades contra los levantamientos indígenas. A fines de los años ochenta, el ala de la falange liderada por Añez Pedrasa se fue moviendo a la izquierda y formó el MAS Unzaguista, que se aliaría con grupos como el de Evo Morales para formar Izquierda Unida. Luego, Morales, buscando inscribirse en el sistema electoral, acabó apropiándose de la sigla del MAS, eliminando al unzagismo como apellido e ideología, aunque manteniendo los mismos colores azules del falangismo (Bigio, 2002).

43 Los resultados de las elecciones presidenciales del 30 de junio de 2002 han sido los siguientes: MNR (22,45%): primer lugar en Chuquisaca, Santa Cruz, Beni y Pando; obteniendo 11 senadores y 36 diputados. MAS (20,94%): primer lugar en La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí; obteniendo 8 senadores y 27 diputados. Posteriormente, el 4 de agosto, a través de un acuerdo MNR-MIR, Gonzalo Sánchez de Lozada fue elegido Presidente por el Parlamento, de acuerdo a lo estipulado por la Constitución Política del Estado. El MAS rechazó negociar un acuerdo con los partidos “tradicionales” que le permitiera a Evo Morales llegar a la primera magistratura.

acelerado crecimiento en el último mes y medio de campaña electoral, lo que combinó un apoyo rural (mal medido por las encuestas) con un apoyo urbano tardío. Por primera vez una organización de la izquierda radical alcanza un segundo lugar, con un porcentaje próximo al 20% (581.884 sufragios) y –también por primera vez– las ciudades se mostraron atentas a un movimiento encabezado por un líder campesino, aunque su implantación fue principalmente rural (Romero Ballivián, 2002: 188). De esta forma, la influencia del MAS se irradió desde su bastión (Cochabamba) hacia el norte de Chuquisaca, el norte de Potosí, el este de Oruro y de La Paz, e incluso hacia el oeste de Santa Cruz, imponiéndose en las secciones con fuerte presencia de campesinos migrantes (Romero Ballivián, 2002).

El Altiplano paceño fue disputado con el MIP de Felipe Quispe, con fuerte arraigo en las regiones aymaras, y sus puntales fueron las zonas cocaleras del Chapare (registró casi el 80% en Villa Tunari), y los Yungas de La Paz, donde predominó un voto de características más corporativas. A ello se suma la victoria del MAS en Oruro, El Alto y barrios marginales como la circunscripción sur de Cochabamba, lo que muestra que, luego del retroceso posterior a la crisis de la UDP, la izquierda parece haber encontrado –al menos coyunturalmente– un discurso para reconquistar a sectores urbanos pobres y marginales. A la luz de los resultados, Evo Morales y el MAS representan al mundo quechua de Cochabamba, Potosí, Oruro y parte de Chuquisaca, y a algunos segmentos del universo aymara radicados sobre todo en Oruro y, en menor medida, en los Yungas de La Paz (Böhrt Irahola, 2002), lo que habla de la hegemonía electoral del MAS en el oeste del país (colla), y un desafío de extender su influencia al oriente (camba).

Siguiendo a García Linera (2002) podemos afirmar que más que una derrota numérica de las elites dominantes, que no fue abrumadora, lo que se experimentó fue una derrota moral de las mismas, que en una sociedad racista como la boliviana pone en entredicho la certeza de mando inapelable y naturalizado que los grupos privilegiados han producido durante todo este tiempo. Permitiendo, al mismo tiempo, la recuperación del *logos* de quienes “se cuentan como incontados” (Rancière, 1996) y –como mencionamos– el consiguiente despliegue del litigio (la lógica de la igualdad de cualquiera con cualquiera) en el “orden natural” del neocolonialismo republicano.

La participación de Evo Morales en diversas movilizaciones sociales, especialmente en la Guerra del Agua en Cochabamba y tres fuertes bloqueos en el Chapare, le permitieron construir nuevas solidaridades y establecer una amplia red de contactos –incluyendo sectores urbanos–, que se tradujeron en la postulación de candidatos propuestos por las organizaciones sociales, y la inclusión de una amplia plataforma

de reivindicaciones que reunía la rebaja de las tarifas de los servicios públicos, la reversión de los procesos de privatización y la preservación de los recursos naturales.

De esta forma ha ido emergiendo un movimiento, mezcla de izquierda rural y urbana, sindicalismo y etnia, capaz de articular un discurso antineoliberal y antiimperialista, e incorporar una visión étnico-cultural andina que interpela a otros sectores empobrecidos y marginados de la sociedad boliviana (Zegada, 2002: 11). Pese a mantener formas de interpelación “populistas”, los nuevos liderazgos indígenas –como Evo Morales y Felipe Quispe– transformaron la lógica de la representación presente en recientes experiencias “populares”, como CONDEPA y UCS.

“SIN VISA ME SIENTO MÁS LIBRE”. EVO COMO SÍMBOLO DE LA INJUSTICIA Y LA DIGNIDAD NACIONAL

La expulsión de Evo Morales del Parlamento en enero de 2002 y sus enfrentamientos con el entonces embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha, constituyen dos momentos en los que el antagonismo entre partidos tradicionales-sistema político-embajada estadounidense y Evo Morales-MAS emerge con fuerza en la superficie, con un fuerte carácter simbólico que transformó su postulación en una suerte de candidatura “maldita”: mientras el “cocalero aguerrido” era desafiado por el representante del “imperio” (violando el protocolo diplomático), el “indio proscrito” por el sistema político era humillado por “políticos indecentes”, severamente cuestionados por la opinión pública. Por eso su desafuero –utilizando la pena máxima de “separación definitiva”– ha sido leído por muchos bolivianos como “la separación sentimental de una Bolivia que tiene clausuradas sus aspiraciones de representación política, [y] que siente, con motivos, que los bloqueos son más participativos que la democracia” (Guzmán y Orduna, 2002a). El propio Evo Morales buscó reforzar estas percepciones denunciando que se trató de “un juicio político contra aymaras y quechuas”.

Ambos hechos le proveyeron al MAS el referente simbólico necesario para lograr la adscripción política de una parte de las clases medias urbanas, más vinculadas a los procesos de individuación modernizante, y alejadas de las lógicas sindical-corporativas predominantes en el MAS (García Linera, 2003). Y se fueron creando las condiciones que contribuyeron a transformar a Morales en un líder nacional, cuyo crecimiento desplazó a otros candidatos denominados “asistémicos” por la prensa boliviana (entre ellos, el ex juez Alberto Costa Obregón).

El dictamen en tiempo récord de la Comisión de Ética del Parlamento (72 horas) y el “consenso total” de los representantes de la “democracia pactada” (ADN, MNR, MIR, UCS y NFR) se basó en la

acusación de que el diputado cocalero era el responsable intelectual de la muerte de cuatro uniformados en Sacaba. Pocos días antes, en ese poblado cochabambino, la reacción cocalera contra el Decreto Supremo 26415⁴⁴ –emitido por el entonces presidente (reemplazante de Banzer) Jorge “Tuto” Quiroga– se trasformó en una sangrienta batalla de cuatro días contra las fuerzas policiales y militares, con un saldo de siete muertos (tres militares, un policía y tres cocaleros).

El clima anti-cocalero fue creciendo en paralelo al desafuero de Morales: un editorial del diario *La Prensa* (La Paz, 19 de febrero de 2002) habla de informes de inteligencia acerca de la presencia de “francotiradores extranjeros” (colombianos) en Sacaba y recuerda los “viajes a Cuba” de Evo Morales; y otro editorial del mismo diario (20 de febrero de 2002) vuelve a hablar de “sedición”, de “movimientos terroristas” infiltrados entre los cocaleros, y de la necesidad de “neutralizar a Evo Morales”.

Una fuerte campaña represiva siguió a las jornadas de Sacaba: la sede de la federación campesina del trópico –ubicada sobre la plaza Busch en Cochabamba– fue allanada por el Grupo Especial de Seguridad (GES) y 100 campesinos –entre ellos 21 dirigentes– fueron arrestados. Mientras tanto, la radio cocalera Soberanía –que funcionaba en Chipiriri– era clausurada, y sus equipos secuestrados. Con ello se continuaba una política de militarización del conflicto que, según informes de la Defensoría del Pueblo, provocó entre 1987 y 2002, 57 cocaleros muertos, 500 heridos de bala y 4 mil detenidos en celdas policiales sin el debido proceso; lo que llevó a los organismos de Derechos Humanos a hablar de una “violencia reactiva” por parte de los campesinos, frente a la militarización cotidiana de sus vidas⁴⁵.

Pero la “neutralización” de Evo Morales cuando estaba comenzando la campaña electoral para las presidenciales de 2002 le permitió al dirigente del MAS constituirse a un tiempo en el “enemigo número uno” del cuestionado sistema político boliviano y de la embajada estadounidense, favoreciendo la explicitación de antagonismos y –con ello– la polarización del campo político.

44 Dicho decreto establecía el control de la circulación y secado de coca en estado natural en el territorio boliviano, prohibiendo la comercialización en mercados primarios de coca proveniente de zonas no tradicionales. Justamente, los enfrentamientos en Sacaba se iniciaron luego del fracaso de las negociaciones tendientes a la reapertura del Centro de Acopio de Coca ubicado en dicho poblado, convertido en “el símbolo, el territorio estratégico que había que ganar a como dé lugar” (*La Prensa*, La Paz, 18 de enero de 2002). De esta forma, el decreto –contradiendo la Ley 1008 y en una suerte de “maximalismo anti-cocalero”– le daba un estatus de “sustancia controlada” a la hoja de coca en estado natural, para así poder penalizar su comercialización, transporte y hasta secado (Orduna, 2002a).

45 La información para la descripción del conflicto de Sacaba fue extraída del matutino paceño *La Prensa*.

Me botó del Parlamento la clase política corrupta y decadente que representa al modelo económico y quiere hacer buena letra con la embajada de Estados Unidos.

Quieren la muerte civil para Evo Morales.

Para el gobierno y Estados Unidos Evo Morales es el enemigo número uno.

Ante la embajada los diputados están en carrera para ver quién es más anti-Evo [...] los jefes partidarios venderían a su madre por la visa [estadounidense].

Con estas palabras –en muchos casos cargadas de ironía– el dirigente cocalero respondió a su expulsión (*La Prensa y Pulso*, La Paz, febrero de 2002), la cual dio lugar a una huelga de hambre en el Congreso por parte de algunos diputados opositores, y a un ciclo de bloqueos y protestas que algunos medios denominaron “La guerra por Evo”; y que permitió reactualizar los lazos entre las organizaciones urbanas y campesinas que protagonizaron la Guerra del Agua en abril de 2000 (Coordinadora del Agua, regantes, transportistas, etcétera)⁴⁶.

Las posteriores declaraciones de Rocha contra la candidatura de Morales, en plena campaña electoral⁴⁷, exacerbaron los sentimientos patrióticos y antiimperialistas de una gran parte de la población rural y urbana, y reforzaron el liderazgo del dirigente cocalero⁴⁸. Mientras la mayor parte de los partidos tradicionales hicieron de la visa un

46 El Decreto Supremo 26415 quedó sin efecto luego de que el gobierno negociara –pese a haber dicho que no lo haría– con Evo Morales, en medio de fuertes bloqueos de caminos. También se acordó –en el marco de la comisión de mediadores en la que participó la Defensora del Pueblo y la Iglesia– la apertura del mercado de Sacaba, la libertad de los detenidos, el respeto a los derechos sindicales y políticos de Evo Morales, y la no erradicación de coca en los Yungas. Por su parte, la expulsión de Morales del Parlamento fue revertida más tarde por el Tribunal Constitucional, cuando ya había sido reelegido para esa banca, esta vez acompañado por 35 legisladores del MAS.

47 El entonces embajador, al final de un discurso en Chimoré (en la región del Chapare) les “recordó” a quienes “quieren que Bolivia vuelva a ser un exportador de cocaína importante, que ese resultado pondrá en peligro el futuro de la ayuda de los Estados Unidos a Bolivia”. Y agregó: “Una Bolivia dirigida por gente que se ha beneficiado del narcotráfico no puede esperar que los mercados de los Estados Unidos se mantengan abiertos para las exportaciones tradicionales de los textiles” (*La Razón*, La Paz, 28 de junio de 2002). Previamente había comparado a los cocaleros con el Talibán (*La Prensa*, La Paz, 15 de febrero de 2002).

48 Con una consigna que tiene grandes similitudes a la opción “Braden o Perón”, utilizada por el peronismo en Argentina en las presidenciales de 1946, el MAS convocó a la ciudadanía a elegir entre Rocha o Morales en los siguientes términos: “Boliviano: tú decides quién manda ¿Rocha o la voz del pueblo?”, invocando al “pueblo sencillo y trabajador” como el sujeto y destinatario de las transformaciones propuestas, en favor de la soberanía y la dignidad nacional. Y utilizando los colores de la bandera nacional para reforzar el significativo *boliviano* (Afiche de campaña).

requisito para ser candidato –en un contexto en el que la embajada estadounidense estaba procediendo a revisar los visados de unos 200 ciudadanos– Evo Morales declaró: “Sin visa me siento más libre, más digno, más soberano” (*La Prensa*, La Paz, 15 de febrero de 2002) y se refirió irónicamente al entonces embajador estadounidense como “mi jefe de campaña”, preanunciando el efecto electoral positivo de las declaraciones de aquel sobre su candidatura presidencial.

ENTRE LA NUEVA IZQUIERDA Y EL NEOPOPULISMO

El trabajo de Alenda Mary (2002) acerca de la experiencia de CONDEPA aporta algunos elementos de análisis que permiten establecer continuidades y rupturas entre las formas de interpelación y liderazgo presentes en la *nueva izquierda* personificada en el MAS y las declinantes experiencias *neopopulistas*, que tuvieron un importante peso político entre los migrantes urbanos de origen indígena, cuyos procesos de individuación truncos (persistencia de las relaciones de compadrazgo, padrinzago, etc.) favorecieron la emergencia de liderazgos como el del “compadre” Carlos Palenque, quien desde su experiencia como comunicador social en RTP (Radio Televisión Popular) construyó una relación metonímica RTP=Nosotros (el pueblo, los pobres)=Carlos Palenque, luego prolongada a Pueblo=CONDEPA (Alenda Mary, 2002: 89).

Esta “valorización de los desamparados” además de suscitar mecanismos de identificación gatilló un proceso de “liberación cognitiva desde arriba”, que conllevó un conjunto de transformaciones en la visión del mundo de los actores, tras las cuales “llegan a reconocerse derechos y a creer que pueden contribuir a cambiar el orden imperante” (Alenda Mary, 2002: 88). Sin embargo, la eficacia de la interpelación condepista no radicaba en la “promesa de inversión del orden social en beneficio de los de abajo sino más bien en la integración simbólica de estos gracias a un símbolo clave de superación: una chola [Remedios Loza] que figura como primera candidata a diputada plurinominal para La Paz en 1989 y sale elegida” (Alenda Mary, 2002: 89-90). De esta forma, se trata de un discurso que más que propiciar el fin de las desigualdades, “las vuelve superables” (Alenda Mary, 2002: 93); “a pesar de su contenido igualitario, el discurso del compadre descansa en el tradicional esquema de dominación y lo refuerza [...] Carlos Palenque aparece como el protector indispensable de las mujeres de pollera que buscan elevarse socialmente” (Alenda Mary, 2002: 104). Una situación parcialmente similar se dio con la mencionada candidatura a vicepresidente de la República del aymara Víctor Hugo Cárdenas, promovida por el candidato del establishment Gonzalo Sánchez de Lozada. En ambos casos –más allá de las enormes

diferencias que caracterizan cada liderazgo— el “hombre de empresa” aparece como un elemento esencial en la legitimación del indio, portador de una cultura aun no legítima per se.

En el caso de los nuevos liderazgos políticos —y nos interesa particularmente el de Evo Morales— podemos arriesgar que —a diferencia del fenómeno condepista— se trata de un proceso de liberación cognitiva *desde abajo*; en el cual los indios están a la cabeza de manera autónoma, y los liderazgos son construidos a partir de un largo proceso de ocupación sucesiva de cargos en el sindicato campesino, para luego ocupar posiciones en el Instrumento Político (IP), y, eventualmente, en el Parlamento⁴⁹.

Pero, al mismo tiempo, la inexistencia real de institucionalización en el MAS y de mecanismos internos de expresión de mayorías y minorías, abona un sistema de toma de decisiones en las que el líder (y *árbitro*) se apoya alternativamente en coaliciones coyunturales e inestables (no en todas las discusiones “se invita” a las mismas personas); en cuyo poder y capacidad de persuasión sobre el líder intervienen capitales legítimos variados, que difieren según la temática en discusión: capacidad de movilización sindical-corporativa, capacidades discursivas, formación “técnica”, etc. Más que de fracciones se trata de grupos de presión informales (según proveniencia ideológica, relaciones personales, étnicas, etc.), que en un escenario gelatinoso, corrientemente no logran “solidificarse”. Más bien, diferentes clivajes operan (aunque no de forma lineal) al interior del MAS: indigenistas, ex izquierdistas provenientes del trotskismo, guevarismo, Partido Comunista, etc., clases medias urbanas, campesinos indígenas, bloque parlamentario, sindicatos campesinos⁵⁰. Todo lo cual reafirma el papel arbitral de Evo

49 Una carrera que muchas veces comienza con la secretaría de deportes, la cual permite establecer una gran cantidad de vínculos en las diferentes comunidades. Esa es la experiencia de Evo Morales, y parcialmente, de Dionisio Núñez. El desarrollo sindical de Morales pasó por las siguientes etapas: 1981: secretario de deportes del sindicato San Francisco; 1985-1988: secretario general de la Central Campesina 2 de Agosto; 1991-1995: secretario de organización de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba; 1993: presidente del Consejo Andino de Productores de Coca; 1994 hasta la fecha: presidente de las cinco federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba (que luego serán seis) (Oporto Ordóñez, 2002: 20).

50 Muy pocos parlamentarios responden a fracciones con cierta densidad organizativa; tal es el caso del senador Félix Vásquez (representante del Movimiento Indígena Popular, MOP, del norte de Potosí, que actúa dentro del MAS) o del diputado Manuel Morales Dávila (del Bloque Social Patriótico, de matriz nacionalista de izquierda y con menos visibilidad que el MOP). En otros casos, como el de los diputados provenientes de organizaciones sindicales o comunidades *ayllus*, se combina la fidelidad —más corporativa— a sus bases, con cierta “disciplina partidaria”. El intento del diputado Rosendo Copa, de la comunidad *qaqachaka*, de conformar un bloque indígena transversal a los partidos políticos, generó una fuerte oposición de Evo Morales, Antonio Peredo y otros dirigentes del MAS.

Morales como garantía de continuidad del MAS como una empresa política común⁵¹.

De todas formas, no hay que olvidar que cuando se trata de posicionamientos políticos generales –o acciones como bloqueos, etc.– Morales “baja” a los congresos y ampliados sindicales campesinos, actitud que sin duda encarna mucho más que una pose y representa una instancia de “confirmación carismática” (Weber, 1998: 195). El encuentro *cara a cara* con las bases –al igual que con sus votantes– resulta clave en la construcción de liderazgo de Evo Morales; su vestimenta, vocabulario (y su constante victimización) constituyen un (eficaz) intento de diferenciación con respecto a los “políticos tradicionales”, presentándose genuinamente como *uno más* entre sus compañeros campesinos, pese a haber ocupado espacios antes reservados a quienes poseían los beneficios de la distinción⁵². Este ser *uno más* –un portavoz privilegiado de los campesinos que siempre vuelve a sus bases, y que se esfuerza por aprender para responder a sus actuales responsabilidades– le ha permitido a Evo Morales la producción de un “poder simbólico” al interior del sindicalismo cocalero (y desde allí al interior del Instrumento Político) a partir de la credibilidad, la confianza, el reconocimiento y la fidelidad de sus pares; y la constitución de una lógica de “inclusión-exclusión” sobre sus potenciales competidores internos (Ansart, 1983). La conservación de este poder simbólico es especialmente importante en el contexto de un movimiento concebido como una extensión de estructuras sindicales, con escasa institucionalización, y recorrido por numerosas fracciones internas (no formalizadas) cruzadas por la posesión de variados –y asimétricos– capitales sociales, escolares, culturales y étnicos.

51 Evo Morales ha concentrado una gran cantidad de poder en su persona; es secretario ejecutivo de las seis federaciones del trópico, presidente del MAS, jefe de bancada parlamentaria y jefe del Estado Mayor del Pueblo (una coordinadora de movimientos sociales y sindicales paralela a la COB).

52 “Cuando estoy en la ciudad, en algún acto, algún brindis, algún cóctel, la gente se me acerca y me dice: ‘Evo, sigue adelante, estamos contigo’. Gente blancoide solidaria. Antes, ¡qué pues! Se alejaban, se escapaban de mí, yo me quedaba solito con mi coctelcito, ahora me falta tiempo para saludar” (Orduna, 2002b).

“SOMOS PUEBLO, SOMOS MAS”. INTERPELACIÓN DISCURSIVA Y CONSTRUCCIÓN DE SUJETOS

*Hay un sentimiento nacionalista de dignidad.
Las elecciones serán una pulseada entre la conciencia y la plata [...]
Los pobres y los excluidos nos están permitiendo avanzar.*

La Prensa
Evo Morales

Luego de los favorables resultados electorales, uno de los desafíos que afrontó el MAS fue la estructuración de una plataforma discursiva que a partir de cierto “cierre” ideológico le permita crear una *síntesis* coherente entre una relectura del pasado colonial y una propuesta de futuro destinada a refundar el Estado boliviano, dejando atrás las relaciones de dominación racializadas que acompañaron toda la historia republicana y las relaciones de explotación inherentes al capitalismo. En un contexto de ambigüedad ideológica –propia de las organizaciones sindicales de las cuales es una “extensión”–, caracterizada por múltiples centros de emisión discursiva que no logran un “espacio de intersección” (Antezana, 1983), prevalece una interpelación (una suerte de “murmullo ideológico”) basada en la oposición al neoliberalismo y la defensa de la soberanía y la dignidad nacionales⁵³.

La propia dinámica sindical, que tiñe al conjunto de la actividad política del MAS, tiende a sobreestimar lo corporativo y debilitar la construcción de “miradas y referentes generales de articulación de la diversidad social, nacional y clasista de la sociedad” boliviana (García Linera, 2003: 4). Al tiempo que, en muchos casos, prevalece una suerte de “clientelismo popular” en detrimento de iniciativas de reforma “intelectual y moral” de la política y el Estado.

Pese a ello, puede observarse el intento –aún precario– de articulación de elementos nacional-democráticos (tendiente a recuperar el antagonismo social, usualmente presentado por los sectores dominantes como mera “diferencia”): una idea de nación plebeya (pueblo sencillo y trabajador, pueblos originarios, o simplemente “los pobres”), la defensa del territorio y la soberanía (centrada especialmente en la nacionalización de los recursos naturales: gas, petróleo y hoja de coca⁵⁴), combi-

53 “Más que programa [el MAS y el MIP] recogen las insatisfacciones, el hastío, la incompreensión, la exclusión expresada en los rostros de la calle y el campo” (Espinoza, Guzmán y Vera, 2002).

54 Existe una distinción entre tierra y territorio, incorporando en este último el subsuelo, las riquezas naturales, el espacio de reproducción cultural indígena, etc. En relación a la problemática de la tierra, el MAS ha mostrado algunas dificultades: “El tema tierra es más complejo de lo que yo creía, estamos preparándonos para entrar con patada voladora el año que viene al tema tierra y territorio”, reconoció Evo Morales, pero tal “patada voladora” no llegó y, luego de más de un año de gestión, el MAS no ha presentado ningún proyecto sobre el tema tierra.

nada con una fuerte interpelación antiimperialista (fundamentalmente anti-estadounidense) vinculada a la defensa de la “dignidad”⁵⁵.

Estos esfuerzos por superar lo sindical-corporativo se apoyan, en gran medida, en lo que Laclau denomina “lógica de la equivalencia”. Es decir, la conjugación de diversas demandas particulares en un sujeto colectivo a partir de la disolución de las diferencias (reivindicaciones particulares) en cadenas de equivalencias, representadas por “significantes vacíos” (significantes tendencialmente vaciados de sus significados particulares para asumir la representación de una universalidad que los trasciende) (Laclau, 1996)⁵⁶. De allí que el antagonismo pueblo=nación/oligarquía=antinación, propio del NR, esté presente en el discurso del MAS, aunque el pueblo no sea ya una “construcción” mestizo-criolla como la imaginaron los teóricos del NR (Montenegro, Céspedes), sino “originaria” y anticolonial.

En las reivindicaciones más vinculadas con su raíz “cocalera” se puede observar la rearticulación de un elemento del discurso neoliberal –la libertad de mercado (defensa del libre cultivo y comercialización de la hoja de coca)– en un discurso cuya característica principal es su frontal oposición al neoliberalismo. En parte ocurre algo similar con la “defensa de la nación” o la dignidad, que encontramos en el discurso del MAS, donde estos “núcleos comunes de sentido” (no clasistas) están ligados a campos ideológico-articulatorios distintos a los de del “nacionalismo burgués” (MNR de los años cuarenta/cincuenta). Recuperando al Laclau de los setenta (1986: 186) podemos decir que es la “forma” que adquiere la articulación, más que su contenido, lo que determina el “carácter de clase” de su ideología; vinculada con los intereses de pequeños propietarios campesinos (y algunos comunarios) que hegemonizan, como hemos señalado, la dirección del MAS-IPSP.

El “derecho a gobernar esta tierra”, y que “el pueblo sea poder”, parten fundamentalmente de una contabilización numérica, que se expresa en el uso de la propia sigla partidaria en la consigna “Somos

55 “Yo creo que ahora sí se está imprimiendo una ideología más definida [al MAS]. Por ejemplo, una ideología nacionalista, defensa de los recursos naturales, defensa de lo que es de Bolivia. Luego, si estamos hablando de la defensa de los recursos naturales, estamos hablando de la recuperación de las empresas capitalizadas. Indudablemente esto no puede dejar a un lado que esa ideología tiene que ser necesariamente antiimperialista. Eso es *sine qua non*, consecuencia inmediata” (Entrevista a Jorge Alvarado, agosto de 2003).

56 Para que esta operación pueda ocurrir es necesaria la presencia de un *otro* –exterior constitutivo– que no sea una *diferencia más* del sistema. Sino una “amenaza” frente a la cual las diferencias (positivas) de los elementos que componen una identidad se cancelen; en la medida en que entran en una relación de equivalencia con las demás frente a dicha “amenaza externa” que marca los límites del sistema. Piénsese en el caso de la unidad nacional en una situación de guerra, o también en la *constitución* del pueblo frente a las elites, la oligarquía, “la embajada”, etcétera.

pueblo, somos MAS". Esto difiere de la interpelación obrero-minera predominante hasta 1985, en la que la idea de que su trabajo y esfuerzo "sostenían" –económicamente– al conjunto de la nación era la que les daba "derecho" a gobernar, pese a ser un grupo minoritario de la sociedad. Por otra parte, esta acepción "numérica" de la sigla predomina corrientemente sobre su "significado", en el que figura el significante *socialista*, concebido más como una recuperación de las relaciones "protosocialistas" (de reciprocidad) aún vigentes en las comunidades-*ayllus*, que como una referencia a la tradición socialista de raíz marxista o socialdemócrata⁵⁷. No debemos perder de vista que el nombre –Movimiento al Socialismo– responde a una contingencia vinculada al no reconocimiento legal de la sigla IPSP (ver nota 42), y que el planteamiento original de la ASP de una Bolivia Socialista parece haber sido subordinado a la defensa de la "soberanía de los pueblos". Y el rechazo al marxismo por encontrarse dentro "de lo occidental" no ha encontrado –hasta el momento– una estructura cognitiva capaz de reemplazarlo como interpretación de la realidad social boliviana, y como "mapa" para emprender una acción política transformadora y emancipatoria que opere sobre las relaciones sociales derivadas de un capitalismo dependiente y atravesado por formas de producción precapitalistas (de allí el concepto de *abigarramiento* expuesto precedentemente)⁵⁸. Más bien, la radical ambigüedad discursiva del MAS (cuyos contenidos parecen negociarse día a día a partir de inestables "relaciones de fuerzas" internas) está dificultando su capacidad articularia y debilitando el capital político derivado de su exitoso desempeño electoral.

A diferencia del MIP, el MAS no es portador de un discurso de autogobierno indígena; y sus apelaciones al "retorno al *Ayllu*" (o como dice la consigna: "Somos *Ayllu*") no parecen uniformemente "adquiridas" al interior del movimiento. Algunos dirigentes matizan las apelaciones de los Principios Ideológicos que hablan –por momentos con tintes fol-

57 En su libro *Autonomía y poder*, Lagos (1997) estudia las relaciones de dominación y subordinación sustentadas en prácticas e ideologías de reciprocidad, "comunidad" y compadrazgo; y la emergencia de nuevas elites regionales después de la Reforma Agraria, a partir de "la apropiación del excedente campesino a través de 'tradicionales' formas de trabajo e intercambio, y de las estrechas relaciones que los grupos dominantes establecen con las unidades domésticas campesinas".

58 En su prólogo a *Tempestad en los Andes*, de L. Valcárcel (1927), José Carlos Mariátegui señalaba: "La reivindicación indígena carece de concreción histórica mientras se mantiene en un plano filosófico o cultural. Para adquirirla –esto es para adquirir realidad, corporeidad– necesita convertirse en reivindicación económica y política. El socialismo nos ha enseñado a plantear el problema indígena en nuevos términos. Hemos dejado de considerarlo abstractamente como problema étnico o moral para reconocerlo concretamente como problema social, económico, y político".

clóricos– del regreso a una “sociedad fraternal de abundancia” y una economía de “reciprocidad y redistribución”⁵⁹:

En aspectos básicos, estratégicos, [el discurso indigenista] tiene su peso, por ejemplo en el aspecto de la democracia. Frente a la democracia, como propuesta occidental, nosotros nos basamos más en recuperar lo que es el consenso como método de decisiones comunitarias. Eso es una cosa que nosotros queremos rescatar y recuperar, lo mismo que los valores de la solidaridad, de la reciprocidad, de la armonía, que son cosas importantes para un proceso de cambio. Pero eso de volver, por ejemplo, al Tawantinsuyo o al *ayllu*, eso ya es discutible. Está bien como discurso, como ejemplo, pero volver al *ayllu* me parece personalmente imposible, porque estamos viviendo momentos mucho más avanzados en ciencia y tecnología, que hay que darle un contenido social (Entrevista a Jorge Arzabe, junio de 2003).

La reivindicación de una Asamblea Popular Constituyente representa un eje importante en el discurso del MAS, entendida no como una mera reforma constitucional, sino como la materialización de una “nueva correlación de fuerzas” (Evo Morales en *Punto Final*, 2003, Santiago de Chile, N° 537). Sin embargo la no puesta en práctica de los Comités de Defensa de la Soberanía en las ciudades (tal como se había propuesto en la pasada campaña electoral) y la falta de discusión en las bases de un proyecto de país alternativo, han hecho que esta propuesta haya perdido cierta fuerza como apuesta de transformación político-social.

Paralelamente, la prematura electoralización de la actividad política (con vistas a las elecciones municipales de 2004, como “trampolín” para las presidenciales de 2007) “puede inhibir los repertorios de acción colectiva que son los que en el fondo dieron lugar a este nuevo ciclo de resurgimiento de la izquierda” (García Linera, 2003: 4). Incluso varios dirigentes han destacado la falta de liderazgo del MAS en los movimientos que han emprendido acciones reivindicativas en 2003 (generación *sandwich*, cooperativistas mineros), lo que puede tener un efecto potencialmente negativo en un movimiento que se piensa a sí mismo como una extensión política de las pulsiones de los movimientos sociales (incluso en el ámbito electoral). Al mismo tiempo que la consigna “con 35

59 “En el campo del conocimiento, el universo y el planeta son uno. El ser humano es parte inseparable de la naturaleza. Somos adversarios del paradigma newtoniano (Isaac Newton: científico matemático) que el mundo es una máquina inanimada gobernada por leyes matemáticas eternas. Somos adversarios del siglo de las luces encarnado en John Locke, Thomas Hobbes (filósofo y economista inglés) y de los fundamentos económicos de Adam Smith, todos ellos ideólogos de la actual sociedad industrial, de la llamada sociedad moderna” (*Nuestros Principios Ideológicos*, III Congreso Departamental, Cochabamba, noviembre de 2002).

diputados y senadores no alcanza, debemos ser mayoría”, enarbolada frente al cerco parlamentario oficialista, evidencia las dificultades para hacer valer el hecho de ser la segunda fuerza parlamentaria, y una de las bancadas de izquierda más numerosa en América Latina, aspecto que analizaremos en el siguiente apartado.

“¿ADÓNDE ESTÁ ENTRANDO SEÑORA?”. ENTRE EL CORPORATIVISMO SINDICAL-COMUNITARIO Y LA DEMOCRACIA LIBERAL

*Detrás del orden calmo de las subordinaciones,
detrás del Estado, detrás de los aparatos
del Estado, detrás de las leyes,
¿no será posible advertir y redescubrir
una especie de guerra primitiva y permanente?*

Genealogía del racismo
Michel Foucault

Gutiérrez Aguilar (2001a: 65) nos recuerda –siguiendo a Foucault– que “en los estados de dominación, el despliegue de la capacidad de ‘dirigir la conducta de otros’ no es un evento meramente ‘ideológico’, espiritual e intangible. [Sino que] los dispositivos de orden son los medios materiales, organizativos, culturales, y tecnológicos, a través de los cuales la dominación se ejerce de manera concreta, buscando restringir al mínimo cualquier posibilidad de autonomía del dominado”. De allí la necesidad de que las luchas de resistencia a la dominación adquieran un “carácter expansivo” –es decir, que cuestionen el hecho de que la capacidad de decisión misma ha resultado enajenada–, y la insuficiencia de “capturar” los dispositivos de orden para usarlos a favor de los dominados. Se trata más bien de erosionarlos, derogarlos, y levantar, al mismo tiempo, “nuevos dispositivos reguladores que no sólo consagren la nueva relación de poder, sino que anulen la conversión de las relaciones de poder en estado de dominación” y propicien mecanismos de autorregulación de dichas relaciones de poder (Gutiérrez Aguilar, 2001a: 65-66)⁶⁰.

Con el masivo ingreso de campesinos e indígenas a “jugar en una cancha ajena” (el Parlamento Nacional) varias de estas discusiones teóricas, en apariencia abstractas, han adquirido una renovada pertinencia. La decepción acerca de las posibilidades de transformación social –y en be-

60 La autora habla de “estado de dominación” cuando –en lugar de mecanismos flexibles y móviles de regulación no simétricos pero sí al alcance de ambas partes, en donde el desequilibrio pueda ser mutuamente trabajado a fin de disminuirlo, limitarlo o darle un cauce– lo que existen son niveles de desequilibrio “irreversibles y crecientes”, como resultado de una determinada cristalización de una relación de fuerzas.

neficio de sus comunidades— a través de las instituciones representativas, ha sido expresada por la mayor parte de los parlamentarios del MAS y del MIP —especialmente los indígenas— como balance de su primer año de gestión parlamentaria. A sólo un año de que su entrada al Parlamento atrajera la atención mediática y del resto de los diputados y senadores, cuando el eco de sus idiomas “originarios”, sus ponchos y polleras, y su encarnación de *lo* popular en el país, parecía recrear —en un ámbito fuertemente racia- lizado— la diversidad multisocietal de la denominada nación boliviana.

Las expectativas iniciales pronto dieron lugar a una constatación empírica: el Parlamento —al igual que el resto de las instituciones estatales democrático-liberales— no es un espacio neutro de representación, tal como reza la letra del liberalismo, sino que se trata de un aparato *moldeado* orga- nizativa, ideológica y culturalmente por los grupos dominantes, producto de un cierto orden social, de un “acto de fuerza fundador” que constituye el predominio de un grupo social sobre otros (Gutiérrez Aguilar, 2001a: 72).

A diferencia de las “formas comunitarias de la política” —en las que el límite de la actividad de los representantes es la propia voluntad colectiva que controla materialmente los medios de dicha soberanía—, en la forma liberal “la capacidad soberana que cada individuo detenta es cedida (intercambiada), total o parcialmente, para constituir un poder político que la deglute, una soberanía abstracta” (Gutiérrez Aguilar, 2001a: 67). La combinación en la práctica de estas dos lógicas de sove- ranía política —y las estrategias que intervienen en cada una— no ha resultado fácil para los parlamentarios del MAS, que en gran parte fueron elegidos por —y responden a— sus comunidades y, especialmente, a sus organizaciones sindicales. Sus capitales, útiles para organizar el curso de la decisión común en procesos de “autodeterminación social” (soberanía *no* enajenada)⁶¹, resultaron incapaces, hasta el momento, de disputarle el sentido de lo general, de lo nacional —en su propio “terreno”, el Parla- mento— a los representantes de los partidos tradicionales, herederos de las elites económicas y políticas que construyeron las instituciones repu- blicanas “a la medida” de sus capitales legítimos e intereses de clase.

Los dos principales dirigentes campesino-indígenas (del MIP y el MAS) se refieren así, en los testimonios seleccionados, a las tensiones entre estas dos lógicas de acción política, y más en general a las “dos Bo- livias” que se enfrentan al interior de las instituciones representativas:

Lo que pasa es que no pensamos como ellos, no comemos como ellos, no hablamos como ellos, no vestimos como ellos. Hay

61 No estamos sosteniendo aquí que no existan relaciones de poder en las comunidades, sino que existen “múltiples mecanismos de autorregulación que se ponen continuamente en marcha, de manera más o menos conflictiva, en la búsqueda de mutua influencia dentro de la ratificación del sentido de pertenencia” (Gutiérrez Aguilar, 2001a: 71).

una diferencia tremenda, una contradicción, un choque de culturas: cultura política indígena frente a cultura política dominante liberal [...] El MIP tiene diputados que no están a la altura de otros que han estado años acá. Por eso tienen miedo a exponer sus ideas. Poco a poco se están familiarizando, hay que adaptarse a los horarios, a las nuevas formas de accionar. Para nosotros este es un nuevo escenario, una nueva forma de patear el tablero político-ideológico frente a los paradigmas neoliberales. Pero también estamos concientes de que por esta vía no vamos a cambiar nada [...] no estamos acostumbrados a estar acá adentro, sentados esperando. [Frente al “rodillo” parlamentario] uno se pregunta: “habiendo masas ¿para qué voy a estar aquí adentro?”. Esta no es nuestra cancha, la nuestra es hacer movilizaciones, bloqueos, donde participan miles de comunarios (Felipe Quispe en *Pulso*, 2002, La Paz, N° 164).

Para mí el tema del voto pasa a un segundo plano, creo más en las luchas sociales, porque con las marchas y bloqueos cambiamos leyes, anulamos decretos, hacemos aprobar leyes [...] el Parlamento sirve por lo menos para ser expulsado y donde la gente puede tener idea de qué son los partidos tradicionales [...] Nosotros vamos con otra mentalidad, contra el modelo y el sistema, tal vez estando dentro del sistema [...] combinando la lucha parlamentaria con la lucha social (Evo Morales en *La Prensa*, La Paz, 11 de marzo de 2002)⁶².

A las formas de discriminación, derivadas del carácter racializado de la construcción del poder en Bolivia, se suma la tenencia de capitales sociales, culturales, escolares y simbólicos cuya posesión o no determina la eficacia de la acción parlamentaria, el éxito o la futilidad de sus interpelaciones discursivas, y su visibilidad o invisibilidad intra y extramuros; que a través de los medios de comunicación, determinará la capacidad de crear “opinión pública”. Como nos recuerda Bourdieu (2001: 11) las “relaciones de comunicación por excelencia, que son los intercambios lingüísticos, son también relaciones de poder simbólico donde se actualizan las relaciones de fuerza

62 Sin duda, estas declaraciones están influidas por su expulsión del Parlamento, dos meses antes. A un año de gestión legislativa, la articulación de lucha social y lucha parlamentaria mostró varias dificultades: “Nosotros tenemos la estrategia de combinar la lucha legal con la lucha movilizadora. Por ejemplo, después de que se instala este Parlamento, nosotros proponemos leyes, pero como no había movilización, entonces, esas leyes han quedado rechazadas. En enero comenzamos a hacer la movilización, pero el Parlamento estaba en receso, por eso lo que creo conveniente es saber combinar ambos métodos estratégicamente, dirigidos a la toma del poder. Luego, qué plan de gobierno hemos de aplicar a partir de que estemos en el Palacio, y tercero, cómo vamos a defender ese proceso. Son tres cosas clave, estratégicas, vitales, para el éxito de esta hazaña que queremos” (Entrevista a Jorge Arzabe, junio de 2003).

entre los locutores y sus respectivos grupos”, a partir de la posesión de ciertos capitales lingüísticos valorizados en un “mercado de bienes simbólicos” (Bourdieu, 2001: 24). De forma tal que “los locutores desprovistos de la competencia legítima quedan excluidos de los universos sociales en que esta se exige o condenados al silencio” (Bourdieu, 2001: 29).

El resultado para los diputados indígenas –carentes de estos capitales lingüísticos legítimos– fue la “invisibilidad” y la imposibilidad de imponer la más mínima agenda parlamentaria⁶³: el poder colonial –difuso en los distintos espacios de la vida social– sumado a los propios “complejos de inferioridad” promovidos por siglos de estigmatización y opresión, conspiraron contra el protagonismo indígena, contra la transformación del *factor indígena* en fuerza hegemónica: en sus discursos, en su capacidad interpelatoria en castellano, e incluso en la forma de ocupación física del espacio parlamentario⁶⁴.

Más bien, en el ámbito parlamentario parecen invertirse las relaciones de fuerza simbólicas que analizamos con referencia al ampliado de Cochabamba, y son los sectores medios urbanos quienes poseen mayor capacidad preformativa⁶⁵. Resulta claro que la lengua quechua o

63 “El objetivo de una gran parte de los parlamentarios indígenas, cuando ingresamos al Parlamento hace un año, era la ‘refundación’ del Congreso Nacional. Pensábamos que íbamos a hacer mucho en temas de legislación, fiscalización, y asimismo en temas de gestión. Pero resulta que en el transcurso de un año, los parlamentarios indígenas casi no hemos tenido resultados, más bien nos sentimos utilizados” (Entrevista a Rosendo Copa de la comunidad *qaqachaka*, agosto de 2003).

64 “Algunos parlamentarios indígenas se sientan en las gradas en vez de hacerlo en las filas que corresponden a los diputados. Incluso, durante una interpelación, fuimos a rogarles que vinieran y no vinieron; mientras el MNR y el MIR ocupaban las primeras filas” (Jorge Alvarado, Ampliado de Evaluación).

65 “[Nuestros compañeros diputados originarios] sienten que si bien en un principio tenían un discurso, ese discurso no puede ser repetitivo, y daría la impresión que se les ha acabado el tema. Y eso es producto de que, tal vez, les está faltando un poco de capacitación. Sin querer pecar de cientista ni querer pecar de intelectual, la verdad y la realidad es que indudablemente, si bien el compañero originario tiene la experiencia de la vida, esa experiencia la tiene en su comunidad. Su mundo vidente no es más amplio más allá de su comunidad o de su área de acción. En cambio, una persona que ha llegado a la universidad, su mundo vidente es más amplio y tiene una base más sólida en cuanto a la interpretación de lo que puede estar sucediendo en el país. [...] Yo creo que quizás, aquellos que somos de la clase media y hemos tenido la suerte de llegar a la universidad, o hemos tenido la suerte de vivir en otros países, tenemos seguramente un mayor discurso, pero además de eso, estamos acostumbrados –por lo menos yo creo que eso debería ser una regla en un profesional– a leer, a estudiar. Cosa que no hay en los compañeros originarios, no hay esa cultura. Lo dije en el ampliado, que deberían leer por lo menos el periódico y de esa manera enterarse, leer periódicos de carácter nacional y periódicos de sus zonas, para de esa manera poder enterarse qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que está pasando en el mundo y qué problemas tienen en sus áreas. [Los diputados indígenas] participan tímidamente [en los grupos de discusión del bloque], porque no entienden algunos aspectos que son netamente técnicos, tal vez, ellos prefieren no participar. Entonces tenemos que ser, tal vez, un poco más complacientes con ellos, más accesibles, en un idioma más sencillo poder explicarles para que puedan acceder a esta información, y que también ellos se

aymara adquiere un mayor valor en el mercado rural –donde sin duda contribuye a la formación de capitales políticos– que en el medio urbano, y especialmente en el Parlamento. No es difícil percibir en la frase “¿Adónde está entrando, señora?”⁶⁶ ecos sutiles de viejas representaciones acerca de los indígenas y de su inclusión-exclusión en los diferentes espacios de la vida social, cuando los indios tenían prohibido circular libremente por las plazas y vías principales de las ciudades (Rivera Cusicanqui, 1983)⁶⁷. Por eso su presencia en los curules y la imposición de un sistema de traducción simultánea (que se utiliza ocasionalmente) crea un escenario de lucha simbólica entre las prácticas señoriales de las elites blanco-mestizas y la presencia indígena-plebeya como un *otro* (portador de alteridad) que ocupa un espacio ajeno.

RECAPITULANDO...

En las páginas precedentes abordamos un estudio de las características político-ideológicas y organizativas del MAS desde su fundación hasta 2003, y de su producción discursiva (en tanto práctica significativa), conscientes de las dificultades de analizar una experiencia de construcción política en pleno desarrollo; procuramos realizar un recorte analítico que nos permita visualizar las lógicas en juego, su dinámica y las condiciones de su emergencia como un factor de primer orden en el escenario político nacional. Su exiguo tejido burocrático-institucional, la “informalidad” de muchas de sus prácticas, la gelatinosidad de sus agrupamientos internos y su escasa (y generalmente repetitiva) producción escrita conllevó que basemos nuestras indagaciones en entrevistas personales a informantes

vayan formando, preparando, para que con esa base y la experiencia de la vida, de la vivencia que tienen ellos, puedan hacer sus participaciones dentro del Congreso. Este es un partido nuevo, es un partido donde tenemos gente de todos los niveles, y yo creo que en la medida en que vayamos amalgamando entre nosotros, vamos a lograr que haya una mejor participación de todos los parlamentarios” (Entrevista a Jorge Alvarado, agosto de 2003).

66 “Sin mesura y con un evidente tufillo racista, muchos de los funcionarios ‘de planta’ del Congreso bautizaron sin miramientos a los congresistas indígenas; los adjetivos más usados fueron: ‘la indiada’ y ‘los campeches’. En la puerta de ingreso, una diputada que vestía pollera fue examinada de punta a canto por los guardias de seguridad. ‘¿Adónde está entrando señora?’, cuestionaron inquisitivos (y en tono despectivo) los uniformados. Dicha escena no se repitió, sin embargo, cuando algunos individuos de traje y corbata cruzaron la puerta del Hemiciclo” (*Correo del Sur*, Sucre, 4 de agosto de 2002).

67 Cuando se discutía dónde alojar a los campesinos que acudirían al acto de firma de la Reforma Agraria (1953), el Comité Pro-Cochabamba se negó a admitir la presencia indígena en el ámbito urbano en los siguientes términos: “En un país democrático nada podemos oponer a tal concentración [de indígenas en la ciudad]. Sin embargo, se hacen notar los siguientes problemas: 1) El peligro que entrañaría alojar a esas personas en escuelas y colegios que podrían quedar contaminados por parásitos; 2) La zozobra que su presencia ocasionaría en los habitantes [urbanos] y principalmente en señoras y gente nerviosa; 3) Los resultados de una concentración tan grande para la atmósfera de la ciudad” (*Los Tiempos*, Cochabamba, citado en Gordillo, 2000: 161).

clave, revisión de prensa y observación directa de reuniones y congresos del MAS y de las organizaciones sindicales que lo componen.

Intentamos, a lo largo de nuestro trabajo, distanciarnos del “afán de novedades” que en ocasiones parece penetrar en el análisis político y social. No hay duda que la tesis del instrumento político supone un importante impulso renovador en una historia político-sindical campesina subordinada en gran medida al Estado nacionalista. La interpelación a “votar por nosotros mismos” plantea una forma novedosa de articulación entre las luchas sociales y electorales, luego de largos años en que obreros y campesinos votaban por diversas fracciones del MNR o planteaban el no juego en el terreno electoral; claramente *lo indio* se ha transformado en una importante fuente de capital político, posibilitando que de manera autónoma un campesino de origen aymara como Evo Morales se erija en jefe de la oposición y de la primera minoría parlamentaria. Por otro lado, las nuevas configuraciones sociales, producto de una década y media de reformas estructurales, han posibilitado la emergencia de nuevas formas de inter-unificación social, acción colectiva y producción discursiva.

Pero no es menos evidente que las nuevas tecnologías puestas en juego por los movimientos sociales tienen como condición material de posibilidad a las antiguas organizaciones sindicales corporativas, desde las cuales el movimiento campesino se enfrentó con la oligarquía y luchó por la tierra en los primeros años cincuenta, pactó con las fuerzas armadas restauradoras a mediados de los sesenta, impuso una nueva narrativa anticolonial y se articuló con el movimiento obrero en los setenta, y desafía hoy al trunco proyecto modernizador neoliberal⁶⁸. Además, como hemos intentado mostrar, existe un “entronque” entre el nuevo nacionalismo indígena y el viejo nacionalismo boliviano (incluido el nacionalismo militar).

Frente a las polarizadas visiones actuales acerca de cómo “cambiar el mundo”, el MAS-IPSP plantea sin fisuras la necesidad de transformar el poder conquistado por las organizaciones sociales en poder estatal. En un “devenir Estado” cuyas bases materiales pueden visualizarse en las funciones paraestatales que corrientemente los sindicatos campesinos –y las instituciones tradicionales (*ayllus*, etc.)– cumplen en las áreas rurales bolivianas desde los años cincuenta. A partir del nuevo ciclo de luchas iniciado en 2000 con la Guerra del Agua y los cercos indígenas a la sede del gobierno, la “lucha de clases” ha dejado de ser una lucha económica, de resistencia, y se ha convertido en una lucha

68 Estas lógicas corporativas, diferentes de las de la democracia representativa, se expresan, por ejemplo, en la necesidad de contar con autorización de las autoridades tradicionales o sindicales para hacer campaña en las comunidades del Altiplano o del Chapare. El MIP en la campaña de 2002 no entró en el Chapare “porque Evo no le dio permiso” (Espinoza, 2002).

política en la plena acepción de la palabra, en una lucha contra el poder y por el poder (Prada Alcoreza, 2002a).

Como toda lucha hegemónica, su resultado no está inscripto de antemano. Que los nuevos grupos sociales logren transformar a las instituciones, o que la lógica de las instituciones consiga diluir, a través de la cooptación, la identidad de los grupos subalternos, dependerá de la lucha misma (Laclau, 1996: 91-92). Es decir, de la capacidad de articulación, de la transformación del actual contra-discurso en propuesta alternativa de reorganización social y estatal a partir de la fuerza constituyente de los movimientos sociales. Y de la elaboración de una nueva *síntesis* de memoria y proyecto (Tapia, 2000: 7) capaz de combinar instituciones modernas y tradicionales, en una perspectiva multinacional y multicivilizatoria que evite que las elites herederas del poder colonial continúen ocupando ese “punto vacío de universalidad” del que hablábamos precedentemente.

Frente a la desidentificación nacional producto del neoliberalismo, el MAS emerge como un nuevo nacionalismo indígena-plebeyo, que resignifica a la lucha nacional como una lucha por la tierra y el territorio, y pone en un lugar destacado la defensa de los recursos naturales, cuya dinámica ha dominado los enfrentamientos sociales en Bolivia a partir de 2000, desde la Guerra del Agua hasta la Guerra del Gas. Es, al mismo tiempo, un intento de articular a una multitud de sujetos, organizaciones y movimientos sociales en la que ningún sector es portador de privilegios ontológicos en la construcción de las nuevas identidades, por lo que las mismas son resultado de las luchas hegemónicas y articuladoras en curso. El precipitado –y como mencionamos, inesperado⁶⁹– crecimiento del MAS ha erigido a dirigentes sindicales, ex dirigentes de la izquierda urbana y campesinos e indígenas “del llano” en portavoces privilegiados de lo popular y plebeyo al interior del aparato estatal, sin haber elaborado aún estructuras discursivas capaces de articular la “diversidad” que prima en la construcción del Instrumento Político, y alumbrar una nueva identidad.

En términos estrictos, el MAS no constituye una identidad, sino que agrupa numerosas identidades en su interior: auto-adscripciones indígenas u “originarias” (aymaras, quechuas y en menor medida guaraníes u otros grupos étnicos del oriente boliviano); laborales (transportistas,

69 “[Cuando asumimos] el 6 de agosto del año pasado [2002] cada uno de nosotros no conocía ni a diez personas [de los 35 que fueron elegidos diputados o senadores]. Prácticamente, éramos desconocidos” (Entrevista a Antonio Peredo, febrero de 2003). Los resultados electorales en Potosí son reveladores. Allí, el MAS presentó sólo un candidato a senador y obtuvo los votos para que ingresaran dos, por lo que tuvo que hacer una presentación para que el senador suplente fuera reconocido como segundo titular: “¿Y por qué no tenemos, pues, la lista completa?” –preguntó el senador electo por Cochabamba, Filemón Escóbar, al enterarse de los resultados. “Es que nadie quería” –le respondieron en su entorno (*Pulso*, La Paz, 2002, N° 153).

gremiales, etc., que se incorporaron al MAS); o campesinas (cuyos orígenes se remontan a las luchas contra el sistema de hacienda, y en favor de la reforma agraria)⁷⁰. Los propios actores políticos que dan vida al MAS-IPSP no utilizan habitualmente el denominativo *izquierda* para definir sus identidades (García Linera, 2003). Su agregación en un sujeto *popular* –pueblo sencillo y trabajador, e incluso empresarios nacionales o “patrióticos”– como bloque antagónico al orden establecido parece acercarse más a una interpelación de tipo populista que a las fórmulas interpelatorias tanto de las izquierdas tradicionales –sostenidas en la existencia de una clase “fundamental” cuya identidad se construye al nivel de la infraestructura económica– como de la *New Left* en países más institucionalizados.

No es la intención de este trabajo pronosticar futuros en sí mismos inciertos y sobredeterminados por la dinámica político-social. La propia historia boliviana está ahí para recordarnos las dificultades para dejar atrás sucesivos presentes de opresión neocolonial y encarnar un proyecto emancipatorio exitoso. Pero la misma historia nos habla también de una sociedad plebeya que –parafraseando a James Dunkerley– lleva la “rebelión en las venas”, y pese a las innumerables derrotas –con altos costos en vidas– parece renacer de sus cenizas e intentarlo nuevamente.

POSCRIPTUM

Con posterioridad a la escritura de este artículo se sucedieron una serie de hechos que transformaron profundamente el campo político boliviano. La Guerra del Gas de octubre de 2003 –que provocó la caída y huida del país de Gonzalo Sánchez de Lozada con un saldo de más de 60 muertos– alteró la relaciones de fuerzas políticas y sociales en beneficio del bloque indígena-popular⁷¹. El ciclo de protestas continuó con la crisis de mayo y junio de 2005, que potenció la demanda de nacionalización de los hidrocarburos en medio de las vacilaciones del nuevo presidente, Carlos Mesa, quien se negó a promulgar la Ley 3058, una versión moderada del reclamo social. Esta crisis estatal pavimentó el

70 En el Congreso Departamental del MAS de La Paz (17 de agosto de 2003) pudo observarse con nitidez que el momento de mayor “tensión” no fue el de la discusión ideológica –seguido con poca atención por los participantes– sino el de la elección de los cargos partidarios departamentales, donde cada grupo gremial postulaba a sus representantes.

71 La denominada Guerra del Gas comenzó en oposición a la venta de gas a México y Estados Unidos por puertos chilenos, país que, en la guerra del Pacífico (1879-1886) se apropió del litoral marítimo boliviano. Pero rápidamente incorporó la demanda de “recuperar” los recursos naturales en manos de las empresas transnacionales. La crisis puso en marcha una poderosa maquinaria bélica indígena-comunitaria –tanto en el campo como en centros urbanos como la ciudad de El Alto– que enfrentó a las Fuerzas Armadas estatales apelando al denso tejido organizativo del mundo popular boliviano. El 17 de octubre de 2003, tras haber perdido el apoyo de los sectores medios urbanos, Sánchez de Lozada renunció y huyó a Estados Unidos, donde vive en la actualidad.

camino para el triunfo electoral de Evo Morales el 18 de diciembre de 2005, clausurando la transición iniciada en 2003, y poniendo los cimientos de una nueva hegemonía indígena-popular. Está fuera de los límites de este artículo el análisis de esta nueva etapa, pero creemos que los elementos de análisis expuestos iluminan acerca de los orígenes de este proceso que ha proyectado a Bolivia en el escenario internacional como una de las experiencias más novedosas de cambio político y social.

BIBLIOGRAFÍA

- Aboy Carlés, Gerardo 2001 *Las fronteras de la democracia argentina. La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem* (Rosario: Homo Sapiens).
- Aboy Carlés, Gerardo 2003 “Repensando el populismo” en *Política y Gestión* (Buenos Aires) Vol. 4.
- Albó, Xavier 2002 *Pueblos indios en la política* (La Paz: Plural/CIPCA).
- Alenda Mary, Stéphanie 2002 “CONDEPA y UCS, ¿fin del populismo?” en *Opiniones y Análisis* (La Paz: Fundación Hanns Seidel-Fundemos) N° 57.
- Anderson, Perry 1999 “Neoliberalismo: un balance provisorio” en Sader, Emir y Gentili, Pablo (comps.) *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social* (Buenos Aires: CLACSO/EUDEBA).
- Ansart, Pierre 1983 *Ideología, conflictos y poder* (México DF: Premia).
- Antezana, Luis H. 1983 “Sistema y proceso ideológicos en Bolivia (1935-1979)” en Zavaleta, René (comp.) *Bolivia Hoy* (México DF: Siglo XXI).
- Argandoña, Álvaro 2002 “Coca, cocaleros y discursos en Bolivia”, Tesis de Maestría, Cochabamba, mimeo.
- Argandoña, Mario 2003 “Futurología de la coca”, La Paz, mimeo.
- Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) 1997 “Resoluciones del II Congreso Nacional Ordinario”. Biblioteca Chajra Runaj Masis, Cochabamba, mimeo.
- Baczko, Bronislaw 1999 (1984) *Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas* (Buenos Aires: Nueva Visión).
- Ballesteros, Ignacio; Illanes, Cecilia y Suaznabar, Mirtha 2001 “Organizaciones sindicales de productores de coca. Compleja lucha

- de reivindicación y estigmatización” en *Boletín Internacional Acción Andina* (Cochabamba) N° 1.
- Bigio, Isaac 2002 “Bolivia: 1952-2002 ¿Entre dos revoluciones?” en *Globalización. Revista mensual de Economía, sociedad y cultura*. En <<http://rcci.net/globalizacion/2002/fg264.htm>> julio.
- Böhrt Irahola, Carlos 2002 “Voto presidencial y voto uninominal en las elecciones de 2002” en *Opiniones y Análisis* (La Paz: Fundación Hanns Seidel-Fundemos) N° 58.
- Bourdieu, Pierre 2001 (1985) *¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos* (Madrid: Akal).
- Camacho Balderrama, Natalia 1999 “La marcha como táctica de concertación política (las marchas cocaleras de 1994 y 1995)” en Laserna, Roberto (coord.) *Empujando la concertación. Marchas campesinas, opinión pública y coca* (Cochabamba: CERES-PIEB).
- Chávez, Walter 2003 “Bolivia, una revolución social democrática” en *Le Monde diplomatique* (Buenos Aires) N° 53.
- Contreras Baspineiro, Alex 1994 *La marcha histórica* (Cochabamba: CEDIB).
- Escóbar Álvarez, Federico 2000 “Participación ciudadana en los bloqueos de abril” en *Conflictos* (Cochabamba: CERES) N° 6.
- Espinoza, Claudia 2002 “Evo y Felipe, las diferencias” en *Pulso* (La Paz) N° 151.
- Espinoza, Claudia; Guzmán, Gustavo y Vera, Christian 2002 “Discursos electorales prisioneros del 21060” en *Pulso* (La Paz) N° 151.
- Estellano, Washington 2002 “Bolivia: la agonía del modelo”, La Paz, mimeo.
- Foucault, Michel 1996 *Genealogía del racismo* (Buenos Aires: Altamira).
- García Argañarás, Fernando 1993 *Razón de estado y el empate histórico boliviano: 1952-1982* (Cochabamba: Los Amigos del Libro/Mala Yerba).
- García Argañarás, Fernando 2001 “Análisis de la coyuntura Boliviana alrededor de la problemática de la coca” en *Boletín Internacional Acción Andina* (Cochabamba) N° 1.
- García Linera, Álvaro 2001a *La condición obrera. Estructuras materiales y simbólicas del proletariado de la Minería Mediana (1950-1999)* (La Paz: Muela del Diablo/IDIS-UMSA).

- García Linera, Álvaro 2001b "Sindicato, multitud y comunidad. Movimientos sociales y formas de autonomía política en Bolivia" en *Tiempos de Rebelión* (La Paz: Muela del Diablo).
- García Linera, Álvaro 2002 "El ocaso de un ciclo estatal" en *Pulso* (La Paz). En <www.pulsobolivia.com> 19 de julio.
- García Linera, Álvaro 2003 "Radiografía de las nuevas izquierdas" en *Le Monde diplomatique* (La Paz) N° 10.
- Gordillo, José María 2000 *Campesinos revolucionarios en Bolivia. Identidades, territorio y sexualidad en el Valle Alto de Cochabamba, 1952-1964* (La Paz: PROMEC/Universidad de la Cordillera/Plural/CEP).
- Gutiérrez Aguilar, Raquel 2001a "Forma comunal y forma liberal de la política" en *Pluriverso. Teoría política boliviana* (La Paz: Muela del Diablo).
- Gutiérrez Aguilar, Raquel 2001b "La Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida. A un año de la Guerra del Agua" en *Tiempos de Rebelión* (La Paz: Muela del Diablo).
- Gutiérrez Aguilar, Raquel y García Linera, Álvaro 2002 "El ciclo estatal neoliberal y su crisis" en *Democratizaciones plebeyas* (La Paz: Muela del Diablo).
- Guzmán, Gustavo y Orduna, Víctor 2002a "¿Se acuerdan de un tal Evo?" en *Pulso* (La Paz) N° 132.
- Guzmán, Gustavo y Orduna, Víctor 2002b "Evo Morales y Felipe Quispe los votos inesperados" en *Pulso* (La Paz) N° 149.
- "Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos" 2003 (La Paz) 1 de marzo. En <<http://www.megalink.com/usemblapaz/CertificacionBoliviaEsp2003.htm>>.
- Laclau, Ernesto 1986 (1977) *Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo* (Madrid: Siglo XXI).
- Laclau, Ernesto 1996 *Emancipación y diferencia* (Buenos Aires: Ariel).
- Laclau, Ernesto 2003 (2000) "Identidad y hegemonía: el rol de la universalidad en la constitución de lógicas políticas" en Butler, Judith; Laclau, Ernesto y Žižek, Slavoj *Contingencia, hegemonía, universalidad* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).

- Lagos, María L. 1997 (1994) *Autonomía y poder. Dinámica de clase y cultura en Cochabamba* (La Paz: Plural).
- Lavaud, Jean Pierre y Lestage, Françoise 2002 “Contar a los indígenas: Bolivia, México, EE.UU.” en *Tinkazos* (La Paz) N° 13.
- Ley 1008* 1988 (La Paz: UPS).
- Malloy, James 1989 *La revolución inconclusa* (La Paz: CERES)
- Mayorga U., J. Antonio 1996 *Gonismo. Discurso y poder (1985-1989)* (Cochabamba: FACES-UMSS).
- Moulian, Tomás 1998 *Chile actual: anatomía de un mito* (Santiago de Chile: LOM/Universidad ARCIS).
- O’Phelan Godoy, Scarlett 1995 *La gran rebelión en Los Andes: de Túpac Amaru a Túpac Catari* (Cusco: PetroPerú/Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas-CBC).
- Oporto Ordóñez, Víctor 2002 *El triunfo de los vilipendiados* (La Paz: CITS).
- Orduna, Víctor 2002a “La enfermedad de la coca cero” en *Pulso* (La Paz) N° 129.
- Orduna, Víctor 2002b “Los tres meses y un día de Evo Morales” en *Pulso* (La Paz) N° 171.
- Orellana Aillón, Lorgio 2002 “El proceso insurreccional de abril. Estructuras materiales y superestructuras organizativas de los campesinos regantes en el Valle Central cochabambino”, mimeo.
- Patzi Paco, Félix 1999 *Insurgencia y sumisión. Movimientos indígena-campesinos (1983-1998)* (La Paz: Muela del Diablo).
- Pinto Parabá, Miguel 2003 “Los yerros de la rebelión del Altiplano”. En <<http://www.econoticiasbolivia.com>> 19 de octubre.
- Prada Alcoreza, Raúl 2001 “La fuerza del acontecimiento” en *Tiempos de Rebelión* (La Paz: Muela del Diablo).
- Prada Alcoreza, Raúl 2002a “Multiplicidades políticas”, mimeo.
- Prada Alcoreza, Raúl 2002b “Multitud y poder” en *Democratizaciones plebeyas* (La Paz: Muela del Diablo).
- Prada Alcoreza, Raúl 2003a “Genealogías”, mimeo.
- Prada Alcoreza, Raúl 2003b “La querrela del gas”, mimeo.
- Rancière, Jacques 1996 (1995) *El desacuerdo. Política y filosofía* (Buenos Aires: Nueva Visión).

- Reinaga, Fausto 1969 *La revolución india* (La Paz: PIB-Partido Indio Boliviano).
- Renan, Ernest 1987 *¿Qué es una nación? Cartas a Strauss* (Madrid: Alianza).
- Revilla Blanco, Marisa 1994 “El concepto de movimiento social: acción, identidad y sentido” en *Zona Abierta* (Madrid) N° 69.
- Rivera Cusicanqui, Silvia 1983 “Luchas campesinas contemporáneas en Bolivia: el movimiento ‘katarista’: 1970-1980” en Zavaleta, René (comp.) *Bolivia Hoy* (México DF: Siglo XXI).
- Rivera Cusicanqui, Silvia 1984 *Oprimidos pero no vencidos* (La Paz: HISBOL/CSUTCB).
- Rivera Cusicanqui, Silvia 2003 “El desarrollo sin coca empobrece a los campesinos” en *Temas en la Crisis* (La Paz) N° 63.
- Romero Ballivián, Salvador 2002 “La elección presidencial 2002: una visión de conjunto” en *Opiniones y Análisis* (La Paz: Fundación Hanns Seidel-Fundemos).
- Soto, César 1994 “Historia del Pacto Militar Campesino” (Cochabamba: CERES). En <<http://www.clacso.edu.ar/~libros/bolivia/ceres/soto.rtf>>.
- Spedding, Alison 1994 *Wachu Wachu. Cultivo de coca e identidad en los Yunkas de La Paz* (La Paz: HISBOL/COCAYAPU/CIPCA).
- Spedding, Alison 2002 “Batallas rituales y marchas de protesta: modos de apropiarse del espacio en el departamento de La Paz” en *Temas Sociales* (La Paz) N° 23.
- Spedding, Alison 2003 “El impulso al desarrollo rural puede basarse en la coca” en *Temas en la Crisis* (La Paz) N° 63.
- Tapia, Luis 2000 “La densidad de la síntesis” en *El retorno de la Bolivia plebeya* (La Paz: Muela del Diablo).
- Tapia, Luis 2002a *La condición multisocietal. Multiculturalidad, pluralismo y modernidad* (La Paz: Muela del Diablo).
- Tapia, Luis 2002b *La producción del conocimiento local. Historia y política en la obra de René Zavaleta* (La Paz: Muela del Diablo).
- Tapia, Luis 2002c “Movimientos sociales, movimiento societal y los no lugares de la política” en *Democratizaciones plebeyas* (La Paz: Muela del Diablo).
- Tarrow, Sydney 1997 (1994) *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política* (Madrid: Alianza).

- Toranzo Roca, Carlos 2002 “Bolivia: década y media de cambios políticos y económicos” en Bouzas, Roberto (comp.) *Realidades nacionales comparadas* (Buenos Aires: Fundación OSDE/Altamira).
- Valcárcel, Luis E. 1927 *Tempestad en los Andes* (Lima: La Sierra). En <<http://www.marxists.org/espanol/mariateg/tempes.htm>>
- Weber, Max 1998 (1922) *Economía y sociedad* (México DF: Fondo de Cultura Económica).
- Zavaleta, René 1983a “Forma clase y forma multitud en el proletariado minero en Bolivia” en Zavaleta, René (comp.) *Bolivia Hoy* (México DF: Siglo XXI).
- Zavaleta, René 1983b “Las masas en noviembre” en Zavaleta, René (comp.) *Bolivia Hoy* (México DF: Siglo XXI).
- Zavaleta, René 1986 *Lo nacional-popular en Bolivia* (México DF: Siglo XXI).
- Zavaleta, René 1987 (1974) *El poder dual* (Cochabamba: Los Amigos del Libro).
- Zegada, María Teresa 2002 “Dinámica Política en el Trópico: actores, conflictos y estrategias destructivas” en Argandoña, Álvaro y Ascarrunz, Carla (comps.) *Seminario Futuro del Trópico de Cochabamba. Escenarios para el Desarrollo Sostenible* (Cochabamba: UMSS/Centro de Estudios de Población).
- Žižek, Slavoj 1998 “Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional” en Jameson, Fredric y Žižek, Slavoj *Estudios Culturales: Reflexiones sobre el multiculturalismo* (Buenos Aires: Paidós).

Patricia Davolos*, Gabriel Fajn** y Ricardo Spaltenberg***

EPÍLOGO

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES A LA VUELTA DEL SIGLO: SISTEMA POLÍTICO, ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ORGANIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA

EN AÑOS RECIENTES se han producido en América Latina cambios de importancia en los escenarios políticos nacionales con relación al panorama imperante durante la década de los noventa. Fuerzas políticas que son referenciadas como progresistas al distanciarse de la ortodoxia neoliberal han comenzado a asumir los gobiernos de varios países de la región.

Previamente a la conformación de este escenario, la dinámica y las características de los conflictos que enfrentaron al neoliberalismo constituyeron una preocupación central en los debates. En efecto, en las últimas décadas llamó la atención de analistas y científicos sociales la constitución de novedosos movimientos y formas de lucha que se fueron sumando a las ya existentes. El dinamismo y la fortaleza alcanzados por estas luchas –surgidas desde el corazón de los sectores que se vieron fuertemente marginalizados por la aplicación del modelo neoliberal– llegaron en ocasiones a opacar a aquellas que en épocas pasadas fueron expresión de las distintas conflictividades nacionales. Este proceso dio lugar al surgimiento de nuevas identidades sociales.

* Socióloga, Universidad de Buenos Aires. Tutora metodológica CLACSO/Asdi.

** Sociólogo, Universidad de Buenos Aires. Tutor metodológico CLACSO/Asdi.

*** Sociólogo, Universidad de Buenos Aires. Tutor metodológico CLACSO/Asdi.

Pero una vez instalados estos gobiernos denominados de centroizquierda o progresistas, comienzan a surgir nuevos dilemas e interrogantes. ¿Cuál es la relación entre las luchas de los movimientos y el giro progresista que fueron adoptando las políticas de gobierno en cada caso? ¿Están consiguiendo los movimientos ubicar sus luchas en el centro de las instituciones para transformarlas? ¿Qué tipo de relación establecen con las fuerzas políticas en el gobierno: tienden los movimientos a participar del Estado para impulsar sus demandas o siguen confrontando, manteniendo su autonomía? ¿Cuál es la relación que puede establecerse entre las tradiciones de los movimientos sociales de más larga data y aquellos más recientes surgidos al calor de las luchas y resistencias al neoliberalismo?

El nuevo panorama político convoca entonces a ampliar los marcos del debate, complejizando la mirada y examinando hasta qué punto estos espacios nacionales son comparables, más allá de presentar un conjunto de alternativas políticas que se alejan de los enunciados neoliberales más ortodoxos.

Por tanto, luego de cierta homogeneidad inicial dada por este cambio en el clima de época, el objetivo de este artículo es proporcionar algunas claves de lectura recurriendo a la historia para interpretar el diferencial de novedad del presente y el grado de heterogeneidad que puede establecerse entre países. La primera parte del trabajo expone algunos conceptos teóricos y dimensiones que consideramos centrales en relación con los condicionantes estructurales e institucionales en el marco de los cuales tienen lugar los conflictos, las modalidades organizativas y las redes de interacción social que dan forma a la acción colectiva. A continuación se efectúa un recorrido sobre los cambios históricos más importantes que tuvieron lugar en la región de acuerdo a las dimensiones teóricas planteadas. Se puntualiza sobre aquellos aspectos que dan relativa homogeneidad a una etapa, pero a su vez se efectúa una comparación entre trayectorias nacionales dando cuenta de la persistencia de heterogeneidades entre las mismas. Sobre este telón de fondo, se esboza una breve ilustración de las fuerzas gobernantes en la actualidad en la región a partir de su matriz ideológica, buscando llamar la atención sobre la diversidad de situaciones en cuanto a la relación entre movimientos sociales y sistema político. Por último, se presentan algunas consideraciones en torno a dimensiones ligadas a las formas de organización de los movimientos sociales.

ESTRUCTURAS SOCIALES Y REGÍMENES DE ACUMULACIÓN

La entrada por el sistema político es una manera de tematizar las relaciones entre Estado y sociedad civil, e identificar ciertas redes de relaciones sociales específicas desde las cuales interpretar los conflictos y los mo-

vimientos sociales. Otra dimensión de indagación o puerta de entrada fundamental está referida al ámbito de relaciones que dan cuenta de los conflictos vinculados a los procesos de reestructuración capitalista en una etapa histórica. Realizamos a continuación algunas consideraciones acerca del tipo de lectura teórica que nos parece fructífera en este ámbito.

Según Nun (1987), las transformaciones operadas en los procesos de acumulación de capital siempre son acompañadas por la conformación de una compleja red institucional, con prácticas e imágenes legitimadoras específicas, que van constituyendo un contexto social relativamente estable y predecible para favorecer este proceso. Una de las cuestiones básicas es la regulación de las relaciones entre capital y trabajo, por una parte, y entre las distintas fracciones de capital, por otra. Al entorno institucional específico dentro del cual se organizan las decisiones de inversión económicas, este autor lo denomina *régimen social de acumulación*, de tal modo que la sucesión histórica de diferentes regímenes define etapas sucesivas del desarrollo capitalista¹. Así como existe un régimen social de acumulación en el que se enfrentan y articulan diversas estrategias de acumulación, existe un *régimen político de gobierno* (ver Nun, 1987). En este espacio se enfrentan los actores con sus proyectos políticos en el marco de ciertos patrones de institucionalización partidaria y de representación política.

Este tipo de lectura del orden social retoma el análisis crítico que hace Polanyi del mercado autorregulado (o de la autonomización de la esfera de la economía), proponiendo un descentramiento a partir del cual el contexto político institucional y la ideología son constitutivos de la economía.

Consideramos que esta entrada conceptual permite vincular los enfoques que se centran sobre las características de un sistema y sus tendencias estructurales con aquellos que ponen el foco sobre los actores con sus estrategias y conflictos. La fase de consolidación de un régimen está implicando que un modo de institucionalización se vuelve sentido común y, por tanto, la forma dominante de acumular funciona como un “paradigma cultural” (Gouldner, 1978) en el sentido de que estas formas no son ya la expresión del interés de un grupo sino que funcionan como

1 Tanto para este autor como para las corrientes teóricas que tienen estrecha vinculación con estas definiciones, se entiende por *institución* un modo regular de hacer las cosas, una norma de las relaciones y las interacciones sociales. La escuela de Gordon et. al. (1986) denomina a las mismas *estructura social de acumulación*, mientras que la escuela de la regulación las denomina *modo de regulación*. Pero, para esta última, todo modo de regulación va asociado a un *régimen de acumulación* que intenta medir las diferencias cualitativas de los procesos de acumulación que se vuelven dominantes en las distintas etapas del capitalismo. Este último concepto no tiene contrapartida en la escuela de las *estructuras sociales de acumulación*. Para la escuela de la regulación, el par régimen de acumulación-modo de regulación conforma un *modo de desarrollo*.

visiones del mundo más o menos compartidas². Una vez verificada cierta estabilidad dinámica, las formas que va tomando la acumulación terminan por ser interiorizadas de forma intuitiva –aunque siempre de manera imperfecta– por los diferentes grupos sociales. La institución regresa así sobre las rivalidades sociales y las normaliza, borrando en su resultado las conflictividades que le dieron origen. Este proceso de naturalización es lo que las hace eficaces, al quitarles su historicidad como productos de la acción de los hombres. De esta manera, una forma de dominación hace posible una determinada forma de explotación, estructurándose diferentes etapas dentro de la acumulación capitalista.

La teoría social juega un indispensable rol en proveernos un “mapa” de nuestro contexto social. Si bien hay complejas mediaciones entre la teoría y el sentido común, esta juega un rol crítico en las percepciones populares de la realidad. La teoría aporta herramientas culturales para la interpretación de la vida social y, por tanto, tiene influencia en la lucha entre diferentes grupos de intereses por moldear las instituciones. A su vez, el resultado de estas luchas es él mismo influenciado en su interpretación.

Pero toda forma de institucionalización y principio de socialización siempre es parcial y contiene áreas de conflicto manifiesto e incertidumbre. Es decir que no todos los conflictos son normalizables, y ciertos sectores sociales quedan marginalizados de los acuerdos y negociaciones. Las demandas de estos sectores quedan insatisfechas, reservándose para los mismos el posible uso de la coerción. Sin embargo, en determinados momentos la difusión y magnitud de los conflictos puede jaquear la estabilidad del sistema, produciendo la crisis o desinstitucionalización de un régimen y la entrada a una nueva fase.

En los debates de las ciencias sociales, el mapa de la conflictividad en las sociedades capitalistas tiene su fundamento teórico desde la tradición marxista en la noción de contradicción y antagonismo en los intereses materiales, dado por las relaciones de explotación. Este constituye el terreno a partir del cual puede manifestarse como conflicto colectivamente organizado, o las fuerzas institucionales pueden mantener este antagonismo inhibido. Para la tradición weberiana, el supuesto es que las posiciones de clase representan sólo una de las bases posibles de la acción comunitaria. Existen otras bases sociales de la desigualdad (con igual jerarquía teórica) como por ejemplo la etnia, la religión o el

2 Según Gouldner, si bien las ideologías se nutren de los diferentes paradigmas culturales que sustentan diversos grupos sociales con experiencias compartidas, con el tiempo el paradigma ya no es más reconocido como la base de la ideología, se produce una *inversión*. “El paradigma es ahora considerado como un derivado de la ideología y como un *ejemplo* permisible o una inferencia lógica de la ideología y, *como tal*, ya no es expresión de un interés partidista, sino de un interés público general” (Gouldner, 1978: 278).

género, generadoras de intereses que pueden llevar a sostener actitudes similares y ser la base de acciones colectivas.

A continuación efectuamos un repaso de los procesos de acumulación desde comienzos de la industrialización en América Latina hasta la actualidad. El interés se centra en poner en relación las características centrales de estos procesos con el tipo de conflictos y movimientos sociales que resultaron dominantes en las diversas etapas.

Previamente a la consolidación del modelo neoliberal, el desarrollo capitalista latinoamericano estaba ya largamente signado por la heterogeneidad estructural, que agregaba complejidad a los excedentes de mano de obra y a los efectos que producía sobre el funcionamiento del sistema (Quijano, 2000; Cardoso, 1970; Nun et al., 1968). Esta “inadecuación” respecto al modelo de desarrollo clásico del capitalismo dio lugar a divisiones y segmentaciones de los mercados laborales, con altas tasas comparativas de desempleo, subempleo e informalidad. Inadecuación que tuvo importantes variaciones entre los casos nacionales: en algunos se constituye un mercado de trabajo formalmente más integrado en términos relativos y en otros esta integración es más débil, coexistiendo con una amplia periferia de formas no capitalistas de producción.

El paso del tiempo fue refutando la idea de que la población supernumeraria que iba quedando “al costado” del proceso de modernización era un problema transicional que se superaría con la intervención del Estado y el crecimiento económico. Sin embargo se advierten importantes diferencias respecto de las características con las que surgió la conocida discusión sobre la marginalidad propia de la fase monopolista de la acumulación de capital en América Latina³. Durante esa etapa las controversias en América Latina se centraron en dos cuestiones. Por un lado, discutir las tesis del aburguesamiento de los sectores obreros insertos en las empresas transnacionales con mejores salarios relativos y condiciones de trabajo. Por el otro, analizar las características de los sectores más excluidos o marginados del proceso de industrialización y su potencialidad y rol en los procesos de cambio social.

Desde mediados de los años sesenta comienza un período de intensificación de la conflictividad social, proveniente fundamentalmente (aunque no de manera exclusiva) de los sectores trabajadores organizados insertos en los polos más dinámicos de la economía. La dificultad de resolución de estos conflictos dentro de la institucionalidad vigente comienza a jaquear la estabilidad del régimen de acumulación de sustitución de importaciones.

3 Una recopilación nodal de esta polémica figura en Nun (2001).

Más allá de las crisis cíclicas que engendraba el propio modelo y de los objetivos declamados de combatir la inflación y la ineficiencia de la industria, los cambios que se comienzan a implementar tienen el objetivo político de poner en marcha un nuevo proyecto de dominación. Las medidas económicas que se van a ir implementando a lo largo de los años ochenta, cuya ejecución se profundiza en los noventa, producen cambios estructurales de tal magnitud que van a dificultar considerablemente la reedición de determinadas formas de organización y alianzas desde los sectores populares, y el “peligro” de su radicalización. Paralelamente a procesos represivos y de disciplinamiento social, se transformaba el esquema político institucional mutando las bases estructurales que le habían dado sustento.

En una nueva fase del capitalismo cambia el carácter de la discusión y la propia configuración del problema. Durante la hegemonía del modelo neoliberal, más allá de las diferencias entre los distintos países latinoamericanos, se producen modificaciones importantes en sus estructuras ocupacionales y se arrasa con los derechos sociales conseguidos en etapas previas. El nuevo modelo supone una redefinición del tipo de relaciones salariales que durante el período de sustitución de importaciones tuvieron al empleo formal como paradigma. Se disparan las tasas de desempleo, reduciéndose significativamente la proporción de ocupaciones protegidas y estables, que corresponden a su vez a los trabajadores más sindicalizados en el pasado. Esta situación –ampliamente documentada en la bibliografía sobre el tema– guarda una estrecha relación con los grados diversos de debilitamiento de los actores sindicales, centrales en la conflictividad de la etapa previa.

En este período, las inserciones atípicas, que venían siendo fuertemente asociadas al sector informal, también se extendieron al sector formal de la economía. Cobra así fuerza la noción de precariedad laboral. En forma genérica, la misma hace referencia a formas de contratación que permiten al capital reclutar o deshacerse de esta fuerza de trabajo con facilidad. Estos trabajadores se caracterizan por un vínculo asalariado lábil y, por tanto, sufren altos grados de intermitencia y rotación en la actividad laboral.

Los cambios comentados implicaron un cambio en la morfología de las clases sociales y procesos de empobrecimiento de sectores cada vez más amplios de la población. Sobre este horizonte, las disparidades de ingresos y de formas de contratación entre trabajadores se tradujeron en disparidades en el acceso a los servicios sociales, siendo el resultado general un permanente aumento de las desigualdades sociales. El Estado neoliberal definirá cada vez más su intervención a través de una batería de políticas sociales focalizadas hacia los sectores más vulnerabilizados y marginalizados. Las características y amplitud que fueron cobrando estos programas van a estar vinculadas a contener la conflictividad social.

Resurge de esta manera el tema alrededor de los excedentes de la fuerza de trabajo, los cuales se fueron transformando en permanentes, tendiendo a consolidar una masa marginal de dimensiones mayores con relación a períodos previos. Esta situación conllevó el debate acerca de la constitución de nuevos cortes en las clases populares, pero asociados no sólo a variables estructurales, sino también culturales y territoriales.

Las transformaciones operadas fueron abriendo nuevos interrogantes, ya no en torno al nivel de la dinámica de la acumulación y la estructura social en su conjunto, sino con relación al comportamiento colectivo de determinadas fracciones sociales, y en particular respecto de la erosión de la solidaridad horizontal entre los trabajadores, característica de la etapa previa. Es decir, interrogantes acerca de la correspondencia entre las transformaciones de este entramado y la estructuración de identidades, oposiciones, conflictos y desarrollo de redes organizativas de las clases y sectores populares.

Si bien de inspiración similar, el ajuste estructural y las políticas implementadas en cada caso llevaron a los gobiernos a enfrentar desafíos particulares, que traducían valores colectivos con mayor o menor raigambre en cada país. A medida que fue avanzando la década del noventa en América Latina, la capacidad de reabsorción de los conflictos fue menor, a la vez que los movimientos sociales y las resistencias cobraban mayor vigor. Algunas resistencias y conflictividades tuvieron una base más económica (o de grupo de interés que ve afectada su inserción económica); otras se situaron más en el plano cultural identitario, en directa vinculación con tradiciones que se ven amenazadas; otras, en cambio, se ubicaron decididamente en la lucha por un proyecto alternativo de equidad y justicia social para el conjunto social (Touraine, 1969).

ALGUNAS TRAYECTORIAS PARTICULARES

Sin pretender exhaustividad, es interesante detenerse en algunos casos para tener presente la heterogeneidad de las trayectorias nacionales. Por ejemplo, no todos los países han sufrido una estampida de la tasa de desocupación como fue el caso de Argentina, donde el asalariado formal industrial era una experiencia de socialización relativamente generalizada. Los derechos y la protección social construidos alrededor del trabajo asalariado constituían una situación dominante (aunque no exclusiva), ya que tendía a extenderse a la mayoría de la población. Los conflictos más dinámicos durante la etapa neoliberal en Argentina (piqueteros, fábricas recuperadas) estuvieron vinculados a las luchas de aquellos sectores de la población que habían estado integrados (o tenían memoria por generaciones próximas) a un mercado de trabajo formal frente al derrumbe generalizado de las protecciones que imponen las

altas tasas de desempleo. Se fueron desarrollando organizaciones sociales –con grandes diferencias en sus formas de construcción social y política– que por fuera de la relación salarial tradicional reclamaban medidas de política social y laboral sin recurrir a la intermediación de los sindicatos. El actual cambio en la coyuntura económica (crecimiento sostenido del PBI y del empleo luego de la más larga recesión registrada) vuelve a instalar en el centro de la escena a los conflictos sindicales, a través de los que tradicionalmente se manifestó la conflictividad social en Argentina, opacando –y hasta desarticulando en algunos casos– la dinámica que habían adquirido las nuevas formas de expresión del conflicto durante la hegemonía del neoliberalismo.

En el otro extremo, por así decirlo, encontramos sociedades históricamente aún más heterogéneas, con un fuerte peso de las economías campesinas y de población indígena, que contaban además con un número mayor de marginales urbanos –producto de la forma que fueron cobrando en esos espacios los procesos de urbanización e industrialización–, todo lo cual fue constituyendo sociedades con mercados y redes informales más extendidos. Ejemplos de ello son los países andinos y México, donde tuvieron gran importancia el movimiento campesino y la población indígena en la conflictividad y movilización social que encabezaron la resistencia política al proyecto neoliberal (Movimiento Zapatista, Cocaleros del Chapare, movimiento indígena ecuatoriano). A las antiguas marginalidades estructurales, se enlazan elementos culturales y étnicos ligados a los derechos de las nacionalidades indígenas y a su relación con la tierra y los recursos naturales.

Sin embargo, entre ellos también existen diferencias de importancia, como por ejemplo la influencia que tuvo el sindicalismo revolucionario de los mineros en las organizaciones campesinas que se desarrollaron en los últimos años en Bolivia. Esto marca una diferencia respecto de la trayectoria de los movimientos indígenas en Ecuador, cuya constitución identitaria está anclada con mayor fuerza en caracteres étnicos y culturales (Quijano, 2005).

Otro caso interesante a tomar en consideración es Brasil, que ha mantenido un proceso de industrialización dinámico, aunque paralelo a altos niveles de población excedentaria respecto de ese núcleo de desarrollo. En esta dirección se distancia de Argentina, donde el proceso de industrialización se inicia con altos niveles de incorporación de los sectores populares, hasta que a mediados de los años setenta comienza un proceso de desindustrialización de larga duración. En relación al proceso de industrialización al que hacíamos referencia, en Brasil, hasta fines de los años ochenta, tiene una creciente dinámica el nuevo sindicalismo (de inspiración clasista), si bien en los noventa se evidencia un proceso de mayor desmovilización al calor de procesos recesivos,

crecimiento del desempleo y flexibilización laboral. Sin embargo, habría que señalar que este caso a su vez se distancia de los procesos de fuerte crisis de representación que durante el período sufren los movimientos sindicales de algunos países de la región⁴, en los que aquellos tenían una larga tradición en la expresión de la conflictividad social. Paralelamente crecen en este país, con el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, las luchas sociales de los trabajadores rurales contra la estructura latifundista, luchas que promueven fuertes articulaciones con los trabajadores de origen urbano, pero desplazados de la ciudad.

El éxito que ha tenido el neoliberalismo como proyecto político ha entrado en una nueva fase. Luego de una prolongada hegemonía, las políticas y las ideas que constituyeron su sustento se encuentran en forma generalizada a la defensiva. Sin embargo, los espacios nacionales están evidenciando formas diversas de continuidad y/o ruptura con el pasado que constatan articulaciones diferenciales entre los cambios que están sucediendo en los regímenes políticos de gobierno y aquellos cambios que se registran en los regímenes sociales de acumulación. Como muestra de ello, en el marco de procesos y sociedades más globalizadas, vemos consolidarse consensos y articulaciones regionales e internacionales que dan cuenta de estos cambios de orientación, a la vez que evidencian intereses y posiciones diferenciadas.

MOVIMIENTOS SOCIALES Y SISTEMAS POLÍTICOS

El breve recorrido efectuado hasta aquí tiene el interés de captar el “diferencial de novedad” de cada fase y cada caso. Una lectura en perspectiva histórica de procesos estructurales y tradiciones organizativas asociadas de larga duración hace posible comprender el presente como portador de una herencia que pone su impronta en el horizonte de alternativas políticas futuras.

Comenzaremos examinando la situación de países en los que han accedido al poder fuerzas políticas que se distancian de la doctrina neoliberal a partir de orientaciones ligadas –según los casos– a tradiciones de izquierda, socialistas, nacional populares; luego examinaremos la situación en países donde se mantienen gobiernos más conservadores, que establecen fuertes continuidades con el pasado.

Brasil y Bolivia son dos países de la región con movimientos sociales populares que han dado muestras de fortaleza y perdurabilidad. Su parecido se basa en la consolidación de organizaciones sociales con cobertura nacional, constituyéndose en experiencias en las que llegan

⁴ Ver las definiciones de *cooptación subordinada* en Zapata (2004) y de *sindicalismo empresario* en Murillo (1997).

al poder fuerzas políticas vinculadas estrechamente a movimientos sociales preexistentes.

Pero rápidamente encontramos diferencias por demás significativas. En Brasil estamos en presencia de un sistema político relativamente estable desde hace más de dos décadas, donde la fuerza política que accede al gobierno forma ya parte del elenco estable del mismo. A la vez, el abandono de ciertos compromisos iniciales más radicales de transformación, junto con el privilegio otorgado a la continuidad en la aplicación de políticas de mercado, comenzó a trazar puntos de conflicto con las distintas organizaciones sociales que constituyeron por largo tiempo la base social del partido ahora en el gobierno. Esto fue particularmente notorio en relación con el movimiento social más importante y dinámico de Brasil, el Movimiento de Trabajadores sin Tierra, que entró de este modo en un proceso de reafirmación de su autonomía.

En Bolivia, en el marco de una profunda crisis política, accede al gobierno una fuerza de reciente conformación pero de emergencia anterior a la crisis. Lo que hoy constituye el Movimiento al Socialismo (MAS) se conformó primero como movimiento gremial y luego como organización política. La militancia de origen del MAS, compuesta por campesinos medios cocaleros de comunidades agrarias de más reciente formación (García Linera, 2006), ha logrado expandir alianzas con otros movimientos sociales, superando la fragmentación política existente en el pasado en los sectores populares. Sobre esta alianza de movimientos como base social y apelando a la tradición nacional popular, el actual gobierno avanza en la generación de cambios en lo que respecta a políticas que produzcan mayor inclusión social y económica. Pero también avanza sobre transformaciones en las reglas constitutivas de gobierno a partir de nuevas bases de soberanía en torno al reconocimiento de la diversidad cultural, regional y étnica.

Pasemos ahora a considerar la situación de los países gobernados por fuerzas con orientaciones antineoliberales, o identificadas en sus orígenes con tradiciones de izquierda, pero vinculadas a movimientos sociales cuya expresión, fortaleza y grados de autonomía son considerablemente más débiles que en los casos anteriores.

Esta podría ser, por ejemplo, la situación de Uruguay, Chile y Venezuela. Pero nuevamente la trayectoria de sus sistemas políticos y de la matriz ideológica de las fuerzas políticas en el poder marca fuertes diferencias. En Uruguay nos encontramos con un sistema político estable y fuertemente institucionalizado, donde la fuerza política gobernante está largamente integrada al sistema y a las reglas de la democracia liberal. Chile, al igual que Uruguay, presenta una relativa debilidad de los movimientos sociales y un sistema político estable. En ambos casos se advierte una tensión impuesta por las restricciones heredadas de la

etapa previa, sobre todo en lo que respecta al modelo económico. En el caso chileno la continuidad de la coalición gobernante muestra una aún menos clara vocación de romper con, o comenzar a poner en cuestión, las orientaciones neoliberales.

En Venezuela, por el contrario, en el marco de una prolongada crisis del sistema político y la directa desarticulación de los partidos políticos tradicionales, emerge una nueva fuerza que va a materializar un profundo enfrentamiento entre dos bloques sociales. Aunque todavía es discutible si en este caso el conjunto de políticas implementadas llega a constituir un modelo de desarrollo alternativo al neoliberalismo, se han implementado cambios importantes a partir de una matriz que se suele definir como populista en tanto coexisten tendencias a la ruptura y a la integración con el sistema y un estilo de hacer política que marca distancias con el pluralismo liberal⁵. La base social de estas transformaciones –además del peso del liderazgo personal de Chávez– se centra en los sectores históricamente más excluidos y menos organizados de la población. En el contexto de intensas resistencias, estos sectores han comenzado a generar formas organizativas y canales de participación propios en el marco de políticas sociales e institucionales que les otorgan protagonismo. Dado que la consolidación de estos mecanismos de control y participación popular es endeble, constituyen todavía un desafío. La debilidad de las organizaciones sociales frente al peso de las políticas y el poder del Estado otorga mayor grado de autonomía a la fuerza gobernante.

Otras situaciones a considerar, en cuanto a la conjugación de la situación del sistema político, la orientación de las fuerzas políticas gobernantes, las características de los movimientos sociales y su vinculación con las fuerzas precedentes, son los casos de Argentina y México. Estos últimos presentan, aunque por distintas razones, características intermedias.

La Argentina, luego de atravesar una fuerte crisis política, social y económica, junto con una masiva irrupción de movimientos sociales de vieja tradición y de nuevo cuño, produce una salida de la crisis con efectos desconcertantes para cualquier análisis lineal. Del mismo partido que llevó adelante la reforma neoliberal de la década del noventa –una de las más radicales, con mayores consecuencias estructurales y respon-

5 En términos amplios, el populismo provee un contexto para la persecución de ciertos intereses de clase y puede ser visto como un tipo de formación de clase que forja lazos solidarios entre la clase trabajadora y ciertas otras posiciones de clase (pequeña burguesía, pequeños propietarios rurales, etc.). Pero el término “populismo” ha sido permanentemente escenario de disputas teóricas en base a múltiples criterios de definición –ver en Aboy Carlés (2001) el interesante recorrido que efectúa el autor respecto a este debate. De esta manera, diversas aproximaciones advierten que el mismo constituye una tensión entre ruptura e integración. Otras aproximaciones, por ejemplo, ponen el énfasis en lo institucional, dado que el estilo de hacer política establece contrastes con la democracia liberal pluralista.

sabilidad en la crisis posterior— surge un gobierno que —a partir de una mayor intervención reguladora del Estado— tiende a asumir posiciones contrarias a las neoliberales. A partir de una rápida rearticulación del peronismo tras la crisis, la fuerza gobernante adopta ahora un carácter progresista (a partir de un nuevo marco de alianzas) que comienza a expresarse más claramente con posterioridad a su asunción, lo que le va a ir otorgando márgenes más elevados de legitimidad luego de la debilidad de origen con la que emerge de las urnas. La paradoja que implica esta creciente capacidad de poder se conjuga con un acelerado opacamiento de los movimientos sociales y sus expresiones organizativas. Los mismos pasan de un inusitado dinamismo en el período previo a ser desarticulados o cooptados por la fuerza gobernante, o van perdiendo capacidad de acción frente a las políticas públicas que comienzan a revertir largos años de recesión y constantes aumentos del desempleo abierto.

En México, en cambio, nos encontramos con un sistema político inmerso en una transición controlada, que sale de un régimen de partido hegemónico a partir del triunfo de los sectores más conservadores. Por otra parte, si bien México fue escenario en la década del noventa de la irrupción del zapatismo, uno de los movimientos más innovadores de la época, su fortaleza sigue estando limitada por la dificultad de una proyección y organización a nivel nacional. A ello se suma una débil vinculación con el partido político que expresa las posiciones más progresistas.

Para finalizar este breve mapeo, es interesante tomar en consideración las situaciones de Perú y Ecuador. En ambos casos también hay o hubo hasta hace poco fuerzas políticas de corte conservador en el gobierno, pero nos encontramos aquí con casos de sistemas políticos en crisis, de gran inestabilidad o escasa tradición partidaria. Desde estos rasgos compartidos puede pensarse en las consecuencias que, en contraste con la situación de mayor debilidad organizativa que existe en Perú, tiene la presencia de un movimiento indígena potente para la trayectoria del caso ecuatoriano. En efecto, si durante la etapa de reformas neoliberales la ausencia de una base social de sustentación duradera redundó en grandes dificultades para implementar el proyecto de reestructuración capitalista desde los sectores dominantes, desde el movimiento indígena la ausencia de expresiones políticas propias llevó a brindar su apoyo a sucesivas alternativas electorales que concluyeron en repetidos fracasos. Tales elementos permiten comprender la emergencia de un gobierno como el actual que, abierto a los reclamos de los movimientos, obtiene a cambio una base de sustentación para su desempeño.

Es probable que en aquellos países con regímenes políticos más consolidados, los partidos o coaliciones gobernantes tengan menos margen para introducir cambios abruptos o más radicales. Por el contrario, allí donde se atravesó una fuerte crisis política (Bolivia, Venezuela,

Argentina), el margen de maniobra aparece acrecentado. Finalmente, allí donde gobiernan fuerzas conservadoras, subsisten situaciones de crisis política y las expresiones populares están más débilmente organizadas (como es el caso de Perú), la trayectoria de los conflictos es menos predecible o estructurada.

En este punto hemos intentado exponer brevemente, de una manera “impresionista”, el cuadro de la heterogeneidad de situaciones con que nos encontramos, tomando por referencia tan sólo algunos rasgos vinculados al sistema político y los movimientos sociales. Resulta claro que, para iluminar la especificidad de los procesos involucrados en cada situación, es necesaria una tematización más profunda en términos de las características que asumen los regímenes políticos de gobierno en cada caso. Debería determinarse con mayor claridad aún el nivel de estabilidad que alcanzaron las instituciones y prácticas políticas; su composición específica; si predomina en su trayectoria una lógica inclusiva, de consenso, o bien una coercitiva, excluyente; así como las características de los actores y proyectos políticos que se enfrentan en su interior.

ACCIÓN COLECTIVA Y MODALIDADES DE ORGANIZACIÓN

Los efectos del neoliberalismo nos hacen volver a reflexionar sobre otro problema clásico de las ciencias sociales: la relación entre integración y conflicto. O entre las estrategias y redes de supervivencia frente a los procesos de desintegración social y la emergencia de nuevas formas de organización y acción colectiva en la reivindicación de derechos.

La inscripción territorial –por tanto– adquiere una especial preponderancia, como forma novedosa, en aquellas sociedades que en el pasado se caracterizaban por una mayor integración de sus clases populares al mercado de trabajo formal, por lo que sus intereses se canalizaban a partir de formas de organización ligadas a lo laboral. La desarticulación de los vínculos estructurados alrededor del mundo laboral hace que el “territorio” adquiera una preponderancia significativa como campo de recomposición de solidaridades, y en el reagrupamiento de luchas y resistencias. De esta forma, el surgimiento de nuevos movimientos está vinculado a la fragmentación y recomposición de la clase obrera y de los sectores subalternos, que articulan las determinaciones económicas con sus intereses particulares y rasgos específicos. En Argentina, por ejemplo, el Movimiento de Trabajadores Desocupados y el Movimiento de Empresas Recuperadas refieren a fragmentos y desarticulaciones del viejo movimiento obrero organizado. Particularmente, el Movimiento de Trabajadores Desocupados grafica claramente el cruce de la acción colectiva y la inscripción territorial.

En sociedades con proporciones relativamente más altas de marginalidad urbana y rural de más larga data, las redes ligadas al territorio tenían mayor tradición.

El espacio territorial se fue constituyendo en espacio de disputas entre formas típicamente clientelares de negociación con las instituciones estatales y las redes locales de los partidos tradicionales, por una lado, y nuevas organizaciones sociales que intentaron poner en práctica formas más autónomas y horizontales de ejercicio democrático, por otro.

Finalmente, en el marco del crecimiento de la pobreza, las desigualdades sociales y la exclusión, también otras estrategias y redes de adaptación más cercanas a la criminalidad han coexistido y crecido en las últimas décadas.

Además de la dimensión territorial, la discusión alrededor de la autonomía y la autogestión resultan ejes centrales que hacen a las modalidades organizativas y de construcción de los movimientos sociales, cuyos antecedentes históricos es interesante repasar.

UN POCO DE HISTORIA

Entre los teóricos revolucionarios y de la izquierda más moderada se destacan tres vertientes que ponen de relieve aspectos sensibles de las modalidades organizativas, en correspondencia con los objetivos y estrategias de las luchas políticas y sociales.

UTOPISTAS Y COOPERATIVISTAS

La forma cooperativa aparece como una estructura básica reactualizada y puesta en funcionamiento por los más diversos movimientos. Las cooperativas suelen ser la modalidad organizativa que eligen los distintos actores emergentes para poner en marcha emprendimientos productivos propios. Tanto los zapatistas como el MST en Brasil desarrollaron organizaciones cooperativas. El chavismo en Venezuela impulsa miles de cooperativas al calor del Estado, y las fábricas recuperadas en Argentina, Uruguay y Brasil reúnen un conglomerado de cooperativas de trabajo. El formato organizativo de la cooperativa puede ser vaciado y utilizado sólo como recurso jurídico para lograr beneficios de exención impositiva o, por el contrario, puede constituirse como una herramienta que potencie la acción colectiva. Tal vez debamos hablar de un “nuevo cooperativismo” que no proviene del movimiento cooperativo histórico –fuertemente institucionalizado– sino que está atravesado por la lucha de los movimientos sociales emergentes, que lo impregnan de la dinámica y los intereses de la conflictividad específica.

Una referencia histórica un tanto olvidada en los debates en torno a la autogestión es la de los pensadores utopistas y las experiencias que –con mayor o menor suerte– resultaron en reordenamientos organizacionales fundados en principios y prácticas colectivas, democráticas y autonomistas.

Más de un centenar de comunidades socialistas o asociacionistas se establecieron en el siglo XIX en Estados Unidos. El mismo Owen se dirigió a EE.UU. y lideró la Colonia de New Harmony que, al igual que el falansterio de Oneida, avanzó en breve tiempo en innovaciones fundamentales en las diferentes esferas sociales. Esto se manifiesta en los avances laborales (la rotación de tareas, la polivalencia de las funciones); la mayor libertad de la sexualidad y la constitución de formas complejas familiares; la educación; las innovaciones científicas y técnicas; y el desarrollo artístico de los miembros de las comunidades.

Muchas de estas experiencias tuvieron una duración breve, y casi ninguna ha sobrevivido al paso del tiempo. Discípulos y seguidores de Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Owen y otros pensadores utopistas edificaron en América Latina durante el siglo XIX comunidades utopistas de distinto signo. Brasil, México, Perú, Paraguay y Argentina, entre otros países, contaron con experiencias de este tipo.

Las influencias de estos pensadores utopistas, y las experiencias tempranas que suscitaron, marcaron una huella en el pensamiento autogestivo y resultaron una fecunda fuente de inspiración para movimientos de distinto signo que durante el siglo XX intentaron constituir comunidades autónomas y autorreguladas.

EL PENSAMIENTO LIBERTARIO

Proudhon es uno de los primeros pensadores anarquistas que coloca en el centro de sus reflexiones un modelo autogestivo de sociedad. Opuesto al poder centralizado del Estado, propone la propiedad colectiva social organizada en asociaciones de trabajadores, en una federación de diversos grupos obreros. A lo largo de varias décadas el pensamiento libertario fue enriquecido por sus referentes y líderes más importantes, como Bakunin, Kropotkin, Malatesta y otros, quienes mantuvieron viva la lucha revolucionaria contra el sistema capitalista y la opresión del Estado.

Es importante destacar que en los períodos más intensos de lucha revolucionaria y de edificación de nuevos modelos de organización social el pensamiento libertario jugó un rol relevante tanto en la lucha emancipatoria como en las alternativas propuestas en torno a las formas autogestivas de las comunidades agrarias y de las empresas gestionadas por los trabajadores. Son ricos e intensos los debates de los anarquistas rusos en torno a la constitución de los *soviets* en los primeros años de la Revolución Rusa, como así también los de los anarquistas italianos con relación a las polémicas que tuvieron con Gramsci sobre las propuestas consejistas y de control obrero en las luchas que emprendían los obreros italianos. Sin embargo, la experiencia española, tempranamente interrumpida por la guerra civil, fue el espacio social donde el pensamiento libertario y sus organizaciones jugaron un rol destacado

en las transformaciones sociales que se intentó poner en marcha. Aquí nuevamente estuvieron presentes con intensidad los debates entre las distintas posiciones revolucionarias sobre la colectivización agraria y el control obrero de la producción; y, frente a las propuestas más estatalistas y centralizadoras, los libertarios propugnaron siempre modalidades de organización local, autonomistas y autogestivas.

CONSEJISMO Y CONTROL OBRERO

Al interior del marxismo se produjo un fuerte debate –más allá del papel de las vanguardias, la creación del partido revolucionario o la conformación de las representaciones sindicales– en torno a la formación del control obrero o de los consejos obreros. Para la tradición marxista que se desarrolla al calor de las luchas de las primeras décadas del siglo XX, las propuestas de control obrero no son institucionalizables por el capitalismo, no aceptan ser asimiladas a sus estructuras, ya que se asientan sobre rasgos políticos y organizativos autónomos en tránsito hacia un nuevo tipo de sociedad.

Las orientaciones políticas de los pensadores marxistas de la primera mitad del siglo XX son más refractarias a las experiencias productivas que adopten estrategias de participación en el mercado, debido a los riesgos latentes que conllevaría la integración al sistema. Desde este ángulo, y tal como lo expresaba Rosa Luxemburgo, no hay margen para sustentar emprendimientos económicos independientes que convivan con el sistema capitalista, no hay posibilidades de revertir molecularmente el sistema social –como especula el movimiento cooperativo– por medio de reformas parciales, o de generar una economía paralela.

Tales críticas al cooperativismo se corresponden con las perspectivas del marxismo consejista, que rechazan toda posibilidad de institucionalización y de convertirse, aunque sólo sea por un período transitorio, en una parte integrante del sistema, porque su integración implica necesariamente su degeneración (Mandel, 1970). Allí aparece un punto irreconciliable entre ambas posiciones (cooperativismo/consejismo), relacionado con la integración o no al sistema, y con el carácter revolucionario que adquiere la organización (el consejismo) como forma transitoria hacia un nuevo tipo de sociedad socialista.

En torno a lo que indica Rosa Luxemburgo, los emprendimientos colectivos de carácter asociativo son productores de mercancías y necesariamente intercambian sus productos en el mercado, lo que tendrá como consecuencia que estén sujetos a las irracionalidades y oscilaciones que en este se producen. Así, participan de la competencia, cuyas reglas están definidas por las empresas privadas dominantes y cuyo funcionamiento está determinado por las leyes de valorización del capital.

Experiencias recientes de la historia latinoamericana ligadas a la “autonomía” que no ponen en el Estado el eje de su estrategia de cambio social han sido confrontadas y criticadas por la izquierda partidaria predominante bajo la observación de cierta imposibilidad de construcción de espacios amplios. Establecer formas de coordinación abarcativas, construir un modelo con un grado mínimo de integración, sostener prácticas más horizontales y directas del ejercicio democrático son cuestiones que abren el debate en torno a la forma de intervención en el escenario político.

Lo cierto es que los cambios más recientes en la dirección del Estado en los gobiernos de centroizquierda o progresistas afectan a los movimientos sociales y tienden a quebrantar sus bases sociales, provocando diversos grados de desajuste y dilemas en su seno.

Es esperable que estas rutas de discusión acerca de la relación entre los movimientos sociales en el nuevo escenario político, o la relación entre cambios en el régimen de gobierno y en el régimen de acumulación, enriquecidas por las especificidades nacionales, se profundicen en la actualidad al calor de los acontecimientos.

BIBLIOGRAFÍA

- Aboy Carlés, Gerardo 2001 “Repensando el populismo”, Ponencia para el XXIII Congreso Internacional Latin American Studies Association, Washington DC, 6 al 8 de septiembre.
- Cardoso, Fernando Henrique 1970 “Comentario sobre los conceptos de sobrepoblación relativa y marginalidad” en *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales* (Santiago de Chile: ELAS-ICIS) N° 1-2.
- Castel, Robert 1994 *La desestabilización de la condición salarial* (Argentina: Alternativas Económicas).
- Crozier, Michel y Friedberg, Erhard 1990 *El actor y el sistema* (México DF: Alianza).
- García Linera, Álvaro 2006 “La política de los movimientos sociales en Bolivia” en *Íconos* (Quito) N° 5.
- Gordon, David; Edwards, Richard y Reich, Michael 1986 *Trabajo segmentado, trabajadores divididos* (Madrid: MTSS).
- Gouldner, Alvin 1978 *La dialéctica de la ideología y la tecnología. Los orígenes, la gramática y el futuro de la ideología* (Madrid: Alianza).
- Luxemburgo, Rosa 1975 *Reforma o revolución* (Barcelona: Fontamara).

- Mandel, Ernest 1970 *Control obrero, consejos obreros, autogestión* (México DF: Era).
- Marc, Maurice y Sèller, Silvestre 1987 *Política de educación y organización industrial en Francia y Alemania. Aproximación a un análisis societal* (Madrid: MTSS).
- Melucci, Alberto 1994 "Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales" en *Zona Abierta* (Madrid) N° 69.
- Murillo, María Victoria 1997 "La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de mercado en la primera presidencia de Menem" en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires) Vol. 37, N° 147.
- Nun, José 1987 *Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina* (Buenos Aires: Puntosur).
- Nun, José 2001 *Marginalidad y exclusión social* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- Nun, José; Murmis, Miguel y Marín, Juan Carlos 1968 "La marginalidad en América Latina. Informe preliminar", Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, diciembre.
- Polanyi, Karl 1947 *La gran transformación* (Buenos Aires: Claridad).
- Quijano, Aníbal 2000 "Marginalidad e informalidad en debate" en *Revista Memoria* (México DF) N° 131, enero.
- Quijano, Aníbal 2005 "Estado-nación y movimientos indígenas en la región andina" en *OSAL* (Buenos Aires) N°16.
- Rosanvallon, Pierre 1995 *La nueva cuestión social* (Buenos Aires: Manantial).
- Thompson, Edward 1989 *La formación de la clase obrera en Inglaterra* (Barcelona: Crítica).
- Thwaites Rey, Mabel 2003 "Autogestión social y nueva organización del trabajo. La autonomía como mito y como posibilidad", mimeo.
- Touraine, Alain 1969 *Sociología de la acción* (Barcelona: Ariel).
- Vieitez, Candido y Dal Ri, Neusa 2001 *Trabajo asociado: cooperativas y empresas de autogestión* (Río de Janeiro: DP&A).
- Zapata, Francisco 2004 "¿Crisis del sindicalismo en América Latina?" en <<http://www.iisg.nl/labouragain/documents/zapata/pdf>> fecha de acceso marzo de 2006.

OTRAS PUBLICACIONES DE CLACSO

- **Martínez Franzoni**
¿Arañando bienestar? Trabajo remunerado, protección social y familias en América Central
- **Raventos** [comp.]
Innovación democrática en el Sur: participación y representación en Asia, África y América Latina
- **Lechini** [comp.]
*La globalización y el Consenso de Washington
Sus influencias sobre la democracia y el desarrollo en el Sur*
- **Raventos** [ed.]
Democratic Innovation in the South: Participation and Representation in Asia, Africa and Latin America
- **Lechini** [ed.]
*Globalization and the Washington Consensus
Its influence on Democracy and Development in the South*
- **Mariátegui**
Sete ensaios de interpretação da realidade peruana
- **Crítica y Emancipación Nº 1**
Revista latinoamericana de ciencias sociales de CLACSO

- **OSAL N° 23**
La construcción democrática en Haití y el Caribe
El papel del Estado y de la intelectualidad
Revista del Programa del Observatorio Social de América Latina
de CLACSO
- **Murillo**
Colonizar el dolor
La interpelación ideológica del Banco Mundial en América Latina
El caso argentino desde Blumberg a Cromañón
- **Roitman Rosenmann**
Pensar América Latina
El desarrollo de la sociología latinoamericana
- **Lechini [comp.]**
Los estudios afroamericanos y africanos en América Latina
Herencia, presencia y visiones del otro
- **Moyo y Yeros [coords.]**
Recuperando la tierra
El resurgimiento de movimientos rurales en África,
Asia y América Latina
- **Espina Prieto**
Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad
Examinando el rol del Estado en la experiencia cubana
- **Cimadamore [comp.]**
La economía política de la pobreza
- **Problemas del Desarrollo Vol. 2 N° 4**
Revista Latinoamericana de Economía
- **Gadotti, Gomez, Mafra y Alencar [comps.]**
Paulo Freire: contribuciones para la pedagogía
- **Alonso [comp.]**
América Latina y el Caribe
Territorios religiosos y desafíos para el diálogo
- **Svampa y Stefanoni [comps.]**
Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos sociales
- **Socialist Register 2006**
Diciendo la verdad

- **Kliksberg y Rivera**
El capital social movilizado contra la pobreza
La experiencia del Proyecto de Comunidades Especiales en Puerto Rico
- **Terán**
Las quimeras y sus caminos
La gobernanza del agua y sus dispositivos para la producción de pobreza rural en los Andes ecuatorianos
- **Girón y Correa** [coords.]
Del Sur hacia el Norte
Economía política del orden económico internacional emergente
- **Hoyos Vásquez** [comp.]
Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía
- **Robichaux** [comp.]
Familia y diversidad en América Latina
Estudios de casos
- **Monasterios, Stefanoni y Do Alto** [eds.]
Reinventando la nación en Bolivia
Movimientos sociales, Estado y poscolonialidad
- **Marini**
Proceso y tendencias de la globalización capitalista
y otros textos
- **Gutiérrez** [comp.]
Género, familias y trabajo: rupturas y continuidades
Desafíos para la investigación política
- **Wortman**
Construcción imaginaria de la desigualdad social
- **Grimson** [comp.]
Cultura y neoliberalismo
- **Cimadamore e Cattani** [orgs.]
Produção de pobreza e desigualdade na América Latina
- **Sánchez Vázquez**
Filosofia da práxis
- **Júnior, Pombo de Oliveira e Daflon** [orgs.]
Guía bibliográfico multidisciplinar
Ação afirmativa. Brasil: África do Sul: Índia: EUA

Se terminó de imprimir en el mes de julio de 2008
en los talleres de Gráficas y Servicios SRL
Sta. María del Buen Aire 347 (1277)
Primera edición, 1.500 ejemplares

Impreso en Argentina